



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
SOCIALES**

**Legisladores federales ante el
escrutinio público mediático en
México**

TESIS
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE
**DOCTOR EN CIENCIAS POLÍTICAS Y
SOCIALES**
CON ORIENTACION EN CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN
PRESENTA:

DANIEL PEÑA SERRET

ASESOR PRINCIPAL:
Dra. Silvia Inés Molina y Vedia del Castillo

COMITÉ TUTORAL:
Dra. Alma Rosa Alva de la Selva
Dra. Martha Alicia Márquez Rodríguez

Ciudad Universitaria, México, D.F., 2012





Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas

Tesis Digitales

Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

AGRADECIMIENTOS

Cuando emprendí este trabajo de investigación, apenas se advertía alguna relevancia en indagar la cuestión relativa al fenómeno de *escrutinio público mediático*, durante el gobierno en funciones, más aún tratándose de legisladores federales y a través de televisión de señal abierta en México. A tres años de distancia, resultó estimulante acometer el reto de entender su sentido, implicaciones y consecuencias, ante el auge que ha cobrado, no obstante una reforma legal que reguló, por primera vez, en materia de contenidos políticos; la representación simbólica de ejercicios de escrutinio ciudadano está presente en una oferta de programas que ha crecido aún más en la televisión restringida, a los que se expone en conjunto y cotidianamente un público tanto o más extenso que lectores de periódicos y militantes de partidos políticos.

Tal como antes ocurrió con el vocablo “mediático”, el término “escrutinio” se hace presente, actualmente, en el discurso político y en el televisivo, en un contexto que se significa, entre otros hechos, por una mayor movilización política, a través de asociaciones civiles y entre grupos sociales de estratos medios, que concurren a un espacio público reconfigurado, conforme se extiende el uso del Internet, para discutir asuntos públicos diversos sin que escape lo relativo a la responsabilidad política de gobernantes electos. Es difícil refutar que estamos ante una tendencia, cuyo estudio modifica el entendimiento acerca de las maneras en que tiene lugar la *mediatización de la política* y la formación de opinión pública en nuestro país, aunque encontrar las razones y aportar evidencia será tarea de investigación futura.

El esfuerzo de elaborar el concepto de escrutinio ciudadano, probar la hipótesis relativa a su mediatización y la propuesta metodológica elaborada para dar cuenta del *escrutinio público mediático* habrá valido la pena, no obstante, si la pertinencia de investigar la dimensión simbólica de la política merece a otros comprometerse con una investigación que despeje un camino colmado de especulación teórica y atavismo a presupuestos sin probar, lo que ayudaría a reducir el déficit de sistematización e investigación empírica que padecemos en este campo.

En mi caso el resultado es deudor de la imprescindible y atinada orientación teórica y metodológica de mi comité tutorial, presidido por la Dra. Silvia Molina y Vedia Del Castillo e integrado por la Dra. Alma Rosa Alva de la Selva y la Dra. Martha Alicia Márquez Rodríguez, a quienes dejo constancia aquí de mi mayor reconocimiento y agradecimiento perenne, que hago extensivo a la Dra. Eva Salgado Andrade, cuyas esclarecedoras observaciones durante los seminarios doctorales de metodología me fueron siempre útiles y al Dr. Raúl Trejo Delarbre, investigador experto en el campo de conocimiento, quien me distinguió con sus atinadas explicaciones, que mucho enriquecieron el trabajo en ocasión del examen de candidatura y al dictaminar la tesis.

Hago propicia la ocasión para reconocer el esmerado apoyo recibido mediante la encomiable gestión académica de la Dra. Susana González Reyna, coordinadora de la orientación en Comunicación y la atinada dirección del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales por parte de la Dra. Judit Bokser Misses, respaldada por la labor de la Mtra. Laura Hernández Arteaga, secretaria académica y a los profesores que integran la plantilla docente y a todo el personal administrativo, quienes han asegurado la excelencia académica del Posgrado y que por ello ha merecido el constante respaldo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. A esta institución agradezco cumplidamente el respaldo brindado durante los estudios del posgrado. Hago extensivo el testimonio de mi agradecimiento, en particular, a la familia de Rosy, por el legado de calidez y solidaridad que ella sembró en muchos; al Mtro. Carlos Hernández Alcántara, la Ing. Norma Sánchez, el Mtro. Felipe Pozos, la Dra. Gloria Alejandre y el Dr. Gabriel Pérez.

A Dany, mi razón de ser a partir de que Dios me obsequió el privilegio de engendrarla, quien da un sentido superior a vivir, quien motiva mi lucha por vivir con dignidad.

Daniel Peña Serret, México, D. F., 2012.

TABLA DE CONTENIDO	Página
INTRODUCCIÓN	6
CAPITULO 1. ESCRUTINIO CIUDADANO EN LA DEMOCRACIA LIBERAL CONTEMPORANEA	36
1.1. Sujetos y procesos implicados en el escrutinio ciudadano	37
1.2. Representación política en la democracia representativa	42
1.3. Participación política en la democracia representativa	52
1.4. Escrutinio ciudadano: ¿forma de participación política democrática?	59
1.5. Escrutinio ciudadano: práctica política democrática	70
1.6. Escrutinio ciudadano en la democracia liberal	85
1.7. Mediación política: escrutinio ciudadano y rendición de cuentas	91
1.8. Representación y participación política en la democracia liberal	98
1.9. Responsabilidad política y representación democrática legítima	106
1.10. Publicidad y legitimidad del poder político en la democracia liberal	113
1.11. Dimensión pública del escrutinio ciudadano	117
1.12. Deliberación y discusión pública en otros modelos democráticos	120
CAPITULO 2. MEDIATIZACIÓN DE LA POLÍTICA EN REGÍMENES DEMOCRÁTICOS	127
2.1. Escrutinio ciudadano en el horizonte más amplio de la sociedad civil	129
2.1.1. La indeterminación de la sociedad civil en las sociedades contemporáneas	132
2.1.2. Dimensiones y vectores que configuran lo público	137
2.2. Del escrutinio ciudadano al escrutinio público mediático	144
2.2.1. Identidad ciudadana: el sujeto del escrutinio público	145
2.2.2. Información y Opinión Política. Recursos para el escrutinio público	151
2.3. Mediatización de la política democrática	160
2.3.1. Rasgos de los procesos de mediatización de la política	167
2.3.2. Mediación y mediatización política	173
2.4. Mediatización de la cultura, comunicación mediática e intercambio simbólico mediante la televisión	176
2.4.1. Comunicación mediática e intercambio simbólico mediatizado	179
2.4.2. Poder simbólico y cultural de los medios de comunicación masiva	185
2.4.3. Tensiones entre la mediación política y la mediatización de la política	188
2.5. Mediatización del escrutinio ciudadano en televisión	199
2.5.1. Audiovisual televisivo: ¿realidad “virtual” o “simulada”?	203
2.5.2. El dispositivo televisivo y “crisis” de los modos de representación simbólica	207
2.5.3. Efectos de la mediatización televisiva de la información y la opinión política	210
2.5.4. Implicaciones de la mediatización en términos de opinión pública	220
2.5.5. Escrutinio público mediático y aprendizaje político	229
CAPITULO 3. SISTEMA MEDIÁTICO Y COLONIZACIÓN MEDIÁTICA EN MÉXICO	235
3.1. Modelos de funcionamiento mediático y repercusiones políticas	237
3.2. Desarrollo del sistema mediático en la democracia liberal	242
3.3. Disputa mediática en la democracia liberal	252
3.4. Rasgos actuales del sistema de comunicación mediática en México	255
3.5. Apatía ciudadana, desconfianza en legisladores y cautividad mediática	260
3.6. Escrutinio público respecto de medios de comunicación masiva	284
3.7. Colonización mediática del ámbito público y cautividad ciudadana	288
CAPÍTULO 4. LEGISLADORES, ESCRUTINIO PÚBLICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	300
4.1. Transparencia gubernamental y Acceso a la Información Pública en contexto	304
4.2. Legisladores ante la transparencia gubernamental y el derecho a la información	310
4.3. Desempeño del Congreso: transparencia gubernamental y acceso a la información	316

4.3.1. Desempeño del Congreso y de “otros sujetos obligados” por la Ley	317
4.3.2. Peculiaridades en el caso del Congreso federal	324
4.4. Acceso público a la rendición de cuentas del Congreso federal	331
4.5. Posturas de partidos y legisladores hacia medios electrónicos en el contexto	335
4.5.1. Legislatura de la disputa	340
4.5.2. Legislatura de la discordia	342
4.5.3. ¿Legisladores federales encarando al escrutinio mediático?	345
4.6. Partidos y legisladores ante la rendición de cuentas y el escrutinio ciudadano	348
4.6.1. Alcance de la rendición de cuentas de legisladores federales	350
4.6.2. Institucionalización de la rendición de cuentas de legisladores	352
CAPÍTULO 5. GOBIERNO, PARTIDOS Y MEDIOS EN EL CONTEXTO	372
5.1. Liberalismo económico versus democratización política	374
5.1.1. De la Presidencia debilitada a la presidencia mediatizada	376
5.1.2. Del Congreso polarizado a la reforma de medios impugnada	379
5.2. De la crisis de institucionalidad al convite del escrutinio mediático	381
5.3. Reforma electoral a escrutinio público y mediático	389
5.4. Entre “telecracia” y “partidocracia”: secuelas del escrutinio mediatizado	394
5.5. Sociedad movilizada hacia el escrutinio público	402
5.6. Alcances y límites del escrutinio público mediático en perspectiva	408
CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS	413
6.1. Procedimiento de análisis y prueba de la hipótesis	418
6.2. Programas televisivos de opinión: género híbrido	424
6.3. Análisis general de los programas televisivos de opinión	428
6.4. Prueba de Hipótesis: Representación simbólica del escrutinio de legisladores federales	451
6.4.1. Situación de enunciación y de interacción discursiva: la producción de debate en programas televisivos de opinión	452
6.4.2. Función del tema en programas televisivos de opinión	468
6.4.3. Construcción de identidad en la interacción discursiva: debate entre ciudadanos o llevado en nombre de ellos	472
6.5. Relevancia de los programas televisivos de opinión	477
6.5.1. La identidad del programa de opinión a partir de la promoción de su difusor	486
6.5.2. Diferencias en las estrategias de difusión para la valoración de programas	491
6.5.3. Otras estrategias de promoción del escrutinio público mediático	494
6.6. “Escrutinio ciudadano” en voz de actores públicos en televisión	499
6.7. Escrutinio público mediático en televisión	503
CONCLUSIONES	513
ANEXO 1. MODELO METODOLÓGICO	532
ANEXO 2. CUADROS Y TABLAS DE RESULTADOS	559
BIBLIOGRAFIA Y REFERENCIAS	634

Introducción

En las sociedades contemporáneas, una orientación prominente de la investigación en ciencias sociales ha sido, en la última década, las posibilidades y, en congruencia con ellas, las vías para el mejoramiento de la calidad de la vida democrática y, a la vez, del funcionamiento del gobierno. Una cuestión central consiste en el problema de la gobernabilidad democrática en dos vertientes interrelacionadas: por una parte, el diseño de reglas e instituciones idóneas para la toma de decisiones colectivas eficaces¹ y, por la otra, el deterioro de la legitimidad política² de los órganos decisorios desde el punto de vista de los ciudadanos.

En cualesquier caso, se concluye que la gobernabilidad democrática repercute directamente en el encauzamiento pacífico de la inconformidad social³, en el contexto de sociedades más diversificadas y plurales de lo que eran antes y, por tanto, ante exigencias crecientemente complejas para arbitrar el conflicto social, derivado de las inequidades de la economía de mercado y las condiciones de pobreza. Al revisar la literatura especializada, en ambas vertientes, no obstante las diversas aproximaciones analíticas, se

¹ Al contrario de los teoremas fundacionales de la teoría de la elección social, Colomer (2001) demuestra que no sólo es “posible” obtener elecciones (decisiones) sociales estables, y socialmente eficientes con algunas reglas institucionales, sino también que ciertas reglas producen resultados ineficientes, con mayor frecuencia que otras; su modelo analítico identifica tres variables institucionales que producen diferentes grados de estabilidad y niveles de utilidad de la elección social: grado de dispersión de preferencias de los votantes, según se trate de electorados simples o complejos; grado de inclusión de las reglas de votación y procedimientos de decisión; número de dimensiones de temas en elecciones, correspondientes a esquemas de unidad y de división de poderes. Este autor concluye que los regímenes democráticos pluralistas, basados en electorados complejos, reglas de votación incluyentes y división de poderes, tienden a producir resultados socialmente eficientes; su análisis comparado contrastó fórmulas institucionales que pueden ser consideradas más socialmente eficientes con resultados electorales socialmente eficientes y frecuencia de gobiernos divididos, a partir de 506 elecciones nacionales y 1,765 elecciones regionales en 40 países democráticos, durante el periodo 1945-2000.

² Entendida como la justificación del ejercicio del poder estatal que consigue el consentimiento de los dominados o gobernados y, por ello, la obediencia voluntaria, más allá de y no obstante la coacción que entraña ese ejercicio (Bobbio, 1992:117-127); para su efectividad, cfr. Gil (2002).

³ Que llevó a plantear la llamada “crisis de la democracia”, un debate surgido desde los años ochenta del siglo pasado, del que da cuenta de modo plausible Bobbio (2003:15-17), para quien no hay una “degeneración” sino situaciones de adaptación de los principios abstractos a la realidad, puesto que todo régimen democrático tiene como condición intrínseca su transformación; la democracia es dinámica, el despotismo es estático y siempre igual a sí mismo.

coincide en que la cuestión relativa a la toma de decisiones colectivas en los órganos de gobierno, a partir de una efectiva representación de la diversidad de intereses y demandas sociales, se postula como vinculada, a la vez, a las condiciones y los aspectos que favorecen u obstruyen el ejercicio de los derechos de ciudadanía y, en consecuencia, alientan o inhiben la formación de identidad y la participación política de los ciudadanos en la discusión pública.

En esa orientación, una línea de análisis se ha ocupado de los procesos de transición y de consolidación⁴ de regímenes políticos democráticos. Uno de los principales problemas formulados concierne a la relación que se establece entre gobernantes y gobernados, en términos de representación política y pluralismo. Otro es el relativo a que los gobiernos, en especial en países en transición democrática, se muestran en general ineficaces para procurar crecimiento económico y encarar la inequidad social⁵.

La evidencia indica que no obstante el apego a los principios democráticos, prevalece una insatisfacción generalizada con los resultados de gobierno. Ambos problemas se interrelacionan y afectan la relación señalada, lo cual explica el vuelco del interés en la

⁴ Según Gunther, Diamandourus y Puhle (1995:1-32) sus condiciones necesarias son: alternancia de rivales en el poder; apoyo generalizado continuo y estabilidad ante crisis económica; derrota y castigo de grupos rebeldes; estabilidad del régimen ante una restructuración del sistema de partidos; ausencia de partidos o movimientos anti-sistema políticamente significativos; según Morlino (2007:5) su umbral mínimo implica elecciones libres, más de un partido y diferentes fuentes alternativas de información; para otros depende más de los arreglos institucionales del sistema electoral, que de conseguir un nivel creciente de participación en los sufragios, ya que estos dependen de los incentivos que tales reglas ofrecen; en esa orientación, Lijphart (1997:7-8) afirma que las reglas deben considerar las características sociales y culturales de los votantes y brindar a todos un derecho eficiente a la expresión política. Para un análisis comparativo a partir de “indicadores de calidad democrática” y un concepto de democracia “dentro de sus contextos” (“embedded democracy”), véase Puhle (2004).

⁵ Para algunos concebidos como problemas de “gobernabilidad democrática”, más que de “déficit democrático”, y estudiados comparativamente (Linz, 1992; Nohlen, 2001, 2006; Schmitter, 1996; O'Donnell, 2001), para otros aparejados con la transformación del Estado nación como consecuencia de procesos de globalización (Held, 1997; Paramio, 1997, 2003; Lechner, 2003, 2006; Crouch, 2004), para otros a la “crisis” de la representación política (Touraine, 1998) o con las paradojas de la democracia liberal y al problema del “sobrecargo” de los Estados contemporáneos (Bobbio, 2006, 11^a.) y la transformación de la democracia y del espacio público político como consecuencia del desarrollo y predominio de la comunicación mediática en todos los campos de la vida social (Habermas, 1981, 1993, 1998; Thompson, 1998; Bauman, 2004).

reducción del consentimiento político hacia la política democrática⁶, la abstención electoral sería sólo una de sus manifestaciones, así como hacia el control del desempeño de los agentes políticos con poder de decisión para adecuarla⁷, por los riesgos de ingobernabilidad que entrañan⁸.

En la literatura especializada, en México, el análisis de la transición democrática se ha focalizado, de una década a la fecha, en los problemas relativos al funcionamiento democrático de las instituciones políticas, ante una distribución más fragmentada del poder político, la alternancia en la Presidencia y la efectividad del contrapeso ejercido por el Congreso. De ahí la centralidad que, tanto en el discurso político como en el académico, ocupa la cuestión relativa a la llamada “reforma del Estado”, entendida como cambios para conseguir gobernabilidad democrática sostenible⁹. Pocos se han ocupado, sin embargo, de la cuestión relativa a la responsabilidad política¹⁰, a partir del aprendizaje

⁶ Hay coincidencia en que la credibilidad, la confianza y la legitimidad son requerimientos, en el largo plazo, de la estabilidad y la eficiencia de las instituciones políticas y que, a falta de confianza entre los ciudadanos, se corre el riesgo de enfrentar fuertes resistencias en la toma de decisiones y en la ejecución de ellas, véase Schaar (1969); Barker (1990); Yankelovich (1990); Beetham (1991).

⁷ En esa dirección apuntan las hipótesis que ubican las repercusiones de una ciudadanía no ejercida como un problema de legitimidad y credibilidad política, en un régimen democrático. Entre ellas, desde la perspectiva del neo-institucionalismo, Przeworski ha refinado el argumento de la responsabilidad política, a partir del modelo de agencia en la relación entre gobernantes y ciudadanos, en el contexto de las limitaciones que derivan de desigualdades sociales e incapacidad del Estado de bienestar para dar respuesta a demandas e intereses sociales crecientemente contrapuestos. El sistema democrático presupone una sociedad informada de los asuntos públicos, atenta a las actividades de su gobierno, crítica a de las propuestas que formulan las fuerzas políticas y altamente participativa en la elección de sus autoridades (1991:14-23).

⁸ Que en términos de la relación entre liberalismo y democracia derivan no del problema del exceso sino del defecto del poder: incapacidad de los regímenes democráticos para dominar los conflictos de la sociedad de manera conveniente, paradójicamente cuando el liberalismo se vincula con su mejor tradición, la del Estado mínimo, véase Bobbio (2003).

⁹ Preocupación compartida por los diversos sectores de la sociedad centrada en las reformas institucionales como vía para que la democratización del régimen se traduzca resultados eficaces del gobierno en beneficio de la sociedad y, por tanto, en restablecer la confianza en aquellas, en especial de partidos y legisladores, puesta de relieve durante las consultas públicas convocadas por la Cámara de Diputados y conducidas en mesas temáticas de discusión por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en México en 2003, con la participación de políticos, académicos, representantes gubernamentales y de los sectores de la sociedad, para la relatoría véase Camacho y Valadés (2004) y un recuento de hechos Alonso (2006).

¹⁰ Considerada por Schedler (1999) una de las dos dimensiones de la rendición de cuentas, consistente en la capacidad o derecho a exigir respuestas; la otra concierne a sancionar; aunque no se ha probado una relación causal, a partir de una correlación significativa entre rendición de cuentas y publicitación de la acción de gobierno y del desempeño de gobernantes (llamada “transparencia”), como advierte oportunamente Fox (2008).

político¹¹ y la generalización de prácticas políticas democráticas entre los ciudadanos, en el marco más general de la transformación de la cultura política imperante. En esa línea se ubica la presente investigación.

En teoría la responsabilidad política puede devenir de la rendición de cuentas¹² a cargo de los gobernantes electos¹³; en realidad se origina en la vigilancia que los ciudadanos hacen del desempeño de aquellos, en razón de la relación que guardan tales prácticas políticas, rendición de cuentas y escrutinio ciudadano, con la cuestión de la gobernabilidad democrática, en términos de legitimidad política¹⁴. La cuestión relativa a en quién se deposita el autogobierno de los ciudadanos, cómo y con qué límites sigue siendo, en último término, la contradicción esencial de toda dominación política: legitimidad de la autoridad versus el consentimiento de obediencia hacia ella (Held, 1997; Bobbio, 1992).

¹¹ Que lleva a reconocer derechos y obligaciones y es una exigencia derivada de la instalación y consolidación de un sistema democrático, según Rorty (citado por Woldenberg y Salazar (2000).

¹² Definida por Mainwaring y Welna (2003:7) como la responsabilidad que un sujeto de poder debe asumir frente a otro, sea individual o colectivo, subordinado u horizontal, con el fin de controlar el ejercicio del mismo y sancionar su abuso; en sentido estrictamente político consiste en la responsabilidad u obligación de dar respuesta por los actos propios en el ejercicio del poder (“aswerability”) y que es la posibilidad de la sanción, el otro aspecto sustantivo, lo que supone delimitar en normas legales un tipo de relaciones por las cuales se deposita en algún sujeto la autoridad para supervisar y sancionar a los “funcionarios públicos”; con un enfoque jurídico Ackerman la define como “proceso proactivo por medio del cual los servidores públicos informan, explican y justifican sus planes de acción, su desempeño y sus logros y se sujetan a las sanciones y recompensas correspondientes” (2008:16); sobre los regímenes y configuraciones en los sectores público, privado y social, véase Mashaw (2008).

¹³ Con relación a la emergencia de los discursos de la participación ciudadana y la rendición de cuentas en América Latina, véase Olvera (2007), quien sostiene que mucho del discurso de la transición a la democracia se fundó en una revalorización de la sociedad civil como promotora de la lucha por los derechos políticos y como opositora moral a los autoritarismos de todo signo.

¹⁴ A partir de la pionera tesis de Lipset (1959) de que la estabilidad democrática depende tanto del grado de desarrollo económico (cuyos factores son industrialización, urbanización, distribución social de la riqueza y educación), como de la eficacia y legitimidad del sistema político, se abrió una fértil discusión acerca del papel de ésta en cuanto a la estabilidad democrática. Por eficacia entiende la actuación concreta de un sistema político, analizable al observar en qué medida un gobierno cumple con sus funciones básicas, tal y como las definen la mayoría de los miembros de una sociedad y los “grupos poderosos” que en ella representan una amenaza para el sistema. Por legitimidad entiende la capacidad de un sistema político para generar y mantener la convicción de que las instituciones políticas vigentes son las más convenientes o apropiadas para la sociedad; su nivel depende de los medios con que se hayan resuelto los asuntos torales que han dividido históricamente a esa sociedad. El grado de legitimidad influye en la capacidad del sistema político para superar las crisis de eficacia.

Ciertamente en tanto que acción de responder, aún sin rendición de cuentas hay responsabilidad política; ésta no es condición de la primera sino una aspiración; aquella de asegurar la representatividad de las minorías en los órganos decisorios, así como su participación en la deliberación de los asuntos colectivos en ellos, lo cual permitiría hacer efectiva la representación y contribuiría a la responsabilidad política, en poliarquías con contrapesos efectivos entre ramas de gobierno y confiabilidad en los comicios. La representación política depende directamente de las reglas del sistema electoral establecido¹⁵, que determinan el umbral para que una minoría quede representada y las coaliciones partidistas posibles en el órgano legislativo y, en consecuencia, repercuten en el alcance que tendrán los contrapesos que éste ejerza. Es claro que, sin embargo, reglas adecuadas para asegurar que minorías opositoras puedan discutir las decisiones colectivas, no trae consigo una conformidad o adhesión de los ciudadanos a la representatividad democrática; tampoco repercuten significativamente en el involucramiento político y la participación de la mayor parte de los ciudadanos. Por eso aquí se pone de relieve que éstos no se agotan en el acto de emitir el sufragio (votar), tampoco se supeditan al cauce partidista y de las instituciones gubernamentales, ni siquiera a la interlocución con los legisladores.

Esa consideración comporta implicaciones para el ejercicio del escrutinio ciudadano¹⁶, único recurso del que, en la democracia representativa, disponen los ciudadanos para

¹⁵ Ellas determinan las características de la competencia y composición partidista del órgano o institución representativa; su modificación puede otorgar mayor o menor peso relativo a la representación local, subnacional o nacional, según la proporción que guarden los principios de mayoría y representación proporcional, por tanto el número de curules asignados a cada uno (uninominal y plurinominal), si en ésta habrá listas abiertas (que permite elegir candidatos distintos a los propuestos o jerarquizar preferencias entre ellos), o cerradas (sin esas opciones), así como dar cabida a más o a menos opciones políticas (partidos), a través del umbral mínimo establecido de adherentes (afiliados) que deban acreditar para constituirse o bien los criterios de distribución de curules entre mayorías y minorías a través del diseño de las fórmulas de asignación como proporción de la votación, del tamaño de la asamblea y el máximo de representantes para la mayoría o primera minoría y del mínimo para la minoría más pequeña permisible, es decir, los mecanismos mediante los cuales se controla, evita o induce sub-representación o sobre-representación de mayorías y de minorías en el Parlamento o Congreso.

¹⁶ Práctica política por la cual los ciudadanos someten a evaluación crítica, opinan y juzgan la actuación de los gobernantes electos; el concepto es elaborado y su significación es especificada en el primer capítulo, en donde se demuestra su carácter de forma de participación política y práctica democrática.

vigilar la conducción del gobierno en funciones mediante la opinión crítica o inconformidad, necesario para ejercer razonablemente sanción, aunque esto sea posible únicamente mediante el voto y hasta el momento de la renovación de sus titulares, ya que una composición plural, de tipo poliárquico (Dahl, 1993), de los órganos representativos de gobierno (Presidencia de la República y Parlamento o Congreso), supondría el aliento antes que la inhibición del involucramiento de los ciudadanos y de su participación política para tratar de influir en la conducción del gobierno mediante la evaluación crítica y la expresión de consentimiento o inconformidad respecto al desempeño de los gobernantes electos. Sin embargo, la evidencia indica que no ocurre ese supuesto, ni siquiera en países con democracias consolidadas. Se trata del problema de quién vigila a quienes es delegada la tarea de vigilar el adecuado funcionamiento gubernamental incluidos, lo que remite necesariamente a la participación de la sociedad civil organizada.

En este aspecto reside un problema fundamental que, desde la perspectiva aquí propuesta, encara la gobernabilidad democrática¹⁷ entendida en cuanto a su aspecto de garantizar la evaluación del gobierno y la canalización del disenso y, en su caso, de la inconformidad, de manera pacífica y legal, por el cauce de las instituciones políticas. Mediante el escrutinio los ciudadanos ejercen el derecho político de exigir a los gobernantes electos que rindan cuentas de la autorización de gobernar en ellos delegada,

¹⁷ Al definirla de modo simplificado como un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas de la sociedad y la capacidad del sistema político (Estado/gobierno) para responderlas de maneras legítima y eficaz (Camou, 2001:36), se pueden considerar articuladamente los principios de eficacia, legitimidad y estabilidad, presentes en los distintos análisis; Desde la perspectiva funcionalista, según Easton las variables (funciones) que distinguen a todo sistema político de otros sistemas sociales son la conducta relacionada con la capacidad de tomar decisiones relativas a la sociedad y la probabilidad de que sean aceptadas con frecuencia por la mayoría de los miembros como “autorizadas”, de manera que la eficacia/eficiencia para tomar decisiones (eficacia gubernamental) se articula con la aceptación de las mismas por parte de la sociedad (legitimidad social) para así garantizar la estabilidad del sistema. La determinación del “nivel” de equilibrio o discrepancia entre demandas sociales y respuestas gubernamentales es una cuestión concreta e histórica, que depende de cómo perciban y valoren los ciudadanos una situación determinada como aceptable o inaceptable y de la presión ejercida por actores relevantes organizados y con capacidad de amenazar la relación de gobierno en caso de considerar la situación como inaceptable. La discrepancia entre demandas sociales y respuestas gubernamentales es aceptada como tal y dinámica, se produce en condiciones y grados de funcionalidad y disfuncionalidad que alteran el equilibrio según se produzcan amenazas para alterar la relación de gobierno. Desde ese enfoque, la gobernabilidad e ingobernabilidad son conceptos límite (situación idealizada) para designar el primero el proceso de equilibrio y el segundo la virtual disolución de la relación de gobierno (Camóu, 2001:36-39).

misma que es el resultado de los comicios, con independencia de que los ciudadanos hayan votado a su favor o no. El ejercicio de esa práctica política, a cargo de ciudadanos, supone una provisión suficiente de información gubernamental relevante, así como el acceso irrestricto a ella y a los recursos para expresarse, reunirse, debatir y hacer público a gran escala su evaluación. Pero no necesariamente al margen sino precisamente de cara a los gobernantes electos y sin tener que esperar a la siguiente elección para hacerlo.

Tal como se argumenta aquí, en regímenes con democracia liberal, la participación política está mediada por la representación política, en cuanto a la vigilancia del gobierno y la responsabilidad y, por tanto, circunscrita en sus formas o modalidades al ejercicio de los derechos políticos, cuyas restricciones y alcances derivan de las reglas del sistema electoral y de partidos, en lo relativo al proceso de formación del gobierno; en cambio, durante el proceso de gobierno en funciones la participación política tiene otras restricciones y alcances, circunscrita por la publicidad de la actuación gubernamental y la disponibilidad de información respecto de ella, cuyas formas y modalidades son potenciadas por el ejercicio de las libertades políticas; en ese segundo proceso político se ubica el escrutinio ciudadano, que contribuye a hacer exigible la rendición de cuentas, pero que no se atiene a ella, lo cual comporta serias implicaciones en el caso de México; en un contexto en el cual partidos políticos y gobernantes electos privilegian el proceso electoral, como ocasión para informar a los ciudadanos acerca de lo que hacen, aunque no así del criterio que ejercieron y la justificación del resultado de las decisiones que adoptó el Congreso. De lo que en conjunto depende, a su vez, las posibilidades de hacer o no efectiva la responsabilidad política y que los ciudadanos puedan sancionar el funcionamiento del gobierno y el desempeño de los gobernantes electos y los funcionarios que ellos designan, de modo prospectivo y antes de la siguiente elección, en lugar de solamente de modo retrospectivo en ocasión de ella.

Por consiguiente, aunque en el ejercicio del sufragio pueda ponerse en juego el escrutinio ciudadano, éste puede tener lugar al margen de aquel. La participación política está

circunscrita, en principio, por los mecanismos, recursos y oportunidades que, con base en las reglas e instituciones políticas vigentes, puedan disponer los ciudadanos, pero cuyo aprovechamiento depende, en los hechos, de las condiciones reales en que ellos pueden ejercitar o no sus derechos políticos, se vinculan o no, de modo directo o marginal, con los gobernantes electos y se implican en las tareas de gobierno. Conviene poner de relieve este argumento porque contribuye a explicar por qué aún en condiciones de democratización de la vida política, las formas de participación más allá de las elecciones resultan poco relevantes para la mayor parte de los ciudadanos, tal como sucede en varios países. Los ciudadanos pueden confiar en quienes pueden hacerse efectivamente responsables del curso del gobierno y, en su caso, justificar las decisiones que toman y los cursos de acción que siguen, es decir en los gobernantes electos cuando actúan con la mayor transparencia¹⁸ o publicidad que sean posibles.

En este estudio se argumenta, mediante una aproximación interdisciplinaria, que el problema de gobernabilidad democrática deriva, en parte, del deterioro de la legitimidad¹⁹ de la representación política en y desde el Congreso. Ese deterioro no se explica solamente en términos de la adecuación o no que guarden las reglas e instituciones democráticas, sino de la eficacia del gobierno. Ésta concierne tanto a las leyes y políticas públicas como al desempeño de los gobernantes electos y la burocracia

¹⁸ Según Stiglitz (1999) la transparencia se vincula con el ideal de una sociedad cuyos ciudadanos pueden participar de modo informado y esa participación es significativa en las decisiones y los resultados de la política. Para Arellano (2008) es un criterio tan importante como el de la eficiencia, la maximización del flujo e intercambio de la información y las posibilidades de comunicación entre actores sociales; a la vez que es un valor consistente en la búsqueda de la máxima apertura de la información socialmente relevante, por lo que supone mecanismos formales e informarles en la interacción política institucional dirigida a generar confianza en los intercambios entre sociedad y gobierno y entre la propia sociedad.

¹⁹ La idea de la legitimidad política ha sido elaborada de manera distinta en la teoría de la democracia indirecta (representativa) que de la directa (participativa), no obstante en tanto que procedimientos para la toma de decisiones colectivas, ambas perspectivas comparten el criterio de que para ser legítimas tales decisiones presuponen la correspondencia con la voluntad general que deriva de la deliberación pública, de cara a todos los ciudadanos, quienes son los depositarios, en condiciones de igualdad política, del poder de autorizar y consentir el ejercicio del poder estatal. Desde la óptica de la primera, la legitimidad se sustenta en la igualdad entre los ciudadanos para elegir la integración del órgano deliberativo, véase Bobbio (2006, 11ª.reimp.), mientras que, desde el punto de vista de la segunda, en la discusión libre y razonada de argumentos que, en condiciones de igualdad entre quienes deliberan, permite justificar las decisiones resultantes que, por eso, son entonces vinculantes para todos, véase Joshua Cohen (2001:235).

administrativa designada por ellos, a la manera en que se informa acerca de su actuación y las decisiones que ellos toman. Si la rendición de cuentas incluye las opciones de decisión, la discusión y la negociación implicadas en la toma de decisiones colectivas, entonces los ciudadanos pueden contar con elementos para deslindar responsabilidad; ese deslinde lleva a hacer efectiva la sanción ciudadana, no sólo a través de la vía del sufragio sino de la crítica política, cuando ésta es discutida y consigue cierta publicidad.

En efecto, no es en sí misma la evaluación crítica del desempeño de los gobernantes electos lo que repercute en ellos, sino la receptividad y consideración que les merezca, lo cual depende de la presión política que resulta de la publicidad que consigan los resultados de esa evaluación en el ámbito público de la sociedad civil y es distinto tratándose del ejecutivo que del legislativo; esa presión es el único referente frente a la recursividad del ejercicio del poder político, puesto que los gobernantes electos son los únicos que modifican las reglas e instituciones de gobierno, incluidas aquellas que regulan la representación, la participación y su desempeño, así como la comunicación en el ámbito de acceso y dominio público o colectivo²⁰. Por tanto, la consideración que presten los gobernantes al escrutinio público repercutirá en la credibilidad y la confianza de los ciudadanos, pero para hacer público hay diversos cauces.

Ciertamente en México se han producido avances significativos, en la última década, en cuanto al establecimiento de leyes, programas de gobierno, mecanismos y recursos institucionales, dirigidos a asegurar el libre acceso de los ciudadanos a la información pública que generan todas las instituciones de gobierno. En cuanto a rendición de cuentas son limitados, no generalizados entre los niveles de gobierno e incluso hay regresiones, tal como se verá en el capítulo 4 de este estudio. No obstante, la evidencia empírica indica, por una parte, que la mayor parte de los ciudadanos no recurre a esa información, como

²⁰ Tesis que vincula la eficacia gubernamental con la legitimidad política, cercana a la postura de J. Cohen (Ibid) quien afirma que “La idea fundamental de la legitimidad política y democrática es que la autorización para ejercer el poder estatal debe surgir de las decisiones colectivas de los miembros iguales de una sociedad, quienes son gobernados por ese poder (no afectados por él)”.

tampoco se expone a la escasa difusión que las propias instituciones hacen de ella²¹. De hecho los referentes informativos de los cuales los ciudadanos pueden disponer, de modo efectivo, tienen otras fuentes, así como otros repertorios cognitivos y simbólicos que orientan la percepción, interpretación y comprensión de los asuntos colectivos que les conciernen (el funcionamiento del gobierno y las decisiones obligatorias para todos), diferentes a aquellos forjados por las instituciones políticas y sus agentes de socialización. La evidencia indica, por otra parte, que la mayor parte de los ciudadanos no se relaciona directamente con los gobernantes electos, ni siquiera con el correspondiente a su respectiva circunscripción después de elegido, que desconfían, en general, de todos ellos y más aún de los legisladores federales y que cuando deciden informarse del acontecer político, la mayor parte de los ciudadanos recurre a la comunicación mediática²².

La concurrencia de ambos aspectos puede ser explicada, de modo plausible, si se reconoce que entre la evaluación ciudadana y el desempeño de los gobernantes electos se ponen en juego procesos diversos de mediación política y cultural²³, mismos que se traslapan entre sí y afectan necesariamente las prácticas políticas democráticas relativas al escrutinio ciudadano y la rendición de cuentas y que, en consecuencia, repercuten en la asignación de responsabilidad política entre gobernantes y funcionarios, especialmente en los legisladores federales. Entre tales mediaciones debe ser considerada aquella que, en el intercambio simbólico, ejerce la comunicación mediática en general y en particular la televisión²⁴. Ésta se ha convertido, para el ciudadano promedio, en la principal o la única

²¹ Para un diagnóstico institucional véase M. Marván y Corona (2006) y para un análisis crítico que explica las razones véase Ackerman (2008) y G. O'Donnell (2008), entre otros.

²² Tal evidencia es presentada y analizada en el capítulo tres de este estudio.

²³ En el amplio campo de la sociedad civil, tal como argumentan Cohen y Arato (2001:125), las mediaciones entre ella y el Estado, pensadas en el nivel más abstracto, tienen lugar entre “vida ética” y “vida antiética”, mientras que en el nivel más concreto a partir de la distancia entre “lo público” y “lo privado”, entendido éste último como el “punto de fuga” en que la integración social de la familia se disuelve antes de que empiecen las mediaciones características de la sociedad civil; si se acepta que, a diferencia de cómo pensaba Hegel, el Estado no es el nivel más alto, completo o universal de integración social.

²⁴ En tanto de índole cultural, esa mediación resulta de la ubicuidad del discurso televisivo, que adiestra para percibir realidades virtuales como reales y viceversa (Imbert, 2008), mediante esquemas narrativos en los cuales cualquier puede reconocerse y experimentar que forma parte de ellas (Rincón, 2006; Orozco, 2006),

fuerza de información y, por las peculiaridades del canal, discurso y contenido audiovisual que transmite, en agente de socialización para la formación de opinión (“reelaboración discursiva”), a partir del imaginario político (en el sentido de Amador, 2004), debido al proceso de “mediatización de la política”²⁵, tal como se muestra en el capítulo 2.

La difusión televisiva hace circular opinión acerca tanto del acontecer político como de la información gubernamental, con lo cual potencia la mediación cultural que ejerce. En este caso, el discurso televisivo tiende a focalizar, en mayor medida, a los gobernantes electos y, más aún, a someter su actuación a evaluación crítica, desde el punto de vista de quienes tienen acceso a opinar por ese medio de comunicación. En este estudio se propuso verificar si los contenidos de la difusión televisiva constituyen un cauce de evaluación ciudadana respecto al desempeño de los legisladores y, en su caso, de qué manera es movilizadora en aquellos, lo cual permite entender las implicaciones que, desde la dimensión simbólica de la política, comporta ese fenómeno en términos del desarrollo de la relación entre ciudadanos y legisladores.

Eso condujo a dar cuenta precisamente de este otro tipo de mediación cultural, aquella que es ejercida en particular a partir de los programas televisivos que pertenecen al género “opinión”, considerando todos los formatos de realización y producción y confrontándolos entre sí, con base en un análisis semiótico discursivo, desde la

aún mediante contenidos diferentes a la información política, considerados de entretenimiento (H. O’Donnell, 2007), debido al “nuevo sensorio” que instala (Martín-Barbero, 1999b, 2006, 2007).

²⁵ Entendida aquí, en sentido amplio, como el proceso por el cual la publicidad de la acción política y el conocimiento de la misma pasan a depender crecientemente de la visibilidad pública y la resonancia social que pueden otorgar, a una mayor escala, la prensa, radio y televisión a partir de los contenidos que difunden y mediante las formas de interacción descontextualizada a distancia que instauran, afectando la comunicación política entre gobernantes y ciudadanos; en sentido estricto, como la condición por la cual los agentes políticos se ven impedidos a eludir esa visibilidad pública y, por tanto, orientan su actuación de cara a los ciudadanos a partir de la experiencia mediática, es decir más allá de la propia experiencia personal de los ciudadanos y del contacto directo con ellos, en el ámbito público de las instituciones de gobierno; la experiencia mediática implica que las experiencias vividas por el individuo vienen precedidas, con frecuencia, por pautas culturales adquiridas a causa de la continua exposición a los productos mediáticos; en consecuencia, el individuo percibe su propio lugar en el mundo más allá de su propia experiencia personal y a partir de la apropiación y valoración de las formas simbólicas producidas en la comunicación mediática, en cuanto éstas afectan la comprensión del mundo y de sí mismo (Thompson, 1998:56 y ss).

perspectiva de la pragmática, de un corpus textual de emisiones difundidas, a través de señal abierta o gratuita, por televisoras privadas y públicas, entre agosto y diciembre de 2008, luego de que el Congreso en México aprobó una reforma con repercusión en ellas. Desde esa perspectiva y en ese contexto, el problema de estudio consiste en desentrañar una de las formas en que tiene lugar la mediatización de la política, aquella mediante la cual en la difusión televisiva es representada simbólicamente la práctica de escrutinio ciudadano, acerca del desempeño de los gobernantes electos, en el caso aquí seleccionado de los legisladores federales en México. Como se demuestra en el capítulo 6, ese fenómeno, aquí denominado “escrutinio público mediático”, tiene lugar también en los programas televisivos de opinión, mediante un artificio simbólico que suplanta el escrutinio ciudadano, en tanto que práctica política, instaurando una pauta cultural convencional que orienta el involucramiento político entre los ciudadanos expuestos a tales programas. Se trata de un fenómeno por el que los medios de difusión masiva se apropian y abrogan simbólicamente de la función democrática del escrutinio público, a partir de abrir espacios de difusión a opiniones a actores diversos y, a la vez, hacer prevalecer la opinión periodística, en sus diversas modalidades (comentario, entrevista, panel de discusión, revista y humorismo político).

El fenómeno de escrutinio público mediático es consecuencia de la operación conjunta del sistema mediático²⁶ y resulta del proceso de “mediatización extendida”. Debe considerarse que, en el contexto actual, los medios de comunicación masiva convencionales (impresos, radio y televisión) se conforman de grupos corporativos multimedia, si bien con estrategias particulares de competencia, también otras concertadas con el interés común de ampliar la influencia cultural y política que conjuntamente ejercen en la sociedad. Desde ese punto de vista, en el caso de las televisoras entre las razones estratégicas para convalidar el escrutinio público mediático al

²⁶ Entendido como el entramado institucional conformado por el conjunto de operadores, concesionarios (privados) o permisionarios (públicos) de difusión impresa a escala masiva y transmisión de señal de radio y televisión, de propiedad privada y pública, que concurren a la prestación de tales servicios públicos en condiciones de libre competencia, con distinto alcance de cobertura territorial, en torno a las preferencias de consumo de sus respectivos productos culturales, circunscritos a cierto Estado nación.

que contribuyen, en conjunto con los otros medios, a instalar, puede ser consideradas: a) la búsqueda de credibilidad ante las audiencias, a partir de proyectar una cierta apertura de sus contenidos para dar cabida a actores y organizaciones sociales intermediarias diversas y desmarcadas respecto de los partidos; lo cual les permite b) validar la opinión política difundida no obstante los sesgos que ella tenga, al otorgarle al menos simbólicamente un carácter de discusión pública racional e informada, a través de dos prácticas: incorporando a especialistas del sector académico y, eventualmente, dando entrada a agentes políticos, en éste caso de diferente partido político o nivel de gobierno e induciendo la confrontación de posturas, acciones y declaraciones públicas, recogidas en noticias, reportajes o entrevistas, entre los diversos participantes en los programas televisivos, o bien refiriéndolas indistintamente del medio que las difundió, en el caso de periodistas y actores políticos que escriben y colaboran en radio y medios impresos; c) puede dar cabida a un cabildeo abierto, auspiciado por analistas que actúan con afinidad a ciertos grupos de interés (empresariales, sindicales, asociaciones civiles), ejercer presión en la gestión de la agenda pública y movilizar corrientes de opinión afines a aquel.

Así formulado el problema, el análisis del mismo implica en primer término elaborar el concepto de escrutinio ciudadano y especificar la práctica que designa, en el marco de la democracia representativa, analizar las implicaciones de la tradición liberal asociada a ella en las sociedades contemporáneas, para entender sus condiciones, restricciones y alcance en el ámbito público de la sociedad civil, lo que es expuesto en el capítulo 1; lo que conduce a considerar la ubicuidad de la comunicación mediática, sus peculiaridades y, por eso, ocuparse de la mediatización cultural del intercambio en el ámbito público político, para de esa forma entender las implicaciones que entraña la “mediatización de la política”, aunque en aquello que corresponde a la mediación política entre legisladores y ciudadanos en términos del escrutinio público y a partir de las peculiaridades del discurso televisivo y los efectos estudiados en las audiencias de televisión, tal como se expone en el capítulo 2. A partir del marco teórico elaborado, en los capítulos 1, 2 y 3, se argumenta que: a) el análisis de las reglas e instituciones democráticas no puede pasar por alto las

prácticas democráticas dirigidas a establecer responsabilidad política, en términos de confrontar los recursos y las oportunidades que las primeras ponen a disposición y aquellos de que disponen efectivamente la mayor parte de los ciudadanos con ese fin; b) que éstos cuentan, en mayor medida que antes, con marcos referenciales, de índole cultural y en particular simbólica, para dar sentido a su involucramiento y participación en las prácticas de escrutinio ciudadano y rendición de cuentas; c) que tales marcos referenciales de sentido se construyen, y están determinados en parte, por pautas culturales y simbólicas que la comunicación mediática contribuye a afianzar y modificar, orientando las representaciones sociales que construyen los individuos y grupos sociales respecto de las prácticas políticas; d) que debido a las modalidades de la información y la opinión que hace circular, la televisión generalista ejerce la mediatización de tales prácticas, lo que repercute en las maneras en que los ciudadanos, con mayor interés e implicación en la política, evalúan a las instituciones políticas y a los gobernantes electos.

A partir de ese marco, con base en el análisis de datos y la interpretación de resultados, expuesto en el capítulo 6, en este estudio se demuestra que para el caso de México: a) un tipo de esas prácticas corresponden a la evaluación crítica o escrutinio ciudadano acerca del desempeño de los legisladores federales; b) la mediatización de la misma tiene lugar en los programas televisivos del llamado género “opinión” y del formato denominado “debate”; c) mediante un mecanismo de traslape entre formas simbólicas ideológicas, relativas al escrutinio ciudadano, y culturales, relativas al escrutinio público mediático, ambas producidas discursivamente en ese tipo de programas televisivos; d) tales programas han cobrado relevancia en el marco de la programación televisiva, a partir de la transición política, en la última década y e) que las estrategias de los operadores televisivos se dirigen a ampliar el alcance de su influencia en la arena política, en tanto que gestores de opinión política a gran escala, más allá de ofrecer la “puesta en escena” de la política como “espectáculo”, lugar común de la mayor parte de los estudios en este campo, por cierto la mayor parte de los publicados conciernen a otros países.

En ausencia de propuestas metodológicas precedentes, aptas para emprender el tipo de análisis aquí implicado, por lo que se refiere al proceso de mediatización de prácticas políticas a través de televisión, debió emprenderse con especial cuidado su elaboración, expuesta en detalle en el anexo correspondiente de este estudio, de tal manera que contribuya a probar con evidencia empírica, con base en criterios de validez, representatividad y fiabilidad que permiten la replicación, la verificación del fenómeno de escrutinio público mediático, que aparece apenas sugerido y sin evidencia empírica en otros estudios publicados. El resultado conseguido justifica la pertinencia de reivindicar analíticamente la dimensión simbólica e intersubjetiva de la política, por el potencial heurístico de su indagación, ya que amplía el horizonte de comprensión para entender las formas en que tiene lugar la “mediatización de la política”, así como sus consecuencias en la manera en que una parte significativa de ciudadanos forja su propia identidad y orientan su participación en el curso del proceso de democratización en México.

Ahora bien, no sería plausible atribuir al proceso de mediatización de las prácticas políticas efectos incontrovertibles e incontestables, sobre todo si no ha sido investigado empíricamente, tal como ocurre en México. El problema no radica en que ese proceso tienda a subsumir la comunicación política entre ciudadanos y representantes políticos²⁷, al punto de implantar lo que algunos llaman el “régimen de la democracia de opinión” y otros denominan “mediocracia”, ya que las relaciones entre sistema mediático y sistema político deben entenderse como disputas de poder y a partir de la configuración de cada uno, en cada contexto, tal como para el estudio de caso se expone en el capítulo 3.

Este fenómeno tiene diversas consecuencias. Con base en la observación documental y de campo, aquí se argumentan solamente aquellas que conciernen al escrutinio público mediático de legisladores federales; por eso el análisis en esta parte consistió en

²⁷ La evaluación crítica y la discusión de ella en torno de los legisladores no están a expensas, ni puede ser enajenada solamente por la mediación cultural que ejerce la comunicación mediática. Lo contrario implicaría asumir que la información y opinión que hacen circular los medios de comunicación masiva constituyen los únicos referentes para los ciudadanos, no obstante que para muchos de ellos se trate de los principales y más creíbles.

confrontar los alcances de aquel con las maneras en que éstos y el Congreso dan cuenta de su actuación a los ciudadanos, es decir a partir de la transparencia gubernamental, el acceso a la información y la rendición de cuentas en el ámbito político institucional, así como identificar un patrón de comportamiento general y común a legisladores y partidos a partir de considerar las posturas partidistas respecto de la regulación jurídica del sistema mediático audiovisual, tal como se expone en el capítulo 4 de este estudio, para luego situarlas en el contexto de las disputas entre ellos y los operadores de televisión, en donde cobran sentido y puede entonces ser interpretado su significado, según es expuesto en el capítulo 5, lo que permite entender las implicaciones y consecuencias del alcance y restricciones del escrutinio público mediático de legisladores federales, tal como se deja ver en las conclusiones.

La tesis aquí propuesta es que tal proceso tiene restricciones, que obedecen al hecho de que, por una parte, la racionalidad de la representación política es distinta a la de la representatividad de la opinión pública mediática y, por otra parte, que tales racionalidades resultan contradictorias entre sí, aunque esa contradicción permanece opaca en los flujos de mensajes de información y opinión política. Aún cuando tales flujos sean supeditados a la publicitación que otorgan los medios de comunicación, no se agotan exclusivamente en la comunicación mediática. La comunicación política mediatizada tiene límites en cuanto a asegurar un flujo bidireccional, que favorezca el intercambio de mensajes, entre ciudadanos y gobernantes electos o funcionarios designados por ellos²⁸. El ejercicio de la representación política pone a disposición de los ciudadanos, por otra

²⁸ Problema tratado ampliamente; según Wolton (1998a: 120, 121) a más discursos y actores concurren al espacio público, a través de la difusión mediática, más profunda es la exigencia que se les plantea a medios y periodistas para establecer un criterio de representatividad, por el que seleccionan quien tiene legitimidad para expresar sus ideas, ya que es inviable que todos lo hagan. La racionalidad de la comunicación mediática impone entonces un “criterio de acceso”, que puede contribuir a hacer más rígida o más flexible la comunicación política entre ciudadanos y gobernantes, a partir de un constante movimiento de flujos de informaciones y negociaciones para otorgar visibilidad y la palabra a los diversos actores sociales y políticos; de ahí que afirme que la comunicación política es una figura transitoria del enfrentamiento político, una especie de delegación antes que de representación democrática.

parte, pautas ideológicas que guían, alientan u obstruyen su participación²⁹ en las tareas de evaluación del desempeño político y la imputación de responsabilidad política. De manera que las pautas de comportamiento convencional, establecidas como resultados de las interacciones sociales, tanto en el ámbito cultural como en el ámbito político, pueden orientar aquellas prácticas de los ciudadanos que, al margen de la relación que mantienen con los gobernantes electos, se dirigen a evaluar su desempeño. Tales pautas, en ambos ámbitos, afectan también el ejercicio de la rendición de cuentas por parte de los legisladores. Al evaluar a éstos, los ciudadanos pueden privilegiar la interacción o los referentes simbólicos de uno u otro ámbito.

Por eso la relevancia de indagar efectos restrictivos que parecen subvertir el funcionamiento de la interlocución e interpelación política, a partir del escrutinio público que tiene lugar en el ámbito mediático, en el marco ideológico, constituido por los principios normativos de la democracia liberal, de aquellas sociedades en que más recientemente han sido discutidos, acogidos e impulsados. El esfuerzo pretendió subsanar dos de las limitaciones de la investigación en el campo: por un lado, superar esa vaga noción de “influencia” mediática que se suele dar por descontada pero que pocos estudios aciertan a mostrar sus mecanismos específicos y peculiares³⁰ y, por otro lado, hacer efectiva una cuidadosa y pertinente aplicación de las contribuciones de las disciplinas de conocimiento implicadas para cada aspecto del problema formulado, a partir de un esquema analítico que da cuenta de manera coherente de las relaciones de tales aspectos entre sí y que, solo entonces, contribuyen a la explicación del problema³¹.

²⁹ Comúnmente entendida como un medio, que implica una actitud activa manifestada en una serie de comportamientos ante o en relación a la vida pública y a las decisiones tomadas por el poder político; se la considera más valiosa, sin embargo, cuando se convierte en un fin en sí misma en cualquier ámbito de la vida cotidiana y es, en este sentido amplio, que contribuye a la democratización del espacio público; pero deben existir condiciones que la garanticen y promuevan, entre otras, confianza y seguridad (sin coacciones o represalias); no se trata de una obligación sino de un derecho, que va desde emitir una opinión en una conversación hasta la participación deliberada (Jáuregui, 1994:113).

³⁰ Tal como consiguen hacerlo, desde la perspectiva de la hegemonía cultural (“Cultural Studies”), Langer (2000) y H. O’Donnell (2007), en el caso de los contenidos difundidos por televisión en el contexto Europeo.

³¹ Tratadas como “compartimentos”, de tal modo que desde la perspectiva institucional y de acción racional de la teoría política, la dimensión simbólica del comportamiento político desempeña un papel explicativo marginal o en el mejor de los casos complementario. A la vez que desde la perspectiva de teoría de la

Por consiguiente, en el esquema de análisis propuesto son consideradas tanto la dimensión institucional u objetiva como la dimensión personal y subjetiva, puesto que ambas permiten entender de manera más plausible la relación entre legisladores federales y ciudadanos, tanto en términos de las prácticas de rendición de cuentas y escrutinio ciudadano asociadas a la representación y la participación políticas, como en términos de las mediaciones culturales a que están sujetas en el ámbito público y en el seno de la sociedad civil a partir de la comunicación mediática en general y del consumo televisivo en particular, demostrando entonces una de las maneras específicas en que se producen tales mediaciones y el fenómeno a que dan lugar³².

Los resultados obtenidos por el estudio permiten establecer que los ciudadanos tienen a su disposición mecanismos y recursos institucionales para ejercitar sus derechos políticos, entre ellos el escrutinio de los legisladores federales que les representan en la toma de decisiones colectivas³³. El alcance y las restricciones de tales mecanismos y recursos son

comunicación constreñida ésta a la mediática, se pretende explicar el comportamiento al margen de las mediaciones políticas que obra por y mediante las instituciones políticas, como si se tratara de un entorno ajeno a la constitución de la intersubjetividad que se pone en juego en las mediaciones culturales.

³² El enfoque propuesto trata la cuestión a partir de reconocer un tipo de “nueva intersubjetividad” que es encauzada fundamentalmente en el terreno de la percepción y regida por emociones y actitudes, aunque transita y, en buena medida, se puede imponer a la racionalidad utilitarista del comportamiento del legislador y del ciudadano bajo la identidad de actores y audiencias mediáticas. En esta orientación, el mayor alcance del análisis sugeriría que, en paralelo, se alteran los patrones convencionales mediante los cuales tales sujetos sociales imputan tanto el valor material objetivo, desde una racionalidad política, como el valor simbólico subjetivo, desde una racionalidad cultural. A partir de las dimensiones racional y simbólica, objetiva y subjetiva, del comportamiento de tales sujetos políticos, cuya relación con los agentes culturales mediáticos (medios de comunicación masiva y públicos-audiencia) se rigen por una relación de interdependencia y que del grado que guarden de correspondencia o contradicción dependerá la generalización de una y otra o el predominio de una sobre la otra. Esa premisa tendría como soporte una de orden más general, que consiste en suponer que las dimensiones política y cultural están superpuestas y su papel se esclarece de acuerdo al contexto histórico y social.

³³ La noción aquí elaborada sobre el escrutinio ciudadano, como contraparte de la rendición de cuentas, no corresponde a forma alguna de participación política, según “los criterios utilizados para definir los tipos de actos participativos” desde la perspectiva empirista de los estudios politológicos sobre el comportamiento político. En el capítulo 1 se pone en entredicho esa omisión y se argumenta que la práctica democrática que designa el escrutinio puede ser el equivalente al tipo de participación que, en esa perspectiva, Anducia y Bosch llaman “la voz”, aunque en mi punto de vista ésta no puede ser restringida a la manifestación del descontento. Dos hechos explican esa omisión en algunos casos o reticencia en otros. La acción de evaluación crítica del desempeño, en la democracia representativa no tiene efectos en la toma de decisiones

diversos y dependen de diversos factores. En lo que concierne al escrutinio ciudadano, en general, las restricciones dependen del interés y las motivaciones de los ciudadanos para implicarse en tareas cívicas, en especial en buscar información pública y de las competencias y la experiencia personal y en grupos sociales u asociaciones diversas en que interactúa cotidianamente; el alcance de esa práctica concierne, en principio, a sus posibilidades de publicitación y, en último término, que sus resultados sean o no atendidos y considerados por parte de partidos y legisladores en el Congreso. Desde el punto de vista de la acción racional estratégica, es de esperar que el escrutinio ciudadano sea tomado en cuenta por ellos cuando su desempeño es evaluado como inadecuado y a la vez así lo parezca a una mayoría de ciudadanos, por lo menos en una cierta circunscripción política territorial.

En la democracia representativa, el alcance de la sanción por ineficacia o irresponsabilidad tiene lugar, hasta ahora, solamente a través del voto y a posteriori, cuando el ciudadano puede retirar su preferencia al partido que la otorgó en la anterior elección; pero ese supuesto no afecta al legislador individualmente considerado, en aquellos contextos en que el avance de su trayectoria no depende, principalmente, de conservar el apoyo de la misma base de electores. Por ese hecho, que se verifica en el caso de México, tampoco se sostiene el argumento de que la reelección consecutiva obligaría a tomar en cuenta a los ciudadanos de la respectiva circunscripción³⁴. Desde un enfoque de elección racional individual, una razón por la cual los ciudadanos no ejercitan el escrutinio es de índole estratégica y práctica, relativa a la propia subjetividad de las actitudes y la particularidad de intereses, porque la acción es motivada por incentivos para agruparse y actuar en

y la vigilancia o el control corresponde a las propias instituciones y reglas del sistema político, cuya legitimidad descansa fundamentalmente, si no es que exclusivamente, en la elección de gobernantes. De ahí que en esa perspectiva se reconozcan tres tipos de participación: electoral y no electoral; convencional y no convencional y participación basada en la voz o en la salida, véase Anducia y Bosch, 2004.

³⁴ Se requeriría de otras medidas, ya que las candidaturas son recursos de movilidad política y su número escaso, más aún en el caso de aprobarse la postulación por fuera de partidos, que competirían en condiciones desiguales frente a aparatos con estructura organizativa territorial superior; al margen de considerar el fenómeno de cambio de partido (“transfuguismo”) y las eventuales alianzas que de facto pueden producirse entre unas y otras candidaturas; en los hechos, nadie trabaja para electorados de otro.

común derivados del contexto político institucional³⁵. Desde la perspectiva neo-institucionalista, el contexto institucional político puede ejercer efectos movilizadores para la participación política³⁶. En cualquier caso, intervienen factores situacionales y relacionales de los que ella depende³⁷.

El desarrollo del escrutinio público presupone reflexión y la disponibilidad de información por parte de quienes ejercitan la acción, acotada por la democracia representativa. Pero eso no depende solamente de las condiciones de igualdad política que prevalezcan; tampoco de recursos y oportunidades que deriven de las reglas e instituciones democráticas, sino también por un lado de las condiciones de desigualdad social y de la organización y movilización en pos del ejercicio de derechos sociales y, por el otro, del acceso a la visibilidad y resonancia pública que se procure y pueda alcanzar en cierto contexto, lo cual amplía el rango de posibilidades hacia cauces y formas alternativas de participar y en situaciones distintas de las elecciones. De allí que tanto el escrutinio ciudadano como el escrutinio público (cuando el primero alcanza publicidad), pueden ser comprendidos como formas de participación ciudadana individual y colectiva, institucional y no institucional, dentro o al margen de las instituciones políticas representativas.

³⁵ En los modelos para explicar el comportamiento político, el costo de oportunidad es la utilidad, calculada que el individuo sacrifica por dejar de hacer algo para realizar una cierta actividad; por ejemplo, el elector estima beneficios esperados por acudir a las urnas, luego compara éstos con los costos implicados en la acción y la emprenderá si la diferencia resultante es positiva; hay factores que la contrarrestan: una marcada preferencia partidista; la satisfacción experimentada por ejercer un derecho o cumplir una responsabilidad que contribuyan a preservar el sistema democrático o por haber elegido la opción correcta al votar; o bien un electorado movilizado a través de redes sociales o propaganda, discusión pública y acciones de proselitismo, que reducen el costo de conseguir información y disponerla, lo cual incentiva la participación (modelo racional “cálculo del voto” formulado por Downs, 1957 y reelaborado por Riker y Ordershook, 1968, para una crítica del mismo véase Blais, 2000:40-41).

³⁶ Desde esa perspectiva, la participación política es una respuesta a los estímulos del entorno, más que el resultado de actitudes y recursos individuales; no todos los ciudadanos viven y actúan bajo los mismos estímulos, por eso hay que considerar las relaciones de los individuos con otros y con asociaciones cívicas y políticas; las redes sociales producen efectos movilizadores indirectos, al ejercer presión u ofrecer incentivos para participar, a través de mecanismos considerados recursos de grupo, véase Anduiza y Bosch, 2004: 52.

³⁷ Recursos personales derivados de la posición socio-demográfica y económica; grupos y organizaciones a los cuales se pertenezca; interés y compromiso hacia la política según que la propia experiencia lleve a creer que la acción es efectiva para influir en decisiones que crea le afectan, o bien que desvalore o rechace la acción política; el contexto político institucional influye en el tipo y frecuencia de participación debido a las reglas y mecanismos para encauzarla, véase Anduiza y Bosch, 2004: 19.

Desde un punto de vista de acción colectiva, en ausencia de procesos de movilización política, o bien al decidir no participar, para los ciudadanos que se mantienen ajenos a la representación política, es decir que no entran en contacto con los legisladores y el Congreso, puede resultarles en general más cómodo o conveniente que otros ejerciten, en su lugar, el escrutinio ciudadano y limitarse, acaso, a externar la evaluación y crítica en el ámbito privado o en el de la intimidad. De ese modo, tales ciudadanos se evitan para sí mismos el costo implicado en esta forma de participación, que conlleva hacer llegar a través del conducto institucional el resultado del escrutinio al gobernante electo al que concierne; lo anterior aplica en especial si las reglas impiden recibir como beneficio que tal evaluación tenga consecuencias prácticas (rectificar o comprometer una acción). Si el resultado del escrutinio que otros hagan llega a su destino, por ejemplo, a través de la comunicación mediática, entonces no hay estímulos o incentivos para participar entre quienes se enteren de ello³⁸. Ese relevo se acentuará cuando algún ejercicio de escrutinio que transcurra en la comunicación mediática, se originó o va acompañado de alguna queja o inconformidad que se comparte o percibe como propia. Es posible que en razón de que cada vez sea más frecuente que merezcan alguna atención favorable, tal como ocurre habitualmente en radio y crecientemente en televisión, el relevo en la participación se convierta en un patrón de comportamiento cada vez más extendido entre los ciudadanos. Ese patrón se afirma además al reconocer alguna queja propia en la inconformidad manifiesta por otros durante una protesta pública, cuyos testimonios discursivos hayan sido captados y difundidos en algún medio de comunicación al alcance del ciudadano³⁹.

³⁸ Para el caso del contexto electoral, desde el mismo enfoque de elección racional, Gosselin (1998:350) sostiene que los electores se muestran más atentos a la cobertura mediática de una campaña, a los debates, a las previsiones de sondeos y a la publicidad política, para hacerse de una opinión y decidir su voto, debido a que los partidos presentan sus respectivas posturas más claras, con una retórica y contra-retórica mejor estructurada para distinguirse entre sí, de modo que la difusión puede ejercer efectos más pronunciados.

³⁹ La radio difunde programas estructurados para promover quejas de ciudadanos respecto a autoridades que, a su juicio, incumplen la responsabilidad que les compete o actúan con ineficiencia, sobre todo en lo relativo a prestación de servicios públicos y decisiones administrativas tomadas con parcialidad o a partir de actos de presión de grupos de interés, tal como han analizado con detalle Krotz y Winocour (2007).

Ese es un aspecto que permite entender los problemas relativos a desconfianza, inmovilización y desafección ciudadana hacia la política representativa, en tanto que la responsabilidad política permanece atrapada en el dilema de la publicidad mediática del ejercicio del poder. Esta cuestión se origina en y concierne a la cultura política imperante, no se resuelve sólo en el ámbito de las reglas e instituciones políticas⁴⁰.

Los partidos políticos no parecen ser un cauce adecuado para el escrutinio ciudadano, aunque sería de esperar que lo fueran. Pero no solamente por eso se convierten en objeto de escrutinio público mediático. Antes que de la declinación de su capacidad de representación, al no hacer valer el escrutinio de minorías no militantes en la deliberación pública, se trata de la elusión de su responsabilidad para rendir cuentas a la sociedad, acerca de aspectos opacos y sujetos a fiscalización discreta, fuera de campañas electorales⁴¹. A ese escrutinio tampoco escapan las maneras con que se producen las confrontaciones partidistas, a partir de posturas polarizadas que impiden la toma de decisiones, discusiones carentes de argumentación y plenas de denostación⁴², ante asuntos cuya prioridad vindican corrientes de opinión diversas.

Ese tipo de comportamiento partidista es facilitado por una mayor equiparación de fuerza electoral y una distribución tripartita del poder político a nivel nacional, un resultado asociado al pluralismo político y la movilidad electoral, aparejadas a la imposibilidad de

⁴⁰ Algo subestimado, por cierto, en la mayoría de estudios relativos a cultura política, debido a que se observa conductas reales a partir de conductas prescriptas pero en el contraste se tiende a confundirlas en términos de desviaciones, lo que impide conocer la conducta real; el problema se encuentra en estudios empíricos que miden creencias, actitudes y opiniones respecto a instituciones democráticas y prácticas políticas, véase SEGOB (2002) y cfr. Flores y Meyenberg (2000).

⁴¹ En otras razones puede destacarse que ninguno de ellos emprende acciones regulares para depurar dirigentes o militantes involucrados en ilícitos denunciados, tampoco difunde información relevante de los resultados, si no es como consecuencia de escándalos; menos aún acerca de medidas disciplinarias contra facciones o agentes que sirven a estrategias dirigidas a producirlos; ninguno sale al paso de denuncias de solapamiento de relaciones de tipo “clientelar” o “corporativas” para otorgar candidaturas por “cuotas”.

⁴² Tendencia de ciertas facciones de los partidos, en general situadas en los extremos del espectro de poder electoral o económico, es decir con mayores y con menores posibilidades de conseguir triunfos electorales; lo que desplaza a la confrontación de argumentos que informen las decisiones públicas y a los ciudadanos acerca de lo que está en juego en ellas, de modo que hagan posible y útil discutir si atañen o no y en qué medida a la mayoría de los ciudadanos o afectan a minorías de ellos.

mantener el ritmo de movilidad social entre sectores socioeconómicos medios y bajos de la población; por ese pluralismo los partidos creen justificada la dilación para llegar a acuerdos y posponer deliberaciones y negociaciones, no obstante que ponen en juego su responsabilidad política⁴³, ya que ese pluralismo traducido en curules y votos en el Congreso hace más frágiles e inestables las coaliciones legislativas, necesarias para decidir modificaciones legales necesarias para el desarrollo del país, tal como ha ocurrido durante las últimas tres legislaturas. De ahí la creciente cobertura mediática de la actividad parlamentaria, lo cual no asegura sin embargo que los asuntos que discuten los legisladores correspondan a aquello que es difundido, que conciernan a los ciudadanos y que sean presentados en términos de movilizarlos a la solidaridad en la vida colectiva⁴⁴.

En sociedades en que ha arraigado el ideario democrático liberal, la actividad de los medios de comunicación está situada en el campo de las libertades individuales y los derechos políticos, pero su intervención está escasa o deficientemente regulada jurídicamente. Esa condición, que depende de las disputas históricas entre poderes fácticos, según el contexto y la sociedad de que se trate, determina en parte los amplios márgenes de decisión con que los medios operan, así como a la vez el reducido margen del que disponen los ciudadanos para participar en la evaluación de los gobernantes electos. Los medios ejercen el monopolio de la visibilidad pública a la mayor escala e inmediatez, aún por encima de los poderes públicos y los cauces políticos institucionales⁴⁵.

⁴³ Principalmente en cuanto a la supeditación del desempeño al logro partidista electoral de corto plazo, lo cual lleva a la mayor parte de los legisladores, indistintamente del partido al que pertenezcan, a cultivar relaciones clientelares, tal como se observó en el trabajo de observación en campo de este estudio.

⁴⁴ Esa es justamente una de las contradicciones del espacio público mediatizado planteadas por Wolton, “la tiranía del suceso”, “la omnipresencia de la imagen”, la desproporción entre una gran capacidad de acceso a la información y una escasa capacidad de acción, hacer públicas cuestiones que pertenecen al ámbito privado, uno de los efectos más perversos del proceso de mediatización sin límites, consistente en que la lógica de la comunicación llega a ser el criterio último de legitimidad, según el silogismo “todo lo que es conocido se mediatiza, por lo tanto todo lo que está mediatizado es legítimo” (Wolton, 1998a: 118, 119).

⁴⁵ El quehacer de los medios se sitúa en varios campos a la vez. Por lo que concierne al político, la función que cumplen es de orden informativo y el destinatario es el ciudadano. Pero en los hechos, ni la mayor parte de la difusión se dirige hacia ciudadanos, ni la mayor parte de éstos se exponen a la difusión mediática en cuanto tales; sino que ven, escuchan y leen lo difundido motivados por intereses y objetivos diferentes, principalmente vinculados al entretenimiento.

El problema es que aunque el diseño y las reglas institucionales del régimen democrático impongan la transparencia de la actuación gubernamental, así como la rendición de cuentas de todas las instituciones estatales ante el Congreso federal, su desarrollo en los hechos requiere de la participación de los ciudadanos, de cara a quienes cobran sentido democrático, mejor dicho de la presión que éstos puedan ejercer sobre los legisladores. La relación que guardan los dos aspectos vinculados puede ser formulada en términos de que, no obstante que se dispongan de normas y mecanismos políticos institucionales para evaluar el desempeño de los legisladores federales, tanto la vigilancia de la responsabilidad política como el ejercicio de los derechos políticos transcurren, en modo creciente, en el circuito mediático de la esfera pública política “mediatizada”, a través de la televisión. Una consecuencia de eso es que la acción ciudadana sólo tiene como alcance la crítica, cuya publicidad está restringida por la gestión de la difusión mediática, con la cual a su vez se constriñe la rendición de cuentas por parte de los gobernantes electos, al ser propagada información y opinión que no corresponde a los intereses ciudadanos, lo cual éstos no podrán interpelar y refutar públicamente con éxito.

En este estudio se puso a prueba la hipótesis de que el fenómeno de escrutinio público mediático se produce en la difusión televisiva, mediante el traslape entre la forma simbólica ideológica implicada en el escrutinio ciudadano, y la forma simbólica cultural implicada en el escrutinio público, lo cual tiene lugar en los contenidos de emisiones del género de opinión y de manera más acentuada en aquellos con formato televisivo de “panel de discusión”. La verificación deriva de un análisis formal semiótico y discursivo, desde el enfoque de la pragmática, perspectiva idónea cuando se trata de comprender y explicar situaciones de interacción comunicativa oral, dialógica y presencial, tal como las que transcurren en ese tipo de contenidos televisivos.

En ellos, los ciudadanos pueden percibir e interpretar que en una discusión, aparentemente libre y plural, sobre el acontecer político, sus protagonistas actúan en tanto que ciudadanos juzgando el desempeño de agentes políticos; interpelan a los

telespectadores como ciudadanos, quienes entonces pueden identificarse con ellos en ese papel y acción, cual si se tratase de un ejercicio de escrutinio ciudadano y, de esa manera, ser persuadidos a participar en ella, durante la experiencia de televidencia. No obstante, es evidente que solamente podrán hacerlo sin voz y por tanto sin posibilidad de interpelación en tiempo real. De manera que tendrán que atenerse al valor que atribuyan a las opiniones de los participantes de la emisión televisiva, y a los juicios argumentados y confrontados durante ella. Éstos pueden ser, sin embargo, un marco de referencia para elaborar el propio juicio político, para tantos o más ciudadanos que aquellos que militan en partidos.

Con base en la interpretación de los resultados, se concluye que el escrutinio público mediático se ha instaurado, en la última década en México, como una práctica cultural, de orden ideológico liberal, pero despojada de su carácter democrático. De tal manera que una tarea que debiera estar a cargo de los ciudadanos, de cara directa a los legisladores, aparece a cargo de una reducida élite de periodistas y analistas políticos que discuten entre sí de cara a los ciudadanos y, con frecuencia, en nombre de ellos, interpelando a los gobernantes electos y funcionarios designados, juzgando su actuación y desempeño, al margen de interpelación alguna; esa elite tiene acceso a otros medios, radio, periódicos e Internet, en cuya difusión participa como conductor, invitado o columnista. En el capítulo 6 se da cuenta del análisis de datos que permitió la comprobación de esta hipótesis.

La prueba empírica de la hipótesis, en el marco teórico en que se sostiene, contribuye a entender las razones por las cuales, en las sociedades democráticas liberales, los medios de comunicación masiva pueden trastocar las formas de participación y representación política tradicionales, movilizand o formas simbólicas de deliberación pública que, en el vasto campo del ámbito de la sociedad civil, pueden relevar de tareas ciudadanas y dar significado a la política simbólica⁴⁶ con que se las representa en los contenidos difundidos.

⁴⁶ Que opera en el plano de la ideología y la cultura, tanto de modo restrictivo como facultativo, si se acepta que la ideología es un rasgo creativo y constitutivo de la vida social, sustentado y reproducido pero también combatido y transformado debido a acciones e interacciones de un permanente intercambio de formas

Ese fenómeno tiene consecuencias paradójicas, porque puede estimular el aprendizaje político⁴⁷ y, a la vez, inducir la pasividad de los ciudadanos y el deterioro de la confianza de ellos en los gobernantes electos que aparecen sometidos al escrutinio público mediático. En último término, es claro que esas experiencias de televidencia constituyen un cauce, tanto para que transcurra la presión de grupos de interés, como la movilización de inconformidad para la mayor parte de los ciudadanos contenida o auto-reprimida.

Esa es la otra variante del problema de estudio, la cuestión relativa a las implicaciones y consecuencias que tiene para los legisladores verse sometidos al escrutinio público mediático para cuya indagación se llevó a cabo, por un lado, observación directa o *in situ*, en el ámbito de trabajo de los legisladores, focalizado en obtener datos a partir de la manera en que ellos se relacionan con los ciudadanos e interactúan con éstos en ejercicios de escrutinio, más allá de la interlocución basada en la gestoría y la atención de demandas ciudadanas, o bien de las movilizaciones de protesta que, como se demuestra, no es una forma de participación política equiparable al escrutinio ciudadano. Por otro lado, mediante observación documental se determinaron las posturas de legisladores y partidos políticos respecto a la rendición de cuentas y el acceso a la información pública legislativa y se confrontaron, a la vez, con aquellas relativas a la regulación de los medios de

simbólicas (Thompson, 1990: 7, 10), entonces para ser efectiva la ideología debe representarse simbólicamente y sus consecuencias no se entienden si no en el marco de pautas culturales convencionales a partir de las cuales se interpreta el sentido y el ejercicio del poder político, puesto que no es equiparable el poder de exponer y dar marco a las ideas con el control de las respuestas a su exposición; en ese sentido, las ideologías son recursos que se manifiestan tanto a través de la representación como de las interpretaciones y los usos específicos de ellas; ante condiciones políticas y culturales globales tan diferentes a aquellas que explicaban las tesis del “imperialismo cultural” y las teorías de la hegemonía ideológica y cultural, es necesario entender que la “estructura social” y la “agencia humana” se constituyen recíprocamente, que las fuerzas que intervienen no son necesariamente conflictivas entre sí, para no correr el riesgo de exagerar el efecto de restricción social y la influencia que ejercen las instituciones, o bien la capacidad de obrar a voluntad, la creatividad y la trascendencia de la voluntad humana; desde esa perspectiva, los medios masivos pueden ser tanto opresores como liberadores, al mismo tiempo y lugar (Lull, 1997: 216-219).

⁴⁷ Debido a procesos de reelaboración discursiva por los cuales las personas comentan entre sí acerca de sus respectivas interpretaciones acerca de esos contenidos, en las conversaciones cotidianas, dentro de los diversos grupos sociales a los que pertenecen, tal como se analiza en el capítulo 2.

comunicación electrónica (radio y televisión), a partir de la prioridad que tales materias tuvieron en la agenda y las iniciativas presentadas en las legislaturas LIX y LX⁴⁸.

Los resultados obtenidos en este aspecto permiten confirmar que el escrutinio del legislador estará más o menos mediatizado, en la medida del involucramiento del individuo, o grupo social, en la política institucional y que se vincule o no con el legislador, de lo que dependerá la disponibilidad de información y la valoración de la utilidad del escrutinio por ese cauce. Es de esperar que el involucramiento y la vinculación sean mayores en el caso de la vía uninominal que en la plurinominal, con independencia del partido y legislador de que se trate. De manera que a mayor integración de los ciudadanos al cauce político institucional y vinculación con el legislador, menor vulnerabilidad asume éste último tener respecto al cauce mediático de escrutinio público, y viceversa. En ese sentido, el escaso apego y atención de legisladores y partidos políticos a las demandas y ejercicios de escrutinio ciudadano, les vulnera en mayor medida, aunque a los legisladores electos por principio de mayoría solamente en cuanto a asuntos concernientes a la circunscripción electoral. Eso explicaría que, en los hechos, no se sostenga la idea generalizada, acerca de que los legisladores federales no se ocupan de las demandas ciudadanas y los problemas que aquejan a la comunidad; la evidencia arroja que, por el contrario, lo hacen con especial cuidado y esmero, aunque selectivamente a partir del electorado y los grupos de interés o de presión cuyo apoyo, o reconocimiento por la gestoría llevada a cabo en su favor, sirve para tener éxito en la respectiva trayectoria partidista y gubernamental. El enfoque de agencia es útil para explicar ese patrón de comportamiento en legisladores y ciudadanos.

Los legisladores federales se desempeñan como gestores de intereses y trabajan territorialmente, para conseguir preferencias partidistas entre ciertos sectores sociales,

⁴⁸ Definiendo como indicadores, por una parte, el cumplimiento de las normas vigentes, los mecanismos y procedimientos establecidos, a través de los cuales tiene lugar la rendición de cuentas y el acceso a la información, tanto en el plano individual del legislador como en el plano institucional del Congreso federal y, por otra parte, las iniciativas legales que promueven o no respecto de estas materias.

susceptibles al tutelaje de alguna gestión o demanda según que reditúe o no de cara al siguiente cargo público, al que aspiran y por el que trabajan. Los ciudadanos se suelen agrupar, de modo informal y efímero, habitualmente con base en intereses compartidos o problemas en común que calculan pueden hacer prosperar o resolver juntos. Pero los procesos de identificación se ponen en juego, en diversa medida, también en la experiencia televisiva; de ellos depende en parte la postura que el individuo adopte frente a los objetos políticos (temas o asuntos) y los sujetos políticos (actores individuales y colectivos). Al final, ella estará determinada por la experiencia personal, porque será la actitud de confianza y la prestación de servicios de gestoría por parte del legislador, lo que puede orientar la opinión que los ciudadanos se formen respecto de los legisladores; las atribuciones políticas del legislador le permiten encauzar, con relativa facilidad y éxito, cualquier asunto hacia la autoridad competente, de lo cual deriva en último término la responsabilidad que pueda ser imputada por parte de los ciudadanos.

El escrutinio mediático distorsiona este esquema lógico que deriva de las reglas institucionales, que regulan el funcionamiento de las instituciones y la actuación de los gobernantes electos y funcionarios designados. En primer lugar porque la difusión mediática electrónica no ofrece, por regla general, un contexto o marco cognitivo que permita determinar la facultades que competen al agente político, que es sometido a escrutinio, para decidir o gestionar un cierto asunto que es objeto del mismo; en segundo término, por las restricciones de tiempo y formato, intrínsecas a su discurso, aquella establece relaciones arbitrarias entre los objetos y sujetos políticos que son sometidos a escrutinio dentro de la narrativa; o bien, en tercer término, en ésta los objetos y sujetos sometidos a escrutinio se presentan disociados entre sí, por lo cual no se establecen alguna correspondencia veraz, y esa ambigüedad, en ausencia de información, deja un margen de imputación implícita tal que podría descargarse en quienes no corresponde decidir o resolver sobre el asunto tratado. En consecuencia, los telespectadores y radioescuchas son orientados hacia establecer responsabilidad de una manera sesgada, parcial o errónea, es decir a imputar responsabilidad en donde no la hay o en quienes no

la tienen en el asunto de que se trata o bien al no incluir a todos los que son efectivamente responsables; en el análisis del corpus textual esto es ilustrado.

De ese modo los debates televisivos de opinión política pueden constituirse en un mecanismo de involucramiento político, aunque en un cauce ajeno a la política institucional ⁴⁹, en el contexto del amplio espectro de sociabilidad que comprende el ámbito público de la sociedad civil, en donde la rendición de cuentas y la responsabilidad política pueden resultar distorsionadas en términos de criterios normativos democráticos y, por ello, erosionadas en cuanto a la credibilidad y confianza ciudadana. Ese hecho tiene implicaciones y consecuencias⁵⁰ diversas en el ejercicio de la representación política y la gobernabilidad democrática.

Una consecuencia es que se desplaza la cuestión de las reglas para imputar responsabilidad política, hacia fuera de su ámbito institucional propio, en ausencia de políticas públicas de regulación de la pluralidad y calidad de los tipos de contenidos mediáticos que deban ser difundidos. Es deseable que tales políticas públicas contribuyan a una educación cívica a escala masiva, así como al despliegue de las potencialidades de acción colectiva que se desarrollan en el ámbito de la sociedad civil, sin que se vean sometidas al control de la sociedad política o de la sociedad económica (en el sentido de Arato y Cohen, 2001).

La explicación debe considerar, sin embargo, la dimensión simbólica de la política, aquella que se instaura y desarrolla mediante la mediatización del proceso político, así como a partir de la configuración que adquiere el ámbito público político en las democracias liberales contemporáneas. Esa intermediación mediática puede tener un mayor alcance

⁴⁹ El escrutinio ciudadano es reducido al ritual simbólico del panel de discusión en televisión, convertido en convite y consentimiento coreográfico multitudinario, que encuentra en el reclamo y la queja particular compartida un desahogo para la inconformidad que transcurre en el ámbito más amplio de la sociedad civil.

⁵⁰ Desde el punto de vista de la teoría democrática normativa, el problema puede ser planteado como la sustitución, que tiene lugar en el ámbito público mediático, del criterio o norma que permite distinguir o juzgar si el consentimiento, los procedimientos y otras formas rituales políticas son democráticas o no.

ante una sociedad civil más vulnerable a las estrategias de control por parte de los actores con poder económico y político, en especial en contextos de liberalización política y transición democrática, con supervivencia de patrones de representación política de corte “neo-corporativo” y de representación electoralmente “clientelar” de intereses particulares de facciones políticas y grupos de interés y de presión, tal como el cabildeo.

Con ello se abre paso a que los medios de comunicación masiva colmen los “huecos” de actividad asociativa, desde donde se generen los ejercicios de escrutinio público y de exigencia de responsabilidad política, llenándolos mediante rituales de deliberación ciudadana concertada y políticamente autocensurada, tal como los que tienen lugar en creciente medida en los diversos contenidos de opinión difundidos por tales medios.

Esa es una forma sistemática de analizar y entender las implicaciones de los fenómenos relativos a la “política como espectáculo” y la “democracia de opinión”, entre cuyas manifestaciones aquí se destaca la relativa al “discurso mediocrático”⁵¹, por medio de las cuales partidos y legisladores federales son sometidos a escrutinio público mediático, de cara al resurgimiento y movilización de una sociedad civil que aspira, de manera creciente, a ejercer su propia autodeterminación respecto del Estado “benefactor” y la economía capitalista de “mercado”. Al situar la interpretación de resultados a la luz del contexto se cierra el círculo hermenéutico del modelo metodológico aquí adoptado.

En los anexos se presentan, por una parte, el planteamiento y modelo metodológico elaborado, su justificación y las bases teóricas en que se sustenta y, por otra parte, los cuadros de la integración de los resultados obtenidos por el análisis del *corpus*.

⁵¹ Cuestiones analizadas para el contexto de México por Trejo (2005, 2009), Alva de la Selva (2000 y 2009), Márquez (2004), Molina y Vedia (2004); para el caso de España por Del Rey (1995), Muñoz Alonso (1999) y Rospir (2003); para el caso de Europa por Dayan (1998); Wolton (1998), Mouchon (1998) y Thompson (2008), para el caso estadounidense por Neuman (1979); McNair (1995); Curran y Smith (2000) entre otros.

CAPITULO 1. ESCRUTINIO CIUDADANO EN LA DEMOCRACIA LIBERAL CONTEMPORANEA

El escrutinio⁵² ciudadano es una práctica democrática, que tiene lugar entre quienes tienen derechos políticos, consiste en evaluar racional y críticamente el funcionamiento del gobierno y el desempeño de quienes gobiernan mediante el intercambio y la discusión de las opiniones de los participantes. Su efectuación supone cuatro condiciones necesarias: a) ser ciudadano; b) libre acceso, sin discriminación de ninguna índole; c) libertad para expresar las propias opiniones y obligación de respetar las de los otros; y d) poseer y/o adquirir información pública de interés colectivo. Se trata de una acción colectiva, de orden político aunque no circunscrita solamente a ese ámbito, que tiene lugar a partir de la comunicación interpersonal, conducida de manera dialógica y sobre la base de las reglas de conducción y actuación que los propios participantes establezcan de común acuerdo.

En un régimen político de gobierno democrático, cualquier ciudadano tiene el derecho político de expresar en público la evaluación que hace de las instituciones gubernamentales, los partidos políticos y, en general, cualesquier autoridad que ejerza un cargo público⁵³. A diferencia de cualquier otra autoridad, solamente los gobernantes electos son depositarios de mandato ciudadano o soberano, por lo tanto la relación que se establece entre ellos y los ciudadanos se rige por un acuerdo de representación política o autorización delegada, a partir del ejercicio de derechos y obligaciones mutuas. En consecuencia, el gobernante electo es legítimamente el sujeto interpelado y el ciudadano el interpelante y la relación puede ser analizada mediante la función de agencia humana, si bien resulta afectada tanto por factores personales como contextuales. Los gobernantes

⁵² La raíz etimológica del vocablo “escrutinio” es *scrutinium*, proviene del latín; tiene dos acepciones de significado: 1. Examen y averiguación exacta y diligente que se hace de algo para formar juicio de ello. 2. Reconocimiento y cómputo de los votos en las elecciones o en otro acto análogo. En países con larga trayectoria democrática, el término significa genéricamente la evaluación reflexiva acerca de los asuntos públicos (cuentas del erario público incluidas). En México apenas se usa.

⁵³ En un régimen democrático los ciudadanos evalúan el desempeño, no lo controlan; el control lo delegan en los representantes electos y se asegura mediante la rendición de cuentas; por contraste, en uno autoritario, el control del desempeño es fuente de poder de la máxima autoridad del Estado, quien lo ejerce exclusivamente (Day y Klein, 1987: 9).

electos desempeñan el papel de “agente político” y los ciudadanos el de mandantes (“principal”), ambos sujetos restringidos o potenciados por reglas institucionales. Para comprender el escrutinio ciudadano se requiere, por una parte, especificar los sujetos y el proceso que lo origina y analizar su relación con la representación política y la participación ciudadana, en el marco de los principios y reglas del régimen democrático conforme a los cuales se origina dicha práctica política. Ese análisis permitirá identificar el alcance y las limitaciones que derivan del marco político institucional. Pero entre las determinaciones de dicha práctica es necesario, por otra parte, considerar las posibilidades de su publicidad, por cuanto ésta última es exigible al ejercicio del mandato ciudadano por parte de los gobernantes electos. Eso lleva a examinar la determinación del carácter de lo público, en sociedades con tradición liberal, lo que permitirá, en consecuencia, distinguir cuáles de aquellas determinaciones tiene origen en la sociedad civil. De ese modo se estará en condiciones de analizar, en el siguiente capítulo, de qué manera y en qué medida el escrutinio ciudadano puede transcurrir como escrutinio público, en el ámbito de la sociedad civil, más allá del político institucional.

1.1. Sujetos y procesos implicados en el escrutinio ciudadano

El escrutinio ciudadano tiene su origen histórico y sustento filosófico político en los derechos políticos instituidos con la tercera variante del Estado moderno⁵⁴, es decir la democracia liberal o representativa (Held, 1997: 77 y ss.), cuyo rasgo básico es que las decisiones que afectan a la comunidad son delegadas a representantes elegidos, quienes deben gobernar con apego a la ley y que se distingue porque introduce reglas e instituciones sin las cuales no podría gobernarse democráticamente, entre ellas “el derecho de cada ciudadano a expresarse libremente, incluyendo la crítica a la conducta del gobierno y al sistema económico en el que está inserto “ (Dahl, 1983: 221-223), como

⁵⁴ La primera es el Estado constitucional, basado en el principio de que el alcance del Estado debe restringirse y su práctica acotarse; la segunda es el Estado liberal, que implica la liberación de la sociedad civil de toda interferencia política innecesaria y a la vez la delimitación de la autoridad estatal; el mundo occidental fue primero liberal y después de largos conflictos, democrático liberal, para su análisis véase Held (1997: cap. 3).

resultado de largo proceso histórico de transformación del Estado liberal al Estado democrático liberal, en el que “hasta que se obtuvo el sufragio universal, tras luchas sociales y políticas, todos los adultos maduros pueden expresar su opinión respecto de la actuación de quienes gobiernan” (Macpherson, 1966: 6). El asiento histórico del escrutinio ciudadano es la idea de soberanía⁵⁵, que responde a la cuestión de las posibilidades y condiciones del ejercicio legítimo del poder político, una vez que se requiere una sola fuente de autoridad (“poder supremo encarnado”) que asegure la supervivencia (Held, 1997: 61); y que en la era moderna se resuelve al instaurarse la convención del poder impersonal o “persona de la comunidad”, el Estado secular fuente de autoridad que asegure la supervivencia y proteja a todos y cada uno de sus miembros, quienes transfieren (ceden) el derecho a autogobernarse para constituirlo; el cargo del soberano es producto del acuerdo compartido por los súbditos y se funda en el otorgamiento del derecho de representación (Held, 1997: 64). Hasta nuestros días, el régimen democrático liberal se erige en la convención cultural de que el acuerdo de una comunidad de ciudadanos (persona depositaria de soberanía) es la base para autorizar un cierto orden político y jurídico y sujetarse a sus reglas, las que procederán indirectamente a través de la delegación de autodeterminación y autonomía de los ciudadanos a los gobernantes.

Actualmente, el modelo de la democracia liberal representativa puede ser descrito así: en condiciones de pluralidad de opciones, mediante la agregación de preferencias o votos, por el principio de mayoría, los ciudadanos otorgan autorización pública a uno de los aspirantes que contendieron para hacerse cargo de cierta tarea de gobierno. El resultado origina el mandato ciudadano en una cierta circunscripción, que surge de la confrontación de programas de gobierno (leyes y políticas públicas), sometidos a la consideración de todos los ciudadanos, durante las actividades de búsqueda de adhesión y que, por tanto, forman parte también del proceso de formación de consenso electoral.

⁵⁵ Con dos preocupaciones: lugar adecuado en que ella residiera y forma y límites apropiados a la acción estatal (Held, 1997: 61).

Toda autoridad emana directa o indirectamente de ese tipo de consenso, ya que los gobernantes electos designan a su vez a funcionarios de gobierno no electos, quienes deben rendir cuentas a los primeros. La autorización ciudadana se extiende indirectamente hasta ellos. Eso implica que todo eventual reclamo tiene como cauce primario a los gobernantes electos, parte de cuya tarea será responder por los funcionarios designados y en cuya ejecución podrán someter a éstos a juicios de responsabilidad política.

La acción política de elegir al representante político supone la acción precedente de evaluar dos o más propuestas de gobierno, para tomar la decisión y expresar la propia preferencia mediante el voto. Al darse a conocer los resultados de la elección se cumplirá el requisito de publicidad, necesario para que se consuma la primera fase del proceso de legitimación del gobierno electo. Pero la acción de evaluar el desempeño del agente político en el cargo continúa en el tiempo, cuyo límite es el que la ley señale para su renovación. La primera acción está limitada al momento de las elecciones; en cambio, la segunda transcurre durante el gobierno en funciones, no está restringida en el tiempo.

Cuando la opinión de algún ciudadano versa sobre un asunto relativo al Estado o al gobierno adquiere el estatuto de opinión política sobre un asunto colectivo, lo que no significa que pueda ser considerada pública por ese sólo hecho, si bien debiera ser atendible por parte de quienes tienen responsabilidad institucional al respecto. Los asuntos colectivos conciernen y afectan a todos, pero no se agotan en los asuntos de gobierno. Un asunto colectivo es, en sentido estricto, político cuando entraña obligaciones para todos⁵⁶, mismas que se pueden hacer valer ejercitando coacción legítima. Ahora bien, que sea política no supone que la opinión esté al alcance de otros ciudadanos, para ello debe conseguir cierta publicidad. Para ser pública, la opinión política tiene que estar expuesta, ser circulada y accesible a otros ciudadanos.

⁵⁶ En tanto que texto, entendido desde una perspectiva analítica discursiva, toda opinión política es reconocida como tal, a partir de su tópico o macro estructura discursiva, tenga o no como objeto referente articulador de sentido a los asuntos del Estado o de gobierno, véase van Dick (1991).

Sin prescindir del hecho de que puede originarse en opiniones individuales, el escrutinio ciudadano tiene lugar, en general, cuando se intercambian y discuten opiniones que atañan a asuntos políticos, y cualquier ciudadano tiene acceso a esa deliberación y a su resultado, con lo que adquiere un carácter público. La comunicación entre ciudadanos implicada instituye una situación tal que permite a todos expresar los juicios propios y defenderlos, así como valorar, rechazar o adherirse a los de otros y, de ese modo, eventualmente producir opiniones comunes.

Por otra parte, en una sociedad que se rige por principios y normas de democracia representativa, las instituciones gubernamentales deben asegurar y proveer para que los ciudadanos puedan, en lo individual o en grupo, expresar públicamente su propia opinión y ser informados acerca de la actuación pública de las autoridades, en el ejercicio de las funciones que correspondan al cargo. Las instituciones de gobierno deben poner a disposición de todos los ciudadanos la información que concierne a su funcionamiento y a la actuación de quienes las dirigen, es decir que toman las decisiones de la respectiva competencia. La evaluación del desempeño gubernamental corresponde a la rama legislativa, de modo que esa función pública -denominada “vigilancia”- es desempeñada por los representantes políticos en nombre de la comunidad política.

En regímenes democráticos, por consiguiente, el escrutinio ciudadano tiene como cauce normativo e institucional la relación con las instituciones gubernamentales, a través de sus respectivos titulares electos, lo que en el sistema republicano de gobierno ocurre en primera instancia a través de la rama legislativa, del Congreso y de los legisladores federales, quienes a su vez rinden cuentas directamente a los ciudadanos acerca de su desempeño y, en segunda instancia, de la Presidencia de la República, incluidos los funcionarios designados por ese titular de la rama ejecutiva, quienes deben rendir cuentas directamente a la rama legislativa. Tal como se verá, el escrutinio ciudadano está asociado

a la rendición de cuentas⁵⁷, la que a su vez está sujeta a una intermediación política, tanto entre ramas de gobierno (“horizontal”) como entre ciudadanos y gobernantes (vertical). He aquí una primera restricción del escrutinio ciudadano, su carácter mediado e indirecto en cuanto a vigilar al gobierno, prevenir abusos y sancionar a quienes gobiernan.

Por eso, hay quienes sostienen que las elecciones periódicas de gobernantes por parte de los gobernados, “compensa” el componente no democrático consistente en que el ciudadano no puede destituir al gobernante, quien goza de autonomía para decidir por aquél, no obstante el ciudadano tiene la posibilidad de juzgar retrospectivamente el desempeño del electo y retirarle o refrendarle su confianza, lo que puede hacer valer en la siguiente renovación del gobierno (Manin, 1998).

La práctica de las libertades que propugna el ideario liberal democrático⁵⁸ permitiría a cualquier ciudadano acudir, individualmente o como parte de algún grupo de ciudadanos, ante quienes gobiernan, para solicitar que rindan cuenta de su actuación, por el cauce y mediante los mecanismos institucionales instituidos con ese propósito, lo que solamente requeriría de una comunicación entre ciudadanos y legisladores. El escrutinio ciudadano supone esencialmente una deliberación, una interacción social discursiva dialógica y una situación comunicativa interpersonal, por la cual los participantes intercambian, evalúan y confrontan información, opiniones y argumentos, con un sentido crítico, relativos a asuntos colectivos de interés público gubernamental. Éstos conciernen a las actividades implicadas en los procesos políticos, tanto la formación de gobierno o renovación de sus titulares como del gobierno en funciones y la responsabilidad de esos titulares.

⁵⁷ Implica la obligación legal de informar, no solamente la capacidad de hacerlo y que como afirman Casas, Marván y Puente (2000:4) la existencia legal de la relación, entre un funcionario obligado a ofrecer cuentas de sus tareas públicas y otro que puede demandar esas cuentas y sancionarlo, es lo que garantizaría eficazmente la rendición de cuentas.

⁵⁸ En todo el pensamiento liberal, desde Locke hasta Rawls, persiste la idea de que es necesario imponer límites al poder político, porque en la medida en que se restringe dicho poder aumenta la esfera de la libertad del individuo (las garantías individuales naturales). La doctrina liberal es precursora de la concepción de la política que surgió con la tradición del “iusnaturalismo” del siglo XVII en Europa, por la cual se entiende que la sociedad política es el resultado de un contrato entre los hombres para preservar sus derechos naturales. Por eso en la perspectiva liberal, el Estado es un artificio humano elaborado racionalmente con el fin predeterminado de defender las libertades del individuo (Cansino, 1997: 90-91).

Así, el escrutinio ciudadano y la rendición de cuentas son acciones políticas derivadas de la participación ciudadana y de la representación política, respectivamente, razón para analizar esa derivación y la relación que guardan entre sí.

1.2. Representación política en la democracia representativa

La representación política es un concepto con tan larga historia, y moviliza tal carga retórica, normativa y prescriptiva, que hace difícil la delimitación de lo que ella designa. Desde cualquier perspectiva, los estudios en este campo coinciden en que la cuestión central consiste en determinar qué y a quién se representa, aunque más relevante es la limitación del modo de representar y el alcance de sus consecuencias. Con su desarrollo histórico, la representación política se torna progresivamente más abstracta y su convención cultural fundamental pasa a radicar en la relación fundacional de la soberanía. Ésta radica en la voluntad del conjunto de los ciudadanos individuales depositada en el Estado nación⁵⁹, a partir de la mezcla del sentido medieval como representación de intereses y la relación simbólica entre el gobernante y la nación. Esa mezcla es paradójica y subsistirá en la democracia liberal hasta la fecha. Con la conformación del Estado moderno el pluralismo medieval es sustituido por la centralización del poder en el monarca, quien deviene en representante absoluto de todos los súbditos de la república. El monarca encarna al sujeto político colectivo, al Estado como conjunto de individuos asociados políticamente.

Con la transformación de las monarquías absolutas, tras las revoluciones burguesas y la consolidación de la formación social capitalista, se desarrolla el Estado liberal de derecho sobre la base del Parlamento, institución depositaria de la representación política,

⁵⁹ La concepción del Estado nación es controvertida, porque en ella subyacen dos nociones de soberanía contrapuestas: el Estado moderno, por una parte, como sistema de poder circunscrito que impone controles y mecanismos regulatorios a gobernantes y gobernados y, por otra parte, como la comunidad política democrática en que los gobernantes son representantes de los ciudadanos y responsables ante ellos. Ambas están fundidas en lo que llegó a ser la forma dominante Estado nación democrático liberal (Held, 1997:72).

integrada a partir del sufragio individual, mecanismo que asegura la delegación de la voluntad individual para la conformación de la voluntad colectiva, a través de la libre expresión y deliberación de ideas y proyectos que mejor sirvan a la nación, tarea a cargo de representantes políticos electos. Éstos se situarían por encima de intereses parciales, sujetos a una circunscripción no menor a la de la nación y expresarían la indivisibilidad de la soberanía en ella⁶⁰.

En ese contexto socio-histórico se presenta la paradoja de conciliar la representación de intereses y grupos políticos contrapuestos entre sí con un interés general, dictado por la agregación de voluntades particulares, de tal modo que se superponga a ellos aunque asegurando que todos sean tomados en cuenta. La paradoja se pretendió resuelta, por el pensamiento político y desde una perspectiva normativa, a partir de una concepción procedimental de la democracia, que en su formulación mínima la caracteriza, en contraposición a las formas del gobierno autocrático, como un conjunto de reglas fundamentales que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos (Bobbio, 2003).

En esa concepción moderna, paradigma político e ideológico hegemónico hasta nuestros días, la democracia consiste en una forma de gobierno⁶¹, mediante la deliberación de todos los representantes electos con potestad de decidir por el conjunto de la comunidad, quienes ejercitan un mandato general y no circunscrito por individuo o grupo alguno, con base en el principio de mayoría. En tanto que acción política legalmente regulada, la representación política trasciende la representación de intereses corporativos. A diferencia de la antigüedad, la representación política en la tradición liberal moderna no

⁶⁰ Por eso puede decirse con Acarino (2003: 22) que funda una voluntad antes inexistente.

⁶¹ Según la explica Bobbio (2003:24-26), todo grupo social tiene necesidad de tomar decisiones obligatorias para todos los miembros, si quiere asegurar la sobrevivencia pacífica interna y externa; aunque son tomadas por individuos, para ser aceptadas como obligatorias para todos es necesario que sean sometidas a reglas aceptadas por todos. A ese rasgo se agrega otro: ella debe otorgar el poder de decisión al mayor número posible de miembros del grupo, cuyas voluntades se agregan con base en el principio de mayoría. Un tercer rasgo consiste en que es indispensable que haya opciones reales y, a la vez, garantías para seleccionar entre ellas, lo que supone derechos a ejercitar la libertad de pensamiento, de expresión de la opinión, de reunión y de asociación, mismos que en la sociedad moderna surgen con la doctrina liberal y el Estado de derecho.

está basada en la adscripción a estamentos sociales, sino en individuos libres con igualdad de derechos políticos con independencia de su condición material de existencia y clase⁶². Ciertamente esta última cuestión es central pero a la vez discutible, porque una es la igualdad formal y otra la igualdad real, si bien ambas cargadas de sentido simbólico⁶³. Además porque la igualdad política liberal no se corresponde con el igualitarismo democrático, lo que explica su contraposición histórica y no obstante su coexistencia pero solamente en tanto que fórmula política de la democracia⁶⁴.

Históricamente el ideario liberal surge de la demanda por un lado de limitar el poder y por otro lado de distribuirlo, en tanto que el proyecto democrático deviene de la exigencia de atribuir al mayor número de ciudadanos el derecho de participar directa e indirectamente en la toma de decisiones colectivas. La interdependencia entre ese ideario y esa fórmula de gobierno se desarrolló históricamente y su coexistencia actual se explica porque el método democrático es necesario para salvaguardar los derechos fundamentales de la persona, que son la base del Estado liberal, en tanto que la salvaguarda de estos derechos es necesaria para el funcionamiento correcto del método democrático, es decir las libertades de opinión y asociación de los ciudadanos, presupuestos para que la participación sea real y no ficticia (Bobbio, 1989: 45-47).

⁶² La igualdad puede plantearse en general en dos formas: como igualdad de derechos y como igualdad de oportunidades; la primera se representa como igualdad frente a la ley, la segunda como igualdad de condiciones materiales de vida (Siaca, 1994: IX).

⁶³ Flores-Olea (2001: 51-54) remite a que, en su origen, la idea moderna de democracia habría sostenido los principios de igualdad, libertad y fraternidad, nociones emancipadoras respecto de la sociedad jerarquizada del régimen aristocrático; con el desarrollo del capitalismo, la democracia se habría “vaciado” de tales contenidos sustantivos y tornado en mero procedimiento electoral; actualmente se llama “democráticas” a sociedades que son desiguales e inequitativas, de ahí que la noción de igualdad se ha desvinculado del principio democrático. En esa orientación, la igualdad consiste en que todos los integrantes de una sociedad tengan igual trato y oportunidades efectivas de bienestar (alimentación, educación, salud, empleo) tan solo por ser integrante de una sociedad que practica la democracia (Ruíz, 2000). Pero para los pobres resultan negadas en los hechos las libertades que en abstracto disponen las leyes. Así que sin igualdades efectivas no hay libertades sustantivas y las que se ejercen son de carácter más simbólico (Olea, 2001:53).

⁶⁴ Analizada mejor que otros por Bobbio (1989), la compatibilidad entre liberalismo y democracia puede ser considerada el desarrollo natural del primero, a condición de no considerar a ella desde el punto de vista de su ideal igualitario, sino en tanto que fórmula política que consiste en la soberanía popular.

Como principio moderno de gobierno, la representación política surge con la doctrina política liberal, en el contexto en que la igualdad política es instituida como derecho constitucional, lo que permitió suprimir restricciones al sufragio y que las minorías consiguieran ser representadas en los órganos de gobierno⁶⁵. Con el incremento y la diversificación de intereses, demandas y conflictos sociales, la legitimidad del régimen político pasó a depender de la adecuación para conciliarlos en la deliberación a cargo de las instituciones democráticas de gobierno. La clase social pierde eficacia como definición de la base electoral de los partidos políticos, cada vez más exigidos para representar el pluralismo⁶⁶, a la vez que primero la prensa masiva y luego la radio y la televisión se ven sometidos a presiones, desde distintos centros de poder, para reflejarlo en su difusión y hacer concurrir las diferentes corrientes de opinión. En ese marco, la deliberación pública se torna en un contenido sustantivo también de la representación política.

Pero a diferencia de la sociedad antigua en la moderna funciona como mecanismo para dar forma a la voluntad general, es decir a decisiones que conciernen y afectan a todos, a través de la libre deliberación entre mayorías y minorías, a partir de la libre expresión de las demandas de los ciudadanos y de programas partidistas de gobierno, en el seno de los órganos instituidos con esa finalidad. En el régimen democrático republicano, las funciones y tareas de gobierno son distribuidas de tal manera que se generen contrapesos en la toma de decisiones colectivas, y para funcionar se requiere la consolidación de los partidos políticos⁶⁷, sujeto colectivo e institución que, mediando entre gobernantes y gobernados, representan los intereses y canalizan las demandas individuales de los

⁶⁵ Como resultado de sendas luchas económicas y políticas, entre cuyas consecuencias destacan modificaciones a los sistemas electorales, en distinto momento según cada sociedad nacional, tendientes a reducir la inequidad en la competencia electoral y asegurar que el pluralismo se viera reflejado en la composición de los órganos representativos de gobierno.

⁶⁶ En términos de articular los intereses y mediar entre partes en conflicto, asegurar el acceso de minorías a los cargos, al debate público y una efectiva canalización de demandas ciudadanas. Desde entonces han tenido que transformar sus modelos de funcionamiento y de relación con los ciudadanos, debido a la mutación de la representación política que ha llevado de la democracia de partidos a la democracia de audiencia (Manin, 1994), centrándose ahora en “personalidades”, con carisma mediático y saberes técnicos, para generar lazos de confianza (Rodotà, 2008:8).

⁶⁷ Cuya función esencial no ha variado, a saber articular las diversas demandas de la sociedad y trasladarlas a la arena política, en tanto que vehículos de representación (Garretón, 2001).

ciudadanos, tanto en la elección del gobierno como las relativas a su funcionamiento, lo cual los sitúa entre la sociedad civil y la sociedad política.

En el régimen democrático, el ejercicio del poder público del Estado, cuya legitimidad emana del consentimiento de los ciudadanos para autorizarlo, tiene como único mandato la formulación del interés general y hacerlo prevalecer ante cada asunto y para cada decisión de orden colectivo que deba hacerse. El mandato emana de la agregación de mayoría en las elecciones y la representación política será más o menos democrática, en la medida en que sea ejercida teniendo como horizonte a la nación. Pero en las condiciones reales, ese requisito ideal se ve generalmente trastocado por diversas prácticas y estrategias políticas, que los titulares del cargo público llevan a cabo, en especial la representación de intereses particulares, sin el consentimiento de los ciudadanos en muchos casos, y en connivencia o con el solapamiento de otros.

Es claro que aunque el gobernante electo expresa la voluntad política de la colectividad, a la vez es ineludible que se vea exigido a dar respuestas, con frecuencia puntuales, a las demandas de los representados, mismas que a menudo corresponden sólo a una parte de la circunscripción electoral y no se ven reflejadas en el interés general. Esa es la razón por la cual subsiste la prohibición del mandato imperativo⁶⁸, principio normativo por el cual el representante puede hablar en nombre de sus electores pero goza de independencia con respecto a los intereses particulares de ellos o de la asociación en que se agrupen y, por tanto, es libre de actuar en consciencia en la toma de decisiones, sin ataduras respecto a los compromisos que haya contraído en la contienda electoral y de aquellos que sean representados, de manera articulada y agregada, por el partido político por conducto del cual compitió en la elección y accedió al cargo.

⁶⁸ Que prohíbe la representación de los intereses y demandas del electorado en la circunscripción en que resultó elegido, una vez que se desempeña como gobernante electo, puesto que entonces pasa a decidir, de manera colegiada, junto con los otros representantes, por la nación. Para una explicación detallada del mandato imperativo, v. Bobbio (1985) y confr. Linz (2002).

Ese principio estructurador de la representación política, fuente de legitimación en la democracia liberal, implica que una vez en el desempeño del cargo, el representante no debe decidir atendiendo a los intereses de sólo una parte de los ciudadanos, aun cuando puedan estar en juego en un cierto asunto público, sino conforme al interés que beneficia a la mayoría de la población, aún incluso en perjuicio de una minoría o grupo de interés particular, tal como podría ser el caso de algunos de quienes lo eligieron. Cabe señalar que, en los hechos, aún cuando la norma legal regule este aspecto, no hay forma de hacer valer, en la práctica, esa distinción o de llegar a conocer si el representante la tuvo a la vista, lo que entraña la dimensión simbólica de la racionalidad del Estado democrático⁶⁹.

Esa realidad obliga a tener en cuenta las variables que intervienen en la configuración de la representación política, algunas con frecuencia omitidas en el análisis, es decir según al cargo que corresponda (ejecutivo o legislativo), al tipo de elección (por el principio de mayoría o por el de representación plurinominal), al nivel de gobierno (nacional o local), así como las restricciones de elegibilidad y de reelección (elecciones internas, primarias o con segunda vuelta), puesto que repercuten en el ejercicio de la representación, condicionando la acción política y las prácticas asociadas y, por consiguiente, el funcionamiento del órgano legislativo⁷⁰.

Por eso, a la idea de que el gobierno representativo combina elementos democráticos y otros que, aparentemente, no lo son (Manin, 1998), habría que agregar el reconocimiento de que el modelo democrático adolece de limitaciones, algunas intrínsecas a sus presupuestos y otras relativas a la viabilidad para poner en práctica sus principios

⁶⁹ Weber postuló que el Estado moderno tiene como atributo, en la sociedad capitalista, la aspiración de detentar el monopolio del poder como coacción legítima, entendiendo por legitimidad la creencia firme de los sometidos en que el poder está justificado porque sirve a los intereses de la mayoría. En la realidad el poder puede servir a quienes lo detenta y ese carácter instrumental define la finalidad exclusiva de conseguirlo, característica de la racionalidad del Estado que impide que, en las condiciones reales de la sociedad moderna, la mayor parte de la comunidad política pueda imponer efectivamente su voluntad, aún cuando en esa aspiración radique precisamente la legitimidad consustancial de las formas democráticas.

⁷⁰ La representatividad de los titulares de los poderes públicos es diferente en el sistema presidencial de gobierno; la rama ejecutiva tiene un titular y la rama legislativa varios; en México el Congreso se integra de 500 diputados federales y 128 senadores.

reguladores (Bobbio, 2003), en cuanto a la representatividad que puede asegurar, según el tamaño y la diversidad social de la población, así como qué tan desiguales sean las condiciones de acceso a oportunidades y la disponibilidad de recursos entre la población en el contexto de una cierta sociedad. Para algunas de tales limitaciones se requiere, y es posible, hacer adecuaciones a las instituciones y las reglas en que se sustenta la democracia representativa moderna. En ese sentido, ella está sujeta a un proceso continuo de institucionalización y cambio institucional⁷¹, tal como evidencian procesos democratizadores en varios países en las dos últimas décadas del siglo pasado. De tal manera que esas limitaciones, en rigor, no alcanzan para explicar por sí mismas la desilusión o el malestar que muestran la mayor parte de los ciudadanos con respecto al ideal democrático, tal como se suponía en el debate intelectual de esos años.

Tal como se ha visto, en su contenido mínimo esencial, en tanto que método de gobierno, la democracia representativa nunca podrá asegurar a todos los ciudadanos la participación en el ejercicio del poder. Desde ese punto de vista, la participación ciudadana se satisface y circunscribe a la acción de emitir la autorización de quienes lo hagan por ellos. Aún desde una concepción más amplia de la democracia representativa, resulta más relevante aún que, al menos al nivel de la circunscripción nacional, ella difícilmente garantiza que los ciudadanos puedan intervenir para corregir el rumbo del mandato, si no es de modo retrospectivo y hasta la renovación de sus titulares en la siguiente elección, en ausencia de mecanismos legalmente vinculantes para hacer efectiva la exigencia de rendir cuentas ante los ciudadanos durante el desempeño del cargo. Esto pone de relieve la cuestión de la responsabilidad política de los gobernantes electos.

El acceso a cargos públicos implica, en los hechos, una militancia o un compromiso con un partido político. La renovación de los titulares del gobierno, aún cuando sea periódica, no

⁷¹ Desde la perspectiva del institucionalismo, la “institucionalización” puede ser entendida como “la naturaleza estable, recurrente, repetitiva y pautada de la conducta que tiene lugar dentro de las instituciones y a causa de éstas” (Goodin, 2003:38). Entre las vías del cambio, el “institucionalismo” puede ser entendido como el proceso a través del cual organizaciones y procedimientos adquieren valor y estabilidad”, de acuerdo con Eisenstadt (1968:410, citado por Goodin, 2003:38).

alcanza para que muchos ciudadanos puedan acceder a cargo alguno, porque a los requisitos estrictamente constitucionales se superponen, en la práctica, otros derivados de las actividades y los resultados que, reguladas por los estatutos internos de los partidos, y con frecuencia a juicio de las elites partidistas, deba realizar y acreditar un ciudadano para acceder a una candidatura a cargo público; muchos de éstos requisitos resultan incumplibles para la mayor parte de los ciudadanos, es decir aquellos que no se dedican a la actividad política ni obtiene sus ingresos de ella.

Como también se ha visto, otra de las paradojas de la democracia liberal consiste en que, en las sociedades modernas, la representación política no pueda eludir a la representación de intereses, forma política que aún la socava. Aunque es incompatible con el mandato imperativo, los representantes políticos están sujetos, invariablemente, a las presiones ejercidas por grupos de interés⁷², aún si éstas son canalizadas al margen de los partidos políticos. Con el desarrollo del pluralismo político⁷³, éstos sustituyen al representante generalista y autónomo, proclamado por la ideología liberal. La función primordial de la representación consiste en transformar las voluntades individuales en una voluntad general.

Para hacerla posible, el representante, que recibe ese mandato por parte de los ciudadanos, desempeña la tarea fundamental, primero, de captar los intereses particulares y, luego, de procesarlos, confrontándolos entre sí para la conformación del interés general. Para cumplir con ese cometido, el representante político tendría que

⁷² Considerados por los politólogos como todos los actores políticos no gubernamentales; según uno de los precursores de la teoría de grupos de intereses en ciencias políticas, aquellos que ejercen “ciertas presiones sobre otros grupos para lograr que se establezcan, se mantengan o predominen formas de conducta que son inherentes a sus actitudes compartidas” (Truman, 1971: 31-33), acepción tan amplia que da cabida a los “grupos de identidad” que tienen una naturaleza distinta e ignorados por la teoría democrática que no tuvo en cuenta la variable identificación mutua, según demuestra con rigor (Gutmann, 2008: 14). El grupo de interés se organiza en torno a un interés instrumental compartido por los individuos que lo constituyen; lo que ejerce la atracción y adscripción de los individuos es ese objetivo que comparten y que es previo a la formación del grupo (Olson, 1992); no es necesaria la identificación mutua entre sus miembros.

⁷³ En el marco del liberalismo de la segunda etapa de Rawls, se reconoce el pluralismo como un hecho, consistente en la existencia de discrepancias irreductibles entre los ciudadanos de una misma sociedad sobre asuntos cruciales, tales como concepciones del mundo o códigos culturales (Velasco, 2006: 191).

despojarse de las presiones ejercidas por grupos particulares, que antepondrán sus propios intereses al interés general, cualesquiera que éste sea.

La legitimidad de la representación política queda constreñida entonces a los procedimientos para conseguirla, donde los ciudadanos tienen derecho a expresar sus intereses particulares a los representantes electos y éstos la obligación de dar cuenta acerca de la manera en que fueron procesados en la asamblea deliberativa en la que se toman las decisiones que, mediante la mayoría de sus miembros, entonces instituyen legítimamente la voluntad y el interés general y, por consiguiente, de cumplimiento obligatorio para toda la comunidad.

De manera que en las sociedades contemporáneas, la representación política democrática encara, por una parte, el desafío representado por grandes conglomerados poblacionales (“sociedad de masas”) y la acentuación de la heterogeneidad de intereses y la diversidad de grupos sociales, lo que dificulta su articulación y coordinación en torno a acciones colectivas. Las posibilidades de agrupamiento se restringen al método para elegir al gobierno, a ciertos individuos para representar y tomar las decisiones vinculantes en lugar de todos los demás, quienes conjuntamente conforman la comunidad política en la que descansa la soberanía o autodeterminación del Estado-nación.

Además de ese desafío aquella enfrenta, por otra parte, la paradoja que resulta de la imbricación entre la realidad simbólica constituida por la unidad abstracta de la comunidad política, y la realidad concreta de la exigencia de representación de las diferencias entre sus miembros. Tal imbricación supone el problema de la legitimidad del contenido de la representación política, más allá del problema del procedimiento para transformar, a través de la deliberación, las diferencias en un mandato unificado que sea válido para todos, cuyo consentimiento, siempre precario, implica renunciar parcial o completamente a los intereses y demandas de alguna o algunas de las partes representadas, por lo menos durante algún tiempo. En esta limitación, intrínseca al

funcionamiento de la representación democrática, reside una de las razones por las cuales en el imaginario colectivo se arraiga, como percepción y creencia generalizada, la forma simbólica relativa a la ineficacia de los partidos políticos y a gobernantes electos que anteponen sus propios intereses a los de los ciudadanos. Una forma simbólica que afecta en mayor medida a los legisladores federales, tal como actualmente ocurre en México.

Es plausible, en consecuencia, ampliar el horizonte analítico, al considerar la dimensión comunicativa que abarca la esfera pública social, más allá de la dimensión política institucional y del proceso electoral, para entender la representación política en la democracia liberal. En esa dirección, hay precedentes atendibles aunque adolezcan de la segunda constricción señalada, tal como la propuesta de Pitkin (1985) quien considera esa representación en tanto que proceso basado en diferentes relaciones de interacción comunicativa entre la sociedad y el Estado, centrado en la garantía de que los ciudadanos puedan difundir su voces en la esfera pública, de modo que dicho proceso consiste en una relación entre intereses y resultados, cuyas vinculaciones se pueden desplegar atendiendo a tres criterios:

- a) según el vínculo entre las señales del ciudadano y las políticas públicas decididas por los agentes representativos, cuyo ideal es que el gobierno deberá adoptar las políticas indicadas por los ciudadanos;
- b) conforme al vínculo entre mandatos y políticas públicas, que supone que los representantes cumplan con la oferta política electoral que propusieron a los ciudadanos;
- c) de acuerdo con el vínculo entre resultados y responsabilidad, que indica la posibilidad de que los ciudadanos, a través de la elección, juzguen la acción desarrollada por sus representantes, es decir que la sancionen.

De ahí que esta autora proponga entender la representación política a partir de los siguientes componentes: autorización, representatividad, receptividad, rendición de cuentas y representación simbólica.

Esa consideración permitiría formular el proceso de la representación política, en los siguientes términos: los ciudadanos delegan autorización al representante para decidir por ellos; los representantes son portadores de alguna de las partes de la diversidad social, a la vez que continúan atendiendo a las opiniones y demandas que los ciudadanos les plantean, presentándose periódicamente ante ellos para informar acerca de su actuación en el ejercicio de la autoridad delegada, todo lo cual genera un ambiente de aprendizaje de las cuestiones de difícil procesamiento para los ciudadanos. Offe (2001) llama la atención acerca de las consecuencias del comportamiento de las instituciones en la generación de ambientes propicios, en la medida en que determina para la mayor parte de los ciudadanos la percepción y la asignación de responsabilidad en los representantes políticos, como se verá en un siguiente apartado. Cabe ocuparse ahora de la participación.

1.3. Participación política en la democracia representativa

En el campo de la ciencia política, el concepto de participación política ha sido elaborado con base en la observación del comportamiento en democracias occidentales. En éstas designa, en general, una serie de actividades diversas asociadas con prácticas, orientaciones y procesos típicos de ese tipo de régimen político, desde el acto de votar, la militancia en un partido político, la participación en manifestaciones, la contribución dada a una cierta agrupación política, la discusión de sucesos políticos, la participación en comicios o en reuniones de algún sector de la sociedad, el apoyo dado a un determinado candidato en el curso de la campaña electoral, la presión ejercida sobre un dirigente político, la difusión de información, entre otras (Sani, 2005: 1137), cuyo sujeto es invariablemente el ciudadano, sea individual o colectivamente considerado y cuyo objeto genérico es influir en los procesos de formación y funcionamiento del gobierno. En el debate acerca del papel de la participación ciudadana en el funcionamiento de un régimen democrático, han subsistido tesis que postulan a la primera como condición del segundo y tesis que establecen que se trata de un aspecto más para mejorarlo.

No obstante en ninguna de ellas se resuelve la cuestión relativa al número de ciudadanos y la intensidad con que participan, así como a los mecanismos idóneos para fomentarla. Las diferencias se reconocen a partir de las posturas respecto a la amplitud con que deba tener lugar o según que en la consideración se privilegien los riesgos que entraña para el sistema político o los beneficios y costos que implica para los ciudadanos. En cuanto a la primera postura, algunos estudiosos sostienen que la participación debiera tener un horizonte más amplio que el proceso electoral (Pateman, 1970). Llama la atención que en esa orientación, Birch (1993) considera, por ejemplo, al involucramiento “clientelar” (sic) en la instrumentación de políticas sociales como una forma de participación política, y argumenta que, ante la progresiva reducción de ésta, una alternativa consiste en que los partidos fomenten la integración de ciudadanos en agrupaciones locales, orientadas a la discusión de programas gubernamentales. Con ello se daría paso a enlazar la cadena de comunicación entre ciudadanos, militantes y dirigentes partidistas, por un lado, y líderes parlamentarios, por otro lado, se elevaría la eficacia en las acciones y se reducirían los costos implicados en el proselitismo.

Por lo que se refiere a la segunda postura, algunos estudiosos consideran los costos que el ciudadano debe pagar para asegurar algún beneficio en participar, en tanto que para otros la participación es benéfica en sí misma. Desde el primer enfoque se considera a la arena política como un mercado, al que concurren ciudadanos individuales que, actuando racionalmente, buscan maximizar sus propios beneficios y reducir los costos derivados de participar o no. Desde el segundo enfoque la participación reduce el sentimiento de aislamiento e induce o incrementa el sentimiento de eficacia política en los ciudadanos, lo que abre posibilidades para intervenir en los asuntos públicos (Stankiewicz, 1980). La distorsión de la participación política se origina en que ella sea considerada, por las élites políticas y la mayor parte de los ciudadanos, como cauce y mecanismo para que un grupo pretenda que los propios intereses, siendo excluyentes de los demás, se impongan como expresión de los intereses colectivos. La cuestión toral reside en asegurar tanto la

representatividad⁷⁴, es decir la inclusión de ciudadanos, como la libre discusión entre ellos de los asuntos colectivos, ambos aspectos son condiciones del escrutinio ciudadano.

Para los fines del análisis deben tenerse a la vista dos premisas relacionadas entre sí, a partir de las cuales se argumenta que el escrutinio ciudadano es una forma de participación política a cargo de los ciudadanos, que en las democracias liberales representativas tiene como contraparte la rendición de cuentas a cargo de los representantes políticos⁷⁵ y que, como se verá en el siguiente capítulo, su naturaleza política puede ser subsumida por su naturaleza simbólica debido a la intermediación cultural que, en las sociedades contemporáneas, ejercen los medios de comunicación masiva respecto de la mediación política entre gobernantes y ciudadanos.

La primera premisa es que la naturaleza de la participación política depende de la naturaleza del régimen político. La segunda premisa es que en cualquier régimen político puede distinguirse entre la participación normativa o sancionada jurídicamente y la participación real o de facto. Si se aceptan ambas premisas, puede sostenerse que cierto tipo de régimen político da lugar a ciertas formas de participación política, aunque en cualquier caso la observación y el análisis deberá distinguir entre formas de participación regulada y aquellas que no lo están; entre el predominio de unas y la marginalidad de

⁷⁴ En su formulación simple, la representatividad es un atributo del proceso de elección que consiste en que los electos representen todos los intereses de los ciudadanos y de sus asociaciones, y que hagan que sean tomados en cuenta en las instancias legislativas, previstas por el orden constitucional, al momento de deliberar para formar la voluntad general, de lo que depende según Stein (1994) la legitimidad de los electos, aunque también de las actitudes y conductas de ellos respecto a la participación ciudadana.

⁷⁵ Entendida como la acción por la que un gobernante electo informa a los ciudadanos acerca de su actuación en el desempeño del cargo, regulada como obligación en un Estado democrático de derecho, en correspondencia con el derecho de los ciudadanos para acceder a la información pública del Estado. La rendición de cuentas supone la explicación o justificación de las decisiones en torno a leyes, políticas públicas y las acciones para cumplir con las tareas del gobierno, incluidos los órganos constitucionales autónomos respecto a las determinaciones de los poderes públicos de las ramas de gobierno. Para una discusión de la noción desde ese punto de vista, véase Ackerman (2008); Holmes (2008), O'Donnell (2008) y Cossío (2008), los tres últimos con relación al contexto estadounidense, latinoamericano y mexicano.

otras, así como la coexistencia y, en su caso, complementariedad u oposición entre ellas, lo que sería resultado de su análisis en cada contexto social, espacial y temporal⁷⁶.

Una manera de entender la naturaleza de la participación política es atender a los sujetos implicados, así como al diverso alcance y restricción de la acción individual y colectiva. En los regímenes democráticos, las reglas e instituciones que se consideran legítimas definen, a su vez, los fines, los medios y el cauce que se considera legítimo para la participación en las tareas de gobierno. Con base en ellas, los ciudadanos y los partidos políticos son los sujetos principales de la participación política, ésta se orienta a la formación del mandato de gobierno y a la vigilancia de su cumplimiento, mediante el escrutinio ciudadano y la rendición de cuentas, de cuya práctica depende la legitimación política del régimen⁷⁷.

La participación política en la democracia representativa está sujeta a la mediación política que ésta comporta, en dos sentidos del proceso político: el ejercicio del poder público constituido corre a cargo de los gobernantes electos que deciden por los ciudadanos y éstos acceden a ese ejercicio a través de los partidos políticos. Los partidos son organizaciones ciudadanas de interés público para acceder al ejercicio del gobierno, mediante el reclutamiento y la organización de quienes aspiran a ejercer la representación política en el gobierno. El ciudadano queda a expensas del partido y del gobernante electo, de ahí la preponderancia del sufragio como forma de participación política. Esa función de doble intermediación se origina en la contradictoria convergencia histórica de las tradiciones liberal y democrática, impecablemente analizada por Bobbio (1989: 45-47)

⁷⁶ Investigación longitudinal y comparativa muestra que la conducta participativa observada en la mayor parte de los ciudadanos, aún en países con arraigada tradición y experiencia democrática, no se corresponde con lo prescrito por el ideal democrático, que según Sani (2005: 1138) “prevé una ciudadanía atenta a los desarrollos de la cosa pública, informada sobre los acontecimientos políticos, al corriente de las principales cuestiones, capaz de elegir entre las distintas alternativas propuestas por las fuerzas políticas y comprometida de manera directa o indirecta en forma de participación”.

⁷⁷ La concepción ideológica aquí descansa en el presupuesto de que el Estado debe asegurar la resolución de conflictos entre los ciudadanos y grupos sociales y que la acción del gobierno está dirigida a cumplir ese fin, conforme a las reglas e instituciones democráticas que instituye.

y que rige la relación entre el Estado y la sociedad civil⁷⁸, da lugar a que la participación ciudadana en la toma de decisiones colectivas sea intrínsecamente indirecta: la mayoría de los ciudadanos elige a una minoría de ellos que decidirá por todos ellos. Pero ¿qué podrían hacer los ciudadanos si consideran que no son correctamente representados, o bien que los electos no vigilan adecuadamente al gobierno? En razón de esa mediación, la naturaleza de la representación conlleva una inminente dimensión simbólica, dada por la expectativa de que la participación en el gobierno que ha sido delegada, se ciña a las preferencias individuales y subjetivas de los ciudadanos, a cuya articulación es esencial la función de agregación y conciliación de intereses a cargo de los partidos políticos.

Esta situación da lugar a que la opinión y la evaluación crítica de los ciudadanos acerca del desempeño de gobernantes electos, tenga en los comicios su mayor alcance y, en cambio, su mayor restricción ante el gobierno en funciones, lo cual no significa que aquellas queden necesariamente supeditadas a los procesos electorales. Los ciudadanos se implican cotidianamente, en diversas interacciones y entornos sociales, en situaciones que les motivan para evaluar al gobierno, a gobernantes electos y a funcionarios designados. Una vez advertido ese rasgo, habrá que revisar las formas y acciones de participación política en la democracia para situar al escrutinio.

Pueden distinguirse, en general, tres modos que dan lugar a niveles diferentes de intensidad de acción y experiencia política: a) “pasiva”, que supone un comportamiento receptivo, sin que el individuo haga aportación a la situación política y, por tanto, el alcance es marginal y la experiencia es precaria; b) “proactiva”, cuando el sujeto se hace

⁷⁸ La idea del Estado democrático es resultado del proceso ideológico y político de convergencia entre la tradición liberal y la tradición democrática, que tuvo lugar durante el siglo XIX, cuando se abrió paso la convicción de que la forma democrática de gobierno se ajusta mejor que cualesquiera otra a los valores y principios liberales, incluidos los que rigen en una economía de libre mercado. Esa convergencia abre paso al principio de participación política mediante el sufragio universal y a la idea de la capacidad de los ciudadanos para decidir sobre los asuntos públicos, a la vez que supuso el riesgo de que la política y el resto de las esferas de actividad humana se rijan mediante una lógica de intercambio, una paradoja que Bobbio (1989) postula como intrínseca a la democracia moderna, aunque a Cansino (1997) le parece un argumento ambivalente. El Estado democrático se afirma con el Estado de derecho, sobre la base de la representación de los ciudadanos a partir de diversas estructuras de intermediación.

cargo de actividades o éstas son delegadas en él, fuera o dentro de organizaciones de las que forma parte, su alcance es central y la experiencia es intensa; c) “activa”, si el individuo forma parte de una organización política y compromete su militancia con ella, se produce la experiencia más intensa y el mayor alcance de acción⁷⁹.

En las sociedades modernas, cuyas comunidades políticas son mucho más numerosas que en el pasado, la contribución directa de los ciudadanos a la acción política colectiva tiene lugar en grupos reducidos de ciudadanos y en el entorno político más inmediato. Es así porque la experiencia personal directa hace más cercanas y sentidas las necesidades comunes e ineludibles los problemas colectivos, compromete con mayor fuerza los lazos de solidaridad y expectativas de que la acción colectiva dirigida a satisfacerlas y resolverlos resulte efectiva o tomada en cuenta por la autoridad. Mientras que la contribución indirecta es el modo más común para la mayor de los ciudadanos, y concierne a un entorno más global y distante, con frecuencia experimentado como ajeno, entre otras cosas por la insuficiente o carente información y por expectativas débiles que impiden un mayor involucramiento personal y grupal. Los estudios al respecto coinciden en que la participación directa de los ciudadanos es más viable y efectiva al nivel de la circunscripción política local que en el nivel sub-nacional o nacional.

Ahora bien, al analizar el comportamiento real de participación política de los ciudadanos, en las condiciones concretas en que tiene lugar, la investigación desde la segunda mitad del siglo pasado a la fecha revela que, aún en sociedades con larga tradición democrática, por un lado el abstencionismo en los comicios es elevado; la militancia en partidos políticos es reducida en proporción al total de ciudadanos y se disminuye progresivamente

⁷⁹ Aunque no elabora el argumento aquí expuesto y que sustenta las modalidades de participación con el criterio definido, se corresponden con las categorías que propone Sani (2005: 1137): “presencia”, “activación” y “participación en sentido estricto”, respectivamente. Si bien la intensidad puede ser observada y medida empíricamente a partir de factores cuantitativos y cualitativos, tal como la pertenencia o no a agrupaciones políticas, el número de ellas y la frecuencia de acciones directamente vinculadas a fines políticos, incluso considerando aquellas organizaciones que actúan de manera subsidiaria tal como organizaciones religiosas, de actividad cultural o altruistas, la determinación del carácter de los fines puede resultar imprecisa e incluso ambigua, por lo que en mi opinión exige delimitar metodológicamente un criterio que atienda al contexto espacial y circunscrito a una cierta temporalidad o episodio.

en términos proporcionales; que el interés en la política se circunscribe a un conjunto pequeño del total de ciudadanos y el grado de información político es bajo en la mayor parte de ellos, no obstante el aumento progresivo de la información que ponen en circulación los medios de comunicación masiva, sobre todo respecto a las campañas electorales y aún en poliarquías más liberales, con sistema competitivo de partidos y representación menos asimétrica de las minorías políticas.

Por otra parte, trabajos recientes arrojan evidencia de que si bien se han expandido más allá de las elecciones, las fórmulas de participación ciudadana no han logrado asegurar y potenciar con éxito la representación del conjunto de los intereses ciudadanos y grupos sociales, puesto que la operación de tales mecanismos puede verse afectada por sesgos derivados, entre otras razones, de la exigencia de recursos para los participantes, mismos que están desigualmente distribuidos entre la población (Font, 2001: 220). Un riesgo es premiar opiniones e intereses de ciudadanos con mayores recursos para participar, lo que equivale a que la participación no sea representativa; otro riesgo es favorecer la participación de base asociativa (organizada) por encima de aquella de base personal (informal y espontánea), tal como suelen hacer los gobiernos locales, con lo cual se comprometen tanto la imparcialidad en cuanto a la agenda de asuntos, las prioridades y los acuerdos, debido a la manipulación de que pueden ser objeto por parte de la autoridad pública involucrada, como el potencial educativo de la experiencia de participación, al cerrarse la puerta al aprendizaje de aquellos ciudadanos con menor disponibilidad de información y no afiliados a organización civil alguna y, por consiguiente, se les priva de entender la complejidad de los asuntos colectivos y de ejercitarse en la valoración de la solidaridad social⁸⁰.

⁸⁰ En el análisis de la participación ciudadana, una cuestión decisiva consiste en determinar hasta qué punto los mecanismos e instrumentos establecidos contribuyen a legitimar las políticas públicas y las mismas instituciones que las generan. Contra la idea generalizada de que la complejidad técnica, inherente a los procesos decisorios sobre políticas públicas, inhabilita o inhibe a la mayor parte de los ciudadanos, Brugué y Gallego (2001: 43-58) han sugerido que al ciudadano común le es más fácil participar en ellos que elegir a representantes que lo hagan por ellos. En la literatura especializada hay coincidencias en que un mecanismo participativo tendrá mayores posibilidades de ser visto como legítimo, si se considera que los participantes han dispuesto de suficiente información para emitir sus opiniones. El reto consiste en abrir espacios de

Según Font (2001: 220) no resulta claro qué tipo de ciudadanos interesa integrar (“qué voces deben ser escuchadas”), ya que en los instrumentos participativos hay implícitos modelos muy distintos en cuanto a intereses y puntos de vista a los que dan cabida. Se han propuesto soluciones diversas a la cuestión. Brugué y Gallego (2001: 43-58), por ejemplo, sostienen que una posibilidad es favorecer la participación de una red abierta de actores interesados y dispuestos a participar, ya sea por su implicación directa en los asuntos a tratar o por un interés genérico. Desde esa perspectiva, sólo debiera escucharse a ciudadanos y grupos sociales interesados en expresar su opinión, pero la deliberación sólo se produciría entre un número reducido de ciudadanos, aquellos que dispongan de un mínimo de información e interés para hacerlo.

En la mayor parte de los casos, sin embargo, la población afectada por una determinada política rebasa al reducido número de voces con intereses inmediatos en juego. Adicionalmente, tampoco está claro si aquellos que se abstienen lo harán simplemente porque no les interesa o porque no disponen de los recursos necesarios para participar. En tal caso, no solamente se estaría prescindiendo de la opinión de aquellos que no están interesados en manifestarla, sino que se estaría marginando a ciudadanos con menor capacidad de hacer sentir su voz. El modelo de participación predominante ha potenciado la participación de grupos organizados, en detrimento de la capacidad de los ciudadanos no organizados para incidir en los procesos de gobierno.

1.4. Escrutinio ciudadano: ¿forma de participación política democrática?

Por lo expuesto queda claro que la noción de “escrutinio ciudadano” aquí planteada es en sí misma problemática. No obstante tener fundamento en el paradigma dominante de la

participación ciudadana que ofrezcan las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan construir opiniones suficientemente informadas y reflexionadas. Esa es la tendencia que siguen algunos de los nuevos instrumentos de participación (Font, 2011: 225).

teoría democrática normativa⁸¹, puede resultar discutible, aunque no haya sido siquiera conceptualmente elaborada, desde el punto de vista de la perspectiva neo-funcionalista de investigación politológica sobre la participación política. En razón de ello se argumentarán en lo que sigue las objeciones al respecto. Para ello bastará con postular que el escrutinio ciudadano constituye una forma de acción política que tiene sentido en un régimen democrático liberal, lo cual supone repasar el concepto de acción política y, para que la crítica referida se sostenga, hacerlo desde esa perspectiva referida.

Desde ella, en efecto, la práctica del escrutinio ciudadano, tal como se la define aquí, no es considerada en tanto que forma de participación política en las clasificaciones elaboradas, ni siquiera entre las de tipo “no convencional”, uno de los criterios de su elaboración. Eso refleja una inadecuación teórica y empírica, que deriva de concebir la participación del ciudadano como plenamente realizada en la emisión del voto y consumada en esa forma de participación convencional.

Esa postura es propia de la llamada “teoría pluralista de la democracia”, perspectiva basada en una concepción elitista de la tarea gubernativa, por la que los complejos asuntos de gobierno sólo están al alcance de la discusión de los expertos, los funcionarios de gobierno y un reducido público informado y sofisticado, pero no así de la mayor parte de los ciudadanos que adolece de competencias cognitivas e instrumentales. Las formas en que se puede manifestar la participación masiva de personas, al margen del representante político, constituyen riesgos para la estabilidad y la regularidad del proceso decisorio de gobierno; por tanto, debe ser acotada y encauzada hacia el ejercicio del sufragio. Tal postura y la cuestión, sin embargo, ya han sido discutidas y criticadas en lo que concierne al contexto de democracias consolidadas⁸².

⁸¹ De una manera simplificada, pueden distinguirse dos tipos de aproximación en la teoría democrática: una empírica, que se centra en el problema de qué es y cómo funciona la democracia, y otra normativa, cuyo foco es la cuestión relativa a qué debería ser la democracia (del Águila, 1997:140). Aplicada al diseño de las instituciones y políticas públicas, la interfaz entre lo normativo y lo empírico, en términos de necesidad de esa conexión y qué la hace directa, es explorada desde un enfoque institucional por Godin (2003:53-56).

⁸² Desde los años setenta y con motivo del debate abierto por la postura de algunos acerca de que no es la mayoría de la población la que controla el procesamiento y los contenidos de la agenda gubernamental, a

De acuerdo con ese enfoque, los procesos electorales implican un nivel vertical de la rendición de cuentas⁸³. Más allá de ellos, la única forma en que los ciudadanos pueden vigilar a los titulares del gobierno es hacer exigible que las leyes y políticas públicas sean modificadas, o bien incidir en la agenda política de asuntos públicos por atender, mediante la movilización de corrientes de opinión pública en esa dirección. La opinión pública (discutida en capítulos subsecuentes), proporcionaría los “insumos informativos” generados entre los ciudadanos, mismos que el sistema político procesará para mantener márgenes suficientes de acción y, en su caso, de reorientación de la acción de gobierno.

Este enfoque no parece suficientemente apto para comprender por qué la mayor parte de los ciudadanos no se involucran, incluso subestiman o menosprecian, las formas convencionales de participación política. Lo cual parece más generalizado y acentuado en sociedades con incipiente funcionamiento político democrático, tal como es el caso de México. Hay varias razones para sostener eso. En primer término los gobernantes pueden simular todo el tiempo que toman en cuenta las demandas ciudadanas (“insumos”), controlar y manipular la información acerca de los intereses en juego ante un conflicto social y mantener con amplia discrecionalidad el procesamiento de tales demandas y las negociaciones en los conflictos, así como la justificación de las decisiones que al final adoptan al respecto. En segundo término, la distribución de información gubernamental, relevante y suficiente, entre ciudadanos es asimétrica, así como las competencias cognitivas y discursivas son desiguales entre ellos.

través de las campañas y elecciones, sino que son un resultado de la lucha entre grupos organizados y reconocidos por las instituciones, quienes realmente inciden y la definen, debido a su posición política y los cuantiosos recursos económicos de que echan mano. Véase, Elder y Cobb (1984), Kingdon (1984) y Bachrach y Baratz (1970) según Dorantes (2007).

⁸³ O'Donnell (2008), entre otros, se ha ocupado de las modalidades de la llamada *accountability*: la “vertical” se basa en la relación de mandato o autorización que otorgan los ciudadanos mediante la elección de los gobernantes electos y los programas de gobierno que comprometen en la elección, mientras que la rendición de cuentas “horizontal” atañe al control político y vigilancia que entre sí ejercen los órganos de gobierno; ese autor es de los primeros en reconocer que es posible considerar una rendición de cuentas vertical “societaria”, es decir a través de organizaciones de la sociedad civil, modalidad tratada entre otros por Smulovitz y Peruzzotti (2002), aunque aún es incipiente el análisis del papel de organismos públicos estatales, a los que se otorga cierta autonomía decisoria y operativa, encargados de la protección y defensa de los derechos sociales y políticos de los ciudadanos frente al abuso de actos de autoridad.

En tercer término, nada asegura que los flujos de opinión pública representen, ni siquiera que reflejen, la diversidad de intereses y demandas de los ciudadanos según sus prioridades y de manera desagregada, de modo que se pueda dar cuenta de las leyes y políticas públicas que permitan articularlas y conciliarlas en términos del interés colectivo más general. Ésta es precisamente una tarea de gobierno para cuyo desempeño se requiere un aparato administrativo, recursos técnicos especializados y sofisticadas metodologías aplicadas a esa finalidad, y cuya divulgación es en general precaria.

No obstante, habrá que reconocer que la información que los ciudadanos aportan a los gobernantes electos, ya sea a través eventuales interacciones cara a cara o bien mediante la interlocución periódica con liderazgos de todo tipo, es tan diversa, dispersa y discontinua, que obliga a los primeros a atenerse a las organizaciones civiles intermediarias o a los partidos políticos y a los segundos a cruzar la información que por conducto de éstos les sea canalizada, para de ese modo ponderar los asuntos que fluyen a partir de las corrientes de opinión pública. Los gobernantes electos no dan cuenta a los ciudadanos acerca de esa ponderación, no obstante que informar acerca del criterio con que procesan los asuntos colectivos es un rasgo de lo que se ha dado en llamar “transparencia gubernamental”, derivado del principio democrático de máxima publicidad, criterio que es indispensable publicitar para el ejercicio legítimo del poder público y que a la vez es necesario conocer para evaluar la acción estatal⁸⁴.

Los ciudadanos requieren recibir información, tanto relativa a lo planteado por otros como a la consideración que ello merezca a los gobernantes electos, y además de manera simplificada, en consonancia con las competencias cognitivas y discursivas comunes a la

⁸⁴ Lo que depende del control de la calidad de la información que dan los órganos de gobierno, que implica hacer diferencia entre datos oficiales e información confiable y relevante, lo que a su vez depende de la discrecionalidad que admitan las leyes y las prácticas de los agentes políticos, para determinar, entre otras cosas, la agenda de evaluación y el carácter de su divulgación (“voluntaria”, “aparentemente obligatoria”, o “moralmente obligatoria”, según propone Fox, 2008:189).

mayor parte de los ciudadanos. La transparencia es una condición necesaria pero no suficiente para dar lugar a la rendición de cuentas (Fox, 2008: 175)⁸⁵.

En ese marco, el escrutinio ciudadano cobra sentido como acción política y forma de participación política, en la medida en que surge y se desarrolla entre ciudadanos, a partir de los espacios y circunstancias de convivencia comunitaria cotidiana. Tiene pleno alcance cuando se hace llegar al representante político o al funcionario de gobierno, el resultado de la discusión entre sus participantes acerca de la actuación y el desempeño de aquellos, aún si se ocupa solamente del ámbito local de gobierno o bien concierne a un asunto que afecta solamente a un grupo social en particular. Ese alcance se potencia o amplía cuando la discusión y sus resultados consiguen publicidad. Esta es la única forma que tiene el ciudadano para incidir, con independencia de la participación electoral, en la responsabilidad política de los gobernantes, aunque sea indirecta y parcial.

El ejercicio del escrutinio ciudadano, en ese sentido, contribuye a hacer exigible la rendición de cuentas, pero no necesariamente se atiene a ella, lo cual comporta serias implicaciones en un contexto en que partidos políticos y gobernantes electos privilegian el periodo electoral como ocasión para informar a los ciudadanos acerca de lo que hacen, del criterio que ejercieron y la justificación del resultado. La evaluación crítica ciudadana tiene diferente alcance, según se trate de periodo electoral o no, pero en ambos casos dependerá de la publicitación del hacer gubernamental.

Tal como se verá, la publicidad de la acción gubernamental ésta restringida por diversos factores, en principio por el alcance de la regulación legal en materia de transparencia⁸⁶,

⁸⁵ Aunque aún no se han elaborado marcos conceptuales para dar cuenta de la relación entre transparencia y rendición de cuentas y explicar la causalidad y consecuencias de esa relación, hay acuerdo en que es discutible la tesis de que la transparencia genera necesariamente la rendición de cuentas, confrontada porque en los hechos no hay correlación empírica significativa que se haya probado. De ahí que habría que formular la cuestión, en términos operativos para poder medir, en términos de qué tipos de transparencia generan qué tipos de rendición de cuentas; ésta tiene dos facetas, una limitada a dar respuestas (“blanda”) y otra que incluye posibilidad de sanción (“dura”). para referencias acerca de los escasas propuestas teóricas sobre la cuestión, véase Ibid: 175 y ss., en especial notas 6 a 11), para el caso de México cfr. Zaldívar (2006).

entre otros. En ese sentido, aunque entre la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas no se establezca una relación de identidad ni causal, ambas contribuyen al ejercicio del escrutinio ciudadano. Éste puede ser considerado, en último término, un comportamiento ideal y, primigeniamente, una acción política real en regímenes políticos democráticos liberales. Ya se ha visto el primer aspecto. Conviene ahora detenerse en el segundo, en la noción de acción política, en la medida en que es necesaria para especificar la propuesta conceptual de escrutinio ciudadano, que es central en este estudio.

Desde el enfoque neo-institucionalista, predominante en la ciencia política actual, la noción es analizada con relación a los procesos políticos institucionales. Este enfoque ofrece la ventaja de utilizar categorías adecuadas para la observación empírica. La acción política consiste de una conducta, individual o de grupo, siempre dirigida a incidir en el proceso de gestión de los conflictos sociales, ya sea de modo directo o remoto (Vallés, 2004: 309). Ese proceso consiste en la formulación y canalización de demandas y reivindicaciones, el reclutamiento de dirigentes políticos, la elaboración y la ejecución de políticas públicas, la protesta o la resistencia a esa ejecución. En cada fase, se producen oportunidades de intervención de diverso tipo, desde la discusión entre vecinos sobre la acción de la autoridad pública inmediata, hasta una manifestación en la vía pública, votar o dirigir un mensaje verbal o impreso a la autoridad.

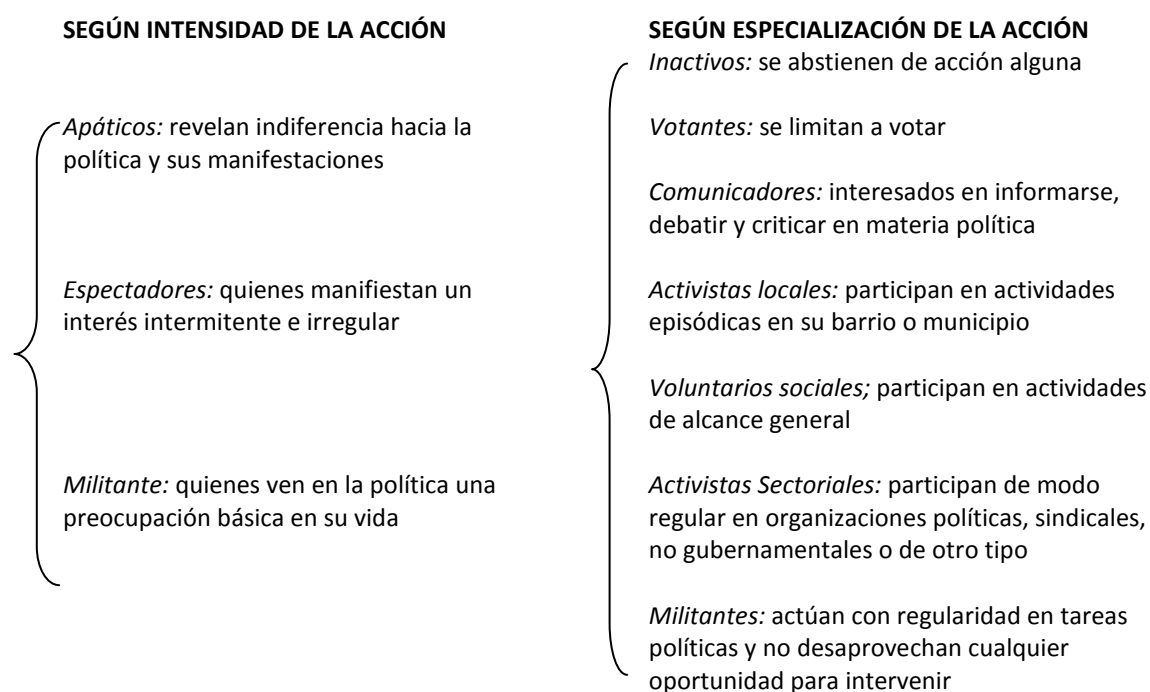
Para la mayor parte de los ciudadanos, la acción política es marginal e intermitente, así como esporádica y residual; en general, dedican menor esfuerzo y tiempo a la actividad política que al resto de actividades en las que se involucran cotidianamente.

⁸⁶ Fox (2008) enriquece la discusión acerca de la relación entre transparencia y rendición de cuentas, al argumentar que no hay evidencia empírica que fundamente que se trata de una relación de identidad, de manera que se observan gran cantidad de prácticas gubernamentales supuestamente “transparentes” (publicitadas o de cara al público) que en los hechos esconden más información de aquella que ofrecen, lo que denomina “transparencia opaca o difusa”; en contraste hay prácticas gubernamentales que se vinculan estrechamente a la rendición de cuentas y que incluyen la divulgación activa de la información relativa, lo que llama “transparencia clara”.

El involucramiento depende del interés personal, así como de la relevancia que cada individuo otorgue a la acción política, según cada etapa de su vida y los incentivos o estímulos que le proporcione el contexto social en que se inscribe su quehacer y experiencia; de allí que puede ser motivado por ciertos acontecimientos o circunstancias.

Se pueden establecer, no obstante, ciertas pautas de comportamiento regular respecto a la acción política. Para los fines de este estudio, interesa considerar la acción política en términos de especialización e intensidad que, de acuerdo con los politólogos, constituyen criterios que permiten definir perfiles de los actores políticos individuales, según niveles que, además, pueden ser observados empíricamente. Desde ese punto de vista, se han identificado categorías de ciudadanos, una propuesta se expone con este esquema:

PERFILES DE CIUDADANOS SEGÚN INTENSIDAD Y ESPECIALIZACIÓN DE LA ACCIÓN POLÍTICA



Fuente: elaborado con base en Vallés, 2004: 310, 311

En estudios basados en observación empírica se establece que los individuos, cuando deciden intervenir en política, prefieren limitar sus opciones de selección a alguna de las

modalidades ofrecidas por los repertorios disponibles, con base en una cierta división del trabajo político y una relativa “especialización” de tareas.

De manera que para la mayor parte de los ciudadanos es habitual identificar a los llamados, en lenguaje ordinario, “políticos” o “clase política”, y reconocerlos como quienes hacen de la actividad política su ocupación profesional. Habrá que considerar, sin embargo, que en torno a la actividad política giran otras actividades y oficios que darían pie a considerar en un sentido amplio el campo profesional de la política, en el cual se ubican quienes aspiran a ejercer algún cargo público; funcionarios que ostentan posiciones directivas en la administración pública; agentes de organizaciones de interés (“cabilderos” o “lobbystas”); periodistas especializados en política, entre los relevantes.

La acción política está condicionada por las oportunidades que el sistema político ofrece para la participación; éstas son más variadas en la medida en que la organización del sistema ha dado entrada a la “política de masas” y en que ha cobrado legitimación la plena intervención de los ciudadanos en la conducción de los asuntos políticos, como ocurre en regímenes democráticos. Lo cual no significa, sin embargo, que los ciudadanos hagan igual uso de las oportunidades que se les presentan (Vallés, 2004: 312-313), lo que dependerá de las actitudes asociadas a determinados rasgos del individuo y de la posición que éste ocupa en la estructura social, lo que en conjunto configura cierto perfil de sujeto político. Así, características como el género, la edad, el nivel de escolaridad o la situación ocupacional sirven para predecir, en términos probabilísticos, si el sujeto adopta alguna actitud inclinada a la actividad política o a prescindir de ella.

En ese sentido, la posición personal en el ámbito político se revela como un reflejo de la posición de cada uno en el ámbito social y de la percepción que tiene de sus expectativas de incidir en aquel. Al recibir y ser capaz de manejar más información, al disponer de mayor capacidad de comunicación en todos sus ámbitos de relación, el individuo se siente más seguro en la estructura social y más confiado y dispuesto a adoptar un papel más

activo en la vida política, se desarrolla su sentido de lo que se ha denominado eficacia política personal –“lo que yo hago en política, tiene o puede tener alguna influencia”-, y ese sentido le impulsa a intervenir, por intermitente o parcial que sea su actuación. En cambio, individuos ubicados en grupos subordinados o marginados, en varios campos de las relaciones sociales, menor motivación pueden tener para intervenir, de cara a un “mundo político” que comprenden poco y del que se sienten alejados (Vallés, 2004: 314). Los rasgos personales se combinan con la influencia de otras variables, vinculadas a otras experiencias, entre otras la actividad asociativa y la identificación ideológica.

Ahora bien, no debe perderse de vista que aunque los ciudadanos pueden intervenir en política individualmente o en grupo, la acción política no se refiere a un acto motivado en consideraciones morales del individuo, sino que se dirige a y está motivada por la formulación de intereses colectivos, mediante una intervención en el ámbito público y con intención de incidir en la conducción de gobierno. Desde ese punto de vista, toda acción política, aún cuando se origine en voluntades individuales, implica o lleva a una acción colectiva; puede ejercerse de forma espontánea y esporádica y sin necesidad de establecer ningún acuerdo o estrategia previa con los agentes políticos. Entre todas las posibles, la más regular y frecuente resulta, sin embargo, de la coordinación entre diversas personas, desarrollada por una asociación estable, que comparte objetivos y utiliza recursos y métodos para alcanzarlos (Vallés, 2004: 316).

La acción política puede ajustarse a formas convencionales o no convencionales de participación. Las formas no convencionales son aquellas que, con independencia de su objetivo, son rechazadas por parte de la comunidad, por considerarse modos de actuar que entran en conflicto con los valores dominantes y que, por ello, no se corresponden con las formas legalmente reconocidas; suelen tener lugar al margen de los cauces institucionales y ser emprendidas por quienes no confían, con razón o sin ella, en la eficacia de las formas convencionales; las conductas van desde actos de resistencia pacífica a la autoridad hasta actos de destrucción de bienes públicos materiales o de

agresión hacia otras personas, incluso con violencia física, pasando por ocupar instalaciones públicas, impedir su uso o el libre tránsito de vehículos o personas (Vallés, 2004: 316-322).

Para los fines de este estudio, interesa poner de relieve que las acciones no convencionales, por una parte, suelen estar orientadas racionalmente hacia la consecución de espectacularidad y, en esa medida, de la visibilidad pública y resonancia social que puede otorgar la comunicación mediática, cuya cobertura por tanto se suele buscar afanosamente. Por otra parte, que tales acciones suelen encauzarse y ser consideradas como acciones de protesta, que los gobernantes electos rechazan o toleran en tanto que generen la percepción de que está siendo puesto en entredicho su capacidad, tanto para articular las demandas sociales implicadas, como para atenderlas y, en su caso, dirimir los conflictos de los que derivan o que acarrearán consigo.

Conviene reparar en que no es marginal, como aparece a algunos investigadores, el papel de la intermediación ejercida por la gestión de la visibilidad pública a cargo de los medios de comunicación masiva, que afecta la percepción que los ciudadanos tienen respecto de la participación política, incluidas las formas que conforme al ideario liberal no cabría regular, tales como las manifestaciones de protesta en las plazas públicas, cuyo relieve en términos cuantitativos y cualitativos puede resultar distorsionado, en la medida en que la percepción de ellas se atenga a la difusión mediática.

Las formas no convencionales de participación pueden dar cauce a la manifestación de la inconformidad, incluso latente, aunque ésta no se contenga por entero ni exclusivamente en ellas, en tanto que mecanismo regido por la expectativa de que la presión ejercida puede tener éxito o conseguirá potenciarse para conseguir que los intereses en que están motivadas sean atendidos, si los actos y hechos en que se concretan consiguen atraer hacia sí la cobertura de la difusión mediática. Esa es una razón por la que, de manera creciente, se instala en el imaginario colectivo una pauta cultural por la cual se protesta

recurriendo a acciones estridentes, que provoquen sorpresa, curiosidad o empatía hacia el infortunio, por lo menos entre aquellos ciudadanos en cuya percepción pueda tratarse de una situación o un destino común, aun cuando las situaciones que motivan la protesta no sean consideradas extremas por la mayor parte de las personas.

La cuestión entonces no consistiría en determinar si la protesta política se presenta o no como un asunto que concierna al funcionamiento del gobierno o al desempeño de los titulares, porque de otro modo toda protesta sería consecuencia de un ejercicio de escrutinio ciudadano, o bien éste podría ser equiparado con esa forma de participación, lo cual no es cierto en uno u otro sentido. Lo más relevante para destacar aquí es que la protesta es una acción política que no necesariamente se basa en el ejercicio del escrutinio ciudadano, aunque en cierto modo lo implica, así como que ella puede transcurrir al margen de los partidos, incluso de las oposiciones políticas representadas en el Congreso, y salir del control por parte de éstas, aún cuando la hayan inducido o auspiciado. En este caso, las acciones de protesta pueden ser favorecidas y hasta utilizadas por grupos de interés con poder económico y por los medios de comunicación masiva, éstos en tanto que organizaciones intermediarias entre la sociedad civil y la sociedad política, entre el ámbito privado y el público, como una forma de ejercer por su parte presión sobre los agentes políticos y gubernamentales, con diversos fines.

El escrutinio ciudadano no prejuzga la inconformidad, a la que puede llegarse, sin embargo, como resultado de algún o varios ejercicios de evaluación crítica del gobierno y de los gobernantes electos. Implica acciones que corresponden a las formas convencionales de acción política, aquellas generalmente aceptadas por la comunidad política en que tienen lugar, porque es considerada congruente o adecuada con los valores dominantes y las pautas de comportamiento esperado, tal como por ejemplo discutir sobre política, afiliarse a organizaciones, votar, exigir derechos reconocidos legalmente, manifestar a las autoridades administrativas o gobernantes electos la adhesión o el rechazo a una ley, política pública o decisión gubernamental. En un régimen

político liberal democrático, la acción y la participación política son consideradas adecuadas y aceptables, en la medida en que se ajusten a las pautas configuradas por los principios y valores que aquel instituye. En el Estado democrático orientado hacia el bienestar social tales principios y valores se corresponden, en general, con los derechos políticos y sociales constitucionalmente reconocidos en ese tipo de régimen.

Las clasificaciones más socorridas agrupan las actividades políticas convencionales en cuatro grupos, mismos que corresponden a los cuatro momentos más relevantes del proceso político: a) los procesos electorales; b) la formación de opinión; c) la interlocución entre ciudadanos y autoridades y d) la movilización política organizada (Vallés, 2004: 317)⁸⁷. Aquí interesan, por un lado, aquellas que se dirigen a la formación de opinión, tal como informarse de la política a través de los medios de comunicación masiva; debatir cuestiones políticas con familiares, amigos y compañeros de trabajo; enviar comunicaciones a periódicos, estaciones de radio o televisión expresando opiniones políticas. Por otro lado, las relativas a la interlocución política entre ciudadanos e instituciones y autoridades públicas, tales como el contacto con funcionarios de gobierno y gobernantes electos, las audiencias o entrevistas para plantear ante ellos problemas comunes a un grupo de ciudadanos, o bien peticiones o reclamaciones colectivas a las autoridades, el envío de mensajes de apoyo, rechazo o protesta respecto de su actuación, por cuanto todas ellas conciernen a la vigilancia del gobierno por parte de los ciudadanos.

1.5. Escrutinio ciudadano: práctica política democrática

Una vez situado su origen en el marco del régimen democrático, así como establecida las bases de la relación que guarda con la representación y la participación políticas en ese tipo de régimen, procede especificar el sentido en que el escrutinio ciudadano es una forma de participación y una práctica y elaborar ese concepto aquí propuesto. Consiste en

⁸⁷ Las acciones relativas a movilización política organizada más comunes son: participar en manifestaciones públicas autorizadas; participar en grupos o movimientos para resolver problemas locales; afiliarse a partidos u organizaciones; contribuir económicamente a apoyar vindicaciones políticas (Vallés (2004: 317).

una práctica democrática relativa, específicamente, a la supervisión del desempeño de los gobernantes electos a cargo de los ciudadanos y, en general, a la vigilancia del funcionamiento del gobierno, función a la que ellos concurren, pudiendo incidir de manera directa y periódica mediante el ejercicio del sufragio e indirecta y permanente a través de la opinión que deriva de la evaluación que hagan. Por tanto, supone una conducta orientada políticamente, es decir motivada por valores, reglas e instituciones de ese orden. El sentido de la noción se especifica en que, por una parte, designa una forma de participación política indirecta y mediada, puesto que en la democracia representativa la vigilancia sobre el gobierno corre a cargo directamente de los titulares de la rama legislativa⁸⁸; porque éstos son postulados por los partidos políticos para conseguir el mandato ciudadano y, porque, parte del desempeño del mandato consiste legítimamente en supervisar el funcionamiento del gobierno. Por eso en el marco de ese tipo de participación, la práctica de escrutinio ciudadano depende por entero del ejercicio de los derechos políticos de ciudadanía.

En ese sentido, si bien la acción política que rige esa práctica consiste de una discusión entre ciudadanos acerca de asuntos colectivos, que trasciende el ámbito privado y se orienta hacia la esfera pública, tal acción es diferente de la deliberación pública ciudadana, una forma de participación en que los ciudadanos participan directamente en procesos decisorios⁸⁹, que corresponde a los modelos de democracia participativa y de

⁸⁸ La rendición de cuentas horizontal tiene como fuente de legitimidad, soporte organizativo y funcional, al control ejercido por el Congreso, a su vez sujeto a límites constitucionales o legales, y puede ser definido de manera operativa como “el examen, vigilancia y supervisión del gobierno y los organismos públicos, con inclusión de la ejecución de la política y la legislación” (Unión Interparlamentaria, 2007: 9, citado por Casas, Marván y Puente, 2009: 9).

⁸⁹ Atendiendo tanto a su naturaleza como a los valores y principios normativos que regulan la participación ciudadana, el escrutinio ciudadano tampoco puede ser considerado una forma de participación en la democracia directa, porque la interacción y deliberación previa a la acción común ocurre en pequeños grupos en las sociedades modernas (Sartori, 1989:150-155). El escrutinio se aproxima al referéndum que, junto con el plebiscito, constituyen una forma de consulta a la ciudadanía y suponen el ejercicio directo del poder de decisión mediante el voto, formas recurridas para modificar el derecho (la Constitución o una ley) porque sea requerido ante un conflicto de funcionamiento del Estado (“consulta normativa”), una controversia moral considerada como trascendente o para arbitrar entre poderes (Ejecutivo y Legislativo) en torno a políticas públicas. En la democracia representativa, excepcionalmente se recurre al referéndum. Para revisar la democracia semi-directa, sus formas y mecanismos véase Rendón (2000).

democracia deliberativa, concepciones alternativas para algunos “radicales” y para otros complementarias de la democracia representativa (Held, 2001)⁹⁰.

En tanto que práctica política democrática, por otra parte, el escrutinio ciudadano tiene como contraparte otra con la cual se relaciona: la rendición de cuentas, aunque ésta transcurre a cargo de los gobernantes o autoridades recursivamente⁹¹, y con respecto a la cual, en el marco de la democracia representativa, los ciudadanos dejan de ser sujetos activos y pasan a ser sujetos pasivos, en términos de las acciones para vigilar el ejercicio del poder público. En tal marco, ambas prácticas se vinculan de modo directo con la cuestión de la responsabilidad política, en particular con el principio de transparencia pública (publicidad de la acción e información gubernamental) del actuar institucional de gobierno y, por consiguiente, guardan relación con la cuestión de la gobernabilidad democrática, en términos de legitimación política del ejercicio del poder estatal.

En ese sentido, aquí se argumenta que dicho vínculo es una función inversa, de tal manera que, visto desde un enfoque analítico de agencia, es válido suponer que mientras menor sea la accesibilidad de los ciudadanos a la rendición de cuentas de los agentes políticos, mayor será la responsabilidad que a éstos pueda ser imputada en cualesquier ejercicio de escrutinio ciudadano. Desde ese enfoque, es posible entender la doble mediación política a que está sujeto el control ciudadano sobre el Estado, posible en una democracia representativa. En ella, la autoridad de éste para regular de manera obligatoria la vida de la sociedad deriva de la conformación de la “voluntad general” en la asamblea de los

⁹⁰ En la perspectiva de la democracia participativa, la política es una forma de vida que impide que los ciudadanos permanezcan anclados a sus propios intereses, los capacita para pensar los problemas colectivos en términos del interés público más general y que mediante una deliberación plural e incluyente, asegura eficacia en los mecanismos de intermediación, de tal manera que las decisiones a cargo de las instituciones políticas no sucumban a los intereses particulares de grupos de ciudadanos con poderes de facto (Barber, 1984) y que sea favorecido el autogobierno posible de los ciudadanos, para un análisis comparativo véase Baños (2006) y cfr. Rendón (2003).

⁹¹ Que abarca “todo lo que concierne a los controles y contrapesos para la vigilancia y restricciones del ejercicio del poder” (Schedler, 2004: 9); es, a la vez, un principio o valor, una norma jurídica y una práctica política también en la democracia representativa liberal, basados en la soberanía de la comunidad de ciudadanos y que obligan a las instituciones estatales a informar a los ciudadanos acerca de su funcionamiento y a los gobernantes electos acerca de su desempeño, dejando en legisladores la responsabilidad de vigilar, en nombre de los ciudadanos, ese funcionamiento y desempeño.

representantes políticos, elegidos por el conjunto de los ciudadanos quienes son por tanto los mandantes originales o “el principal”, en tanto que los gobernantes electos pasan a desempeñarse como “fiduciarios” del mandato ciudadano, es decir “agentes”. Éstos delegan en los funcionarios que designan (burocracia) muchas de las funciones del Estado y tareas de gobierno, pero éstos solamente están obligados a responder a aquellos que los designaron⁹². La delegación da lugar a los problemas comunes de agente (gobernantes electos)--principal (ciudadanos), derivados de los amplios márgenes de discrecionalidad a disposición de los organismos ejecutivos y administrativos, ya que no es posible elaborar una legislación que especifique detalladamente todas las acciones de los gobernantes electos bajo todas las contingencias. En consecuencia, las instituciones democráticas tienen pocos mecanismos que permitan a los ciudadanos sancionar directamente las acciones de los burócratas (Pzeworski, 1998: 348, 349).

Conviene entonces sintetizar las premisas⁹³ a partir de las cuales se puede sostener que, en la democracia representativa, el escrutinio ciudadano en tanto que forma de participación política es a la vez una práctica política orientada por la ideología liberal. En tanto que acción y forma de participación, ¿qué especificidad entraña el escrutinio ciudadano? De entre las variadas definiciones postuladas, la participación ciudadana puede ser entendida como el proceso por el cual los sujetos, a título individual o colectivo, desarrollan una acción tendiente a vincular una expectativa o una opinión con los ámbitos público o privado (Toto, 2000: 509)⁹⁴. Es así en razón de que los ciudadanos son sujetos de

⁹² Por su origen y desarrollo histórico, en el Estado moderno, el control en los regímenes democráticos es depositado en la rama legislativa, en razón y en la medida en que esa institución estatal detenta la representación de la pluralidad de la comunidad política soberana y de que las decisiones son adoptadas necesariamente mediante deliberación colegiada. De allí que la mayoría de las constituciones modernas otorguen a la normatividad que regule al Parlamento o Congreso el carácter de endógena, lo que teóricamente se ha justificado con miras a asegurar su autonomía respecto a otros órganos estatales; dicha autonomía concierne a su organización y funcionamiento, lo que impide que otros órganos ejerzan fiscalización sobre su régimen interno en ambos aspectos, tal como explica Punset (2001: 412-415).

⁹³ Desarrolladas en detalle, desde la teoría normativa de la democracia, en los apartados previos.

⁹⁴ En congruencia, puede aceptarse que en la esfera política, esta forma de participar supone una elaboración cognitiva de determinados proyectos y formas de vida, elaboradas a partir de actividades que van desde la discusión de sucesos o la difusión de información hasta el ejercicio de la militancia partidista o de presión social a través de un grupo u organización del que se forme parte, tal como afirma Muñoz

derechos políticos, constituyen en conjunto a la comunidad política y en ella reside originariamente la soberanía de la que emana la autoridad política. Pero esa potestad es delegada, mediante autorización, en los gobernantes electos y ejercida de conformidad con las leyes que ellos elaboran, sin estar circunscritos a los intereses y demandas de los ciudadanos de la circunscripción en que fueron electos, mediante una deliberación que debe ser pública, accesible a todos los ciudadanos. En esta auto-referencialidad está fincada, en último término, la legitimidad política de los gobernantes electos: cada uno es portador del mandato pero del conjunto de ciudadanos y autorizados para hacer las leyes, incluidas las que rigen el ejercicio del mandato.

Ahora bien, en el Estado constitucional de derecho aquellos órganos de gobierno cuyos titulares son electos, de ramas o funciones distintas ejercen una mutua vigilancia entre ellos, lo cual se justifica para que el ejercicio del poder público sea desconcentrado y permita su control político, lo que previene que alguno de los órganos incurra en abusos de autoridad en perjuicio de los ciudadanos⁹⁵. Finalmente, los gobernantes electos deben informar y justificar ante la ciudadanía su actuación y decisiones, al elaborar las leyes y vigilar el funcionamiento de los órganos de gobierno, en tanto que los ciudadanos tienen el derecho político de exigir cuentas del desempeño del mandato, incluido el control.

Por tanto, los ciudadanos pueden ejercer acciones de evaluación crítica acerca de la autoridad y los órganos de gobierno, que éstos pueden tomar en cuenta para conducir la acción gubernamental. Cabe señalar que al atender a los resultados de tal evaluación u opinión, los gobernantes pueden hacerlos públicos y con esa acción política conseguir para sí cierta credibilidad respecto a la pertinencia de su actuación, aunque sea solamente en aquello en lo que concierna al asunto o decisión respecto del cual aquella versa.

(2002:4), quien utiliza la noción “conceptualización social”, para designar lo aquí denomino “elaboración cognitiva” o producción de “formas simbólicas ideológicas”.

⁹⁵ Desde un punto de vista formal, el control del poder político es la facultad que los órganos constituidos tienen de frenar, vigilar y sancionar aquellos actos que pretendan excederse de la propia esfera de competencia legal o de las de otros órganos, según las facultades que determine el orden jurídico. El control se instituye para evitar el ejercicio abusivo de facultades que el orden jurídico concede a los distintos funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones (Huerta, 1998:117).

Puede postularse que esa credibilidad es siempre parcial, relativa y temporal⁹⁶, no obstante constituye un recurso político de orden simbólico muy valorado por los agentes políticos, porque puede ponerse en juego y contribuir al refrendo de la autorización, allí en donde haya reelección consecutiva⁹⁷.

En ese marco puede verse que el escrutinio público está en la base de lo que, desde la teoría política, se considera la vigilancia que los ciudadanos pueden ejercer a partir del sufragio⁹⁸, en tanto que éste consiste en una autorización periódicamente refrendada y en un canal para que los ciudadanos hagan saber sus demandas e intereses a los electos. En ese sentido, el sufragio permite a los ciudadanos ejercer un contrapeso relativo frente a la autonomía de decisión de los titulares del gobierno⁹⁹. Aquí la objeción consiste en que el sufragio puede ser la más efectiva pero no necesariamente la forma más recurrente con que los ciudadanos ejercen control sobre los gobernantes electos. El escrutinio ciudadano permite la vigilancia del gobierno durante el desempeño del cargo. En qué medida esté implicado en la emisión del voto aún es algo que se debate en la investigación. En cambio, es claro que tiene lugar todo el tiempo y en diversas formas, al margen del sufragio, así

⁹⁶ Entendida en términos de reducción de incertidumbre sobre el conocimiento práctico que el sujeto tiene respecto a la identidad, el papel y la acción de otros sujetos o actores sociales, desde su propia interpretación, cuya naturaleza es de segundo orden. Para entender la cuestión de la credibilidad, a partir de la diferenciación social en sociedades altamente complejas, con una perspectiva sistémica como la elaborada por Luhmann, véase Molina y Vedia (s/f) cuya elaboración teórica postula la *autorreferencialidad* de los sistemas político y de la sociedad, lo que permite entender los fenómenos de interpenetración y de acoplamiento estructural entre ellos, no obstante las oposiciones entre los códigos o programas de acción en cada campo, que explica la naturaleza contingente de la credibilidad política.

⁹⁷ En todas las democracias actuales del mundo se establece esa posibilidad en su respectiva constitución o ley electoral, con excepción de México que no admite reelección inmediata. En el siguiente capítulo se trata la instauración de una pauta cultural por la que se otorga valor a la credibilidad y a los sondeos de opinión como instrumento para medir la percepción, opinión y actitud que tienen los ciudadanos respecto a los asuntos públicos y el desempeño los agentes políticos, quienes recurren por ello a estrategias de acción basadas en utilizar los resultados para atacar adversarios e incidir en corrientes de opinión pública.

⁹⁸ Desde la teoría democrática, en su perspectiva teórica centrada en la cuestión de qué debería ser la democracia y en la empirista centrada en cómo funciona (del Águila, 1997: 140).

⁹⁹ Para Pzewski (1991:14-23), el ejercicio universal del sufragio es la característica por excelencia de la democracia contemporánea, al margen de la amplia gama de formas de acción y participación políticas, ya que es mediante el voto que la ciudadanía elige periódicamente a sus autoridades, en un proceso de certidumbre normativa e incertidumbre en cuanto a sus resultados; en virtud de ello, las distintas fuerzas políticas coexistentes pueden constreñirse a la lucha pacífica y la sociedad puede ejercer cierto control de su administración política.

como que encuentra cauces y mecanismos distintos a los provistos y regulados por las instituciones estatales, tal como es el caso por ejemplo de reuniones vecinales no convocadas por autoridad alguna, o bien las manifestaciones públicas de inconformidad, respecto de las cuales no es equivalente, como ya se ha visto¹⁰⁰.

Establecido el sentido en que el escrutinio ciudadano es una forma de participación política, habrá que demostrar el carácter de agencia humana en que se sostiene en tanto que práctica ciudadana democrática, para luego especificar el concepto. Puede aceptarse que expresar una opinión respecto a un asunto de gobierno, como por ejemplo juzgar la actuación de una cierta autoridad administrativa o de un cierto legislador, es una acción política. Cuando ella ocurre en una reunión o en una situación de comunicación, puede llevar a otros, o por lo menos algunos de ellos, a expresar su propia opinión respecto al mismo o similar asunto de gobierno, o bien respecto a la opinión expresada por los otros sujetos participantes. La condición supuesta es que los participantes de la acción política han expresado libremente sus opiniones y dialogado. Se puede admitir también que en una situación tal, es posible que entre los participantes se establezca una confrontación de las opiniones expresadas (que podemos llamar “discusión”) y éstas, o por lo menos alguna de ellas, consistan en una evaluación crítica o juicios de valor acerca de una institución pública o gubernamental o la actuación de una autoridad administrativa o de un cierto legislador o partido político.

Un resultado posible de tal discusión consiste en que los participantes lleguen a compartir juicios de valor u opiniones, de entre los múltiples y variados que hayan expresado, y

¹⁰⁰ En ese sentido, una de las formas más convencionales del escrutinio ciudadano transcurre en aquellas reuniones entre ciudadanos y gobernantes, en las que los primeros evalúan críticamente a los segundos y así se los manifiestan, al discutir un asunto de interés público o colectivo, tal como es el caso en México de las llamadas “consultas ciudadanas” o “consultas populares” y los “foros de debate”; o bien el intercambio de mensajes que se producen entre ellos, propiciados por grupos u organizaciones de ciudadanos que se dirigen a los agentes políticos para manifestar sus opiniones y juicios respecto a un asunto, decisión o conflicto, ya sea mediante cartas, telefonemas, correo electrónico o inserciones pagadas en periódicos, radio o televisión. En cierto sentido podría también ser incluido el “plebiscito”; aunque éste y otros mecanismos de participación política, propios de la democracia directa, son formas marginales en la democracia representativa, y en México aún no están establecidos a nivel nacional, o bien han sido insuficientemente regulados en aquellas entidades federativas en donde están vigentes.

aquellos compartidos pueden referirse a una cierta autoridad, legislador, institución pública o entidad de gobierno. Es posible también que los participantes, o al menos alguno de ellos, tenga la expectativa de que aquellas opiniones compartidas, que versan sobre la actuación o el desempeño de los agentes políticos deban ser conocidas por ellos, indistintamente de que expresen o no la motivación que los llevaría a hacerlo. Si se cumplen esos supuestos y circunstancias entonces puede afirmarse que la interacción comunicativa, generada a partir de una acción política, condujo a un ejercicio de escrutinio ciudadano, a condición de que los participantes, o por lo menos dos de ellos, detentan derechos de ciudadanía. No obstante puede haber escrutinio individual y colectivo y con o sin mediar discusión pública.

La modelización se sostiene aún con la variante de que los participantes no hayan interactuado presencialmente, sino a través de comunicación a distancia. En tal caso, se desprendería que la acción política de escrutinio fue mediada en términos comunicativos, pero no interactivos, por lo cual subsiste la condición de intercambio y discusión. Por otro lado, el escrutinio ciudadano se consuma aún cuando su resultado sea solamente la expectativa de dar a conocer a los agentes políticos, o bien a otros ciudadanos, el resultado de la discusión; en este caso porque su ejercicio se satisface aún cuando los ciudadanos no emprendan esa acción implicada, que es condición de su publicitación, una acción externa al ejercicio, de la cual depende, en último término, que éste adquiera eficacia en términos de responsabilidad. La publicitación del escrutinio es así una pretensión ideal. Eso no invalida el carácter público del escrutinio, dado por el hecho de ser accesible a cualquier ciudadano y concernir la evaluación a asuntos colectivos. En ese sentido, el escrutinio ciudadano es público y cuando no se especifica el medio por el que se otorgue publicidad, puede ser referido con la expresión “escrutinio público”, indistintamente. Finalmente, no dar a conocer los resultados del escrutinio puede ser una

acción habitual entre los ciudadanos, que explicada desde el enfoque de agencia humana permite considerar al escrutinio ciudadano, además, como una práctica social¹⁰¹.

Una razón de esa última consideración es que, en efecto, cabe suponer a los ciudadanos actuando libremente, a partir de sus propios recursos y oportunidades, de manera no solo reflexiva, sino al propio tiempo a partir de su conciencia práctica, en el sentido de Giddens (1987: 63), es decir a partir de suposiciones compartidas acerca de cuál puede ser la utilidad o el beneficio, pero también el costo y la consecuencia de la acción individual y colectiva entrañada en el escrutinio. Así, en ejercicio cada uno de su propia autonomía de decisión y acción, sin condicionamiento alguno que no provenga del propio reconocimiento de sus limitaciones o restricciones, incluidos el tiempo que dedican a la experiencia, la información y el conocimiento respecto del asunto al que concurren, la publicidad que pueda alcanzar el ejercicio y las consecuencias que pueda tener la discusión y las opiniones compartidas, los ciudadanos pueden conformarse con evaluar críticamente a los agentes políticos, sin afanarse en hacerlo saber a ellos por diversos motivos, mismos que pueden compartir discursivamente en la interacción comunicativa, o bien reservarse mutuamente al no ser racionalizados voluntariamente, con independencia de imperativo normativo alguno¹⁰². Adelante se discuten las razones de ese hecho.

¹⁰¹ Tal como señala Jokisch (2002:74), la mayor parte de la naturaleza de lo social de la sociedad se desarrolla en un nivel de “acciones habituales”, que hacen invisibles sus otros tres componentes: la decisión, la comunicación y la intencionalidad, produciendo con ello a la vez los problemas de la “in-comunicabilidad”, de la “in-decisión” y de la “no-intencionalidad”; y que entonces, tal como Habermas ha expuesto con lucidez, que los llamados “sistemas sociales” se generan con base en las acciones sociales no comunicativas.

¹⁰² Desde el enfoque de Giddens sobre la agencia humana, que incorpora los procesos inconscientes a los conscientes como doble fuente de motivación de ésta, así como la distinción entre conciencia práctica y conciencia discursiva como niveles de conocimiento o conciencia de los agentes, puede entenderse que los agentes sociales son competentes casi siempre para dar informes discursivos sobre las intenciones de su actuar, aunque no siempre pueden hacerlo acerca de sus motivos. La motivación tiene una conexión directa con elementos cognoscitivos y emocionales de la personalidad, algunos de los cuales son inaccesibles a la conciencia de los agentes (Giddens, 1982:81). Por razones entiende los principios fundamentados de la acción con los que los agentes se mantienen en contactos, (elementos rutinarios del control reflexivo de su conducta). Por motivos entiende tanto a las necesidades que incitan a la acción, como los intereses o deseos que facilitan la satisfacción de las necesidades (Giddens, 1993:87). La conciencia práctica es la disponibilidad o reserva de conocimiento que implícitamente usa un individuo en su actividad o al interpretar las acciones de otros, aunque raramente articulado para dar cuenta o interpretar eventos producidos por el propio individuo o por otros. Mientras que la conciencia discursiva se pone en juego ante el registro reflexivo de la acción; éste se lleva a cabo teniendo como marco la racionalización de la acción, pero en el ámbito

Puede afirmarse, por consiguiente, que el escrutinio ciudadano es una acción política democrática, por medio de la cual los ciudadanos dialogan, expresan sus opiniones y las confrontan entre sí; dirigida hacia la evaluación crítica respecto a la actuación o el desempeño de gobernantes electos y funcionarios públicos con nivel directivo, o bien de alguna ley, política pública, programa de gobierno, disposición administrativa, institución pública u órgano de gobierno; con la expectativa compartida, entre por lo menos dos de los participantes, de que tales opiniones pudieran ser hechas del conocimiento de tales agentes políticos, o bien de otros ciudadanos que no formaron parte de la interacción comunicativa y a quienes, algunos o todos los participantes, atribuyen interés en evaluar críticamente a las mismas instituciones, agentes políticos y asuntos políticos.

Así definido, por una parte, se puede distinguir entre escrutinio ciudadano en sentido estricto y en sentido amplio. En el primer caso, la expectativa de publicitar su resultado se convierte en una finalidad, para alguno o todos los participantes, y lleva a alguno de ellos a emprender alguna acción para conseguirla. En el segundo caso, la interacción comunicativa en que se sustenta la acción no conduce o desemboca en finalidad alguna¹⁰³; ese es el caso en que el escrutinio se consuma en expresar la opinión

restringido de la conciencia, sea ésta discursiva o no. La racionalización de la acción supone la capacidad de los agentes para dar razón sobre su conducta (para explicar por qué actúan como lo hacen), constituye lo que Giddens llama la comprensión teórica continua que los actores tienen acerca de los fundamentos de su actividad (Giddens, 1995:43), lo cual sin embargo no significa que las razones puedan estar directamente ligadas a normas o convenciones, tal como acierta en señalar Ramírez (2002: 222).

¹⁰³ En este supuesto hay que tener presente las orientaciones de la acción social que, en la explicación sociológica, han sido analizadas en términos de su diferente racionalidad según los condicionamientos y determinaciones que supone las relaciones de los sujetos en los distintos subsistemas del sistema societario general en que se inscriben; las orientaciones formuladas por Weber subsisten: la acción racional; la acción valorativa o referida a valores y la acción emocional, aunque hayan sido reelaboradas por Parsons y luego por Habermas y consideradas de modo distinto por Luhmann, en sus respectivas teorías sistémicas de la diferenciación social, las más influyentes en el pensamiento social contemporáneo. A cada orientación corresponde un tipo de racionalidad y un subsistema del sistema general de la acción social; no obstante que aparezcan interrelacionadas, la especificación de los rasgos distintivos de cada una, a la vez permite conocer el papel de las otras y, por eso, establecer analíticamente las condiciones y los factores para el predominio de alguna en situaciones determinadas, según su función. De manera que, por ejemplo, cuando figura con una función formal, es decir predomina en un entorno objetivo, se la denomina como instrumental, pero en apoyo de la orientación valorativa, entonces figura como acción argumentativa, mientras que la acción racional, complementaria a la acción emocional afectiva, pasar a ser racionalización,

ciudadana. Por otra parte, se entiende que la acción no es individual, que necesariamente es protagonizada por ciudadanos, consiste invariablemente de una evaluación crítica y ésta versa acerca de lo que hacen o dejan de hacer los agentes políticos, o bien de cómo desempeñan la función y tareas correspondientes al cargo público que ocupan, con lo que se implica que toman o participan en la toma de decisiones que afectan y conciernen a los ciudadanos.

Podrían objetarse varios aspectos a la definición propuesta. Primero, que la noción “evaluación crítica” puede ser genérica, incluso ambigua, y a la vez restrictiva en términos de la acción política en que se inscribe. Segundo, que deja fuera otros asuntos públicos, de interés colectivo y para los ciudadanos, acerca de los cuales puede versar. Tercero, que los términos empleados, por un lado para designar al “agente” como objeto y al “ciudadano” como sujeto, implicados en la acción y, por otro lado, “expectativa compartida”, “finalidad” y “atribución”, en tanto que motivaciones o actitudes a cargo del sujeto, puedan resultar imprecisas. Ninguna de las objeciones, sin embargo, se sostiene a la luz de las siguientes consideraciones.

Primero, circunscribir la acción a una evaluación permite delimitarla y diferenciarla de otras acciones políticas posibles; en especial de aquellas que no tienen un referente preciso respecto a un derecho político y a una forma de participación política en un régimen democrático. La acción de gobierno y de sus titulares necesariamente conlleva obligaciones respecto a los ciudadanos y están establecidas en la ley, con independencia de que sean conocidas por todos ellos. Esto último es un problema práctico que, en todo caso, habrá que determinar en los hechos, al momento de analizar el comportamiento. No obstante, eso no invalida que los ciudadanos se puedan involucrar en tareas de evaluación, y no en otro tipo de ellas, al momento de actuar concertadamente o

atributo que adquiere la acción racional según sea ubicada en el esquema general de orientaciones. Para un análisis del tratamiento de la acción social, desde distintas perspectivas teóricas, y cuya virtud es destacar la dimensión volitiva, subjetiva e intencional, véase Castañeda (2002).

interactuar dialógicamente con algún sentido u orientación política, y de cara a las autoridades, tal como por ejemplo un mitin, reunión vecinal informativa o protesta.

La segunda objeción no cabe puesto que se trata precisamente de diferenciar la acción de escrutinio ciudadano, en tanto que forma de participación política en los asuntos de gobierno, a partir de los derechos de los ciudadanos y las obligaciones de los gobernantes electos en cuanto a la vigilancia del mandato que los primeros les otorgan. En ese sentido, los asuntos que conciernen al escrutinio son aquellos directamente vinculados al ejercicio del gobierno y, en general, a los asuntos relativos al Estado vistos desde la sociedad civil.

En cuanto a la tercera objeción, habría que reconocer que tanto para un estudioso o un profesional de la política, como para cualquier ciudadano resulta común entender lo que significa “evaluar” y hacerlo “críticamente”, con independencia de las expresiones léxicas que puedan ser utilizadas para designar o connotar esa conducta. Ella es una manifestación real observable en las personas, cuyo significados han aprendido, en mayor o menor medida, debido y mediante “representaciones sociales” (Adric, 2001), “pautas culturales” (Thompson, 1996 y 1998), el “habitus” (Bourdieu, 1997) o la “conciencia práctica” (Giddens, 1979), indistintamente del campo semántico de que se trate. Es por eso, además, que este hacer específico constituye una práctica social cotidiana, visto a partir del proceso de agencia humana, que supone la racionalización como parte intrínseca de la competencia de los sujetos para el registro rutinario de aspectos sociales del contexto donde se desarrolla la acción¹⁰⁴. Por tanto, la utilización de los términos

¹⁰⁴ En todo lugar y tiempo las personas estamos involucradas en acciones cognitivas de percepción, interpretación y comprensión de nosotros mismos, de los otros y de las circunstancias; tenemos capacidad para, si así nos lo proponemos, distinguir cuando tales acciones consisten en evaluar algo o a alguien, así como para ser conscientes de que lo hacemos y diferenciar ese proceder de otros, con independencia de los vocablos utilizados si forman parte del habla usual cotidiana. El argumento se sustenta en la perspectiva teórica de Giddens, basada en la triada conceptual acción-estructura-poder, desde la cual reelabora la comprensión de los procesos de agencia humana, a partir de la influencia de la fenomenología y la filosofía hermenéutica, concibiendo al ser humano como “un agente” con poder o “capacidad para intervenir en un juego dado de eventos para de alguna manera alterarlos”; al nivel más general según Heidegger “la libertad de actuar de otra manera” (Giddens, 1987: 7). Lo distintivo de la conducta humana es el carácter reflexivo, la capacidad de asignar significado y transformarse a sí mismo, de actuar sobre la propia acción y sobre la estructura social, las reglas y normas institucionales que informan, ordenan y dan forma al comportamiento,

“evaluación” y “crítica” tiene como objetivo, precisamente, especificar que lo designado por la categoría de análisis propuesta, explicita una cierta operación cognitiva (evaluar o juzgar) con una determinada selección de sentido de la misma (críticamente), que se pone en juego con la acción de que se trata. De allí que por cierto sea utilizada esa expresión léxica, “escrutinio ciudadano”, y no otra, tal como podría ser el caso de solicitar, demandar o proponer, o bien hacer trámites o gestiones en nombre y beneficio común de ciudadanos, todas ellas acciones involucradas en la acción política y también dirigidas hacia una autoridad política o gubernamental.

Podría objetarse que el escrutinio ciudadano está implicado, aunque sea de modo difuso, en la acción de protesta, de modo que se confunda con ella. No es así, porque es cierto que la acción política de manifestar públicamente una queja o inconformidad (protesta) respecto a una autoridad o ante ella, incluso de modo estridente o no convencional, puede ser el resultado de un ejercicio de escrutinio ciudadano. Pero de modo inverso, también es cierto que la finalidad que motive a los ciudadanos a la evaluación crítica de una autoridad o institución no tiene que ser, necesariamente, manifestar públicamente una queja o inconformidad, como tampoco incluso necesariamente desembocar en ello.

Esta observación es relevante por varias razones. Es lógico suponer que la evaluación crítica de agentes políticos o de la burocracia, de una institución u órgano de gobierno, tenga lugar en el transcurso de la manifestación pública de una queja o inconformidad (protesta), sin que la evaluación crítica sea, en sí misma, la finalidad de ella. De hecho se supondría que detrás de una protesta subyace habitualmente una evaluación crítica del desempeño de agentes políticos y gubernamentales. Sin embargo, también es posible que la evaluación crítica del funcionamiento institucional o del desempeño de una autoridad no esté motivada ni acompañada por una queja, y que no conduzca necesariamente hacia

en medio de las cuales el sujeto se ubica de manera activa (Giddens, 1979:56). Por tanto la agencia humana debe entenderse como un flujo continuo de conducta y experiencia vivida (no series de actos discretos juntos), aquello que un sujeto hace actualmente con consecuencias visibles, aunque no necesariamente intentadas (Giddens, 1993:77; 1979:55). Eso implica que en todo momento el agente podría haber actuado de otra manera y que el mundo no se constituye de una serie de eventos independientes del individuo.

la manifestación pública de inconformidad o protesta, aún cuando ésta se haya puesto de manifiesto en el transcurrir de esa evaluación crítica. Por tanto, el escrutinio ciudadano tiene un estatuto diferenciado de la acción consistente en presentar públicamente una queja, inconformidad o participar en una protesta, por más que esos modos de acción política puedan parecer concurrentes o mancomunados.

Por otro lado, no debe perderse de vista el hecho de que, desde un punto de vista de acción estratégica, hay costos e incentivos diferenciados en una acción de escrutinio ciudadano y en una acción de queja o protesta y que, por ello, los medios utilizados para emprenderlas sean distintos. Por eso, no es fortuito constatar que, en la vida cotidiana, cuando se trata de encarar a una cierta autoridad mediante una queja o inconformidad, sin protesta pública de por medio, por ejemplo mediante un mensaje escrito, telefónico o electrónico o acudiendo a la oficina en donde despacha, sean pocos los ciudadanos los que se involucran en esa tarea, incluso que ninguno se haga cargo de ella.

Lo expuesto permite deslindar la acción política de escrutinio ciudadano respecto a otras acciones de participación política a cargo de los ciudadanos. A la vez, ayuda a comprender por qué muchas de las acciones de ellos no consisten en escrutinio ciudadano. El hecho de que pueda no haber, de por medio, una evaluación crítica en una protesta, así como que un ejercicio de escrutinio ciudadano no lleve necesariamente a ella, permite hacer énfasis en la distinta naturaleza de una y otra forma de participación política. Puede suponerse, en efecto, que el escrutinio ciudadano sería una condición para motivar y, a la vez, justificar o hacer valer toda presentación de queja o inconformidad de los ciudadanos y, en especial, su expresión pública, incluso bajo una forma estridente o espectacular. Sin embargo la queja, inconformidad o protesta pueden ocurrir sin estar de por medio una discusión racional, informada y argumentada al respecto. Ésta puede no existir, también, en una reunión de ciudadanos, por ejemplo de carácter vecinal o de barrio, en la que se expresen quejas o inconformidades. Lo cual lleva a considerar otro supuesto.

Si bien en ambos casos puede ser encarada una autoridad gubernamental, debido a su actuación o desempeño, y en ambos a partir de opiniones de los ciudadanos, sin embargo mientras que la acción de queja, inconformidad o protesta se satisface en la respuesta inmediata de la autoridad o institución interpelada e impugnada, el escrutinio ciudadano no se agota en la inmediatez de la respuesta, ni siquiera cuando su ejercicio desemboca en esa expectativa o finalidad, porque es una acción política menos específica y más cotidiana, cuya realización no requiere ser justificada a partir de que los participantes padezcan de antemano, desde su propio punto de vista, de una queja, inconformidad o falta de respuesta de la autoridad o institución. En ese sentido las acciones implicadas en el escrutinio están ancladas a la vida cotidiana de la mayor parte de las personas, aún si no se asumen como ciudadanos. En ello reside que pueda ser considerada una práctica y susceptible de aprendizaje. Lo cual se puede explicar atendiendo a la tesis de que el sujeto de la acción se constituye a sí mismo y ante los demás, mediante su actuación discursiva en la interacción social¹⁰⁵. Ese proceso está supeditado a la situación de la interacción social de que se trate, si bien influido por factores personales y contextuales. Desde ese punto de vista, el sujeto de una acción de evaluación crítica puede auto-constituirse en ciudadano, al margen de hallarse en una situación de inconformidad, y en la que no esté de por medio hacer manifiesta una apelación a autoridad o institución alguna. En cambio, es difícil imaginar, desde ese mismo punto de vista, una situación de inconformidad que conduzca a una acción de queja o protesta cuyos participantes puedan prescindir o abstenerse de la apelación a una autoridad o institución impugnada, lo que revelarían las “implicaturas” en el discurso. Por lo que respecta a la utilización de la noción de opinión, ya se ha justificado su sentido político y colectivo, atributos suficientes en esta parte de

¹⁰⁵ Al tener como eje la dimensión comunicativa en que se sostiene la acción y práctica del escrutinio, que transcurre generalmente sobre la base de una interacción, su análisis admite diversas perspectivas y enfoques, tanto desde el interaccionismo simbólico, ya sea centrado en la generación de la acción, siguiendo la línea de conducta que adoptan los actores sociales desde su propia óptica (Blumer, 1998), o bien en la estructura de la interacción, lo que supone describir detalladamente las reglas que, en cierta época y sociedad, controlan las interacciones de la vida cotidiana y hacen a los individuos co-presentes recíprocamente accesibles a la comunicación y, por tanto, ellas constituyen un requisito previo de muchas actividades sociales; la unidad fundamental de la vida pública son las agregaciones casuales, espontáneas, al mezclarse con los demás durante y a causa de las actividades cotidianas (Goffman, 2006, 6ª. reimp.), como también desde el análisis de la conversación como forma de interacción primaria de socialización, desarrollado por Schegloff y Sacks precursores de la etnometodología (Joas, 2001)

este estudio; será especificada en el siguiente capítulo, en términos de los procesos de su producción, circulación y apropiación en la esfera pública la vida social¹⁰⁶.

Las ventajas de la definición propuesta residen en que hace operativa la categoría, lo que permite observar la conducta que designa, sin conculcar rigor teórico conceptual, porque designa una acción política que tiene sustento en los principios de la democracia representativa y en los derechos políticos de ciudadanía, así como porque puede ser analizada como comportamiento político en el marco de las reglas e instituciones políticas y estatales de regímenes democráticos, en congruencia con la teoría normativa, pero a partir del enfoque de agencia humana, tal como se ha argumentado.

1.6. Escrutinio ciudadano en la democracia liberal

A partir de las consideraciones precedentes, puede sostenerse que la participación ciudadana, en tanto que forma de participación política, es decir dirigida a influir en las decisiones de gobierno, tiene cauces diversos, cuya recurrencia dependería en principio del acceso a los recursos y las oportunidades que las reglas e instituciones pongan a disposición de los ciudadanos. Pero su aprovechamiento está condicionado por la respectiva posición y trayectoria que ellos guardan en la estructura de poder, lo que depende en último término de la manera en que tales recursos están distribuidos en cada campo de interacción social. Es evidente que en todos ellos la distribución es desigual produciendo asimetrías tanto en el acceso a los recursos como en el aprovechamiento de las oportunidades, aunque prevalezca la convención cultural e ideológica de igualdad.

Esa tesis no alcanzaría, sin embargo, para explicar por qué los ciudadanos se implican y participan o no en la acción política, sin considerar que las decisiones que toman los

¹⁰⁶ La investigación en comunicación política y opinión pública, por un lado, y a la investigación en psicología social, en especial en la línea cognitiva, por el otro, se han ocupado ampliamente de la opinión y ofrecido sólidos hallazgos, en sus diversos niveles, individual, colectiva y pública.

individuos se rigen por el conocimiento práctico y la experiencia personal¹⁰⁷, anclados y orientados invariablemente por pautas culturales e ideológicas, instituidas mediante procesos de interiorización, socialización y conflicto social dentro de cada contexto espacial y temporal. El comportamiento individual y colectivo no se explica al margen de tales pautas. En el campo político, las reglas y las instituciones se abren paso e instituyen con el ejercicio del poder, que produce formas simbólicas ideológicas asociadas a tales reglas e instituciones, y que circulan y son apropiadas en los diversos campos de la interacción social. Un rasgo distintivo en las sociedades contemporáneas es la escala de la circulación y el acceso de formas simbólicas culturales e ideológicas y de la apropiación que de ellas hacen posible los medios de comunicación masiva, prescindiendo del hecho de compartir el mismo contexto social, espacial o temporal.

En ese sentido, los principios y valores que regulan los procesos políticos democráticos tienen fundamento en el sistema de dominación política imperante, pero no al margen de pugnas entre proyectos políticos y conflictos entre clases sociales, de tradiciones culturales hegemónicas y subversivas, así como de la formación del imaginario político¹⁰⁸ que se desarrolla en cada contexto histórico. De manera que ciertas convenciones culturales son también una fuente que orienta el desarrollo del derecho positivo, que por su parte contribuye al arraigo de la tradición política histórica de la que abreva.

En las sociedades contemporáneas, la tradición política hegemónica es la democracia liberal, que abreva y concilia concepciones contrapuestas e históricamente en pugna¹⁰⁹, a

¹⁰⁷ Involucrando lo que Giddens (1979) llama, en su teoría de la estructuración social, “conocimiento práctico”; Bourdieu (1984, 1997) denomina el “habitus”, en el marco de su teoría de la práctica social; Thompson (1996, 1998) designa como “la doxa”, en su teoría de la comunicación mediática, y desde la psicología social Moscovici define “representaciones sociales” (Abric, 2001).

¹⁰⁸ Que desde una perspectiva hermenéutica y de análisis semiótico, es entendido como todo el conjunto de imágenes, metáforas, intuiciones, deseo, proyecciones, conceptos y enunciados que sirven para interpretar y explicar la vida política, y que abarca todos los procesos de interpretación y organización de la experiencia, formas institucionalizadas o no de la producción y difusión del saber, por lo que su formación entraña un proceso de socialización diversas formaciones discursivas, a partir de las cuales se forman los individuos, los grupos y el conjunto de la sociedad, según la elaboración de Amador (2004: 223 y ss.)

¹⁰⁹ Explicada desde la teoría política como la disputa entre, por un lado, la libertad en sentido negativo, que se opone a un poder sin límites, preferida por quienes ocupan posiciones privilegiadas en la estructura

partir de la dialéctica coexistencia de dos maneras de entender la libertad y la igualdad y que paradójicamente articula dos principios incompatibles: la reivindicación de la autonomía del individuo y la supeditación de todos los individuos al interés común.

En apartados previos se han visto aquellos principios, en lo que se relacionan con la representación y la participación política, y se ha dejado ver ese carácter paradójico, que de manera simplificada resulta de que mientras que en el ideal liberal lo que más cuenta es la independencia de la persona en su esfera íntima y privada, desde el ideal igualitario se aspira a una sociedad compuesta, lo más posible, de individuos semejantes en condiciones y aspiraciones; si bien habría que aclarar que la confrontación de la tradición liberal no es tanto con la democracia igualitaria, sino con la democracia formal, en la medida en que su práctica ha llevado en distintas partes a un exceso de intervencionismo estatal, incompatible con el ideal de injerencia mínima estatal en la esfera de las libertades individuales, según explica Bobbio (1989). Es necesario ahora plantear algunas consideraciones que contribuyen a esclarecer las restricciones y potencialidades del escrutinio ciudadano en la democracia liberal.

Esta tradición política e ideológica es uno de los legados más prodigiosos y, a la vez, más limitativos de la racionalidad humana en las sociedades modernas. Ha sido la solución inacabada al problema del número, pero a la vez ha sometido a las minorías a la tiranía de las mayorías, a partir de asegurar las libertades del individuo pero oponerles los derechos del colectivo que integran. Las libertades de un individuo terminan en donde empiezan las del otro y las de todos se convierten en un derecho inalienable de orden colectivo, con efectos vinculantes para todos y cada uno de los individuos.

Hay que recordar que limitar el poder del Estado es el núcleo de la tradición ideológica liberal, en cualesquier tipo de régimen, incluido el democrático, porque los derechos e intereses del individuo son anteriores a la formación del poder político, de lo que se sigue

social, y por el otro, la libertad en sentido positivo, que se opone a un poder por encima de cualquier control, preferida por quienes ocupan posiciones desfavorables, cuyo contraste ha llevado a una salida negociada, por la que no es posible la primera en regímenes autoritarios y no es posible la segunda en regímenes autocráticos, frente a los cuales liberalismo y democracia se tornan aliados, Bobbio (1989).

que también lo son ante el poder popular o derecho de los ciudadanos a participar, aunque sea indirectamente, en la toma de decisiones. En el núcleo de la tradición ideológica democrática reside la extensión del poder de los ciudadanos para participar en la toma de decisiones, bajo el principio de mayoría, que debe ser orientado hacia la esfera económica para regular las libertades individuales en aras de conseguir fines colectivos.

La cuestión en torno a la cual ambas se confrontan reside en determinar hasta dónde se extienden los poderes del Estado y hasta dónde los derechos de los individuos. No hay que olvidar que la tradición liberal es anterior, en la teoría y en la práctica, en su desarrollo histórico a la tradición democrática, y que desde su origen todos los regímenes democráticos surgen limitados para anular o afectar los derechos de libertad. Aunque ambas descansen en una visión individualista, divergen en el énfasis que cada concepción hace: la liberal en la libertad y la democrática en la igualdad (Bobbio, 1989: 107-109).

Eso explica que en la democracia liberal las libertades del individuo están sujetas a restricciones, en tanto que el orden social que las restringe corre a cargo de quienes puedan imponerse como mayoría, de manera legítima en los órganos gubernamentales representativos. No podría ser de otro modo si se quiere asegurar que la solidaridad y el bienestar común se impongan a los conflictos de intereses particulares para encarar colectivamente las desigualdades sociales, lo que tiene lugar mediante el establecimiento de derechos comunes a todos. La manera en que eso ocurre depende de cada contexto socio-histórico. Aquí el principio de diferenciación, respecto a otros sistemas de dominación, es que la minoría de individuos, para ser restringida, tiene que ser tomada en cuenta por la mayoría de ellos; para serlo legítimamente, ésta última tiene que asegurar el reconocimiento de aquella. Eso implica asegurar la representatividad y expresión de las opiniones de las minorías en la deliberación pública de las decisiones colectivas.

Desde ese punto de vista, puede decirse que la democracia permite integrar aquello (derechos colectivos) que la libertad fragmenta (libertades individuales) y, por consiguiente, la democracia liberal se ha constituido en el arreglo político y cultural que

concilia lo uno con lo otro, aunque invariablemente de modo inestable y contingente, tal como muestra el desarrollo histórico social. Las libertades del individuo son aseguradas por el Estado, que a su vez requiere ser restringido para asegurar esa tutela y configurar la voluntad general, a partir de la cual las libertades individuales no sean conculcadas por el Estado u otros sujetos individuales y colectivos. Es así porque las libertades emanan, en sentido estricto, del ámbito de la sociedad civil, cuyo desarrollo histórico y configuración en cada contexto, es resultado en último término del desarrollo de las relaciones sociales de todo orden y éstas determinan el sistema de dominación política y el tipo de Estado que se establecen, así como sus transformaciones, y no a la inversa.

Siguiendo a Held (1997: 74), el rasgo básico de la democracia liberal es que las decisiones que afectan a la comunidad no las toman sus miembros como un todo, sino un subgrupo de “representantes” elegidos por el “pueblo” para que gobiernen dentro del marco de la ley. Se distingue porque se establecen reglas e instituciones para su funcionamiento, sin las cuales no subsistiría, las cuales en la formulación de Dahl (1989: 221-223) son:

- a) El control constitucional de la política gubernamental y los funcionarios electos;
- b) Establecen mecanismos para designar y destituir pacíficamente a los funcionarios;
- c) Derecho de todos los adultos a votar;
- d) Derecho de presentarse para ocupar los cargos públicos;
- e) Cada ciudadano debe tener el derecho de expresarse libremente, incluyendo la crítica a la conducta del gobierno y al sistema económico;
- f) Deben existir fuentes accesibles de información, independientes del gobierno y del control de un único grupo o cuerpo;
- g) Se deben garantizar el derecho de formar e ingresar en asociaciones independientes, que participen en la vida pública de forma legal y pacífica.

La adopción de estas reglas está en la base de los procesos de transición y consolidación democrática, y la adopción de la mayor parte de ellas en muchos países, durante el siglo XX, hace de la democracia liberal la forma dominante del Estado contemporáneo.

Ahora bien, desde esos rasgos de la democracia liberal se sigue que la participación ciudadana se diferencia de otras formas de participación política de la sociedad civil, de la cual es una forma específica con respecto al Estado. Por consiguiente, la participación ciudadana no se agota en el ejercicio solamente de los derechos políticos. Los ciudadanos pueden, al mismo tiempo en efecto, ejercitar derechos sociales y, entonces, constituirse, por ejemplo, en tanto que trabajadores, asociarse entre sí y ejercitar de manera solidaria y organizada tales derechos y exigir al Estado su intervención, que no puede ser más que de orden político, ante otros ciudadanos, empresarios o dueños de capital económico, en ese ejemplo, lo que supondrá la mediación del Estado en el ámbito de la sociedad económica.

En ese sentido, la sociedad civil, entendida aquí como la configuración de relaciones, redes, interacciones y movimientos sociales, que se desarrollan en oposición y resistencia a los condicionamientos que imponen la dominación política y la dominación económica, constituye el ámbito más amplio y menos restrictivo de la participación política y social, en el que la participación ciudadana encuentra recursos, oportunidades y prácticas para ejercer libertades, reivindicar derechos y contraer obligaciones colectivas.

Conviene establecer, por tanto, que la participación política tiene como sujetos principales a los ciudadanos y al Estado, y como objeto principal a las relaciones que entre ellos se establecen, por lo que corresponde a la conducción del gobierno. Mientras que en la participación social, en sus diversas modalidades, las relaciones se establecen entre sujetos sociales diversos y entre éstos y el Estado, el sistema económico y la sociedad civil. En la democracia liberal la relación entre ciudadanos y Estado es siempre políticamente mediada por la representación, atravesada por un andamiaje de reglas, instituciones y agentes políticos, de diverso tipo y nivel, lo que impone restricciones a la participación ciudadana. Ésta queda confinada, en principio, al ámbito político institucional del Estado, que detenta el ejercicio de la coacción legítima dentro de los márgenes que le imponen los principios y reglas, por las cuales debe asegurar a los ciudadanos la vindicación y defensa de su autonomía y libertades. Por eso, la vigilancia del gobierno no puede

circunscribirse solamente a la rendición de cuentas de los gobernantes electos, a riesgo de que resulte ilegítima para una parte de los ciudadanos que entonces podrían hacer valer su inconformidad y, eventualmente, su desobediencia y protesta, por cauces y a través de mecanismos distintos a los correspondientes al ámbito político institucional del Estado.

Es claro que la cuestión de la participación ciudadana remite a la participación política y, en la democracia representativa, ésta no se entiende al margen de la representación política de los ciudadanos en la conformación y conducción del gobierno. La participación ciudadana queda circunscrita, en varios sentidos, por las tareas delegadas en los gobernantes electos, lo que supedita la vigilancia del gobierno a las leyes e instituciones que éstos deciden por los ciudadanos. Cabría preguntarse en qué sentido la delegación del mandato en los gobernantes electos restringe o potencia el escrutinio ciudadano, en tanto que práctica democrática que sirve a la vigilancia del mandato delegado. Esta cuestión lleva a profundizar en la función de agencia, por cuanto esclarece la mediación política a que dicha práctica queda sujeta en el ámbito político institucional, así como su alcance.

1.7. Mediación política: escrutinio ciudadano y rendición de cuentas

La relación entre los sujetos políticos, en términos de la configuración política de la democracia representativa, puede ser analizada en términos del modelo analítico de agencia¹¹⁰ en el cual, desde una perspectiva neo-institucional y desde el punto de vista de

¹¹⁰ Se trata de un modelo basado en la teoría de la elección social, aplicado desde la perspectiva institucionalista de la teoría política, plausible en varios sentidos para entender la relación entre el funcionamiento institucional, las reglas políticas y el ejercicio de toma de decisiones de cara a la legitimidad de las preferencias de los ciudadanos, en regímenes de democracia representativa. Sin embargo, es distinto del modelo de agencia humana, desde la perspectiva de la teoría social más general y abstracta, en particular respecto de la formulación teórica de Giddens sobre la estructuración social, en la que se considera las consecuencias no intentadas y las condiciones inadvertidas de la acción, mismas que ponen de manifiesto la intersección espacio-temporal de la recursividad de la actividad social. El carácter continuo y repetitivo de las prácticas sociales constituye la conexión entre la agencia y las propiedades estructurales de los sistemas sociales. A diferencia de las teorías funcionalistas y estructuralistas que consideran la estructura social como entidad objetiva externa y meramente restrictiva de los actores sociales, y de aquellas corrientes de la fenomenología y hermenéuticas que ven la sociedad como creación subjetiva deliberada de los seres humanos, sin considerar las consecuencias no intencionales de la acción y que descuidan las

la acción colectiva, los ciudadanos son el sujeto mandante o “principal” y los gobernantes electos o representantes políticos son el sujeto mandado o “agente”, la agencia es el proceso de gestión de lo mandado, aunque la delegación del mandato supone la autonomía de decisión y acción del agente (v. infra prohibición del mandato imperativo). Sin perder de vista que el análisis de la agencia se sitúa en el marco de las instituciones que la constriñen o potencian¹¹¹, así como que tal como lo es el mandato originado mediante las elecciones de los mandatarios, la gestión política del agente ha de ser pública, para ser legítima. Y esa condición, conforme a los principios políticos que la legitiman, aplica durante todo el tiempo en que se desempeñe el mandato político.

Desde la perspectiva teórica institucional, al analizar la calidad de la democracia, Munch (2004) ofrece un enfoque adecuado para entender el modelo, a partir de la asimetría en la relación entre ciudadanos y gobernantes electos, lo que ha sido estudiado en tres diferentes líneas de investigación. Una se enfoca en el impacto de las instituciones sobre la naturaleza universal o particularista de las políticas públicas¹¹². Para los fines de este estudio, interesa aquella otra que se ocupa del problema de la relación entre rendición de cuentas (*accountability*), entendida como la posibilidad de que los votantes puedan identificar y castigar a los gobernantes responsables por las decisiones políticas, y representación, es decir de adoptar políticas públicas que reflejan los intereses de los votantes en general, es decir en el sentido de responsabilidad política (Schedler, 2004:9).

prácticas sociales recursivas y su vínculo con los aspectos institucionales de la organización social, para un análisis de la agencia humana en Giddens, véase Ramírez (2002:213-239).

¹¹¹ Colomer (2004:16) sostiene que las instituciones conforman las estrategias de los actores y en su interacción producen resultados colectivos; las instituciones proveen de información, oportunidades, incentivos y restricciones, tanto a ciudadanos como a líderes para la elección de ciertas estrategias; los resultados se explican sólo por las decisiones estratégicas de los actores.

¹¹² En esta línea se ha probado empíricamente la hipótesis de que mientras las elecciones se centren en candidatos y no en partidos, menos probable será que las políticas públicas sean universales (Carey y Shugart, 1995; Mainwaring, 1999; James, 2001, Cox y McCubbins, 2001; Haggard y McCubbins, 2001; Shugart y Haggard, 2001, citados por Munch, 2004:329).

Un argumento en esta línea es que esa relación se presenta como una transacción o intercambio (“trade off”) generada a partir del diseño de las reglas electorales¹¹³. Interesa más aún la rendición de cuentas vista en términos del modelo de agencia, en especial los análisis que a la vez han puesto de relieve las limitaciones inherentes del voto, como un medio para controlar y responsabilizar a los gobernantes electos, tal como Przeworski (1999) y Stokes (2001). Para estos autores, la rendición de cuentas depende de factores inherentes al funcionamiento de la democracia, mismos que son atribuibles a sus fallas, por ejemplo los agentes tienen ventaja en comparación con los electores, en términos de la información disponible, factor de la mayor relevancia en este estudio. Por esa vía se ha contribuido a reorientar el análisis de la “calidad de la democracia”¹¹⁴.

Interesa destacar que en esa línea de investigación se identifica una segunda relación del tipo “principal”/“agente” que se establece entre gobernantes electos y la burocracia administrativa (gobernantes no electos), porque contribuye a explicar la relación entre ejecutivo y legislativo, en términos del control político que ejercen los legisladores sobre el Presidente y su gabinete. Ese control ha sido analizado como un sistema de pesos y contrapesos, lo que tiene un impacto directo en la rendición de cuentas, al permitir que los diferentes poderes del gobierno puedan monitorearse y sancionarse el uno al otro (“rendición de cuentas horizontal”)¹¹⁵. Esta misma línea de estudio ha identificado, también, un efecto indirecto, ya referido. Precisamente al vigilarse mutuamente, las dos

¹¹³ Persson, (2000) y Tabellini (2003) muestran que las reglas electorales proporcionales son más conducentes hacia políticas públicas universales, de lo que son las reglas de mayoría; véase Stugart y Carey, 1992, Powell, 2000; Persson y Tabellini, 2003, citados por Munch, 2004:329.

¹¹⁴ En la vertiente desarrollada por la teoría de la elección social, cuyos teoremas fundacionales (Arrow, 1951 y 1963; Black, 1958; Gibbard, 1973; Satterthwaite, 1975) postulan la imposibilidad de las instituciones políticas para asegurar resultados eficientes según las preferencias de los ciudadanos, que no hay regla de decisión que no produzca resultados ineficientes y no pueda ser manipulada por los votantes y los líderes políticos. Colomer (2004) los ha puesto en entredicho, retomando, entre otros, los trabajos de Rickert (1983 y 1996) quien incluye la dimensión evaluativa de las alternativas que circulan en el debate público como parte de la estrategia política. En la vertiente del comportamiento electoral individual, la agencia es tratada en términos de acción racional, inspirados en modelos de la microeconomía (vgr. Downs, 1957).

¹¹⁵ En uno de los escasos estudios empíricos aplicados al caso de México, Ugalde (2000) postula que las motivaciones probables de los diputados federales constituyen la variable más importante para explicar la supervisión legislativa en México, caracterizada durante el periodo de 1970 a 1999 por ser escasa e ineficiente, por lo que hace a dos áreas en que tiene lugar: la fiscalización del gasto público y la operación de comisiones legislativas de investigación.

ramas de gobierno se ven impelidas a proporcionar mayor información a los votantes, lo que contribuye a que éstos puedan controlar a los gobernantes electos. En éste caso, el control depende de la mayor o menor información de que dispongan los ciudadanos respecto al funcionamiento del gobierno y la actuación de los gobernantes electos. Otra línea de investigación, derivada de la anterior, ha avanzado aún más en la comprensión de la cuestión. En contraste con la “forma vertical endógena” (control ciudadano sobre los políticos con base en las elecciones), hace énfasis en la rendición de cuentas horizontal (*horizontal accountability*)¹¹⁶, aunque llama la atención en las limitaciones en cuanto al alcance de las instituciones que la ejercen. De ese modo, pone de relieve la inclusión de la ciudadana en el debate público, pero subraya que un requerimiento clave para el ejercicio de ese tipo de rendición de cuentas, es la contraposición de voluntades políticas (Munch, 2004: 331) y, por lo tanto, la exclusión de la posibilidad de colusión entre poderes públicos que supuestamente debieran controlarse mutuamente¹¹⁷.

Desde este enfoque, hay varias formas en las que la ciudadanía puede ejercer el control sobre los agentes políticos entre elecciones, mismas que permiten superar las limitaciones de la rendición de cuentas vertical (implicada en los sufragios), la cual es dependiente, en parte, de las instituciones de rendición de cuentas horizontal, así como, en parte, del ejercicio de la “societaria” (*social accountability*). Al introducir este componente se expande el alcance del análisis, ya que se implican diversas formas de “control social”, tal como el monitoreo continuo y la sanción ocasional de los agentes políticos por parte de los ciudadanos, así como diversas actividades, que van desde las manifestaciones en las

¹¹⁶ O'Donnell (2003: 45) define dos tipos de rendición de cuentas horizontal, a partir de distinguir entre su respectivo alcance en dos situaciones típicas: por una parte, la que llama “de balance”, relativa a la transgresión ilegal de los límites de la autoridad de un órgano estatal sobre otro y que evitaría que el poder de control entre ramas de poder público se concentre en alguna en perjuicio de las otras. Por otra parte, la que llama “asignada”, relativa a la obtención de ventajas ilícitas para sí o terceros en el ejercicio de la función pública, mediante una institución creada ex profeso a la que se delega las funciones de vigilancia, prevención y promoción de la sanción de acciones ilícitas u omisiones de los órganos del Estado.

¹¹⁷ Una explicación de los acuerdos políticos entre ramas de gobierno, mediante el enfoque de agencia y desde la perspectiva del institucionalismo, puede verse en Shepsle (2003:283-316). Cabe señalar que hay quienes consideran que, vistos jurídicamente, los mecanismos establecidos en la Constitución, en México, serían suficientes para impedir el predominio de un órgano sobre otro, por lo que más que reformar el marco jurídico se requiere aplicarlo, véase Huerta (1998).

calles hasta la denuncias de conductas indebidas de los gobernantes, incluso ante los medios de comunicación, cuyos representantes pueden contribuir a desenmascarar corrupción o ineficiencia, pasando por la presentación de quejas ciudadanas ante las instituciones o los medios.

Al margen de que no queda en claro si la rendición de cuentas resuelve la cuestión de la transacción entre ésta y la representación política, este enfoque señala los límites de la primera en tanto centrada exclusivamente en el proceso electoral; asimismo indica que en el debate teórico acerca del control sobre los agentes políticos se requiere reelaborar el concepto de “ciudadanía política”, de tal modo que se expande la noción de los “derechos políticos de los ciudadanos” (un núcleo indiscutible de la teoría democrática), de tal manera que sean incluidos aquellos relativos al proceso de formulación y aprobación de políticas públicas. Este proceso atañe a la relación entre gobernantes electos y ciudadanos, tanto como los derechos asociados al proceso de elegir gobernantes (sufragio), invocados para definir la naturaleza democrática de un régimen político.

Desde ese punto de vista, la rendición de cuentas y el escrutinio ciudadano se vinculan entre sí con la cuestión de la responsabilidad política, de cuyo monitoreo depende la calidad de la democracia, no sólo en términos de la formulación y aprobación de las políticas públicas, sino también de la implantación de las mismas, lo cual comporta la relación entre gobernantes electos y burocracia administrativa del Estado. En este punto la cuestión radica en determinar si el gobierno efectivamente gobierna para los ciudadanos (tal como prescribe la democracia). Al revisar la investigación al respecto, se puede identificar dos perspectivas complementarias entre sí. La normativa dirige la atención al hecho de que el Estado no asegura la vigencia irrestricta de la aplicación y el cumplimiento de la ley (mal llamado “imperio de la ley”)¹¹⁸; tal como afirma uno de sus

¹¹⁸ Lo cual depende de la manera en que se relacionan entre sí diversos factores, relativos tanto a las condiciones, la distribución y el ejercicio del poder político y la asignación de los bienes públicos; las condiciones materiales de vida y oportunidades de bienestar individual y familiar; la movilización de los ciudadanos y de las organizaciones civiles para asegurar derechos sociales y exigir un adecuado desempeño del gobierno, así como de la cultura política imperante, que pueden en conjunto orientar el comportamiento

exponentes (O'Donnell, 2001, 2003), en América Latina hay evidencia de que el ejercicio de los derechos es negociado y la aplicación de la ley favorece a quien tiene poder para hacer exigible su cumplimiento. Desde la perspectiva realista, Pzeworski, Cox y McCubbins (2001) explican que los gobernantes electos enfrentan costos, en términos de la relación “principal”--“agente”, al buscar ejercer el control sobre las burocracias del Estado (quienes aplican las políticas públicas) y, por tanto, se ven limitados a hacerlo.

Aplicado el criterio al caso de México, en las condiciones de distribución del poder en los órganos decisorios, en toda la federación, tales costos pueden incrementarse aún más en la medida en que los gobernantes electos y la burocracia administrativa correspondan al mismo partido político, así como en que los primeros se encuentren constreñidos por la disciplina partidista, o bien por una postura partidista menos intransigente con la manera en que son aplicadas las políticas públicas, o incluso complaciente en el caso de aquellos cuya carrera política depende o recibe apoyo de ciertos dirigentes gubernamentales (burocracia) a cuyo cargo está dicha aplicación¹¹⁹. El mutuo solapamiento entre el poder ejecutivo y el poder legislativo¹²⁰ no es, por cierto, una situación eventual, sobre todo en condiciones de opacidad de las disputas y arreglos entre las élites, de las que no rinden cuentas a los ciudadanos¹²¹. Puede sugerirse que en ello radica una fuente de inhibición

individual o grupal hacia el cumplimiento de la ley y la correcta aplicación de la misma. Al omitir esa consideración es fácil quedarse solamente ante la errónea “formulación políticamente correcta” de la noción “imperio de la ley”, algo que no existe pero que se enuncia con frecuencia en el discurso político, y también en los discursos públicos civiles, tal como ha alertado O'Donnell (2008:93) para quien se trata de interpretaciones de la ley, producidas por personas que tienen papeles institucionalmente asignados y que les permiten decir cuál es el sentido y contenido de la ley a aplicarse.

¹¹⁹ Eso ha llevado a concluir que “en el contexto mexicano no aplica el modelo del fiduciario, en el que el legislador decide según su parecer acerca de lo que más conviene al conjunto de electores, porque si al seguir su propio juicio el representante enfrentara la postura del partido que lo postuló la sanción le resultaría muy onerosa, en razón de que el control parlamentario no es ejercido por los electores sino por los partidos políticos” (Casar, Marván y Puente, 2009:6).

¹²⁰ El control que ejerce el poder legislativo es político, porque se ejerce discrecionalmente y por razones de oportunidad y ventaja en la fuerza de representatividad electoral, no obstante que se basa en razones jurídicas, es decir dentro de los parámetros que la leyes determinan. El derecho no convierte en materialmente jurídico al control sólo porque lo prevé, véase Huerta (1998).

¹²¹ Ese hecho se explica porque aunque al poder público se le impongan restricciones jurídicas, su ejercicio obedece a una racionalidad instrumental y estratégica y tiene lugar fácticamente por medios no circunscritos jurídicamente que permiten evadir las restricciones jurídicas. Ese es el campo de la opacidad del ejercicio del poder político. Desde ese punto de vista debe distinguir control jurídico y control político.

del escrutinio ciudadano y de desconfianza respecto a la actuación de los agentes políticos.

Esta perspectiva permite poner de relieve el problema de estudio aquí tratado, ya que indica algunas de las razones por las cuales, en las democracias representativas, los ciudadanos quedan al margen de la cadena de control sobre los agentes políticos; y por consiguiente supeditados a la mediación política del control que ejerzan los gobernantes electos entre sí (ramas de gobierno ejecutiva y legislativa) y, por tanto, condicionados en cuanto a sus expectativas de incidir en las decisiones sobre lo político-estatal por fuera de las elecciones, las estrategias partidistas y las vicisitudes de las relaciones que se establezcan entre los legisladores federales y los funcionarios del ejecutivo (no electos). En otras palabras, los ciudadanos quedan a expensas del control jerárquico vertical y de la correlación de fuerzas en el ejercicio del control horizontal estatal¹²².

Esta situación es aún más contingente ante escenarios o condiciones en que las oposiciones no tienen la representatividad suficiente para decidir las orientaciones que ha de tomar la fiscalización¹²³ y/o cuando éstas dependen de una coalición partidista mayoritaria en el Congreso, que para conformarse deba incluir al partido del Ejecutivo, tal como ha sido el caso en México desde 1997.

¹²² Es horizontal porque se desarrolla entre instituciones del mismo nivel jerárquico, pero independientes entre sí: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los diferentes ámbitos de gobierno, deben rendirse cuentas entre sí, frente a otras instituciones autónomas, cuya tarea es revisar su comportamiento. En México, la principal institución autónoma es la ASF.

¹²³ De acuerdo con Casas, Marván y Puente (2009), en primera instancia la Cámara de Diputados actúa como agente del electorado con el mandato de exigir cuentas al Presidente; sin embargo, el Congreso se convierte, en una segunda instancia, en el “principal” del Ejecutivo al actuar como supervisor y éste a su vez se torna en el agente del Congreso. En tanto que fiscalizador, el Legislativo cuenta con atribuciones para vigilar y sancionar, sin embargo el Congreso es un “principal” colectivo, numeroso y heterogéneo, que enfrenta problemas de acción colectiva para realizar dicha responsabilidad adecuadamente; ese agente colectivo está integrado por 500 miembros provenientes de diferentes partidos políticos, cada uno representando a electorados y regiones diferentes; la experiencia legislativa, los antecedentes profesionales y la preparación académica de los diputados es muy diversa y sus intereses políticos son múltiples. La cuestión más importante en esta cadena múltiple de vigilancia y rendición de cuentas es ¿quién vigila al vigilante?, porque es posible sospechar que el vigilante de la cadena actúe en beneficio propio y desvirtúe el sistema global de vigilancia.

Entre legisladores federales y burocracia del Estado se establece una interacción a tal grado compleja, que hace muy difícil distinguir entre dos posibles interpretaciones acerca de las limitaciones de la acción del Estado. Por un lado, que las decisiones de los legisladores reflejen los intereses de los ciudadanos, pero cuyos derechos civiles no puedan ser garantizados por incapacidad estatal. Por otro lado, que los legisladores no tengan realmente intención de defender el imperio de la ley, por lo que invocan la falta de capacidad del Estado como un pretexto conveniente para ocultar a la ciudadanía sus intenciones reales (Much, 2004: 333)¹²⁴.

Cabe señalar que, no obstante lo incipiente de la investigación en este terreno, hasta ahora predomina una visión en la que los agentes políticos (legisladores y el titular del ejecutivo) son parte del problema, pero no de la solución. Hay evidencia empírica que así lo hace aparecer. En América Latina, se multiplican los casos de ineficiencia, corrupción e ilegalidad en los que se ven envueltos los agentes políticos y que alcanza gran resonancia pública debido a que los medios de comunicación masiva se ocupan crecientemente del control social, o bien de que agentes políticos en situación de adversarios (que no siempre son los mismos), buscan filtrar informaciones o construir “casos” a partir de acusaciones mutuas para desacreditar la actuación del adversario respectivo.

1.8. Representación y participación política en la democracia liberal

Con relación a la representación política, los presupuestos básicos de la democracia liberal son, por un lado, en que ésta se integra a partir de la distribución de la población representada sobre el territorio (circunscripciones electorales), con independencia de la clase social o de las asociaciones civiles a los que pertenezcan los ciudadanos individuales.

¹²⁴ No obstante, es un hecho que las burocracias estatales encaran resistencias de los gobernantes electos al momento de modificar el *status quo* de políticas públicas o leyes vigentes. En México, por ejemplo, al oponer políticas populistas a la implantación de reformas fiscales que conlleven aumentar impuestos o atavismos ideológicos cuando se trata de hacer eficaces empresas u organismos estatales, en sectores claves del desarrollo, que funcionan con subsidio público y solapan “cotos de poder” a costa de la producción de bienes públicos, tal como ocurrió durante las últimas dos décadas hasta 2008.

Y, por el otro, en que los ciudadanos son los depositarios reales del mandato de gobernar y actúan racionalmente, eligiendo a algunos de entre ellos como representantes y delegando en éstos las decisiones y acciones de gobierno. En el ideario demócrata liberal, el razonamiento humano es superior a las tradiciones y costumbres y, por consiguiente, el ciudadano es capaz de identificar sus propios intereses y de ser consciente de los intereses comunes de la colectividad a la que pertenece, así como de formarse su propia opinión.

Teniendo a la vista tales presupuestos, parecería que éste tipo de régimen hace propicio el escrutinio ciudadano, en la medida en que garantice una representativa formación del mandato, lo que depende de las fórmulas del sistema electoral y del espectro de partidos políticos, para traducir el pluralismo en la asientos y voces en la asamblea legislativa. Pero esa apreciación sería inexacta y parcial. Por un lado, porque la participación política en el sufragio libre, ni siquiera en las poliarquías (en el sentido de Dahl, 1991), agota la autodeterminación del ciudadano (en el sentido de Held, 2001), que como coinciden los estudiosos depende de la conformación generalizada de una identidad ciudadana, que muchos llaman “activa”, lo que a su vez presupone condiciones efectivas para ejercitar los derechos políticos. Éstos definen, en último término, las formas y acciones de participación política. Además habrá que considerar que el escrutinio pone en juego varios de esos derechos, la libertad de expresar la opinión, de reunirse, asociarse y exigir información pública y a los gobernantes electos que justifiquen sus decisiones. El escrutinio ciudadano está asociado a otras prácticas y formas de participación.

Por otro lado, la apreciación en cuestión se sostendría en la medida en que la representación contribuya a la participación. Los legisladores tienen un papel fundamental en ese acoplamiento, no solamente por la vía de introducir mecanismos institucionales (leyes) que les obligaran a atender a la evaluación crítica que hagan los ciudadanos en ciertos procesos decisorios, sino más aún en tanto que agentes que fomenten (aporten recursos) y se impliquen (retroalimenten) en ejercicios de escrutinio en su respectiva circunscripción, lo que repercutiría en el aprendizaje mutuo. El escrutinio ciudadano moviliza el ejercicio activo de varios de los derechos políticos en que se finca esa y otras

prácticas democráticas. Eso no significa que la práctica del escrutinio esté merced exclusivamente de lo que hagan los legisladores y el Congreso, en una u otra dirección. De hecho, tal como en este estudio se verifica, el comportamiento de los ciudadanos en el ejercicio del escrutinio no se explica por factores intervinientes en el ámbito político institucional, sino por otros desde el ámbito público más general de la sociedad civil. En esta parte del estudio, interesa considerar las restricciones que derivan de la relación entre la representación y la participación, en el marco de la democracia liberal.

Cabría volver a la cuestión de cómo se relaciona la representación con la participación en la democracia liberal, pero ahora para especificar la relación entre escrutinio ciudadano y ejercicio del sufragio, en términos de la gobernabilidad democrática y considerando al sujeto principal de estudio, los legisladores federales, que son junto con el Presidente de la República los únicos gobernantes electos o agentes políticos del régimen en México. Si se admite que, haciendo abstracción de funciones particulares, en tanto que método de gobierno, el proceso de funcionamiento democrático consiste, por una parte, de tareas, acciones e interacciones colectivas dirigidas a la formación y renovación del gobierno y, por la otra, aquellas dirigidas a la vigilancia y responsabilidad del ejercicio del gobierno, entonces puede establecerse que, en términos generales, las actividades de participación política se pueden dividir a partir de que estén fundamentadas, motivadas y dirigidas hacia uno u otro proceso político. De modo que el escrutinio ciudadano se distingue del voto ciudadano en que corresponde directamente a tareas de vigilancia, en tanto que la acción de votar a las relativas a renovación del gobierno, no obstante que el mandato se origina en el voto, éste remite, como posibilidad no como necesidad, al escrutinio, ya que al votar los ciudadanos pueden no tener a la vista la evaluación retrospectiva del desempeño de los legisladores, a quienes ni siquiera conozcan como ocurre en México, aunque sin duda alguna opinión tendrán, o de alguna podrán echar mano, respecto a los partidos políticos en competencia, lo cual dependerá de varios factores externos, por ejemplo, campañas electorales centradas en atributos del personaje o del programa de gobierno y la persuasión ejercida para centrarse en unos u otros para evaluar.

Es claro que al votar el ciudadano puede hacer una evaluación retrospectiva del comportamiento de los legisladores en funciones, juzgar al respectivo partido político que en su momento lo postuló y en congruencia decidir si refrenda o retira el apoyo a ese partido. En cambio, con base en la evaluación del desempeño de los legisladores en funciones los ciudadanos pueden manifestar, por sí mismos, a través de otros o junto con otros, incluso en público y en ausencia del legislador la crítica, la inconformidad o el repudio, o bien la conformidad, el consentimiento y el elogio que les merezca su desempeño en el cargo; pueden además hacer propuestas y proyectar si refrendarán o retirarán el apoyo (confianza) brindado al respectivo partido en la siguiente elección.

La evaluación crítica del desempeño gubernamental no es tarea exclusiva de las oposiciones en el Congreso, si bien los ciudadanos pueden confiarla a ellas. Si la participación política está ligada al ejercicio de la ciudadanía, el escrutinio ciudadano también lo está. En la democracia antigua implicaba un ejercicio directo de cada ciudadano, si bien exclusivo en cuanto que reservado para quienes tenían ese estatuto¹²⁵. En la democracia moderna está vinculada a los derechos políticos, aunque la intensidad de la misma es reducida, inversamente proporcional al número de los que pueden ejercitarla, el estatuto de ciudadano es más amplio que en la antigüedad. El escrutinio supone una evaluación y discusión entre pares en el horizonte presente, las cuales constituyen su esencia; en cambio, aquella que puede hacerse o no ante los comicios es retrospectiva y descansan en expectativas, aunque ambas prácticas democráticas supongan disponer de información relevante y suficiente.

De nueva cuenta, el análisis en esta parte se topa con la necesaria confrontación entre la justificación filosófica de la democracia, según cierta vertiente de pensamiento o cierta

¹²⁵ En el contexto de la polis griega, era ciudadano quien en uso de su libertad de lenguaje (*parresía*), igualdad ante la ley (*isonomía*) e igualdad de acceso y palabra en la asamblea (*isegoría*), participaba del gobierno de la ciudad; se trataba de una participación directa del ciudadano en el gobierno de la ciudad. Había no obstante otras formas de actividad indirecta orientadas a ejercer una influencia, tal como la discusión política o las campañas políticas, incluso la conspiración en el mercado, véase Rivero (1997: 208).

ideología, y el funcionamiento real de un régimen político particular, según las instituciones, las reglas y las maneras en que opera el ejercicio del poder. En consecuencia, se hacen necesarias elaboraciones operativas de los conceptos, en el entendido de que las expectativas normativas forman parte de la acción política individual y colectiva, una parte de la realidad que no debe ser omitida en la elaboración conceptual. Los regímenes políticos se diferencian entre sí a partir de la forma en que organizan la representación y la participación políticas. El régimen democrático combina instituciones orientadas a la limitación del poder, de ascendencia republicana, tal como la división de los poderes públicos o, de ascendencia liberal, tal como la protección de los derechos individuales, con instituciones dirigidas a la formación de gobiernos y la elección de los titulares, que tomarán las decisiones colectivas mediante el principio de mayoría. Schumpeter (1975) abstrae la cuestión de quién ostenta nominalmente la soberanía, rasgo del ideal democrático, porque lo que es definitorio de las condiciones prácticas de las elecciones es la “competición por el liderazgo político”, entre quienes detenta poder político y quienes buscan acceder a su ejercicio desde el gobierno; de ahí que afirme que, en las sociedades capitalistas contemporáneas, la democracia no es en los hechos el gobierno del pueblo sino el de las personas autorizadas por éste para gobernar. En las democracias liberales, la cuestión entonces consiste en regular la competición, es decir definir los procedimientos y requisitos a que deba sujetarse. El componente liberal se pone de manifiesto en el papel del sufragio universal libre de coacción, único mecanismo de poder de los gobernados¹²⁶, en la exigencia de equidad y reglas que favorezcan una pluralidad de opciones y aseguren la disponibilidad de información suficiente sobre ellas.

Dahl (1991) contribuye a refinar la comprensión del funcionamiento democrático, incorporando la evaluación del mismo, a partir de establecer al gobierno popular como ideal normativo y reformular el alcance de la competencia política, ante condiciones

¹²⁶ El mejor remedio contra el abuso del poder, bajo cualquier forma (lo cual no significa ni óptimo ni infalible) es la participación directa o indirecta de los ciudadanos, del mayor número, en la formación de las leyes. En este sentido, los derechos políticos son un complemento de los derechos civiles y ejercer el sufragio es la forma eficaz de ejercer el poder político por parte del ciudadano, a condición de que ese ejercicio sea libre de coacción alguna (Bobbio, 1989: 47).

reales de pluralismo y fragmentación del poder, tal como se observa en las sociedades democráticas modernas. La distribución del poder, mediante el mecanismo electoral, no estaría limitada a las elites políticas, estaría condicionada por la coexistencia de varios centros de poder político y las respuestas del sistema político a las preferencias de los ciudadanos que se hacen exigibles a través de las elecciones entre opciones diversas y opuestas entre sí. De ahí que Dahl elabore el concepto de *poliarquía* para designar el orden que funciona con fragmentación del poder, sin constreñirse a la competencia entre élites, debido a la desconcentración y descentralización del poder y a la pluralidad de opciones políticas que pueden responder a las expectativas ciudadanas. La poliarquía se caracteriza por la participación y la oposición, como componentes que hacen efectivo el funcionamiento democrático. Pero para conseguirlo, el sufragio debe hacerse extensivo sin discriminación a toda la población adulta y los ciudadanos han de tener la oportunidad de oponerse al gobierno y cambiarlo mediante las elecciones.

Se revisan estas perspectivas porque, no obstante ser diferentes entre sí, ambas sugieren que la representación política no presupone que el gobierno esta en las manos de los ciudadanos, sino de los gobernantes a quienes ellos autorizan, el control sobre los cuales es relativo. Dado que la autorización es perentoria y cíclica, los gobernantes se ven obligados, de algún modo, a representar las preferencias expresadas por los gobernados. Eso lleva a destacar que la representación política tiene un significado preciso, la autorización mediante el proceso electoral, y otro difuso, el reflejo de la sociedad y de sus aspiraciones. De modo simétrico, la participación tiene una faceta precisa, la emisión del voto, y otra imprecisa, el ejercicio de los derechos políticos como mecanismo para influir sobre el gobierno. La razón es que el proceso democrático tiene como eje la competencia política y de manera secundaria el reflejo en el gobierno de una determinada voluntad política colectiva (Rivero, 1997).

En realidad, la distinción de fondo es una cuestión más compleja, relativa a distinguir entre las materias adjetiva (forma) y sustantiva (contenido) de la democracia, como

procedimiento para integrar el gobierno y como manera de gobernar, cuyo tratamiento por consiguiente conduce a la cuestión de la gobernabilidad democrática, y obligaría a ocuparse de los aspectos del consentimiento y la obediencia, o bien de la inconformidad y la protesta, un área aún oscura que aún provoca confusiones. Es suficiente aquí con tener presente que, vista desde la democracia liberal, la representación política tiene que ver con la legítima composición de los órganos en los que se delega la tarea de gobernar, a partir de procedimientos electorales que reflejen efectivamente el pluralismo político, en tanto que la participación política se relaciona con la exigencia de gobernar adecuadamente, es decir atendiendo o considerando el mandato resultante del pluralismo expresado a partir de las elecciones, aunque tal exigencia no se satisface exclusivamente con las elecciones y requiere, por tanto, la adecuación de otras formas de participación, aún cuando tengan una incidencia indirecta en las tareas de gobierno, incluidas las relativas a la toma de decisiones respecto de las leyes y la vigilancia de la administración pública, primordiales en el trabajo de los legisladores federales.

Se ha señalado que la cuestión a debate no radica en que la democracia asegure alcanzar los resultados esperados por los ciudadanos, mediante la acción del gobierno que se rija por sus principios, confusión que ha llevado a exigir que un régimen democrático sea efectivo para resolver los problemas colectivos, por ejemplo de orden estructural tal como la mejor manera para inducir la redistribución del ingreso entre la población, o bien de orden coyuntural como sobrellevar las cíclicas recesiones económicas o crisis financieras. En esa confusión, al parecer bastante generalizada en países con mayor pobreza y democracia incipiente, algunos encuentran una de las razones del escepticismo, la desconfianza y la apatía política de los ciudadanos, lo que algunos llaman el “desencanto” respecto a la democracia. A diferencia de esta postura habría que decir que el ideal de un gobierno democrático consiste en asegurar que su acción responda a los resultados esperados legítimamente, es decir informados por todos los ciudadanos implicados e interesados, así como formulados por quienes les representan, luego de atender a todas las propuestas y opciones posibles para alcanzarlos.

La deliberación de los representantes abierta y accesible a todos los ciudadanos, así como la provisión de mecanismos para que los ciudadanos puedan hacer llegar su opinión a los representantes, y éstos se aseguren de hacer del conocimiento oportunamente la justificación de los criterios a los cuales atendieron y las decisiones que tomaron respecto a cada asunto al decidir, constituyen mecanismos que conectan la representación con la participación política, que la democracia representativa debe garantizar y a cuya disposición generalizada un gobierno democrático debe proveer.

Pero la adecuación del sistema de reglas electorales y la relación entre gobernantes electos y ciudadanos, siguen sujetas a debate. Actualmente, la cuestión más relevante es cómo hacer para que los primeros representen adecuadamente a los segundos, porque de ello depende en parte la formación de identidad ciudadana, el ejercicio de los derechos de ciudadanía y el alcance de la participación¹²⁷. Varios problemas se contienen entre la regulación de la libertad del legislador y la disciplina y cohesión partidista que asegure efectividad estratégica en las asambleas deliberativas y competitividad electoral (Birch, 1993: 69-70). Aunque es pertinente tener a la vista las diferencias entre regímenes parlamentarios y presidenciales, hay evidencia de que en ambos persisten mecanismos políticos de emplazamiento de la representación política a la representación de intereses y de distorsión de la participación política, como consecuencia de prácticas no democráticas consentidas, tanto por los gobernantes como por los ciudadanos, tal como la relación de tipo clientelar basada en una concepción patrimonialista del ejercicio de las funciones de gobierno, ciertamente no es privativa de países con democracia incipientes, que repercute en cuanto al tipo de identidad ciudadana que se incentiva o alienta.

¹²⁷ Es cierto como afirma Rivero(1997:214) que las divisiones sociales de diverso tipo, desde las de clase hasta las de género, pasando por las debidas a origen étnico, credo religioso u oriundez territorial, intervienen en la conformación de la identidad del individuo; aunque en el campo político ellas son afectadas por intereses en pugna en campos distintos respecto de los cuales los beneficios y costos que resulten de respaldarlos o no y de agruparse en torno a ellos, para hacer exigible su vindicación, pueden supeditar las propias decisiones a la presión ejercida o recibida por determinado grupo u organización, incluso por medios ilícitos como el soborno, la difamación o el chantaje; frente a esos mecanismos está en riesgo permanente la autodeterminación personal para decidir respecto a los asuntos que tales intereses ponen en juego.

La democracia representativa implica intrínsecamente una participación indirecta de los ciudadanos en la vigilancia del gobierno; sus reglas imponen restricciones¹²⁸ en términos de los múltiples modos de comportamiento político posibles. Las disputas en torno a la representación son irresolubles, incluso cuando se debaten en las asambleas legislativas, no se debe a imprecisiones del concepto sino a las aplicaciones que del mismo se hacen en la práctica, que privilegian invariablemente alguno de los sentidos de su significado, en cada contexto histórico y social (Birch, 1993:76-78)¹²⁹. Eso exige investigaciones acerca de las condiciones de efectividad, en las que tiene lugar la aplicación de principios y reglas de la democracia, en el contexto de sociedades en las que se han multiplicado las objeciones y los problemas prácticos de su realización¹³⁰. En esa orientación, este estudio se ocupa de definir el escrutinio público ciudadano, determinar su alcance y limitaciones, así como las condiciones de su ejercicio, en tanto forma de participación y práctica democrática que contribuyen a la vigilancia del desempeño de los legisladores federales, en el contexto de la democracia liberal, aplicado al caso de México.

1.9. Responsabilidad política y representación democrática legítima

De lo visto se desprende que la representación política no excluye, sino que la presupone como condición real de gobernabilidad, a la representación de intereses. Pero ésta no

¹²⁸ El derecho de los ciudadanos para participar en las decisiones públicas puede perderse, impone ciertos requisitos y obligaciones y debe ser ejercido sin hacer uso de violencia o trasgredir la ley.

¹²⁹ Este autor distingue cuatro sentidos: la calidad de representante reside en la autorización otorgada, mediante la elección, para tomar por otro las decisiones que obligan a todos; los otros conciernen al sujeto representante como portador y conducto que manifiesta la voluntad del representado; el sentido sociológico designa una correspondencia entre ciertos rasgos del representante y el representado (género, origen étnico, posición social, costumbres), por lo que se esperaría que la composición de la asamblea refleje la de la sociedad; y la representación de orden simbólico, relativa a la manera en se interpretan convencionalmente ciertos signos o emblemas cotidianos que permiten asociar objetos y sujetos referentes.

¹³⁰ La justificación de la democracia no se satisface con indagar los principios y procedimientos que dan origen al Estado democrático liberal, ni siquiera cuáles podrían ser los más adecuados como ha hecho hasta ahora la teoría normativa; habrá de considerar la dinámica de los diferentes tipos de poder y de su impacto sobre los ordenamientos democráticos; que esclarezca cómo la democracia adoptó la forma de gobierno democrático liberal, hasta convertirse en tautología, las consecuencias de ese fenómeno para los procesos de elaboración de decisiones colectivas y el alcance del Estado sobre los asuntos sociales y económicos en un territorio, así como sus implicaciones para la forma y la eficacia de la democracia, Held (1997: 37 y ss).

puede operar de modo legítimo, en una democracia representativa, sino a condición de ser conciliada y subordinada al interés general. Éste es definido como decisión de la mayoría que, en ese tipo de régimen político, supone la oportunidad de la minoría para expresarse y participar, con igualdad, en la deliberación que de ese modo hace legítima.

No obstante el dilema de legitimidad del gobierno democrático no se circunscribe al problema de gobernabilidad, que deviene de la amenaza latente de que los intereses particulares puedan anteponerse al interés colectivo o general. Los legisladores pueden encarar la amenaza o sucumbir ante ella. Su tarea fundamental es dirimir el conflicto que resulta de intereses particulares en pugna entre sí y entre ellos y el interés general, al tomar las decisiones obligatorias para todos mediante las leyes. Por consiguiente, en el desempeño de esa tarea radica la mayor parte de su responsabilidad política, que en principio es personal y ante la nación como un todo. En los hechos, ella tiene alcance sobre el partido o grupo parlamentario (“bancada”) respectivo, al momento en que la asamblea o sus órganos de apoyo (“comisiones”) deliberan y deciden las leyes, juzgan y reconviene políticamente a otros órganos e instituciones de gobierno decisorios y designan a sus titulares o promueven su remoción. Un criterio para establecer la responsabilidad de los gobernantes electos es evaluar su desempeño en la deliberación y decisión colegiada.

La legitimidad que el régimen democrático pueda conseguir depende, en consecuencia, de esta otra condición, igualmente necesaria, a saber la publicidad de los procesos de discusión y de decisión en los órganos de gobierno y, a la vez, de los intereses en juego o en pugna, de su expresión, consideración y supeditación al interés general, que resulta de las votaciones en el caso del poder legislativo, así como del arreglo o negociación que hizo posible o no su conciliación. Ésta es más contingente, temporal e inestable en una sociedad con mayores desigualdades sociales y en asuntos ante los cuales las posturas son polarizadas, aspectos de cuya dimensión depende la vigencia de la conciliación posible y que inciden, recursivamente, en la lucha entre intereses representados y en la emergencia

de conflictos. Es en virtud de esa publicidad que, en cuanto a su ejercicio, sea otorgada a los intereses particulares y al proceso deliberativo que resolvió subordinarlos, ajustándolos u omitiéndolos, al interés general, que la representación política se legitima, es decir se justifica ante los ciudadanos, como forma democrática de gobierno.

Desde este punto de vista es posible comprender el problema relativo a la responsabilidad política, es decir al deslinde de la representación de la nación en conjunto, por parte de la totalidad de los electos en las elecciones, quienes están autorizados por los ciudadanos para tomar las decisiones por ellos, con independencia de los intereses de grupo social particular alguno, en lo que se residiría el atributo legítimo de las decisiones tomadas. Por tanto, las dos condiciones que la representación política debe reunir para ser legítima en términos del ideal democrático liberal, consisten en: a) la calidad de la representatividad, lo que depende del diseño del sistema electoral y del sistema de partidos políticos para asegurar que las minorías tenga un lugar dentro de la representación nacional; b) la publicidad de la deliberación en la toma de decisiones, para asegurar que las minorías puedan expresarse y ser escuchadas, de manera que los ciudadanos puedan conocer los planteamientos de las oposiciones y políticas y programas públicos alternativos a los que la mayoría o la coalición mayoritaria decidió aprobar en los órganos representativos.

Esto conduce al problema fundamental del escrutinio ciudadano, que se vincula a la cuestión de la discusión pública entre ciudadanos en torno a la evaluación del desempeño y las decisiones que toman los agentes políticos titulares de los órganos e instituciones de poder público. Aunque en este caso, los principios de deliberación de las posturas partidistas y de publicidad de la toma de decisiones en el órgano de decisión colectiva, operan de modo distinto, tal como se ha visto a través de la rendición de cuentas, en razón de que en la democracia representativa no son los ciudadanos quienes deliberan y toman decisiones, sino los gobernantes electos, en un sistema presidencial el Presidente y los legisladores, quienes designan y aprueban respectivamente a los funcionarios públicos.

La publicidad del actuar y del desempeño gubernamental obliga a analizar la cuestión del ámbito público de la sociedad. De ahí que sea necesario en esta parte de la exposición, detenerse en la distinción entre ámbito público y privado. En la historia del pensamiento político, la distinción entre lo público y lo privado ha sido una cuestión fundamental. En la época moderna, ha sido concebida como consecuencia de otra distinción, de orden más general, entre sociedad civil y sociedad política, como resultado de la formación del Estado liberal y su desarrollo hacia el Estado democrático, en las sociedades capitalistas¹³¹. En éstas, ese proceso histórico fue posible por la disolución de relaciones de sujeción personal entre individuos. La vida social se organiza sobre la base de relaciones entre hombres libres que, en el ámbito económico están determinadas por la propiedad privada y la separación entre la producción y la apropiación de bienes materiales y servicios personales; en el ámbito político por la renuncia al ejercicio de la violencia particular y la cesión a una instancia supraindividual que la utiliza para conciliar los conflictos y garantizar las libertades de pensamiento, de expresión, de reunión y de asociación, de los particulares; en el ámbito cultural, por la apertura hacia la supremacía de virtudes seculares y a su libre e individual valoración para atribuir sentido a la vida colectiva. La separación del Estado respecto a la sociedad civil está en la base de la constitución de las sociedades modernas¹³², organizadas como sociedades de clases sociales.

¹³¹ De acuerdo con Bobbio, "el Estado liberal es un supuesto histórico y a la vez jurídico del Estado democrático; ambos son interdependientes en dos formas: la primera, en la línea que va del liberalismo a la democracia, en el sentido de que son necesarias ciertas libertades para el correcto ejercicio del poder democrático; la segunda, es la línea opuesta, la que va de la democracia al liberalismo, en el sentido de que es indispensable el poder democrático para garantizar la existencia y persistencia de las libertades fundamentales. (...) La prueba histórica de esta interdependencia está en el hecho de que el estado liberal y el Estado democrático, cuando caen, caen juntos" (Bobbio, 2003:26, 27).

¹³² En el modelo de Hegel (1821), precursor del concepto de sociedad civil en la era moderna, como parte de su proyecto teórico acerca de la integración social, solamente la "vida ética" permite explorar las cuestiones normativas en el nivel de la "institucionalización de la libertad" (prácticas emergentes) en la sociedad moderna. Es así porque hay identidad total entre voluntad (racional) del sujeto y las leyes e instituciones, por tanto todo enfrentamiento entre voluntad particular y voluntad universal (entre sujeto y objeto, derecho y deber) es irracional; entre ellas se establecen mediaciones que llevan al individuo aislado a formar parte de la comunidad política universal; tales mediaciones se ubican en la sociedad civil, la intersección entre lo particular y lo universal, interés individual y general, ámbito privado y público, razón por la cual la política nace en su seno. Para subsistir, la sociedad civil tiene que tener ante sí al Estado como entidad autónoma; presupuesta como diferencia ante el ámbito privado. En la elaboración del concepto de sociedad

Las relaciones de causalidad entre sociedad civil y sociedad política siguen siendo un dilema y un objeto de debate intelectual. No es éste el lugar para su revisión. No obstante, hay pleno acuerdo, en el pensamiento social contemporáneo, de que ese proceso dio lugar a la separación de la vida privada y la vida pública, como ámbitos de organización de las relaciones sociales en las sociedades modernas. El modelo teórico subsiste y permite entender, entre otras cuestiones, la contradictoria relación entre democracia liberal y democracia representativa, cuya reformulación es decisiva para comprender varios de los problemas que enfrentan los regímenes políticos en las sociedades contemporáneas.

En el análisis del ámbito público y el ámbito privado ha predominado un modelo teórico que las concibe como esferas de acción e interacción social interrelacionadas, no obstante que sus respectivas condiciones y racionalidad de desarrollo sean opuestas entre sí. La relación entre ambas esferas es de mutua implicación, regida por una proporcionalidad y una valoración inversa, es decir una supone a la otra y la expansión y fortaleza de una supone la reducción y debilidad de la otra, y viceversa. Aunque para algunos es un error plantear que sea real, tampoco es útil y es improbable una teoría general de lo público y de lo privado que sea sustantiva y en la realidad actual tal distinción tiende a desaparecer (Geuss, 2001: 106), para otros la distinción es decisiva para determinar el alcance normativo de un sistema político-jurídico, entre ellos Garzón (2003) cuya propuesta esclarece uno de los criterios que se han utilizado para argumentar la distinción entre ámbitos, razón por la que conviene atenderla.

En su modelo, los ámbitos pueden ser definidos y delimitados en términos de opacidad-transparencia, o bien secrecía-publicidad, lo que hace mediante un espectro de gradación en el que uno de los extremos equivale a lo más opaco y el extremo opuesto a lo más

civil, Hegel toma de la tradición *iusnaturalista* y de Kant la definición universal del individuo como poseedor de derechos y agente de conciencia moral; generaliza la distinción entre Estado y sociedad civil, surgida en el contexto de la Ilustración, en términos de la interpenetración entre ellos y, por influencia de la economía política, asigna a la sociedad civil el lugar y el papel de portadora de la civilización material, para un análisis exhaustivo y refinado véase Cohen y Arato (2001:113-150).

transparente, en condiciones de posibilidad (lo que puede ser) y de obligatoriedad (lo que debiera ser), con lo que se inscribe en la perspectiva teórica normativa de la democracia. Así, ante la cuestión de qué pertenece al ámbito público y qué al ámbito privado, la división de la vida social sólo entre esos ámbitos, no ofrece la clave para determinar lo que debe mantenerse en la secrecía y lo que debe ser conocido por todo ciudadano. Es necesario incorporar el reconocimiento de la esfera de la intimidad, como el confinamiento último del individuo, dentro de la esfera más comprensiva de lo privado pero distinta de ella. El método es determinar el campo de denotación de cada uno de los términos, lo íntimo, lo privado y lo público.

El problema es que lo íntimo y lo privado son tratados como coincidentes, pero no lo son. Lo íntimo es el ámbito de los pensamientos de cada ser humano, de lo reprimido, de lo aún no expresado y que quizás nunca lo será, porque no se desea o porque es inexpressable; donde se forman las decisiones y las dudas informulables¹³³; contiene también las acciones que no requieren la intervención de terceros (auto-centradas o fisiológicas), que no les afectan y cuya presencia es indeseable¹³⁴. Así concebido lo íntimo, desde la tradición liberal, escapa a toda valoración moral, si por moral se entiende un conjunto de reglas seculares que gobiernan las relaciones interpersonales, pues en el ámbito moral los malos pensamientos pueden ser objeto de censura. La privacidad es la esfera personal reconocida y un ámbito reservado para las relaciones interpersonales, en donde la participación es el resultado de la libre decisión de cada individuo. En oposición al ámbito íntimo y privado, lo público constituye la esfera de la libre accesibilidad de los comportamientos y decisiones de las personas en sociedad, las cosas que pueden y deben ser vistas por cualquiera.

¹³³ Arent (1959:46) sostiene que ciertas experiencias personales (vgr. dolor físico), son a la vez las más privadas y menos comunicables, a las que no podemos dar una forma para su presentación pública, “nos privan del sentido de realidad en forma tal que parece que no hay ningún puente entre la más radical subjetividad, en la que ya no soy <reconocible>, y el mundo externo.

¹³⁴ Cuando se trata de acciones sin requerir de terceros, pero que son realizadas en público, lo que se censura no es la acción misma, sino su realización en público.

El ámbito de la intimidad es el reducto último de la personalidad del individuo, en donde él es soberano, ejerce plenamente su autonomía personal y decide las formas de su comportamiento social, privado o público. La privacidad es el ámbito donde pueden imperar exclusivamente los deseos y preferencias individuales, condición necesaria para el ejercicio de la libertad individual y punto de partida para la adopción de decisiones colectivas, aunque reservado a ciertas relaciones interpersonales y situaciones de las cuales cada individuo decide libremente formar parte y a quien se hará parte. A diferencia de los correspondientes a la intimidad, los límites de la privacidad dependen en mayor medida del contexto cultural y social. Lo público está caracterizado por la libre accesibilidad de los comportamientos y decisiones de las personas en sociedad; el comportamiento público constituye el objeto de la moral. Cuando ellas desempeñan algún cargo dotado de autoridad político-jurídica, la publicidad de sus actos se convierte en un elemento esencial de todo Estado de derecho, porque en principio solamente aquellas acciones y propósitos que pueden ser expresados abiertamente, resultan legítimos; lo que en parte constituye el principio moderno de publicidad¹³⁵.

Por consiguiente, en el modelo de Garzón (2003), lo íntimo está caracterizado por su total opacidad; la transparencia caracteriza a lo público y entre tales extremos se ubica el ámbito de lo privado, donde impera una transparencia relativa. Confundir la intimidad con la privacidad, o hacerlas equivalentes, impide entender la naturaleza de cada ámbito y la manera en que se relacionan entre sí y con respecto al ámbito público¹³⁶. La cuestión no es tanto si se puede o no acceder al ámbito de la intimidad. La identidad se finca en la

¹³⁵ En la elaboración de Kant, para quien lo público es una categoría trascendental: sin ella no había justicia - que sólo puede ser pensada como públicamente manifiesta-, ni habría tampoco derecho, -que sólo se otorga desde la justicia.

¹³⁶ Para Weinreb (2000), por ejemplo, lo “privado” está constituido por pensamientos, emociones y actitudes no expresados, -que para Garzón constituyen lo íntimo-, y esa vida interior es privada por razones prácticas, aunque desde una perspectiva práctica la privacidad de los pensamientos no expresados es contingente y si se perdiera esa privacidad podría quedar afectada la libertad de la conducta y la responsabilidad individual. Pero se mantendría la autonomía personal, a menos que se perdiera la capacidad de autodeterminación. La protección de la vida interior cae en el terreno de la privacidad informacional.

intimidad y, en ese sentido, aunque pueda ser conocida por otro, por ese hecho no se pierde; tampoco se vulnera el autocontrol sobre ella¹³⁷.

La evaluación de decisiones y acciones políticas, la crítica ejercida sobre un gobernante electo, la expresión de opinión política, la difusión de información sobre un hecho político, son actos y acciones que podrían ocurrir desde el ámbito íntimo, transcurrir en el ámbito privado y desembocar en el ámbito público, en el que su reserva u opacidad se transforma por ese desplazamiento, en tanto que accesibles a alguien más, lo que no significa que su propiedad por ese desplazamiento publicitada o transparentada necesariamente los conviertan en bienes o recursos de apropiación pública moralmente válida o justificada. La distinción entre lo público y lo privado no se sostienen en una diferente naturaleza de pautas morales en juego (Weinreb, 2000), por tanto la propiedad legítima dependerá de la identidad de los sujetos, de la naturaleza del vínculo con otros y del poder que ejercen en cada ámbito.

1.10. Publicidad y legitimidad del poder político en la democracia liberal

De acuerdo con Bobbio (1992), el problema de la publicidad del poder es un problema distinto al de su naturaleza, en tanto que poder diferente al poder de los privados. El poder político es el poder público en el sentido de la gran dicotomía público- privado; incluso cuando no es público, es decir no actúa en público o bien se esconde al público, o bien no se encuentra controlado por la comunidad política (“el público”). El poder político siempre pertenecerá a la esfera o ámbito de “lo público”, pero puede o no ejercerse de manera transparente, abiertamente, públicamente.

En un Estado democrático, para serlo realmente, el poder debe ser un poder público, abierto a los ciudadanos. En ello radica la posibilidad de ejercer algún tipo de control

¹³⁷ En cuanto a los pensamientos, la propiedad tiene una raíz genética inmune a su publicidad: no dejan de ser míos cuando se me obliga a revelarlos o son conocidos; precisamente porque siguen siendo míos se me puede imputar responsabilidad.

sobre él por parte de ellos, al margen de la mediación de los partidos políticos y de la rendición de cuentas entre las ramas del propio poder público entre sí (“horizontal”). En la tradición ideológica liberal, hasta nuestros días, el ciudadano debe tener el derecho a protegerse, o bien a ser protegido, frente a los abusos del poder público. En la democracia representativa, que acoge tal principio, la vigilancia del gobierno por parte de los ciudadanos se realiza a través de los representantes políticos. Esa vigilancia implica que aún los representantes políticos de los ciudadanos (gobernantes electos), y precisamente por serlo, deben ejercer el mandato y la autoridad conferida por la elección, de manera pública o abierta, es decir de tal manera que pueda ser conocida por cualquier ciudadano. En el régimen presidencial, el ejecutivo y el legislativo se vigilan mutuamente.

Allí en donde ese imperativo político es además legal, los ciudadanos podrían objetar su incumplimiento. Pero hay razones políticas, no solo legales, por las cuales los gobernantes electos optan por apegar su actuación a la legalidad y a hacer valer el principio de publicidad de su actuación, consagrado por el Estado constitucional de derecho¹³⁸. En ese sentido, Holmes (2008: 34) ha argumentado que, desde un enfoque de acción estratégica,

Los gobiernos podrían usar las leyes de forma imprevisible, a la manera de un garrote que les sirve para disciplinar a la población que tienen bajo su dominio, y sin embargo tienden a conducirse con apego a la legalidad. La decisión de acatar las leyes obedece menos al temor de una rebelión que a la necesidad de alcanzar las metas específicas que los propios gobernantes se han establecido. Para lograr sus propósitos, los gobernantes requieren de un alto nivel de cooperación voluntaria de parte de ciertos grupos concretos, que poseen habilidades (de tipo militar) y recursos (contribuciones fiscales) específicos.

De acuerdo con ese autor, un sistema legal imparcial y equitativo surge o no, se debilita o fortalece, reduce o amplía sus alcances, en la medida en que cambian los objetivos y prioridades de los gobernantes, según los parámetros en los que ellos basan sus cálculos en el juego político por establecer las leyes y políticas públicas. Con base en esa línea de razonamiento, se explicaría la disposición de los gobernantes para hacer valer, también,

¹³⁸ Para un análisis de la relación entre Estado de derecho y transparencia o principio de publicidad del actuar y del acceso generalizado a la información gubernamental, así como del sentido en que debe examinarse la transparencia formal y material de la transparencia, véase Cossío (2008).

otras normas constitucionales que justifican un gobierno democrático, tales como la libertad de expresión y el fuero del que disfrutaban los gobernantes electos, en especial los legisladores, para ejercerla en el desempeño del cargo. Éstos no pueden ser reconvenidos ni juzgados en nada de lo que digan, norma constitucional que los dota de poder para ejercer el juicio propio, interpelar a los agentes de poder de facto de todo orden y con autodeterminación discutir los asuntos colectivos sujetos a obligado cumplimiento.

Según Holmes, tales prerrogativas son un resultado indirecto del intento de obtener la información de que disponen los ciudadanos experimentados y con conocimientos. Esa información es esencial para gobernar con eficacia, pero no puede ser conseguida recurriendo a medidas represivas. Los gobernantes toleran esas libertades porque reconocen que sustraerse de la crítica los hace vulnerables a ignorar ciertos peligros o a cometer errores irremediables. De ahí que postule que el gobernante se somete sistemáticamente a las restricciones que la legalidad impone a su comportamiento, antes que nada, cuando se da cuenta de los beneficios que obtiene al actuar de ese modo.

Es en ese sentido que el hecho de que los poderes públicos se sustraigan a la publicidad representa una amenaza a los derechos individuales y al régimen democrático. Si bien la autonomía de los ámbitos íntimo y privado respecto de la órbita del poder público está en la base del Estado liberal moderno, los poderes que se crean, y tienden a concentrarse en tales esferas, en especial el económico, actúan en secreto y buscan actuar a espaldas de los ciudadanos, lo cual resulta nocivo en el desarrollo de un ámbito público democrático.

La publicidad es un principio obligatorio y condición para la justicia. La negativa a regular el derecho a la privacidad, coloca a ésta, por una concepción moral, en una condición pre-jurídica, y entonces parte del problema consiste en no distinguir jurídicamente entre privacidad e intimidad. Visto desde la óptica jurídica, lo público produce y necesita el derecho; la privacidad debe estar sujeta a límites y normas y la intimidad no debe admitir regulación alguna; sin publicidad de los actos de autoridad, no hay derecho posible.

Hay una aparente contradicción entre el principio del Estado liberal, por el cual las esferas económica e ideológica, ambas privadas, son autónomas del poder público, y la necesidad de que los poderes privados, sin perjuicio del derecho a actuar en privado, hagan transparente a la sociedad su actuación pública, con relación al poder público. Pero se trata de las dos caras de la moneda: solamente en una sociedad en la que la intimidad está salvaguardada y la privacidad aunque regulada se encuentra protegida, es posible que las libertades puedan ser ejercidas. A la vez, donde existen libertades es posible que funcionen las instituciones democráticas y transparentes, tal como ya se ha argumentado.

Habría que aclarar que no es para la democracia, sino para la democracia liberal que la actuación privada debe quedar a salvo de la publicidad que, al mismo tiempo, es exigible a la acción del Estado, hasta el límite máximo posible (principio de publicidad). Esa exigencia es la forma de ejercer algún control sobre el Estado y, a la vez, es condición para que los ciudadanos puedan protegerse frente a los abusos en que puede incurrirse en el ejercicio del poder estatal. Al final de cuentas, ese reconocimiento constituye la “paradoja de la democracia liberal”, argumentada por Bobbio (1998), que en la sociedad capitalista de masas sólo puede organizarse como representativa, es decir democracia indirecta. Esta es una diferenciación cultural fundamental entre la sociedad de los antiguos y la de los modernos, en la que los ciudadanos están despojados de lazos de sujeción personal entre sí a partir de una racionalidad mística o supra-humana, es decir de una cierta representación social de la libertad secular históricamente construida. En términos ideales, el secreto de lo íntimo y el valor de la privacidad se complementan con la publicidad de lo político, formando lo que Bobbio (2006) llama el “círculo virtuoso democrático”. Pero en los hechos la publicidad a que está sometido el agente político, no se corresponde necesariamente con aquella que requerirían los ciudadanos, para hacer valer sus intereses particulares con cierta legitimidad o validez. Para entender este doble condicionamiento, a que están sujetos el escrutinio ciudadano y la rendición de cuentas, es útil retomar la diferenciación de la determinación de lo público y lo privado como

factor explicativo de las restricciones y oportunidades de la acción y participación política de los ciudadanos, en términos de preferencias para ejercitar aquel o hacer exigible aquella por medio de otros, con tal que ese reclamo se haga menos eludible para los gobernantes electos y más accesible para todos los ciudadanos.

1.11. Dimensión pública del escrutinio ciudadano

Ya se ha visto el mérito de asentar la pertinencia de la diferenciación entre ámbitos público y privado, para entender la participación y las prácticas democráticas de los ciudadanos en el régimen de representación democrática. El modelo propuesto por Garzón (2003) permite reconocer el ámbito de la intimidad, que está implicado en el comportamiento del ciudadano y la imposibilidad de delimitar tales ámbitos de modo exhaustivo, en la democracia liberal, desde la perspectiva de los valores o moral pública.

Ese modelo no da cuenta, sin embargo, acerca de cómo la gradualidad que plantea, en términos de la opacidad y transparencia con que sea eximida y exigible la acción personal, privada y pública, puede ser afectado en función de las trasgresiones que tienen lugar, en mayor o menor medida en cada contexto, por parte de los agentes sociales, al actuar en uno u otro ámbito, en pos de sus intereses y encarando los intereses de otros. Tales trasgresiones dependen, en último término, de convenciones culturales e ideológicas muchas contenidas en tradiciones y movilizadas en el imaginario político de cada contexto histórico y social, mediante representaciones sociales y formas simbólicas y culturales producidas, circuladas e intercambiadas en los ámbitos íntimo, privado y público de acción e interacción entre los individuos y grupos sociales.

Debe tenerse en cuenta, no obstante, que los conceptos que designan cada uno de los tres ámbitos, íntimo, privado y público, no tienen un significado puramente descriptivo (lo que es) sino también prescriptivo (lo que debe ser), debido al hecho de que, como argumenta Garzón (Ibid.), no sólo se pueda sino se deba expandir o reducir el alcance de

cada ámbito; hasta qué punto es posible y/o moralmente legítimo reducir el alcance de cada uno, en detrimento del de los demás, varía según el marco normativo que se acepte. Así consideradas, las relaciones entre ámbitos se definen en términos de posibilidad y necesidad, pero no sólo deóntica, de la que se ocupa Garzón, sino también fáctica, la que interesó en esta investigación.

Una explicación comprehensiva del fenómeno de estudio, es posible sólo desde el marco normativo del Estado social de derecho, democrático-liberal, mediante un enfoque que reconoce el carácter de adscripción normativa con que se designa y tipifica una acción o una actividad como privada o pública, puesto de manifiesto por Sahuer (2000) y Weinreb (2000)¹³⁹. Un análisis de este tipo implica tratar las relaciones entre ámbitos en sus dos direcciones, desde lo íntimo hasta lo público y viceversa.

Los trayectos están definidos, así como marcados mediante sanción moral o jurídica, por mayores o menores restricciones a la intimidad y la privacidad a partir de reglas, con mayor o menor alcance de coacción, que resultan ineludibles¹⁴⁰ y, por tanto aceptadas u obedecidas porque son la única vía para actuar e interrelacionarse con otros, sobreviviendo al conflicto y produciendo bienes en común requeridos por todos. Tales restricciones normativas poseen diferente intensidad, según el tipo de comportamiento que regulen y el respectivo diseño de las normas e instituciones en cierto contexto.

¹³⁹ Según afirma este autor, decir “esto es privado” es a la vez un enunciado fáctico y una prescripción acerca de cómo uno debe comportarse (2000: 27). Según Garzón (op., cit.) desde ese enfoque no se sostiene el argumento de que lo privado es definido por el propio sujeto y que consiste en lo que cada sujeto particular hace que así lo sea, tal como argumenta Castilla (1989: 27), lo que implicaría, a contrario sensu, que el espacio público lo define el propio sujeto y que es público lo que cada cual hace que lo sea, postura ésta que conduciría, en última instancia, a la negación de toda regulación jurídica.

¹⁴⁰ El ámbito de la convivencia pública impone restricciones normativas que son las que están en la base de toda organización social que desee superar la inseguridad que resultaría del intento de hacer valer incontroladamente nuestros deseos y preferencias (Garzón, Ibid), una concepción occidentalista y eurocentrista acerca del control ejercido por el poder político para garantizar la supervivencia frente a la anarquía y destrucción que sería de esperar si cada quien hiciese lo que quisiese, ante una disposición desigual de recursos de poder, materia y simbólico, con diverso alcance de coacción física y psicológica, tarea para la que se justifica la acción del Estado imponiendo la fuerza, concepción presente en la tradición del pensamiento político occidental, aún en particular en la justificación del estado “mínimo” que ha sido vindicada en la ideología liberal.

El desplazamiento de lo público hacia lo íntimo supone pasar de mayores a menores restricciones a la libertad personal; el desplazamiento del ámbito privado hacia el de la intimidad consistirá en la liberación de restricciones a esa libertad, aunque siempre dentro de límites, impuestos en un sentido por la convención normativa del respeto al otro y la renuncia a los propios deseos y preferencias en aras de hacer posible ese respeto y, en otro sentido, por la exigencia democrática de transparencia o eliminación de la secrecía del comportamiento de quienes son dotados y ejercen poder público, es decir de tomar decisiones por otros y que éstas sean obligatorias para toda la comunidad. Así, mientras que la privacidad es el ambiente más propicio o menos peligroso para develar la intimidad; al transitar hacia al ámbito de lo público se intenta llevar consigo el “velo de la intimidad” y el “manto de la privacidad”, lo cual crea situaciones ambiguas y paradójicas (Garzón, 2003).

En la democracia liberal, el ingreso del individuo al ámbito público tiene lugar con cierto disimulo¹⁴¹, tratando de preservar la íntima personalidad y el área de la propia privacidad, aunque buscando que las decisiones públicas tomen en cuenta el propio orden de las preferencias individuales, es decir, que sean expresión de la propia libertad personal. Ese ingreso conlleva sin embargo el peligro de la intromisión de terceros que intentan saltarse el cerco protector de nuestra vida privada y el relativo a la imposición de regulaciones públicas que tiendan a controlar el impulso egoístamente expansivo de la privacidad (Ibid). El comportamiento individual tiene que adecuarse a exigencias sociales, cuya violación puede traer aparejados costos inexistentes en la esfera de lo privado.

En el régimen democrático esa es la razón de ser del Estado: la protección del individuo, aunque con diferente alcance, según el enfoque *individualista* o *comunitarista* y el énfasis en el alcance, mínimo o amplio. Del “Estado mínimo”, según la ideología liberal, se espera la defensa efectiva frente a la inseguridad que resultaría del intento de hacer valer, sin

¹⁴¹ Debe reconocerse sin embargo que, por un lado, no hace falta ser un agente político para buscar notoriedad y, por el otro, hay quienes no tienen interés de trascender.

control alguno, los deseos y las preferencias individuales. Del “Estado social de derecho”, según la ideología democrática, se espera que además de la protección del individuo frente a terceros, asegure la provisión de bienes públicos, aquellos que únicamente se obtienen a través de una reducción de las preferencias privadas. En el primer caso, la piedra de toque de su legitimidad es el derecho a la privacidad.

1.12. Deliberación y discusión pública en otros modelos democráticos

Conviene volver a la cuestión de la discusión entre ciudadanos, otro componente del escrutinio ciudadano que es posible en la democracia representativa, aunque se ha visto que con alcances restringidos; ahora para confrontar las alternativas propuestas, en el debate intelectual, desde el punto de vista de las limitaciones de los partidos políticos para asegurar la libre deliberación entre ciudadanos, con base en su función asociativa.

Se ha visto que la democracia liberal no puede prescindir de los partidos políticos y que el papel que éstos desempeñan en ella es clave para los procesos políticos, tanto por lo que corresponde a la función asociativa que desempeñan al articular los diversos intereses e integrar las demandas en programas de acción, como por lo que hace a la función de representación de los mismos en el cauce de la deliberación pública en los órganos de gobierno, de modo que la toma de decisiones colectivas vinculantes transcurra a partir del principio de mayoría. En tanto que instituciones de la sociedad política, los partidos ejercen una mediación de orden político entre la sociedad civil y el Estado.

Pero esa mediación no tiene un alcance homogéneo ante la pluralidad de visiones políticas y la diversidad de intereses individuales, grupales y de clase en juego, entre otras razones porque los partidos no constituyen la única forma de asociación ni representan a todos los ciudadanos y, más importante aún, porque tampoco constituyen el único cauce para ejercer presión e influencia sobre los órganos de gobierno. En este punto el establecimiento de las reglas del juego político, es decir la regulación del sistema de

representación, del sistema de partidos y del procedimiento decisorio en los órganos de gobierno, cobra supremacía sobre las funciones de asociación y de representación.

Ante una desigual distribución de poder económico y político -y no hay razones ni evidencia histórica para suponer lo contrario-, es de esperar que las diversas formas de asociación y representación de intereses impliquen diferentes limitaciones y alcances, tanto para integrar, dar cauce y hacer valer el pluralismo ideológico-político como para influir e imprimir cierta dirección a la voluntad colectiva, empezando por la definición de los distintos asuntos que deben ser decididos, sus implicaciones y posibles consecuencias. Ese diferencial se manifiesta en un espectro de opinión e influencia cuyos extremos están dados por el hecho de que algunos ciudadanos tendrán voz y otros no, unos serán más eficaces para ejercer influencia y otros se conformarán a la influencia ejercida. Con todo, por consiguiente, la presión sobre y la participación en los partidos políticos resulta fundamental para insertar los intereses en la agenda de gobierno y la opinión ciudadana en la deliberación de los asuntos colectivos a decidir. Los partidos no podrán por su parte integrar, representar y hacer valer adecuadamente los intereses y opiniones de los ciudadanos más que mediante un amplio y plural asociacionismo y una amplia y constante participación por parte de los ciudadanos, anclados al ámbito público de la sociedad civil.

Esa es la razón por la cual, no obstante la vigencia y el arraigo de la tradición liberal democrática, a la par de varias deficiencias estructurales el gobierno democrático presenta problemas en su funcionamiento real, de allí la búsqueda inacabable por adecuar los principios que lo regulan. Una de esas deficiencias es una actuación siempre deficitaria de partidos políticos y legisladores en las maneras idóneas de representar a los ciudadanos, derivada no tanto de agenciar intereses minoritarios (“clivajes”) incompatibles con intereses de mayorías de ciudadanos, sino de anteponer los primeros a los segundos al deliberar los asuntos y de acordar las decisiones por fuera de las asambleas legislativas o con opacidad dentro de ellas. Puede deberse a que no se encuentran formulas legales, pero también a estrategias para atraer a electores de

predisposición inmedatista y volátil, aún por encima de los costos representados por contrariar a otros de convicciones democráticas, cada vez que la dirección que deba darse a la voluntad general les permita esos márgenes de maniobra. El resultado neto de esa contradicción, solo aparentemente insalvable, consiste en la apatía provocada en la mayor parte de los ciudadanos, que entonces terminan por considerar que no hay partido alguno que considere su voz, confronte los intereses enquistados y las desigualdades sociales.

Eso es más notorio e intenso en regímenes de democracia incipiente, en los cuales cobra fuerza el discurso de la participación ciudadana, la emancipación de la sociedad civil y la exigencia de condiciones favorables para la expresión efectiva y la acción colectiva al margen de los partidos políticos. Muchos movimientos sociales de nuevo cuño tienen ese sentido y dirección; han contribuido a la discusión de la participación ciudadana en el control de los gobernantes electos y en la deliberación pública. Eso explica también la reactivación del debate intelectual sobre las vías alternas a la democracia representativa.

Una de ellas es la “democracia participativa”, aunque no surge como una alternativa radical a la democracia liberal, sino que pretende complementarla (Held, 2001). Desde esa perspectiva, la política es una forma de vida que impide que los ciudadanos permanezcan anclados a sus propios intereses, lo cual incapacita para pensar en términos de colectividad; la participación educa al ciudadano, en el sentido de que le enseña a conocer problemas comunes y a pensar en términos del interés público más general, mediante la deliberación colectiva. Los ciudadanos adiestrados en ella pueden ser más capaces de tener propósitos comunes, proclives a unirse, al juicio político y la acción colectiva. Ese es el sustrato primario en la construcción de asociaciones que, desde de la sociedad civil, permiten la democratización de los mecanismos de intermediación entre sociedad e instituciones políticas; éstas son insuficientes para asegurar que las decisiones se alejen de grupos de interés dominantes o se alineen con intereses económicos (Barber, 1984).

De ese modo se favorece el autogobierno posible de los ciudadanos, quienes pueden entonces discernir incluso entre la configuración de una voluntad colectiva de la que forman parte y aquella que es mediada por los partidos políticos, disputada por grupos de interés y de presión, incluso en la arena política de la comunicación mediatizada. Está última trastoca ese autogobierno ante la superioridad con que ella se impone frente a las limitaciones de la participación, por ejemplo en el escrutinio. Aunque la idea de la exigencia de rendición de cuentas está presente, en efecto, en la teoría de la democracia participativa (Pateman, 1970; Macpherson, 1982), su alcance en las condiciones actuales está, sin embargo, constreñido al ámbito local.

En la medida en que sea más reducida la circunscripción política y administrativa de una comunidad, más factible es que los ciudadanos participen en la deliberación pública, en especial si los asuntos y las decisiones conciernen directamente esa circunscripción (barrio, municipio, región). El dilema fundamental y no resuelto desde el impulso de la democracia participativa, en los años setenta y ochenta del siglo pasado, consiste en cómo articular formas de participación y deliberación ciudadana que resultan incompatibles con la democracia representativa. En los años noventa, la teoría política se concentró en las cuestiones relativas a cómo hacer prevalecer la consideración equitativa de los distintos intereses en juego; en las maneras para contrarrestar la dinámica del anclaje de la representación a los intereses particulares y en cómo mejorar la competencia cívica de los ciudadanos y su nivel de participación en las democracias liberales.

En el curso de ese debate se abrió paso la teoría de la “democracia deliberativa” que desarrolla un modelo compatible con la democracia liberal, incorporando las preocupaciones de los teóricos de la democracia participativa no obstante el rechazo que en éstos produjo la búsqueda de esa compatibilidad. En ese modelo teórico se reelaboran las cuestiones relativas a la “ciudadanía virtuosa”, a un espacio público abierto y a una opinión pública incluyente, a partir de los principios de distribución de pesos y contrapesos, del asociacionismo y la participación. En su elaboración más ambiciosa, este

proyecto teórico se propone entender el principio de diferenciación del funcionamiento del modelo democrático liberal, para formular las bases de su reconstitución a partir de las posibilidades discursivas de la deliberación pública plural e incluyente, que deviene de sujetar la participación a condiciones de equidad entre desiguales, para luego postular los requisitos que permitan el ejercicio de los derechos políticos, a partir de la colonización del espacio público por parte de la sociedad civil y el principio de publicidad del ejercicio del poder público y la actuación del Estado, en la sociedad capitalista contemporánea (Habermas, 1998). La premisa básica es que, para ser legítimas, las decisiones políticas de obligado cumplimiento deben pasar por procesos justificativos y deliberativos frente a la opinión pública (Cohen, 1997; Habermas, 2008; Gutmann, 2004).

El concepto de deliberación hace referencia a exigencias de proveer razones públicas que justifiquen las decisiones, de tal modo que para que una decisión sea legítima debe pasar previamente por el debate en el espacio público y en el circuito de la opinión pública, en una sociedad plural que favorece las redes de asociaciones y la expresión de todas las voces. De ese modo se busca superar tanto la lógica del puro interés en el poder, como la “autonomización” del proceso político por parte de las élites de los partidos y las instituciones gubernamentales. Al seguir los debates en el espacio público, los ciudadanos mejoran su competencia cívica y su aprendizaje político y, de ese modo, pueden mejorar las condiciones para el autogobierno (Baños, 2006: 48, 49).

Con lo expuesto hasta aquí se han podido identificar las restricciones, las potencialidades y el alcance del escrutinio ciudadano, en tanto que práctica democrática, que derivan de las que corresponden, a su vez, a la participación política que es posible en el régimen de democracia representativa, en el que la vigilancia del gobierno es delegada en los gobernantes electos y ejercida por éstos mediante el andamiaje institucional de frenos y contrapesos entre ramas de gobierno, la rendición de cuentas y la publicidad o transparencia del funcionamiento gubernamental. Se ha mostrado que las posibilidades de la participación política en general, y del escrutinio en lo particular, están determinadas

por la mediación política que ejercen las instituciones y los gobernantes electos en ese tipo de régimen. Las formulaciones teóricas alternativas resuelven la cuestión por la vía de asegurar la participación directa de los ciudadanos en la deliberación pública, en condiciones de equidad y con requisitos de validez que aseguren que aquella informe debidamente a la toma de decisiones en los órganos de gobierno. Puede concluirse, en esta parte del estudio, que es claro que la explicación a esa paradoja que entraña la democracia liberal no se encuentra solamente con la perspectiva politológica, aún limitada en lo que corresponde a las formulaciones para explicar los dilemas de la participación política, en especial cuando se trata de entender las razones por las cuales los ciudadanos se ven impedidos o inhibidos para hacerse cargo de la vigilancia posible del desempeño de los gobernantes electos, en particular de legisladores, lo cual contribuiría a su vez a entender los problemas relativos a la responsabilidad política, cuyas respuestas parecen estar en el ámbito más amplio de la reconfiguración de la sociedad civil en la democracias liberales contemporáneas en proceso de consolidación.

Tal como se ha visto, la centralidad del componente electivo y la restricción temporal para sancionar la responsabilidad del gobernante electo, en la democracia representativa, pone de relieve la cuestión relativa al escrutinio ciudadano y a la opinión pública y, por consiguiente, al fenómeno de su creciente mediatización en el contexto de los procesos de transición y consolidación democrática. Debe tenerse presente que la democratización de la vida política es un proceso de largo alcance y duración. En México, ha implicado el rechazo y la pérdida de eficacia de formas “corporativas” y mecanismos “clientelares”¹⁴² para organizar y ejercer la mediación política, debido a los cuales se ejerce el control de la

¹⁴² Salmerón (2002: 33) indica la dificultad de compaginar el ideal democrático liberal, que regula la relación entre Estado y ciudadanos en torno a los asuntos públicos, y las prácticas autoritarias con que dicha relación se conduce en el caso de la sociedad mexicana; según han demostrado los antropólogos, se trata de una forma de organización social basada en “una tradición profunda de autoridad personalista, con tendencias corporativas”, que emplea de manera sistemática herramientas de negociación originadas en las relaciones de parentesco y en un orden “corporativizado”, sólidamente arraigada en la cultura política mexicana, que “constituye resistencias que opone la sociedad civil al cambio democrático” y que se relacionan con una manera de participar en los asuntos públicos: tal tradición, por una parte, no coincide con el ideal democrático del liberalismo y, por otra parte, se basa en eslabonamientos entre la sociedad civil y el Estado (enlaces entre diversos actores de la propia sociedad civil) que contravienen los propios principios liberales de participación política individual.

participación ciudadana individual y colectiva. En el discurso político circula este reconocimiento, incluso entre aquellos agentes políticos que han sido protagonistas en el proceso de democratización, aún cuando se han desempeñado como dirigentes de partidos distintos, y en cargos prominentes en la rama ejecutiva y legislativa¹⁴³. La democratización política favorece, en cambio, el resurgimiento de la identidad ciudadana¹⁴⁴ como sujeto de derechos políticos democráticos, así como el de la sociedad civil organizada en pos de acciones colectivas para orientar el funcionamiento de gobierno y el desempeño de sus titulares. Empero en razón de la marginalidad a que se ve reducido el escrutinio ciudadano, los ciudadanos pueden encontrar ámbitos, entornos organizativos y cauces de expresión y discusión de opiniones alternos al político institucional.

Aunque el escrutinio público se potencia como escrutinio público en el seno de la sociedad civil, en ese ámbito la mediación política se ve supeditada a la mediación cultural y es vulnerada debido al proceso de colonización progresiva del ámbito público por parte de la comunicación mediática. Resultaría teórica y empíricamente improcedente tratar de entender las formas de participación sometidas a la mediación que ejerce la representación política, en el contexto de las sociedades contemporáneas, al margen de las transformaciones que ellas han sufrido como resultado de la reconfiguración del ámbito público, las formas de interacción social, de comunicación a distancia y de gestión de la visibilidad pública que la comunicación mediática hace posibles en ese contexto, lo que es analizado en el siguiente capítulo.

¹⁴³ Por ejemplo, Muñoz-Ledo afirma que en Latinoamérica, la organización social y política ha sido primordialmente el presidencialismo, el cual actuó como suplencia de una sociedad civil prácticamente inexistente, de una demografía fragmentada y de una carencia dramática de instituciones eficientes". Sin embargo, las democracias aparecen en el horizonte latinoamericano como panaceas, antes que como verdaderas cajas de Pandora. La sociedad civil latinoamericana, una sociedad oprimida y sometida históricamente, sedienta de libertad, encuentra en la misma democracia su propio riesgo: el no entender que la democracia, más que un régimen de libertades, es un régimen de responsabilidades extendidas, y que la está conduciendo a las tentaciones autoritarias del coro y el recurso político. América Latina vuelve a encontrarse encarcelada". "Frente a los desafíos de gobernabilidad que hoy en día se nos presentan, quizás lo adecuado sea transitar como decía Sartori, en lugar de una disminución de partidos, hacia un bipolarismo, esto es, una asociación y alianza de partidos políticos que permite una alternancia en el poder y la formación de un equilibrio de poderes eficientes" (Muñoz Ledo, 2002: 443).

¹⁴⁴ Para un análisis del desarrollo de las identidades múltiples en el proceso de globalización actual, desde una perspectiva interdisciplinaria, y la discusión del multiculturalismo, véase Bokser (2002).

CAPITULO 2. MEDIATIZACIÓN DE LA POLÍTICA EN REGÍMENES DEMOCRÁTICOS

En el capítulo anterior se argumentó que el escrutinio ciudadano constituye una práctica democrática, relativa a la vigilancia del gobierno por parte de los ciudadanos que, en la democracia representativa, es indirecta y mediada políticamente por los gobernantes electos, cuya actuación debe regirse por el principio de máxima publicidad y, por tanto, deben rendir cuentas de ella para que sea considerada como legítima. Se ofrecieron las razones por las cuales eso no supone una correlación en sentido positivo entre escrutinio ciudadano y rendición de cuentas, es decir el primero no depende de la segunda. En ese tipo de régimen político, el control democrático del poder estatal se establece mediante la distribución del mismo entre ramas de gobierno, en virtud de la cual ellas ejercen contrapesos en las decisiones colectivas fundamentales y una recíproca vigilancia, principio republicano fundamental del Estado constitucional o de Derecho.

Se consideró también que en las sociedades contemporáneas subsiste con vigor la tradición política e ideológica liberal, que asegura la participación política en y con respecto a la representación democrática, a cuya vigilancia contribuye el escrutinio ciudadano; cuando tal tradición es integrada a las normas constitucionales, toda persona tiene derecho a ser protegida frente a los abusos en el ejercicio del poder del Estado¹⁴⁵, por lo que el régimen político debe garantizar, por una parte, la autonomía e intimidad del individuo y, por otra parte, el ejercicio de las libertades fundamentales de éste (opinión, expresión y asociación, entre otras) y de los derechos políticos del ciudadano (elegir gobernantes, postularse para gobernante, disponer de información pública relativa al quehacer gubernamental, entre otros).

Por consiguiente, en principio el cauce político del escrutinio ciudadano está constituido por las instituciones estatales, con cuyos titulares electos los ciudadanos pueden establecer una interlocución directa a partir de la comunicación interpersonal.

¹⁴⁵ El poder tiene al menos dos dimensiones y no hay posibilidad a sustraerse al requerimiento de compatibilizar, por un lado, el principio moderno que define el poder a través de procedimientos discursivos-rationales y, por el otro, el necesario “grado relativo de violencia” que se deriva de su institucionalización, véase la elaboración del argumento en Mestre (1999).

No obstante, una condición para que tenga lugar esa práctica democrática es el principio de publicidad de la acción del Estado (“transparencia gubernamental”), por el que los ciudadanos pueden, por un lado, conocer lo que hacen los gobernantes electos y entonces evaluar críticamente su desempeño, la eficacia de las leyes que aprueban y las políticas públicas que respaldan o rechazan y, por el otro, los ciudadanos pueden dar a conocer sus opiniones y los resultados de la discusión que entre ellos hagan respecto a ambos aspectos. La participación de los ciudadanos y la discusión pública de asuntos colectivos no se agota, sin embargo, en los cauces de las instituciones estatales (Dahl, 1993), ni depende solamente de procedimientos o recursos que ellas pongan a disposición de los ciudadanos; tampoco de la interlocución que hagan posible los gobernantes electos (Peña, 2006; Merino, 2004).

Por consiguiente, corresponde ahora precisar aquí el carácter público del escrutinio y las condiciones en que puede tener lugar, a partir de las condiciones de accesibilidad y publicidad en el seno de la sociedad civil y mediante los cauces y las formas de interacción, asociación y comunicación que en ella son posibles. Eso implica ocuparse de otro tipo de mediación, en este caso de orden cultural, centrándose en las repercusiones que ejerce en cuanto a la práctica del escrutinio ciudadano. Por eso se especifica la comunicación mediática y las maneras en que interviene en la configuración del ámbito público¹⁴⁶, penetrando todo cauce y ámbito de la sociedad, lo que permite entender las maneras en que afecta las interacciones sociales y procesos comunicativos, debido tanto a la visibilidad y resonancia pública como al intercambio simbólico, con alcance en la movilización de la opinión pública en diversos planos.

Por esa razón es necesario ocuparse de los procesos de mediación cultural y de “mediatización de la política”, en aquello que corresponde a la apropiación simbólica de prácticas políticas democráticas y la reelaboración simbólica que de ellas hacen los medios de comunicación masiva a través de su difusión, lo que como se verá en el caso del escrutinio ciudadano conduce al desarrollo del escrutinio público de naturaleza “mediática”, un subterfugio cultural que suplanta a aquel y que comporta graves

¹⁴⁶ Como se verá, la esfera pública en las sociedades democráticas es una categoría normativa convertida en pauta política y convención simbólica, sin las cuales ellas no podrían funcionar.

consecuencias en la relación entre ciudadanos y gobernantes electos, en términos de participación y representación política, puesto que está a disposición de muchos más ciudadanos que aquellos que ejercitan el escrutinio ciudadano o se involucran o implican en cualquier forma de participación y acción política democráticas. En primer término se sitúa al escrutinio ciudadano en el más vasto campo de la sociedad civil y luego se argumenta el carácter de indeterminación de ésta, siguiendo la elaboración teórica de Cohen y Arato (2001) y se especifica la configuración del ámbito público, lo que permite entender los márgenes de movilidad de los ciudadanos dentro del mismo, aunque expuestos, a partir de esa identidad compartida, al ineludible cauce de la comunicación mediática, en el cual el escrutinio público queda a expensas del proceso de mediatización de la política y sus efectos; por eso se describen las peculiaridades de aquella, las formas de interacción social que instituye y la circulación e intercambio de la producción simbólica cultural que hace posible, siguiendo la elaboración teórica de Thompson (1998) y otros; finalmente, se analiza el papel de los medios de comunicación masiva, en tanto que organizaciones y agentes de intermediación entre el Estado, la economía de mercado y la sociedad civil, por lo que se refiere a la gestión de la comunicación pública; en ese marco puede entenderse el escrutinio público “mediático” al que están sujetos los gobernantes electos.

2.1. Escrutinio ciudadano en el horizonte más amplio de la sociedad civil

Se ha considerado el primer término del modelo analítico, relativo a los factores institucionales que, en regímenes con democracia representativa y tradición ideológica liberal, dan lugar y explican el escrutinio ciudadano en tanto que forma de participación y práctica política, así como la rendición de cuentas por parte de gobernantes electos, lo que en conjunto contribuye a la gobernabilidad democrática. En ese marco se pueden aplicar las consideraciones analíticas al caso de México en el contexto actual. Habría que tratar ahora el segundo componente del modelo, relativo a los factores contextuales que explican las distorsiones y, sin embargo, las potencialidades que experimenta el escrutinio, en el ámbito del ejercicio de las libertades y de las prácticas sociales, para esclarecer la influencia que la comunicación mediática ejerce en ella. Quedó establecido que la legitimidad política de la

participación ciudadana deviene, en sentido estricto, de las reglas e instituciones políticas democráticas, los cauces y mecanismos que éstas ponen a disposición de los ciudadanos, en términos de igualdad¹⁴⁷, para vigilar al gobierno. Pero la legitimidad¹⁴⁸ es objeto y resultado, en los hechos, de las disputas sociales que tienen lugar en los diversos ámbitos de la vida social, incluido el cultural o simbólico.

En la democracia liberal representativa, sin embargo, la configuración de las relaciones entre los sujetos, en términos de la conducción del gobierno, supone que los gobernantes y representantes políticos sometan su actuación al principio de publicidad, de tal modo que aparezca y sea accesible a todos los ciudadanos (“transparencia” de la acción de gobierno), así como al principio de rendición de cuentas (informar y justificar esa acción), para que los ciudadanos puedan juzgar el desempeño de aquellos agentes políticos (escrutinio público), a quienes otorgan la autorización de gobernar y tomar las decisiones colectivas que obligan a todos.

Ya se ha asentado que las libertades y los derechos políticos de los ciudadanos constituyen la base, y su ejercicio la fuente, de la legitimidad del régimen político, puesto que el consentimiento político depende de que ellos puedan efectivamente, en todo momento, actuar, expresarse, reunirse y agruparse, tanto en el ámbito de la sociedad política como en el de la sociedad económica y de la sociedad civil. Eso supone que los individuos en tanto que ciudadanos pueden moverse y situarse de cara a los agentes políticos, desde diversos ámbitos de relación e interacción social, fuera del ámbito político institucional que a éstos les ata. En el ámbito público de la sociedad civil, es en ejercicio de todas las libertades y de los derechos establecidos (políticos y sociales) que las personas despliegan todas sus capacidades, decisiones y acciones y, por tanto, pueden encontrar oportunidades y recursos que aquellos

¹⁴⁷ Sin discriminación alguna y con los mismos derechos y obligaciones entre ellos en tanto que miembros de la comunidad política que juntos conforman; de ahí no se sigue que se hallen en condiciones iguales, porque los códigos de derecho operan sobre la base del reconocimiento de la desigualdad social, imposible negar en los hechos; las únicas restricciones que prevalecen atañen a edad, salud mental, suspensión de derechos en el caso de presos y extranjeros no nacionalizados.

¹⁴⁸ Entendida como consentimiento en el orden establecido relativo a mandar y obedecer, radica en la convicción de obediencia por parte de los gobernados, ya sea para evitar consecuencias negativas de incumplimiento (aspecto moral) o temor a la sanción asociada al desacato (aspecto legal); contiene un componente formal relativo a la realización de elecciones y la competencia de los órganos decisorios, y otro sustancial, vinculado con valores constitucionales y la real pretensión de lograrlos (Ventura, 2004).

ámbitos (Estado y economía de mercado) no ofrecen, debido a las desigualdades y asimetrías que instituyen, así como disponer de ellos y aprovecharlos de manera menos restrictiva. En aquel ámbito, se amplía el alcance y se reducen las restricciones para interactuar y participar con finalidades e identidades diversas, identificarse con los otros y asociarse en grupos por ese solo hecho, sin necesariamente estar condicionados a hacerlo en pos de intereses específicos (Gutmann, 2005), sin menoscabo de la identidad ciudadana; se trata del mundo de la vida (en el sentido de Cohen y Arato, 2001, a partir de la formulación original de Habermas, 1991, 1998)¹⁴⁹.

En esas sociedades, el concepto de sociedad civil se ha puesto de relieve, debido al análisis de luchas en contra de regímenes autoritarios en muchas partes del mundo, no obstante la ambigüedad de su estatuto en las democracias liberales¹⁵⁰. Para algunos indica lo que las “civilizaciones occidentales” han conseguido y, por consiguiente, carece de potencial crítico para examinar las disfunciones e injusticias en ellas. Para otros, arraigado en la filosofía política moderna, el concepto es improductivo para dar cuenta de la complejidad de tales sociedades. Una tercera postura está representada por quienes ubican a la sociedad civil como principal fuente de cultivo de la solidaridad, la justicia social y la autonomía, no obstante vulnerable a las fuerzas de la economía de mercado y del poder administrativo del Estado moderno.

Si se la considera en términos de los procesos de desarrollo histórico implicados, la noción remite, en sentido negativo, a la esfera de relaciones sociales no regulada por

¹⁴⁹ Habermas se ocupó de la implantación de imperativos normativos procedentes de la esfera pública moderna, valores “institucionalizados” en las constituciones de las democracias occidentales; su tesis es que las instituciones democráticas de las sociedades de capitalismo tardío incorporan, si bien de modo ideológico incompleto y distorsionado, los principios emancipadores del libre acuerdo generados en la modernidad, lo que ha hecho que parezca imposible desentenderse del necesario carácter normativo que ha de cumplir una esfera pública para el desarrollo de una democracia. De ahí que, según señala Mestre (1999: 117, 118) en un contexto dominado por la caída del comunismo y una interpretación neoconservadora para la cual el Estado de Derecho es algo acabado e inamovible, Habermas no dudó en postular que frente a la aceptación generalizada del orden liberal debe exigirse la realización de los ideales democráticos, lo que le llevó al radicalismo de su primera formulación teórica: una democracia basada en una esfera pública que, entre la “polis griega” y “public opinión” burguesa, revitalice el poder de la comunicación y profundice la plural participación de los ciudadanos en todos los procesos de decisión, tesis que le ha valido críticas, en especial entre grupos políticos radicales.

¹⁵⁰ Consolidada la democracia política a través de la institución parlamentaria, resultó claro que una cosa es la democratización del Estado y otra, muy distinta, la democratización de la sociedad. En un Estado democrático puede existir una sociedad cuyas instituciones, de la familia a la escuela, de la empresa a la gestión de servicios, no sean gobernadas democráticamente (Bobbio: 1992: 43).

el Estado, entendido éste en sentido restrictivo como sistema social organizado que ejerce el poder coactivo; en sentido positivo, constituye el lugar en donde surgen y se desarrollan los conflictos económicos, sociales e ideológicos que las instituciones estatales tienen la misión de resolver, mediándolos, previniéndolos o reprimiéndolos. En cuanto contrapuesta al Estado, los sujetos de la sociedad civil son, en sentido estricto, las clases sociales en conflicto y, en sentido amplio, los grupos, movimientos, asociaciones y organizaciones que representan o se declaran representantes de las clases sociales, diferentes a las instituciones de naturaleza estatal (Bobbio: 1992: 39).

Desde un punto de vista sistémico funcional, la noción de sociedad civil combina los elementos propios de los sistemas “sociocultural” y “comunitario”, de modo que en ella se hallan un conjunto de “discursos integrados por argumentos (compromisos de valor) regulados por un orden o régimen discursivo”, que cumplen la función de “construir símbolos de forma socialmente obligatoria” y “la vinculación mutua, que es controlada por la influencia y que consiste en el compromiso con una comunidad y sus normas, en tanto que reguladas por un orden comunitario”, la cual cumple la función de “mantenimiento de la solidaridad” (Münch, 1990, citado por Camou, 2001: 24 y 25).

2.1.1. La indeterminación de la sociedad civil en las sociedades contemporáneas

Aunque pertinentes, estos enfoques no dan cuenta de la especificidad de la lógica relacional social que rige en el seno de la sociedad civil, por más que apuntan hacia una consideración que podría recoger cierto consenso: solamente en la sociedad moderna y una vez consolidada la democracia liberal se ha hecho evidente que la esfera pública política se contiene en la esfera más amplia de la sociedad en su conjunto y que no hay decisión política, influencia social y discurso público que no resulte, de alguna forma u otra, determinados o por lo menos condicionados por todo lo que sucede en la sociedad civil, invadida de actividad simbólica por doquier.

En ello radicaría el carácter de “indeterminación” o autonomía relativa de la sociedad civil, no obstante permanentemente amenazada por la lógica de los mecanismos administrativos (Estado) y económicos (economía de mercado), en tanto que ámbito

relacional para la expansión potencial de los ideales y las reglas de sociabilidad democrática, en el contexto del funcionamiento real de los regímenes democrático liberales. Esta premisa sitúa apropiada y productivamente el análisis. Deudora fundamentalmente del proyecto teórico de Habermas (1981, 1998, 2002), la plausibilidad de la propuesta de Cohen y Arato (2001) radica en que no se enfoca directamente sobre las instituciones políticas, ni se limita al dominio de la filosofía política normativa, en respuesta a la preocupación común en los trabajos más recientes en el campo de la teoría democrática, relativo al tipo de sociedad civil más adecuado para una política democrática moderna. Una propuesta de esta índole se justifica porque no está en claro la relación entre, por una parte, los modelos normativos de la democracia o los proyectos de democratización y, por la otra, la estructura, instituciones y dinámicas de la sociedad civil, en ausencia de una teoría suficientemente compleja sobre ese objeto.

A partir de esta última consideración, Cohen y Arato postulan que la sociedad civil moderna se crea por medio de formas de auto-constitución y auto-movilización, se institucionaliza y generaliza mediante las leyes, en especial los derechos objetivos, que estabilizan la diferenciación social; aunque las dimensiones auto-creativa e institucionalizada puedan coexistir por separado, en el largo plazo la reproducción de la sociedad civil requiere tanto de la acción independiente como de la institucionalización. Por eso se genera confusión al asimilar la sociedad civil a toda la vida social fuera del Estado administrativo y de los procesos económicos (2001: 8, 9).

Analíticamente, se pueden considerar tres ámbitos de configuración de la sociedad como una totalidad, imbricados entre sí por las mediaciones que ejercen mutuamente entre ellos, pero deslindados y opuestos entre sí debido a la lógica o racionalidad con que se estructuran las relaciones entre los sujetos sociales de manera peculiar en cada ámbito; esa racionalidad orienta la acción y la interacción social entre individuos y grupos sociales en cada ámbito. Aunque los ámbitos se interrelacionan y ejercen influencia recíproca en términos de solidaridad y conflicto, a partir de cierto tipo de intermediación específica a cada uno, esa influencia es estructuralmente asimétrica y, por consiguiente, cada ámbito ejerce mediaciones con distinto alcance sobre los otros.

De manera que la sociedad civil es diferente tanto de una sociedad política (constituida de partidos, movimientos y públicos políticos), como de una sociedad económica (integrada por organizaciones de producción y mercado), no obstante que ambas surgen a partir de ella, comparten algunas de sus formas de organización y comunicación y se institucionalicen mediante derechos (políticos y de propiedad), los que constituyen una continuación del tejido de derechos que aseguran a la sociedad civil moderna. Los actores de las sociedades política y económica participan directamente en el poder del Estado y en el poder económico, respectivamente, poderes a los cuales buscan controlar. Los criterios estratégicos e instrumentales de esos actores no se subordinan a los patrones de integración normativa y de la comunicación abierta que caracterizan a la sociedad civil. Aún la esfera pública de la sociedad política, fundada en órganos deliberativos, conlleva limitaciones formales y temporales sobre el proceso de comunicación societario.

Si bien en principio se presentan similares condiciones en cuanto a la relación entre sociedad civil y sociedad económica, ésta última ha tenido más éxito para aislarse de la influencia de aquella, del que por su parte ha conseguido la sociedad política, en el desarrollo histórico del capitalismo. La sociedad económica desempeña un papel mediador entre la sociedad civil y el sistema de mercado, a través de la legalización de sindicatos, las negociaciones colectivas y las estrategias de competitividad y promoción del consumo. El papel político de la sociedad civil, por otra parte, es inevitablemente difuso e ineficaz, no está relacionado directamente con el control o la conquista del poder, sino con la generación de influencia, mediante la actividad de las asociaciones democráticas y la discusión sin restricciones en el ámbito público. Por consiguiente, el papel mediador de la sociedad política entre la sociedad civil y el Estado es indispensable, tal como lo es el arraigo de la sociedad política en la sociedad civil.

Desde ese punto de vista, se pueden especificar los fenómenos de la sociedad civil como aquellos que no están vinculados en forma directa con los sistemas estatal y económico, pero el único sentido plausible de esa especificación sería en la medida en que se tratara sólo de las relaciones de asociación consciente, de auto-organización y de comunicación organizada, ya que la sociedad civil representa sólo una dimensión de

un mundo social más amplio de relaciones, normas, papeles, prácticas, competencias y formas de dependencia social posibles. Para superar esa limitación conceptual habrá que concebir un mundo de la vida sociocultural más vasto, tal como lo que se designa con la categoría de “lo social”, del que la sociedad civil forma parte. En ese sentido,

La sociedad civil se refiere a las estructuras de la socialización, asociación y formas de comunicación organizadas del mundo de la vida, en la medida en que éstas han sido institucionalizadas o se encuentren en proceso de serlo (Cohen y Arato, 2001: 10)¹⁵¹

De lo expuesto no se desprende, sin embargo, que en las democracias liberales la sociedad civil permanezca, por definición, en oposición a la economía y al Estado. La sociedad política y económica son instancias mediadoras a través de las cuales la sociedad civil logra influir sobre los procesos políticos-administrativos y económicos. La relación antagónica surge sólo cuando estas mediaciones fracasan, o bien cuando las instituciones de las sociedades económica y política sirven para aislar el proceso de toma de decisiones y a quienes deciden, respecto de la influencia de las organizaciones e iniciativas sociales, así como con respecto de las formas de discusión pública, en el sentido de acceso y participación irrestricto y sin coacciones (Cohen y Arato, 2001: 10). En las sociedades con economía de mercado, sólo un concepto de sociedad civil que la diferencie adecuadamente de la economía, es el centro de una teoría social crítica. Desde este punto de vista la sociedad civil puede ser definida, como proponen Cohen y Arato (2001: 8), como una esfera de interacción social entre la economía y el Estado, compuesta ante todo de la esfera íntima (en especial la familia) y la esfera de las asociaciones (en especial las asociaciones voluntarias, los movimientos sociales y las formas de comunicación pública)¹⁵².

Al ser situado en ese marco, se entiende entonces que el mayor alcance del escrutinio ciudadano resida en que éste transcurra como escrutinio público, en tanto que forma

¹⁵¹ Entendido el “mundo de la vida” en el sentido de la elaboración teórica de Habermas (2002).

¹⁵² La formulación se sostiene en la tesis de que el surgimiento del discurso de la sociedad civil revela que los actores y teóricos que lo favorecen siguen orientados por los ideales utópicos de la modernidad, no obstante que haya entrado en decadencia la retórica revolucionaria y fundamentalista en la que, en cierto momento, se articularon las ideas de los derechos básicos, tal como la libertad, la igualdad, la democracia, la solidaridad y la justicia. Estos grandes ideales generados en la era de las revoluciones democráticas, estaban contenidos cada uno de ellos en las utopías holísticas y mutuamente excluyentes (anarquismo, libertarismo, democracia radical y marxismo, Cohen y Arato, 2001: 11).

de participación ciudadana no restringida por las reglas e instituciones políticas, lo que da pertinencia al análisis relativo a cómo se despliega en el contexto de sociedades con incipiente democratización, en las que el aprendizaje del ejercicio de derechos y prácticas democráticas aún no es generalizado, tal como ocurre en México. Ese análisis considera, por tanto, el componente de las libertades del ciudadano y, a la vez, el de los derechos políticos, a partir de la premisa de que los ciudadanos pueden examinar críticamente, en todo tiempo, cualesquier asunto colectivo y juzgar la actuación de los gobernantes electos a partir de discusiones¹⁵³, que tienen un carácter distinto de la deliberación a cargo de éstos; y en consecuencia suponer que lo hacen por fuera del cauce institucional y la interlocución política, a través de las formas de relación, asociación y comunicación del más vasto y heterogéneo ámbito de la sociedad civil.

En esta delimitación analítica, no obstante, debe considerarse que la sociedad civil constituye un campo difuso de actuaciones, en términos de criterios de reconocimiento y verosimilitud, porque los sujetos sociales actúan, concurren, interactúan y se desplazan constantemente entre todos los campos que delimitan las relaciones sociales y en ello reside, en parte, el fenómeno de imbricación de las identidades de los individuos y grupos sociales (“hibridación”)¹⁵⁴, así como la ambigüedad e incertidumbre de las relaciones que entre ellos se establecen. Aquí interesan solamente las interacciones y la comunicación que afectan al escrutinio ciudadano, y en esta parte a partir del principio de publicidad intrínseco al orden liberal democrático, tanto en el sentido de propiedad y producción pública como en el sentido de libre acceso y apropiación pública (Thompson, 1998).

¹⁵³ Pero aún en una democracia de baja calidad, los ciudadanos tienen el derecho irrenunciable al Estado, a un Estado democrático que asegure “la permanente y legítima expectativa de que las acciones de las instituciones dotadas sean auténticamente consistentes con los aspectos del bien público que dicen atender. Eso significa que el reclamo de la autenticidad frente a políticas estatales concretas, definidas, específicas, es legítimo y reclamable, lo cual apunta hacia la transparencia y constitucionalización (sic) del derecho a la información. Para demandar la autenticidad de toda política estatal es necesario el derecho a la información pública del Estado” (O’Donnell, G. 2007: 49).

¹⁵⁴ Para García Canclini (2005: 3) la “hibridación” consiste en que procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas”; lo que antes estaba aislado y fuera de las realidades económicas y sociales de algunos sectores sociales, ahora constituye episodios constantes de la vida real de millones de individuos; la hibridación ha desencadenado una “multiculturalidad” difícil de entender; la hibridación y la segregación social, generada como consecuencia de esa tensión, tienden a estructurar las relaciones hegemónicas entre sectores sociales y sus sistemas simbólicos (Bourdieu, 1988).

2.1.2. Dimensiones y vectores que configuran lo público

Por consiguiente, es necesario considerar la manera en que la comunicación mediática interviene en la configuración del ámbito público, en el marco de la sociedad civil, en términos de desplazamientos dinámicos entre ámbitos, en lo que concierne al criterio de publicidad y al conocimiento común accesible a todos, es decir entre los ámbitos de lo íntimo, lo privado y lo público. Para ello es necesario superar la noción de ámbito o esfera en tanto que espacialidad o lugar, su referente más común¹⁵⁵, y entenderlo en su dimensión relacional y de interacción social y comunicativa, lo que permite especificar aquello que el concepto analítico de *esfera pública* designa en el contexto de las sociedades contemporáneas, en cuyo desarrollo cultural una variable crítica es la comunicación pública¹⁵⁶ crecientemente mediatizada.

No debe perderse de vista que el principio de publicidad está determinado, en términos sociológicos, por la condición de actuar de cara al juicio de cualquiera y con respecto a los asuntos que conciernen –y pueden afectar–, a todos los miembros de la colectividad. Por cuanto a la organización política, en una sociedad con muchos integrantes y dispersos en el espacio físico más amplio y común a todos, es evidente que no podrían coincidir en el mismo lugar al mismo tiempo y si acaso una reducida parte de ellos. Por eso, aunque siga siendo uno de sus presupuestos, en la democracia moderna la concurrencia a la plaza pública para debatir, en sincronía temporal, los asuntos colectivos, es una manera de participación marginal y no habitual, porque puede ser solventada o reemplazada por la interacción comunicativa mediada,

¹⁵⁵ “Público-privado” e “izquierda-derecha” son conceptos contrarios recurrentemente cuestionados y debatidos en la teoría política y social; la sola propuesta de cruzarlos introduce en el terreno de los significados desestabilizados; actualmente se siguen discutiendo tanto los criterios para el trazado de los límites, como la capacidad descriptiva, heurística o valorativa de esas distinciones; hay quienes discuten las formas de construirlas las distinciones y otros las distinciones mismas (Rabotnikof, 2001: 307).

¹⁵⁶ No hay definición de ella que no sea discutible, pero McQuail (1998: 26) ofrece una operativa por la que denotaría la intrincada red de transacciones informacionales, expresivas y solidarias que ocurren en la esfera pública de cualquier sociedad, y en las modernas el espacio y tiempo reservados en los medios de comunicación masiva para la atención de temas de preocupación pública general, un dominio de temáticas de interés general, entendido éste como beneficios informacionales, culturales y sociales que va más allá de intereses inmediatos, particulares e individuales de los que participan en la comunicación pública, sean emisores o receptores.

simultánea o diferida, organizada por el Estado y regulada en las leyes¹⁵⁷. La dimensión comunicacional conecta con el aspecto de la discusión pública, condición esencial de la formación de la opinión colectiva; aquí interesa aquella que ha sido mediatizada.

Eso implica la premisa de que el ejercicio del poder político debe estar, en principio, sujeto a la visibilidad de los ciudadanos, si es que procurara su aceptación por parte de ellos. La actuación en público está determinada por el lugar que se ocupa con respecto a la estructura de poder político, pero a la vez desde posiciones de poder o no en otros ámbitos societarios, de lo cual depende los recursos de que se puede disponer para hacerlo. De ahí que la publicidad no puede ser entendida sino a condición de especificar la naturaleza de “lo público” en cada contexto socio-histórico.

Con base en la revisión crítica de las diversas aproximaciones teóricas sobre “lo público”, a partir de la premisa de que la relación entre lo público y lo privado es de orden dialéctico y está sujeta a tensiones semánticas mutuas¹⁵⁸, Gurza (1998) advierte tres áreas de problemática en torno a las cuales se organizan las relaciones que se articulan en la configuración estructural de lo público: en cuanto a su dimensión comunicativa (“comunicabilidad”), a su dimensión institucional (“institucionalidad”) y a su dimensión relacional (“sociabilidad”), lo que permite reconocer la variedad de manifestaciones concretas de la configuración de ese ámbito actualmente; sugiere por otro lado que el concepto de “lo público”¹⁵⁹, en tanto que ámbito, con esas tres

¹⁵⁷ Otro hecho distinto son los artificios para representar simbólicamente esa condición original de la democracia antigua, así como los dispositivos para movilizar flujos de intercambio de mensajes a gran escala, prescindiendo del hecho de estar presentes al mismo tiempo, de expresarse todos y hacer uso del derecho de réplica para tenga lugar un efectivo debate.

¹⁵⁸ Esta aproximación lingüística incluye al campo semántico como objeto de indagación, lo que permite confrontar la conceptualización con las realidades empíricas implicadas y dar cuenta de las tensiones semánticas puestas de manifiesto en el estudio de su configuración real en el contexto de las sociedades modernas; el modelo consiste de tres ejes que estructuran el ordenamiento de la matriz relacional de lo público, la cual permite analizar críticamente las diversas aproximaciones teóricas y conceptuales de su tratamiento, a la vez que incorporar las determinaciones de la problemática concreta de cada eje de la matriz; los cambios en la estructura constitutiva de lo público responden a una lógica sistémica con cierta autonomía para cada eje de tensión (Gurza, 1998: 218).

¹⁵⁹ Categoría difusa que exige, de acuerdo con Gurza (1998) un programa teórico comprehensivo desde el cual sea reelaborada para dar cuenta del estado actual de cosas y reordenar la intencionalidad del conocimiento; esa propuesta es justificada porque, en su argumento, con excepción de Habermas (1989 y 1993) y Sennet (1998), las perspectivas teóricas elaboradas hasta ahora en unos casos omiten justificar su punto de partida y, en otros casos, se ocupan de lo público de manera tangencial, reduciendo su naturaleza, y el alcance de la óptica desde la que la tratan, al aspecto particular de que se ocupan.

dimensiones, es delimitado y organizado por tensiones contradictorias entre tres ejes contruidos a partir de la mutua exclusión u oposición entre sí: lo público versus lo íntimo-privado; lo público versus lo privado-capital y lo público versus lo privado. Eso permite elaborar un modelo (matriz) relacional de la configuración de lo público que distingue entre lo público y lo cuasi público (“parapúblico”), incorporando las contribuciones teóricas en términos de la problemática peculiar a cada eje relacional.

La reducción del carácter de lo público a algunas de sus expresiones configurativas sitúa el análisis en el terreno de lo “cuasi público”, es decir en una realidad constreñida exclusivamente a la tensión de uno de los ejes o de la intersección entre ellos, la cual resulta entonces semejante o paralela a lo público aunque no tenga propiamente ese carácter (Gurza, 1998: 263). Para los fines de este estudio, tal distinción permite identificar el problema que subyace en muchos estudios recientes en el campo de la comunicación política, relativo a enfocar sólo una dimensión de lo público sin ocuparse de argumentar la necesaria relación que guarda con las otras, al momento de ocuparse en alguno de los ejes estructuradores o vertientes de “lo público”¹⁶⁰.

Ese problema lleva a sobredimensionar las consecuencias de alguna de las manifestaciones del proceso de transformación de la configuración de lo público, de tal manera que son formuladas hipótesis de dudosa comprobación. Tal es el caso de trabajos que, incluso situados en la perspectiva teórica de las mediaciones culturales, se ocupan solamente de alguno de los procesos de “mediatización” de la política o de la influencia ejercida por los medios de comunicación masiva en el desarrollo de la cultura y prácticas políticas, en sociedades con regímenes democráticos con desarrollo incipiente, como ocurre en México, línea de investigación en que se ubica este estudio. Por eso es pertinente considerar la hipótesis de la “crisis de lo público”.

¹⁶⁰ Se trata de estudios que según Gurza (1998: 220-221) se ubican en la vertiente de comprensión de lo público como sinónimo de la comunicación colectiva, o bien de lo social opuesto por definición al principio vertical autoritario y burocrático de acción del Estado, en la que el supuesto de la “crisis de lo público” significa una inhibición del principio de acción social colectiva debido a la “estatización” o “burocratización” de la vida comunitaria. Desde esa óptica, es evidente que la apropiación monopólica de lo público por parte del Estado desvirtúa el sentido mismo de lo público y conlleva disfunciones y problemas. Por eso no es fortuito que tales estudios coincidan en concluir, programáticamente, que a ese fenómeno habrá que oponer el principio de acción social por el cual sea devuelta a la sociedad la capacidad de generar público, de controlarlo y gestionarlo, que le ha sido expropiada por el Estado. Esa devolución debe hacerse mediante la regulación y acción social democrática.

Entre las concepciones más relevantes que debaten en torno a esa presunción se coincide en que “lo público” se ha transformado, en la modernidad, como resultado del debilitamiento de la autonomía de la sociedad civil frente al Estado y la sociedad económica, lo que conlleva la inhibición del principio de acción social por el que aquella genera, regula y gestiona el ámbito de lo público. Ese fenómeno sería consecuencia de la apropiación monopólica de “lo público” por parte del Estado. No obstante esa coincidencia es posible distinguir dos visiones. Una explica la “crisis de lo público” a partir de las determinaciones aparejadas con la instauración de políticas reformistas de “corte neoliberal”; emparenta con la perspectiva que debate lo público en el marco de la llamada “crisis” del Estado de bienestar. Desde la otra no es dable pensar en una “crisis de lo público”, sino en una tendencia hacia su constricción, consustancial al desarrollo de la sociedad moderna y que entraña el riesgo permanente de su extinción, aunque a la vez la oportunidad de su resurgimiento; de allí que jamás desaparece esa tensión social en su configuración (Gurza, 1998: 222)¹⁶¹.

Aunque la tesis de la tendencia a la anulación de la sociedad por el Estado pueda ser compartida, hay diferencias en cuanto a los supuestos que entraña la tesis de “la crisis de lo público”. Para quienes conciben lo público como un espacio horizontal comunicativo (por ejemplo, Keane, 1992)¹⁶², por definición no puede ser “estatizado”. En contraste, para quienes la crisis de lo público consiste en una expropiación del Estado respecto a la capacidad de la sociedad para generarlo y gestionarlo, esa expropiación es conducida hacia la anulación de tal capacidad, por los requerimientos

¹⁶¹ En este punto habría que objetar esa reconstrucción ecléctica y poca rigurosa de los presupuestos en que se sustenta cada diversa aproximación teórica que revisa, a partir de perspectivas incompatibles, aún cuando sea pertinente tratar la llamada “crisis de lo público” con un enfoque interdisciplinario. Gurza no distingue que confronta un enfoque sociológico y otro comunicacional, cuando argumenta el debate en torno a tal “crisis” como plataforma desde la cual elaborar su propia propuesta, lo que le lleva a argumentar la naturaleza de lo público en niveles de abstracción que no son compatibles aunque lo cree salvado en aras del argumento que justifique el modelo matricial del concepto.

¹⁶² Keane (1999) es pionero en poner en cuestión el predominio que, conforme al ideal normativo, detentó la noción de vida pública estructurada al Estado territorialmente delimitado, mediada por la radio, la televisión y los libros; propone en cambio entenderlo como un mosaico de esferas públicas de diversos tamaños que se traslapan e interconectan, cada una un tipo particular de relación espacial entre dos o más personas vinculadas por algún medio de comunicación y entre las cuales se suscitan disputas temporales en torno a las relaciones de poder que operan dentro de su medio de interacción y/o en los ámbitos de las estructuras sociales y políticas en los que se encuentran los adversarios.

de la puesta en marcha de políticas de corte neoliberal en el Estado de bienestar social de las sociedades de masas. En esa orientación, no es lo público en sí mismo lo que entró en crisis con el advenimiento de las sociedades de masas, sino la vieja concepción acerca de “lo público” de la clase social dominante en el capitalismo primigenio, como consecuencia de un fenómeno distinto, la crisis de la política en tanto que representación, es decir de la representación política (Touraine, 1998:49)¹⁶³.

En las sociedades modernas la configuración del ámbito público se ha transformado, radicalmente en comparación con las sociedades antiguas. Por consiguiente también las pautas culturales que orientan el sentido para interactuar en ese ámbito, debido a dos procesos históricos, la separación entre el Estado y la sociedad civil, originada en la diferenciación de la racionalidad relacional entre la sociedad política y la sociedad económica, que se desarrolla desde el origen de la formación social capitalista y, en consecuencia, el entrecruzamiento entre tales racionalidades contradictorias entre sí, que oponen al Estado y a la economía de mercado con la sociedad civil, ámbito relacional en el que se produce la acción colectiva de solidaridad no coercitiva y de resistencia cotidiana a las coacciones que imponen aquellos órdenes¹⁶⁴.

Ahora bien, entre la sociedad civil, de un lado, y la sociedad política y la sociedad económica del otro, las relaciones y formas de interacción social están permanentemente sujetas a mediaciones de orden cultural, mismas que afectan la acción individual y colectiva en los ámbitos íntimo, privado y público. Entre tales mediaciones, las debidas a la comunicación mediática resultan fundamentales porque instituyen un ámbito público “mediatizado” (mediático), en el que los sujetos interactúan transversalmente entre todos los ámbitos, prescindiendo de la experiencia personal directa y de compartir un mismo contexto social, espacial y temporal. Con su

¹⁶³ Esta tesis ya era aplicada mucho antes en algunos análisis sobre el contexto de la vida pública en México, por ejemplo por Aguilar (1989: 134-136) para quien: “La crisis del capitalismo y la irrupción de las masas desposeídas y plebeyas en la escena política sacudió la concepción de un público unitario y paritario de privados, que se pretende capaz de representar y presentar en su opinión el interés común, concertando las discrepancias, las divisiones y los conflictos mediante el diálogo racional”.

¹⁶⁴ En ese sentido, Alexander y Jacobs (1998: 20) entienden la sociedad civil conformada por una multiplicidad de esferas públicas, comunidades y asociaciones, arraigadas unas dentro de otras y, a su vez, dentro de una comunidad mayor que es su esfera nacional, entre ellas las que instituyen los medios de comunicación masiva, en la que actores y eventos se tipifican en códigos narrativos más generales y dan estructura interpretativa de lo que acontece a la sociedad.

desarrollo histórico, los medios de comunicación masiva se han convertido en las organizaciones intermediarias más influyentes, en cuanto a la escala social y cobertura espacial de la visibilidad pública y resonancia social que ellos gestionan y que cualquier sujeto individual o colectivo pueda conseguir; por eso afectan las maneras y las condiciones en que los ciudadanos y los gobernantes electos pueden encontrarse, comunicarse, movilizar información y opinión política y circular mensajes de índole cultural, política y económica¹⁶⁵.

Se ha visto que el reconocimiento de qué sea y corresponda al ámbito íntimo, privado o público depende, en último término, de pautas culturales convencionales, comunes y compartidas que imperan en una cierta sociedad, en un espacio y tiempo determinados; que tales pautas se traduzcan en la regulación jurídica o no es, sin embargo, una cuestión distinta. En el contexto de las democracias liberales, las pautas culturales imperantes orientan el sentido de las distinciones en términos de propiedad-apropiación; reserva-accesibilidad, visibilidad-velación (Thompson, 1998), de tal manera que lo íntimo se reduce a lo individual y a lo secreto, lo velado o que se sustrae a los demás. Lo privado se pone en juego en interacción y comunicación con otro u otros individuos, lo que necesariamente hace accesible (transparente) parte de aquello que de lo íntimo se deja, voluntaria o involuntariamente, al descubierto, con lo cual se ve afectada, en mayor o menor medida, la autonomía personal, en aquello que uno haya revelado o haya sido observado por el otro¹⁶⁶. Con ello, sin embargo, no se vulnera la intimidad, en tanto que propiedad, lo que comporta que la opinión política personal, por ejemplo, pueda seguir siendo propia aunque otros la conozcan y hagan suya y aparezca como de ellos; la vulnerabilidad de la autodeterminación personal reside en que algo externo al individuo, y ejerciendo algún tipo de coacción, obligue,

¹⁶⁵ El poder mediático, basado en tres lógicas económica, tecnológica y simbólica, da forma al espacio público en todos los ámbitos de la vida social y por eso, sin embargo, es por su parte presa de un “juego de doble espejo”: refleja el ámbito social y se encuentra reflejado por él, de manera que está obligado a auto-justificarse (Charaudeau, 2003: 15).

¹⁶⁶ En el proceso de elaboración de su propia personalidad, el individuo desea conservar para sí las decisiones acerca de cuáles pensamientos e intenciones propios está dispuesto a convertir o no en acciones externas. En las relaciones interpersonales, develar unilateralmente un secreto o la posibilidad de que algún otro tenga acceso a él, coloca a la persona en situación de inferioridad a otros. Como afirma Bok (1984: 19) no poder tener secretos significa perder el control acerca de cómo los demás nos miran; nos deja librados a la coerción (citado por Garzón, op., cit.), lo cual explicaría que sólo en casos de relaciones de amor o amistad se produce la develación voluntaria y ésta suele ser recíproca.

contra la propia voluntad, a hacer manifiestos los pensamientos propios, originados en la intimidad¹⁶⁷.

En el ámbito privado, la discreción es sustituida por reglas de comportamiento, cuya validez y calidad moral no depende de la imposición por un sujeto privado o del consenso de sus destinatarios; de otro modo se establecería una distinción entre moral de la convicción y de la responsabilidad, siendo que son una sola moral. Tales reglas implican renunciar a los propios intereses en aras de respetar los de otros, es decir el derecho de reconocimiento que el otro también posee y que vale tanto como el propio. A cambio de esa renuncia, el principio de justicia radicaría en que todos renuncian a dejarse guiar solo por sus propios deseos y preferencias en cuanto se trata de convivir o interactuar entre sí. Esto inicia en el ámbito privado, pero se desarrolla a superior escala en el ámbito público político, en el que se trata de producir bienes colectivos y de decidir conjuntamente acerca de su distribución, lo cual sólo puede tener lugar trascendiendo preferencias o restricciones originadas en el ámbito privado, para constituir aquellas en compartidas por todos u obligadas para todos¹⁶⁸.

Estas pautas culturales se ponen en juego, actualizan, afirman o modifican en las acciones, individual y colectiva, y en las interacciones sociales, interpersonales y a distancia, que se establecen entre los sujetos sociales, y constituyen uno de los parámetros de todos los procesos, modalidades y situaciones de comunicación, pero no debe perderse de vista que tales pautas están determinadas, en último término, por las asimetrías, antagonismos y conflictos que resultan de las relaciones sociales y el sistema de dominación imperantes en cada contexto socio-histórico.

¹⁶⁷ Lo que se consciente en revelar es distinto de aquello que de nuestra intimidad es involuntariamente revelado. Otro caso es la transmisión asimétrica que se produce en la confesión religiosa o en la terapia psicológica, lo cual genera en ambos casos una dependencia de un sujeto respecto de otro.

¹⁶⁸ Ésa es una de las razones por las que, por cierto, una teoría de la legitimidad de las decisiones públicas requiere vincular necesariamente la teoría de la acción colectiva al análisis ideológico cultural, para explicar cómo se constituye el interés general o compartido a partir de la estructura del poder y con su ejercicio, lo que permite entender el consentimiento, el disenso y el conflicto en la democracia representativa. De esa manera puede comprenderse cómo los intereses privados pueden situarse jerárquicamente entre sí, unos situarse por encima de otros, e imponerse unos a otros, disputar entre sí en pos de sobreponerse o imponerse y someterse todos a aquellos que logran imponerse, lo cual implica a la teoría sobre el conflicto.

2.2. Del escrutinio ciudadano al escrutinio público mediático

Desde la perspectiva argumentada, es claro que el escrutinio ciudadano se engendra y desarrolla en el seno de la sociedad civil, y tiene lugar tanto en el ámbito privado como en el público, aunque solamente en éste último adquiere el estatuto de práctica política democrática, en la medida en que por voluntad y acuerdo de sus participantes trasciende los constreñimientos del ámbito privado. Pero se consuma en sentido estricto en la medida en que los ciudadanos dan a conocer los resultados de la discusión entre ellos a otros ciudadanos, o bien hacen saber a los gobernantes electos tales resultados y, en su caso, la exigencia de que éstos informen y justifiquen su actuación y desempeño en el cargo, en lo que radica en principio su mayor efectividad en términos de acción política y su mayor alcance en términos de participación.

Al ser canalizado por ese cauce, el ejercicio de dicha práctica consigue su cometido. Si bien las posibilidades de sus efectos no traspasan la mediación política ejercida por el gobernante electo de que se trate. Eso significa que éste último tiene márgenes para manejar una exigencia sin efecto vinculante (a la que esté obligado a responder en sus términos), de la que además puede librarse en último término invocando su legítima autonomía decisoria en el desempeño del cargo. Ya se vieron las razones por las cuales, sin embargo, los legisladores tienden a mostrar receptividad hacia el resultado del escrutinio a que sea sometido o a mantener la interlocución con los ciudadanos.

Es evidente que en la medida en que consiga publicidad, en términos de visibilidad y accesibilidad pública, el ejercicio del escrutinio ciudadano incrementa su efectividad y alcance; éstas dependen, sin embargo, de la fuerza e intensidad con que sea auspiciado y promovido desde las asociaciones y redes de ellas en la sociedad civil y de su participación organizada e informada en él. Sería inexacto inferir, no obstante, que el mayor vigor así conseguido, asegura al escrutinio público un lugar en la difusión mediática, puesto que la gestión mediática de la visibilidad pública opera con una

lógica diferente a la del resto de las organizaciones intermediarias de la sociedad civil, y, en ello, reside la especificidad de su influencia cultural en varios campos a la vez¹⁶⁹.

No puede perderse de vista que, en cualquier caso, la práctica del escrutinio ciudadano no es inmune al riesgo de sucumbir, supeditarse o servir a intereses particulares, de cierto grupo e incluso de organizaciones intermediarias de distinto tipo (sindicatos, cooperativas, iglesias, agrupaciones civiles temáticas, entre otras), o bien de movimientos sociales, algunas de los cuales pueden estar vulnerados por esquemas de agrupación corporativa y mecanismos de participación clientelar¹⁷⁰. No obstante, ese riesgo y esa vulnerabilidad no son privativos del escrutinio ciudadano, afectan toda forma de participación¹⁷¹; tampoco son ineludibles, en la medida en que éste sea ejercitado con la máxima publicidad posible y atendiendo al aprendizaje de la autocritica y autodeterminación. Hay evidencia de asociaciones y movimientos que mantienen su identidad, carácter y arraigo ciudadano, y de otros que los distorsionan o degeneran, incluso desde el punto de vista de sus integrantes.

2.2.1. Identidad ciudadana: el sujeto del escrutinio público

Esos problemas ponen de relieve la cuestión de la identidad ciudadana, por cuanto define al sujeto social del escrutinio público, lo que a su vez opera como un referente y

¹⁶⁹ En México, por ejemplo, la más numerosa movilización ciudadana de inconformidad surgida del escrutinio, sin base asociativa formalizada y despojada de auspicios partidistas, para hacer valer la crítica a la capacidad de los gobernantes electos para brindar seguridad pública, potenció su visibilidad pública y resonancia social mediante la cobertura informativa y de opinión otorgada en todos los medios de comunicación masiva; los mismos que se aliaron después para actuar, mediante su propia difusión, como parte agraviada y agentes de escrutinio haciendo valer su crítica común a las decisiones de los legisladores federales, por las cuales se prohibió la compra venta de propaganda electoral en radio y televisión directamente entre partidos políticos y concesionarios de esos medios; no es ocioso recordar que éste último asunto ha prevalecido más tiempo en la agenda mediática que el primero.

¹⁷⁰ Basada en el intercambio de recompensas del agente político a cambio de apoyo político, a partir de la expectativa de reciprocidad, que “se oculta del escrutinio público” por la secrecía en que son mantenidas las transacciones, que involucran autoridades electorales, partidos contendientes, medios de comunicación, académicos, por eso el cumplimiento es incierto (Schaffer, 2007: 67); resultan de la asignación y uso discrecional de bienes públicos (subvenciones, contratos) incluso a asociaciones civiles.

¹⁷¹ Un Estado de derecho puede estar parcialmente democratizado, porque subsistan instituciones estatales aún autoritarias. Por eso, una democracia con alta calidad es aquella con una amplia gama de derechos, en la cual el Estado los hace efectivos. En América Latina se tienen democracias de baja calidad, sostenidas por un Estado parcialmente democratizado que contiene una soberanía truncada, una ciudadanía de baja intensidad, lo que se correlaciona con la extendida pobreza y desigualdad que caracteriza a los países de esa región” (O’Donnell, G. 2007: 48).

criterio para la percepción e interpretación de la autenticidad y credibilidad que a otros sujetos sociales les merezca, en el seno de las sociedades política, económica y civil, en términos de los constreñimientos que ellas imponen¹⁷². Por tanto es necesario al respecto hacer ciertas precisiones.

La cuestión relativa a la formación y el desarrollo de identidad es actualmente más compleja que antes, entre otras razones porque se ubica en la intersección de las determinaciones entre lo individual y lo colectivo, dilema teórico común en las ciencias sociales, lo que pone de relieve la necesidad de un enfoque interdisciplinario para ocuparse de ella. Desde la perspectiva aquí planteada y para el alcance de este estudio, conviene dejar asentado que no debe perderse de vista la dimensión objetiva e intersubjetiva de la identidad ciudadana, por lo que habrá que considerarla también en tanto que “forma simbólica de orden ideológico”, con referencia al plano del comportamiento social más agregado, así como cuanto una forma de “representación social” con referencia al plano del comportamiento individual agregado, desarrolladas históricamente y en constante transformación por procesos de socialización política¹⁷³ y cultural, adquiriendo significados diferentes, según el contexto socio-histórico.

Aquí se ha considerado la noción “ciudadano” como categoría operativa de análisis, con el mismo sentido en que se le denota, no obstante sus diversas variantes, en la teoría política, a saber el individuo en tanto que miembro de la comunidad política dentro del territorio de un cierto Estado-nación y al que, en tanto que miembro de

¹⁷² La identidad política y social se reconstituyó políticamente a partir de nuevas convenciones culturales y nuevos símbolos, determinados en mayor medida por la mediatización cultural que, mediante la comunicación política mediatizada convierte la identidad de los ciudadanos en públicos consumidores de información, opinión, publicidad política, para quienes las instituciones mediáticas producen además “entretenimiento” a partir de la actividad política y el desempeño de los agentes políticos.

¹⁷³ Entendida como el proceso de adquisición y transformación de creencias, valores y actitudes, que cada individuo experimenta a lo largo de su vida, por el cual interioriza mentalmente elementos de su entorno y construye su propia personalidad política; ese proceso es informal, fragmentado, difuso, de inmersión gradual en el universo político, en cuyo curso se adquieren orientaciones y competencias para interpretar y actuar en la vida política, mediante la introspección en general poco consciente; la “socialización primaria” se desarrolla desde la toma de consciencia en el niño, a partir de la familia, la escuela y la comunicación mediática como entornos y agentes principales; la socialización secundaria tiene lugar en edad adulta cuando el individuo se expone más abiertamente a una serie de influencias de los entornos y agentes de socialización, tales como partidos políticos, empresas, sindicatos, organizaciones civiles, instituciones de gobierno; las experiencias personales y en grupo contribuyen a afirmar o rectificar las orientaciones y pautas de conducta adquiridas (Vallés, 2004: 279-282).

ella, le corresponden derechos y obligaciones políticas comunes a todos los miembros que la integran¹⁷⁴. Pero conviene precisar que, por una parte, la noción forma parte tanto del conocimiento común¹⁷⁵ en el ámbito de la vida íntima y privada cotidiana, como del conocimiento especializado particular en diversos ámbitos de interacción social (político, económico, cultural y simbólico). Aunque su significado depende del campo semántico en cada ámbito, el uso del vocablo más generalizado y, por tanto, ampliamente compartido, hace corresponder la identificación de ciudadano con todos los adultos que pertenecen a una nación y tienen derechos y obligaciones conforme a las leyes que rigen en ella, los cuales tienen que ver con lo que difusamente se entienda por “política” y “gobierno”.

La noción de “ciudadano” tiene un fuerte arraigo en la tradición cultural y política de las sociedades modernas hasta nuestros días, desde la cual designa y connota una identidad como sujeto político que actúa y se relaciona en el ámbito público político circunscrito por una comunidad política delimitada por un Estado nación soberano, o con pretensión política de autonomía respecto de otros¹⁷⁶. No obstante la adscripción territorial, incluso a una cierta tradición cultural, merecen reservas como elementos identificadores y diferenciadores en el contexto de las sociedades contemporáneas multiculturales y más interrelacionadas que antes¹⁷⁷.

¹⁷⁴ La noción de “ciudadano” se origina en la filosofía política liberal y es reformulada con el advenimiento del Estado liberal moderno, durante el desarrollo del capitalismo en Europa, al influjo de la ideología liberal, instaurada como hegemónica con las revoluciones políticas burguesas; se institucionaliza como discurso político dominante (“Declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano”), con la instauración del Estado constitucional democrático en varias latitudes durante el siglo XVIII: aparece el ciudadano como sujeto con derechos políticos y libertades individuales; para el análisis del proceso véase Vallés (2002) y cfr. Vallespín (1997), Córdova (1976) y De Gabriel (1997).

¹⁷⁵ La teoría cognitiva, en el campo de la psicología social, postula que los conocimientos se construyen en situación y de modo progresivo, por medio de actividades cognitivas cuya finalidad es social. “Adquieren sentido en relación a la mirada del otro, y no en relación a los conceptos científicos elaborados por expertos, ni en relación a una organización del pensamiento externo al sujeto. De hecho, los modos de razonamiento que utiliza el sujeto en el transcurso de sus interacciones cotidianas no lo conduce a inferencias equivocadas, pero sí a inferencias diferentes, caracterizadas por una validez propia, de origen social. Además es por este mismo motivo que son diferentes” (Guimelli, 2004:27).

¹⁷⁶ Según Vallés (2002: 150-151), “La pertenencia a un Estado equivale, pues, a disfrutar de un estatuto o posición –la ciudadanía-, que comparten todos los miembros de la comunidad política. Este estatuto de ciudadanía es calificado a menudo como <nacionalidad>, tanto en el lenguaje jurídico como en el vocabulario vulgar; la relación entre ciudadanía y nacionalidad se explica por el hecho de que –desde hace 200 años-, Estado y nación aparecen como conceptos vinculados, aunque en conflicto”.

¹⁷⁷ Es profusa la literatura especializada al respecto, pero una perspectiva completa está en Beck (1998).

La definición conceptual de la identidad comporta, sin embargo, necesariamente una perspectiva teórica, así como considerar los procesos y fenómenos cognitivos y sociales, y sus interrelaciones en situaciones diversas¹⁷⁸. De la investigación más reciente se desprende que no se puede hablar de identidad en singular y el foco ha de situarse en los procesos de identificación¹⁷⁹ y en el carácter multifacético y, por tanto, multidimensional de los procesos de emergencia, desarrollo y disputa de identidades. Al revisar en profundidad en esas orientaciones, parece claro que ninguna aproximación puede eludir el análisis de dos de las coordenadas de sentido en los procesos de identificación y disputa de identidad individual y colectiva: la diferenciación y singularidad por adscripción a algún tipo de vínculo social, por distinción respecto de los “otros” y la lucha por el reconocimiento; ambas implican lo que Velasco (2005:195) llama “dialéctica de la inclusión y la exclusión”. No obstante, los procesos de identificación del sujeto siguen teniendo como componente el sentido de “pertenencia” y a partir de la propia experiencia personal y en común¹⁸⁰.

Eso pone de relieve el fundamento relacional de la formación de identidades de la persona y la consideración del agrupamiento motivado por una identificación mutua, no basada en un objetivo instrumental o interés común, que lleva a considerar los “grupos de identidad”, sin cuya consideración no se entendería la participación social y ciudadana y la acción colectiva en las democracias contemporáneas (Gutmann, 2008). Desde ese punto de vista, los ciudadanos pueden agruparse con esa identidad

¹⁷⁸ En cada campo disciplinario y desde diversas perspectivas teóricas se ha problematizado la identidad, por eso la multiplicidad de conceptos formulados. En las sociedades contemporáneas, Bauman (2002, 2004) argumenta el carácter efímero, volátil e inasible (“identidades líquidas”) por el que cabría hablar de identificaciones; como consecuencia de que se ha pasado de una tradición *logocéntrica* hacia una tradición *logocentrada*, argumenta Maffesoli (2007) y que al influjo de los fenómenos de globalización hace emerger “identidades híbridas” (García-Canclini, 2005) o provoca el “descentramiento” y la “deslocalización” de las identidades, según Martín-Barbero (2001). Una constante en el análisis es el carácter “fragmentario” y “multiforme” de las identidades; la configuración de “nuevas identidades” con el surgimiento de movimientos sociales inéditos (Melucci, 1996, 1999), cfr. Gutiérrez (2007:37-65).

¹⁷⁹ No existe una única identidad que abarque la totalidad de la persona. Las personas se identifican unas con otras en razón de una gama diversa de aspectos o características sociales, que permiten marcar y delimitar (ascendencia étnica, raza, nacionalidad, cultura, religión, género, orientación sexual, clase, discapacidad, edad, ideología, entre otros). Ni siquiera todas las identidades de grupo consideradas en conjunto abarcan la totalidad de la persona (Gutmann, 2008: 12).

¹⁸⁰ Por eso es sugerente aquí la tesis de Arfuch (2002) acerca de la exaltación de lo vivencial, es decir de la impronta por privilegiar la propia experiencia como valor central de la construcción del sujeto social, rasgo característico de la cultura contemporánea. Según esta autora, la identidad del sujeto tiene que ser comprendida desde un enfoque relacional y dinámico. El sujeto es constitutivamente incompleto y está abierto a identificaciones múltiples, en tensión constante con el otro, lo diferente.

plenamente a partir de una identificación por lo que ellas son, no por lo que ellas persiguen, si bien la identificación mutua y la prosecución colectiva de objetivos instrumentales no se excluyen mutuamente, sino que se refuerzan recíprocamente¹⁸¹.

Desde el análisis sociológico de la cultura y con una perspectiva hermenéutica, la identidad de ciudadano puede ser analizada como una “forma simbólica ideológica” que se refiere a un tipo de sujeto político en función de una pertenencia a una comunidad política, a la vez que de una manera de relacionarse e interactuar con otros “pares” que la constituyen, a partir de identificarse singularmente iguales ante la ley y con respecto al gobierno; en el contexto de las sociedades modernas, tal forma simbólica se produce, intercambia y apropia, en principio, sobre la base de la relación entre ciudadanos y Estado, cuando éste se organiza con base en la tradición ideológica liberal democrática. Las identidades son representadas en símbolos, ritos y rituales y solamente así son externas al individuo, se comparten y hacen en común, si bien ellas se construyen dentro del discurso, mediante estrategias enunciativas específicas, producidas en ámbitos institucionales específicos, por lo que la identificación es un proceso inacabado (Hall y Du Gay, 2003: 18).

Desde el campo de la psicología social, la identidad de ciudadano puede ser analizada como una “representación social”¹⁸², que alude al atributo por el cual ciertas personas que forman parte de un mismo grupo social se identifican entre sí y son identificadas por otras, y que éstas incorporan a su acervo cognitivo mediante actividades mentales

¹⁸¹ De manera paradigmática, se puede distinguir tales tipos de grupos a partir de la característica organizativa de cada uno de ellos: la política basada en los grupos de identidad se vincula con el sentido de lo que las personas son, mientras que la política basada en los grupos de interés se vincula con el sentido de lo que las personas quieren. La claridad teórica de esa distinción permite ver la relación estrecha que hay entre la identidad grupal y el sentido que las personas tienen de sus intereses en la práctica política (Gutmann, 2008: 30).

¹⁸² Constituye una forma de conocimiento cuya especificidad reside en el carácter social de los procesos que la producen; atrayendo el concepto de “representación colectiva” desde la sociología de Durkheim, la psicología social lo reelaboró, a partir del psicoanálisis, con los trabajos de Moscovici (Abric, 2001), para quien la función primaria de ellas es interpretar la realidad que nos rodea, por una parte, manteniendo con ella relaciones de simbolización y, por otra, atribuyéndole significaciones; una actividad mental específica: la “remodelación mental” del objeto (Guimelli, 2004: 64).

y en la interacción social. La identidad del sujeto implica componentes cognitivos¹⁸³ y componentes sociales¹⁸⁴.

Por consiguiente, la identidad como “ciudadano” es interpretada por los propios sujetos, a partir de su lugar en la estructura social y de poder político, y de las oportunidades y recursos a su disposición en cada ámbito de interacción social, en los cuales se pone en juego la adscripción (pertenencia), el reconocimiento (protección) y la sociabilidad (derechos y obligaciones), según pautas de comportamiento adquiridas mediante complejos procesos de socialización, en la relación del individuo con el entramado político institucional.

Desde este punto de vista, en el proceso de esa interpretación recíproca, de cada sujeto como ciudadano y de los “otros” como también ciudadanos, se ponen en juego necesariamente representaciones sociales y formas simbólicas, que orientan el sentido para identificarse e identificar a los otros, por la interacción social y comunicativa y en el discurso mutuo, según repertorios culturales interiorizados dentro de un contexto históricamente específico y socialmente estructurado (Giménez, 2002: 38).

Entre todas las posibles, el análisis en este caso se satisface considerando la representación social o forma simbólica del “ciudadano” y “los ciudadanos” como sujeto político, individual y colectivo, respectivamente, adscrito a, reconocido por y relacionado con una comunidad políticamente instituida y organizada, en la que tiene

¹⁸³ Dos procesos complementarios, que circunscriben la especificidad de las representaciones sociales, hacen posible la función primaria de éstas, que consiste en constituir la realidad para el individuo y para el grupo social; por una parte el proceso de objetivación por medio del cual el grupo “naturaliza” un concepto abstracto para tornarlo concreto, simplificando las informaciones y especificando las nociones, para resumir en grandes rasgos su significado, a partir de la lógica interna del grupo; intervienen procesos de selección perceptiva (filtrado de informaciones, reteniendo unos elementos e ignorando otros) y de descontextualización (la descomposición del todo en sus elementos, sin tener en cuenta el contexto en el cual se encontraban), de manera que con las nociones seleccionadas se construye el núcleo figurativo de la representación, mismo que una vez constituido adquiere un estatuto de evidencia que lo hace “no discutible”; por otra parte, mediante el proceso de anclaje la representación echa raíces en el sistema de pensamiento pre-existente, porque la construcción mental del objeto se efectúa siempre en relación a las creencias y valores que predominan en el grupo en un determinado momento, de manera que se puede acoplar algo nuevo a algo que ya existía (Guimelli, 2004: 63-69).

¹⁸⁴ Las representaciones sociales abarcan el conjunto de creencias, conocimientos y opiniones *producidas y compartidas* por los individuos de un mismo grupo, en relación a un objeto social en particular” (Guimelli, 2004: 63, subrayado por el autor).

derechos y obligaciones y a cuya conducción y bienestar común puede y se espera que contribuya. En rigor, la noción sigue teniendo un cierto grado de abstracción, que por lo demás es ineludible, pero así planteada la noción moviliza un significado que puede ser comprendido y producido por el ciudadano promedio en el caso de que eso fuera investigado, y que permite eludir el tratamiento de la “ciudadanía multicultural”¹⁸⁵, lo que llevaría a otros fines esta investigación.

Las consideraciones precedentes contribuyen a entender la naturaleza asociativa y comunicativa del escrutinio ciudadano en sentido amplio, con relación al ámbito de la sociedad civil, en donde se entrelazan los vínculos que lo hacen posible y se afirman la identidad del sujeto como protagonista, aunque no sin riesgos y distorsiones; por eso ahora es pertinente analizar los aspectos que condicionan, potencian o restringen su efectución y alcance en el ámbito público, en el proceso de su publicitación, en el que la práctica adquiere su sentido estricto, pero encara otros riesgos y distorsiones. Por lo visto, hay razones para pensar que, en la práctica, los ciudadanos pueden recurrir a diversas formas de participación y acción política, así como disponen de diversos recursos y oportunidades, diferentes a los dispuestos por el cauce político institucional, más accesibles a ellos en términos de comunicación aunque menos próximas en términos de interacción y asociación. En principio, eso explicaría las posibilidades de que algunos de los ciudadanos queden expuestos a la evaluación crítica que otros hagan públicamente acerca del desempeño de los legisladores¹⁸⁶.

2.2.2. Información y Opinión Política: recursos para el escrutinio público

En tanto que público el escrutinio se define y está determinado por: 1) qué es lo que es examinado y lo que está implicado en lo que se examina, a partir de si la acción corresponde a un individuo, a varios sin estar organizados o a un grupo organizado; 2) en qué ámbito y quiénes lo ejerciten, a partir de si los participantes se involucran o no

¹⁸⁵ Noción elaborada en diversas perspectivas, notoriamente en la propuesta de Kymlycka (2003) de una teoría liberal de los derechos de las minorías, a partir de la premisa central de que la etnicidad y el multiculturalismo son las principales fuentes de conflictividad dentro de los ordenamientos democráticos-liberales, para un análisis en profundidad véase Bokser (2002).

¹⁸⁶ Hay ciudadanos pasivos y activos aunque sean participantes de la experiencia, ver capítulo 1.

con identidad ciudadana y actúan en el papel de ciudadanos¹⁸⁷; 3) la manera en que la acción tenga lugar, si transcurre como libre expresión de opiniones, una confrontación de las mismas y en condiciones de igualdad o no en cuanto a la participación, según las reglas convenidas; 4) las repercusiones que tenga el resultado producido sobre los sujetos a escrutinio, lo que depende de las reglas y recursos a disposición de los ciudadanos que permitan darlo a conocer (incluidos otros ciudadanos).

Cabría preguntarse de qué manera resulta afectado el escrutinio conforme escala, es decir se extiende o amplía, la cobertura de publicitación y/o el número de participantes, lo cual no significa lo mismo; eso lleva a considerar la apropiación de bienes públicos o colectivos. Todos los bienes públicos son colectivos, en cuanto a su producción y apropiación, aunque su disfrute no contraiga necesariamente el cumplimiento de haber participado o contribuido a su producción. Hay que considerar que hay bienes públicos más o menos tangibles o “simbólicos” (intangibles) para el ciudadano. Desde el punto de vista de éste, los primeros satisfacen necesidades materiales comunes o colectivas (una ley, programa gubernamental o servicio público, por ejemplo); los segundos solamente expectativas (saber que personas en situación de pobreza reciben subsidios para encarar necesidades básicas); todos implican una transacción, pero ésta puede estar desprovista o no de gratuidad.

Tal como lo es la información pública, la opinión política¹⁸⁸ es un bien público colectivo al que se accede en condiciones de gratuidad y que se apropia con igual derecho; no

¹⁸⁷ Desde la psicología política, Rouquette define el objeto de esta orientación como el estudio de la “ciudadanía práctica”, entendida como “el conjunto de formas cognitivas, relacionales y comportamentales a través de la cuales se expresa el hecho de pertenencia a una comunidad orgánica instituida”, (...) “que lleva las marcas de la división del trabajo. Está estructurada por las diferencias de poder y por las exigencias de acción” (2002:8); la ciudadanía práctica se distribuye en “Ciudadano Pensador”, aquel que se representa el Estado, la sociedad, la economía, la familia, la justicia y a los “otros” sobre la base de diferencias inter-grupos y de la referencia a una memoria compartida; de estas representaciones se derivan particularmente los razonamientos y toma de posición u opiniones; “Ciudadano Pensado”, aquel definido normativamente por el poder instituido “pensador” (y como actor) “bueno o malo”, expresado y tipificado en el derecho y las instituciones y en forma explícita en la propaganda; y “Ciudadano Actor”, aquel que produce conductas certificadas en el espacio público, con relación a una acción colectiva, conductas por lo general ritualizadas, para ser recibidas y controladas por la sociedad, y herederas de guiones (scripts) históricamente constituidos y adquiridos (Ibid. 9).

¹⁸⁸ La opinión puede ser definida como un juicio personal, que implica una racionalidad y que supone la disposición de cierta información, que depende de la persona que lo elabora y, en su caso, expresa (Berrio, 2000). En consecuencia, se trata de una posición personal valorativa y argumentada sobre algo

hay un propietario singular que pueda reclamar válidamente exclusividad alguna; ambas satisfacen solamente expectativas, pero su valorización depende de los agentes responsables de su producción e intercambio, que en el caso de la naturaleza de este tipo de bienes pueden ser privados, cuando han sido concesionados por el Estado, u organizaciones intermediarias, que operan libremente en el ámbito público, con tan sólo las restricciones que les impongan las leyes (bien público generado solamente por los gobernantes electos). La valoración de la intervención de estos agentes estará sujeta, en último término, a la credibilidad y utilidad del valor que pueda o no ser otorgada a la información y opinión circulada o movilizada para su apropiación. Ésta y el disfrute de tales bienes puede tener lugar de modo individual o colectivo, directo o indirecto (a través de otros), lo que supone que si bien la producción de información y opinión está regida por su provisión colectiva, su apropiación está sujeta, en último término, a una valoración individual y circunscrita por el lugar y la participación del individuo en el intercambio simbólico, es decir por la valoración de las expectativas compartidas acerca de la necesidad que satisfacen o de su utilidad.

No debe perderse de vista que la opinión política es un bien público, en la medida en que corresponda acerca de los asuntos colectivos, es decir que conciernen y afectan a todos los ciudadanos; esta pauta cultural, asociada a la democracia liberal, orienta a los ciudadanos para valorar ese bien en tanto que único recurso efectivo que ellos producen y poseen, por igual, para vigilar al gobierno y sancionar el desempeño de los gobernantes electos; pero la opinión es tal a condición de que se haga pública, es decir que ingrese y circule y pueda ser apropiada libremente por cualquier ciudadano.

Visto desde ese punto de vista, el valor que pueda esperarse de la opinión, la crítica o la propuesta política de los ciudadanos sería indistinto de la escala social en que sean conocidos; el alcance de ese valor y los efectos que pueda producir se ven

dentro de los límites de lo que es posible. Por eso es difícil hablar de opiniones colectivas, lo cual necesariamente implicaría hacer diversas abstracciones y discriminar aspectos subyacentes a aquellos juicios en los cuales distintas personas pudieran coincidir. Vista desde el punto de vista de verosimilitud, la opinión se inscribe y mueve en el campo de lo que es creíble o posible, mientras que el conocimiento concierne a lo que es cierto con cierta probabilidad a partir de la demostración y la evidencia, lo que no depende de alguien en particular. Las cuestiones que son objeto de conocimiento son impersonales, en el sentido de que no dependen de alguien en particular ni requieren de su compromiso personal.

modificados, sin embargo, por la intervención de agentes intermediarios que hacen posible su apropiación e intercambio en el ámbito público, aquí en el sentido de lo revelado y de libre acceso. En consecuencia, las variables críticas del escrutinio público ciudadano son por una parte la identidad del sujeto protagonista, con independencia de su número y asociación y, por otra parte, la situación discursiva o mecanismo de interacción o participación, con independencia del asunto o tema específico, de tal manera que el escrutinio se modificará por la escala de la participación, o el número de participantes involucrados o implicados en y por la comunicación y difusión que permita hacer accesible su resultado y su circulación en el ámbito público.

La cuestión implicada aquí es que la práctica del escrutinio está sujeta a un triple condicionamiento: la libre discusión comporta el vínculo comunitario en situación de igualdad entre los participantes; su efectividad es informada por el sentido de lo colectivo; su alcance está supeditado a la publicidad de sus resultados, sin presuponer que necesariamente éstos consistan solamente de acuerdos o consenso.

Los medios de comunicación masiva otorgan el mayor alcance de publicidad a las opiniones políticas que difunden, aunque sean producidas por un reducido número de ciudadanos, mismas que entonces pueden circular a una escala social cuantitativa, hasta ahora, superior a cualquier otro medio disponible en el ámbito público. Al producir y hacer circular opiniones, los medios orientan el tratamiento de aquello que tales opiniones pueden informar, así como proporcionan ciertas coordenadas para las discusiones privadas a que pueda dar lugar el acceso común a tales opiniones, es decir su apropiación a través de ellos. En y por la comunicación mediática se produce una doble mediación cultural con la circulación de información y opiniones políticas, por una parte, a través de la difusión mediática, y que por ese hecho puedan ser atribuidas como opiniones en público, dado ese tipo de acceso a ellas, lo que supone su efecto de “mediatización”, y por otra parte, a través de las opiniones particulares que acerca de esas opiniones se produzcan e intercambien en los ámbitos privado e íntimo en la convivencia cotidiana, a partir de sujetos participantes de la difusión mediática cuyas opiniones son objeto de conversación o discusión con otros, lo que supone el efecto de “reelaboración discursiva” (Thompson, 1998).

En contraste, en el ejercicio de la representación política, legisladores y partidos políticos proporcionan, por su parte, los asuntos colectivos que, debido a su intervención deliberativa pública, están sujetos a decisión en los órganos de gobierno y, por tanto, abiertos a cualquier ciudadano cada vez que sus titulares se reúnen o sesionan; todas las acciones se conducen para confrontar posturas o argumentos y hacerse escuchar por los pares y cualquiera que las presencie o pueda saber de ellas indirectamente en el tiempo. En las sesiones de Cámaras y comisiones legislativas de éstas está implicada y se pone en juego la rendición de cuentas vertical a los ciudadanos, aunque ésta sea supeditada a la horizontal y respecto del titular del ejecutivo, según la postura que cada legislador o partido político adopte.

Ahora bien, se ha visto que la transformación del sentido de lo público y de lo colectivo tiene impacto en la conformación de la identidad ciudadana y en los papeles para el desempeño de las tareas democráticas. Una condición ideal es que el ejercicio del escrutinio sea liberado de coacciones, en especial aquellas que puedan provenir del poder público; en ese sentido supone la autonomía del individuo. En los hechos sin embargo el ciudadano es siempre interpelado, inducido y orientado por coacciones de diverso tipo, tanto por gobiernos, partidos políticos y organizaciones intermediarias de la sociedad civil, como por los grupos sociales de los que forma parte y en los que interactúa con inmediatez y de manera cotidiana. La libre discusión entre ciudadanos supone algún tipo de sociabilidad, alguna forma de interacción con los otros, que si bien depende de condiciones particulares, en cualquier caso requiere de comunicación entre ellos. La forma más común es la interpersonal en el entorno más inmediato y está referida a asuntos colectivos locales, que por cuanto corresponden a la comunidad son públicos. Aquí “lo público” se define por pertenencia y propiedad.

Son diversas las elaboraciones analíticas que se han ocupado de los cambios en las maneras de interactuar y dar sentido a lo colectivo. Para algunos “lo colectivo” pierde sentido como tal a expensas de la centralidad que adquiere “lo individual” (individualismo), instancia donde se puede producir un cierto vacío del lazo social. Otros han puesto el acento en que las instituciones políticas estatales no son capaces

de orientar el sentido de lo colectivo, en la medida en que se distancian de los entornos comunitarios locales y que los partidos políticos son cada vez menos capaces para representar a las clases sociales y dirimir los conflictos que resultan de la diversificación de los intereses y demandas particulares de grupos, ya que más allá de los cambios políticos, ha cambiado el significado de la política (Lechner, 2003)¹⁸⁹.

Los medios de comunicación masiva han venido a acortar distancias y llenar vacíos del lazo social a su nivel más agregado, entre un individuo ensimismado y encerrado en sí mismo y el resto de la sociedad y el Estado, que aparecen como estructuras superpuestas, distantes e incapaces de restituir las rupturas del lazo colectivo y unir voluntades. Aunque lo hacen supeditando lo colectivo a sus manifestaciones más generales, inmediatas y efímeras (Martín-Barbero, 2001, 2006, 2007). Otros advierten en eso la emergencia de movimientos sociales de corte *fundamentalista*, que no se originan ni actúan con base en identidad o pertenencia de clase social, y cuya actuación tiene asideros inestables y móviles (Mellucci, 1999b).

En esas condiciones lo público y lo colectivo se eslabonan en representaciones simbólicas y pautas culturales centradas en las prácticas sociales, antes que en las reglas y los procedimientos políticos, en las maneras de convivir y de restablecer la sociabilidad teniendo a los intereses colectivos como objeto de discusión y de decisión en común¹⁹⁰. Los medios de comunicación masiva proveen de elementos simbólicos y

¹⁸⁹ Tanto las formas institucionalizadas de hacer política como las ideas e imágenes que nos formamos de ella; dos de esos cambios modifican drásticamente el campo de la política institucionalizada: debido a la creciente diferenciación funcional, se diluye la centralidad de la política como instancia máxima de representación y conducción de la sociedad; ya no tiene bajo su mando los procesos económicos o el ordenamiento jurídico, campos que adquieren autonomía orientándose por racionalidades específicas (la política se convierte en un subsistema más); por otro lado, con la informatización de la política ya no se distingue nítidamente entre política acotada al sistema político y la “no política”, delimitación actualmente fluida y por tanto la política se despliega a través de complejas redes, formales e informales, entre actores políticos y sociales, aunque ofrecen una geometría variable según las exigencias de agenda y desbordan el sistema político. La rapidez de estos cambios se contradice con la inercia de la cultura política, por las dificultades en reproducir bajo las nuevas condiciones, valores y símbolos, percepciones, preferencias y actitudes que eran familiares (Lechner, 2001: 88).

¹⁹⁰ Puesto que nuestras preferencias inmediatas en la vida cotidiana o en los juicios sobre lo público no están desvinculadas y mantienen relaciones narrativas que nos autorizan a interpretar la realidad y, en las interacciones con otros, construir la propia identidad e imaginar simultáneamente que los otros piensan como nosotros, lo cual puede ser verificado en las narrativas de la difusión mediática, en la que los ciudadanos pueden ver representadas la mayor parte de sus opciones, puesto que su discurso nutre lo que se considera real, posible o ideal.

producen este tipo de representaciones sobre la base de la ruptura de contextos particulares que aparecen entonces inconexos en un mismo marco o mapa¹⁹¹.

Los medios pueden ofrecer nociones que remiten a múltiples contextos accesibles en común, aunque no se comparta el contexto social, espacial y temporal, de hecho prescindiendo del mismo (Thompson, 1998). Los medios contribuyen a instalar una sociabilidad fincada en el “simulacro” de vivir todos en un contexto común colectivo, al que todos pueden pertenecer por igual y respecto de todo aquello de lo que todos puedan apropiarse en y por la comunicación mediática (Martín-Barbero, 2001).

Al intermediar de manera culturalmente hegemónica la relación política entre representante y ciudadano, los medios pueden instalar una representación simbólica por la que se apropian de las tareas democráticas y las prácticas ciudadanas para hacerse cargo de ellas y llevarlas en su nombre a la difusión a gran escala para otros. Pueden hacerlo porque ofrecen un canal y un cauce de libre acceso a aquello de lo colectivo que hacen público, a través de la visibilidad pública y los recursos simbólicos que ponen a disposición de individuos y grupos sociales. Uno de esos elementos es la opinión colectiva y la opinión pública¹⁹², mediante mecanismos que hacen percibir que la opinión de algunos puede aparecer como la opinión de muchos y la de éstos cual similar o la opinión misma de casi todos, aunque desde luego no lo sea en realidad.

Esta nueva forma de propiedad pública desarrollada por las instituciones mediáticas atenúan el vínculo entre la propiedad pública de un acontecimiento y la percepción

¹⁹¹ Si se asume que los medios no modifican sino refuerzan predisposiciones en aquellos que están ya comprometidos con un punto de vista, la mayor influencia que alcanzan los medios de comunicación se produce en aquellos que se comportan de manera ambivalente hacia la política y los políticos, tal como Graber (1993: 280) ha comprobado en el caso del comportamiento del votante medio estadounidense.

¹⁹² Para distinguir las diferencias entre las categorías opinión política, individual y colectiva, y opinión pública, véase D’Adamo, García, y Freidenberg (2007), quienes argumentan que cualquier definición del concepto opinión pública, con independencia de la perspectiva teórica y disciplinar, deberá resolver necesariamente los problemas relativos al sujeto, al objeto y al ámbito de la opinión, distinguirla de actitudes, y contener la intermediación que los medios masivos de comunicación ejercen en las formas de su conformación y desarrollo. Desde ese enfoque, definen la opinión pública como “la expresión de cualquier colectivo (grupo social) con capacidad de manifestarse acerca de un objeto de origen público o privado, pero de exposición pública, en un ámbito socialmente visible”, donde lo público no se encuentra determinado por la propiedad pública del objeto, sino por la visibilidad social de las manifestaciones, (Ibid: 24), cfr. Price (1994) y Monzón (2000).

que de él se tenía; lo público se proyecta fundamentalmente a través del prisma de los medios de comunicación masiva; se reconecta la capacidad de ser vistos y oídos por otros, en otros contextos, en un campo de visión distinto, que el espectador no elige ni tiene control sobre el mismo; la visión es unidireccional pues los protagonistas no ven a los espectadores y la conversación, activo del debate racional entre ciudadanos (Habermas, 1993: 374)¹⁹³, es desplazado por la apropiación privada de una conversación llevada en su nombre por la radio y la televisión. El nuevo tipo de visibilidad mediática hace aparecer a unos pocos que ejercen el poder ante la mayoría sobre los que se ejerce, en condiciones de disolución del vínculo de compartir un lugar común y restricciones a la interacción cara¹⁹⁴.

Aunque la opinión pública¹⁹⁵ tiene diversas modalidades de expresión, manifestación y circulación, terminan imponiéndose ciertas formas que los medios privilegian para representarla (en el sentido de sustituir el objeto ausente), en los contenidos que difunden: desde las encuestas de opinión hasta las marchas o mítines en vía pública, pasando por la entrevista en la calle a un reducido número de individuos aislados y arbitrariamente seleccionados; en cualquier caso y medio, los criterios utilizados son opacos y la representatividad es dudosa.

¹⁹³ Para quien en sociedades complejas la esfera pública consiste en una estructura intermediaria entre el sistema político de un lado y los sectores privados del mundo de vida y los sistemas funcionales, por el otro; representa una red altamente compleja que se extiende en una multitud de arenas internacionales, nacionales, regionales, locales y subculturales, las cuales se interceptan; las especificaciones funcionales, los focos temáticos, los campos políticos y otros factores proveen los puntos de referencia para la diferenciación sustantiva de las esferas públicas que son, sin embargo, accesibles a los "legos"; el concepto tiene dos niveles: el primero alude a un espacio social en el que individuos voluntariamente reunidos intercambian opiniones, emiten juicios, plantean demandas y procesan acuerdos; el segundo se refiere al espacio y los procesos por medio de los cuales los individuos reciben, interpretan y producen información a través de los medios masivos de comunicación.

¹⁹⁴ "La más estrecha relación entre lo público y lo comunicable pasa por la ambigua mediación centralizada en el discurso de las imágenes, que produce la emergencia visible de una crisis del discurso de la representación; por medio de ellas pasa una construcción visual de lo social en la que esa visibilidad recoge el desplazamiento de la lucha por la representación a la demanda por el reconocimiento" Martín Barbero (1999: 50).

¹⁹⁵ Por su función, es el medio para dar a conocer a los gobernantes los juicios de los ciudadanos y vigilar que los primeros no cometan arbitrariedades que afecten a los segundos; en una democracia, los ciudadanos constituyen a su vez públicos, es decir destinatarios expuestos a la circulación de información y opinión y a la vez se caracterizan por un papel activo, derivado de su derecho a expresar la propia; sin embargo, no es plausible reducir la opinión pública al resultado de encuestas o plebiscitos; como tampoco hacerla equivalente a la sumatoria de opiniones políticas individuales (Berrio, 2000), según McQuail (2005) no hay definición alguna libre de ambigüedad y controversia.

En las sociedades contemporáneas, sin embargo, la forma más generalizada de su manifestación es mediante la interacción comunicativa indirecta e impersonal, de pocos hacia muchos y sin interlocución efectiva entre participantes; paradójicamente, afecta la propia opinión de la mayoría de los individuos y, en ciertas condiciones, da lugar al intercambio y discusión de opiniones respecto de asuntos de interés colectivo. Pero del hecho de que ciertas opiniones políticas puedan circular en los medios de comunicación masiva no se deriva que tenga el carácter de opinión pública, por más que deba aceptarse que adquieren una condición de publicidad más extendida que aquellas que no circulan en ellos. La opinión publicada o difundida ampliamente no es pública solamente por ese hecho. La opinión pública consiste de flujos y corrientes que transcurren constantemente y adquieren diferentes modalidades, según la relación que guarden sus manifestaciones con la estructura de relaciones de poder y los conflictos relativos a su distribución y ejercicio en cada contexto histórico.

No hay forma de entender ese fenómeno sino admitiendo que no hay una esfera pública sino varias a distintas escalas y que las esferas públicas deben ser entendidas como redes de interacción social, propiciadas por modalidades y situaciones de comunicación orientadas a establecer la libre concurrencia, opinión y deliberación de asuntos colectivos sobre la base de criterios de validez que tales redes pueden establecer racionalmente y compartir¹⁹⁶; tampoco se entendería sin tener en cuenta las condiciones de ruptura de los vínculos sociales, en términos de la sociabilidad posible y real en distintos niveles de agregación de la comunidad, a partir de la función que tales vínculos, de diversa especie, ejercen respecto del sentido de pertenencia y de la condición de estar situado en el mundo social; la investigación ha puesto de relieve que con las transformaciones aparejadas a los procesos de globalización, se han difuminado las fronteras y acortado las distancias culturales, a la vez que la clase social pierde relevancia como criterio en la conformación de las identidades individuales (Tejeda, 2006; Lechner, 2006; Bokser, 2002). A partir del proceso de mediatización

¹⁹⁶ Los criterios de validez en la discusión y deliberación pública, tanto en el ámbito institucional de la política democrática representativa, como al nivel de la discusión entre ciudadanos en el sistema del mundo de la vida, constituye uno de los componentes estructurales del modelo discursivo que Habermas (2008a, 2008b) elaboró en su teoría de la acción comunicativa, misma que ha ejercido una enorme influencia en la teoría social contemporánea.

cultural, se entendería que, ante tales rupturas y discontinuidades, las personas se identifiquen y tiendan a asumir que sus opiniones particulares son compartidas por otros muchos y avenirse a ellas para orientarse en la vida cotidiana.

2.3. Mediatización de la política democrática

En la investigación del fenómeno de “mediatización de la política”, si bien hay una diversidad de aproximaciones, dos enfoques predominan y son complementarios. Ambos comparten la preocupación general en las maneras en que la comunicación mediática altera la configuración del ámbito público y las maneras de hacer política, afectando la relación entre gobernantes y gobernados en las democracias liberales y, por consiguiente, las condiciones y las disputas en torno al consentimiento político posible. Por un lado algunos se concentran en el papel de la comunicación política y la opinión pública en tanto que publicidad y contrapeso al ejercicio del poder político, respectivamente; por otro lado, otros consideran aquellas cuestiones pero en el marco más general de la influencia cultural, la colonización de la sociedad civil y la transformación de la vida cotidiana a causa de la comunicación mediática¹⁹⁷.

Desde el primer enfoque, por ejemplo, Mouchon (1998) sostiene que al confundirse con la lógica mediática dominante, la mediación política ya no contribuye con su papel de promover el intercambio democrático; así, al ser ostentado como análisis del acontecer político, los comentarios del analista en televisión proponen un esquema de lectura de la información que pretende pasar por esfuerzo de clarificación pedagógica

¹⁹⁷ Desde hace dos décadas, la relación entre medios y política ocupa un lugar central en la investigación académica, consiguiendo amplio consenso la tesis de que el debilitamiento de la política democrática representativa es correlativo a al fortalecimiento del papel político desempeñado por la comunicación mediática en la esfera pública, en la transformación del ejercicio del poder y de las prácticas políticas y, en consecuencia, con repercusiones en la configuración de la cultura política. La literatura especializada se reconoce que tales fenómenos conciernen al proceso más general por el que “la política” y “lo público” parecen perder la sustancia y rasgos con que se caracterizaron y las bases de legitimación en las cuales tradicionalmente se apoyaron. Recientemente se abre paso la idea de tal vulnerabilidad de la política democrática y la distorsión del funcionamiento conforme al ideal liberal y la teoría normativa se explica en el marco más general de las transformaciones culturales, en contextos sociales diversos trastocados por la gama de posibilidades de reconocimiento, asociación y comunicación en un espacio público global accesible a la mayoría de los individuos y grupos sociales; para la aplicación al contexto latinoamericano v. Martín-Barbero (1987, 2006), para una tipología de las mediaciones v. Orozco (2002, 2006), aplicadas al análisis de los procesos de recepción mediática v. Vasallo, Simões y Resende, (2006) y desde el enfoque de industrias culturales v. Sánchez Ruíz (2000 y 2007).

y explicación del discurso político, orientando la interpretación del telespectador ante la confusión implicada en el actuar de los agentes políticos; esa práctica pretende ser justificada con el hecho de que el discurso de aquellos es auto referente y, por eso, no puede ser comprendido por el público; como consecuencia, al razonamiento matizado se impone un ejercicio argumentativo reducido a oraciones breves, metáforas deportivas o relatos simplistas; ese proceder está determinado por la lógica del mercado de la información, que institucionaliza su producción mediática de tal manera que, no obstante que la tecnología audiovisual permita dar cabida a múltiples opciones, predomina un modelo bipolar de información para “élites” y para un “público masivo”, que se conforma con fuentes limitadas de información porque no dispone de tiempo y otros recursos; aún así, los periodistas están impelidos a ostentar cierta autonomía, manifiesta como contrapeso frente a la amenaza de intereses puestos en juego cuando los agentes políticos deciden sobre asuntos colectivos.

Desde el segundo enfoque, por ejemplo, Silverstone (2004: 235) llama la atención en que la transformación fundamental que operan los medios en la política no radica en influir, por sí mismos, ni siquiera por el acceso generalizado a su difusión, el ejercicio del poder político, sino en que para que éste sea legítimo, en términos de regulado por principios democráticos, requiere de la visibilidad pública que los medios de comunicación masiva le otorgan, a la par de la publicidad que a su vez pueden conferir a la evaluación crítica por parte de los ciudadanos. Con similar observación pero antes que él, Landi ubica el problema en la transformación del espacio público político y su supeditación a la lógica temporal mediática, centrada en lo efímero y la obsolescencia de los temas de que se ocupa y de la información que presenta sobre los hechos políticos, del que la “espectacularización” y la “personalización” de la política no son más que dos de sus manifestaciones; de manera que la televisión escenifica la política imprimiéndole una lógica propia a la “escena pública” (1991: 119).

Durante la década de los años noventa, muchos de los trabajos de estudiosos europeos tuvieron el mérito de plantear interrogantes sugerentes, más que resolverlos, a partir de una prolija producción de ensayos más que de investigación empírica, motivados por la centralidad que los efectos de la televisión tenía en ese tipo

de investigación en Norteamérica, con alcance experimental¹⁹⁸. Lo que importa destacar aquí es la indiscutible preocupación común por comprender y explicar fenómenos relativos a la producción de sentido de la política y del proceso democrático de cara al distanciamiento entre representantes políticos y ciudadanos, la desafección de éstos hacia aquellos, a partir de las implicaciones y consecuencias de la configuración del espacio público político, como consecuencia de los medios de comunicación, en especial la televisión, escaparate desde el que se podría poner en entredicho el funcionamiento democrático, en lo cual se advertían alcances en los problemas de gobernabilidad democrática de cada país.

Esa confluencia llevó a nuevas líneas de investigación y formulaciones respecto al fenómeno de las mediaciones culturales, para dar cuenta de las más diversas aristas de las disputas y mutuas influencias en el ámbito público político mediático, a partir de la producción del discurso mediático sobre la política y la intermediación que ejerce entre agentes políticos y ciudadanos, atendiendo a los diversos contextos de influencia en la recepción de contenidos, con investigación empírica longitudinal y comparativa. En consecuencia, el foco de atención se desplazó desde los efectos en los agentes de poder político hacia los efectos en los ciudadanos, debidos a la multiplicación de canales de comunicación, la sobreabundancia de información y opinión circulada y las condiciones de acceso y uso creativo de ellas para orientarse con relación a paridos políticos, gobiernos y legisladores, al margen de interactuar y comunicarse con ellos. Los hallazgos apuntan a que se ha acentuado la fragmentación y dispersión del debate político, en ausencia de dispositivos para su integración y de mecanismos de equiparación entre individuos y clases sociales para acceder a información relevante y suficiente sobre el acontecer político. La tesis de la mediatización de la política se robustece con la investigación de los mecanismos de mediación cultural¹⁹⁹ y aquella

¹⁹⁸ En un estado de la cuestión de la investigación en comunicación política en esa década, luego de su trabajo pionero (1981), Swanson y Nimmo (1990:7) definen el campo a partir de la interrelación entre procesos de comunicación y procesos políticos, en lugar de una aproximación sociológica que lo asumiera a partir de las propias descripciones de los investigadores de comunicación política.

¹⁹⁹ Tal como privilegiar personajes sobre instituciones (“personalización de la política”), presentar las narrativas informativas y la opinión cual si se estuviera ante un espectáculo (“espectacularización de la política”); producir programas acerca de debates televisivos ya difundidos, utilizar encuestas mediáticas como principal recurso para encarar a agentes políticos y aquellas que éstos por su parte utilizan, entre otros dirigidos a disputar las audiencias menos informadas y políticamente sofisticadas.

comunicación interactiva²⁰⁰ desprovista de restricciones del ámbito político institucional y del mediático convencional, en cuyo desarrollo los efectos de mediatización de la política han sido informados por nociones “duras” que van desde “mediocracia”²⁰¹ hasta “democracia de opinión”²⁰² y “democracia electrónica”²⁰³.

Al considerar el proceso de mediatización de la política, sus implicaciones y consecuencias, es necesario ser cautelosos. En general hay acuerdo en la idea del desplazamiento de la centralidad de la política institucional, su creciente fragilidad y debilitamiento en el conjunto del sistema societario²⁰⁴. Esa postura sin embargo

²⁰⁰ No obstante la multiplicación de canales de información y comunicación, debido a las condiciones de acceso y uso de tales canales; situación que en parte deriva de que los contenidos de la comunicación son dispuestos por sus proveedores según grupos de destinatarios con características en común y que se distinguen de otros en cuanto a sus requerimientos, consumo y formas de interactuar (“segmentos”). Una consecuencia es la tendencia a la radicalización de posturas entre los diversos estratos sociales en cuanto al antagonismo que puede haber entre ellos, a partir del desigual acceso, propiedad y uso de los medios a su disposición; lo que lleva a lo que Sampedro (2005, 2008) llama *tecnopolítica* (acción de debatir sobre política a través de Internet y telefonía móvil), una movilización fragmentada de grupos de ciudadanos que no necesariamente interactúan entre sí pero pueden oponerse unas a otras

²⁰¹ Idea que Richieri (1994) argumenta con base en el hecho de que ninguna constitución política preveía hasta los años noventa que los medios de comunicación sean responsables de sus acciones; carencia que representa un riesgo para el desarrollo de la vida democrática, ya que si una regla de la democracia establece equilibrio y contrapesos entre poderes a fin de limitarlos, los medios de comunicación se han desarrollado como una fuerza sin control y protegida ante la sanción de los ciudadanos.

²⁰² “La política depende ahora más que nunca de los medios y sobre todo de la televisión. Más que el Parlamento, la televisión es el gran foro público donde se debate lo que a todos atañe y donde se libran las batallas por el poder. El acceso y el control de los medios son en la actualidad el máximo recurso estratégico, y tanto los líderes como los partidos políticos consideran a los tiempos y espacios que logran en los medios como las divisiones con que cuentan para vencer a sus adversarios. Porque la televisión no es solo la cancha en la que se dilucidan las batallas políticas, sino también el arma que se utiliza para asegurarse la victoria en las mismas” (Muñoz-Alonso, 1999: 16). En España, por ejemplo, en la última década, se abrió paso un enfoque que diferencia la opinión pública y la comunicación política, aunque sean objetos vinculados en igual campo de conocimiento (Rospir, 2003).

²⁰³ Que es admisible en el sentido de que, como afirma Castells (2006), la política se decide cada vez más en un espacio de comunicación modal, aunque no a partir de la visión tradicional acerca de que el sistema mediático es decisivo en la formación de opinión pública que condiciona las decisiones en el sistema político, sino de la premisa de que el poder y la política se deciden en el proceso de construcción de la mente humana a través de la comunicación, porque la política es antes que todo política mediática, que conduce a la personalización y el escándalo como principales manifestaciones de expresión; siendo ésta transformada por el Internet, la WEB 2.0 y la telefonía móvil, que hacen posible la emergencia de la auto-comunicación de masa, redes de comunicación horizontales que pueden devenir en un contrapoder, en el sentido de capacidad de un actor colectivo para resistir y desafiar a las relaciones de poder institucionalizadas, lo que ofrece una mayor intervención a los ciudadanos y movimientos sociales para definir políticas alternativas a gobiernos y partidos políticos.

²⁰⁴ Que para algunos lleva a una “crisis” de la representatividad (Touraine, 1998); para otros a la erosión de la capacidad del Estado nación para decidir en su territorio, debido a la fragmentación del poder económico y político entre múltiples centros externos de decisión; al malestar y desafección de los ciudadanos respecto de las instituciones democráticas, la pérdida de relevancia de las diferencias ideológicas, del papel educativo de los partidos y los efectos mediáticos de deslegitimación de la política en aras del entretenimiento, como consecuencia del cambio social (Paramio, 2003: 54).

genera reservas entre varios estudiosos, para quienes las causas de ese fenómeno son diversas y no radican solamente en los fenómenos de influencia mediática en sí mismos, sino en la medida en que se conjugan con una progresiva pérdida de capacidad de la política democrática representativa para dirimir el conflicto entre clases sociales y atender a una demanda social cada vez que más heterogénea.

Visto el fenómeno desde el punto de vista de la comunicación mediática y la configuración del espacio público de la política, que es el que aquí interesa, con relación al contexto Europeo, Wolton (1998: 130) ha planteado la fragilidad de la política, en términos de sus escalas temporales constitutivas, la relativa al acontecimiento y la correspondiente a la estructura, de modo que cuanto más domina el acontecimiento tanto más debe conservar su lugar el largo plazo, puesto que la comunicación política se sitúa en la intersección entre ambos; en consecuencia, es inestable cualquier equilibrio posible entre las disputas de políticos, periodistas y opinión pública por colocar asuntos en la agenda pública, así como para hacer prevalecer el propio punto de vista en la arena del espacio público político; esa inestabilidad deriva en principio de la contradicción entre la lógica peculiar de la política, que corresponde al tiempo largo e histórico, frente a la lógica de gestión de la comunicación política mediatizada, basada en el tiempo corto y efímero.

Mouchon (1998) sostiene que la mediatización de la sociedad influye en las prácticas políticas; sin embargo, los efectos de ella no pueden plantearse sin tomar en cuenta aquello en lo que se funda la relación política. La distancia entre las decisiones de los gobernantes y las aspiraciones de la mayoría de la población desencadena protesta popular. La amplitud de las alternancias políticas indica que los ciudadanos quieren ser escuchados, pero los agentes mediáticos y la clase política se demoran en evaluar esa situación; como consecuencia, conforme se incorpora a la escena televisiva, la concepción centralizada y elitista de la política activa reacciones de repudio, mientras que los agentes mediáticos y políticos se auto-justifican en que las encuestas de opinión confirman el desinterés por la política entre la mayoría de la población.

En el contexto de América Latina, Trejo (2001: 125-126) ha alertado acerca del riesgo de argumentar que la política discursiva, centrada en los argumentos, las propuestas y el debate, ha quedado desplazada frente a la influencia de los medios y el predominio de la imagen, que en cierto modo desplaza al discurso; encomiablemente reconoce que los cambios están por conocerse con precisión y sugiere que, en todo caso, el espectáculo forma parte ya de la política y ésta ha sido integrada a la difusión mediática como tal; la mejora por su exposición pública pero no la sustituye, debido a que la política de masas es posible a partir de una relación simbiótica entre sistema político y sistema mediático, que a la vez que informa, uniforma; razón por la que si bien, ante procesos de apertura política, los medios pueden contribuir a los cambios, éstos no tienen necesariamente un sentido democrático ni durable; la utilización de la comunicación política es más efectiva para precipitar cambios de régimen que para construir instituciones estables, puesto que la condición de la sociedad civil es una variable de la ecuación medios y democracia. En el fondo de la cuestión está el papel de controladores antes que de escrutadores (Ibid: 54, 55).

En el contexto Norteamericano, Mazzoleni y Schulz (1999: 247-250) argumentan que el término *mediatización* denota una problemática concomitante con el desarrollo de los medios de comunicación, pero diferente de la función de *mediación* que ellos ejercen a través de actos de intervención, transmisión y retransmisión de mensajes, que salvan las distancias, en sentido físico y psicológico, entre los distintos actores sociales, instituciones y comunidades que necesitan comunicarse entre sí, incluso cuando requieren resolver los conflictos. En cambio, caracterizar a la política como siendo “mediatizada” trasciende una mera descripción de los requerimientos del sistema político; la noción *mediatización de la política* es una herramienta conceptual para referirse a la manera y medida en que el complejo de medios de comunicación masiva altera el funcionamiento del proceso democrático, un fenómeno que es común al régimen democrático, si bien en cada país tiene lugar a ritmos y con formas diferentes.

Desde ese enfoque, si bien la mediatización de la política implica a la mediación política, tales nociones no designan situaciones equivalentes; la primera es el fenómeno que resulta de la segunda y ésta es una condición necesaria para el

funcionamiento de cualquier régimen político democrático, que por un lado requiere de articular las demandas de los ciudadanos y sus expresiones de apoyo y, por el otro, difundir los resultados de su procesamiento, lo cual se consigue mediante la comunicación mediática, que canaliza el intercambio hacia la arena política.

El proceso de mediatización de los actores, los acontecimientos y el discurso político es una tendencia histórica, que inicia en la etapa en que pocos periódicos y medios electrónicos cohabitaban bajo subordinación al sistema político, pasa por una segunda caracterizada por la transformación tecnológica, expansión, comercialización y competencia por las audiencias, a la par de los cambios en aquél y la modernización del hacer político, llegando a la etapa actual de la comunicación multicanal, en que el sistema mediático se emancipa del sistema político y utiliza el enorme poder acumulado contra la propia esfera política que coloniza. La política mediatizada es aquel hacer político que ha perdido su autonomía, tornándose su función esencial dependiente respecto de la comunicación que hacen posible los medios masivos y, por tanto, de las necesarias interacciones con ellos (Ibi: 249). Es impensable la política sin el hacer de los medios, éstos modelan los patrones de actuación política de cara a la comunicación y visibilidad pública; sin embargo mucho de la “política sustantiva” se sigue practicando lejos de los focos de los medios de comunicación, entre bastidores, en las discretas salas del Congreso y el gobierno. Por consiguiente, un criterio apropiado en la cuestión es considerar que por su propia naturaleza, y con independencia de su valor sustantivo o simbólico, la política necesariamente tiene que transitar por la "publicidad" del escenario mediático, lo que supone recurrir a los medios para dar a conocer los términos de una decisión política, apoyarse en la persuasión o exponerse al escrutinio por parte de la prensa.

Desde ese punto de vista, la creciente dependencia de los procesos políticos respecto de la comunicación mediática ha implicado la transformación de aquellos y una mayor intrusión de los medios de comunicación en la vida política, lo cual no significa, sin embargo, que el ejercicio del poder político quede supeditado a ellos. Esta última suposición lleva a poner en entredicho aquella otra relativa al incontestable poder mediático y las distorsiones del proceso político democrático, hasta despojarlo de los

principios de la democracia liberal, ideas arraigadas en la comunidad académica. Entre tales distorsiones han sido señaladas que la política sea reducida a un “juego de mercado”; suplantar el debate de ideas, problemas e intereses de las personas; colocar a los ciudadanos en el papel de "consumidores" pasivos ante la ridiculización de líderes políticos (Jamieson, 1992; Entman, 1993; Patterson, 1993; Sartori, 1997). Esa postura fatalista cobra fuerza ante los riesgos que supuestamente entraña la posibilidad de que el proceso democrático sea conducido a través de la comunicación interactiva, directa e instantánea, entre ciudadanos y funcionarios de gobierno, una vez que se generalice el acceso a ella, lo que conllevaría la instauración de una arena política alterna más (Street, 1997, 2005)²⁰⁵. Un cauce que, tal como aquí se ve, ya es utilizado estratégicamente por los medios convencionales.

Ante esa postura, Mazzoleni y Schulz (1999: 249, 250) admiten que no puede darse por descontado que la intrusión creciente de los medios de comunicación en el proceso político represente un factor crucial en la crisis de la política democrática, sin embargo sostienen que esa intrusión no necesariamente equivale a un sometimiento de las instituciones políticas (gobiernos, partidos, líderes, movimientos), de hecho el proceso presenta diferencias entre países y los cambios producidos en el ámbito político no pueden ser explicados a partir de un patrón común de "democracia mediática"²⁰⁶.

2.3.1. Rasgos de los procesos de mediatización de la política

Desde el trabajo seminal de Lippmann (1922), la tendencia hacia la mediatización ha sido comprobada con base en observaciones acerca de cómo los medios masivos

²⁰⁵ Entre las consecuencias previstas por los críticos, se ha destacado que las tradicionales instituciones democráticas de la representación serán cada vez más irrelevantes y subordinada a otras; la fragmentación del electorado; la erosión de los tradicionales lazos sociales y políticos que han unido la organización política; los partidos políticos perderán su función como estructuras culturales de mediación entre el pueblo y el gobierno; la astucia, los políticos sin principios encontrarán más fácilmente que antes manipular la opinión pública y crear consensos mediante el uso de nuevas tecnologías de información y recursos; y los nuevos medios pueden facilitar la difusión de actitudes y opiniones populistas (Mazzoleni y Schulz, 1999: 248).

²⁰⁶ Se utiliza la expresión para designar una situación derivada de la interacción entre estructuras comunicativas, económicas y políticas en la definición de las agendas que configuran la opinión pública, porque según Carey (1997: 241) las sociedades nacionales modernas se construyen a partir de la comunicación pública desarrollada mediante sistemas mediáticos nacionales.

producen contenido político e interfieren en los procesos políticos. A partir de los hallazgos de investigación, se pueden describir los rasgos característicos del proceso, implicaciones y consecuencias, en los siguientes términos.

1) *Parcialidad del acontecer político mostrado y sesgos en su presentación.*- al transmitir noticias, los medios presentan sólo una muestra selectiva de sucesos de entre un flujo continuo de acontecimientos, a partir de criterios de “valor noticioso” (proximidad al contexto social, conflictos, drama y personalización, entre otros)²⁰⁷, si bien solamente una parte de ese valor es intrínseca al evento noticioso; en su determinación interviene la visión ideológica del periodista y las rutinas técnicas y profesionales de producción de contenidos; otro sesgo en la realidad mediática de la política proviene de que típicamente son acentuados los rasgos que hacen de un suceso un evento de interés informativo; esa selección define qué acontecimientos son informados y llegan a la atención del público y, en parte por ello, lo difundido puede aparecer como la única realidad accesible para la mayor parte de los ciudadanos y, con frecuencia, también para la elite política, en especial en ámbitos de actividad en los cuales la mayoría de las personas no tienen acceso directo y personal. Con excepción de asuntos locales, casi todo lo que sucede en el mundo político compone un dominio tal que es distante de la experiencia del día a día del ciudadano común.

2) *Distorsiones en la participación política y supeditación de ésta al escrutinio público escenificado en la difusión mediática.*- en las modernas democracias la participación de los ciudadanos es indirecta y la comunicación entre ellos y los gobernantes electos tiene que transitar por la esfera pública de intercambio de información y opinión que los medios masivos configuran, cuya gestión les permite controlar los términos del intercambio; decidir quién tendrá acceso al público; definir los papeles de los protagonistas políticos y los espectadores, quienes en ese escenario mediático actúan como público consumidor de información y opinión, más o menos pasivo; establecer marcos de referencia y conferir énfasis o relevancia política y cierto orden de prelación

²⁰⁷ Para una explicación de los criterios que rigen la producción de programas informativos o noticiarios y la construcción de la realidad del periodismo de televisión, desde una propuesta teórica de la hegemonía cultural, véase O'Donnell, H., (2007).

a los temas de que se ocupan, restándola a otros u omitiendo temas que pudieran ser relevantes para los ciudadanos o parte de ellos (Mazzoleni y Schulz, 1999: 250, 251).

3) *Imposición de parámetros para la acción política en términos de actuación mediática.*- es decir a partir de la lógica de la comunicación mediática, circunscrita por el aprovechamiento comercial ("media logic", Altheide y Snow, 1979) de la atención que grandes públicos prestan a los contenidos que difunden, así como de la influencia cultural que ostentan para hacer que sea percibida y conocida una realidad ajena a la experiencia individual; la información y la opinión que difunden y hacen circular confiere a los medios de comunicación el poder de construir marcos de referencia dentro de los cuales las personas construyen el significado de los acontecimientos y se orientan para relacionarse con otros a distancia; al circunscribir la información y la opinión a los imperativos, por un lado, del tiempo, formato y lenguaje que exige el canal y soporte comunicativo y, por el otro, de captar la atención y el interés, ampliar las audiencias y someter a los protagonistas que hacen visibles a tales imperativos, el acontecer político tiende a ser presentado en términos de "espectacularidad", a los que por tanto se tiene que arreglar y alinear la acción, el discurso y la comunicación políticas; la adaptación del lenguaje político a los patrones de gestión de la visibilidad pública mediática tiene como pauta la supremacía del "mensaje breve" ("síndrome del soundbite", Hallin, 1992) con resúmenes y paráfrasis de los dichos enfatizados por los políticos, con alcance en: a) la comunicación de la "perspectiva " de los actores políticos (gobierno, partidos, dirigentes o candidatos); b) las técnicas de comunicación utilizadas y c) el contenido del discurso político.

No obstante, con relación a éste último aspecto conviene aclarar que esa pauta priva en Estados Unidos de Norteamérica, a la inversa de lo que ocurre en Europa, en donde el exceso de información y opinión política que los medios ponen en circulación ha saturado a lectores y espectadores, tornándose en un fastidio para muchos, si bien las campañas electorales en el viejo continente se parece cada vez más a las campañas estadounidenses (Swanson y Mancini, 1996); con todo ello, lo que actualmente cuenta en política es la apariencia física, las habilidades y el estilo para comunicarse con el gran público, tal como ocurre por regla en la comunicación publicitaria comercial.

4) *Adaptación del hacer político y relación simbiótica con los medios de comunicación.-*

Si los agentes políticos ponen en escena un evento con el fin de conseguir la atención de los medios, o si dan forma a un evento para que se ajuste a las necesidades de los tiempos mediáticos, al escenario y la estructura del mensaje del aparador mediático, es en todos los casos porque consideran a la comunicación mediática un instrumento a su servicio, aunque al que tienen que adaptarse, cuya gestión depende siempre de los medios de comunicación; otra razón por la que es probable que mantengan cierta connivencia con respecto a la operación de éstos y, en último término, a tratar de ejercer cierto control sobre ella²⁰⁸; por eso los recursos de los medios de comunicación para captar la atención, sus rutinas de producción, los criterios de selección y mecanismos de modelación discursiva son conocidas por parte de los agentes políticos y los profesionales a su servicio; el uso de métodos para gestionar opinión pública y credibilidad, tales como encuestas de opinión, estrategias de marketing, negociación proactiva de noticias y el giro experto, son indicativos de ese fenómeno, que ha atraído buena parte de la investigación en años recientes (Mazzoleni y Schulz, 1999: 252).

5) *Acentuación del papel de los medios de comunicación como cauce y vehículo para la afirmación de la democracia liberal.-* Al otorgar visibilidad y voz pública a ciertos actores sociales, proyectos políticos, agendas y corrientes de opinión, movilizaciones de protesta y denuncias colectivas, representativos por lo menos en parte de algunos de los diversos sujetos sociales, los medios de comunicación contribuyen a un funcionamiento de corte democrático del sistema de dominación política, en particular a la representación y la participación política a que éste da cabida. Es en ese sentido, que puede afirmarse que los medios de comunicación se erigen en *símbolos* de protección del ciudadano frente a los abusos del poder político, ostentando el papel de “vigilantes” o “escrutadores” de la operación gubernamental, mediante la permanente estrategia política de reivindicar las garantías para el ejercicio de la libre expresión, aunque tal como se verá adelante aquella está al servicio de eludir control alguno por parte del Estado. Esa pauta simbólica ideológica no se riñe con la subsistencia de orientaciones políticas por parte de cada operador, corporativo mediático o de alguna

²⁰⁸ Tal como se muestra para el caso de los legisladores federales en México en este estudio.

alianza entre ellos;²⁰⁹ tampoco con alineamientos abiertos o temporales con respecto a partidos, empresas, sindicatos y grupos de interés²¹⁰. En los hechos, tales orientaciones y alineamientos están presupuestos en el ejercicio del ideario liberal, si bien ocurren a conveniencia del agente mediático, que de ese modo puede cobijar su actuación bajo ese “manto” ideológico, en ausencia de un escrutinio público institucionalizado acerca de la regulación legal, funcionamiento y difusión de contenidos, lo que depende de cada sociedad y contexto histórico.

Considerando tanto la orientación de la “mainstream” estadounidense, como de la semiótica anglosajona, en aquello que parecen coincidir, el efecto global de mediatización de la política podría reconstruirse en los siguientes términos. Los medios definen marcos de actuación e interpretación en que se produce el debate público más publicitado²¹¹, lo que no significa que todo debate público se constriña a aquel que tiene lugar en los medios. Lo hacen mediante el discurso, instancia en la que se plasman los esfuerzos destinados a definir la realidad pública para conseguir cierta validez colectiva. Los marcos son herramientas cognitivas utilizadas en tales esfuerzos (Donati, 1992: 142). La difusión informativa y de opinión organiza la percepción que las personas tienen acerca de un mundo de vida más allá de la experiencia inmediata y, por eso, vale la metáfora de que constituyen “una ventana hacia ese mundo”, una mirada por medio de la cual las personas somos inducidas hacia lo que quisiéramos saber, lo que necesitamos saber y lo que deberíamos saber (Tuchman, 1983: 10). Cada

²⁰⁹ Una fuerte tradición que originada en Europa desde el siglo XIX se extendió por todo el mundo durante el siglo XX, aunque es cada vez más visible en la prensa; la tendencia es regulada por dos situaciones prototípicas que son parámetros de la tendencia editorial: a) cuando las creencias políticas de los periodistas se apartan sustancialmente de las creencias de sus nuevas audiencias, lo que parece ser el caso en Italia y Alemania en donde los periodistas se ven a sí mismos como más liberales que su público (Patterson y Donsbach, 1996) y b) cuando los medios exageran sus funciones de control y se centran con exceso en los aspectos negativos de la política, tendencia evidente en la escena europea.

²¹⁰ Aspecto ampliamente investigado, del que habría que decir que la orientación editorial, que el análisis del discurso de contenidos difundidos permite develar, es, en ese sentido, apenas una de las manifestaciones de ese fenómeno; otras más relevantes conciernen a los arreglos, transacciones y alianzas que tejen redes de poder, en la reserva y opacidad del ámbito privado de relaciones entre élites económicas y políticas; algo difícilmente accesible a la investigación.

²¹¹ Los medios de comunicación proveen el medio ambiente cultural desde donde las identidades y solidaridades son construidas, un discurso de la sociedad civil consistente de una “estructura profunda”, un sistema semiótico común a través del cual los actores públicos hablan y a través del cual los lectores públicos interpretan lo que está siendo comunicado, a lo largo de la cual se despliega la estructura temporal, un conjunto de marcos narrativos comunes a través de los cuales los actores públicos trazan sus propios movimientos y los de otros en tiempo real. Ambos ambientes culturales simultáneamente restringen y habilitan a los actores públicos de la sociedad civil (Alexander y Jacobs, 1998: 30).

asunto político implica un discurso público, definido como conjunto particular de ideas y símbolos que son usados en foros públicos para construir significado (Gamson, 1992: 24). El discurso mediático proporciona interpretaciones y significados para eventos que acaban de suceder²¹²; al hacerlo, lo medios construyen algo de la realidad en el espacio público, su significado depende de la interpretación que cada persona haga; el grado de influencia que ejerza dependerá de la actitud de cada individuo al recibir los contenidos difundidos (Charaudeau, 2003: 11)²¹³.

Otra manera de explicar las consecuencias de la mediatización, también a partir de los cambios en la constitución de la esfera pública, sostiene que en el Estado democrático tales cambios se deben a la ruptura entre ella y “lo político”, consecuencia atribuida, por un lado, a que los medios de comunicación masiva desarticulan la sociedad y, por el otro, a que con la saturación de obligaciones del Estado se dificulta más gestionar la política democrática. En esta línea de argumentación, Ortega (2001) afirma que el espacio público es absorbido por el poder mediático, mismo que sirve como mediador tanto entre la política y “lo social” como entre sectores sociales. La clase política y los periodistas se convierten en representantes de un grupo de interés y eso modifica las formas de relación social. Aunque se puede coincidir en que las transformaciones del espacio público no se entienden al margen de, entre otros aspectos, la desarticulación política de la sociedad y la regresión a lo privado, es difícil estar de acuerdo con la idea de que no hay otro escenario esencialmente público que el de la comunicación mediática²¹⁴, si bien nadie dudaría, con razón, que los medios de comunicación masiva

²¹² En lo que concierne a la comunicación electoral, Klandermans (1992: 87) identifica tres niveles de construcción del significado, interdependientes entre sí: 1) en el que tienen lugar recorridos largos de formación y transformación de creencias colectivas, a partir de los cuales se forman las identidades colectivas que determinan las restricciones a las campanadas del movimiento; 2) en el que actores opuestos en competición buscan movilizar el consenso fijando las definiciones de varios grupos sociales; 3) en el que se transforman las creencias colectivas bajo el impacto de confrontaciones directas entre competidores y son afectados los participantes u observadores de un episodio de acción colectiva.

²¹³ Quien afirma que “Los medios no construyen lo que ocurre en la realidad social, sino que imponen lo que construyen en el espacio público, una realidad a partir de los discursos que transmiten”.

²¹⁴ Según Ortega, en el contexto de la Europa continental, con su aparición al Estado democrático corresponde la declaración y tutela de una serie de derechos, primero civiles y luego políticos para que lo público se funda con la acción política como su rasgo esencial, por lo que el espacio público se configuró por entero como el ámbito de las instituciones políticas (partidos, ideologías y movilización de masas), ya sea para acceder al gobierno o para desarrollar el orden institucional; por eso contrasta el “espacio público político” con lo que llama el “nuevo espacio público”, concepto utilizado también por estudiosos franceses para caracterizar esos cambios, cfr. Ferry (1998), Wolton (1998), Mouchon (1998).

detentan la hegemonía en un ámbito público caracterizado, actualmente, porque la visibilidad ocupa el lugar de la conversión de problemas e intereses individuales en colectivos, que ha tenido lugar con el cambio en el sentido de “lo público” (en tanto que ámbito de vida en común) en las democracias. Esta mutación de lo común en lo visible, que es en lo que los medios definen según los intereses de sus operadores, incluidos los periodistas y analistas que hacen participar visiblemente, significa en efecto una “colonización mediática” del ámbito público, aunque Ortega recoja sin reconocerla la robusta argumentación ofrecida por la perspectiva de Habermas (1991).

2.3.2. Mediación y mediatización política

Ahora bien, como se ha mostrado, hay una cierta confusión conceptual de la realidad que se pretende designar con los términos “mediación de la política” y “mediatización de la política”, que se refleja con el uso indistinto e incluso intercambiable en el análisis, incluso sin rigor para distinguirlo de la “mediación política”, aunque con las dos primeras nociones, no obstante los matices según la perspectiva teórica, se alude al reconocimiento de un efecto general que resulta de la manera en que la actividad política informa y los medios de comunicación masiva informan acerca de ella.

Por eso, se justifica hacer una consideración acerca del sentido que aquí se propone para cada concepto. La *mediación política* puede entenderse, en sentido estricto, como el desarrollo de mecanismos y dispositivos organizativos para ejercer la representación política en una democracia representativa liberal, de manera institucionalizada y con el menor ejercicio posible del poder de coacción o coerción. Entre sus manifestaciones características puede identificarse, por una parte, el surgimiento de organizaciones intermediarias entre el Estado y la sociedad civil, en especial los partidos políticos, en la intersección con el ámbito de la sociedad política, y los medios de comunicación masiva, en la intersección entre ése ámbito y el de la sociedad económica; así como por otra parte la consolidación de la correspondiente pauta ideológica respecto de la diferenciación entre un ámbito público, otro privado y

otro íntimo, excluyentes entre sí, en los cuales se desenvuelve la vida social. Aquí se ha sostenido que tal pauta conforma la tradición cultural de tales sociedades²¹⁵.

El concepto *mediatización de la política* designa, en congruencia con la propuesta teórica de Thompson (1998), en sentido amplio, al proceso socio-histórico de transformación del ejercicio del poder en las sociedades modernas, con régimen liberal democrático y diseño institucional de “constitucionalismo republicano”, como consecuencia de la generalización de la comunicación mediática, las formas de interacción social y de la producción, circulación e intercambio de formas simbólicas ideológicas y culturales que instituye. Aquí se ha sostenido que la política democrática depende en cuanto a su ejercicio de la publicitación de la acción del gobierno a gran escala. Los medios de comunicación masiva se implican activamente en la constitución del mundo social, ejerciendo una mediación de orden cultural. Al hacer disponibles imágenes e información a individuos ubicados en lugares lejanos, ellos dan forma e influyen el curso de los sucesos, llegando a crear acontecimientos que podrían no ser conocidos sin su intervención. Los individuos implicados en esos hechos suelen ser conscientes del papel constitutivo de los medios (Thompson, 1998: 157).

En ese marco conceptual, se entendería que la mediatización de la política ejerce una mediación cultural sobre la mediación política, por lo que podría hablarse, en sentido estricto, de una *mediación de la política* en sociedades democráticas, con tradición ideológica liberal, por la cual el ejercicio del poder político no puede sustraerse, por completo y todo el tiempo, a la visibilidad pública, como tampoco puede constreñir las libertades y los derechos políticos, acciones colectivas, agrupamientos y comunicación

²¹⁵ Esta distinción surgió como resultado del desarrollo histórico del tipo de dominación política asociado al capitalismo, que llevó a un tipo de organización societaria donde el Estado es concebido colectivamente como ámbito institucional en el que se deposita el ejercicio exclusivo del poder de coacción (poder político) y, por tanto, por encima y separado del resto de la sociedad, a la que culturalmente se denominó “civil”, y que sin embargo deposita ese consentimiento en el Estado en aras de su propia condición de supervivencia; “estado” y “sociedad civil” pasaron a integrar en conjunto el ámbito de lo que se llamó “nación”, entendido más allá del territorio como una colectividad políticamente organizada bajo ese patrón cultural. A ese tipo de organización política y social correspondió el paradigma ideológico cultural de la democracia representativa en la medida en que con el crecimiento de la población las colectividades circunscritas requirieron de un régimen político de representación asociada a la proporcionalidad de la diferencia de intereses, situaciones y condiciones de vida, mismo que permitiera a la sociedad ejercer algún tipo de control del ejercicio del poder político a cargo del Estado, como condición para mantener el consentimiento original y fundacional.

de la sociedad civil, sobre la base de diferenciar la regulación del ámbito público respecto del ámbito privado de la vida social, y viceversa, por lo cual tal ejercicio no puede prescindir y, a la vez, es afectado por la comunicación pública mediatizada.

Podría formularse entonces que la mediación cultural²¹⁶ constituye el mecanismo por el cual se restringen interpretaciones posibles y éstas son orientadas por repertorios de formas simbólicas o representaciones sociales, basados en pautas culturales convencionales compartidas por un conglomerado social, generalmente organizadas como tradición cultural, a partir y como resultado del ejercicio de algún tipo de poder, económico, político o simbólico, cuya distribución es socialmente asimétrica, así como del traslape de valoraciones atribuidas en el intercambio simbólico orientado a dar sentido a la acción individual y colectiva y a las interacciones sociales en cada campo (en el sentido de Thompson, 1998). A tales repertorios recurren los individuos y grupos sociales para orientar la selección de sentido y organizar los significados cuando se relacionan, interactúan entre sí y comunican. Con base en tales reportorios se gestiona y modela la interpretación de las condiciones y situaciones, las intenciones y motivación de la conducta propia y ajena, así como las confrontaciones y el conflicto, pero no al margen de la conciencia práctica y discursiva de los sujetos sociales.

La comunicación mediática a escala masiva interviene de modo definitorio en tales repertorios, porque contribuye a que sean interiorizados y socializados a gran escala, así como a su constante actualización, modificación y, eventualmente, cambio. En la base de su apropiación habitual y compartida por la circulación generalizada en y por medio de la comunicación mediática, las formas simbólicas organizadas por los reportorios hegemónicos en el ámbito público, subyace el poder simbólico mediático para proponer e imponer su constante adaptación ante situaciones inéditas,

²¹⁶ La mediación cultural mediática es una operación cognitiva que deviene de que la decodificación de los mensajes audiovisuales suplantando la experiencia directa y personal como referente y estímulos para su interpretación; parte de nuestro conocimiento se produce a través del medio audiovisual, a partir de la percepción de algo que está siendo representado como una realidad que no experimentamos personalmente, aún cuando seamos conscientes de que la propia producción de realidad representada por esa vía es uno más de los tipos de realidad en el entorno, la realidad construida mediáticamente. En ese sentido, tal como afirma Berrocal (2003: 65) ésta última no se pone en duda porque se está viendo y porque otros están inscritos (presentes) en esa realidad construida. Eso es parte de lo que consiste la pauta cultural convencional de la verosimilitud propia de los medios audiovisuales.

extraordinarias, contingentes, siempre con la finalidad de simplificar la comprensión, lo que supone que la producción simbólica mediatizada cumple la función de reducir la incertidumbre y simplificar las interacciones sociales en la vida cotidiana²¹⁷.

Desde esta perspectiva no cabría hablar de una mediación cultural en general, sino de distintos tipos de mediación de la cultura en los diversos campos de interacción, económico y político; y, en rigor, de modalidades diversas de cada tipo en la medida en que en las interacciones sociales se resista o se condesienda con las formas simbólicas impuestas y comúnmente aceptadas. Una convención analítica es reconocer que, en general, hay tipos generales de mediaciones peculiares a los distintos campos de acción e interacción social (económico, político y cultural), y tantas mediaciones como sub-campos puedan ser caracterizados como peculiares y distintos entre sí. De ese modo, puede hablarse de mediaciones políticas y de mediaciones de orden cultural intermediarias entre campos sociales, como es el caso de la ejercida en conjunto por el funcionamiento de los medios de difusión masiva, una de cuyas funciones es proveer al flujo bidireccional impersonalizado de mensajes entre ciudadanos y gobernantes.

2.4. Mediatización de la cultura, comunicación mediática e intercambio simbólico mediante la televisión

De la misma manera, por otra parte, es necesario especificar las nociones de “mediación cultural” y “mediatización de la cultura” desarrolladas, para entender de qué manera los medios de comunicación masiva, en especial la televisión, han contribuido a modificar las formas de hacer, percibir e interpretar la actividad política. Desde una perspectiva de análisis cultural, pueden entenderse las dimensiones simbólica e intersubjetiva que están implicadas en el proceso de mediatización de la cultura y el intercambio simbólico, en el que los sujetos receptores son concebidos como sujetos activos que procesan, reelaboran y producen los textos mediáticos que hacen circular sus productores, y por tanto, los receptores son a su vez productores de

²¹⁷ De acuerdo con Lodge y Hamil (1986) y Lodge, Steenbergen y Brau (1995) la gente aprende del contenido mediático a entender sumariamente situaciones, más que a recordar hechos específicos acerca de asuntos o personalidades comunes en la difusión. Es ese tipo de entendimiento, acerca de situaciones, lo que es integrado a las decisiones políticas.

sentido y agentes de interpretación y de “reelaboración discursiva” en sus respectivos grupos sociales y en los ámbitos de la vida íntima y privada. Uno de los exponentes de la perspectiva de los llamados “estudios culturales” (“*culture studies*”) ilustra esta concepción. Concibe la mediatización como proceso que se extiende más allá del punto de contacto entre los textos mediáticos y sus lectores o espectadores, envolviendo a éstos y a los productores de aquellos en una ininterrumpida actividad de unión y desunión con significados cuya fuente o foco reside entonces en textos mediatizados. Tales significados se despliegan y extienden a través de la experiencia y se evalúan con referencia a ella, en una gama diversa de maneras.

“La mediatización implica el movimiento del significado de un texto a otro, de un discurso a otro, de un acontecimiento a otro. Implica la transformación constante de los significados, tanto en gran escala como en pequeña, significativa e insignificante, a medida que los textos mediáticos y los textos sobre los medios circulan por escrito, en el habla y en formas audiovisuales, y nosotros individual y colectivamente, directa e indirectamente, contribuimos a su producción” (Silverstone, 2004: 32).

Debido a la mediatización, las personas pasamos a formar parte de los medios, tanto como ellos pretenden formar parte de las personas.

“Los significados mediatizados circulan en textos primarios y secundarios, a través de intertextualidades sin fin, en la parodia, y el pastiche, la repetición constante y los discursos interminables, tanto en la pantalla como fuera de ella; en ellos actuamos e interactuamos como productores y consumidores, con la intención urgente de comprender el mundo, el mundo mediático, el mundo mediatizado, el mundo de la mediatización. Pero también, y al mismo tiempo, utilizamos los significados mediáticos para evitar el mundo, distanciarnos de él y, tal vez, de los desafíos de la responsabilidad o el cuidado, el reconocimiento de la diferencia” (Silverstone, 2004: 33).

Los medios detentan ubicuidad²¹⁸ y a la vez centralidad en la vida cotidiana y constituyen el escaparate más amplio y accesible para percibir aquello que del mundo real seleccionan como relevante, o bien que se ajusta a las pautas culturales de valoración que ellos mismos contribuyen a afirmar. La mediatización es, en uno de los sentidos del concepto, el hecho o la condición de que los medios de comunicación masiva resulten fundamentales para la experiencia de la mayor parte de las personas acerca del mundo y que tal experiencia se enriquezca o empobrezca, en el campo de

²¹⁸ No hay sector de la vida social contemporánea que no se vea afectado por la presencia de los medios (Silverstone, 2004: 240).

acción simbólica y cultural, a través del espacio y del tiempo por obra de imágenes e ideas, palabras y narrativas a los cuales, de lo contrario, las personas no tendrían acceso. Eso lleva a afirmar que los medios intervienen de una manera decisiva en el desarrollo de la dialéctica de la distancia y la proximidad, de lo conocido y lo desconocido (Silverstone, 2004: 239), vale extender el argumento, según la cual se articula el mundo social en la sociedad contemporánea, a partir del pluralismo o posibilidad de ser reconocido y comprender al otro a pesar de la diferencia.

Desde esa perspectiva, la clave para entender sus efectos en la política implica analizar las pautas culturales que organizan la producción simbólica y, a la vez, aquellas de orden ideológico que permiten representar la actividad de la sociedad en el espacio público, en los distintos dominios de relaciones e interacciones sociales, prescindiendo de los sujetos, las condiciones y las reglas que en cada dominio rigen²¹⁹, en lo que puede ser denominado “la construcción mediatizada de la realidad”, uno de los principales efectos que producen en conjunto los medios de comunicación masiva.

En esa orientación aunque desde otra perspectiva, la de una teoría sociológica de la comunicación mediática, con un enfoque hermenéutico, Thompson (1998: 17) entiende por mediatización cultural, en sentido estricto, la transformación de la organización espacial y temporal de la vida social, al crearse nuevas formas de acción e interacción, y nuevos modos de ejercer el poder, disociados del hecho de compartir un lugar común, lo cual es resultado de la mediación cultural que ejerce, de manera profunda e irreversible (Ibid: 72), la comunicación mediática, en tanto que forma institucionalizada de las comunicaciones públicas y dominante del intercambio simbólico en las sociedades modernas. Desde esa formulación teórica (Ibid: 36-40), la actividad simbólica se expande por doquier de la vida social; el desarrollo de los medios de comunicación masiva ha transformado la naturaleza de la producción

²¹⁹ Lo cual parece ser tomado en cuenta por Rogers y Dearing (1994), por ejemplo, en el caso del análisis de la función mediática de establecimiento de temas o asuntos públicos, a partir de la dinámica que se establece entre la agenda mediática, la agenda pública y la agenda política, según sean establecidos o privilegiados en la difusión mediática, una corriente dominante de opinión pública o por las élites gubernamentales, respectivamente; entre las cuales se produce una transferencia en cuanto a los productos porque, ante la necesidad de orientación, las personas encuentran alguna agenda más relevante que otra debido a su afiliación a cierta comunidad, de modo que debe ser considerado el fenómeno de combinación de agendas (“agenda melding”), tal como sostiene McCombs (2004).

simbólica; los productos simbólicos se han convertido en productos para el intercambio y el consumo, accesibles a individuos diseminados en el espacio y el tiempo; el rasgo característico reside en que las formas simbólicas circulan a escala global y son determinadas por el establecimiento de una cuasi interacción mediática, que altera la percepción de las dimensiones de espacio y de tiempo, en términos de una ruptura entre, por un lado, el proceso de producción y circulación y, por el otro, el proceso de recepción y apropiación de formas simbólicas (Ibid: 25).

2.4.1. Comunicación mediática e intercambio simbólico mediatizado

A partir de ese rasgo puede ser entendida la diferencia entre comunicación masiva y comunicación mediática, que no corresponde solamente a matices, porque junto con las características técnicas debe ser considerada, sin embargo, la centralidad y el sentido fundamental de la dimensión simbólica irreductible²²⁰ que comporta la comunicación mediática para el intercambio y la apropiación generalizados de información y contenido simbólico, prescindiendo del hecho de compartir el mismo contexto espacial y temporal.

Todo proceso de intercambio simbólico implica un soporte técnico o sustrato material con los que la información o el contenido simbólico se fija y es transmitido de un emisor a un receptor; de cuyas propiedades (tipo de fijación, reproducción, grados de separación espacio-temporal, competencias implicadas)²²¹, depende que facilite o circunscriba cierto tipo de producción simbólica y de posible intercambio (Ibid: 36). Los soportes técnicos de la comunicación mediática hacen posible la circulación de contenido significativo a gran escala, sin embargo no es masiva por el número de individuos involucrados sino por el hecho de que pone el mismo contenido simbólico a disposición de una pluralidad de destinatarios; su sentido real de mediación cultural del intercambio simbólico deviene de que los mensajes son producidos por un

²²⁰ Se ocupa de la producción, almacenamiento y circulación de materiales significativos para los individuos que los producen y los recibe.

²²¹ En virtud de la fijación se puede almacenar información o contenido simbólico; de la reproducción, se puede comercializar ese contenidos como bienes de consumo; que se producen en un contexto y se movilizan a través del espacio y el tiempo y se insertan en otros.

reducido grupo de individuos, transmitidos en una sola dirección y de manera impersonal hacia otros muchos que están situados en emplazamientos alejados espacial y temporalmente del contexto de emisión. Los receptores de los mensajes no actúan como participantes de un proceso recíproco de intercambio comunicativo, sino más bien de un proceso simbólico de transmisión estructurada (Ibid: 44, 45).

Si bien el proceso comunicativo es asimétrico, no es enteramente monológico o unidireccional: hay una gama de acciones en que pueden involucrarse los receptores, desde hacer llegar sus puntos de vista a quienes emiten los mensajes hasta rechazar su recepción. En los procesos de intercambio, los individuos utilizan formas de conocimiento y presuposiciones que dan forma a la manera en que entienden los mensajes, se relacionan con ellos y los integran dentro de sus vidas.

“El proceso de comprensión es siempre una interacción entre los mensajes codificados y los intérpretes disponibles; éstos siempre ofrecen una disposición de recursos culturales para llevar este proceso a buen término” (Ibid: 43).

Como consecuencia, ella instituye una reorganización de las formas en las que el contenido y la información simbólicos se producen e intercambian en la esfera social, así como una reestructuración de las maneras en que los individuos se relacionan unos con otros y consigo mismos y, por consiguiente, una reelaboración del carácter simbólico de la vida social. Debe ser entendida invariablemente en tanto que fenómeno social contextualizado (Ibid: 26). De sus características se desprenden las maneras en que transforma el intercambio de la información y opinión, contenidos en que se fijan y movilizan las formas simbólicas y a partir de cuya valoración y apropiación se pueden conocer los efectos de la mediatización de la política. La comunicación mediática se basa en el desarrollo tecnológico y un espectro de estructuras institucionales que, en conjunto, hacen posible la explotación comercial del intercambio simbólico, debido a que, no obstante la ruptura estructurada entre la emisión y recepción, el flujo de mensajes no está circunscrito por la interpelación de los receptores respecto de su contenido, quienes aún así le otorgan valor, entre otras razones por la facilidad con que pueden disponer de él y porque no tendría otro modo de allegarse un contenido semejante; eso no significa dar por sentado que tenga atributos intrínsecos, ni que satisfaga plenamente todas las preferencias. Una fuente

de valor común es que las formas simbólicas adquieren un carácter público, en términos de una accesibilidad, que otras no alcanzan, para muy diversos individuos y grupos sociales dispersos a lo largo de diversos contextos. Puede pensarse en los receptores como “socios desiguales” en un intercambio simbólico indeterminado, en principio, porque el emisor carece de “pistas” acerca de las reacciones de aquellos que, por su parte, actúan libremente sobre el mensaje²²².

Las formas simbólicas son constructos de significado, expresiones lingüísticas, acciones y objetos que representan de modos particulares la realidad social, permitiendo a individuos y grupos sociales comprenderse a sí mismos, interpretar a los otros y las interacciones con ellos. El significado de ellas es movilizado tanto por las nociones pre-constituidas y reelaboradas como por nociones distintas al sujeto, mismas que se articulan en el flujo de intercambio simbólico que tiene lugar en las interacciones sociales, en contextos socio-históricos en los que las relaciones sociales se articulan asimétricamente. Todas las formas simbólicas son de orden cultural; sólo aquellas cuyo significado se vincula al poder son de naturaleza ideológica. La ideología es el conjunto de formas simbólicas que establecen y sostienen las relaciones de dominación.

Toda forma simbólica se caracteriza por cuatro aspectos relativos al “sentido”, “significado” y “significación”, entendidos desde el sentido común o “conciencia práctica”, a saber, *estructural*, el significado transmitido se construye comúnmente a partir de rasgos estructurales e interrelaciones entre elementos sistémicos que aunque independientes están concatenados en formas particulares; *convencional*, en la codificación de su producción y en la decodificación para su recepción se ponen en juego y aplican reglas, códigos y convenciones de diverso tipo, (esquemas implícitos y presupuestos), generalmente tácitas, compartidas y abiertas a la corrección y sanción; *intencional*, dicen algo sobre algo para alguien y por eso el destinatario tratará de

²²² La separación de los contextos de producción y recepción implica que el personal involucrado en la producción y transmisión de los mensajes mediáticos carece de las formas de respuesta directas y continuas características de las interacciones cara a cara. De ahí que, tales procesos se caracterizan por una forma distinta de indeterminación: ocurren en ausencia de pistas ofrecidas por los receptores. Para enfrentarse a esta indeterminación, los operadores mediáticos recurren a una serie de técnicas que van desde la clásica fórmula de publicar en entregas, hasta la investigación de mercado y el control y la regulación de la audiencia (Thompson, *Ibid*: 50).

comprender la pretensión del productor o emisor a partir del mensaje en que se vehiculan, de lo que dependerá su significado; *referencial*, su intercambio es significativo porque, en principio, típicamente representan algo o remiten a algo, pero la especificidad referencial de las figuras y expresiones utilizadas depende de las circunstancias particulares en las que son usadas.

En efecto, dado que el referente es un objeto, un individuo o un estado de cosas extralingüístico, las formas simbólicas requieren de una interpretación creativa, que va más allá de sus rasgos internos y su significado dependerá de su aspecto *contextual*, ya que los agentes que las producen, reciben e interpretan se insertan siempre, dotados de recursos de diverso tipo, en contextos sociales estructurados y procesos socio-históricos específicos, dentro de y por medio de los cuales tiene lugar el intercambio simbólico. Al ser portadoras de sentido referencial de las condiciones sociales de su producción, y al proporcionar claves de comprensión respecto de cierto contexto, las formas simbólicas adquieren valor simbólico. Debido a que su circulación permite disponer y disputar de recursos y oportunidades, en el mismo y en diferente campo de interacción social, ellas son objeto de procesos de valoración, evaluación y conflicto; éstos las convierten, por tanto, en bienes simbólicos a los que se atribuye valor económico. Los modos de valorar las formas simbólicas dependen de los medios técnicos, las estructuras institucionales y el contexto en que se despliegan.

Las formas simbólicas son producidas, transmitidas e intercambiadas de maneras diversas, dependiendo de los campos de interacción en los que se inscriben las relaciones, las instituciones y los diversos recursos disponibles y disputados entre individuos, grupos y clases sociales²²³. Un campo de interacción es un espacio de posiciones y un conjunto de trayectorias, que juntos determinan las relaciones que se dan entre los individuos y algunas de las oportunidades que tienen a su disposición. Al seguir cursos de acción dentro de los campos de interacción, los individuos aprovechan los diversos tipos y cantidades de recursos a su disposición y una variedad de reglas,

²²³ A partir de la propuesta conceptual de “campo simbólico” de interacción social, en la formulación que le da Bourdieu (1988), que permite entender los fenómenos culturales, sin prescindir del enfoque de agencia humana, presupuesto en el intercambio y consumo.

convenciones y esquemas flexibles (pautas implícitas de saber práctico). Las instituciones sociales son conjuntos estables de reglas y recursos, junto con las relaciones sociales que mediante ellos instituyen, dando entonces forma particular a los campos de interacción, al fijar ciertas posiciones (roles) y trayectorias (acciones).

En las sociedades modernas, por consiguiente, el intercambio de las formas simbólicas está influido por la comunicación mediática masiva, debido a las repercusiones que el proceso de disociación entre los contextos de producción y recepción tiene en las interacciones sociales, de lo que deviene la especificidad de la transmisión y circulación y de las respectivas instituciones que lo hacen posible. El uso de medios técnicos altera tanto las condiciones comunicativas como las condiciones de interacción social a partir de las cuales individuos y grupos ejercen el poder que detentan, en ambos casos en términos de espacio y tiempo. Algunos individuos y grupos sociales son capaces de actuar e interactuar a distancia con relación a otros; así como de alterar e influir en el curso de acontecimientos que suceden en contextos remotos.

La mediación cultural que ejercen los medios de comunicación consiste en que éstos construyen discursivamente una realidad posible, que forma parte de la realidad social en que se inscribe, a partir de aquella se ofrecen pautas culturales de interpretación y comprensión, de sí, de otros y de las maneras de relacionarse, cuya socialización a mayor escala que cualquier otro discurso público posible, tiene lugar tanto prescindiendo del hecho de la experiencia personal y de compartir el mismo contexto, como del hecho de enterarse, comentar y valorar las formas simbólicas, culturales e ideológicas, apropiadas de modo directo al ver, oír y leer televisión, radio, prensa o interactuar a través de Internet, con otros en los contextos de interacción cotidiana. Al ser aceptadas y compartidas, tales pautas permiten integrar realidades vedadas como realidades manifiestas, a partir de esa intermediación cognitiva y afectiva entre la realidad objetiva y la realidad subjetivamente construida por el individuo y los grupos en sus interacciones cotidianas, incluso acerca de objetos imaginados y, por eso, al alcance de cualquier sujeto social.

A lo largo de medio siglo, la investigación de las audiencias televisivas, en la perspectiva de los “estudios culturales”, ha mostrado que las audiencias se constituyen de subgrupos con subculturas, superpuestos entre sí, en los cuales se sitúan los individuos, quienes en tanto que receptores pueden adoptar la postura de aceptación conformista, de crítica y discriminación o de negociación matizada del sentido en la reinterpretación que hacen de los mensajes circulados (Morley, 1996: 128).

En igual periodo, desde la perspectiva de los efectos limitados y selectivos, la investigación, incluso experimental, ha demostrado que un patrón de influencia de los mensajes televisivos consiste en que los contenidos que aparecen primero en una emisión suelen tener un mayor impacto, en cuanto relevancia, interés y recordación, y que éste depende del conocimiento y la información disponible por parte del individuo respecto al tema o asunto, de manera que es mayor cuando menos se conoce y es menor en la medida en que sea más conocido y próximo a la vida cotidiana de los individuos y grupos sociales (Iyengar y Kinder, 1993).

La mediación cultural ejercida por la comunicación mediática consiste en un complejo proceso de reinterpretaciones de la realidad, que inicia a partir de que la lógica de producción de contenidos está sujeta a las restricciones técnicas y tecnológicas que impone cada medio, soporte y público destinatario (esquemas productivos y rutinas profesionales), pasa por la intencionalidad y orientación política editorial atendiendo a presiones y grupos de interés, la perspectiva del periodista y los acontecimientos contingentes, y deriva en un discurso mediático que ajusta su programa narrativo a los tiempos y la convenciones de consumo de sus contenidos implicada en cada medio, lo cual responde además a un entorno de competencia constante por ganar patrocinio y audiencias. Varios estudios han encontrado correlación entre la cantidad de información, la forma en que ésta se presente y los niveles de competitividad, como resultado de un entorno de alta competencia que, para el caso de las noticias audiovisuales, ha llevado a aumentar el ritmo visual, reducir la exposición de las declaraciones de personajes, aumentar la incorporación de personas anónimas que aparecen como fuente y la tendencia a buscar narraciones extraordinarias con tendencia a dramatizar los hechos. Los imperativos mercantiles de operar en un

sistema de mercado han influido en la manera en que los medios construyen el discurso informativo. Eso es más acentuado aún en la televisión, debido al creciente papel que el audiovisual ha pasado a desempeñar, como medio de comunicación política y frente al tradicional papel de la prensa como arena política.

2.4.2. Poder simbólico y cultural de los medios de comunicación masiva

Muchas de las pautas de sentido para relacionarse e interactuar en el ámbito público se han transformado como consecuencia del desarrollo de la comunicación mediática, así como de los procesos de mediatización cultural que ella hace posibles en las formas de interacción social, con lo cual se ha alterado el sensorio individual y colectivo para percibir y construir cognitiva y discursivamente la realidad social (Martín-Barbero, 1999, 2001, 2006), en cuya base material se halla el desarrollo técnico y tecnológico de las comunicaciones en las sociedades contemporáneas.

La mediación cultural que ejercen los medios de comunicación masiva deviene de la naturaleza de los bienes que produce y del alcance con que son apropiados y valorados; esa mediación corresponde al papel que los medios desempeñan, en tanto que organizaciones intermediarias, como enlace en términos de publicidad y comunicación colectiva de orden público, entre ámbitos institucionales de acción e interacción política, económica y cultural; un tercer rasgo de esa mediación es que ella es resultado de la comunicación a distancia entre los sujetos, que en cuanto concierne al ámbito político afecta y altera la representación y la participación de ellos.

El problema reside en que ninguna de las funciones y finalidades de las organizaciones intermediarias y, por tanto, de las estrategias de los agentes sociales involucrados, deja de desempeñarse al mismo tiempo con referencia a la sociedad política y a la sociedad económica. Ello no sólo es consecuencia del flujo ininterrumpido de mensajes, informaciones, opiniones, propaganda, publicidad comercial y entretenimiento, que los medios de comunicación masiva hacen posible. Más allá de eso, sin excluirlo, está la cuestión de la dimensión simbólica de la vida social.

Las actuaciones e intervenciones de otros agentes políticos y económicos, así como de las organizaciones intermediarias, se entrecruzan en el ámbito público social de la sociedad civil, a cuya visibilidad ninguno de cara a los ciudadanos puede sustraerse, quienes concurren en calidad de lectores, radioescuchas o telespectadores. El poder cultural o simbólico es la capacidad de intervenir en el transcurso de los acontecimientos, para influir en las acciones de los otros y crear acontecimientos reales, a través de los medios de producción y transmisión de las formas simbólicas. Los individuos están constantemente expresándose en formas simbólicas e interpretando las de otros; comprometidos en la comunicación entre unos y otros e intercambiando información y contenidos simbólicos. En este cometido, los individuos emplean recursos o “medios de información y comunicación”, que incluye el uso de los medios y las habilidades y competencias empleadas en la recepción de información y contenido simbólico, lo que Bourdieu (1997) llama “capital cultural”²²⁴.

Las instituciones mediáticas han dado forma a las maneras en que la información y los contenidos simbólicos son producidos y puestos en circulación en el mundo social. Las acciones simbólicas podrían dar a lugar a un incremento de las reacciones, podrían llevar a otros a actuar o responder de determinadas maneras, y dar preferencia a un tipo de acción antes que a otro, para creer o dejar de creer, para afirmar su apoyo a asuntos del Estado o implicarse en alguna revuelta colectiva. Nuestras experiencias vividas vienen precedidas, con frecuencia, por grupos de imágenes y expectativas adquiridas a causa de la continua exposición a los productos mediáticos. La comunicación mediática ha afectado al sentimiento de pertenencia de algunos individuos, a aquél que deriva de compartir una historia y un lugar, una trayectoria común en el tiempo y el espacio (Thompson, 1998: 56).

Tres de los efectos de mediatización de la cultura, en los que se pone en juego el poder simbólico mediático, residen en que:

²²⁴ A diferencia de éste, Thompson propone que el ejercicio del poder simbólico implica la creencia compartida y la activa complicidad, a pesar de que en algunos casos estas creencias puedan ser erróneas o fundarse en escasa comprensión de las bases sociales del poder, por lo que se deberían ver como posibilidades contingentes en vez de presuposiciones necesarias.

1) éste da lugar a una *historicidad mediática*: nuestra percepción del pasado y de las maneras en que afecta nuestra vida actual, depende cada vez más de una creciente reserva de formas simbólicas mediáticas; las personas pueden sentir que pertenecen a grupos y comunidades que se han constituido, en parte, a través de los medios. Nuestra percepción del espacio y el tiempo está íntimamente relacionada con nuestra percepción de la distancia y ésta está profundamente configurada por los medios con los que contamos para desplazarnos a través del espacio y el tiempo (Ibid: 55-57);

2) en los procesos de intercambio, los individuos utilizan formas de conocimiento y presuposiciones que dan forma a la manera en que entienden los mensajes, se relacionan con ellos y los integran dentro de sus vidas (Ibid: 33), en sus diversos entornos sociales se implican en la tarea de *elaboración discursiva*, por la que los mensajes mediáticos recibidos por unos son reelaborados, valorados y discutidos (refinados, criticados, elogiados) por y con otros individuos que no formaron parte de la “casi interacción mediática”. Los mensajes mediáticos adquieren así una audiencia adicional de receptores secundarios que asimilan la versión de los mensajes a través de los receptores primarios (Ibid: 149);

3) los mensajes mediáticos tienen alto grado de auto-referencialidad, remiten unos a otros y a acontecimientos que entonces aparecen relacionados entre sí; proceso continuo de reelaboración de mensajes denominado “mediatización extendida”²²⁵.

Queda claro que la mediatización cultural tiene consecuencias en la mediatización de la política, entre las que conviene destacar que la comunicación mediática:

A) Representa a otros que están distantes, por lo que los agentes políticos y sociales pueden adaptar su respectiva conducta comunicativa o la acción misma implicada para ser visto y oído por otros a partir del despliegue que hace la televisión y la radio.

²²⁵ Un periódico matutino informa sobre una entrevista televisiva a un legislador federal, en la cual éste comenta un incidente sucedido anteriormente; quienes vieron la entrevista podrán por su cuenta revisar o comprender el incidente que habrán oído en la radio o leído la noticia en el periódico, o bien discutiendo los mensajes con otros, si no tuvieron a la vista ninguna de esas fuentes. Aquí cabe destacar que la noción de mediación cultural en Silverstone equivale a la mediatización extendida en Thompson.

B) Gestiona un nuevo tipo de visibilidad antes imposible y, por eso, muy disputada en aras del reconocimiento, la pretensión de auto-justificación y la consecución de apoyos, pero junto con esas oportunidades aquella entraña a la vez riesgos políticos sin precedente, en especial para los gobernantes electos que sean presionados a dar la cara ante reclamos o denuncias, a partir del escenario mediático que no admite una deliberación, informada y argumentada, como la que supone el derecho de réplica.

C) Se amplían en gran medida la variedad de experiencias posibles a las que se exponen los individuos ante la difusión mediática, al margen de contar o no con experiencia personal al respecto, con lo cual se estimula la acción y respuesta individual y colectiva de los receptores, alterando sus rutinas y estrategias de acción.

D) Los acontecimientos de los que cualquier persona puede llegar a conocer y tener como referentes, quedan sujetos a un inédito tipo de escrutinio global; la naturaleza y el impacto potencial de ese ámbito de experiencia quedan conformados por arreglos y formas de poder institucionales, característicos de los contextos en los que se producen, transforman y reciben los mensajes mediáticos (Ibid: 19).

2.4.3. Tensiones entre la mediación política y la mediatización de la política

Se ha establecido un sentido amplio de la mediatización de la política: el creciente predominio con que los medios de comunicación masiva, en tanto organizaciones privadas, ubicadas entre el Estado y la sociedad, con un hacer público, ejercen la función intermediadora entre actividades y hechos que tienen lugar en los ámbitos público y privado, ejercida en sentido estricto mediante la producción y difusión de información y opinión acerca del ejercicio del poder político, incluida la representación democrática, cuya propiedad es pública y su apropiación irrestricta para la sociedad. Esa función es ejercida recurriendo y utilizando el poder simbólico mediático y es en el ejercicio de este tipo de poder que la mediatización se consuma²²⁶.

²²⁶ Siguiendo la terminología de Pierce, Verón (1998: 124-128) llama la atención en que dos fuentes de ese poder radican en, por un lado, la interfaz implicada entre el discurso político y la información, por la cual el agente político se hace presente para el público por intermediación del periodista y, por otro lado, el orden "indicial" del registro de contacto que establecen las interfaces a través de radio y en forma plena de la televisión, sin que sean anulados el orden simbólico propio de la escritura a través de la prensa masiva y el icónico, propio del régimen figurativo de la representación vía fotografía y el cine.

No obstante, debe considerarse que los medios encaran restricciones diversas, entre ellas la más relevante, en sociedades democráticas liberales, concierne a la regulación jurídica de las libertades de expresión y de los derechos a acceder a la información pública y a criticar al gobierno, sin que éste pueda ejercer coacciones respecto de lo expresado y lo opinado. En el marco precedente se ha podido entender de modo más plausible la mediatización de la política, frente a la idea que circunscribe el proceso a la creciente dependencia de la actividad política respecto a la visibilidad pública otorgada por los medios de comunicación, o bien a la reducción que tales medios imponen al contenido sustantivo de la actividad política, como consecuencia de la adaptación del mismo al lenguaje técnico-expresivo audiovisual y los dispositivos de comunicación. En esa idea se pone de relieve las restricciones que los medios ejercen en la gestión de la visibilidad y la información públicas.

En cambio, a partir del enfoque interdisciplinario aquí utilizado puede postularse que los medios instituyen un ámbito público político mediatizado y un circuito de comunicación política mediatizado, que coexisten con otros distintos en el ámbito público social y la red de circuitos de comunicación pública, a los que sin embargo termina imponiendo su peculiar lógica de producción, circulación e intercambio de formas simbólicas y pautas culturales para interpretarlas y valorarlas²²⁷. Se han ofrecido diversas razones de ese hecho, pero aquí se ha privilegiado el sentido transversal y el papel intermediario de la mediación cultural que comporta la comunicación mediática. Ésta tiene repercusiones en la acción a distancia y en las interacciones que prescinden de compartir un contexto común, que derivan de la gestión de la visibilidad pública, la moderación de la agenda pública y la modelación de la opinión política ciudadana.

²²⁷ La dependencia de instituciones políticas, gobernantes electos y ciudadanos para relacionarse e intercambiar mensajes entre sí, respecto de los medios de comunicación y la visibilidad pública que confieren, trae consigo el traslape entre formas simbólicas ideológicas y culturales que circulan en y por la comunicación mediática y, en ocasiones, la posibilidad de que las primeras se supediten a las segundas para orientar el sentido de la aparición y la actuación en público y el intercambio de mensajes. Eso conduce a la condición de permanente disputa en el circuito de comunicación política mediatizada que, como componente que se incorpora a la esfera pública política tradicional constituida por el ámbito de las instituciones democráticas, ejerce una intermediación de la interacción entre gobernantes y ciudadanos. La relación entre política mediática y política tradicional supone la imbricación entre actores, condiciones de interacción y estrategias de actuación en público de naturaleza y origen distinto.

La mediatización consiste, en parte, en que el ámbito público mediático se superpone al ámbito público político tradicional, representado por las relaciones, redes organizativas y flujos de comunicación en y a causa de las instituciones políticas democráticas de gobierno. En ese ámbito, la interacción e interlocución discursiva entre ciudadanos y representantes políticos es directa, no mediada, aunque nunca podrá sustraerse a la reelaboración discursiva y la mediatización extendida, como consecuencia de la ubicuidad de la comunicación mediática en todos los ámbitos. La coexistencia señalada es en términos de permanente tensión, porque los agentes políticos, económicos, mediáticos y sociales se enfrascan en constantes disputas de reconocimiento²²⁸, credibilidad²²⁹ y hegemonía²³⁰ de cara a los ciudadanos y distintos grupos de la sociedad. Las tensiones radican, en principio, de la diferente naturaleza y valoración de tales tipos de recursos simbólicos, aunque codiciados por todos, porque cada uno remite a una estructura de poder que prevalece con diferente lógica de racionalidad en cada campo, misma que determina, principalmente, el acceso y la distribución de recursos y oportunidades en el respectivo campo. En el ámbito

²²⁸ “Los nuevos movimientos sociales y las minorías (etnias, grupos vulnerables, religiosos o ecologistas) demandan antes que ser representados hacerse visibles socialmente, en su diferencia, lo que da lugar a un nuevo modo de ejercer políticamente sus derechos”, Martín Barbero (1999: 51).

²²⁹ La cuestión relativa a la credibilidad se puede entender de manera más plausible desde la perspectiva teórica de Luhmann sobre los sistemas, en la formulación que hace Molina y Vedia (s/a), en la que el escepticismo no forma parte del sistema político ya que se rige por el código que en sí mismo constituye y opera con autonomía del código del sistema político; éste último está constituido por la relación entre “gobierno” y “oposición”, con respecto a los cuales produce, circula y evoluciona como comunicación política, aspiraciones, relaciones, proyectos, luchas, problemas y realizaciones; el escepticismo político es el procesamiento autorreferencial de la duda aplicado a toda comunicación o discurso que trate acerca del gobierno o la oposición, o ambos, y convierte en dudas y trata como dudas, desde valores y principios hasta las realizaciones, pasando por proyectos, planes, informaciones y propaganda, tanto del gobierno como de la oposición, así como todo aquello que puede implicarlos a ambos (elecciones, negociaciones, acuerdos, disputas); no obstante ni el código “gobierno” ni el código “oposición” son autárquicos y cuando el escepticismo político se desarrolla sobre la base del *hipercódigo* escéptico, aquel que opera sobre otro código y únicamente de ese modo (es decir que se superpone a otro y lo usa transformando todo su discurso, toda su potencialidad comunicativa) entonces torna en dudas todo el discurso político. El discurso resultante, sin embargo, no pertenece a la política, pues la lógica del código escéptico no puede reducirse a la política, de modo que la política sólo puede concebir el discurso escéptico como problema. Al instalarse el escepticismo político en la sociedad, el sistema político lo resiente y sólo definiéndolo como problema puede reaccionar frente a las amenazas que representa; de esa manera una de las paradojas de la relación entre escepticismo y credibilidad en política reside en que en la medida en que el escepticismo político instala la duda sobre el espacio de la comunicación política, también convierte en duda la credibilidad; sin embargo, el sentido de búsqueda del propio escepticismo en ciertas condiciones puede canalizar el sentido de las dudas hacia la credibilidad; en ese caso el escepticismo político deja de existir, al menos temporalmente.

²³⁰ Desde la teoría de la hegemonía, inspirada en Gramsci, las noticias son un espacio simbólico en el que las élites de varios tipos usan su poder institucionalizado para mantener cierta especie de diálogo, con aquellos comprometidos con la misma visión de sociedad (Tuchman, 1983; O'Donnell, H. 2007: 49).

mediático la política significa en esencia escenificación (“poner en escena”), conforme a la lógica de la mediación cultural de los discursos sociales y de las representaciones simbólicas movilizadas en ellos, incluida la interacción y comunicación política, así como su producción simbólica discursiva, que en su propio ámbito tiene lugar de manera directa y no “mediatizada” entre gobernantes y gobernados (partidos, sectores sociales y organizaciones civiles), legisladores y ciudadanos; ella misma está sujeta a una mediación política, que a la vez es resistida por liderazgos, grupos, organizaciones y movimientos de la sociedad civil en pos de sus libertades y derechos.

Uno de los rasgos esenciales de la creciente mediatización de la política consiste en la reducción, constante y progresiva, de la esfera pública política al espacio público mediático²³¹, en detrimento del ejercicio de la representación política democrática y la activación y movilización de la participación ciudadana, dentro del propio ámbito institucional. Ese rasgo se explica porque la política democrática no puede sustraerse al principio de publicidad, así como porque los medios de comunicación masiva detentan la capacidad de publicitación a la mayor escala social y física. Más relevante aún es que instalan pautas culturales para valorar el intercambio simbólico²³², juzgar el funcionamiento institucional y el desempeño de los gobernantes.

Las decisiones adoptadas desde los órganos de poder público transitan en la difusión mediática, como pre-requisito para su mayor publicidad. Esa es una forma de conseguir un efecto de transparencia potenciado, es decir de reducir la opacidad intrínseca en el “encriptamiento” del discurso político, exigido para su presentación a otros. Ese efecto de transparencia, derivado de la visibilidad pública, se constituye así

²³¹ Instituyen lo que Coman (2003, citado por O'Donnell, H., 2007: 38) llama “espacio público simbólico”, poblado por un extenso y cambiante espectro de agentes sociales, productos y prácticas culturales, en el que, incluido el diálogo y debate en la “esfera pública popular”, tiene lugar un permanente forcejeo entre agentes sociales, negociación, desafío y reelaboración de interpretaciones precedentes, del cual resultan interpretaciones hegemónicas, con un dominio precario y cuestionado, factor clave en la constitución de lo asumido a partir de las noticias y opiniones circuladas.

²³² “En una sociedad descentrada (...) y estructuralmente mediada por un entorno tecnológico productor de un flujo incesante de discursos e imágenes, lo público es cada vez más identificado con lo escenificado en los medios y el público que constituye sus audiencias. (...) Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están reconfigurando los modos de estar juntos y ello desde las transformaciones de nuestra percepción del espacio y del tiempo”, Martín-Barbero (1999, p. 46, 47).

en un criterio aparentemente único en el campo mediático, por el cual los agentes políticos podrían ostentar que actúan con legitimidad democrática.

Las decisiones que ingresan, a partir de la doble gestión de agenda pública, una política y otra mediática, se topan necesariamente con la intervención mediática. Pero ésta no se abre tampoco al escrutinio bajo las reglas democráticas. El formato no dialógico del medio tecnológico de difusión le impide considerar las reacciones del gran público; tampoco puede reflejar o representar el grado de pluralidad de los actores participantes y los asuntos públicos que ocupan a la sociedad.

Los medios de comunicación masiva son así presa de una paradoja que deriva de la visibilidad pública que pueden otorgar. No pueden dar cuenta ante la sociedad acerca de los criterios que ejercen para moderar la visibilidad pública y el otorgamiento de voz a los actores sociales y los asuntos que circulan en su difusión. De modo que el resultado final es un “encriptamiento” de los asuntos públicos, que resulta limitativo porque no abre el escrutinio público al pluralismo de la sociedad²³³.

Por otra parte, idealmente, es decir conforme a los principios normativos democráticos, la rendición de cuentas por parte de los gobernantes está intrínsecamente vinculada al escrutinio público por parte de los gobernados, siendo todos ciudadanos de la misma comunidad política. En los hechos, esa correlación no tiene lugar y cada función transita, de modo asincrónico y descoordinado, mediante mecanismos y a través de canales distintos a los establecidos legalmente para ese fin (de orden político democrático y a través de la representación política).

²³³ En el contexto de E.E.U.U., la evidencia revela que no obstante las diferencias entre medios en cuanto a pluralismo, todos tienden a dar similar cobertura y énfasis a los acontecimientos políticos; emisores locales obtienen servicios de conexión e informativos y por eso dependen de emisores nacionales de televisión; el pluralismo depende también de la especialización política del medio, es decir de si la cobertura es o no en profundidad y de si se presentan o no varios puntos de vista; aunque los impresos y en especial las revistas son los más especializados, esa idea merece reservas porque las agencias informativas seleccionan los mismos sucesos y tiene mayor peso en la uniformidad de criterios que se imponen entre reporteros, esquemas editoriales y prácticas profesionales (Neuman, 1986).

Las estrategias partidistas y las estrategias mediáticas, para la producción y para la circulación del contenido público político²³⁴, permanentemente confrontadas entre sí, concurren al escrutinio público a través de la lógica racional de la mercadotecnia²³⁵, que les permite alcanzar, mantener y acrecentar electores y audiencias, respectivamente, en el intercambio en que se disputan siempre valores intangibles, bienes públicos, entre ellos información y opinión para juzgar, discutir y concertar acciones en que se ponga en juego la credibilidad y la conformidad política²³⁶.

En contextos en que el pluralismo político y partidos políticos electoralmente competitivos, hacen prevalecer la situación de gobierno dividido, el partido del que emana el titular del poder ejecutivo no tiene mayoría en el órgano legislativo (Parlamento o Congreso), y en consecuencia la toma de decisiones colectivas que entre ellos pueden ser recíprocamente controladas (tal como es el caso de la ley), se

²³⁴ Que Thompson llama “actividad encubierta” y demuestra que en las sociedades liberal-democráticas la política y los políticos están sujetos al imperativo de visibilidad compulsiva, las estrategias empleadas varían y la administración de la visibilidad a través de los medios es una actividad concertada y auto-consciente, no sólo en periodos de campañas electorales, sino como conducta de gobierno que implica un continuo proceso de toma de decisiones en relación a lo que es necesario hacer público, a quién y cómo, ya que la visibilidad mediática es una espada de doble filo”: permite alcanzar una visibilidad pública sin parangón, pero conlleva a la vez varios riesgos, entre los que este autor destaca la indiscreción y los arrebatos, la información que se vuelve contra su fuente emisora, la filtración de información y el escándalo político, véase, Thompson (1998:188).

²³⁵ Entre instituciones gubernamentales y medios públicos de comunicación predomina el enfoque que privilegia de la persuasión sobre la presentación de información relevante a los ciudadanos; antepone los sondeos de opinión sobre la consulta popular y la segmentación de audiencias con criterios de eficacia de la promoción antes que abrir espacios a públicos diversos y habilitarlos para la decodificación de mensajes de diverso origen y con distintas finalidades; la inversión publicitaria del gobierno resulta en un modo de control político de la industria privada de la comunicación mediática, con lo que en tanto que anunciantes grupos locales de poder político ejercen presiones sobre los medios, para conseguir un tratamiento informativo y la circulación de opinión que les resulte favorable, por lo que la información pública gubernamental transcurre como un modo soterrado de propaganda política (Lavigne, 1998). El dominio del modelo mediático mercadológico que Achache, 1998: 123) llama “de comercialización” o “propagandístico”, por oposición al dialógico que caracteriza a la práctica política, es posible por la fragmentación del espacio público en diversos espacios particulares, sistemas de valor y de intereses ninguno de los cuales puede proporcionar un referente común a todos, a partir del cual se reconstituya un vínculo social, basado en la solidaridad e integración del cuerpo político, lo que coloca a la comunicación mediática en posición de moderadora de las diferencias puestas como competencia.

²³⁶ Tal como argumenta Alva (2000), cuando esa mutua influencia tiene lugar en el contexto de cambio democrático, como ocurre en México, los medios enfrentan nuevas exigencias para conseguir credibilidad y desempeñar con alguna legitimidad su papel como responsables de la producción y difusión de información, que es un bien público y de cuyas características depende la formación de una opinión pública autónoma, en la medida en que ésta es prerequisite y allana el camino hacia el funcionamiento efectivamente democrático, lo que requiere brindar información fidedigna y oportuna a los ciudadanos y acerca de los temas que a éstos interesa, para que puedan así formarse un punto de vista propio y fundamentado, lo que pone de relieve la función social que los medios debieran cumplir.

hacen necesarias las alianzas o coaliciones legislativas; pero estas son inestables en cada asunto y contexto, en especial ante elecciones sub-nacionales, cuyo resultado puede alterar la distribución del poder de cara a la siguiente elección nacional. El alineamiento partidista, en condiciones de acceso a cargos de elección solamente por la vía de partidos políticos, impone la disciplina partidista, en tanto que la búsqueda de mayor representatividad social y competitividad electoral obliga a considerar las demandas de grupos de interés y de presión con base electoral.

De ahí que, en ese tipo de contexto y en el conjunto de agentes políticos, además del Presidente también los legisladores federales se vean sometidos a tensiones políticas y, consecuentemente, a escrutinio público por parte de los medios de comunicación masiva, de cara a su responsabilidad en la toma de decisiones y la atención de las demandas ciudadanas, la mayor parte de ellas distorsionadas en su naturaleza, pertinencia y alcance en el discurso mediático cuando da cuenta de ellas²³⁷. Las posturas y estrategias partidistas, en los órganos de gobierno, ya sea de confrontación o bien de negociación, ante el proceso decisorio de asuntos tratados como temas de interés en la difusión mediática, da pie al intercambio mediático de opinión política de cara a los ciudadanos y grupos de interés diverso.

Ese escrutinio público mediático puede, con frecuencia, apremiar a los gobernantes electos para destrabar el proceso decisorio, pero solamente en ciertas decisiones y a partir de opiniones políticas de cuyo origen asociativo específico, interés particular y enfoque político ningún medio da cuenta mediante información relevante, o bien cuando es ofrecida ella misma oculta la intención que anima su provisión. La transparencia de cara a la sociedad, en ese sentido, no es un problema que concierna solamente a los agentes políticos, es aún mayor el déficit de los agentes mediáticos (McQuail, 1998), aunque no debe perderse de vista que en éstos no cabe aplicar la

²³⁷ En ese sentido no son los fenómenos relativos a la alternancia o el “gobierno dividido” sino el advenimiento conjunto de la inserción de poderosos símbolos, que rebasan a cualquier partido político, movilizados en la difusión mediática, los que pueden restringir o habilitar la actuación de los agentes políticos; símbolos por medio de los cuales los ciudadanos pueden sentirse identificados entre sí, a partir de necesidades y demandas comunes a comunidades virtuales de las cuales pueden entonces sentirse parte, al conectar su propia narrativa con narrativas colectivas, porque las concepciones narrativas guían la formación de clase, la comunicación de masas, los movimientos de acción colectiva y las identidades (Alexander y Jacobs, 1998: 31).

misma lógica de responsabilidad pública, habida cuenta que la regulación de su quehacer depende de gobernantes electos con poder de iniciativa legal, es decir de modificar las leyes y éstos enfrentan dilemas cuando se trata del régimen de medios de comunicación, como se ha visto, por el arraigo del ideario liberal democrático.

En otras palabras, abrir el procesamiento decisorio, en especial la actuación partidista que permanece oculta a la mirada del ciudadano y la audiencia mediática, en términos de responsabilidad pública institucional de gobierno y del deslinde de responsabilidad política partidista, supone ir más allá de las reglas del proceso institucional decisorio y actuar con miras a la transformación de la cultura política²³⁸ cultivada por actores políticos y actores mediáticos, algo con lo que éstos no están necesariamente comprometidos, ni tendrían voluntariamente que estarlo en ausencia de escrutinio.

Algunos han llevado la tesis de la mediatización de la política al extremo. Los planteamientos pueden parecer sugerentes y atractivos, pero inexactos y ambiguos. Una tentativa es la que considera, entre las formas que adopta ese proceso, la “confiscación” por parte de los medios de comunicación masiva de parte del espacio público que corresponde a la sociedad civil y los ciudadanos, aquella que los ciudadanos o gobernados tendrían derecho de usufructuar y aprovechar para la acción colectiva organizada (Arancibia, 2000). A la luz de lo expuesto no es necesario redundar en que no se trataría del poder de confiscar, sino del poder de colonizar culturalmente la sociedad civil, sin perder de vista que la activación y movilización de ésta no transcurre al margen ni elude la comunicación mediática, consustancial a la configuración del espacio público social, en las sociedades contemporáneas²³⁹. La comunicación mediática penetra todas las redes y establece representaciones

²³⁸ En México, por ejemplo, diagnósticos del gobierno elaborados por encargo a instituciones académicas y los que manda hacer las organizaciones mediáticas, con base en encuestas nacionales, arrojan resultados similares respecto a predisposiciones, valores y actitudes políticas de los ciudadanos, a partir de la alternancia partidista en la Presidencia: la mayor parte está insatisfecho con el desempeño de los gobernantes electos y en mayor medida con partidos políticos y legisladores; en cambio confían en los medios de comunicación y más aún en la televisión transmitida en señal abierta.

²³⁹ En ese sentido, el ámbito público mediático funciona como mecanismo selectivo de reconocimiento público que asegura, por cobertura e inmediatez, que ciertas identidades, intereses, acciones colectivas y opiniones puedan alcanzar visibilidad y sean colocadas en la agenda pública que él se modera, a la vez que opera como mecanismo de valoración simbólica para distinguir u asimilar entre aquellos y todos los que son posibles, entre dominantes y contradictorios, según la tendencia política de cada medio.

simbólicas de la interpenetración entre todas ellas. Ante tareas democráticas tales como el escrutinio público y la rendición de cuentas, los legisladores podrían actuar como agentes de aprendizaje y socialización política, tanto como lo podrían hacer los agentes mediáticos, con ventajas porque detentan una representatividad que éstos no podrían tener en ningún caso, si bien eso no les impide erigirse en intermediarios y detentar credibilidad en ámbitos diversos de interacción social en diversos campos.

La evaluación del desempeño y la interpelación al legislador puede tener lugar en la interacción asociada a la representación política. Se trata de prácticas políticas que colocan a los ciudadanos como el centro sobre el que gravitan las acciones de ella, a través de las cuales el ciudadano puede emitir su opinión y darla a conocer a los legisladores. La cuestión aquí es conocer si éstos se ocupan de esa tarea y qué razones los llevarían a hacerlo, lo cual se analiza en el capítulo 5 en el caso de México.

La colonización del espacio público por parte de los medios de comunicación masiva obedece, también, a que otras organizaciones intermediarias de la sociedad civil tampoco son capaces de dar sentido a la agregación de intereses particulares en torno de intereses colectivos, y de promover que éstos sean valorados como superiores y no necesariamente superpuestos arbitrariamente a aquellos. Esto es así porque, tal como argumentan Arato y Cohen (2001:122), la sociedad civil moderna está caracterizada por el conflicto, tanto de las moralidades como de las concepciones normativas de la política, debido a la división interna de la esfera institucional de la sociedad civil, que en toda sociedad tiene un carácter *contrafáctico* y existen como formas de discurso, legitimación e ideologías²⁴⁰.

En efecto, en los contenidos que difunden, los medios de comunicación masiva, por ejemplo, hacen circular formas simbólicas que movilizan el sentido hacia la idea de una coexistencia y multiplicación de particularismos que aparecen irreconciliables entre sí, mismas que inducen a creer que el Estado debiera atender a todos y cada uno de ellos

²⁴⁰ Esa es la razón, también, por la que, según sostienen estos autores, en la sociedad civil moderna es posible un “ethos”, una vida ética que, a diferencia del precedente histórico, contiene a la vez “derechos” y una “moral universalista” de un modo institucionalizado, que en las sociedades modernas debe ser pensado en términos de conflicto institucionalizado.

con igual prioridad y prestancia. Con esa pauta cultural se contribuye a debilitar la imagen de las acciones de gobierno en términos de eficacia y se instalan estereotipos acerca del desempeño de los agentes políticos, en especial de los legisladores, en parte, porque a ellos atañe la representación política y la vigilancia del gobierno. Esta se produce por cauces ajenos al mediático, como una lucha partidista para negociar y conciliar intereses particulares en torno a un interés colectivo que, en ausencia de suficiente publicidad, no aparece deliberado para los ciudadanos.

De manera que estamos ante una disputa mediática hacia la representación política, en términos de confrontarla desde el cauce mediático, pero sujeta a reglas y convenciones de la comunicación mediática, la acción a distancia y el formato de la inmediatez y la arbitraria concesión de la palabra, reglas y convenciones ajenas y contradictorias con la deliberación pública que tiene lugar en los recintos del Congreso o de cara a algunos ciudadanos que los legisladores consideran invariablemente en términos de base electoral de apoyo para hacer prosperar su respectiva carrera política. La asimetría de la disputa radica aquí en la publicidad de la discusión pública acerca de la responsabilidad respecto a la deliberación entre gobernantes electos a partir de la cual los ciudadanos conocerían de qué manera asumieron el interés colectivo y conciliaron los intereses particulares en juego en cada asunto colectivo.

En otras palabras, los medios de comunicación disputan el escrutinio público de los gobernantes electos, en términos de superponer el que ellos instalan, mediante su difusión y transmisión, a todas las formas y los cauces en que aquel transita cotidianamente, en el indeterminado y vasto ámbito de la sociedad civil; antes que confiscarlas o confinarlas, algunas de ellas son utilizadas con ese propósito. Como consecuencia de esa disputa, en el contexto de procesos democratizadores, se abre paso el escrutinio público “mediático” en tanto que cauce de discusión entre agentes mediáticos, al que eventualmente concurren agentes políticos y nunca ciudadanos²⁴¹.

²⁴¹ “Los medios de comunicación masiva constituyen una esfera pública que es dictada y habitada por personas e instituciones poderosas; aquellos que carecen de poder sólo son invitados ocasionalmente cuando responde a los intereses de sus habitantes” (Sherato y Webb, 2006: 172).

El fenómeno de escrutinio público mediático tiene lugar suplantando el escrutinio ciudadano, mediante su representación simbólica en la transmisión y difusión de contenidos mediáticos de opinión, lo que se origina en, tiene lugar por y es consecuencia del proceso de mediatización de la política, en este caso en cuanto a lo que concierne a la participación política y a una práctica democrática, a cargo de los ciudadanos y dirigida a evaluar críticamente el desempeño de los gobernantes electos, que constituye la única manera en que ellos tienen de fincar responsabilidad durante el gobierno en funciones, sin tener que esperar a la siguiente elección. Solamente un análisis formal puede revelar si en la producción de contenido mediático tiene lugar o no esa representación simbólica, de qué manera y con qué restricciones.

A partir de lo expuesto hasta aquí se explica por qué ocurre ese fenómeno, cuya consecuencia directa es la suplantación de orden simbólico, por una parte, de la deliberación entre legisladores y grupos parlamentarios que, no obstante ser pública²⁴² en el sentido de accesibilidad, no llega a ser conocida por la mayor parte de los ciudadanos y, por otra parte, de las discusiones entre ciudadanos acerca de esa deliberación, en la que se pone en juego la confrontación de intereses particulares y la manera en que resultan o no conciliados en las decisiones colectivas que adopta por mayoría el Congreso. Como resultado de ese proceso, en el cauce de comunicación mediática aparecen, cobran reconocimiento público e incluso resonancia, aunque fuera de sus contextos reales y de la experiencia personal, ciertas identidades, intereses y demandas colectivas, opiniones políticas y rasgos de condiciones de vida o de problemas colectivos, mientras que el resto no, o queda al margen.

Los ciudadanos pueden ser entonces relevados, tanto de hacerse cargo del escrutinio ciudadano, como de hacer aquella distinción, a partir de una eventual confluencia de voluntades particulares o un consenso “virtual” ofrecido en la difusión mediática, por el cual se juzga en nombre de ellos a los gobernantes electos, y en nombre de otros

²⁴² Transcurre con periodicidad en el recinto parlamentario, es transmitida en tiempo real a través de la Internet y del canal televisivo estatal, queda registrada en versión estenográfica y ésta es publicada como acervo documental, en soporte técnico impreso y a la vez electrónico, y que de ella dan parcial y selectivamente cuenta la prensa comercial de difusión masiva, incluida revistas impresas y que, por otro lado, puede ser consultada por cualquier ciudadano en el recinto o en el sitio oficial en Internet.

muchos silenciados que, en los hechos, son impotentes de hacerse oír con la notoriedad que la comunicación mediática puede brindar.

Hay varios recursos y dispositivos por los cuales los medios de comunicación pueden operar y asentar la suplantación simbólica, incluso con la pretensión de subsanar el silenciamiento y la discriminación que con ella resulta, si bien todos ellos dependientes de la credibilidad que sea otorgada no al recurso o dispositivo, sino a los propios medios según la pauta convencional de verosimilitud²⁴³ que ellos en conjunto contribuyen a instalar en el imaginario colectivo²⁴⁴; entre otros, el más recurrente son las encuestas de opinión y el capital simbólico representado por una minoría que ostentada con la identidad de “experto” en cierto asunto o tema, habla para los grandes públicos con la autoridad moral que otorga “el saber” o “la experiencia”.

2.5. Mediatización del escrutinio ciudadano en televisión

Cabe ahora especificar el mecanismo con base en el cual opera la mediatización del escrutinio ciudadano y su transmutación en un “escrutinio público mediático”, concentrándose en aquel que puede tener lugar en y por la televisión, que es probado empíricamente en este estudio. Ese mecanismo consiste en que el ejercicio del escrutinio ciudadano aparece suplantado por su representación simbólica en la comunicación mediática, cuando actores mediáticos (intermediarios) toman el lugar de los ciudadanos (“principal”) y establecen una discusión de un asunto colectivo entre ellos, en la que ostentan enjuiciar el desempeño de los gobernantes electos (“agente político”), a quienes con frecuencia interpelan cual si fueran delegados de los ciudadanos, no obstante los agentes mediáticos no establezcan interlocución alguna

²⁴³ La convención cultural verosimilitud, propia de los medios audiovisuales, está asociada y es subsidiaria de aquella por la que para la mayor parte de las personas lo que puede ser observado físicamente entonces puede ser comprendida. Sin referirse a ella como pauta cultural, Dader (1998: 131) argumenta que la presentación audiovisual incrementa la falsa sensación de que cualquier cosa resulta comprensible, para cualquier ser humano, si puede ser observada, al permitir la cercanía e inmediatez y la hacer poco perceptible la diferencia entre la experiencia directa y la participación vicaria o virtual.

²⁴⁴ Morín sostiene que el imaginario es la dimensión por excelencia de la cultura de masas, cuya forma se define por la dialéctica entre lo real y lo imaginario; el simbolismo de los mensajes, su dimensión estética y lo lúdico y espectacular de los mensajes mediáticos. Lo estético rompe con el fundamento de la creencia porque lo imaginario se sigue viendo como lo imaginario (Morín, 1966). En cuanto al imaginario político, véase la definición en la nota de pie 57 del capítulo 1.

con los ciudadanos, si bien actúan orientados hacia ellos en tanto que espectadores o escuchas a distancia. La suplantación ocurre en los tres planos esenciales del escrutinio: los sujetos que lo llevan a cabo (ciudadanos), la acción política que llevan a cabo (juicio político) y los asuntos y sujetos sobre los que recae la acción (decisiones tomadas por los gobernantes electos).

En la base del mecanismo se halla la suplantación de la mediación política y opera mediante el artificio mediático que separa la participación respecto de la comunicación, cuyo vínculo es esencial para constituir al sujeto de la voluntad política y el consenso democrático: gobernantes electos y ciudadanos, de lo que deviene como resultado una especie de “virtualidad” de juicio público (lo que podría llamarse “escrutinio público mediático”). Virtualidad en el sentido de que en el contenido de la difusión mediática se presenta una interacción de actores en el papel de juzgadores de la cosa pública, con quienes los espectadores pueden establecer una identificación de equivalencia, conducida bajo un esquema de acción y de reacción recíproca y reiterativa. La identificación y la interacción recíprocas son variables del modelo comunicativo activado en el encuentro personal o reunión, donde los sujetos actúan según los modos y tiempos determinados por la voluntad de persuadirse recíprocamente para llegar a un acuerdo, comprometiendo sus capacidades para cumplir con el deber común de hacerse comprender, hacerse escuchar y poder responder. Pero esa presentación se hace públicamente accesible mediante una comunicación verificada como mera emisión, sin posibilidad física de interlocución, en la que los actores espectadores implicados en la experiencia interactiva solo conservan de ella su virtuosismo estético (Rizzi, 2003: 118).

El mecanismo opera porque, tal como sostiene Rizzi (2003: 102), en la comunicación mediática se produce una multiplicación de signos y de signos de los signos que conlleva un proceso progresivo de “metaforización” (sic) y “desrealización” (sic), sea de las modalidades de participación o de las representaciones políticas, hasta realmente presentar aspectos de “autismo” (sic); de manera que la intervención en la realidad deviene virtual, ya que no se puede participar directamente en ella. La efectividad del mecanismo reside en que la comunicación mediática reconstituye al público de la

democracia, como la libre asociación de ciudadanos que concurren al espacio público a ejercer el único poder que tienen sobre los responsables del gobierno: el juicio moral sobre su actuación. A partir de la diferencia entre deliberación política y juicio político, tal como la argumenta se entiende el papel del ciudadano como juzgador y opinante del desempeño de los gobernantes electos (Ibid: 121).

En la democracia representativa el juicio político sobre una acción política corresponde a los actores que no gobiernan; en cambio, la deliberación está determinada por una responsabilidad que se desenvuelve en la toma de la decisión posible a cargo del gobernante electo; pero al estar implicada siempre la posibilidad de error, los gobernados tienen la competencia de juzgar la manera en que los bienes comunes son administrados; esa facultad es parte del sentido común de los ciudadanos y expresada mediante su opinión, la cual es un juicio que ellos ejercen. El juicio se distingue de la deliberación por estar diferentemente “situado”. Al juzgar el poder público el ciudadano no está comprometido con su ejercicio, sino que es su destinatario (quien lo sufre o soporta); por tanto su interés y criterio cognitivo son diferentes a los correspondientes al responsable de la acción política; el juicio de los gobernados tiene dos virtudes: se produce a partir de una noción “pública” perteneciente a la ética del cuerpo político²⁴⁵ y de la observación de la acción con la ventaja de la distancia emotiva; en tanto que espectadores, los ciudadanos están comprometidos solamente por su pertenencia política y son capaces de poner en claro el acotamiento de las perspectivas en la acción política, base para evaluar el estado de las promesas de un buen gobierno, sobre las cuales se funda y se confirma la obligación del mandato.

Por otra parte, la credibilidad del resultado del mecanismo radica en la vigencia de varias convenciones culturales, que guardan correspondencia con la legitimidad de las libertades en la democracia liberal, mismas que se ponen en juego en la comunicación mediática cuando ella trata con aquella, a partir del poder que ella detenta en la configuración del espacio público²⁴⁶. Siguiendo el argumento de Rizzi (2003), por un

²⁴⁵ En términos del “bien” y el “mal”, porque el juicio moral postula un punto de vista del ciudadano anclado en su condición humana (Rizzi, 2003: 121).

²⁴⁶ En el espacio mediatizado, la ocupación del territorio, a través de la comunicación, es presentada públicamente no en una pluralidad de géneros expresivos, sino en la variación que se inscribe en el

lado, la idea auto-constructiva del ciudadano, es decir la autonomía del individuo y la autodeterminación del cuerpo político, es el fundamento de la libertad individual, cuyo ejercicio limita el poder del Estado, y a la vez de la libertad política, a partir de la cual la democracia legitima el poder de los ciudadanos; el poder mediático presenta una estructura que re-articula de una nueva forma al individuo con el público, puesto que abarca las dos dimensiones de la libertad: la democrática en el ámbito público o la liberal en el ámbito privado. Por otro lado, la equivalencia de los actores a pesar de su diferente competencia expresiva, en razón de la cual la acción política debe justificarse y ser reconocida tanto en su aspecto racional-científico como moral para no ser discriminatoria; eso supone que el juicio sobre un régimen sea de naturaleza no cognitiva y radique en la posibilidad de libertad²⁴⁷; en ese sentido, lo que caracteriza a la “opinión” es el hecho de que ésta sea jurídicamente “posible”, lo cual es una manifestación de la libertad de expresión, independientemente del estatuto de verdad que los saberes positivos puedan atribuirle.

El artificio mediante el que opera la mediatización del escrutinio ciudadano se devela a partir de considerar, por contraste, sus rasgos definitorios en la realidad: se sustenta por entero en el vínculo entre asociación y comunicación, a partir de ejercitar libertades y derechos políticos; en tanto que práctica política se origina en la participación en la vida pública, sujeta ésta a la mediación política que deriva de la delegación de las decisiones en otros; transcurre entre ciudadanos que al congregarse discuten entre sí, a partir del mutuo reconocimiento de su respectivo derecho de expresar su juicio particular, con la expectativa de construir un cierto consenso crítico respecto de los asuntos colectivos y los agentes que deciden sobre ellos. En tanto que práctica social, se originan en la vida cotidiana, en el seno de la sociedad civil y, aunque las acciones se orientan al ámbito público de la sociedad política, la práctica no está circunscrita a transcurrir en el ámbito político institucional, porque se sujeta a la

mismo género, si bien con restricciones de una cuasi renunciación a la posibilidad expresiva, debida a la brevedad de la intervención y la predeterminación del lenguaje y del sujeto, variaciones que acentuadas pueden hacer llegar a una pluralidad de opiniones entre actores que no tienen representación pública, coexistiendo entonces un pluralismo social potencial con una opinión pública monocromática, asimetría que modifica el carácter universal y la función integrativa de la esfera pública (Rizzi: 2003: 125).

²⁴⁷ Los bienes comunes tienen una doble cara: “el sentimiento de lo justo es común a todos, pero su explicación racional exige, sin embargo, una capacidad que no todos poseen; la especialización sobre lo justo está reconocida bajo condiciones de un pacto general de servicio público (Ibid: 119 y 120).

mediación social que descansa en la libre deliberación entre “pares”, es decir desprovista de delegación jerárquica, misma que es esencial para manifestar la propia opinión y constituir dialógicamente un consenso posible²⁴⁸.

2.5.1. Audiovisual televisivo: ¿realidad “virtual” o “simulada”?

Pero ¿Cómo se explicaría que en la producción televisiva de una discusión acerca del acontecer político, entre analistas o periodistas, con y en ausencia de agentes políticos, pueda ser representado un ejercicio de escrutinio ciudadano, dando lugar al escrutinio público mediático televisivo?, es decir cómo remiten al referente real de la práctica.

Aquí se han expuesto dos orientaciones complementarias para entender la mediatización del escrutinio ciudadano a través de la televisión. En tanto que proceso de comunicación, el discurso televisivo instauro, por un lado, formas de interacción social inéditas hasta su aparición, que posibilitan la acción a distancia para otros ubicados en contextos sociales, espaciales y temporales diferentes, por lo cual se puede participar, como telespectador, de una confrontación de opiniones sin formar parte real de ella, porque es escenificada apelando a participar de ella. Ésta orientación ya se ha argumentado a partir de la elaboración teórica de Thompson (1998) acerca de la “cuasi-interacción mediática” característica de la televisión y la producción de sentido movilizada en ella, a través del intercambio y valoración de las formas simbólicas culturales e ideológicas en y por la comunicación mediática. Pero por otro lado el discurso televisivo proporciona “esquemas” o “marcos de interpretación” que orientan el sentido conforme a pautas culturales convencionales ampliamente compartidas²⁴⁹, que son utilizados por los receptores de los contenidos

²⁴⁸ El cual solo puede ser al nivel de procedimientos, a partir de “ethos” (vida ética) que contiene derechos y una “moral universalista” de modo institucionalizado, aunque debe ser pensado en términos de conflicto institucionalizado entre normas y realidad, conteniendo una pluralidad de formas de vida que entonces permiten compartir premisas sustantivas e identidad común (Cohen y Arato, 2001: 122).

²⁴⁹ Tal como resume Langer (2000: 48-50) la investigación precedente permite sostener que esos marcos de lectura o “decodificación” de los productos mediáticos son socializados a partir de que los códigos de presentación de los diferentes productos televisivos, hacen aparecer la selección del contenido y lo dicho en noticias, reportajes, discusiones o comentarios como “natural”, “procedente”, “verosímil”, “actual”, “novedoso”, por el papel que juegan los periodistas y los modelos narrativos a que recurren que juntos median cognitivamente para hacer reconocibles los acontecimientos y sus relatos, cual si se tratara de su “propia clase de sentido”, prescindiendo del tópico, basada en una estructura y validez

mediáticos de manera creativa, bajo procesos selectivos de percepción, memorización y asociación, a partir de las propias predisposiciones arraigadas, tal como muestran los hallazgos de la investigación acerca de los “efectos restringidos y selectivos” que tienen los contenidos televisivos al ser apropiados por los telespectadores.

Pero ese fenómeno televisivo se inscribe en las transformaciones que tienen lugar en las maneras de expresión, imaginación y construcción del sentido de identidad y pertenencia, debido a la reconfiguración del ámbito público de interacción social, como resultado de la creciente “mediatización” televisiva de las manifestaciones culturales, tal como propone Martín-Barbero (2006) quien sostiene la tesis de que la televisión ha contribuido a la transformación de las coordenadas espacio temporales, las “sensibilidades” o “sensorios” colectivos y los “imaginarios colectivos”, así como en consecuencia los modos de experimentar, percibir e interactuar con la cultura común.

En esta segunda orientación, a partir de los contenidos del discurso audiovisual, debido a la transformación técnica estética-expresiva operada mediante el formato de realización televisiva, se instauran formas de percepción, interpretación y comprensión peculiares de una “realidad mediática”, que corre en paralelo evocando e induciendo la orientación del sentido hacia realidades objetivas, las que transcurren con independencia de la mediación cognitiva que ejerce el discurso televisivo que concierne a los programas de análisis y discusión política. Habrá que considerar que, en cuanto al aspecto audiovisual, el discurso televisivo construye una realidad simbólica a partir de la realidad objetiva, con la que se conecta de manera artificiosa.

No es necesario entrar a la discusión, sin embargo, de las tesis relativas, para algunos a la “simulación de la realidad” (Baudrillard, 1978) y para otros a la “realidad virtual”, en la discusión acerca de las transformaciones culturales en la modernidad, ya sea desde perspectivas semióticas y antropológicas que rompen con ciertos atavismos del “estructuralismo” (Deleuze, 1984, 1986); o bien, desde la corriente intelectual

interna (conflicto, nudo y desenlace; acción ascendente y descendente; principio, desarrollo y final; problema, decisión, solución, Hall, 1973:86, 87); en ese sentido lo significativo de las noticias no es el mundo que muestran sino el sistema de signos que lo codifica (Hartley, 1982: 33).

centrada en lo que podría llamarse las “condiciones de la posmodernidad” (Harvey, 1990). No obstante, interesa dejar asentado únicamente que en tal discusión se reconoce la ubicuidad de las imágenes tecnificadas y “mediatizadas” que envuelven la realidad de cada sujeto, trastocando las maneras tradicionales de percibir, estar e interpretar el “mundo social”, hasta el punto de convertir lo que es llamado “un escenario simulado global” como su telón de fondo.

En ese sentido, Virilo (1988) argumenta la paradoja de la imagen en tiempo real que domina la “cosa” (objeto) representada(o), un tiempo que lleva dicha imagen al espacio real, mediante una virtualidad que domina la actualidad y trastoca la misma noción de realidad. Aplicada la tesis al estudio de caso, podría decirse que se trata de la capacidad del discurso televisivo para producir una realidad simulada, un artificio simbólico, por el que el alto grado de *iconocidad* de la puesta en escena televisiva de un panel o entrevista, sustituye y reemplaza una realidad que no es del todo ajena para el telespectador, una situación real a la que realidad simulada intenta ajustarse, mediante recursos técnicos, expresivos y simbólicos, constituyendo una realidad imaginaria producida por la emisión televisiva, en tanto que un texto audiovisual.

Los ciudadanos no están allí, pero son más que interpelados, conducidos a una experiencia gratificante por la cual se les evoca, se habla y actúa en nombre de ellos y se juzga, a partir de esa identidad y evocación, a los agentes políticos, de cara a un asunto público o colectivo presentado y tratado con expectación, poniendo en juego las competencias discursivas al servicio de las competencias histriónicas, con intencionalidad persuasiva, de tal modo que lo actuado signifique algo más que un comentario de un especialista (estudioso que conoce el tópico tratado) o de un periodista (poseedor o detentador de información de primera mano).

Virilo (1998: 2) sostiene la tesis en la premisa de que el acto de ver es prever²⁵⁰, implica poner en juego las imágenes mentales de la conciencia y, a la vez, las imágenes

²⁵⁰ Una especie de pre-acción, en el sentido que da Searle en sus trabajos acerca de la “intencionalidad”, implicada en el tiempo de exposición y que, a su vez, supone una memorización (consciente o no) según la velocidad de “toma de vistas”.

virtuales que produce el audiovisual y que estamos acostumbrados a procesar. Pero no a partir del soporte técnico solamente, que da cuenta de aquello que del espacio representado o construido se deja ver y alcanzamos a construir, sino con base en el tiempo de exposición, que deja ver o no permite ver, por lo que necesariamente se activa nuestra competencia mnemotécnica perceptiva, así como los repertorios de “tomas de vista” mental o instrumental. Estos son las formas para las que, a partir del aprendizaje individual producido a partir de la socialización de las formas de ver y oír, y en sentido más genérico de relacionarnos con los fenómenos audiovisuales, construimos y orientamos el sentido y tendemos a atribuir significados comunes y compartidos, de manera pautada o modélica²⁵¹; es decir, a partir de lo que ya hemos conocido o de lo que tenemos certeza, respecto de lo cual producimos o elaboramos, por tanto, asociaciones mentales, de modo inconsistente y consciente. En este último caso solemos hacerlo, además, en forma automática, a tal velocidad de procesamiento que aparece, para uno mismo y para el observador, como proceso casi imperceptible.

De ahí que la televisión puede ser vista como una “maquina de imágenes sintéticas”, que produce el efecto de sentido de que el sujeto es desbordado por el imaginario de ese imaginario que él mismo ha construido. Una nueva realidad técnica que comporta una conmoción de las formas tradicionales de pensar y actuar, procesales, lineales, realistas, que implica una transformación de la conciencia humana. Aunque resulte discutible el argumento de Virilo acerca de que ya no se puede asimilar esta condición a las convenciones culturales modernas, ciertamente puede coincidirse con él en que, en tanto máquina de visión, la televisión es, junto con los ordenadores (computadoras) y la cibernética de la guerra, una productora de realidad construida como “simulación”, distinta de la ficción, aunque ésta también evade y engaña la realidad, que crea no obstante una realidad que ajusta lo imaginario con lo real²⁵².

²⁵¹ Aunque teniendo en cuenta que el análisis del proceso de televidencia, a diferencia del de recepción, supone seguirlo en sus escenarios usuales según la audiencia específica de que se trate, obteniendo evidencia para cada una de las múltiples interacciones que tienen lugar en cada uno de ellos, entre la audiencia y la televisión, en sus tres dimensiones: institucional, mediaticidad y tecnicidad, a partir de los elementos (mediaciones y contextos) que la configuran, según propone Orozco (2002: 117).

²⁵² La percepción del entorno se divide entre lo animado (sujeto vivo) y lo inanimado (el objeto), pero la producción industrial de la imagen trae aparejado el consumo del audiovisual basado en la imagen virtual; ésta trastoca las formas tradicionales de percepción e instala la “percepción sintética”, que suplanta parte del trabajo perceptivo que antes corría a cargo del sujeto y, a la vez, lo habilita para ver e

2.5.2. El dispositivo televisivo y la “crisis” de los modos de representación simbólica

Por eso la esencia del fenómeno, la representación simbólica del escrutinio ciudadano en la televisión, no se entiende al margen de las tendencias de la transformación de ese dispositivo de comunicación. Entre los estudios realizados, interesan aquellos que tienen en común el reconocimiento, desde distintos enfoques, de que la televisión se ha convertido en el dispositivo central y alienante de construcción de realidades alternativas a aquellas que conciernen y afectan al interés público colectivo, en el contexto de una crisis general del discurso público en las sociedades contemporáneas. En esa perspectiva, para Imbert (2008)²⁵³ se trata de una “crisis de los modos de representación”, misma que se plasmaría en una pérdida de credibilidad de la información referida a la realidad política y económica, lo cual marcaría la evolución del modelo audiovisual televisivo y obligaría a la adaptación constante del discurso informativo. Esa crisis es producto del alejamiento entre el ciudadano y los asuntos públicos y el correlativo distanciamiento entre *lo público* y la realidad que elaboran los medios de comunicación, por lo que ese autor habla de una “pérdida de realidad”²⁵⁴.

Al margen de la discusión que provocaría referirse al sentido del término “crisis”, lo cierto es que se observa un creciente déficit de información relevante acerca de la realidad que afecta a la colectividad, a pesar del flujo continuo de información a través

interpretar imagen construida con una “visión artificial”, que potencia la simulación de la realidad objetiva; proceso de automatización de la percepción o de innovación de una visión artificial delegado en el dispositivo de ver; los imaginarios son contruidos a partir de imágenes virtuales sin soporte aparente y solo con la perspectiva de la memoria visual, mental o instrumental.

²⁵³ A partir de la teoría que da cuenta del espectáculo como un componente de la lógica de la cultura en la sociedad del consumo según el análisis de Debord (1967) desde una perspectiva semiótica inspirada en Greimas, recogiendo las aportaciones socio-antropológicas de Baudrillard, Imbert (2008) sostiene la tesis de que ya no puede considerarse que la televisión actual solamente construye una realidad sui géneris sino que manipula, duplica, distorsiona y, en consecuencia, transforma esa realidad, lo que se explica en el marco cultural más general de cierto déficit de lo real, derivado del desarrollo de un nivel de realidad representada paralelamente a la realidad social, que nos sitúa ante un universo si bien lúdico cargado de representaciones simbólicas en el que tienen lugar constantes mutaciones entre realidad referencial y realidad representada, como consecuencia del paso de la función espectacular (amplificación de la realidad en la representación de los objetos) hacia la función especular (*espectacularización* del propio sujeto y del medio mismo) donde el espectáculo consiste en que la televisión se ponga a sí misma como espectáculo en escena (mostrar la exhibición)

²⁵⁴ La tesis es que en una cultura fragmentada como la actual, se produce un abandono de los discursos públicos como grandes relatos y en su lugar cobra auge las actualidades que reflejan el cariz humano en su dimensión individual y emotiva, que remite a lo micro-informativo y que produzca micro discursos.

de los medios y en especial de la televisión. Es pertinente aquí la paradoja que plantea la ilusión o utopía de “transparencia” de la vida pública en sociedades liberales democráticas y que, para fines de este estudio, se vincula con el desplazamiento de las formas tradicionales de hacer y vivir la política por parte de prácticas sociales que los medios, sobretudo la televisión, pueden representar simbólicamente en su difusión, dando lugar a la “política simbólica”, un modo de disputar y procurar la legitimación democrática en el circuito mediático de la esfera pública contemporánea.

La paradoja consiste en que a pesar de haberse llegado a una saturación de información, las personas no están adecuadamente informadas acerca de los asuntos colectivos que les conciernen y afectan, más allá de la vida individual cotidiana. Como se ha visto, para varios ese hecho obedece a la “creciente despolitización” en el ámbito de la sociedad civil y la desconfianza de los ciudadanos hacia los agentes políticos. Los contenidos televisivos han evolucionado hacia la construcción discursiva de interacciones basadas en la vida íntima cotidiana, en las que se desempeñan los roles sociales más habituales. Mediante su representación simbólica dentro de las diversas temáticas y narrativas de los programas, tales interacciones sociales aparecen entonces accesibles a cualquiera. Las personas pueden identificarse con esas representaciones simbólicas, sentirse implicados en ellas y, por ello, interesarse en ellas y convertirlas en parte significativa de sus interacciones reales dentro de sus respectivos grupos sociales. Se trata de una estrategia de producción de contenidos que intenta convertir lo trivial, efímero y circunstancial en algo trascendente y actual para las personas, en la medida en que es compartido en la vida cotidiana de la mayor parte de ellas, que tienen en común la experiencia de ubicarse distanciadas o ajenas a las formas tradicionales para enterarse y participar en los asuntos de la vida pública, carentes de un reconocimiento público que no procuran ni les resulta indispensable, aún cuando se deseara.

El discurso televisivo se sitúa en el intersticio entre realidad y ficción, produciendo una modalidad específica del presente, peculiar del medio televisivo, que pone en entredicho la noción de autenticidad. La televisión es en ese sentido un dispositivo constructor de su “propia realidad”: no aquella imaginaria de la ficción si bien permite

identificaciones imaginarias, tampoco la realista del documental o reportaje sociológico (anclada en lo referencial), sino una que tiende a independizarse con respecto a esos modelos que utiliza (ficticio y referencial) en la medida en que genera mecanismos de adhesión del espectador con el discurso televisivo, en términos de uso y pacto comunicativo²⁵⁵. Ahora bien, no se trata ya de una relación de tipo *veritativo* (basada en la verdad) sino más bien de una “lógica del simulacro”, donde prima lo verosímil: un hacer como si fuera “verdad”, en el que el espectador admite que lo ve, oye y lee no es realidad, pero que se parece tanto a ella que resulta creíble y puede sustituir a su modelización. Este modo de “representación” establece una relación paradójica con la realidad, a la vez especular y espectacular; especular porque es una realidad enraizada en la cotidianeidad, en lo vivencial, en lo familiar, que actúa como espejo; espectacular porque está dotada de una cierta teatralidad, inherente al código televisivo, vinculada a un contrato comunicativo que propicia el espectáculo²⁵⁶.

Se trata de un cambio fundamental, a saber, un nuevo modo de ver y de sentir y, por tanto, de un pacto comunicativo entre espectador y emisor televisivo, apoyado más en el ver que en el creer, en la verosimilitud que en la verdad, que opera como una “imagen síntesis”, creando sus propias condiciones de producción de la realidad: un presente autónomo, utilizando recursos formales, técnicos y narrativos que el medio televisivo ofrece para acentuar la ilusión²⁵⁷. Sin ser ficción, es decir tener la arbitrariedad del relato literario, el relato televisivo explora todos los recursos posibles de ficción, para producir efectos de realidad. En ese particular modo de narrar reside la ambivalencia televisiva²⁵⁸. El relato está ligado al hecho de mostrar; la mediación

²⁵⁵ Concepto y proceso formulados desde diferentes perspectivas; ampliamente en la de los “cultural studies”, desde el trabajo de Hall (1973, 1980) y de Eco (1979) acerca de modos de lectura del texto.

²⁵⁶ En la base del contrato comunicativo, está la aceptación de una forma narrativa y unos contenidos que exploran en la frontera entre realidad y ficción, lo que permite aceptar como realidad lo que ha sido manipulado como forma narrativa por el discurso televisivo; esa es la clave de la fascinación que ejercen los programas de la especie del “reality show”, los docudramas, los “programas de realidad” e incluso las series, antes que en los mecanismos de identificación morbosa con ciertos temas (Imbert, 2005).

²⁵⁷ La de una realidad que resulta de los requisitos del periodismo en televisión y de su relación con el mundo de la política, lo que genera la paradoja de una demanda de verdad validada por la creación de una verdad televisiva ilusoria, un paralelismo creado por la producción de una narrativa continua, que suprime la mayor parte de posible de los signos que la contextualizan como una mediación.

²⁵⁸ Siguiendo a Hartley (1982: 115) quien postula que la noticias *ficcionalizan* elementos de lo real, Hugh O'Donnell entiende por *ficcionalización* el hecho de que para la mayoría de los lectores la relación entre los relatos que constituyen las noticias y lo real no se puede saber con seguridad, como resultado en

desaparece ante la inmediatez de la imagen y se diluye la frontera entre realidad y ficción, permitiendo todas las identificaciones que sea posible imaginar.

2.5.3. Efectos de la mediatización televisiva de la información y la opinión política

Es claro que la explicación del proceso de mediatización, incluido su efecto sobre la participación en política, se inscribe en la centralidad del sensorio perceptivo de la estética visual-sonora que la televisión instala en general; éste actúa como principal referente de la experiencia personal para interpretar lo que acontece más allá de ella, debido a la capacidad expresiva y estética de su discurso para afectarla, mediante la transmisión en directo de imágenes que transcurren abstrayendo el tiempo y la situación real de la actividad política, tal como confirma la investigación en ese campo. Por eso es pertinente hacer algunas consideraciones acerca de los efectos de la televisión en cuanto al proceso de recepción de sus contenidos, que fortalecen el marco explicativo de la mediatización del escrutinio ciudadano a partir de ese medio.

En el espectro de teorías de mediano alcance, la investigación empírica acerca de los efectos de la comunicación mediática ha probado que éstos son de orden indirecto y limitado, condicionados por factores culturales y socio-demográficos, pero que dependen de aspectos cognitivos y emocionales en la persona. Desde los relativos al establecimiento de temas acerca de los cuales se ocupan las personas hasta los que resultan de los diversos usos y gratificaciones asociadas al consumo mediático, pasando por los procesos de modelación y reforzamiento de actitudes y opiniones en condiciones de consonancia y repetición, se reconoce en los públicos receptores a un sujeto activo por cuanto a la percepción selectiva puesta en juego; no obstante que también se reconozca que la producción mediática difundida promueve marcos interpretativos que, al reducir la polisemia de los textos mediáticos, contribuyen a procesar cognitivamente los mensajes recibidos y orientan la interpretación hacia la construcción de una realidad mediatizada y la producción de juicios y valoraciones por

general de un proceso de recombinación de elementos de lo real que es altamente selectivo según Tisseron, 2006: 49, citado por O'Donnell, H. 2007: 35, 36).

parte de los receptores, en un cierto sentido aprendido y habitual cuya recursividad como práctica cotidiana se asimila como un denominador común.

Desde una aproximación culturalista, Gerbner (2002) y la corriente de investigación sobre la televisión consolidada en Pennsylvania, que a diferencia de la estructural funcionalista en Yale es ajena a medir el impacto persuasivo de los mensajes sobre las opiniones y actitudes, postulan que los llamados “efectos mínimos” lo son respecto al cambio y los “efectos máximos” en cuanto al mantenimiento del status quo²⁵⁹. En este estudio se argumenta que esa función de representar simbólicamente realidades permite a los medios instituir públicos diversos, algunos de los cuales, en tanto que audiencias de medios, pueden ser relevados de hacerse cargo de acciones que, para conseguir los fines que las motivan, requieren de un referente común institucional, están regidas por valores y reglas y requieren de interacciones que la comunicación mediática solamente puede emular o representar simbólicamente. Pero en la medida en que ese relevo sea recurrente e intenso y, a la vez, no encuentre cauces alternativos, se puede producir como efecto que las representaciones simbólicas de la comunicación mediática reemplacen simbólicamente y, por tanto, releven en los hechos prácticas del cauce institucional en que tiene origen y en el que se desarrollan habitualmente, para ciertos segmentos de ciudadanos y en el largo plazo²⁶⁰.

La investigación longitudinal y experimental da cuenta del peso relativo de las variables consideradas y da base empírica para determinar el alcance de cada efecto, según las condiciones en que ha sido observado. Aquí cabe destacar los efectos que inciden con mayor fuerza en la construcción del significado y la formación de creencias

²⁵⁹ Sobre las perspectivas teóricas referidas, véase McCombs y Shaw (1993; Katz, Blumler y Guervitch (1974) y Gerbner, Gross, Morgan y Signorielli (1990).

²⁶⁰ Esa es una condición de verificación de la hipótesis del “cultivo”: hay una superposición entre definiciones de la realidad social brindadas por la televisión y aquellas que formulan los televidentes, a mayor exposición al contenido televisivo, más se asemejará la propia visión de la realidad a la presentada por aquel. La práctica regular y acumulativa de exposición permite la apropiación de ciertos sistemas de creencias y actitudes convencionales fomentados, junto con sus sesgos ideológicos, debido a la selección y forma de presentación de contenidos (simplificada y estereotipada), mensajes consistentes y complementarios, un balance aparente entre versiones y la supresión de lo divergente y del conflicto, fórmulas que atraen audiencia y hacen rentable la difusión aún a costa de suprimir heterogeneidad social y diversidad cultural, véase Gerbner, Gross, Morgan y Signorielli (1996).

y actitudes sociopolíticas, por cuanto suponen la variable “implicación”²⁶¹, entendida como el grado de participación activa, personal y directa que, desde el punto de vista psicológico, un individuo pone en juego mientras recibe un mensaje mediático (Perry, 2022). Tales efectos corresponden a capturar la atención pública y delimitar los asuntos en los que se piensa y discute (“agenda setting”)²⁶², la pre-activación de predisposiciones o aporte de criterios estandarizados o parámetros que los ciudadanos adoptan y a partir de los cuales evalúan las cuestiones sociales y políticas (“priming”)²⁶³, o bien de encuadre o marco (“framing”)²⁶⁴, idea directriz que provee de contexto a la noticia y sirve al televidente para percibir y evaluar la realidad presentada, a partir de la selección de aspectos (detalles), atributos (rasgos) y énfasis (relevancia) que, desde una cierta perspectiva y, por tanto, sesgo o tendencia, reciben un particular tratamiento del hecho o asunto de que se trata en la narrativa relativa.

Tales efectos son diferenciados, según la experiencia personal directa con respecto a un asunto particular, el nivel educativo y el interés por la política en general. El impacto es mayor en individuos con menor nivel educativo y de interés por la política, así como cuando se experimenta mayor necesidad de orientación acerca de cuestiones públicas (condición contingente), porque entonces es más probable que sea prestada atención a la agenda mediática. Algunos individuos lo harán con el propósito de “uso

²⁶¹ Que es tanto afectiva, por ejemplo al establecerse lazos emocionales con personajes o experimentar emociones con un programa televisivo; como cognitiva, al reflexionar cuando se ve o luego, compararlo y relacionarlo con conocimientos previos y entonces interpretar, según establece Perse (1990).

²⁶² Una agenda se define como un conjunto de temas (*issues*) organizados en cierto orden jerárquico de importancia en un cierto momento, cada uno definido como problema social y como conflicto, que reciben cobertura mediática (Dearings y Rogers, 1996: 2); el tema es resultado de una serie de eventos (suceso particular de duración limitada circunscrito a cierto lugar), relacionados de algún modo entre sí y organizados por categorías establecidas mediante conocimientos adquiridos (Shaw: 1977).

²⁶³ Definido por Fiske y Taylor (1991: 231) como efectos de un contexto anterior de interpretación y recuperación de información, según la investigación en psicología cognitiva la presentación de estímulos de cierto signo favorece, vía asociación, otros conceptos relacionados (Collins y Loftus, 1975).

²⁶⁴ D’Adamo, García y Freindenberg (2007: 136 y ss) el efecto “priming” se refiere al tratamiento y perspectiva particular que recibe un acontecimiento o historia narrada, la forma en que se organiza, la información para ser comunicada y la selección y énfasis de ciertos atributos particulares con relación a los objetos o situaciones públicas que constituyen los objetos referentes; mientras que el efecto “framing” revela que tales atributos y énfasis afectan el modo en que el público piensa acerca de los objetos y situaciones presentados, lo cual implica que “los medios transmiten un marco de referencia que incluye ciertos valores, necesidades, creencias y expectativas que influyen y alteran lo que el destinatario extrae de una situación comunicativa”.

ritualista”²⁶⁵, cuando la exposición al medio comunicativo es motivada por un hábito de compañía y relajación; mientras que otros con una finalidad instrumental, para conseguir información y un “mapa” para orientarse políticamente al interactuar con otros, en situaciones en que se es exigido a expresar la opinión propia, a conversar o a discutir con otros las correspondientes, según hallazgos de Rubin (1984).

Las personas menos susceptibles de ser influidas por el efecto “priming” son quienes muestran mayores grados de interés y conocimiento por las cuestiones tratadas (Iyengar, Peters y Kinder, 1982). La observación revela que cuando las personas toman decisiones consideran la evidencia más fácilmente disponible desde el punto de vista psicológico. Ante las limitaciones de las capacidades cognitivas, una consecuencia es que la atención es altamente selectiva y que las imágenes y las impresiones tienden a concentrarse en torno a pocos temas (Iyengar y Kinder, 1987); otra consiste en que las personas no hacen análisis exhaustivos de la información, sino que recurren a “atajos” cognitivos heurísticos para ahorrar el esfuerzo aplicado y tiempo invertido. La “accesibilidad” (disponibilidad) es el más común y se refiere a la factibilidad psicológica de que una determinada información pueda ser tomada en cuenta por las personas. Otros estudios empíricos confirman que cuando una persona debe realizar una evaluación no toma en cuenta todo lo que sabe, sino que utiliza la información que tiene más disponible, ya sea por proximidad, frecuencia, cronología o familiaridad (D’Adamo, García y Freindenberg, 2007).

Por consiguiente, la exposición dada a un contenido por parte de los medios de comunicación aumenta la probabilidad de accesibilidad del público a cierto tema, a la par que a los pensamientos relacionados con la noción activada por los mensajes correspondientes a ese contenido. En este caso el efecto *priming* se refiere a la tendencia a utilizar los “marcos” más recientemente empleados o adquiridos, aún ante situaciones novedosas o ajenas al evento que originalmente generó su utilización. De

²⁶⁵ Según García Canclini (2005), los ritos son dispositivos para aplicar y neutralizar la heterogeneidad y aplicar las diferencias sociales; no se discuten, simplemente se ejecutan y de este modo los individuos refuerzan y ratifican su pertenencia grupal; mediante el ritual se establecen exclusiones y los accesos a los mundos simbólicos; pero en la medida en que se desciende en la escala económica y educacional, disminuye la capacidad de apropiarse del capital cultural transmitido por las instituciones culturales.

tal manera que, los asuntos con extenso o intenso tratamiento en la comunicación mediática tienen una alta probabilidad de ser tomados en cuenta por parte de los ciudadanos, amplificando su impacto en las evaluaciones que hacen, activando ideas y tendencias que facilitan un cierto comportamiento (Ibid: 133). Al dar cuenta del efecto *priming* en términos de la relación entre los efectos de establecimiento de la agenda temática y las opiniones acerca de los objetos políticos, incluidos personajes públicos, McCombs y Reynolds (2002:14) concluyen que la evidencia indica que los ciudadanos recurren a fragmentos de información que les resulten relevantes, al momento de tener que decidir o emitir un juicio, en lugar de ocuparse en hacer un análisis comprensivo de la información almacenada. En efecto, Jo y Berkowitz (1996) sostienen que cuando las personas oyen, leen o ven un suceso u opinión, a través de los medios de comunicación, se activan en su mente ideas con significado similar, que activan otras ideas relacionadas en términos semánticos y que influyen en las evaluaciones que hagan. Por tanto, la agenda mediática provee de claves que los ciudadanos utilizan en sus evaluaciones políticas, porque hace a tales claves relevantes y cognitivamente accesibles para las audiencias (D'Adamo, op., cit., 132). La investigación experimental longitudinal de Iyengar y Kinder (1987, 1993) prueba, en el caso estadounidense, que los noticieros televisivos producen efectos de pre-activación (*priming*), al conformar parámetros que los televidentes utilizan luego para juzgar la actuación del Presidente y que afectan los criterios que los ciudadanos utilizan al formar su intención electoral.

Más importante para los propósitos de este estudio es considerar el fenómeno de *framing*, relativo a la necesidad de las personas para elaborar o allegarse de esquemas cognitivos, a partir de los cuales es posible interpretar y catalogar la información recibida del entorno. Tales esquemas funcionan como marcos de referencia y criterios para construir significado y elaborar juicios y la propia opinión sobre los objetos, los sujetos, las situaciones y las condiciones en la realidad social. Cuando tienen origen y son puestos en circulación a gran escala por los medios de comunicación masiva, en virtud de la función de *encuadre* para dar direccionalidad a la lectura e interpretación de los textos mediáticos, se produce el efecto “framing” como resultado de la correspondencia que se establece entre ese encuadre mediático (narrativa de explicación causal que ofrecen los medios en sus textos) y el encuadre que las

audiencias efectúan de los mismos sucesos narrados. En lo que hace a la información, el efecto señalado consiste en la capacidad de los medios para provocar diferentes conclusiones en la audiencia según la forma en que aquella es presentada. Al elegir ciertos temas y aspectos, a los cuales otorgan mayor o menor énfasis, y correlativamente excluir, no otorgar relevancia u ofrecer detalles de otros, los medios influyen en la percepción y atribución de causas, responsabilidades, consecuencias y soluciones, así como en el modo en que las personas reflexionan acerca de los asuntos tratados (Scheufele, 2000), sobre todo cuanto menor sea la experiencia directa que la persona tenga acerca de cierto asunto (D'Adamo, García y Freindenberg, 2007). En la investigación relativa, se ha encontrado dos tipos de “encuadre” que utilizan los programas televisivos informativos: las noticias pueden ser presentadas como sucesos o como temas, lo que da lugar a una cobertura denominada “event-oriented stories” o “topic-oriented stories”, respectivamente (Altheide, 1987), según que el encuadre se centre en eventos específicos (“episodic framing”) o en “casos testigo” para abordar un problema o bien que el encuadre aluda al trasfondo (“thematic framing”)²⁶⁶.

Puede concluirse que una función esencial, de la cual devienen algunos de los efectos, de los programas televisivos objeto de análisis en esta investigación, consiste en dar marco (orientar el “encuadre”) a los aspectos de una realidad percibida pero luego sujeta a negociación con diversas lecturas (interpretaciones) externas, lo que inicia al seleccionar solo algunos de ellos, tratarlos y presentarlos de tal modo que adquieren relevancia en el texto que se comunica, promoviendo una definición particular de un problema y, al mismo tiempo, una cierta interpretación causal, evaluación moral e incluso recomendación. El proceso de encuadre definido en esos términos por Entman (1993:52) implica las operaciones de definir problemas -determinando el agente causal, los costos y beneficios-, producir juicios morales –evaluación de los agentes causales y sus efectos-, sugerir “remedios” –ofrecer tratamientos para el problema y las justificaciones correspondientes-, predecir efectos probables. Esta última es una de las operaciones que mayor valor puede tener para los telespectadores de programas

²⁶⁶ Esta última es, por cierto, la situación más recurrente que fue observada, mediante la presente investigación, al analizar el corpus de programas de opinión, análisis y discusión política, difundidos en señal abierta de televisión en México, si bien ambas situaciones de “encuadre” se presentan, incluso en la misma emisión televisiva en prácticamente todos ellos.

de opinión y discusión política, en especial en aquellos más implicados en el papel de ciudadanos y el ejercicio del escrutinio del desempeño de los gobernantes electos.

El valor de los programas televisivos de opinión depende, en último término, de quienes eligen exponerse a ellos y de la posición y el papel que desempeñan en la estructura social, en diversos ámbitos de interrelación, tomando en cuenta que poseer información y tener una opinión sobre los asuntos políticos de actualidad puede ser utilizado y servir estratégicamente al hacer cotidiano de las tareas propias y de grupo; en el ámbito político, el valor deviene de que una tarea rutinaria y una competencia profesional que, incluso retribuida económicamente, consiste en estar al tanto de la información y la opinión que circula en los medios. En la diferenciación del género se encuentra un valor simbólico cultural, desde el punto de vista tanto del emisor como del receptor del mensaje de los programas televisivos (Berrocal, 2003: 64)²⁶⁷; en ese sentido, tales programas comportan una utilidad que los noticieros no proveen.

Es claro que el valor e influencia de los programas de análisis o debate de opinión política se explica a partir de los procesos de “mediatización extendida” y de “reelaboración discursiva”, tal como prueban estudios culturales basados en las interrelaciones recíprocas entre los contenidos televisivos, de cara a los telespectadores. De una parte, en uno de los trabajos que mejor confirma la tesis del primer proceso, Langer (2000: 47-57) muestra que las “otras noticias” en televisión²⁶⁸, distintas de las que ella destaca como “políticas”, ponen en juego el discurso del

²⁶⁷ Ya que por las peculiaridades del medio y discurso audiovisual, las noticias son relatos cortos que simplifican en extremo la trama, a partir de una estructura integrada de planteamiento, nudo y desenlace, narrados mediante imágenes, sonidos y textos, y elaborados con miras a conseguir el entendimiento del mensaje por parte de cualquier espectador y a evitar su aburrimiento, todo lo cual impide la profundidad de la propia narrativa y de la interpretación de la realidad que es su referente (Berrocal, 2003: 64).

²⁶⁸ Tales como desastres, accidentes, rituales cívicos, actos heroicos de “víctimas”, relatos de interés humano que Fiske y Harley (1978) llaman “la gran preocupación”; ellas operan como base de un campo ideológico particular constituido por una estructura organizada de significados asociados, un subsistema en el interior de las noticias, con su propia coherencia interna y orden de relevancia, que ofrecen coordenadas de reconocimiento e identificación a través de las cuales se asegura el consentimiento (Langer, 2000: 50) y propone analizarlas mediante categorías típicas de relato: “presentación de logros”, “víctimas de situaciones adversas incontrolables”, “comunidades en peligro”, rituales, tradición y pasado”, relatos que configuran el sentido de comunidad y se convierten en formas en que reside significado que puede ser utilizado al servicio del poder, en la medida en que el discurso televisivo es recombinatorio, en razón de que produce valores y prácticas significativas ya probadas y que buscan reproducirse a sí mismas (Gitlin, 1985).

sentido común y son más accesibles a la mayor parte de los telespectadores, porque no traducen las opiniones de “los poderosos” (élites económicas y políticas), quienes incluso cuando aparecen en el contexto de ellas se revelan como seres ordinarios; la estructura narrativa permite a los periodistas construir explicaciones y organizar la producción de reportorios de estrategias representacionales que circulan como un acervo (“stock”) cultural de conocimiento útil (Hall, 1973: 184), donde el signo-imagen ordena y clasifica el mundo en categorías conceptuales (Hartley, 1982: 28). Por esa vía de “desacralización de la política” se prepara el terreno para el juicio moral, a partir de reacciones pasionales comunes en la experiencia en la vida diaria de los televidentes. Esas otras noticias tienen una relación consistente con el mundo de la vida diaria; apelan a un “nosotros” como sujetos de una relación de igualdad, de manera que generan la oportunidad de discutir como los poderosos de las noticias se dirigen hacia nosotros, con lo que además ganan fiabilidad informativa (Langer, 2000: 50).

En esa orientación, Hugh O’Donnell (2007: 75) muestra que productos televisivos de entretenimiento, menos prestigiados que el subgénero “noticias”, operan como foros que incitan y ponen en escena el debate entre los sectores populares, porque sus contenidos permiten discutir y negociar asuntos de interés público (violencia, drogadicción, libertad sexual, normas cívicas, discriminación, abuso familiar) de manera menos restringida que en los noticiarios, permitiendo un sentimiento de pertenencia/propiedad más convincente y la sensación de poder aportar a asuntos propios, a diferencia de las noticias “hegemónicas” cuyos asuntos pertenecen a otros y respecto de las cuales poco tienen que decir o hacer. En ese tipo de programas las personas recrean su experiencia de ver y enterarse de temas públicos de actualidad, con mayor familiaridad o proximidad, por ejemplo a través de las telenovelas, que circulan en paralelo a través de las noticias (Brown, 1994). De ahí que postule que se trate de espacios de lucha hegemónica, una *metanarrativa* en que se mezcla “lo progresivo” y “lo regresivo”²⁶⁹, en los que el público se involucra de una manera significativa y, por eso, son objeto de colonización política.

²⁶⁹ Porque se trata de narrativas paralelas, superpuestas y de larga duración, comedias de situación, tertulias, crónicas deportivas, con personajes mediáticos que envejecen junto con la audiencia, que contribuyen a afirmar el desmoronamiento de las fronteras entre la alta cultura y la cultura popular, la

Por otra parte, en un estudio comparativo en varios países Dahlgren (2009) concluye que la televisión es un espacio público donde se entrelazan la cultura popular y la política, más allá de la noticia²⁷⁰; las culturas y la identidad cívica están relacionadas con el compromiso y la participación política y la dimensión más relevante para los actos de participación concierne a la identidad de cada persona en cuanto a ciudadano; su marco considera cinco dimensiones de cultura cívica o patrones culturales interrelacionados: a) conocimiento (alfabetización y educación); b) valorización de las normas de la democracia; c) confianza (en el sentido de capital social); d) espacios de comunicación democráticos (conversación política, acceso al gobierno y medios de comunicación); e) habilidades (votar y participar en la conversación política); f) identidad de las personas (de sí mismos como ciudadanos), cuyos componentes son la adhesión y la efectividad percibida.

En ese marco, otras investigaciones recientes prueban que la exposición a las noticias y la opinión política mediática, en conjunto, así como la conversación cotidiana sobre asuntos públicos entre pares en diversos ámbitos, contribuyen conjuntamente a despertar el interés en los problemas colectivos, a centrar la atención en el desempeño de los gobernantes electos y a dar coherencia a la opinión política de los ciudadanos más expuestos a los medios de comunicación masiva. Kim, Wyatt y Katz (1999) encontraron suficiente evidencia empírica que apoya la hipótesis de que: a) la atención a las noticias periodísticas está estrechamente asociada con la frecuencia de la conversación política en la vida diaria, tanto en general como sobre temas específicos; b) la disposición a discutir con los que tienen opiniones diferentes es influenciada por la percepción mayoritaria y por las noticias, los medios de comunicación y la conversación política; c) las noticias mediáticas y la conversación política tendrán efectos positivos en algunos aspectos de la calidad de las opiniones (calidad del argumento, reflexión y opinión) y tal vez sobre la coherencia de la opinión;

realidad y la ficción, lo público y lo privado, de modo que el género noticioso se comporta más como la "soup opera" de la esfera pública burguesa antes que de la esfera pública popular. (Ibid: 84, 85).

²⁷⁰ Conclusiones consistentes con el hallazgo de Mcleod, Scheufele y Moy (1999) cuyo estudio, en cuanto al impacto de las diversas formas convencionales de comunicación política, concluye que no es en sí mismo el consumo de noticias mediáticas sino las conversaciones acerca de ellas lo que orienta la participación de los ciudadanos en foros tradicionales de discusión política.

y d) las noticias mediáticas y la conversación política están estrechamente relacionadas también con actividades participativas, pero más aún con la "campaña" centrada en la "queja"²⁷¹. Por su parte, Martina (2008) concluye que el talante crítico, o si se quiere la predisposición hacia establecer responsabilidad en los gobernantes electos, respecto a los problemas sociales proyectados, en sus mejores momentos, en la información y opinión mediática, puede contribuir a estimular o incentivar la participación de cierto segmento de la ciudadanía, al llamar la atención hacia lo que el gobierno puede atender y no lo hace, durante periodos en que la participación es más relevante; de ese modo se contribuye a despertar el interés en la política y a dar forma a la conciencia ciudadana acerca de los problemas colectivos.

Con base en la evidencia disponible, a partir de las predisposiciones y actitudes políticas de los ciudadanos, podría sugerirse que a mayor involucramiento con el legislador, el ciudadano podrá tener mayor interés y habrá visto algún programa televisivo de discusión política, aunque será menos vulnerable a las opiniones vertidas; los efectos de esos programas serán diferenciados según que se comparta o no la experiencia de interlocución con legisladores y de evaluación de su desempeño, con independencia del asunto que la motive; de modo inverso, sería de esperar que el legislador con mayor arraigo y trabajo en su circunscripción electoral puede asumirse como menos vulnerable al escrutinio público mediático al que eventualmente sea sometido, sobre todo si son escasas sus posibilidades de participar en ese ámbito. Los programas televisivos ponen a disposición de los telespectadores "marcos de interpretación", pautas persistentes de cognición y de dotación de sentido que integran el previo horizonte interpretativo desde el que se leen las nuevas emisiones (Pérez, 2006); facilitan el procesamiento de información y opinión de forma rápida y rutinaria mediante operaciones de selección, jerarquización o exclusión, que proveen de esquemas simplificados de percepción y pre-comprensión de la realidad (Glitin, 1985); por tanto, el filtrado resultante conlleva necesariamente una reelaboración, con los sesgos intrínsecos a la propia subjetividad en aquello que sea confrontado,

²⁷¹ A partir de un modelo analítico que considera las interrelaciones entre el uso de las noticias, la conversación política, la formación de opinión y la participación política tales variables, se propuso poner a prueba el modelo de democracia deliberativa en la práctica, observando el comportamiento en foros de discusión pública con participación de ciudadanos.

mediante la intersubjetividad puesta en juego en la comunicación; tales marcos operan también en la producción mediática de información y opinión, cuyas características estructurales y léxicas establecen límites y parámetros dentro de los cuales opere la decodificación de su significado. Así concebidos, tales marcos están implicados, siguiendo a Pan y Kosicki (1993: 57) y a Scheufele (1999: 106) tanto en las estructuras internas de la mente (marcos individuales) como en los dispositivos incrustados en el discurso, ya sea político (marcos políticos) o mediático (marcos mediáticos). Todos ellos contribuyen a la reproducción y actualización del marco general (“master frame”) que consigue ser dominante porque organiza las configuraciones del “sentido común” o la “doxa”, es decir de todo aquello que puede darse por sentado y válido en un contexto social e histórico (Snowd y Benford, 1988).

Es en el nivel de ese marco general que se debe valorar el alcance y los efectos de la opinión política televisiva, puesto que sirve de referente para la incorporación de nuevas interpretaciones e incluso esquemas, propios del campo político o mediático, de forma tal que aquellas visiones coherentes con ese marco tendrán mayor resonancia y aceptación social. Por tanto, los mensajes movilizadores serán más o menos exitosos en diferentes estructuras políticas, dependiendo de la congruencia que guarden con los marcos generales dominantes en un cierta fase política (Gamson y Modigliani, 1989: 5); estas resonancias son las que concitan el interés respecto a una estructura de símbolos y pueden hacerla aparecer como “común” o “familiar”, porque las ideas a las que se asocian y el lenguaje por el que se expresan se vincula a aspectos generales humanos y colectivos (Gamson, 1988: 227).

2.5.4. Implicaciones de la mediatización en términos de opinión pública

Para algunos la opinión pública se convirtió en un artefacto mediático que puede crearse y manipularse a voluntad (“barómetro” sucedáneo del estado de un gobierno). Habría que objetar que esa noción solamente es admisible en tanto que aquella sea vista desde el punto de vista de sus productos, es decir haciendo abstracción de su naturaleza relacional que implica necesariamente el intercambio y la confrontación de ideas para, mediante procesos discursivos de producción de sentido compartido,

manifestarse o materializarse en tanto que juicios de valor comunes, que lo serán siempre exclusivamente a un cierto conjunto de personas.

Aquella noción prevalece actualmente y sirve al orden socio-político constituido y, por tanto, se trata de una forma simbólica ideológica, desde la perspectiva aquí adoptada, porque la opinión pública no consiste en la agregación de opiniones, sino es resultado de la discusión y expresión conjunta o colectiva entre un cierto grupo social, es decir parte de la colectividad²⁷². En ese sentido solamente es posible designar una cierta corriente de opinión pública y en la medida en que se muestre que es diferente de otra, con la cual puede concurrir; la delimitación correspondiente permitiría analizar la dominancia según un cierto criterio y al hacerlo comparativamente podría definirse un cierto “clima de opinión pública” a partir de aquello que las corrientes concurrentes analizadas pudieran tener en común y la asimetría entre ellas y con respecto a grupos de ciudadanos al margen de ellas²⁷³. No obstante, la prevalencia de aquella noción de opinión pública explica el arraigo que tiene la convención cultural por la que se cree que ella puede ser medida y que la encuesta o el sondeo da cuenta de ella.

Aquí interesa mostrar que, en las sociedades contemporáneas, los procesos de formación y desarrollo de opinión pública no escapan al proceso de mediatización. En la democracia liberal, la *esfera pública*²⁷⁴ quedó comprometida y confiscada, según demuestra Habermas (1981), por el Estado moderno en expansión, con la consiguiente transformación de las condiciones para el debate libre y racional, en condición de igualdad de participación, en tanto que proyecto político de la clase capitalista al inicio de la industrialización europea, proceso que por esa razón denominó con la metáfora

²⁷² Que en acuerdo irrestricto con Silverstone (2004: 237) representa una tarea inconmensurable aún para el Estado, debido a la condición invariable de fragmentación de la vida moral y política y el individualismo privativo como forma de vida que caracteriza a las sociedades contemporáneas de masas, en la que se produce un tipo de pluralismo ilimitado, en el que todo vale, incluso o quizá en mayor medida los fundamentalismos, y añadiría que nada puede ser restringido por la manera que asuma la expresividad, aún cuando ésta se dirija a desconocer, descalificar o refutar sin réplica o debate de por medio, con lo cual se pretende validar ese tipo pluralismo. Individualismo y disputa de identidad proyectados por la sociedad de masas son la mayor amenaza a la libertad y a la vida colectiva, por igual.

²⁷³ Sería ingenuo pensar que, no obstante tratarse de una democracia consolidada, todos los ciudadanos pueden efectivamente opinar y que su opinión detente el mismo peso de influencia, razón por la cual para Bourdieu la acumulación estadística de opiniones carece de sentido (2000).

²⁷⁴ Kleinsteuber (2007) ha puesto en claro el sentido de la noción formulada por Habermas y distorsionada con su traducción a otras lenguas.

de la “refeudalización” de la vida pública, lo que supone que el ciudadano se convirtió en consumidor, que adquiere en el mercado (incluido el mediático) ideas, valores y creencias en lugar de forjarlos por medio de la discusión, es decir la constitución de los públicos en tanto que sujetos de la democracia liberal. Aunque remitir a Ortega (2003: 64-70 vale para resumir las consecuencias de ese proceso en el contexto actual, se tendrían divergencias en la formulación que hace, en aquello que aquí interesa.

Si bien la generalización de tal proceso, tal como aquí se ha argumentado, depende del contexto societario nacional, conviene centrarse en aquella consecuencia pertinente para esclarecer los efectos que el escrutinio público mediático tendría en términos de fenómeno de opinión pública, es decir en el hecho de que la discusión razonada, el libre intercambio de opiniones y críticas argumentadas, que da sentido a “lo público” y su constitución, quedan circunscritos y restringidos porque, antes que ámbito de la vida en común o compartida, el ámbito público mediático se configura a partir de la “notoriedad”, con independencia del asunto de que se trate; el proceso consiste en una inversión del sentido con que se constituye el ámbito público social, que va desde lo particular hacia lo general, trasciende la intimidad y lo privado, para generar una dimensión supraindividual, erigida por encima de particularismos²⁷⁵.

Ese proceso de inversión es uno de los resultados, tal como se ha visto, del proceso de mediatización de la política²⁷⁶, es decir de la instalación de un sensorio colectivo por y mediante los medios audiovisuales, que permite que su discurso informe y opine sobre el ejercicio del poder con base en su exhibición y percepción simbólica (“personalización de la política”), de modo que lo privativo de alguien pasa a ser parte de lo público con solo ponerse al descubierto o a través de los rituales con los cuales la

²⁷⁵ Al reemplazar el sentido de lo público, la difusión mediática subraya rasgos peculiares de ciertos actores, comportamientos insólitos o estilos de vida proclives a ser imitados; se trata de un proceso por el cual la matriz política pasa a formar parte de la matriz cultural, porque la representación mediática elabora una racionalidad de sí misma capaz de esconder o distanciarse de intereses espurios, propios de la representación política, al hacer reconocible el mundo a partir de imágenes, relatos breves en lenguaje común y sondeos de opinión que dictan a todos el sentido de actualidad, una impronta que impone las pautas de la comunicación mediática a la actuación de los agentes políticos.

²⁷⁶ Proceso por el cual la representación cultural se impone sobre la representación política, para dar sentido a la articulación social de identidades e intereses, mediante la identificación común con los relatos mediáticos que, no obstante su limitado alcance y naturaleza efímera, fascinan a casi todos más que los relatos ideológicos que pierden eficacia y compiten en posición de subordinación.

autoridad se afirma o pretende afirmarse²⁷⁷; lo que tiene lugar en la medida en que la comunicación mediática penetra en los ámbitos de la intimidad y privacidad y devela selectivamente ciertos aspectos para ser vistos por todos, asegurándose la atención hacia lo que hace aparecer (visible) incluso apelando a pasiones humanas.

Por eso cuando se torna mediáticamente visible, el hacer político es reducido a una retórica “espectacular”, de modo que aún en los escasos casos en que aparecen los agentes políticos en programas de discusión política, su actuación se ve circunscrita a producir diatribas con tal de ridiculizar al adversario; en este caso, el diálogo cede paso a un conjunto amorfo de soliloquios y expresiones estridentes producidas para captar el interés, de ahí que el debate político en televisión entretiene, con una lógica de la novedad distinta a la de prensa y radio, lo cual no significa que necesariamente se trate de un discurso invariablemente desprovisto de contexto argumentado y de reflexividad por parte de los protagonistas que actúan en esos programas televisivos.

Esa consecuencia se relaciona con la naturaleza virtual del discurso público mediático, que da cuenta de ciertos “estados de cosas”, con frecuencia desvinculados de los diversos contextos en que los individuos y grupos sociales padecen los problemas reales y procuran hacer valer sus intereses respecto al interés colectivo; en ello reside un sentido de la “virtualidad” de la realidad elaborada discursivamente mediante un sistema de representaciones simbólicas auto-referidas, de tal modo que los significados pueden prescindir de su relación con un “estado de cosas” externo o diferente a dicho sistema, incluido el significado de la comunicación mediática. De ahí

²⁷⁷ Al indagar la acción de los medios de comunicación en la transformación del sistema político y la función de gobierno, Exeni (2005) explora tres ejes, la fijación de la agenda informativa y de opinión en el debate público; la mediatización como contraparte de la representación política y las relaciones tácticas, de competencia, colaboración y colusión entre actores políticos y mediáticos. En este último eje identifica una “nueva” élite de comunicación política, integrada por actores políticos obsesionados en la promoción de su imagen personal y actores mediáticos que dejan de ser “testigos” y pasan a ser “protagonistas políticos”, no obstante su argumento de que estamos ante “gobernabilidad mediática” adolece de premisas insostenibles, porque ésta es impensable con independencia de la legitimidad política y ésta no queda a expensas de la esfera pública mediática por más expansiva que sea, tal como se desprende de la perspectiva aquí expuesta. A pesar de que la conceptualización es inconsistente, la idea tiene el mérito de indicar lo que llamaría “planos” en los que la comunicación mediática afecta la conducción de gobierno, según el tipo de acción y efecto que ejercen los medios de comunicación.

que ese discurso sea eficaz para incidir en el ámbito público político, en especial ante una regulación jurídica (coactiva) precaria e inconsistente.

Resulta claro que de no activarse contra-referencias contextuales durante la exposición televisiva, para la mayor parte de los individuos la distinción entre lo virtual y lo real implicará un trabajo cognitivo para el que no comprometan esfuerzo, en especial si son relevados por alguien que se ocupe de esa tarea, aunque lo haga desde su propia perspectiva individual y sesgos. Que no sean activadas puede depender del hecho de que en el discurso televisivo concurren combinaciones de representaciones sociales y de referentes de situaciones materiales reales, que trascienden la dimensión cultural, de tal manera que en ese discurso quedan registradas marcas discursivas (“huellas textuales”) de otro tipo de discursos públicos. Éstos concurren en el ámbito público general para establecer “relaciones con sentido”, a partir de las cuales pueden ser contruidos “hechos sociales”, con respecto de los cuales los sujetos pueden confrontar los discursos con una realidad social, consecuentemente, reinterpretada como común. Por eso el discurso televisivo no puede ser reducido, en sentido estricto, a un único discurso desde el punto de vista del proceso de recepción comunicativa.

Lo anterior tiene como probable consecuencia la modificación del sentido mismo de “ciudadanía”, en tanto que ya no consiste primariamente en intervenir en la acción colectiva, sino en mantenerse en una posición de atento espectador del acontecer tal y como en la difusión televisiva se relata y opina al respecto y que en la recepción agota en sí mismos los significados de sus efímeros mensajes, pero no todos los posibles.

En ese marco, un efecto en el largo plazo consiste en el aislamiento individual y el ensimismamiento, al construir el significado de una realidad que difícilmente es congruente con las necesidades y los problemas que resultarían de discutir en común, lo cual es una condición para establecer el ámbito de la vida en común y el significado de lo colectivo; en ese sentido acierta Ortega (2003: 70) al argumentar que dado que los relatos mediáticos persuaden al individuo acerca de que cualquier acción sólo tiene como destino convertirse en otro relato, se promueve la convicción de que:

De un lado, participar en asuntos colectivos es irrelevante dado que la marcha de estos asuntos escapa a las posibilidades de los ciudadanos y de las instituciones que éstos tienen, al menos idealmente, a su disposición para ejercer control e influencia. De otro lado, se delega esta capacidad de intervención en un grupo que por su especial competencia en la creación de imágenes públicas se encuentra en mejores condiciones de incidir eficazmente sobre lo que acontece. Este grupo no es otro que el que hace posible la comunicación. Profesionales de los medios que asumen así una doble tarea: la presentación (haciéndola pública) y la influencia sobre la sociedad. Una competencia, por lo demás, que trascienden el ámbito de lo público para dirigirse plenamente sobre la política.

No debe perderse de vista que aquí se sostiene la hipótesis de que el proceso de mediatización tienen lugar, en el plano cultural de la difusión televisiva, a partir del traslape de formas simbólicas ideológicas y culturales que pasan a formar parte del repertorio de pautas culturales para evaluar la política y a los políticos, en particular a los electos, tal como es el caso de los legisladores. De manera que pueden ser comparados los rasgos que caracterizan tales prácticas de acuerdo con el ideal democrático (formas simbólicas ideológicas) y aquellos que caracterizan las prácticas de informarse, elaborar la opinión y confrontarla con la de otros ciudadanos (formas simbólicas culturales). En ese sentido habría que objetar a los argumentos de Ortega, por un lado, con relación a la conceptualización que sostenga que la comunicación mediática constituye el ámbito esencialmente público, en el cual los medios de comunicación masiva detentan una hegemonía casi absoluta; por el contrario, aquí se concibe al ámbito público mediático como una configuración distintiva del ámbito público más general, no obstante el dominio que aquel ejerce en éste, no solamente por su lógica de configuración y funcionamiento, sino más aún por la lógica de las relaciones que establece con las otras configuraciones de mediación o ámbitos que también contiene (tal como el económico y notoriamente el político); por otra parte, en lo que concierne al enfoque de ese autor para entender la configuración del espacio público a partir del marco normativo democrático, algo que por cierto omite señalar, habría que decir que éste no es confrontado con el ámbito de la vida social o entre clases sociales, es decir tal como esa configuración se manifiesta en el mundo de la vida, un resultado analítico del que, al final, depende su mejor comprensión.

Lo que está en juego en la mediatización de la política democrática es el interés de los actores e instituciones políticas por movilizar a los ciudadanos. Parte de ello se

consigue mediante la movilización electoral; otra manera es mediante el debate. Para conseguirlo se procura la mayor publicidad posible. Los medios de comunicación constituyen una arena política entre élites, pero es selectiva y su acceso es disputado. Eso lleva a un problema clave relativo a la democratización: las acentuadas asimetrías de participación en la discusión política más publicitada, no obstante la ampliación de márgenes para la circulación de la crítica en la arena mediática. En tanto que intermediarios del intercambio de opinión política, los agentes mediáticos constriñen su papel a esclarecer el discurso tecno-político para un “público” masivo e informe, desafecto y que huye del mismo, con los sesgos implicados en presentar solamente ciertos puntos de vista y coincidentes. No es el contenido del disenso y la negociación, instrumentos de la política democrática, lo que transcurre en la difusión mediática, sino las novedades circunstanciales de sus eventuales apariciones²⁷⁸. Al hecho contribuye que en las legislaturas, partidos políticos y legisladores no discuten en términos de titulares de gobierno, sino de campaña electoral permanente. Cuando la política se empobrece, el discurso mediático acerca de ella se empobrece aún más²⁷⁹. El debate político es marginal y las fórmulas para informar y opinar acerca del mismo se constriñen a política plebiscitaria y polarizada: con dicotomías²⁸⁰ entre adversarios contruidos en cada episodio inscrito en las narrativas cotidianas que los medios de comunicación masiva propagan con significativa eficacia (Trejo, 2001).

Con los programas televisivos de opinión política se invierte en parte, no obstante, el flujo del debate con mayor publicidad; en ellos periodistas y analistas políticos no actúan solamente como comentaristas de información generada en el órgano legislativo (Congreso), sino como generadores de opinión política particular o privada

²⁷⁸ “Las opiniones que no están relacionadas con los predicamentos de clase tienden a comportarse como maderos a la deriva, moviéndose de un modo disociado de acuerdo con los vientos y corrientes que prevalecen en los océanos de la formación de opinión <mediatizada>. En otras palabras, en la llamada sociedad del conocimiento, las opinión pública ya no está anclada al conocimiento, y la pericia se adquiere mediante la experiencia personal relacionada con los predicamentos; la ignorancia combinada con exposiciones fortuitas ante los medios de comunicación de masas se convierten así en los padres de la opinión pública en la sociedad de la información” (Himmelstrand, 1996: 404)

²⁷⁹ La televisión crea un pensamiento descontextualizado que incapacita al oyente para convertirse en hablante, de modo que en conjunto los medios crean una sociedad sin deliberación y cuando queda alguna, es aparente y falsa (Bickford, 1996: 179 y ss.)

²⁸⁰ Los mensajes televisivos tienen escasa profundidad y duración, traducen una dimensión simbólica, pero también estética, ya que están plagados de expresiones retóricas, metafóricas y demagógicas, de las que pueden ser presas quienes menos están al tanto del juego político (Morley, 1990).

acerca de fragmentos de ciertos asuntos discutidos en esa instancia, desde la cual conforme a la política democrática se vigila al gobierno, erigidos en figuras públicas hablando por y para los ciudadanos sin que hayan sido elegidos por ellos; los más exitosos ostentan interpelar en público a agentes políticos, no obstante mantener cierta connivencia en lo privado con ellos, en disputa por una credibilidad pública, en torno a los temas que han privilegiado para su difusión mediática²⁸¹; así, los ciudadanos encuentran cada vez más a los diputados en la televisión, aunque a partir de la dimensión estética del mensaje mediático por la cual los contenidos no hacen referencia a la realidad sino a ellos mismos, transformando la apreciación de la realidad, por una que supuestamente se refiere a ella (García, J., 1996: 259, 260).

En el contexto estadounidense, al analizar cómo afectan las interrelaciones entre agentes políticos y mediáticos a la cobertura de información y opinión, Sellers y Schaffnerb (2007)²⁸² encontraron que, no obstante el diseño del evento de campaña, la única forma en que un senador puede conseguir que la prensa le otorgue cobertura es presentando información inesperada y estridente (que provoque curiosidad y cierto morbo), renunciando a disputar el control acerca del contenido frente al periodista. Al analizar la sección “Conoce mejor un distrito”, introducida en 2005 en el programa de tertulia “El informe central de Colbert”, el más antiguo y exitoso en la televisión estadounidense, en la que su conductor entrevista a un integrante de la Cámara de Representantes en cada emisión, Bayma (2007) mostró que ese formato constituye el mejor foro para que los diputados puedan captar la atención y el interés de sus electores, al tender lazos afectivos con ellos que resultan de los afanes por presentarse cercanos y someterse a la parodia del escrutinio mediante un espectáculo mediático. En México, a partir del año 2000 y a la fecha, no solo se mantienen programas en televisión de señal abierta o gratuita, sino que se han diversificado los formatos²⁸³ que,

²⁸¹ Su principal recurso es el ritual democrático de publicitar los sondeos como opinión mayoritaria y representativa de los ciudadanos, tal como si se tratara de consultas públicas al demos, porque ofrecen parámetros a la retórica, aunque constriñan el discurso de las personas (Sartori, 1998: 73-78).

²⁸² Examinaron eventos de senadores y cobertura de prensa posterior a nivel nacional de 1980-1996.

²⁸³ Con tal de innovar, los programas televisivos son cada vez más breves y su contenido dispuesto según segmentos de audiencia, mediante diversos formatos televisivos, según la combinación que se haga de géneros, elementos narrativos, referentes de la época y los gustos de los públicos (Rincón, 2005).

a diferencia de las tertulias, están diseñados para confrontar opiniones, en cuyas emisiones participan o son entrevistados agentes políticos y legisladores federales.

En esos programas, al colocarse discursivamente como ciudadanos que juzgan a los “poderosos”, las voces de los opinantes implican a los televidentes y hacen aparecer²⁸⁴ la voz de éstos como abriéndose paso entre las opiniones producidas, representación simbólica²⁸⁵ que se fortalece en la medida en que sean implicadas actitudes críticas comunes, tales como queja, reclamo, indignación, burla²⁸⁶. De ese modo el símbolo de participación se erige en vehículo de verosimilitud del acto de juzgar y de justificación de las opiniones vertidas, con lo cual aquellas se dan por sentadas; de modo que con independencia de la ignorancia que se tenga acerca del asunto discutido, se puede experimentar que se forma parte de los juicios vertidos y del esquema de situaciones o hechos aludidos²⁸⁷. La discusión funciona como símbolo identificador de aquello que no es: el otro contenido informativo que no se dispone (ni por la vía de los agentes políticos o por la difusión mediática) y, por tanto, prepara el terreno para ocuparse de la tarea de efectivamente discutir en la vida cotidiana acerca de los agentes políticos y la actividad política, luego de la exposición a la emisión televisiva²⁸⁸. La representación

²⁸⁴ En tanto que institución productora de sentido, que depende y afecta el tejido social construido por el conjunto de la sociedad, la televisión refleja las identidades frágiles que nos habitan y las estéticas de lo popular masivo; configura pautas para la percepción, interpretación y valoración de lo externo sensible, de la apariencia externa de las cosas y contribuye a la formación de consensos superficiales y efímeros para construir el sentido en la vida cotidiana (Rincón, 2005: 13, 14).

²⁸⁵ La televisión induce a hacer asociaciones con criterios ideológicos y de activismo en los marcos de acción sugeridos por las narrativas de realidades recreadas, donde el narrador televisivo conduce al telespectador de tal modo que no abandone el viaje que le propone; la narración actualiza arquetipos, personajes, situaciones y conflictos repetidos, mediante fragmentos con significación propia y cuya combinación produce efectos dramáticos y emotivos anclados en condiciones estéticas (Rincón, 2006).

²⁸⁶ En ese espacio público de experiencia cultural que instituye, los diversos modos de narrativa televisiva ordenan y articulan las significaciones y apelaciones de los diversos discursos y, con ello, confieren sentido a las experiencias particulares, al estar construidas para provocar impacto o sorpresa y mostrar situaciones arquetípicas –mediante símbolos recurrentes, estructuras míticas o rituales-, de la naturaleza de los seres humanos (Rincón, 2006).

²⁸⁷ Desde esa perspectiva semiótica, la televisión entraña una estrategia cultural y política para que las personas abandonen el anonimato y se hagan visibles sus expresiones estéticas (apariencias externas); el potencial simbólico de ese dispositivo tecnológico radica en que construye relatos sobre realidades de las que todos pueden ser parte o imaginar que lo son y por eso su discurso funciona como un lugar de identidad común y un referente compartido de situaciones habituales un sentido de comunidad, en la medida en que la experiencia de televidencia expone a todos por igual a las mismas imágenes y mensajes y permite construir horizontes de comprensión semejantes (Rincón, 2006).

²⁸⁸ El discurso televisivo dominante se caracteriza por su fragmentación, heterogeneidad, multiplicidad y carencia de clausura”, por lo tanto termina por no decir algo acerca de alguien y está siempre abierto a la concurrencia y ocurrencia del nuevo devenir discursivo masivo (González Requena, 1999: 128)

simbólica de una discusión recrea y reemplaza una acción y una práctica que no tiene lugar entre la mayor parte de los ciudadanos: dar una opinión crítica, con independencia de su contenido, del resultado persuasivo y eventual acuerdo que resultase de ser confrontada.

2.5.5. Escrutinio público mediático y aprendizaje político

Cabría preguntarse acerca de las posibilidades de que el escrutinio público mediático contribuya al aprendizaje político de los ciudadanos. Si bien la investigación empírica, que resulta útil al respecto, corresponde a contextos de sociedades con democracias consolidadas, aporta conocimiento aplicable a democracias incipientes, por cuanto los niveles de involucramiento cívico, apatía política, desconfianza hacia gobernantes y uso de televisión como principal fuente de información muestran tendencias similares en unas y otras (Dahlgren, 2009). Se consideran dos perspectivas: una centrada en los aspectos cognitivos y la otra en los culturales, ambas centradas en el contenido informativo televisivo, que abarcan sistemas comerciales y públicos.

En el primer caso, desde la perspectiva teórica del procesamiento de la información, la investigación revela que los individuos participan activamente en el proceso de aprendizaje político: recaban, guardan, modifican, interpretan e incorporan nueva información a partir de lo que ya conocen de la vida. Lo hacen de acuerdo con sus propios fines, motivos y necesidades (Lachman, Lachman y Butterfield, 1979). Tales operaciones se conducen no solamente a adquirir información sino a comprenderla y a descifrar el contenido en un proceso comunicativo (Newell, 1990), a partir de la relevancia de la información según su fuente y estructura no de su cantidad (Garner, 1974). El aprendizaje a partir de mensajes mediáticos no se circunscribe a memorizar hechos, se lleva a cabo estableciendo relaciones entre sus significados y elaborando explicaciones desde puntos de vista distintos (Scardamalia y Bereiter, 1991).

Por eso Sotirovic y McLeod (2004: 358) argumentan que los contenidos mediáticos tienen el potencial de proveer a los ciudadanos de conocimiento básico, útil para sustentar los principios democráticos y evaluar la acción política, al estimularlos a

pensar en un amplio rango de intereses e ideas, establecer vínculos entre aspectos diversos, evaluar perspectivas, confrontar conocimientos preexistentes, con lo cual se aprende a “hacer distinciones o diferenciar” y entender lo que ocurre. Los programas televisivos de contenido político ampliarían, en ese sentido, el efecto de los programas informativos, en la medida en que los primeros proporcionan lo que Patterson (1996) llama “marcos estratégicos” que, desde la óptica de los periodistas, sirven de advertencia al ciudadano al momento de elegir gobernantes u opinar sobre ellos, en razón de que articulan cuestiones políticas generales, sin circunscribirse a campañas electorales, a partir de explicaciones sobre intereses y tácticas en juego; en contraste con los “marcos episódicos” de los programas informativos, centrados en lo particular. Los programas de comentario (incluidas las “tertulias”) se refieren a ciertos eventos reales con un giro crítico y hasta sarcástico, por más ordinarios que puedan parecer, lo que contribuye parcialmente a captar puntos de vista distintos y a la vez entretener²⁸⁹, si bien ese proceso es selectivo antes que cualitativamente acumulativo²⁹⁰; exponerse a asuntos públicos habilita para entender la noción de cambio y desarrollar consciencia política que motive la participación en acciones colectivas (Gamson, 1992). Es probable que quienes se familiarizan con asuntos públicos entiendan la diferencia entre problemas personales y colectivos y que la solución de éstos requiere de la acción grupal, incluso cambios en la estructura de los grupos de adscripción (Patterson, 1996). De acuerdo con Lodge, Steenbergen y Brau (1995), las personas aprenden del contenido mediático a entender sumariamente situaciones, más que a recordar hechos específicos acerca de asuntos o personalidades expuestos; ese tipo de entendimiento es integrado a las propias opiniones, cuanto menor sea la disonancia con las propias convicciones y mayor la persuasión y repetición, en ciudadanos con baja implicación o involucramiento cognitivo y emotivo (Petty y Cacioppo, 1986).

²⁸⁹ Para mucha gente, los “talk shows” y “dramas” pueden ser una fuente importante de aprendizaje acerca de las campañas electorales, amenizando la noche de descanso, tal como ha sido demostrado por el Pew Research Center (2000) en el caso de la televisión estadounidense.

²⁹⁰ Margolis y Mausser (1989: 369 y 370) advierten acerca de efectos acumulativos que, en el largo plazo, tiene la exposición a diversos medios en periodo no electoral, en la medida en que la información obtenida por parte de los espectadores sirve de referente para reordenar las prioridades en diversos momentos, en especial la que concierne al ámbito local o remite a aspectos de la vida cotidiana, aún cuando el público sea más indiferente hacia los políticos que a cuestiones les afecta directamente.

En el segundo caso, desde la perspectiva de los estudios culturales, a partir de la noción de hegemonía cultural, inspirada en la teoría de Gramsci sobre la dominación, O'Donnell (2007) argumenta que la producción televisiva noticiosa constituye un espacio público de disputa cultural, a la vez que una instancia ideológica que media entre una hegemonía burguesa neoliberal dominante y otra socialdemócrata en declive, cuyo tradicional modelo informativo declina hasta tornarse en un subgénero, a la par que ganan fuerza otros productos televisivos junto con el entretenimiento, a partir de los cuales cada vez más población ve comprometido el sentido de ciudadanía y de debate cotidiano y, en consecuencia, aprende acerca de aquello que sucede en la lucha política y que aqueja a la sociedad²⁹¹; en razón de que todos ellos tienen en común narrativas paralelas superpuestas y de larga duración, contadas y discutidas por personajes que envejecen con las audiencias, cuyos efectos deben ser vistos en un contexto de fronteras difusas entre lo privado y lo público, alta cultura y cultura popular, realidad y ficción, reportaje y relato (Ibid: 84); los contenidos van desde las telenovelas hasta programas de comentario y “tertulia” en los que se movilizan, con desenfado y curiosidad, la crítica y sátira respecto de la política y los políticos.

En esa dirección, Bumler y Gurevitch (2000) reconocen que, en una era de abundancia de la producción cultural mediática, la multiplicación de emisores y la emergencia de agentes y causas sociales que reclaman visibilidad pública, las televisoras instalan la cultura popular en la política, a la par que fragmentan la audiencia política, mediante la diversificación de formatos de presentación, de contextos narrativos y estilos

²⁹¹ Entre otras aportaciones revela la obsolescencia de tesis nihilistas acerca de los efectos mediáticos, aún compartidas en el discurso académico conocido como “dumbing-down” en el contexto anglosajón, centrado en los argumentos de la espectacularización y vanalidad del contenido televisivo sobre política que permanece, según Brune (1996: 33) al nivel de un mero intercambio de pareceres acerca de acontecimientos antes que su análisis; o al del “sensacionalismo”, que reubica el interés por la política en aquello que no requiere análisis (Bourdieu, 1998: 51); de la “ley del mínimo esfuerzo” (Díaz, 1999: 36); de la “dictadura de la audiencia” (Ruffin, 2003: 76); en cambio y por contraste con esas tesis, O'Donnell (2007: 80) argumenta que los productos de la cultura popular mediática constituyen espacios complejos de lucha hegemónica y que los formatos populares constituyen un foro para la negociación de “verdades” con el que mucha gente sintoniza, en el que creen que pueden participar, permitiendo un sentimiento de pertenencia/propiedad más convincente que el que las noticias, en su formato actual, no podrían jamás aportar, porque como argumenta Harvey (1999: 154) entre todos los productos culturales aquellos que llama “la democracia de entretenimiento” son elementos constitutivos de lo que caracteriza como “ciudadanía del hazlo tú mismo” (Ibid: 181), un estereotipo cultural del que el televisivo es una versión limitada aunque también *empoderadora* (“empowering”) de los sujetos y lo que pueden hacer con su ciudadanía, ya que ésta y la cultura popular no son excluyentes (Ibid: 188).

expresivos a tal punto que se diluyen las fronteras entre política y entretenimiento, a partir de los patrones culturales en cada contexto nacional; como consecuencia, la desacralización de la política la torna porosa, es vista desde diversos lentes, implicada por los agentes mediáticos encargados del entretenimiento, tratada con tal flexibilidad que cualquier asunto es materia prima para ser tratado como asunto público y discutirlo, por lo cual ahora divergen más que antes las experiencias de las personas acerca de la política y de sus contenidos, incluidos los paneles de discusión.

Siguiendo las tesis de Martín Barbero (1999b: 43) con relación al papel de los medios electrónicos en el desarrollo y el ejercicio de ciudadanía, Krotz y Winocour (2007: 206) han señalado, en un estudio acerca de la radio en México, que el discurso acerca de la ciudadanía y la apelación recurrente a los ciudadanos circula de manera constante en la narrativa de los medios, particularmente en los noticiarios radiales, cuando las personas son convocadas a testimoniar, denunciar u opinar sobre diversos problemas o prioridades que establece la agenda mediática; no obstante que las crónicas, los editoriales y comentarios proyectan imágenes que muestran la existencia de ciudadanos de “primera”, de “segunda” y “otros” que no alcanza esa “categoría” (homosexuales, delincuentes), lo que conlleva “popularizar” y “reinventar” la ciudadanía y representa su fragmentación y estratificación (Ibid: 208). En tanto que mediadores de la heterogénea trama de imaginarios de identidad y lugares de habitabilidad, los medios de comunicación “contribuyen a resignificar” el ejercicio y la representación de la “ciudadanía”, al poner en circulación toda clase de asuntos públicos y privados, cambiar el sentido de sus ámbitos de referencia, reubicar “lo global” o proyectar “lo local” fuera de sus espacios concretos, tender “puentes imaginarios” con las autoridades, en el traslado de información “de la escena pública al hogar y del hogar a la pantalla” (Ibid: 207), por lo cual formulan la categoría de “ciudadanos mediáticos”. Ésta sería una suerte de condición que autoriza de manera real e imaginaria a cualquier persona, grupo o institución para poder canalizar a través de la radio, la televisión, la prensa o la Internet, todo tipo de quejas, denuncias y críticas a las autoridades u opinar sobre múltiples temas de los ámbitos público y privado. Esa condición deriva de la “puesta en escena” de diversidad de asuntos que, sin reconocer límites en cuanto a temas y tratamientos, genera diversas estrategias de

participación, así como requerimientos comunicativos de opinión, crítica, demanda y denuncia, que se expresan en la publicación de cuestiones personales o de grupo²⁹².

Siguiendo esa línea, es posible argumentar que una característica del escrutinio público mediático es que da lugar a la aparición de una especie de ventanilla ampliada, desde luego más efectiva, para gestionar quejas respecto de la autoridad, pero precisamente por eso también intereses y demandas particulares, en un ejercicio expresivo manipulado en el que el caso hace la regla o generalidad, según el criterio de verosimilitud²⁹³ y de tendencia política que son imputables y acreditados al medio de comunicación respectivo, a partir de convenciones culturales que difícilmente son puestas en entredicho²⁹⁴. Esta manifestación característica del fenómeno se vincula al hecho de que la “puesta en escena” de una queja en cualesquier medio de comunicación suele ser atendida de inmediato por los agentes políticos o autoridades encargadas, si bien el medio respectivo no suele dar oportunidad a ellos para dar cuenta, en igualdad de condiciones de exposición, acerca del asunto, sus circunstancias y su tratamiento, como tampoco a los espectadores para discutir con ellos. De modo que la autoridad puede aparecer representada, a veces personalizada con el nombre de un funcionario o institución gubernamental, en otras como entidad despersonalizada, pero sustituida por la experiencia cotidiana que se tenga en la gestión de un trámite o inconformidad; en cualquier caso es inevitable que una percepción a partir de esos parámetros conduzca a que cualesquier funcionario

²⁹² El efecto es resultado de un proceso de resignificación de la identidad ciudadana, a partir de las transformaciones culturales del contexto socio-histórico que, según Lechner (2001: 26) se explicaría por la pérdida de la centralidad de la política como organizadora de las identidades políticas y sociales; su discurso ya no consigue ofrecer claves interpretativas, símbolos e identidades “fuertes” que antes otorgaran inteligibilidad a la realidad social, proceso que tiene lugar en la medida en que las identidades de clase dan lugar a una multiplicidad de agrupaciones con perfiles “tenues” y se diluyen los intereses a representar, de modo que las personas con dificultad pueden reconocerse en una política, la que ya no les concede reconocimiento social y no motiva en ellas sentimientos de pertenencia a una comunidad y por tanto de seguridad colectiva.

²⁹³ Trejo (1997) argumenta que a partir de la generalización de la experiencia de informarse acerca de la política a través de la televisión, el valor de la información consiste en la experiencia de dar por sentado la veracidad de aquello que puede ser visto; ante el requerimiento y la competencia por captar la atención, el mayor tiempo posible y ser éste siempre restringido, el contenido televisivo ha de ser excitante y estimular la excentricidad, lo cual lleva a los emisores televisivos a privilegiar el ataque y la agresión, por encima del principio cívico de tolerancia y discusión pacífica entre opuestos, tal como argumenta Sartori (1999).

²⁹⁴ El discurso televisivo dominante se caracteriza por su fragmentación, heterogeneidad, multiplicidad y carencia de clausura”, por lo tanto termina por no decir algo acerca de alguien y está siempre abierto a la concurrencia y ocurrencia del nuevo devenir discursivo masivo (González Requena, 1999: 128).

público o gobernante electo, aludido en la difusión mediática, se convierta en “sospechoso” y todo ciudadano en potencialmente una “víctima” (Ibid: 209).

Una consecuencia del proceso es que crece la desafección por la política, misma que solo se vuelve relevante en la vida de los ciudadanos en momentos de elecciones y campañas propagandísticas. Otra consecuencia es que el ejercicio de ciudadanía se ve desplazado de la política institucional hacia diversas instancias y organizaciones sociales, locales y comunitarias con intereses muy diversificados entre sí. Las personas se ven obligadas a concebir de manera nueva su papel de ciudadanos y formarse su propia idea acerca de problemas y prioridades del país. Pero lo hacen dentro de un *ambiente ciudadano* también conformado por la difusión mediática (Berlant, 2009), no solamente a partir de las noticias sino del contenido de entretenimiento (Delli Carpini, 2009), porque esa difusión genera productos para públicos diversos. Emergen dos tipos de ciudadanía, una que puede ser considerada “instrumental”, que sin creer ya en la política sigue apelando a las instituciones estatales en la búsqueda de soluciones; otra cuyo referente no es el sistema político sino la red de grupos en donde se organiza la sociabilidad en la vida cotidiana, que estaría motivada por la convivencia social y basada en la autoayuda y la cooperación (Lechner, 2000: 31); aún así ambas tienen como referente ubicuo la representación simbólica de la política mediatizada.

CAPITULO 3. SISTEMA MEDIÁTICO Y COLONIZACIÓN MEDIÁTICA EN MÉXICO

El fenómeno del *escrutinio público mediático* no se entendería sin considerar el papel que desempeñan, en general, los medios de comunicación masiva, en particular la televisión, con relación a los gobernantes electos y ciudadanos, en el contexto de regímenes políticos con hegemonía de la democracia representativa liberal, procesos de liberalización económica y democratización y, en consecuencia, de una sociedad civil crecientemente movilizada y, por tanto, más exigente ante todo tipo de poder.

El desarrollo institucional del sistema mediático de comunicación ha sido diferenciado, según las aplicaciones tecnológicas respecto del canal y soporte técnico de transmisión y difusión (impreso, sonoro y audiovisual); el comportamiento económico y político de sus operadores, estatales permisionarios y privados concesionarios; las regulaciones jurídicas y el contexto del intercambio simbólico y el consumo cultural en cada país. Aquí se argumenta que ese desarrollo en cualquier caso, sin embargo, ha dependido de la vigencia del ideario liberal, de los derechos y las obligaciones que impone el Estado constitucional de derecho²⁹⁵, de las exigencias políticas de la democracia y de un ámbito público más distendido, marco que hace productivo el análisis de las disputas económicas y políticas implicadas y que repercuten en esos aspectos.

Así, en paralelo con los procesos históricos de industrialización, urbanización y crecimiento demográfico, los medios de comunicación se transforman en agentes económicos, políticos y culturales y se desempeñan como tales, ya que si bien operan con una racionalidad económica y cultural, disputan al Estado los términos de su participación en el ámbito público social²⁹⁶, en cuya configuración intervienen, estableciendo y modificando pautas convencionales para el comportamiento de

²⁹⁵ Una forma simbólica ideológica que, sustentada en una concepción republicana del ámbito público, supone que la racionalidad de éste radica en que otorga paridad de concurrencia y acceso a cualquiera con voluntad de comunicarse, si lo que tiene que decir concierne al interés común, lo cual desde luego no puede hacerse efectivo en el espacio público mediático; véase la crítica a esa idea en Costa (1999).

²⁹⁶ Que tal como se vio no es una órbita de legitimación de los diferentes actores sociales y sus demandas, sino foro de discusión y transmisión al Estado de reivindicaciones que son *a priori* justas y legítimas, ya que la legitimidad de las asociaciones civiles no necesita ser construida públicamente, pues está supuesta como atributo ontológico de la participación voluntaria (Costa, 1999:102); McQuail (1998: 36-47) sostiene que la calidad de ese ámbito depende de la calidad del sistema mediático que en él interviene, aunque haya criterios y métodos muy diversos para evaluarla.

intercambio y consumo de bienes materiales y culturales, de apropiación individual y colectiva. La peculiaridad de los bienes que producen radica en el carácter simbólico de los mismos. Los contenidos de información, opinión política, entretenimiento, propaganda y promoción comercial (publicidad mercantil), que circulan en el ámbito público, son apropiados y sometidos a procesos de valoración, en los cuales el valor simbólico se traslapa con el valor económico, a partir de la atención, el interés y la movilización que se ponen en juego con el intercambio.

Si bien esa transformación es de orden económico, político y cultural, aquí interesa en aquello que concierne a las repercusiones en la gestión del intercambio de información y opinión política²⁹⁷. Por eso, al concentrarse en el estatuto institucional, se pone de relieve el papel de los medios de comunicación en tanto que organizaciones intermediarias, entre el sistema político y el económico y, por su conducto, entre éstos y el sistema societario en el que ellos operan. Con ese estatuto, su actuación puede ser analizada en términos de agencia, es decir en tanto que agentes que tienen como “principal” a los públicos o agregados de ciudadanos en el papel de audiencias consumidoras de su producción simbólica cultural. En ese sentido, se desempeñan en el papel de administradores y controladores, tanto de los flujos de información y opinión que mediante su difusión adquieren el carácter simbólico de “públicas”²⁹⁸, como de la visibilidad y la resonancia que concede su difusión. En el conjunto de los medios convencionales de comunicación, prensa, radio y televisión, la difusión de ésta última detenta en cualquier lugar del mundo la mayor escala e intensidad de

²⁹⁷ El intercambio se ha alterado como consecuencia, por un lado, del declive tanto del papel de partidos políticos y gobiernos, como aglutinadores de las demandas sociales e instancias que dirimen los conflictos, como del periodismo político puente entre aquellos y el electorado; éste se comporta más errático, menos anclado a militancias pero más exigente de eficacia gubernamental, proclive a atender toda exhibición de descontento y a tolerar maniobras de grupos de presión y, por otro lado, a la fragmentación de mercados y audiencias mediáticas que, con la multiplicación de canales y diversificación de formatos, aprenden a elegir, discriminar y utilizar el contenido político con flexibilidad, ecléticos que disfrutan de la “miscelánea política” a su disposición las 24 horas del día o “especializados” que seleccionan sus materiales favoritos; se modifican los criterios de lo políticamente “noticiable” para ajustarlos a las preferencias populares, que tornan en cauce para enterarse (Bumler y Guveritch, 2000).

²⁹⁸ Pero solamente en cuanto a una de las dimensiones de lo que es considerado “público”, a saber la accesibilidad irrestricta a todos; lo cual es válido en el caso de la radio y la televisión transmitida en señal generalista y recibida con gratuidad, es decir su recepción no implica una contraprestación económica, tal como sucede en el caso del periódico y la Internet; las otras dimensiones corresponden a la propiedad y al interés colectivo, por oposición a lo que es privado y se tiene el derecho de mantener en la secrecía y ser garantizado por el Estado para que así sea.

exposición, accesibilidad y recepción²⁹⁹. Sin ser por sí objeto de este estudio, aquí habrá que tener presente que el desarrollo de su influencia cultural deviene de la descentralización de su difusión a escala nacional, que ha tenido lugar sin embargo sobre la base de una tendencia hacia la concentración económica de la propiedad, en cada hilera del sector mediático, como consecuencia de un contexto mundial de desregulación jurídica de su funcionamiento y actividad, en el sentido de eliminar restricciones, no obstante la relevancia que comportan. Esa ha sido la situación que priva en México, en especial de la televisión operada por agentes privados.

3.1. Modelos de funcionamiento mediático y repercusiones políticas

A diferencia del modelo de funcionamiento basado en la propiedad estatal del sistema mediático, originado, característico y aún predominante en varios países europeos debido al fuerte arraigo de una tradición cultural que antepone el interés y el servicio público en el campo de los bienes culturales, en el modelo de radiodifusión de libre mercado la difusión y transmisión libre y generalizada de y entre individuos, agentes privados u organizaciones sociales es una actividad concesionada por el Estado a organizaciones privadas con fines de lucro. La concepción política e ideológica en que se soporta cada modelo responde a una prioridad inversa en términos de derechos colectivos y libertades individuales. En el primer caso los primeros se antepone a las segundas; en el segundo caso es a la inversa, según que se considere que el Estado o el mercado aseguran mejor su respectiva protección, tutela y ejercicio y que las intervenciones de uno u otro deban ser restringidas con ese propósito.

Ambos modelos comparten predicamentos comunes cuando se trata de imponer restricciones a la producción simbólica y cultural, así como a la libre circulación de ella, de información y opinión política, en cuanto que pongan en riesgo el funcionamiento

²⁹⁹ La innovación tecnológica no explica que la televisión privada haya ganado terreno en casi todos los países que, tal como afirma Richeri (1994: 93) no ha sido un factor desencadenante sino acaso un medio en unos casos, un objetivo en otros y una coartada de decisiones políticas o de proyectos económicos en otros más. En cambio, se puede considerar resultado de a) la diversificación del consumo cultural de las audiencias; b) la politización de la televisión pública; c) la generalización de las políticas públicas de corte neoliberal; d) la presión de empresas publicitarias para encontrar más soportes técnicos, tal como afirman Badillo y Marengi (2000).

de la democracia. El dilema permanente consiste en el consenso social para definir el interés público, delimitar la información de orden público y la privada y las modalidades a que deba ajustarse su libre circulación, acceso y apropiación, correspondiendo en cualquier caso al Estado asegurar la máxima publicidad y proteger la confidencialidad, respectivamente³⁰⁰. Por consiguiente, una es la naturaleza material y otra la simbólica del poder de los medios de comunicación, aunque ambos aspectos se revelan en la configuración del espacio público mediático³⁰¹, en tanto que algunos de ellos actúan como agentes privados (porque detentan la propiedad de la infraestructura tecnológica de difusión a partir de un capital privado) y a la vez todos ellos son agentes públicos ya que administran un bien público por concesión o permiso e intervienen en la conformación de pautas culturales para disponer y dar sentido compartido a los objetos que son circulados en el espacio público social; por tanto, la circulación de contenidos debe ser regulada ya que su recepción socialmente generalizada tiene impacto en distintos campos de actividad e interacción social.

Ante ambas modalidades de poder debe ser ubicada la incidencia que los medios de comunicación tienen sobre la cultura política, en cuyo contexto los medios actúan. Estas consideraciones no son ignoradas por gobierno y en legislación alguna en el mundo actual, si bien en cada sociedad nacional se atiende al conocimiento especializado de diversa manera. El desarrollo de los medios ha llevado a la configuración de un sistema articulado en el cual la prensa produce una información original, la televisión la difunde a un gran público y la radio personaliza la interacción (Bennett, 2003). Por eso el sistema político funciona buscando el apoyo o la menor

³⁰⁰ En ambos modelos, la información que producen las instituciones públicas estatales constituye un bien público colectivo inconmensurable, destinado en primer término al ciudadano, quien detenta ese derecho político y cuyo ejercicio conlleva hacer exigible el acceso a ella.

³⁰¹ De acuerdo con Rizzi (2003), los medios de comunicación masiva ejercen un derecho según la lógica del poder históricamente denominado *dominium*, fincado en la disposición de infraestructura tecnológica para difundir a gran escala en el espacio público; al actuar como potencia y sujeto del poder que del mismo deriva, tienden a establecer una relación de alteridad que contradice la disposición a una ciudadanía universal; por eso modifican la identidad de los integrantes de la comunidad política al convertirlos en públicos y relacionarse con ellos de manera monológica, a la vez que establecen una ruptura del patrón antropológico de la política moderna, al prescindir de la *isología* del discurso democrático y reemplazarla por la *heterología* del discurso mediático; la actuación de los medios se rige por esas lógicas inherentemente contrapuestas, desde la perspectiva del sentido de lo público y lo privado que entra en juego en este tipo de instituciones intermediarias entre sociedad civil y política.

hostilidad posible por parte del sistema mediático, por cuanto éste último opera como “mercado político” del que los ciudadanos son consumidores (Castells, 2006)³⁰².

En ese marco, se esperaría que la televisión pública y de propiedad estatal ejerciera un contrapeso a la televisión comercial, mediante una producción de contenidos que interpele a la audiencia en tanto que ciudadanos. Pero sería un equívoco considerar su papel al margen de los condicionamientos del sistema mediático en conjunto y las predisposiciones de los públicos televisivos³⁰³. En ese sentido, en la cuenta del potencial educativo y la penetración social, el ideal de una televisión y una radio que produzca información relevante para los ciudadanos y dé cabida al pluralismo ideológico en sus contenidos no depende solamente de la regulación jurídica, sino del cambio cultural que deviene, por otra parte, de una democratización cuyos referentes se hallan en una sociedad civil movilizada, con ese cometido y de modo consistente.

En primer término porque el servicio público no puede aislarse sino que es afectado por la coexistencia del servicio de televisión como negocio, en una competencia que no puede dejar de ser invariablemente asimétrica; en segundo término porque las preferencias de consumo televisivo no se han modificado con la oferta cultural dirigida a ciudadanos; en tercer término porque en tanto que agente cultural, la televisión está condicionada invariablemente por las políticas públicas en ese campo y por los cambios culturales en las prácticas sociales y políticas de la sociedad. El hecho analítico relevante aquí reside en que el mensaje televisivo se puede evaluar en dos dimensiones: a) desde lo comunicativo, a partir de las estrategias de negociación de sentidos, de conexión social y de mediación cultural entre la producción y el consumo y b) desde lo histórico, con base en las transformaciones en las maneras en que funcionan los medios, de las representaciones sociales y de la relación de los medios

³⁰² “La política se basa en la comunicación socializada, en la capacidad de influir en la opinión de las personas, el canal de comunicación más importante entre políticos y ciudadanos es el sistema de medios de comunicación de masas, siendo el primero de ellos la televisión” (Ibid: 3).

³⁰³ Por ejemplo, en un estudio comparativo, con análisis de contenido de prensa, radio y televisión y encuestas a ciudadanos de Reino Unido, Dinamarca, Finlandia y Estados Unidos de Norteamérica, se comprobó que no hay diferencias relevantes en la cobertura de asuntos nacionales y el nivel de información de las personas respecto de ellos, en cambio son notorias en asuntos internacionales ante los cuales el país americano se encuentra por debajo en cobertura y en posesión de información por parte de sus ciudadanos y esos niveles son semejantes en los otros países (Iyengar y Curran, 2009).

con los poderes económico y político en cada coyuntura (Rincón, 2006)³⁰⁴. El más significativo de esos cambios consiste en que las audiencias han dejado de ser predominantemente homogéneas y se han tornado localizadas y fragmentadas, con necesidades y expectativas culturales, económicas y políticas diferentes³⁰⁵.

En términos de comunicación política, ese hecho es indicativo y a la vez consecuencia de la transformación del entorno comunicativo que, con diferencias en cada sociedad nacional, obedece a un mismo patrón según diversos especialistas. Así, en uno de los más completos análisis de la cuestión, Bumler y Gurevitch (2000) concluyen que la disputa por el acceso a los tiempos de difusión mediática con mayor audiencia, se torna en un recurso más disputado que antes en la lucha política y la interlocución con el electorado; ante el relajamiento de controles legales, los agentes mediáticos operan con márgenes amplios para gestionar el espectro de contenidos, que tienden a ser dispuestos estratégicamente conforme a una segmentación de audiencias³⁰⁶, alterando el orden jerárquico de lo políticamente “noticiable” y otorgando visibilidad y voz a actores, asuntos y movimientos sociales más diversos, que encaran a los agentes políticos en una competencia desigual, porque éstos no tienen acceso a la réplica de las interpelaciones de que son objeto.

Con la multiplicación de canales y flujos de intercambio de mensajes, los agentes políticos dejan de ser la fuente privilegiada de información, a la par que el periodismo político pierde el estatuto de que gozó como principal moderador del intercambio con los electores³⁰⁷; la política es crecientemente implicada en contenidos de

³⁰⁴ Para un documentado análisis comparativo de las estrategias de producción y difusión, a partir del enfoque del comportamiento de industrias y mercados mediáticos, en países con mayor nivel de desarrollo económico y democracias consolidadas, véase Sánchez-Tabernero (2008).

³⁰⁵ Por ejemplo, en la época en que la oferta televisiva era menor y menos diversa, predominó la agrupación de televidentes por programa; actualmente se ha reconfigurado el mercado de audiencias a partir de las preferencias por canal, lo que ha devenido en un flujo indefinido de relatos y la calidad de contenidos es valorada desde diversas perspectivas sociales; los estratos altos de la población se concentran en contenidos y valores morales representados y movilizados por ellos, al igual que los adultos con mayor información, tal como observa Rincón (2006).

³⁰⁶ Estructurada según intereses, conocimientos y propensión al activismo y buscar información (Blumer y Guveritch, 2000).

³⁰⁷ Sanders (1999) subraya que con la creciente fragmentación y competencia en los mercados políticos y mediático, en el escenario actual, los acuerdos y las convenciones no escritas entre periodistas y políticos tienden a perder fuerza y arraigo.

entretenimiento y la información de fondo acerca de ella es sustituida por un aluvión de noticias ligeras (“soft news”) sobre sucesos particulares y obviedades de la vida cotidiana que ofrecen una mirada más relajada a audiencias sin interés en aquella, un público que aplica categorías cada vez menos políticas al análisis de la política (Gerstlé, 2005), mientras que periodistas de espectáculos se tornan en “voceros” que invaden esa parcela cada vez más, aprovechando de un lado el deterioro de la política como actividad y contenido central en el espacio público y, del otro, que los partidos y gobernantes son vulnerados diariamente por estrategias de difusión informativa por las cuales se les hace aparecer invariablemente confrontados por una variedad de agentes y causas ajenas a su agenda y control político. Los flujos de mensajes entre gobernantes y ciudadanos se ven, por tanto, afectados por la tensión que produce el relajamiento de la ética mediática y una política definida tan flexiblemente (Louw, 2005)³⁰⁸. Una consecuencia es que los agentes políticos y mediáticos se enfrascan en “pseudo discusiones” que apenas conciernen a disyuntivas de la acción de gobierno. Dader (2008) ha advertido en el predominio de la auto-regulación deontológica frente a la regulación legal del sistema mediático, la conducción de éste, por la fuerza del mercado, hacia un mercado *populista* de la política³⁰⁹.

Al sistematizar los resultados de investigaciones dirigidas, en diversos casos y países, a establecer las maneras en que lo que sucede en el entorno (guerra, escándalos, situación económica, catástrofes naturales, epidemias) afecta la evaluación que las personas hacen de los agentes y las instituciones políticas, Canel (2008) concluye que los públicos de la difusión mediática no se comportan como “espectadores” sino como “inspectores” que monitorean y juzgan a los políticos confrontando lo que dicen que hacen respecto de lo que aparecen haciendo y que, aún en los casos en que la orientación ideológica o partidista les lleva a enfocar sus juicios hacia gobernantes del

³⁰⁸ Quien llama “political hype” a esa tendencia mediática de escenificación orientada a la popularización de lo que atañe a política, a través de formatos de presentación de contenido que enfatizan las apariencias y la inmediatez del suceso o testimonio, una parafernalia con efectos en la imaginaria.

³⁰⁹ Por lo cual reivindica la primacía de una perspectiva evaluativa-normativa por encima de una descriptiva tecnocrática instrumental, para evitar la confusión que deriva de la sustitución de la reflexión científica por los testimonios de los expertos en aplicar la mercadotecnia política, cuando el reto es clarificar las contradicciones de la “democracia del espectáculo” y la “ciber-democracia” para recuperar, de la mano de la filosofía y ciencia política, los valores democráticos; lo que implica considerar los efectos de la mediatización de la política al momento de analizar y estipular las reglas democráticas relativas a la representatividad y responsabilidad política. (Dader, 2008).

mismo signo político, invariablemente todos sus juicios están referidos a realidades relacionadas con situaciones de su entorno de vida.

3.2. Desarrollo del sistema mediático en la democracia liberal

Para entender el desarrollo del sistema mediático y la relación que guarda con el sistema político, en términos del funcionamiento democrático, resulta productivo considerar el enfoque de economía política de la comunicación, para analizar críticamente la teoría liberal tradicional acerca del papel de los medios en las sociedades democráticas contemporáneas, cuestión de la que se ocupa un debate iniciado, de cara a los cambios tecnológicos y políticos en el mundo, en los años noventa. De acuerdo con el análisis de Curran (2000), en la perspectiva más ortodoxa de la teoría liberal, el papel principal de los medios consiste en vigilar la actividad y exponer los abusos en que incurran las instituciones estatales; en congruencia con ese papel la mejor manera de organizar el sistema de medios es anclarlo al mercado para asegurar la independencia respecto de ellas y a la vez asegurar que las presiones que ejerzan no conculque ese papel en los hechos. Desde ese punto de vista, cualquier regulación legal debilitaría los márgenes de independencia para desempeñar ese papel, considerado esencial para garantizar el libre mercado, la circulación de opinión política partidista, valor fundamental en todo el espectro de orientaciones políticas en la sociedades en que aquella tradición tiene fuerte arraigo.

Si bien ha encontrado diversa fuerza de oposición en cada país, el argumento del libre mercado invariablemente ha sido utilizado como justificación de la tendencia, en los años ochenta, a liberar de restricciones políticas en cuanto al contenido de la difusión y, durante los años noventa, a orientar y circunscribir la regulación legal a la finalidad de asegurar la libre competencia económica y la modernización tecnológica de la industria televisiva y radiofónica, en un contexto en que al ser introducidos los sistemas de cable y satelital se multiplican los canales pero no así los operadores. La tendencia tuvo repercusiones en la consolidación de sistemas “mixtos”, privados y públicos o estatales, y paradójicamente en la instauración de una concepción ideológica por la cual los operadores mediáticos vigilan a las instituciones estatales en

mayor medida, rigor y desenfreno que a los corporativos privados mercantiles, de los cuales forman parte en términos de intereses del mismo tipo. Subyace así el sesgo de aplicar criterios distintos para vigilar las diferentes formas de poder, al ser considerado a conveniencia al poder político como más opresivo que el económico, puesto que la libertad de mercado no se ejerce con independencia de otras formas de poder³¹⁰.

Desde esa formulación de la concepción liberal, el Estado es pensado como el objeto principal del escrutinio público mediático, puesto que al detentar el monopolio de la violencia legítima es la institución de la que más podría esperarse que cometa abusos. Por esa razón es importante establecer una distancia crítica entre el sistema mediático y el sistema de gobierno, a partir de los intereses privados que los medios pueden perseguir y hacer prevalecer. Con todo, el hecho es que mientras que se ha ampliado el andamiaje institucional de gobierno, incluido los órganos cuyas decisiones pueden afectar la rentabilidad de las empresas mediáticas, los gobernantes electos de distintos partidos políticos y funcionarios designados se implican, rutinariamente, en acciones de negociación y a la vez de vigilancia con respecto a los medios de comunicación. Aquellos de propiedad privada, orientados hacia la búsqueda de lucro, tienden a diversificar sus intereses económicos y se extienden a diversas ramas y sectores, por lo cual buscan estratégicamente mantener una relación no conflictiva con el gobierno en turno. Por su parte, los partidos políticos requieren de las prestaciones de una relación de connivencia con las empresas mediáticas, en especial en contextos competitivos en que la disputa por el apoyo electoral transcurre en el escenario de la comunicación mediática, aunque eso no significa que allí se resuelva³¹¹.

³¹⁰ Una concepción alternativa tendría que considerar a los medios como entidades que vigilan a la vez al poder económico privado y al poder público, porque la cuestión aquí no es que los medios estén vinculados a intereses privados, sino que ellos mismos son grandes negocios privados, formados en las últimas tres décadas; en ese sentido no se trata de la reducción de la libertad de mercado, en tanto que ella misma es incapaz de asegurar la equidad al margen de otras formas de poder (Curran, 2000: 122).

³¹¹ Tal como ha demostrado Trejo (2001) para el caso de México, con sus investigaciones cuantitativas sobre el tratamiento dado a los partidos en prensa, radio y televisión, durante la elección de la primera alternancia en la Presidencia de la república y luego confirmado en su análisis de la cobertura informativa de las campañas electorales de cara a la sucesión presidencial y la renovación del Congreso en 2006 (Trejo (2010), en que demuestra que la mayor dependencia de las estrategias partidistas respecto de la propaganda en radio y televisión y la mayor recurrencia a propaganda para denostar al adversario ("negra"), no pueden ser considerados como un factor que haya decidido el resultado.

Estos cambios acumulados han originado una interrelación³¹² crecientemente inestable, en la que ciertamente los medios dependen en menor medida del poder político, así como propensa a giros en cuanto al sometimiento a las presiones de éste, que se reflejan en un comportamiento editorial estratégico con mayores márgenes de influencia en la arena política³¹³, si bien cada vez es menor el control que agentes mediáticos y políticos detentan respecto de la opacidad o secrecía de las negociaciones y alianzas que entre ellos establecen; como consecuencia de la creciente exigencia de rendición de cuentas engendrada en la sociedad civil³¹⁴.

Eso ha llevado a poner en cuestión el análisis del papel de los medios, en términos del sistema político democrático, a partir de aquello que hacen o no la mayor parte del tiempo, de lo que dependería la autonomía efectiva de sus respectivos intereses frente a agentes políticos y el control que ejerzan sobre su desempeño público (Curran, 2000: 124). Algunos estudios arrojan suficiente evidencia, sin embargo, que indica que el sistema de medios tiene, por sí mismo, un impacto en las estructuras sociales³¹⁵.

³¹² Basada en una interdependencia en el sentido en que ha sido argumentada, a diferencia de una perspectiva desde la cual el sistema mediático determina el comportamiento del sistema político, tal como sostiene, por ejemplo, Álvarez (2005), en tanto que poder que organiza la opinión pública y dirigirla contra el poder político, además de una industria económica con peso específico en el PIB y que por eso puede imponer reglas propias dentro del juego de poder.

³¹³ En especial en contextos de campañas electorales y cuando los partidos utilizan estrategias de polarización de posturas ante los asuntos que se ponen en juego en el debate público, tal como en el caso de México prueba Trejo (2010:274), quien sostiene que el enfrentamiento y la descalificación fue acicateado por radio y televisión, mediante un “maniqueísmo mediático” basado en la personalización y estereotipos de una cobertura informativa centrada en de tal manera que el clima de discordia sembrado durante y después de las campañas rebasó a los partidos políticos contendientes.

³¹⁴ Según McQuail (2003) es claro que los intentos de control legal dirigidos a hacer responsables a los medios de comunicación han sido vistos como intromisiones en el mercado o como transgresiones a la libertades constitucionales; en tanto que Naughton (2005) y Cooper (2006) ven en la movilización crítica desde la sociedad civil, a través de la Internet, mediante la emergencia y expansión de “blogs” y las redes de comunidades dedicadas a evaluar la difusión de los medios convencionales y confrontando con fuentes primarias para poner en evidencia sus sesgos y la falta de transparencia en su operación.

³¹⁵ Tal como se concluye en el estudio comparativo de Hallin y Mancini (2004) acerca de las diferencias en la estructura y el papel de los medios y sus efectos en la política democrática de varios países con tradición democrática; con esa premisa, Carreño (2007: 9-13) destaca que durante el siglo XX se estudiaron los medios como variable dependiente de las estructuras de poder, pero en el siglo XXI se invierte esa tendencia debido a la creciente dependencia de los agentes políticos respecto del poder económico y cultural mediático al que no logran gobernar o se resisten a hacerlo; la cuestión no consiste en que el sistema mediático no acepte sus responsabilidades, sino que no acepta que ellas sean definidas desde el poder político o desde la sociedad civil; las cuales entiende a partir de su propia lógica y las expresa mediante su propio discurso, el cual hace resonar en mayor medida que cualesquier otro.

En la perspectiva centrada en la responsabilidad social de los medios, el análisis es enfocado hacia la cuestión relativa a qué tanto ellos se apartan del ideal normativo democrático, según el cual en el desarrollo de su función como proveedores de información pública relevante, deben anteponer como criterio servir de canal irrestricto para la expresión libre del pluralismo ideológico y la discusión pública de las ideas en la sociedad en que se inscriben. En esta línea, Donohue, Tichenor y Olien (1995: 127) sostienen que al llevar a cabo tareas de apoyo al *status quo*, los medios se desvían de ese ideal y terminan por funcionar como meros vigilantes (“centinelas”) de ese orden, es decir, del sistema económico y político frente a las amenazas internas y externas, aunque solamente de quienes detentan posiciones de poder dominante, por lo cual son evaluados por éstos como favorables en comparación con grupos con menor o ningún poder. Desde esa perspectiva, los medios eventualmente adoptan estrategias críticas y enfrentan a la autoridad solamente cuando se presenta un conflicto entre élites en las estructuras de poder; aún en esos casos se centran en los individuos que lo ejercen, antes que en las estructuras mismas. De manera que la cuestión es analizada en términos del grado de autonomía con que se sitúan los medios ante los “poderes de facto”, de lo cual dependen las alianzas que puedan o no establecer en pos de sus propios intereses e intereses comunes (Ibid: 116-126).

Al respecto, en el contexto Europeo, SanMartín (2003: 81-89) llama la atención hacia el hecho de que hasta muy recientemente se desestabilizó el equilibrio que guardó la comunicación entre agentes políticos, medios y audiencias, mantenido durante la “segunda posguerra”, cuando se acostumbraba identificar la opinión pública con los medios, a éstos con las audiencias e intereses semejantes entre medios y actores políticos; una concepción por la cual a cada bloque de audiencia correspondía un cierto medio y a cada medio una cierta facción política; cambios sociales subsecuentes, en los medios y en las audiencias dieron lugar a una fragmentación, estimulada por factores sociales y económicos, de tal manera que no todos los medios tenían fijada una audiencia de antemano, ni los agentes políticos se alineaban con algún medio.

A finales de los años ochenta, la aparición de nuevas televisoras se produce ante audiencias desfasadas entre sí y grupos sociales no representados en la oferta

televisiva, pero todas debieron adaptarse a la remodelación de un sistema informativo regido por principios de pluralismo y diversidad, si bien se mantiene la pauta cultural por la cual se considera que la información y la opinión pública se corresponden con aquellas que son publicadas, de modo que de entre todos los medios masivos aquello que no aparece en televisión no existe o es irrelevante. De ahí que en la década de los años noventa se acentúan las pugnas en pos de la diversidad informativa, el valor de los matices y detalles en la información y opinión circulada, la necesidad del debate público y de incorporar a las minorías al mismo, sean cualesquiera que fueran³¹⁶.

Así, mientras que crecieron las pugnas por conseguir cobertura en medios audiovisuales, se redujeron las “cuotas” estables de visibilidad concedida a partidos e instituciones gubernamentales, cuyo papel como fuentes privilegiadas de información sobre los asuntos públicos declina y se erosiona su función de representación, en especial en el caso del Parlamento. A mediados de esa década, el acceso a Internet, en tanto que red informativa mundial que resiste la homogeneización cultural y el unilateralismo comunicativo vertical, puso a disposición de algunas minorías sociales el recurso de manifestar sus vindicaciones o reivindicaciones, sin tener que esperar a ser mayoría por los métodos democráticos. Desde entonces era claro que el monopolio de los medios tradicionales como cauce de comunicación política empezaba a debilitarse, en la medida en que desde la WEB emerge un cauce social difícil de someter a control.

Hay factores que impiden que los medios privados se subordinen ante coacciones, puesto que para ser económicamente rentable, todos requieren mantener el interés de una audiencia; gozar de cierta credibilidad al detentar la ocupación del espacio público y tratar con asuntos colectivos y responder a códigos profesionales y rutinas de producción determinadas por decisiones de sus directivos y que influyen en otras empresas (Curran, 2000: 125)³¹⁷; a las élites políticas les conviene³¹⁸ respaldar ese

³¹⁶ Sin perder de vista que como sostienen Iyengar y Kinder (1993: 212) para el sistema mediático y la televisión estadounidense, “la producción de noticias tiene lugar dentro de los límites establecidos por las fuentes oficiales y los valores dominantes”.

³¹⁷ Según este autor, en contraste, una postura analítica simplista omite las relaciones de poder en que se sitúan los medios de comunicación, cuando se limita a explicar, por ejemplo, que aún cuando aquellos concesionados a privados guarden independencia y una relación más adversa respecto al gobierno, los ataques mediáticos al mal desempeño gubernamental pueden ser manipulados o

ideal de independencia del sistema mediático respecto de intereses particulares; la regulación de la radiodifusión está soportada en un sistema de “pesos y contrapesos” que, si bien varían de un país a otro, en la mayor parte del mundo, incluida Europa occidental, contienen por lo menos las siguientes salvaguardas: a) la garantía constitucional de libertad de expresión; b) reglas formales que exigen a los radiodifusores imparcialidad; c) apego a la ley; d) la sociedad civil o todos los partidos políticos deben estar representados en la autoridad reguladora; e) monitoreo del financiamiento público; f) competencia efectiva entre radiodifusores y libre asociación; g) delegar en los radiodifusores la auto-regulación deontológica por la responsabilidad social de contenidos, a través de estructuras formales e informales. El énfasis en tales salvaguardas es mayor para la radiodifusión pública (Curran, 2000: 126).

En las más consolidadas democracias liberales persiste una cultura política que ha llevado a una sofisticada regulación de la radiodifusión pública, a la vez que condescender en lo que concierne a la de propiedad privada y orientada comercialmente, a cuyos operadores no se exige rendición de cuentas por la libertad y responsabilidad de determinar los contenidos y línea editorial de difusión. Desde el mismo paradigma liberal, otra perspectiva considera que, se abona al “buen gobierno” el exponer públicamente la toma de decisiones; se interrelaciona con la opinión pública y es confrontada por ella, el debate público en el que participen ciudadanos informados y sean considerada la pluralidad de ideas conduce hacia decisiones y resultados racionales y justos. Los medios de comunicación proveen el cauce y canal para la interlocución entre gobernantes y gobernados, la publicitación de las opiniones, del debate y la acción colectiva concertada, asistiendo a los ciudadanos para emitir un voto informado en las elecciones y a la sociedad en la clarificación de objetivos, políticas públicas y la evaluación del funcionamiento gubernamental. Pero el

desviados de sus fines originales; o bien que en esas circunstancias cierto periodismo de investigación es visto como eventual concesión antes que como una transacción entre elites, tal como pudiera ser el caso cuando una filtración política, de una fuente de alto nivel, responde a una estrategia para colocar una agenda que prepare el terreno para una reforma, aunque en la mayoría de esos casos la revelación que hacen los medios puede ser entendida como parte de la propia gestión mediática.

³¹⁸ Los políticos experimentados de partidos más grandes saben que requerirán del acceso a la radiodifusión cuando sean votados para un cargo público (Ibid.: 126).

desempeño correcto de ese papel de intermediación requiere de independencia frente a intereses particulares, la cual solo puede ser asegurada a través del libre mercado.

De acuerdo con Curran (2000: 129) a esta perspectiva habría que objetar que el régimen mediático de libre mercado: a) restringe la efectiva libertad de publicar, por la cuantiosa inversión económica que significa establecer un nuevo medio; los que operan con bajos costos suelen ser marginales o de baja audiencia; b) reduce la circulación de información pública y no asegura que las personas estén mejor informadas³¹⁹; c) limita la participación en el debate público y genera brechas informativas entre elites y público en general; d) socava el debate racional e inteligente porque genera información simplificada y descontextualizada, con énfasis en la acción en lugar de en los procesos, en la visualización y en “estereotipos” antes que en la complejidad humana³²⁰.

Por otra parte, la teoría liberal prevé que los medios de comunicación contribuyen a la supervisión del gobierno por parte de los ciudadanos en periodos entre elecciones, funcionando como representantes de ellos ante la autoridad, al resumir el estado que guarda el debate público de un cierto asunto y retransmitir el consenso público que resulta de ese debate hacia el gobierno. Habría que considerar, sin embargo, que en tanto que audiencias los ciudadanos son tomados por consumidores y la influencia que pueden ejercer en ese papel es reactiva más que proactiva, a través de selecciones entre lo que está disponible en el mercado no la elección de la propia preferencia³²¹.

Así que desde el punto de vista de las audiencias su influencia en el mercado mediático está limitada, por un lado, porque la excesiva concentración de la propiedad mediática impide una oferta tan diversa como la demanda; debido por otro lado a las barreras de entrada para nuevos competidores, en razón de los altos costos implicados en un

³¹⁹ Un estudio a lo largo de 40 años, muestra que las presiones competitivas para maximizar las ventas resultaron en el desplazamiento de los asuntos públicos por los contenidos de interés humano en la cobertura periodística; en la televisión popular, las noticias tienden a ser desterradas a los márgenes de los horarios de difusión con mayor audiencia (“prime-time”), destinados a contenidos de ficción, en cualquier lugar en donde el régimen legal de televisión ha sido desregulado.

³²⁰ El autor remite a Epstein (1973); Inglis (1990); Iyengar (1991); Gitlin (1994); Hallin (1994), ya citados.

³²¹ El número de opciones es decisivo para determinar qué tanto poder tiene el consumidor realmente; si las opciones son reducidas la influencia del consumidor será reducida (Curran, 2000: 130).

mercado concentrado³²². En ese marco, ese autor compara cuatro modelos de regímenes mediáticos, según la configuración de poder al que ellos están vinculados y circunscritos, para evaluar si pueden representar o no los intereses de los ciudadanos:

- 1) La elite económica controla los medios privados y ejerce influencia en el gobierno y la opinión pública, incluso mediante canales informales de acceso al Estado; tal como ocurrió en Rusia (McNair, 2000).
- 2) La elite política utiliza el poder estatal para desarrollar un “sistema clientelar” de patronazgo y ejerce influencia en diversos grupos de la sociedad a través del sistema de medios: alienta alianzas entre franquicias de televisión; otorga préstamos, subsidios y publicidad gubernamental; acciones que intimiden a periodistas disidentes del sistema de control; tal como ocurre en Malasia (Nain, 2000), Corea (Park, et., al., 2000) y Taiwan (Lee, 2000).
- 3) Elites económicas y políticas interrelacionadas ejercen influencia equiparable, aunque con alianzas incómodas, que el sistema mediático promueve como cierto consenso que por eso consigue aceptación popular; situación común en Latinoamérica, donde hay un estado nacional fuerte (Waisbord, 2000). En el caso de México, Hallin (2000) arguye que, antes que la presión ejercida por las audiencias, la facción reformista de la elite política orientó a los radiodifusores comerciales a desprestigiar adversarios en el marco del reacio pluralismo de finales de los años ochenta.
- 4) Un corporativismo liberal basado en la interrelación entre capital organizado, asalariados y Estado es la base de un sistema de poder compartido y consensos que influyen decisivamente los términos del discurso de referencia del sistema mediático, tal como ocurre en Suecia (Dahlgreen, 2000), Gran Bretaña desde los años ochenta (Curran y Leys, 2000) y el norte de Europa en donde declina actualmente por el predominio del mercado y el debilitamiento de los trabajadores organizados.

La variable común es que los desacuerdos entre élites se reproducen generalmente entre los medios, lo que repercute en el poder que éstos detentan.

³²² Si bien el análisis liberal tradicional interpreta ese hecho como una restricción, que podría excluir a jugadores que enfatizan al público ilustrado, ese argumento pasa por alto que su significado clave es el modo invisible de censura que excluye a grupos sociales con limitadas fuentes de financiamiento para competir en el sector mediático; el resultado es un sistema de mercado que no está genuinamente abierto a todos y tiende a ser controlado por líderes conservadores (Curran, 2000: 131).

Aunque podría pensarse que se cumplen los presupuestos de la teoría liberal, el ímpetu de cumplimiento se origina en la estructura de poder, no en la sociedad civil; otra variable concierne a la excepcionalidad con que el poder central mediático representan a una opinión pública crítica con fuerza de emancipación (Curran, 1996), lo que depende del vigor de la sociedad civil, el desarrollo de alternativas mediáticas y una producción orientada sin cortapisas hacia los intereses de las audiencias.

Con base en esta revisión crítica de esa tradición ideológica, queda en claro que la concepción liberal, relativa al papel de los medios privados de comunicación, no considera el amplio rango de influencias que dan forma al sistema mediático para asegurar su pluralismo, mismas que no se explican solamente a partir de la variable económica y que dependen de cada contexto socio-cultural político. Conviene entonces considerar el modelo sistémico propuesto por Habermas para entender ese papel. Reformulando su propia concepción (1981), concibe el funcionamiento del sistema democrático (1998) en términos de un centro decisorio compuesto por la administración, la judicatura, el Parlamento, los partidos políticos, las elecciones y la competencia electoral y una región periférica de influencia sobre aquel, integrada por agencias reguladoras con poderes delegados por el Estado correspondientes, de un lado a la sociedad económica (asociaciones empresariales, sindicatos y grupos de interés) y del otro a la sociedad civil (asociaciones voluntarias, iglesias, movimientos sociales)³²³, desde donde los asuntos colectivos fluyen idealmente hacia el centro.

Reformula también su concepción de esfera pública, concebida ya no como asociación de individuos como un público individual, sino como una red de comunicación, información e intercambio, diferenciada, plural y organizada, que vincula el mundo privado de la experiencia cotidiana con el sistema político, y cuyos grupos clave de interés público se desempeñan como agentes sociales “sensores” que detectan asuntos descuidados, proponen soluciones a problemas sociales y, por encima de intereses particulares, ejercen influencia contestataria en nombre de la equidad social; en la medida en que reciban apoyo en la difusión mediática para publicitar el debate

³²³ Mismas que Curran (2000) denomina “de consumidores” y “de proveedores”, respectivamente.

crítico de temáticas específicas, éste sustenta corrientes de opinión pública, por lo que se pueden encontrar respuestas del sistema político.

Esa reformulación ha sido criticada por el optimismo con que supone una capacidad de la sociedad civil para compensar la concentración de poder, un debate significativo e independencia crítica por parte de las audiencias. Habermas sale al paso arguyendo que la movilización de la esfera pública requiere de un balance entre los poderes de la sociedad y de un sistema político favorable a la primera; así como que ante un aletargamiento de dicha esfera, la influencia tiende a fluir desde el poder administrativo del núcleo del sistema político hacia la periferia. De acuerdo con Curran (2000) tendrían que objetarse, sin embargo, que ese planteamiento: a) resta importancia al conflicto de clase; b) no considera cómo los medios deberían ser organizados para servir mejor a las necesidades de la democracia; c) su caracterización de esfera pública contemporánea, como una compleja red que se diversifica dentro de una multitud de arenas sub-culturales superpuestas (internacional, nacional, regional, local), aparece en tanto que proceso acabado y no define el papel del Estado nación.

A partir de esta revisión crítica acerca del papel de los medios de comunicación masiva, en el marco de una tradición ideológica liberal, queda en claro que los medios han tenido que adaptarse a los requerimientos del sistema político, así como a las exigencias de la sociedad en su conjunto, conforme a las cuales se esperaría que dirigieran su quehacer e intervención en el ámbito público, asegurando que los ciudadanos puedan ser informados, a la vez que ejercer sus libertades, habida cuenta de su ubicación en la intersección entre el ámbito del Estado, el de la economía y el de la sociedad civil y su papel de intermediarios de comunicación pública³²⁴.

³²⁴ Touraine (1997: 50) argumenta que ese papel es opuesto los referentes sociopolíticos a los que se sometía la política representativa, cuando los tres componentes de la vida pública, el orden del Estado, las demandas sociales y las libertades públicas dejan de organizarse de una sola manera, como consecuencia de la separación entre Estado y sociedad civil y una diferenciación creciente entre ésta y el sistema político (instituciones representativas y mecanismos públicos de decisión), de modo que las demandas sociales cada vez más diversificadas, exigencias y obligaciones de un Estado circunscrito en su papel en el plano internacional y reglas institucionales en que se basan las libertades, se desarrollan simultánea e independientemente; la comunicación política se define en tanto que instrumentaciones que permiten pasar de uno a otro de esos órdenes y los comunicadores pasan a desempeñar el papel de mediadores con autonomía, cuyo poder depende de apartarse de cada uno de ellos.

3.3. Disputa mediática en la democracia liberal

El desempeño de esa función se produce en términos de disputa y arreglos políticos, pero depende de la trayectoria y la acción estratégica de cada operador que integra el sistema mediático, según que responda o se adapte a los requerimientos y las exigencias señaladas en cada contexto. Cuando ellas implican a los distintos sectores de comunicación mediática masiva, se activan estrategias conjuntas entre operadores, pero al final cada uno defiende la cuota de mercado de consumo cultural que detenta. En tanto que destinatarios de su quehacer, el principal recurso cultural que disputan a cambio de su oferta es el tiempo de exposición, atención e interés que presten las audiencias a sus contenidos, lo que determina la estrategia de cada operador.

La disputa del sistema mediático en conjunto al sistema político ya no reside en detentar el intercambio sino en ampliar la gestión, sin restricciones, de la representación de intereses y la movilización de corrientes de opinión pública, en tanto que principales recursos políticos para ejercer presión e influencia en la sociedad política y económica; pero la administración de tales recursos no corre a cargo solamente de partidos políticos, gobiernos y empresas privadas cuyos discursos concurren al espacio público mediatizado, sino también a través de las organizaciones civiles y los movimientos sociales. La disputa mediática se enfoca en el sistema político; si bien los fines y las estrategias dependen de cada situación particular, en cuanto a la orientación que buscan dar a la representación de intereses y a cierta corriente de opinión pública, cuando trascurren en el ámbito público mediático invariablemente implican a la dimensión simbólica de la cultura política³²⁵, a partir de la cual se ponen en juego los procesos de mediatización extendida y reelaboración discursiva, de los cuales dependerá, en parte, la interpretación que las audiencias puedan hacer acerca de los diversos intereses en pugna movilizados en el discurso mediático, con independencia del ámbito en que se diriman o deban ser dirimidos.

³²⁵ Los mercados no pueden crear una cultura cívica sólida, como tampoco un pluralismo de grupos de interés; las actitudes democráticas se desarrollan en el terreno de la sociedad civil, esfera que constituye la base cultural (Giddens, 2000: 90, 91)

El patrón general con que se conduce esa disputa mediática es poner en entredicho la eficacia de las instituciones democráticas de gobierno, para representar los intereses en términos de su diversidad y para dirimir conflictos relativos a su concurrencia³²⁶. Eso explicaría en parte la estrategia mediática de segmentación de públicos; ésta se asienta en el fenómeno de fragmentación de los vínculos colectivos, ya referido, y trae consigo la inequidad social en el acceso al espacio público societario también por la vía del consumo cultural de la producción mediática.

En la democracia representativa liberal, la producción y circulación de formas simbólicas ideológicas es consustancial a los mecanismos de ejercicio del poder político; esa producción coadyuva a la legitimación de la acción partidista y gubernamental y transcurre también, en mayor o menor medida y de diversas formas, de modo creciente a través de la difusión mediática, ámbito en el cual se pone en juego la dimensión intersubjetiva³²⁷ del ejercicio del poder político de diversas maneras. Una de ellas es la representación simbólica de la representación de intereses y de crítica, en la medida en que éstas requieran de cierta visibilidad y resonancia.

Tal como se ha visto, una paradoja de la democracia representativa radica en la imposibilidad para procesar y dar cauce a la multiplicidad de intereses, implicada por la

³²⁶ Con la multiplicación de canales de encuentro con el otro, que las nuevas tecnologías de comunicación traen consigo, se ha fracturado una esfera pública común y se han reducido las posibilidades de integración de los dispositivos de debate político al interior de cada sociedad nacional. La situación deriva en parte de que los contenidos de la comunicación son dispuestos por sus proveedores de manera segmentada, es decir según grupos de destinatarios con características en común y que se distinguen de otros en cuanto a sus requerimientos, consumo y formas de interactuar. Una consecuencia es la tendencia a la radicalización de posturas entre los diversos estratos sociales en cuanto al antagonismo que puede haber entre ellos, a partir del desigual acceso, propiedad y uso de los medios a su disposición. Lo que se ha dado en llamar la “tecno-política” es una consecuencia de ese fenómeno y conduce a una movilización fragmentada de comunidades de ciudadanos, que sin embargo no necesariamente interactúan entre sí y, sin embargo, pueden oponerse unas a otras.

³²⁷ Morín (1966) argumenta que la subjetividad implica que entre el ámbito orgánico de la necesidad y el ámbito socio-cultural de la demanda; se halla el mundo del deseo, que no es reductible por la razón, en cuanto al consumo. El sentido rompe con las creencias y se ancla en lo estético (apariencia). El televidente no otorga credibilidad absoluta, pero concede cierta verosimilitud. El mensaje no es percibido como vehículo de un cierto tipo de contenido sino en sí mismo, en su manifestación estético-expresiva en el audiovisual. El fondo del mensaje es su contenido fáctico y manifiesto. De ahí que la orientación del significado se produzca a partir de la narración del mensaje. La mediación consiste en que el mensaje mediático propone una forma particular de imaginar la conexión entre el símbolo y la cosa simbolizada, que ha sido rota mediante las pautas culturales de percepción de la cultura de masas. Esa es una de las razones por las cuales la televisión presenta a los líderes políticos en cuanto a la expresividad de las emociones.

diversificación social creciente y, en ciertas condiciones, por la polarización de los conflictos a que da lugar su vindicación y cambio. Por eso, surge la presión, entre otras, de recurrir a recursos simbólicos de la democracia directa que, sin que se la procure en los hechos, son evocados en la producción simbólica mediática como tema y justificación ideológica. El discurso de cualquier operador mediático está provisto de esa apelación, cuyo uso de cara a las audiencias otorga poder de convocatoria.

Los medios de comunicación dependen de la democracia liberal, en mayor medida que a la inversa, y en que ellos pueden coadyuvar a afirmarla; históricamente ha sido el régimen político en que se sustenta y mantiene el poder simbólico cultural que ellos ejercen, por cuanto requiere de un régimen de libertades y un control institucional y legal del poder político. De ese modo, ellos pueden moderar la gestión del derecho a la libre expresión y opinión que, implicando manifestaciones de disenso o inconformidad pública, no trastocan el régimen político, aunque transcurran de manera creciente en el campo simbólico cultural y que, debido a la acción mediática, en tanto que ejercicios de presión simbólica, son reservados para grupos de interés con poder económico o político y, por eso, de acceso a la difusión mediática. Ante el antagonismo entre la autocracia mediática y la autocracia partidista surgen arreglos y por eso entre las formas de presionar a la representación política, en ese tipo de regímenes, se produce la suplantación simbólica, por diversos mecanismos, de representación de intereses y opiniones de diversos grupos sociales, que estratégicamente son seleccionados e inscritos en tanto que demandas o inconformidad en los diversos contenidos mediáticos; uno de esos mecanismos es darles la forma de escrutinio ciudadano. Eso explicaría, entre otras cosas, que el cabildeo pueda transcurrir en el circuito mediático de comunicación pública y revestido bajo la forma de crítica ciudadana.

Un problema común al funcionamiento democrático reside en la percepción generalizada acerca de la eficacia de las instituciones de gobierno, así como de la eficiencia de sus agentes electos, para dar cauce al disenso y la inconformidad, de cara a los cuestionamientos respecto de las decisiones asociadas a su conducción y arbitraje. En ese sentido, los medios de comunicación masiva detentan oportunidades para sustraer algunas de las manifestaciones del disenso y la inconformidad respecto

del ámbito, reglas y procedimientos políticos, y encauzarlas hacia el campo simbólico cultural. El problema de legitimación de la democracia representativa, así como varios de los problemas de gobernabilidad democrática, constituyen una cuestión relativa también al funcionamiento y al desempeño, no solamente a los principios o ideales³²⁸ y al diseño institucional de las reglas de la lucha política. La comunicación mediática invade el campo de la mediación política por la vía de la mediación cultural, para hacer visible el ejercicio del poder político y con la justificación ideológica de denunciar abusos; en esa medida los agentes mediáticos encuentran un cauce de intervención privilegiado en el monitoreo de las disputas partidistas y sus resultados, develando para grandes públicos, lo más posible de la auto-referencialidad del control político³²⁹.

3.4. Rasgos actuales del sistema de comunicación mediática en México

Para entender el papel del sistema mediático en México el enfoque debe atender tanto al predominio de autonomía o subordinación respecto al poder político, a partir de lo que los medios hacen o no, como a las repercusiones que ese predominio y la manera en que operan tienen en los diversos grupos de la sociedad. Habría que precisar que la relación entre poder político y poder mediático institucionalizado no se explica al margen de disputas y alianzas de índole mundial, pero tampoco sin considerar que, con la redistribución de poder político durante la transición democrática, mientras que éste se ha fragmentado y su ejercicio se ha desconcentrado y descentralizado, con el poder económico y cultural de los medios de comunicación ocurre a la inversa; situación que en lugar de impedir ha propiciado, sin embargo, la formación de sistemas mediáticos regionales que, sin competir sino aliados con los de

³²⁸ Como proyecto y como régimen político, la democracia ha transcurrido como una lucha por adaptar principios abstractos a situaciones reales del ejercicio del poder político no despótico ni autocrático; por eso, es posible a los discursos públicos centrarse en la perversión o distorsiones de tales principios en la práctica política, aunque en realidad su adaptación es un asunto consustancial a la democratización.

³²⁹ Siguiendo a Bobbio (2006), la democracia puede ser definida de muy diversas maneras; se puede hacer diferencia entre una oligarquía que se renueva por cooptación y varias oligarquías en competencia que se disputan y pueden alternarse el poder mediante elecciones libres; pero si como afirma Canetti, la secrecía es el componente más interno del núcleo del poder, entonces la única connotación que ha resultado imprescindible, para cuantas definiciones puedan ofrecerse de la democracia hasta ahora, es la visibilidad o transparencia del poder. Éste es, no obstante, el rasgo más auto-referencial, y en cierto sentido contradictorio del ejercicio del poder político. En la democracia representativa se pone de manifiesto en la autoevaluación y el autocontrol del poder político por el poder político delegado, ejercitado entre ramas de gobierno, del que deberán rendir cuenta a los ciudadanos.

alcance nacional, detentan márgenes más amplios de autonomía y pueden negociar tratos preferenciales con ciertos agentes políticos, al margen de la legislación nacional y el control centralizado. Eso implica que entre gobernadores y legisladores federales y locales y los operadores mediáticos se establece una relación de connivencia y de tipo “clientelar” que no es posible sostener de modo estable en el nivel nacional³³⁰.

Cabe notar que en un estudio acerca del clientelismo³³¹ como modelo de control social extendido hacia el sistema mediático, comparando casos en Europa y América Latina, Hallin y Papathanassopoulos (2002) concluyen que los sistemas mediáticos iberoamericanos adoptan formas clientelares extremas, comparativamente con los sistemas europeos que, sin embargo, constituyen uno de sus referentes culturales y con respecto a los cuales se establecen ciertos paralelismos en cuanto a su desarrollo. Ese patrón de relación entre sistema mediático y sistema político se manifiesta en: a) bajos niveles de circulación impides a los periódicos fungir como agentes directos de gestión de la demanda y crítica social; b) un papel debilitado en radio y televisión, debido a la prevalencia de una tradición informativa y editorial comprometida con intereses y causas de ciertas élites y sectores, en colusión conjunta con las élites políticas; c) lo que se refleja en condicionamientos mutuos en cuanto a las decisiones que atañen a la regulación legal, d) de lo cual se desprenden limitaciones para gestionar un periodismo autónomo y crítico que conteste al poder político.

Con base en ese estudio, Carreño (2007: 30-36) ha observado que en México se pasó de un esquema de subordinación hacia otro de colusión política, en la medida en que mientras que el poder político aparece más fragmentado, encara a empresas mediáticas más cohesionadas, que han diversificado los patronazgos y las relaciones clientelares y cuyas estrategias conjuntas hacen prevalecer sus intereses, frenados

³³⁰ De ahí que puede decirse que la disputa de autonomía de poder mediático es una a la escala local y otra es la del sistema mediático nacional en el contexto de poderes transnacionales que, con diversa medida y cobertura, se superponen o se coaligan con los sistemas nacionales, constituyendo un sistema de poder global (Held, 1997).

³³¹ Sustentado en la asignación de recursos significativos a individuos o grupos sociales a cambio de lealtades, en un marco que incluye diversas formas de dominación, subordinación o colusión; los recursos van desde decisiones favorables a los intereses económicos de los corporativos mediáticos, tales como concesiones, permisos, licencias, franquicias y contratos de propaganda, hasta decisiones sobre la apertura o no del mercado a nuevos competidores internos y el proteccionismo de la industria, aunque suelen aparecer como afinidades políticas o tendencias editoriales partidistas.

apenas solamente por el poder judicial. Antes ocurrió lo inverso, empresas mediáticas fragmentadas enfrentaron a un poder político cohesionado. Esta interpretación resulta simplificada, por cuanto no establece criterios para determinar la condición de fragmentación y cohesión y éstos no son apoyados por la evidencia disponible³³².

En cambio, puede plantearse que los límites del área de intersección de intereses, políticos y económicos, están definidos por los márgenes con que puede ser mantenido o modificado el estado que guarda el modelo económico de desarrollo y las intervenciones del Estado requeridas para asegurar la dominación política con cierta legitimidad, en cuyo sostenimiento participan los medios de comunicación, en tanto agentes mediadores en el plano cultural, si bien con diferente autonomía respecto de la estructura de distribución del poder económico y del poder político en la sociedad.

En un contexto de apertura comercial y liberalización económica, a partir de los años noventa, los medios de comunicación del Estado mexicano pasaron a ser propiedad privada, a la vez que éste promovió la apertura y la competitividad económica en las telecomunicaciones. Con ello redujo el control político y acotó la intervención económica que ejerció, durante varias décadas, sobre los medios privados concesionados; se redujeron los subsidios fiscales otorgados a las empresas concesionarias, las subvenciones a operadores mediáticos estatales permisionarios, el gasto de propaganda gubernamental, la discrecionalidad y la opacidad con que es ejercido y, con todo ello, se ha visto restringido el papel que el Estado ejerció antes como censor de la difusión a escala masiva y como árbitro de la industria y el mercado mediático en México. No obstante, en la primera década del siglo, la mayor parte del gasto público destinado a campañas electorales se usó en la contratación de anuncios televisivos y radiofónicos, a tal punto que se convierten en problema político (Trejo,

³³² Tal como se desprende de las investigaciones de Toussaint (1998) y Sánchez y Gómez (2009) y aún del trabajo documental de Vidal (2008), que confirman que la multiplicación de operadores mediáticos, en prensa, radio y televisión, la diversificación de sus productos y servicios y la consecuente competencia en cada rama de difusión, han ido acompañadas de una excesiva concentración económica, por modalidades de fusión y alianzas verticales y horizontales entre empresas, en unos pocos corporativos privados multimedia de comunicación, que sin embargo descentralizan su funcionamiento y operación y que exportan productos en el mercado mundial.

2010), sin que la comunicación y los mensajes contribuyan a informar mejor o al aprendizaje de los valores democráticos (Márquez, 2010).

Importa destacar que, en ese mismo contexto de democratización electoral en México, la competencia en el sector de la comunicación mediática masiva se ha acentuado, tiene lugar entre unos cuantos grupos corporativos privados multimedia, gira en torno a la diversificación del oficio base y penetrar en “nichos” de mercado, con miras a conseguir mayor valor agregado al aprovechar la convergencia digital y la integración de servicios que hacen posibles las telecomunicaciones. Pero ante la condición estructural de alta concentración económica en todas las ramas (medios impresos³³³, radio y televisión), las estrategias de tales grupos se focalizan hacia mercados regionales y locales, en especial hacia zonas metropolitanas, que ofrecen oportunidades de penetración, posicionamiento y crecimiento mediante la integración económica horizontal, que permite consolidar áreas de influencia para cada grupo. Hay evidencia acerca de ese patrón de comportamiento que incluye coinversión extranjera. La consecuencia que interesa tener presente aquí, como resultado de los rasgos destacados, concierne a que es de esperar que, a partir de los intereses creados por la estructura mediática, la competencia y la disputa de influencia cultural y política se desplacen hacia las regiones del país.

En el curso de las dos últimas décadas a la fecha, los gobiernos en turno no han reordenado el desarrollo del sistema mediático, no obstante tener ante sí la oportunidad que derivó, a la par, del reto de regular apropiadamente el mercado de servicios de telecomunicación, en términos de competencia y competitividad, en beneficio de la sociedad. Lejos de eso, tales gobiernos han privilegiado, de hecho, una ventajosa incursión del duopolio televisivo privado en ese mercado en vertiginosa expansión, de tal manera que, de cara a la digitalización de la radiodifusión y la convergencia tecnológica multimedia, ese duopolio ha podido acrecentar su poder

³³³ En el caso de la prensa, si bien la expansión del mercado tiende a ser más lenta, está orientada hacia la cobertura de difusión local, ya sea mediante la aparición de nuevos periódicos que dependen cada vez más de coinversiones con grupos empresariales locales, abriendo nuevas plazas de distribución o bien mediante la venta de servicios sindicados por parte de grupos periodísticos regionales, lo cual no implica la generación de una nueva oferta informativa, no obstante que la edición de periódicos sea el subsector mediático con mayor fragmentación y dominio de grupos de capital nacional.

económico y su influencia cultural. Al mismo tiempo, el subsistema público de difusión audiovisual o electrónica ha sido desahuciado, dejándolo a expensas de las improntas del libre mercado que acentúan la segmentación del consumo sin especialización de la oferta cultural, en ausencia de un modelo de políticas públicas y legislación acorde con el pluralismo político y la diversificación social creciente en la sociedad mexicana. Más refinado, el argumento es que conforme se desvanece la concentración del control que ejerce el gobierno sobre los medios de comunicación, y éstos se ven forzados, por presiones emergentes desde la sociedad civil, a dar cabida al pluralismo y minorías políticas, en la medida en que se han diversificado los definidores primarios de la agenda pública, los medios abren paso con menor reticencia a agentes, asuntos y discusiones sociales antes ignoradas, porque de ello depende en mayor medida que antes la credibilidad que les otorgan las audiencias, así como su propia capacidad de intervenir en la política.

El hecho es consecuencia de varias condiciones interrelacionadas, la democratización del régimen político, forzada por la pérdida de legitimidad del régimen autoritario; las exigencias de los procesos de globalización contemporáneos³³⁴, la distribución del poder político entre varios centros y la consecuente diversificación de intereses y alianzas entre agentes políticos. En el capítulo 5 se da cuenta de la relación de partidos y medios de comunicación, en el contexto y según los fines de este estudio; en lo que sigue habrá que ocuparse de los aspectos y condiciones que hacen posible la colonización cultural del ámbito público político y, en consecuencia, la cautividad de la mayor parte de ciudadanos a merced del escrutinio público mediático de sus representantes electos.

³³⁴ Desde un enfoque postestructuralista neomarxista, Scherato y Webb (2006: 132) hacen énfasis en la necesidad de entender los procesos de globalización a partir de la “doxa” que traen consigo, entendida como las nociones socialmente compartidas que emergen de las relaciones de poder, modificadas por tales procesos; con la interconexión económica, se propaga esa “doxa” política y cultural de la “globalidad” como discurso hegemónico, afectando la identidad y el significado en tanto que productos de los discursos sociales e institucionales; desde ese punto de vista, las prácticas económicas, las tecnologías de información y la “doxa” movilizada en los medios de comunicación masiva, pugnan en conjunto hacia la homogeneización cultural a escala global; no obstante, las formaciones culturales tradicionales y la identidad comunitaria están mediadas por la hegemonía de las culturas nacionales; se presenta entonces una tensión permanente entre fuerzas contrarias, una hegemónicas y otras de resistencia social o civil, en pugna por la negociación del reconocimiento de identidades, del significado de la realidades sociales y de las consecuencias que tienen la integración de mercados y el intercambio económico, así como los usos y las aplicaciones de las tecnologías de información y comunicación.

3.5. Apatía ciudadana, desconfianza en legisladores y cautividad mediática

En el marco expuesto es posible entender que, tal como argumenta Trejo (2001: 67, 68), el creciente poder mediático ha llegado a convertirse en un nuevo contrapeso para gobernantes e instituciones públicas, en la medida en que el ejercicio del poder político se encuentra registrado y, con frecuencia, sancionado en los contenidos de la difusión mediática; si bien el contrapoder ciudadano está sostenido en diversos grupos sociales, cuya diversidad puede abarcar a toda la sociedad. La presión o sanción que ejercen los medios no se nutre necesariamente del interés público, tal como lo ostentan, porque no están comprometidos con toda la sociedad, sino que representan a grupos de interés específico y solo pueden ser expresión de ciertos segmentos de ella; de ahí su limitación en cuanto al análisis y el debate de asuntos públicos.

Confrontando una amplia corriente de interpretación que descalifica el papel educador de los medios de comunicación, asignándoles “efectos devastadores” en la distorsión o el empobrecimiento de la cultura política, este notable investigador argumenta que la propagación de sus contenidos no crea realidades pero amplifica las distorsiones o los contrastes de la diversa realidad social, con efectos de distorsión diversos entre los segmentos que conforman a la opinión pública y en el largo plazo en el plano de la cultura política ciudadana. La influencia ejercida por tales efectos es sin embargo limitada frente a la que, por su parte, ejercen otras estructuras sociales (escuela, grupos políticos, iglesias, sindicatos), confirmando actitudes ya forjadas en ellas. De ahí que en un contexto social de desconfianza hacia las instituciones y los políticos, se confirmará ese tipo de predisposición entre la audiencia situada a expensas de mensajes televisivos y radiofónicos que, por eso, pretendan justificarla; no es casual que los intentos para escrudñar la política y a los políticos antes que explicar ayuden a propagar la desilusión o el recelo de modo exaltado (Trejo, 2001: 64-66).

Una consecuencia general del proceso de mediatización de la política consiste en el aumento de la desafección hacia ella, por las razones expuestas en el capítulo anterior, la cual solo se vuelve relevante en la vida de los ciudadanos en momentos de

elecciones y campañas propagandísticas. Otra consecuencia de ese mismo orden es que el ejercicio de ciudadanía se ve desplazado de la política institucional hacia diversas instancias y organizaciones sociales, locales y comunitarias con intereses muy diversificados entre sí, sin que necesariamente por eso se reduzca la incertidumbre. Las personas se ven obligadas a concebir de manera diferente su papel de ciudadanos y formarse su propia idea acerca de los problemas prioritarios del país. En consecuencia, es probable que se desarrollen dos tipos de ciudadanía: una que puede ser considerada “instrumental”, que sin creer ya en la política sigue apelando a las instituciones estatales en la búsqueda de soluciones; otra cuyo referente no es el sistema político sino las redes de grupos en donde se organiza la sociabilidad en la vida cotidiana, que estaría motivada por la convivencia social y basada en la autoayuda y la cooperación (Lechner, 2000: 31), ninguna al margen de una ciudadanía “mediatizada”.

En este punto conviene volver a considerar de qué puede depender la participación ciudadana. Participar o abstenerse de hacerlo deben ser considerados como opciones del actuar político, de cara a la manera en que los ciudadanos perciben, interpretan y comprenden los costos y beneficios que entrañan, del capital político y cultural del que están dotados y de los recursos y oportunidades a su disposición para decidir.

En un reciente estudio, por ejemplo, acerca de la participación ciudadana en procesos electorales en México (IFE, 2003), auspiciado por el órgano encargado de su organización, se analizan los factores que podrían explicar³³⁵ que, no obstante el avance en cuanto a la certidumbre en la legalidad de las elecciones, se registra un decreciente nivel de concurrencia a las urnas. Se concluye que es probable que las elecciones impliquen menores costos, pero también menores beneficios, porque se

³³⁵ A partir de la premisa de que el ejercicio del voto define la interacción entre la sociedad civil y el Estado, se discuten varias tesis formuladas en la literatura especializada acerca de la cuestión: una de ellas es que los ciudadanos depositan en el proceso electoral una confianza tal que ya no requiere su concurrencia; otra apunta a que los precarios resultados del gobierno democrático en términos de bienestar social de la población, motivaría un cuestionamiento al sistema electoral mismo, dando como resultado una vida cívica inactiva; en otra dirección se señala que la no participación del ciudadano en asuntos públicos es resultado de la llamada “crisis de las ideologías”, que se expresa en que los partidos políticos carecen de liderazgo y propuestas sustantivas, sacrificadas en aras de imperativos de mercadotecnia electoral; finalmente, se explora la tesis de que la modernidad y el predominio de la lógica del mercado, han acentuado los aspectos constitutivos del “individualismo egoísta”, generando ciudadanos cada vez menos interesados en asuntos colectivos y más concentrados en asuntos privados.

han conseguido niveles de certidumbre en cuanto a la eficacia y equidad de su organización. Pero a la vez, también es probable que los resultados de las elecciones sean cada vez menos significativos para la vida cotidiana del ciudadano. En esa dirección apunta la idea acerca del creciente distanciamiento entre ciudadanos y gobernantes. Por tanto, podría estarse ante una distribución regresiva de conocimientos, competencias y habilidades políticas, derivada de que las elecciones no modifican de manera significativa, desde el punto de vista de los ciudadanos, la situación de concentración del poder de decisión en los partidos políticos y la burocracia administrativa y, en paralelo, éstos son incapaces de ofrecer alternativas políticas cercanas y comprensibles para los ciudadanos.

La objeción a ese y otros muchos estudios en México es que no se ha explorado qué ocurre cuando se trata de participación política no electoral, en especial al juzgar el desempeño de los gobernantes electos, como tampoco se ha explicado el hecho de que, en el mismo periodo y contexto, se mantenga una fuerte dependencia cultural respecto a la credibilidad de la población en la difusión mediática, por más que, como aquí se ha argumentado, los efectos son diferenciados entre estratos sociales y no obstante se demuestra que el escrutinio ciudadano es susceptible de mediatización.

Aquí se sostiene que, durante la transición democrática en México, ante un persistente bajo nivel de interés o involucramiento (apatía) de la mayor parte de los ciudadanos en la actividad política institucional, auspiciado y afirmado por el deterioro de la credibilidad (confianza) en las instituciones gubernamentales y, más aún, en partidos políticos, legisladores y el Congreso federal, no obstante que predominen predisposiciones (creencias) hacia los principios democráticos, se abre paso y consolida el fenómeno de *escrutinio público mediático* que, en tanto que principal referente de información y opinión política, a disposición de manera creciente a través de la televisión de señal abierta, repercute en el aprendizaje político por la vía de la progresiva mediatización del escrutinio ciudadano y la rendición de cuentas, prácticas democráticas escasamente arraigadas y respecto de las cuales los ciudadanos pueden verse relevados en la medida de su dependencia y cautividad cultural respecto de la comunicación mediática. En los dos siguientes capítulos se verán las razones por las cuales el escrutinio público mediático tiene efectos diferenciados en los legisladores.

Habría pocas dudas de que la participación de los ciudadanos sea determinada por las competencias cognitivas, emotivas y discursivas que los sujetos ponen en juego, y en paralelo dependa de los factores que estimulan o incentivan, así como obstaculizan o inhiben su interés, involucramiento y procesamiento de la información y la opinión política. Tales competencias son desarrolladas por cada individuo, a partir de la interacción con otros, en diversas áreas de dotación cultural y política. En tales interacciones se ponen en juego recursos diversos, que pueden ser apropiados de manera singular, pero también colectiva, con base en pautas culturales y simbólicas compartidas en diversos contextos estructurados en términos sociales, espaciales y temporales (escuela, familia, amistades, círculos de trabajo, convivencia en grupos informales o en organizaciones civiles, así como la exposición a la difusión de los medios de comunicación masiva, según la clase social). Tales pautas movilizan y actualizan esquemas cognitivos regulares de percepción, interpretación y comprensión del ejercicio del poder político, así como de las reglas del juego, de los agentes que intervienen y de las condiciones en que es ejercitado, en términos de la propia condición sociopolítica del individuo y de los grupos sociales de los cuales forma parte.

Ahora bien, es claro que la apatía política es una tendencia mundial. En la década de los años noventa se reavivó el debate acerca del futuro de los partidos políticos, originado en los años sesenta, de cara a la participación ciudadana, la consolidación democrática y la cultura política. Inglehart (1990) contribuyó al concluir que transformaciones en los sistemas de valores, entre otros aspectos, habían repercutido en la relación entre electores y partidos. En un estudio comparativo entre 18 democracias avanzadas que³³⁶, coordinado por Russell, Dalton y Wattenberg (2002), consideró como ejes del análisis la “desafección ciudadana”, los cambios internos en los partidos y el papel que desempeñan en la definición de políticas públicas, la evidencia indica que hay una caída en la afiliación a los partidos y es más acentuada

³³⁶ Todos con trayectorias democráticas largas y estables, se compararon las características, funciones, fortalezas y debilidades de los partidos en concibiendo a los partidos políticos en tanto que referentes integrados del electorado, de las organizaciones sociales y las instituciones de gobierno (noción sugerida por el modelo propuesto por Key, 1960), para indagar si la evidencia apuntaba hacia una decadencia de los partidos en las sociedades industriales avanzadas y, si ese fuera el caso, qué implicaciones tendría en las democracias contemporáneas; se trata de la compilación más completa hasta ahora.

entre población joven y con niveles altos de educación, lo cual concuerda con otros estudios; Dalton advierte que eso no significa, sin embargo, que los ciudadanos no se interesen en la política, sino que se inclinan hacia cauces distintos a los partidos tradicionales, y que la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia no es causa en sí misma para que se debiliten los lazos entre partidos y ciudadanos.

No está puesta en duda la relevancia institucional de la mediación política ejercida por los partidos políticos: operan como cauce de expresión, acervo de información y espacio de debate de las demandas y los juicios de los ciudadanos, intereses de grupos y canal para canalizarlas hacia el gobierno y ejercer presión para que sean tomados en cuenta (Sartori, 1998a) y por eso sirven a la formación de consensos a escala nacional (Mainwaring y Scully, 1995). La cuestión entonces se reduce a la eficacia de la representación³³⁷, en términos de conseguir que las decisiones gubernamentales tengan en cuenta y respondan a las diversas demandas ciudadanas. Eso implica por lo menos dos aspectos: en qué medida los partidos representan a ciudadanos más que a la respectiva militancia y electorado y en qué medida puede darse la representación sin intervención de los partidos. Cuando partidos políticos y gobernantes electos fallan de modo reiterado, en atender la demanda ciudadana y vincularla con las decisiones de gobierno, se deteriora la credibilidad³³⁸ no solamente respecto de ellos sino también del Congreso y los legisladores, situación que repercute en la eficacia para vigilar las acciones del poder ejecutivo y ejercer contrapeso en la toma de decisiones que a ambos competen. Una consecuencia de esa situación es que los ciudadanos se tornan más receptivos a involucrarse en la búsqueda de fórmulas de participación y representación alternativas (Stein, 1994)³³⁹.

³³⁷ No se trata aquí de la representatividad, que es afectada directamente por las reglas del sistema electoral, por las cuales se distribuyen los votos en asientos en la asamblea legislativa (Birch, 1993: 69).

³³⁸ Cuando los partidos políticos se revelan, para la mayoría de la sociedad, como carentes de voluntad o incapaces para cumplir con su función de traducir y representar las demandas de los diversos grupos y clases sociales en ella (Lwason y Merkl, 1998: 16).

³³⁹ Sin descartar, desde luego, la formación de nuevos partidos políticos, tal como prevén Lapalombara y Weiner (1966); habrá que reparar sin embargo en que ello implica necesariamente dos restricciones: nacer como minoría, aún cuando el nuevo partido se origine en el desprendimiento de otro mayoritario y, consecuentemente, y con una postura y oferta política radicales para que pueda distinguirse como opción y atraer hacia sí a ciudadanos, lo que no significa revertir la desconfianza hacia los partidos.

En sociedades con más acentuada desigualdad social, así como incipiente desarrollo democrático, la construcción de la identidad ciudadana y el ejercicio de derechos políticos son obstruidos por distorsiones en la relación entre ciudadanos y gobernantes electos³⁴⁰. Una forma típica, en países con más extendida pobreza, consiste en que esa relación esté mediada por mecanismos extralegales de intercambio de bienes públicos por adhesiones y activismo político, tal como es el caso del “corporativismo” y el “clientelismo” partidista. El primer caso opera en el nivel agregado, cuando organizaciones sociales de diversa índole y fines, incluidas las de ciudadanos, bajo una rígida estructura jerárquica de toma de decisiones verticalmente, comprometen su adhesión colectiva a un agente político a cambio de una gestión o asignación de bienes públicos en el mediano plazo, mediante una alianza con aquel partido político o elite gubernamental que pueda asegurarla por la posición de fuerza que detenta con relación al aparato gubernamental. Estrechamente asociada a ese tipo de relación, en el segundo caso se halla aquella basada en el mecanismo “clientelar”, que opera mediante transacciones particulares de bienes públicos, a partir de la discrecionalidad y parcialidad (favoritismo) en su asignación, como resultado de las cuales por un lado los ciudadanos beneficiarios o su líder (“cliente”) se supeditan al liderazgo de un determinado gobernante electo y, por extensión, al partido o grupo político al que éste pertenece y como consecuencia, por otro lado, comprometen la autonomía individual para ejercer sus derechos políticos y sociales por fuera de ese mecanismo. No obstante la evidencia disponible es difícil conocer la dimensión en que ello ocurre, entre otras razones porque es difícil para cualquier ciudadano reconocer que ese es su caso, lo que remite a la cuestión del “cinismo político”³⁴¹. Es evidente que el ciudadano está

³⁴⁰ Desde una perspectiva de análisis político comparado, con un enfoque de comportamiento racional de los agentes políticos y ciudadanos, el problema reside en la relación entre democracia y economía; en países pobres, los gobiernos no tienen la capacidad para brindar apoyo a todos los pobres, ni los agentes económicos y el mercado generan el dinamismo económico para ofrecer oportunidades para todos ellos, lo que hace inviable reducir o erradicar la pobreza, ese déficit ejerce un efecto de distorsión de las percepciones de la eficacia de la gobernabilidad democrática, puesto que los ciudadanos no disponen de incentivos ni albergan expectativas para hacer exigible la responsabilidad política a gobiernos y gobernantes, de ahí que no se ejercite el derecho ciudadano al escrutinio público. Para una exposición sistemática Véase Przeworski (1991, 1998) y Reis (1996).

³⁴¹ A partir de una encuesta en vivienda en México, en 2007, aunque el 92% considera que recibir algo a cambio de votar por un partido político es ilegal, dos de cada diez ciudadanos dijeron haber recibido algún ofrecimiento, la mayor parte artículos promocionales (33.2%), dinero (27.8%), un servicio público (12.8%), la inscripción a un programa social (8.5%) y despensa (5%); no obstante que siete de cada diez en ese caso dijeron que el mismo no influyó en su decisión acerca de por quién votar; mientras que el

sumergido en una relación de dependencia respecto al gobernante electo, al transcurrir ella mediante ese cauce, no sólo en cuanto al proceso decisorio involucrado, sino por lo que se refiere a la información relevante del actuar gubernamental, de cuya disponibilidad dependería que el ciudadano sea motivado hacia la crítica y el rechazo de relaciones de orden “corporativista” y “clientelar”, si además pudiera discutirla con otros en condición de “pares”.

En este plano del análisis, las desigualdades sociales, como condicionante del comportamiento político ciudadano, se articulan con las acentuadas asimetrías en el acceso a la información pública relevante, de manera que sitúan a la mayor parte de los ciudadanos que carecen de recursos, económicos o políticos, en situación más vulnerable para orientar su participación dentro del cauce político institucional, al margen de diversas formas de tutelaje político. Éstas tienen mayor repercusión en aquellos ciudadanos que, por carencias de capital político, en cuanto a capacidades para conseguir información y/o de relacionarse con los agentes políticos, se expondrán entonces a la circulación de opiniones políticas a su alcance, en especial aquellas que no le significarán altos costos de transacción o que serán afines a su propia opinión. El acceso y procesamiento de información pública acerca del quehacer gubernamental entraña un alto costo para cualquier ciudadano, incluso para aquellos con mayor conocimiento y disponibilidad, una brecha entre ciudadanos políticamente “sofisticados” y “ordinarios” que se acentúa en cuanto a la información y opinión mediáticas³⁴², incluida la relativa a la división técnico-burocrática de funciones y tareas de gobierno de cara a la responsabilidad gubernamental. Es ese el sentido en que el escrutinio ciudadano implica aprendizaje político, el cual será más propicio en el entorno de una cultura democrática, centrada en la acción colectiva de ciudadanos que ejercen su autodeterminación en cuanto al ejercicio de sus derechos políticos.

17.9% del total admitió haber dado un soborno a una autoridad; solo el 13.7% consideró que esa situación se debe a la falta de cultura pobreza, en cambio el 41.5% cree que a la pobreza, CESOP (2008).

³⁴² A pesar de que refuten el núcleo del modelo de atención selectiva (Festinger, 1957; Klapper, 1960), según el cual las audiencias se exponen menos a información opuesta a sus predisposiciones personales, varios estudios no aportan evidencia que pruebe que los ciudadanos están más dispuestos a aceptar el pluralismo político y a confrontar diversos puntos de vista entre cobertura televisiva y periodística acerca de iguales acontecimientos (Neuman, 1986).

Visto con un enfoque de agencia, puede suponerse que recurrir al gobernante electo, a organizaciones intermediarias de la sociedad civil o a la difusión mediática implica diferentes beneficios y costos en cada caso; distintos además de poder hacerlo en todos esos cauces, lo cual será el caso de la menor parte de los ciudadanos. No hay que perder de vista que la “sofisticación política” se reproduce entre “sofisticados”, aunque la creciente habilidad de éstos, para recordar y dar sentido a la información política, no se refiere o corresponde a la diferenciación vertical del espectro social de sofisticación, sino a la dimensión horizontal del pluralismo político, entre quienes tiene lugar una efectiva selectividad de los asuntos, tal como argumenta Neuman (1986). La cuestión aquí es si los ciudadanos pueden disponer, en ese marco, de alternativas para allegarse de información relevante, con menores costos e intercambiar y confrontar opiniones para conformar su juicio, lo que reportaría el máximo beneficio³⁴³.

A partir de un estudio sobre la cultura política en México, antes de la primera alternancia partidista en la Presidencia, Flores y Meyenberg (2001) concluyen que la democratización está cimentada sobre una débil “cultura de la legalidad”, fruto de la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones, de los elementos autoritarios presentes en todos los segmentos de la población a lo largo del país, y de la percepción negativa del desempeño de las instituciones y los funcionarios encargados de la procuración y administración de justicia; a eso se suman factores tales como un bajo sentido de eficiencia del ciudadano frente a las autoridades, los vestigios del presidencialismo, la estratificación social, que amplía las diferencias entre los diversos sectores de la sociedad, y la ausencia de una tradición de exigencia de cuentas.

A la mitad del periodo gubernamental luego de la primera alternancia partidista en la Presidencia de la República en México, a partir de la evaluación que los ciudadanos

³⁴³ En ese sentido, Cabrera (2009: 67) destaca que la nuevas formas de hacer política se relaciona con la heterogeneidad social y cultural del electorado y, por tanto, con una participación ciudadana extendida sobre la representación territorial, cuyo cauce son redes sociales más competitivas entre sí, basadas en lazos de solidaridad constreñidos a grupos pequeños y débilmente estructurados, lo que debilita a aquellos impersonales establecidos por las instituciones, en la medida en que sus integrantes consideran que sus expectativas pueden ser satisfechas por grupos de interés y formas no convencionales de participación, si bien la autora no aporte evidencia empírica de ello, como tampoco suponga que ese cambio en los valores de sociabilidad ha contribuido en que los ciudadanos más informados y educados sean más independientes respecto de los partidos políticos y más receptivos hacia formas alternativas, no institucionales, de participar políticamente.

hacen acerca de las instituciones políticas, con base en los resultados de una encuesta nacional (SEGOB, 2003)³⁴⁴, se puede observar que, no obstante el arraigo de valores democráticos entre la mayor parte de los ciudadanos, incluido la importancia de los partidos políticos, predominaba la desconfianza política aunque estaba relacionada con la convicción democrática, la valoración de la utilidad de los partidos y la disposición hacia la solidaridad social. Si bien el Congreso se ubicó entre las instituciones gubernamentales con menor confianza³⁴⁵, ésta guarda correlación positiva con respecto a la desconfianza en general hacia todas ellas;³⁴⁶ la desconfianza en aquel se acentúa entre quienes dudan en que los programas de gobierno contribuirán a que sus hijos gocen de mayor bienestar que ellos en el futuro³⁴⁷, quienes atribuyen la práctica de corrupción solamente a los agentes políticos³⁴⁸, consideran que el rumbo del país es inadecuado y la situación económica es “mala” y “muy mala”³⁴⁹ y entre quienes tienen mayor escolaridad y se informan de la política a través de periódicos³⁵⁰.

Debe tenerse en cuenta que al 86% del total de entrevistados le interesa “poco” o “nada” la política y en igual proporción (85%) creen que a los gobernantes esa misma

³⁴⁴ Para disponer de información acerca de socialización y aprendizaje político de principios y valores democráticos, a partir de los niveles de conocimiento e información política expresados con la opinión, mediante un levantamiento, cuyo instrumento contuvo 74 preguntas y método de muestreo fue probabilístico estratificado y por conglomerados, con nivel de confianza de 90% y margen de error esperado de 5.2%, entre residentes habituales mayores de 18 años en un total de 4,580 viviendas en 600 localidades urbanas y rurales, durante febrero de 2003, a partir de identificar alguna correlación significativa entre ciertas preguntas de interés heurístico y mediante la elaboración de tabuladores establecer comparaciones entre valores extremos “mucho” y “nada” del nivel de confianza en el Congreso, para sugerir aquellas que indican alguna asociación, aunque de ello se desprende una relación causal entre opinión y desconfianza.

³⁴⁵ Si bien por encima de otras en que menos se confía: sindicatos, partidos políticos y policías (Ibid).

³⁴⁶ Quienes desconfían de otras instituciones desconfían más del Congreso y quienes confían en ellas lo hacen en mayor proporción en él (Ibid).

³⁴⁷ No obstante que sean superiores las proporciones de quienes consideran que será a la inversa, en mayor medida en cuanto a salud y educación (60%) que a empleo (50%) y ahorro (42%), y que son más quienes creen que lo que hace el Congreso contribuye (40%) que quienes no lo creen así (30%) y más desconfían de lo que hace ese órgano (Ibid.).

³⁴⁸ No obstante el 40% de los entrevistados tolera que un funcionario se aproveche del cargo si a la vez hace cosas buenas por la población y que el rechazo a esa situación sea mayor entre quienes confían mucho en el Congreso que entre quienes no confían (24 y 17 puntos por encima del promedio nacional).

³⁴⁹ Lo cual fue considerado por el 60% y 55%, respectivamente, del total de entrevistados (Ibid).

³⁵⁰ A mayor escolaridad se incrementa la desconfianza, aún entre quienes los más interesados en la política y que ella no les parece algo complicado de entender, en este caso con un rango similar (8 y 10 puntos porcentuales) que el correspondiente entre quienes se informan preferentemente a través del periódico y quienes leen diariamente alguno (Ibid.).

actitud les merece lo que piensa los ciudadanos, si bien a seis de cada diez (65%) la política le parece complicada, en igual proporción no supieron cuánto tiempo dura un diputado en el cargo y uno de cada dos entrevistados cree que al momento de legislar el diputado toma más en cuenta los intereses de su respectivo partido político. Con excepción de la escolaridad, las variaciones en apatía hacia la política y conocimiento de ella son menores entre sí para los aspectos arriba considerados. La confianza en el Congreso, en partidos políticos y legisladores se corresponde con la opinión acerca de si en México prima o no la democracia, así como con la evaluación que se hace de su funcionamiento; aunque el nivel de correspondencia es más alto entre quienes consideran que se vive en un régimen democrático, están satisfechos con la manera en que opera (54.6% y 38.5%, respectivamente) y confían “mucho” en el Congreso, que entre quienes consideran lo contrario (34.6% y 19%, respectivamente) y no confían en ese órgano; si bien son menos los ciudadanos convencidos de que el régimen es democrático (37%) que los insatisfechos con sus resultados (60%) en el total de entrevistados. La creencia de que los partidos políticos son “muy necesarios” disminuye más aún entre los escépticos, quienes también lo son respecto de que “la mayoría de las personas son solidarias”, que en cambio es una convicción notoriamente compartida (siete de cada diez) entre quienes confían en el Congreso.

Una investigación (González, Quintanilla y Tajonar, 2010: 63-97) que, consistente con una cierta perspectiva politológica, se propuso explicar los determinantes de los niveles de confianza hacia las instituciones políticas mexicanas, a partir de un modelo de análisis de regresión múltiple³⁵¹ y datos de la “Encuesta Mundial de Valores” con levantamientos entre 1985 y 2005 en diversos países, incluido México a lo largo de ese periodo, arroja los siguientes hallazgos:

³⁵¹ Donde la variable dependiente es el nivel de confianza, calculada como promedio de los resultados de cada encuestado a las interpelaciones acerca de cada institución política, medidas mediante escala del tipo Lickert con rango de 1 (nada) a 4 (mucho), y las variables independientes relevantes son (cursivas propias): *apego a “valores materialistas o posmaterialistas”* (tipo de políticas públicas que deben tener prioridad para las autoridades según los ciudadanos); *“capital social” detentado* (confianza interpersonal e índice de pertenencia a grupos o redes sociales con normas de reciprocidad); percepción de *“bienestar económico”* (satisfacción con la situación económica familiar y colectiva, según evaluación retrospectiva y prospectiva); permisividad de *“corrupción”* (grado en que el ciudadano está dispuesto a justificar actos de esa índole); socio-demográficas, sólo se consideró sexo y edad; calculándose los coeficientes con base en el método de regresión lineal por mínimos cuadrados para probar los efectos de las variables independientes, a nivel individual, sobre el nivel de confianza en las instituciones (Ibid.).

1. La confianza interpersonal³⁵² es una determinante.
2. Aunque los valores culturales sirven para explicar la confianza política, lo hacen de una manera negativa, con independencia de la categoría de valoración del ciudadano (según la tipología de Inglehart, 1977 y 1998)³⁵³.
3. El buen desempeño económico se relaciona con mayores niveles de confianza.
4. La pertenencia a redes o asociaciones sociales no ayuda a explicar los niveles de confianza³⁵⁴; solo es estadísticamente significativa para 2005.
5. Se confirma que en la medida en que se acentúen los valores de expresión y la libertad individuales, lo harán los estándares para la evaluación de la vida política.

En términos generales y para todo el periodo, las variables que se mantienen como determinantes de la confianza política, en mayor número de ocasiones, son la confianza interpersonal y la satisfacción con la situación económica familiar, seguida de los valores “posmaterialistas” y el género del encuestado. En términos particulares, se observó que en 1990 la confianza se explica más por variables de “materialismo”- “posmaterialismo” y satisfacción de la situación económica del hogar, confirmándose que ciudadanos con valores “posmaterialistas” son más críticos y, en consecuencia, desconfían más; en 1995 cobra significancia la variable “confianza interpersonal” y en

³⁵² Aspecto puesto de relieve en enfoques socio-psicológicos, que argumentan que muchos aspectos del comportamiento del individuo son afectados por rasgos básicos y duraderos de la personalidad, de modo que como consecuencia de una estructura mental biográfica dada algunos mostrarán mayor optimismo y predisposición a confiar en los demás y cooperar; en ese enfoque la confianza es considerada una orientación afectiva, independiente de las experiencias políticas propias, lo que lleva a Easton (1965: 447) a sostener que se observa en quienes sienten que sus propios intereses serán atendidos “incluso cuando las autoridades no están sujetas supervisión” (Ibid.).

³⁵³ Exponente de la perspectiva culturalista quien, investigando el cambio de valores en sociedades post-industriales, argumenta que la más extendida satisfacción de necesidades materiales de sustento y seguridad, al generalizarse el “Estado de bienestar”, conllevó la generación y búsqueda de satisfacción de necesidades relativas a “calidad de vida”, que conciernen a mayor libertad individual, de expresión, creencia y asociación, de recreación y uso del tiempo libre, de cuidado del medio ambiente, entre otras, lo cual implicó una transformación de los valores de los ciudadanos, que a su vez afecta las expectativas que tienen hacia los procesos democráticos; a partir de esa premisa propone caracterizar tales expectativas como “materialistas”, “posmaterialistas” y “mixtas”, según que privilegien la satisfacción del primer tipo de necesidades, el segundo tipo o ambos, respectivamente; en esa tipología los valores posmaterialistas tienen estándares más altos en la evaluación de la vida política y es de esperar que guarden una relación negativa con el nivel de confianza en las instituciones políticas (Ibid.).

³⁵⁴ Lo que se explicaría por los bajos niveles de membresía a asociaciones y porque éstas no funcionan como entidades en las que se desarrollan confianza interpersonal y hábitos que conduzcan a confiar en las instituciones públicas, lo cual lleva a descartar la tesis de Almond y Verba (1965: 245) de que los miembros que pertenecen a algún grupo de voluntariado social son menos controlados por el sistema político y, por ende, tienden a confiar más en éste, según los autores del estudio (Ibid.).

dirección positiva, de modo que los individuos que más confían en los demás manifiestan a su vez altos niveles de confianza; en tanto que la variable género solamente adquiere significado explicativo en 2000 y 2005, observándose que el nivel es menor en mujeres que en hombres. Cabe señalar que para 2005 se obtuvo el mayor número de variables independientes con significación estadística.

El valor de los hallazgos aplica aquí porque el estudio distinguió entre instituciones de representación y ejecutivas³⁵⁵, ya que el juicio de confianza hacia el conjunto de instituciones de orden público no es una constante, sino que depende de la institución particular a ser evaluada. En congruencia con ese presupuesto, se utilizó el “análisis de componentes principales”³⁵⁶. Con ello los autores pudieron confirmar observaciones que en otros estudios son solamente presunciones, tal como que los mexicanos consideran a todas las instituciones públicas como instituciones políticas, incluidas aquellas de carácter privado, tal como la prensa, o bien que tampoco distinguen entre la confianza que se deposita en las instituciones de representación y aquellas que se encargan de la administración pública (González, Quintanilla y Tajonar, 2010: 71, 72).

Desde que han sido medidos, a partir de 1970, los niveles de la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones políticas tienden a decrecer hasta la fecha, si bien en similar medida en que ocurre en muchos de los países estudiados. El promedio en el nivel es siempre más bajo para las instituciones políticas que para otro tipo de instituciones, aunque no siempre descienden en el caso de las primeras tal como ocurrió en la coyuntura de 1994-1995 en el caso de México³⁵⁷. Eso pone de relieve la tesis de que la erosión de la confianza en las instituciones políticas, en una democracia representativa, depende de factores de corto y de largo plazo, del cambio de valores inter-generacionales y de condiciones económicas adversas o de falta de honradez e

³⁵⁵ Los autores hicieron esa distinción por razones teóricas, siguiendo el argumento de (Rothstein y Stolle, 2022:12), puesto que al funcionar de manera ideológica, dado que persiguen un objetivo partidista, las instituciones representativas ven afectados sus niveles de confianza por variables relativas a preferencias y conducta partidista; mientras que las instituciones ejecutivas son más homogéneas, cumplen funciones específicas y tienen mayor contacto con los ciudadanos (Ibid.).

³⁵⁶ Técnica estadística de síntesis de información o reducción de la dimensión (número de variables).

³⁵⁷ En la que tuvieron lugar el asesinato del candidato presidencial del partido en la Presidencia, el levantamiento armado en protesta contra políticas neoliberales de apertura comercial y una severa crisis económica, que ocasionaron un sentimiento generalizado de incertidumbre, lo que pudo llevar a los ciudadanos a confiar en la protección de las instituciones políticas.

integridad en los agentes políticos, según el énfasis otorgado a alguno de ellos en cada enfoque teórico aplicado³⁵⁸.

Otro estudio³⁵⁹ arroja evidencia acerca de que ocho de cada diez ciudadanos considera que participar en la vigilancia de programas gubernamentales puede servir para que éstos funcionen mejor, así como que son menos los ciudadanos mexicanos que no consideran eficaces y confiables a los legisladores, aunque a la vez son más quienes consideran que los partidos no anteponen las demandas ciudadanas a otras consideraciones al decidir, no obstante que la mayoría desconoce sus derechos sociales y se informa acerca de ellos y del hacer político mediante la difusión mediática, preferentemente a través de la televisión. Se registra un bajo nivel de participación y escrutinio ciudadano aún en tratándose de programas y acciones de bienestar social, a los que la mayoría de ciudadanos atribuye pertinencia y utilidad; solo dos de cada diez han participado en alguna discusión de problemas sociales en su localidad y en la misma proporción con frecuencia notoria (el 45% una vez al mes) que esporádicamente (el 43.9% una vez al año), aunque haya quienes lo hacen una vez a la semana (6.1%); habrá que considerar, sin embargo, que la mitad de ciudadanos que manifestaron no ejercer acción alguna de escrutinio, en el año precedente a la aplicación de la encuesta, dijeron que en su respectivo caso no se justificaba hacerlo³⁶⁰.

³⁵⁸ Según los autores del estudio, Norris (1999) advierte que la perspectiva cultural destaca el cambio de valores individuales en el tiempo y Newton y Norris (2000) reconocen tres corrientes de pensamiento: explicaciones centradas en características socio-psicológicas de los individuos (Easton, 1965; Gamson, 2000); las enfocadas en la interacción entre individuo y contexto cultural (Coleman, 1990; Inglehart, 1994; Fukuyama, 1995; Putnam, 1995 y 2001; Rothstein y Stolle, 2002; Joan, 2004 y Catterberg y Moreno, 2005) y las centradas en el desempeño de las instituciones (Listhaug, 1984; Pharr, 2000).

³⁵⁹ Estudio basado en información demoscópica que arrojaron diversas encuestas nacionales en vivienda, levantadas en México hasta 2007, incluida una acerca de percepciones y evaluación ciudadana respecto al Congreso encargada por la Cámara de Diputados ese año a agencias con consistencia profesional en esa tarea, véase CESOP (2008).

³⁶⁰ De acuerdo con estudiosos del comportamiento político de los ciudadanos, para formarse juicios políticos claros y razonables los ciudadanos requieren hacer el esfuerzo implicado en manejar información que, con frecuencia, es abstracta, compleja y contradictoria (McCann, 1997).

Es claro que la brecha entre ciudadanos, en términos de conocimiento e información³⁶¹, repercute en la percepción y evaluación que hacen acerca del Congreso y de los legisladores, si bien hay evidencia que apunta a que los extremos de confianza y de desconfianza en ellos se distribuyen en proporciones similares³⁶² y califican por igual a senadores y diputados y a ambos por debajo del Presidente³⁶³; no obstante que quienes más conocen o están informados más desconfían, pero a la vez están conscientes de la relevancia de aquellos, prefieren que haya contrapesos políticos partidistas entre ese órgano y la Presidencia, aunque las decisiones sean dilatadas, y desearían una mejor rendición de cuentas, y mayor vinculación de los diputados con sus representados, mediante consultas para ser tomados en cuenta³⁶⁴.

Es relevante para este estudio hacer notar que en el contexto en que se analizó el corpus textual de la difusión televisiva (2008), para la prueba de hipótesis, los ciudadanos calificaron favorablemente la mayor parte de las decisiones tomadas por los legisladores federales respecto de la reforma electoral que, en materia de propaganda en radio y televisión, aprobó el Congreso en 2007³⁶⁵, a pesar de que ese

³⁶¹ Apenas el 35% de los ciudadanos saben que el Congreso de la Unión está integrado por dos Cámaras; de éstos, sólo 16% señaló que los Diputados son los encargados de aprobar o rechazar las leyes que rigen a los ciudadanos, y 12% que los Senadores son los encargados de aprobar los acuerdos internacionales de México, según encuesta nacional en vivienda aplicada por Parametría, S.A. de C.V., en octubre de 2002 en 1000 domicilios a personas mayores de 18 años, elegidos mediante un método probabilístico, tomando como punto inicial de referencia las secciones electorales del IFE; margen de confianza de 95 por ciento y una probabilidad de error de +/- 3%

³⁶² En una escala de 0 a 10, donde 0 es nada de confianza y 10 mucha confianza en los diputados, quienes calificaron con cero (23%) representaron similar proporción que quienes lo hicieron con 5 (20%), según una encuesta nacional domiciliaria, levantada en diciembre de 1999, con muestreo estratificado, de conglomerados, polietápico, un tamaño de 3 mil cuestionarios, calculado y distribuido de tal manera que tuviera representatividad nacional y para las nueve regiones en que se dividió el país, con niveles de confianza y probabilidades de error variables para cada región y de 98 por ciento y menor a cuatro por ciento al nivel nacional, Véase (Flores y Meyenberg, 2000, Tablas 52.1 a 52.5).

³⁶³ El 37% del total aprobó el desempeño de los diputados (“forma en que realizan su trabajo”, 28% “poco”) y 9% “mucho”) casi en la misma proporción que el de senadores (29% y 8%, respectivamente), aunque muy por debajo de el del Presidente de la República (40% y 33% respectivamente), Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, véase SEGOB (2001).

³⁶⁴ El 61% del total desea una Cámara de Diputados sin mayoría, de haberla de un mismo partido el 40% preferiría que fuera distinto al del Presidente, no obstante estar conscientes el 60% de que esto significa poca cooperación y conflicto, si bien el 67% reconoce que es negativo que los Diputados no apoyen las propuestas de Presidente, Parametría, op., cit.

³⁶⁵ En 2007, al ser interrogados al respecto de los cambios aprobados en el Senado, los niveles de aprobación fueron altos, con excepción de la remoción de consejeros del IFE y la destitución de su presidente, a juzgar por una encuesta en la que las proporciones de quienes calificaron como correctos tales cambios fue mayor que quienes los consideraron incorrectos, en cada rubro, desde la reducción de campañas (73% y 20%) y hacer coincidir en la misma fecha las elecciones (57% y 32%) hasta prohibir

órgano y los partidos políticos ocuparon el penúltimo y último lugar, respectivamente, en el nivel de confianza que los ciudadanos otorgaban de entre 13 opciones correspondientes a instituciones u organizaciones de diverso origen y naturaleza, todas ellas fácilmente identificables para cualquiera en el ámbito público, tales como Iglesia (74%), la radio (56%), las fuerzas armadas (51%), la televisión (47%), periódicos (45%), el Presidente de la república (43%); el Congreso concitó mucha o algo de confianza casi con el mismo nivel (29%) que el tribunal electoral (30%) y 10 puntos porcentuales por encima de los partidos políticos³⁶⁶. Contra lo que pudiera pensarse, al inicio de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, no se registraba una brecha abrumadora entre los ciudadanos que consideran, por un lado, que el trabajo que hacen los diputados y senadores es bueno y muy bueno y quienes, por el otro, calificaron como malo o muy malo el desempeño, distribución de opiniones que además es idéntica para diputados y senadores (27% y 35%, respectivamente)³⁶⁷.

Es probable que el asunto, la algidez y polarización del debate puede repercutir, en parte, en la modificación del juicio de los ciudadanos sobre los legisladores y el Congreso, cuando en aquel recae una cobertura mediática informativa y de opinión sostenida³⁶⁸ (algo no indagado sistemáticamente); pero no hay duda de que la confianza ciudadana en los medios de comunicación prevalece superior a la que concitan aquellos, con independencia del asunto y polémica que el tema despierte³⁶⁹.

que los partidos compren propaganda en radio y televisión (57% y 35%), pasando por prohibir anuncios propagandísticos en ellos que denigren a un político (55% y 39%) o que los particulares puedan contratar propaganda electoral en esos medios (54% y 38%), según una encuesta telefónica nacional realizada los días 29 y 30 de septiembre de 2007, por el periódico *Reforma*, a 850 adultos con credencial de elector, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de +/- 3.4 por ciento.

³⁶⁶ Según la encuesta aplicada por el Latinobarómetro en 2007.

³⁶⁷ Encuesta telefónica nacional llevada a cabo por el periódico *El Universal* el 25 de octubre de 2006 mediante 700 entrevistas, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de +/- 3.8%.

³⁶⁸ Tal como revela el hecho de que, entre 2001 y 2002, la valoración positiva o aprobación del trabajo de ese órgano pasó de 48% a 36% en febrero de cada año, cuando se discutió la polémica miscelánea fiscal, según una encuesta nacional domiciliaria encargada por el periódico *Reforma*; las encargadas por el periódico *Milenio*, entre noviembre de 2001 a mayo de 2002, arrojaron una reducción de 4 puntos entre quienes manifestaron confiar "mucho" o "algo" en la Cámara de Diputados; deterioro de la imagen pública del Congreso durante el primer semestre de 2002, que corroboró la realizada por Grupo de Economistas y Asociados, cuando el 14% del total calificó de "bueno" el trabajo de los legisladores.

³⁶⁹ En ese periodo, los noticiarios de radio concitaban el mayor nivel de confianza entre la mayor parte de los mexicanos (75% de los entrevistados), por encima del ejército, de noticiarios de televisión, de periódicos y del IFE, en ese orden, todos con porcentajes superiores al 70%, mientras que la policía, los partidos políticos y la Cámara de Diputados se ubicaron, en ese orden, entre las instituciones con menor

No es desdeñable considerar que para la mayor parte de los ciudadanos resulta oneroso el gasto público invertido en los legisladores³⁷⁰, así como consideran que pagar impuestos es la mejor manera de participar en la acción colectiva entre otras posibles³⁷¹. Pero eso no debe conducir al equívoco de que los legisladores son desahuciados por los ciudadanos, subsiste una política partidista y legislativa efectiva para ciertos segmentos de éstos que ven en los primeros a gestores efectivos, cuando se trata de hacer valer sus derechos sociales, al margen del resultado³⁷².

Una revisión de las encuestas y sondeos, en los últimos quince años, revela que:

- 1.- De manera histórica, los ciudadanos mantienen una actitud de desinterés y desconfianza hacia la política y los políticos, lo que repercute en la valoración de las instituciones de gobierno; la que concierne a los legisladores federales se enmarca en esa tendencia hacia la desaprobación en ese contexto general.
- 2.- En comparación con otras instituciones políticas, la desconfianza y desaprobación hacia el desempeño de los diputados se ubica apenas por encima de la que inspiran los partidos políticos y la policía, en menor rango entre todas las consideradas; aunque no se consideren adecuadamente representados por los diputados, uno de cada dos considera que los temas discutidos en esa Cámara son de su interés, no obstante el evidente escaso conocimiento acerca de las atribuciones de un legislador.

nivel de confianza, menor a 40% en todos los casos, según una encuesta levantada por el despacho de María de las Heras, publicada por el periódico *Milenio Diario*, 4 de julio de 2002, p. 9.

³⁷⁰ Ocho de cada diez ciudadanos consideró excesivo el gasto público que hacen los legisladores y sólo un 6% reconoce que han tratado de hacer ahorros, atribuidos en mayor medida a diputados (6%) que a senadores (3%), si bien uno de cada dos ciudadanos considera que el número de legisladores debiera ser disminuido, según una encuesta nacional de vivienda, realizada del 16 al 19 de marzo de 2007 por Consulta Mitofsky (un mil entrevistas con nivel de confianza de 95% y margen de error de +/- 3.1).

³⁷¹ Cuatro de cada diez mexicanos (41.2%) considera que pagar impuestos es la mejor forma de contribuir a reducir los problemas sociales del país, dos veces y media más que la segunda y tercera mejores formas de hacerlo, "participando junto con el gobierno" (16.5%) y "ayudando directamente a la gente" (15.7%), tres y media veces más que "organizándose con otras personas" (11.6%) y doce y media veces más que "dando dinero a alguna institución social" (3.2%), CESOP, op., cit.

³⁷² Para dos de cada diez ciudadanos que emprendieron alguna acción para exigir el cumplimiento de un derecho social, acudir al respectivo diputado, senador o regidor es la segunda vía con nivel favorable de resolución (22.6%), entre la opciones comparadas; no obstante que se ubique con diez puntos por debajo de la más eficiente de todas, la denuncia judicial (33.2%) y apenas por encima de la opción de poner una queja ante la autoridad responsable del programa social (21.4%), solicitar la inscripción al mismo (19.5%) u otras categorías (19.8%); pero acudir al respectivo representante registra a su vez el nivel más alto de no haber recibido respuesta (42.3%) de entre todos los tipos de acciones emprendidas, incluida la denuncia judicial (36.1%), muy próximo al derivado de solicitar la inscripción (39.7%) y lejano al conseguido por quien puso una queja ante el responsable del programa (19.4%), CESOP, op., cit.

3.- Es consistente la mayor desaprobación entre los ciudadanos mejor informados³⁷³.

4. Las tendencias observadas son similares hacia los legisladores y el Congreso.

No es lugar aquí para determinar el peso relativo de los factores de apatía o desconfianza. Para explicar el problema de mediatización del escrutinio ciudadano respecto del desempeño de legisladores en México, interesa poner de relieve que una reducida proporción de ciudadanos otorga valor a la acción de acudir con el legislador, pero en tanto que gestor para exigir el cumplimiento del derecho a ser beneficiado por un programa social, que es superior a la de aquellos que creen que para encontrar una solución es mejor participar en una acción de protesta pública, si bien en ambos casos inferior de quienes justifican que en su respectivo caso no ha sido necesario ejercitar acción alguna de escrutinio o vigilancia del gobierno pero lo haría llegado el caso.

Aunque es mayor la proporción de ciudadanos que consideran que la sociedad organizada puede influir para ser tomada en cuenta en las decisiones de quienes gobiernan, que quienes no lo creen así, sin embargo es claro que para la mayoría esa influencia es más débil tratándose de legisladores que de ejecutivos electos y en el plano nacional que en el local³⁷⁴ y que es más efectiva al nivel local que regional o nacional y ante una autoridad ejecutiva que ante un legislador³⁷⁵. Es claro también que la participación de la mayor parte de los ciudadanos no se sustenta en alguna base asociativa ciudadana y una acción colectiva organizada³⁷⁶ y que la televisión y la radio

³⁷³ Entre quienes afirman tener una “mala imagen” de la Cámara de Diputados, predominan quienes, a su vez, conocen las facultades de ese órgano, en mayor medida hombres que mujeres, de 35 a 44 años de edad, con educación superior, profesionistas y que laboran en el sector de servicios, nivel apenas ligeramente mayor entre quienes leen periódicos que entre quienes no lo hacen.

³⁷⁴ Superior tres veces superior en el caso de autoridades ejecutivas y una vez y media del legislativo, en comparación con quienes creen que no se ejerce influencia alguna; de las tres opciones presentadas, para seis tipos de cargo electo, predominan quienes piensan que es “poca” la influencia indistintamente del cargo de que se trate; sin embargo, son más quienes piensan que es “mucho” que quienes creen que es “nada” cuando se trata de los cargos de presidente municipal, gobernador, presidente de la República, en ese orden de prelación y, a la inversa, son más quienes piensan que no se ejerce influencia alguna (“nada”) que quienes creen que se ejerce “mucho” cuando se trata de los diputados locales, diputados federales y partidos políticos, también en ese orden de magnitud, CESOP, op., cit.

³⁷⁵ Así, del 71% del total que dijo que el presidente municipal puede ser influido, el 31.8% cree que mucho y el 39.4% cree que poco, mientras que el 23.5% considera que no; en contraste, el 56.6% de los ciudadanos consideró que el diputado federal puede ser influido, el 19.2% mucho, el 37.4% poco y el 36.5% no cree que pueda ser influenciado para tomar en cuenta a los ciudadanos, CESOP, op., cit.

³⁷⁶ Entre los adultos mexicanos, el ejercicio del derecho de asociación de carácter secular es precariamente ejercido en general, mientras que del total de entrevistados el 3.7% dijo pertenecer a un

son, en ese orden, las principales fuentes de información y referencia (36.5%), agentes de socialización secundaria, a que recurre la mayor parte de los ciudadanos para enterarse de los derechos sociales, casi en la misma proporción que la principal fuente, la escuela (37.9%) agente de socialización primaria desde la infancia, tres veces superior a quienes oyeron sobre derechos sociales en pláticas con amigos y familiares (11.9%), que representaron el doble de quienes oyeron de ellos en el trabajo (6.4%) y muy por encima de quienes leyeron de ellos en el periódico (1.8%) (CESOP, 2008)³⁷⁷.

Si bien las personas recurren, cotidianamente, en mayor medida a los medios de difusión masiva que a otras personas, la brecha entre sendas formas de informarse se reduce proporcionalmente conforme se amplía el rango temporal de recurrencia a la respectiva fuente, incluso llega a invertirse a mayor plazo de los encuentros interpersonales. Así, cuando la frecuencia de recurrencia consiste en una vez por semana, la discusión con amigos y familiares (29.4%) supera al periódico (25.2%) y se aproxima al radio (31.5%) como forma de informarse y supera en casi cuatro veces a la televisión (27.8%) y una y media veces a la radio (17.1%) en el rango de recurrencia o frecuencia de utilización correspondiente a una o dos veces al mes. Se recurre a discutir con compañeros de trabajo una o dos veces al mes en una proporción tres y media veces superior (18.9%) a lo que se hace diario (5.3%), pero apenas ligeramente superior a la proporción de quienes recurren al periódico diariamente (15.0%) y muy inferior a quienes utilizan televisión (33.8%), radio (31.5) y periódico (25.2%) una o dos veces por mes para informarse³⁷⁸.

sindicato y el 4.6% a alguna organización ciudadana, en cambio el 37.8% contestó que a alguna de índole religiosa, el doble que a una de índole social (18.6%) y que a una política, deportiva u otra, éstas tres tipos en el mismo rango de proporción (14.5, 14.1 y 14.4% respectivamente), CESOP, op., cit.

³⁷⁷ El 51.3% del total de ciudadanos entrevistados no utiliza una discusión con compañeros de trabajo, como fuente de información acerca de lo que ocurre en el país; en contraste, la proporción de quienes no saben si lo hacen o prefirieron no decirlo (8.1%) es mayor que la de quienes lo hacen diariamente (5.3%), pero ambas inferiores a quienes discuten con compañeros una o dos veces por semana (18.9%) o bien una o dos veces por mes (16.4%); aunque tenga casi el mismo nivel de frecuencia diaria, el 6.4% y el 5.3%, respectivamente, tres de cada diez ciudadanos (29.4%) discute con amigos y familiares una o dos veces por semana, mientras que casi dos de cada diez (18.9%) lo hace con esa frecuencia con compañeros de trabajo (Ibidem).

³⁷⁸ Aún así, la discusión con compañeros de trabajo registra la menor frecuencia de utilización como fuente de información, con cualesquier periodicidad de uso (diaria, semanal o mensual), en comparación con las otras formas más comunes para informarse, con excepción de Internet la menos utilizada por la mayor parte de ciudadanos (80.9% dice jamás haberla utilizado, CESOP, op., cit.).

La mayor parte de los ciudadanos recurre en mucha mayor proporción a la difusión mediática y en mayor medida y frecuencia a la televisión, cuando se trata de informarse cotidiana o semanalmente de lo que ocurre en el país. Esa proporción solamente es superada por la recurrencia a la interacción comunicativa con otras personas, amigos, familiares o compañeros de trabajo, en el reducido grupo de ciudadanos que solamente se informan por aquella vía una o dos veces por mes (CESOP, op., cit.). De acuerdo con una encuesta nacional levantada en 2004 por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (CONACULTA, 2004: 113)³⁷⁹, el 95.5% de la población de 15 años o más ve televisión y solamente el 4.5% no la ve; del total la mitad lo hace de 2 a 4 horas diariamente, en proporción casi similar de una a menos de dos horas (18.7%) y de cuatro a cinco horas (19.7%), en tanto que quienes la ven más de cinco horas (8.4%) representan cuatro veces a quienes apenas la ven menos de una hora (2%). Para los fines de este trabajo importa destacar que, sin que quepa duda alguna, para la mayor parte de los ciudadanos la televisión es el principal medio para conseguir información inmediata de la actividad política y mantenerse informado acerca de ella. Los noticieros televisivos son además y con mucho la más fuente de información más frecuentemente utilizada con esa finalidad³⁸⁰.

La televisión es el medio de comunicación de mayor penetración en México. Junto con la radio, son los medios de comunicación que presentan menos diferencias en los patrones de consumo, tanto entre estratos demográficos de población³⁸¹ como entre

³⁷⁹ En vivienda, muestra de 4,050 personas de 15 años o más, en 27 estados del país, levantada en diciembre de 2003, por encargo de esa dependencia gubernamental en materia de cultura.

³⁸⁰ Del total de la población de 15 años o más, casi siete de cada diez (68.7%) lo hace para ver un programa que les gusta, casi tres de cada diez (28.4%) para enterarse acerca de qué está pasando y solamente el 2.9% para no sentirse solo. Los noticieros encabezan las preferencias de quienes ven televisión, el 49.5%, seguidos de las telenovelas (39.2%), luego en forma equiparable películas mexicanas (24.4%) y deportes (24.3%) y películas extranjeras (22.5%), (CONACULTA, op., cit., p. 112). Cabe señalar que si bien del total de 22 preguntas hechas para explorar la variable “exposición y consumo de medios de comunicación masiva”, el mayor número de ellas corresponden a televisión (8), en tanto que 7 a radio, 4 a revistas y 3 a periódicos, en rigor solamente una de ellas se refiere a preferencias específicas de contenido o género de programas. Llama la atención además que si bien la codificación relativa al tipo de programa –consistente en 16 categorías, incluida “otro”-, incluyó la categoría de “discusión política”, distinta de “entrevistas” y de “talk-shows”, en la tabla de resultados no aparece asentada, como tampoco la categoría “otro: especifique”, lo cual puede significar error al elaborarla o bien que no hubo registro alguno para esa categoría. En el anexo metodológico se indica que la variable incluía explorar la “credibilidad de los medios”, pero no se ofrece dato al respecto.

³⁸¹ El consumo más intenso (4 horas o más al día) se observa en mayor proporción en la región centro-occidente (29.8%) y en menor proporción en la región noreste (21.3%), entre todas las regiones; el

regiones geográficas³⁸². La mayor parte de las personas son selectivas respecto al consumo de televisión. Casi siete de cada diez (68.7%) encienden la televisión “para ver un programa que les gusta”, casi tres de cada diez (28.4%) para enterarse acerca de “qué está pasando” y solamente el 2.9% lo hace para “no sentirse solo”. Los noticieros encabezan las preferencias de quienes ven televisión, el 49.5%, seguidos de las telenovelas (39.2%), luego en forma equiparable películas mexicanas (24.4%) y deportes (24.3%) y películas extranjeras (22.5%) (Ibid: 112).

No hay diferencias significativas en el consumo entre hombres y mujeres, aunque ellas ven en promedio más horas tiempo³⁸³. Tampoco hay marcadas diferencias según grupo de edad³⁸⁴, a excepción de los mayores de 55 años grupo³⁸⁵. Según la ocupación, el nivel de consumo es más moderado entre quienes trabajan (23.4% menos de dos horas, 1.9% de 2 a 4 horas y 20.4% más de 4 horas) que entre quienes no trabajan (16.6% menos de dos horas, 46.1% de 2 a 4 horas y 29.6% más de 4 horas)³⁸⁶, (Ibid: 112). En los menores rangos de ingreso familiar (de 1 a 3 y de 3 a 5 veces el salario mínimo general vigente), es mayor la proporción de quienes tienen un consumo intenso. En general, los grupos de población en edad productiva, con mayor

consumo regular (de 2 a 4 horas al día) se registra en mayor medida en la región noreste (57.3%) y en menor medida en la región noroeste (44.7%); en la región centro-occidente se registra la mayor proporción tanto de consumidores moderados (16.5%) como de consumo intenso (29.8%) en el conjunto de regiones; sin embargo, la categoría de quienes tiene un consumo intenso no registra diferencias notorias entre regiones del país, la proporción en la región centro-occidente es casi equiparable a la de la región noroeste (29.6%), mientras que la proporción de la región sur (26.9%) es apenas ligeramente superior a la de la región centro (26.3%); ese nivel de consumo es mayor en la zona metropolitana de la ciudad de México (33.4%), casi equiparado que el de la de Monterrey (31.2%) y ambos por encima de la de Guadalajara (20.8%); ese nivel de consumo se registra en mayor medida en municipios con de 50 mil a 100 mil habitantes (29.8%) y en menor medida (21.1%) en localidades con menos de 15 mil habitantes (Ibidem: 115).

³⁸² Las diferencias entre grupos socio-demográficos se manifiestan en mayor medida entre quienes ven televisión de paga (el 22.4% del total) que entre quienes ven televisión abierta, sobre todo por grupos de ingreso y escolaridad; los niveles más altos de consumo de televisión de paga se registran en el noreste del país (30.1%), en municipios más grandes, de más de 100 mil habitantes y en mayor medida en Monterrey (61.1% del total de televidentes) (Ibidem: 112).

³⁸³ El 29.8% lo hace cuatro o más horas al día y con esa intensidad el 23.4% de hombres (Ibidem).

³⁸⁴ A mayor rango de edad, menor es la intensidad de consumo televisivo, la proporción de quienes ven cuatro horas o más disminuye progresivamente conforme se eleva el rango de edad, con excepción de 31 a 45 años; la proporción dentro del consumo moderado (menos de 2 horas al día), se incrementa conforme se eleva el rango de edad, con excepción del rango de 46 a 55 años (Ibidem).

³⁸⁵ Que ve menos la televisión (89% de quienes están en ese rango de edad) y además tienen el nivel más bajo de consumo intenso entre todos los grupos de edad (cuatro horas o más), (Ibidem).

³⁸⁶ Aunque no hay diferencias marcadas en éste último grupo (amas de casas, 34% y quienes estudian, 33.3%) Los jóvenes de 15 a 22 años ven más televisión que el promedio de los demás grupos de edad y son el rango de consumo más intenso (Ibidem)

escolaridad y menor ingreso tienen un consumo de televisión tan moderado y tan intenso como los grupos más jóvenes, que no trabaja por ser estudiantes o amas de casa y con menor escolaridad. La mayor proporción según rango de consumo corresponde al regular (entre 2 y menos de 4 horas al día, 51.2%) seguido por el consumo intenso (de 4 o más horas al día, 28.1%) y al final el consumo moderado, hasta 2 horas al día (20.7%)³⁸⁷. No hay diferencias significativas entre quienes ven y no ven televisión entre las distintas regiones del país: la región con menor proporción de quienes ven televisión es el sur (93.4%) y con mayor el noreste (97.3%) (Ibid: 113).

Ahora bien, si se tiene en cuenta que en 2007 seis de cada diez ciudadanos manifestaron convicción acerca del valor de las obligaciones de transparencia gubernamental y rendición de cuentas, cuando se trata del gasto público en programas de bienestar social³⁸⁸, pero a la vez que solamente están de acuerdo casi dos de cada diez (17%) en que haya reelección inmediata de diputados federales o locales³⁸⁹ y cinco de cada diez (53%) en que la propaganda electoral debe informar acerca de propuestas y no sobre los candidatos³⁹⁰, en tanto que del total que han emprendido alguna acción colectiva ante una autoridad, la mayor parte lo hizo recurriendo a la queja o solicitud de apoyo interpuesta por cuenta propia (20%), en mayor medida que conjuntamente con vecinos³⁹¹ o asistiendo a alguna manifestación pública (11%), casi el doble de quienes recurrieron a un partido político (11%) y tres veces menos a un diputado o senador (7%), igual proporción ésta última de quienes pidieron apoyo a alguna organización civil, es evidente entonces que a la escasa confianza en los legisladores se suma el costo representado en hacerse cargo de tareas ciudadanas o comunitarias y de manera colectiva, lo que en conjunto podría explicar en parte el bajo

³⁸⁷ Quienes tienen menor escolaridad son el grupo con la mayor proporción de quienes no ven televisión, lo cual puede deberse a la necesidad de dedicar más tiempo al descanso o a transportarse, más que a la incapacidad de pago del aparato televisivo (Ibimen).

³⁸⁸ El 66.7% manifestó estar de acuerdo en que los gobiernos, federal, estatal y municipal, deben dar a conocer cuánto se gastó en programas sociales; el 62.3% en que deben publicar las listas de beneficiarios de ellos en cada comunidad para que ella verifique quiénes son y por qué lo son y el 52.9% que deben existir reglas claras para recibir un beneficio público social, véase CESOP (2008).

³⁸⁹ El 56% se opuso rotundamente, y fueron más los que no supieron qué contestar o no contestaron (27%) que quienes están de acuerdo (17%), interrogados poco antes de la reforma electoral de 2007.

³⁹⁰ El 42% no estuvo de acuerdo en que no se mencione en ella algo de los candidatos, pero en igual proporción se consideró que prohibir la propaganda de denostación de candidatos resulta positivo (47%) que dañino (47%) para la democracia (Ibid).

³⁹¹ Firmando un escrito (18%), integrando una comisión vecinal (12%), unirse a otros afectados (12%)

nivel de participación política, que como se ha visto depende de los intereses personales y, en personas ocupados y en edad productiva, de la disponibilidad de tiempo libre³⁹².

Importar dejar en claro que la evidencia disponible indica que el bajo involucramiento en política (información y conocimiento manifiestos), no ha prejuzgado la predisposición (creencia o actitud manifiesta) favorable de la mayor parte de los ciudadanos hacia el valor del escrutinio respecto de los legisladores y la exigencia de éstos para rendirles cuentas de su desempeño, en la medida en que, de acuerdo con la encuesta practicada en el mismo contexto temporal de este estudio, más ciudadanos manifiestan tener interés en alguna medida (31% “algo” y 39% “poco”) que no tenerlo (22% “nada”) en política y que el 43% considera que son los ciudadanos quienes deben vigilar “que los políticos cumplan con sus obligaciones”, seguido de la Cámara de Diputados³⁹³ y muy por encima de cualquier otra opción³⁹⁴, así como que el 89% consideró que los diputados, al momento de decidir sobre un asunto, deben consultar a los ciudadanos el sentido de su voto (frente a los que dijeron que no, 10%) y el 86% estuvo de acuerdo en que los diputados deben anteponer los intereses de las personas a los del partido al que pertenecen (el 8% respondieron a la inversa) (CESOP, 2008).

³⁹² Al indagar acerca de lo que a la persona le gustaría hacer, incluida la categoría “no hacer nada”, si dispusiera de más tiempo libre del que tiene, la participación en alguna tarea de interés altruista o solidaria con un beneficio social colectivo, por ejemplo acudir a una asamblea vecinal, pertenecer a una agrupación ambiental o ayudar a la gente menos favorecida, no es la opción más elegida; en cambio, la mayor proporción practicaría actividades físicas o deportivas (33.5%), casi en igual proporción tomaría algún curso (22.1%, por ejemplo, idioma, manualidades), en menor medida se ocuparía de sus hijos o familia (22.7%), en descansar (15.4%) y la opción menos preferida a “tomar clases para mejorar en su trabajo” (14.3%), (Ibid: 273), lo cual es consistente con los bajos niveles registrados en cuanto a la participación en actividades con otras personas, casi siete de cada diez no lo hace (69.2%) y la mayor proporción de quien lo hace en un equipo deportivo (16.9%), (Ibid: 270), así como con la importancia que les merece llevar a cabo actividades con amigos o la respectiva familia, cinco de cada diez entrevistados participa solo (23.1%) o con la pareja (22.9%) (Ibid: 272); la participación colectiva tiene sentido para cuatro de cada diez cuando se trata de las fiestas de la comunidad, frente al 57.5% que dijo no participar en ellas, lo cual es más acentuado en la región sur del país (57%) que en cualquier otra (el noreste registra la menor proporción, 34.4%) entre la gente con escolaridad universitaria (32.0%) y con mayor ingreso económico (33.3%) y entre los jubilados (53.2%), (Ibid: 271).

³⁹³ La mitad (51%) del total de entrevistados cree que es muy importante que los diputados vigilen el trabajo del Presidente de la república y de su equipo, el 31% que es “algo importante”, el 13% que es poco importante y el 4% que no es importante en absoluto (“nada importante”), véase CESOP (2008).

³⁹⁴ “Todos” (11%); “El Presidente” (11%); “Un organismo independiente” (10%); “La Oposición” (2%), “Nadie” (2%); “Los Senadores” (1%); “Ninguna” de las opciones (2%), véase CESOP (2008).

En ese sentido, el bajo nivel de involucramiento no equivale a apatía y habría que pensar más en términos de inconformidad (“desilusión” o “desencanto”) que de indiferencia o desafección (nula o poca estimación) hacia la política representativa, en el contexto de la democratización a lo largo de la última década. En 2007, en efecto, fueron más los ciudadanos que consideraron importante a la Cámara de Diputados (27% “muy importante” y 33% “algo”) que aquellos que no (26% “poco” y 13 “nada”), aún cuando también lo fueron aquellos que dijeron estar interesados en alguna medida (12% “mucho”, 26% “algo” y 34% “poco”) que los completamente indiferentes en los asuntos que son discutidos en ese órgano (CESOP, 2008).

Esa consideración se afirma aún más teniendo en cuenta que los ciudadanos reconocen o recuerdan un asunto legislativo discutido o aprobado, tan pronto y en la medida en que es tratado en la cobertura informativa o de opinión política de la difusión mediática³⁹⁵. Para los fines de este estudio, importa destacar que, en 2005, los ciudadanos de México tuvieron el nivel promedio más alto de participación mediante expresar su opinión o reclamo (“participación opinativa”), que no implica una lógica asociativa o dialógica sino intervenir a través de canales de formación de opinión pública³⁹⁶, en comparación con otros siete países de América Latina, el segundo mayor en “participación directa” y el tercero en “participación electoral”, de acuerdo con un estudio del “Índice de Participación Ciudadana”, que mide cómo y con qué intensidad participan los ciudadanos a la luz de su aporte a los beneficios asociados al hecho de participar (Adúriz y Ava, 2006: 25-35)³⁹⁷.

³⁹⁵ Tal como prueba el hecho de que, al preguntarse en una encuesta nacional aplicada en vivienda en 2007, acerca de las leyes “recientemente aprobadas por los diputados”, la mayor parte de entrevistados mencionó la reforma electoral (16%) sin haber sido aún aprobada, en tanto que el 14% mencionó la reforma al sistema de pensiones del IMSS, en igual proporción (6%) el Presupuesto de Egresos y la reforma fiscal, éstas tres ya habían sido aprobadas; apenas el 1% mencionó la “Ley de Medios de Comunicación”, véase CESOP (2008).

³⁹⁶ Cuyas modalidades son: “Enviar artículos o cartas a medios de comunicación para dar a conocer su opinión, hacer una denuncia o intentar solucionar un problema”; contactar a algún programa de radio o televisión en donde se viertan opiniones de actualidad, ya sea una denuncia pública u otras opiniones referidas a asuntos públicos”, “votar por artistas favoritos en programas de “Reality Shows” o de “búsqueda de talento artístico”; “participar en consultas o encuestas de opinión”; “informarse y contactar al gobierno visitando los sitios WEB o enviando correos electrónicos” (Adúriz y Ava, 2006: 20).

³⁹⁷ Basado en un modelo multivariable, que otorga un valor diferencial a los diferentes niveles de compromiso, en tanto que su asociación con la mejora de las condiciones de la vida comunitaria y el fortalecimiento de la democracia, a partir de una encuesta aplicada en Argentina, Perú, México,

Se pueden suponer diversas razones por las cuales se desconfía de los diputados federales. Una consiste en que las opiniones, actitudes y percepciones respecto de ellos pueden estar influidas por el contexto precedente, en que el Congreso aún no tenía un papel activo en la toma de decisiones, lo que se relaciona con que la mayor parte de la gente aún no dispone de información y experiencia suficientes en cuanto al funcionamiento de ese órgano a partir de la ausencia de mayoría de un solo partido. Otra razón distinta corresponde a la ambigüedad que presumiblemente prevalece entre los mexicanos respecto de los valores políticos, puesto que junto al mayor aprecio por la democracia subsisten, a la vez, actitudes de intolerancia, mayor inclinación a la obediencia que a la participación y poco respeto hacia la ley. Una distinta es que en la difusión de la mayor parte de los medios de comunicación predomina información desfavorable hacia la Cámara de Diputados, relativa a deficiencias y escándalos por encima de avances y logros (CESOP, 2008).

Ese desequilibrio es convalidado por la opinión pública mediatizada y puede ser explicado por la centralidad que tienen los medios de comunicación masiva como instituciones que contribuyen a la socialización de valores, que detentan altos niveles de credibilidad entre la mayor parte de la gente y cuya difusión informativa y de opinión constituye una alternativa más accesible, atractiva y de bajo costo, de cara a la maduración reflexiva implicada en la valoración del trabajo legislativo. La televisión tiene entre ellos un papel central: cuando la gente se informa acerca de la política la mayor parte lo hace a través de la televisión (entre 75 y 80%), medio que ofrece contenidos espectaculares y una forma de conseguir información mínima a bajo costo. La agenda mediática se contrapone con frecuencia a la construcción de una imagen veraz del trabajo legislativo, lo que se acentúa por la carencia de eficacia y efectividad en los programas y acciones institucionales para informar a la ciudadanía. No debe perderse de vista que, en 2007, apenas el 24% del total de ciudadanos dijo conocer el canal televisivo del Congreso federal, pero el 23% imputó como responsable a ese órgano por la falta de empleo en el país (CESOP, 2008: 115, 112).

república Dominicana, Costa Rica, Brasil, Chile y Bolivia, con base en una muestra probabilística en grandes ciudades en cada país y el cuestionario adoptado por la Red Interamericana para el Desarrollo.

3.6. Escrutinio público respecto de medios de comunicación masiva

Al quedar en claro, por un lado, las restricciones y potencialidades del escrutinio ciudadano y, del otro, la dependencia de la mayoría de los ciudadanos respecto de los medios de comunicación masiva, para informarse, enterarse e implicarse en la política, cabría considerar si aquel se ha ocupado de éstos en México y qué alcance tiene sobre de ellos en términos del cumplimiento de su responsabilidad. Un balance general indicaría que, con la transición democrática, los cambios analizados en el sistema mediático, hay un avance notorio en virtud de iniciativas y trabajo coordinado mediante el asociacionismo entre ciudadanos y académicos comprometidos socialmente, que han tenido una cierta influencia entre legisladores federales, quienes son más receptivos que antes aunque no se han comprometido con los cambios necesarios para modificar los términos de operación del sistema mediático.

El estudio de Aceves (2004) indica una tendencia creciente al surgimiento de asociaciones civiles que, en México y algunos países de América Latina, llevan a cabo monitoreo y evaluación de los medios de comunicación y propugnan que cumplan con su responsabilidad social de informar adecuadamente y dar cabida al pluralismo político al hacerlo, con la convicción de que esas son condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos políticos y sociales por parte de los ciudadanos y que puedan evaluar la conducción de gobierno³⁹⁸.

Habría que decir que, sin embargo, se trata de iniciativas recientes, que reciben financiamiento público y privado, cuya trascendencia depende de los académicos y especialistas que los asesoran o presiden y cuya evaluación se ha limitado, hasta ahora, a la cobertura mediática informativa de procesos electorales y en términos

³⁹⁸ En el caso de México, en 1992 la Academia Mexicana de Derechos Humanos desarrolló una metodología para el monitoreo de medios; Alianza Cívica, que agrupó a diversas organizaciones civiles, lo aplicó a prensa, radio y televisión en varias entidades federativas, como parte de otras acciones de observación integral de las elecciones en 1994; año en el que el IFE hace el primer monitoreo parcial; la reforma al COPIFE, en 1996, estableció una comisión de ese organismo con ese fin y para 2000 monitoreó 210 noticieros (126 de radio y 84 de televisión) a nivel nacional. Para conocer los estudios pioneros véase Secanella (1983) elecciones presidenciales de 1970, 1976 y 1982, así como De Garay y Moya (1989), Fregoso (1990) y Trejo Delarbre (1990).

cuantitativos, ante la acentuación de la mediatización de las campañas partidistas, del enfoque mercadológico en ellas y del gasto público canalizado a propaganda en radio y televisión, no obstante el escrutinio ha ejercido una débil presión entre los medios de comunicación y una incipiente influencia entre ciudadanos menos sofisticados.

En una investigación que observa la vigencia de valores y principios de la democracia y el uso real que en México se hace del espacio público mediático, Márquez (2003) apunta hacia el riesgo de que éste termine constreñido a mera arena de disputas entre élites políticas, económicas y mediáticas, sin dar cabida a la sociedad civil no obstante el papel relevante que le corresponde a ésta desempeñar, de cara al desarrollo de una cultura política democrática; mediante un análisis cualitativo de anuncios televisivos de propaganda en la contienda presidencial en el año 2000, esta académica contribuye a demostrar que los mensajes contenidos en ellos se dirigen a persuadir a las audiencias apelando a emociones, a costa de la “banalidad” y “frivolidad” movilizadas por el uso intensivo de “propaganda negativa”, en lugar de a informar a los ciudadanos acerca de programas de gobierno y apelar a la razón reflexiva e informada en ellos, con apego a valores democráticos tales como libertad, igualdad, fraternidad y tolerancia políticas; ese fenómeno se explicaría a partir de las repercusiones que tiene sobre la cultura democrática el vaciamiento del contenido sustantivo de la política, como consecuencia del predominio de la “política espectáculo” y de estereotipos utilizados con fines de una persuasión maniquea por parte de los partidos políticos, al margen del debate público de idearios y proyectos políticos.

En otro estudio que compara la cobertura otorgada en noticieros televisivos nocturnos transmitidos en señal abierta durante 2003, a las campañas electorales de legisladores federales en México, Márquez (2004) encontró que si bien “no hay un tratamiento uniforme entre televisoras”, en cuanto al orden de los temas o asuntos (según su aparición) y la jerarquía otorgada al mismo tema (según tiempo dedicado), es común la práctica periodística de “editorializar” la noticia, consistente en que el conductor del noticiario vierta juicios propios de valor u opinión particular en torno a ciertas noticias, incluso acompañados de gesticulaciones que forman parte del plano de la significación y son indicativas del significado connotado; se observó más acentuada (por frecuencia

e intensidad en que ocurre) en los casos de “Televisa” y “TV Azteca” y “CNI Canal 40” pero no tuvo lugar en el caso de la televisora estatal “Canal Once”.

En uno de los más completos y rigurosos estudios sobre las campañas partidistas a la Presidencia de México en 2006, Trejo (2010) demuestra que, no obstante las tendencias mediáticas y partidistas señaladas, la creencia generalizada de que un tratamiento inequitativo en la cobertura informativa televisiva de aquellas, según fue denunciado durante y después de la contienda, tuvo tal sesgo hacia uno de los dos más competitivos contendientes que influyó en el resultado de la votación, en realidad no se verificó, que el presuntamente afectado recibió, por el contrario, un tratamiento que le favoreció más que a los otros contendientes y que su partido gastó más recursos en propaganda en radio y televisión que los otros; demostración que contribuye a esclarecer la idea de la influencia mediática en la política electoral y, por ende, sugiere derroteros distintos en el análisis de la protesta electoral que mayor repercusión política ha tenido a lo largo de la transición democrática hasta ahora.

Sin perder de vista que la evidencia señala hacia cambios en el sistema mediático y su relación con el sistema político, en la configuración del entorno público mediático debido a las estrategias de los operadores privados de medios audiovisuales y a la movilización incipiente de la sociedad civil hacia el escrutinio público de ellos y de los partidos políticos y gobernantes electos, esos cambios deben entenderse en el contexto de las reformas a las reglas e instituciones del juego político; en ese sentido, es plausible interpretar que el mismo impulso democratizador, en la primera década del siglo, no se explicaría al margen de la inédita presión ejercida por una acción ciudadana cuya fuerza radicó menos en su origen y motivación apartidista, cuanto en incursionar en el ámbito del poder mediático hasta entonces intocado, con la abierta exigencia de hacer cumplir la responsabilidad social que corresponde a los concesionarios y operadores de medios de comunicación masiva.

No es fortuito que en 2000, el observatorio ciudadano de medios, formado por Alianza Cívica, la AMDH y el Consejo de Educación de Adultos de América Latina, imprimió a la estrategia de vigilancia del comportamiento de los medios, emblemáticamente

denominada “Ya los vimos y los vamos a vigilar”, un alcance cualitativo a la cobertura informativa de las elecciones de ese año, ya no limitado a la equidad determinada por la distribución del número de notas referidas a candidatos y partidos contendientes³⁹⁹. Del mismo modo, interesa destacar que desde que se otorgó autonomía al IFE respecto del gobierno, mediante las reformas legales que establecieron la composición ciudadana apartidista de su órgano colegiado de dirección, en el discurso oficial se reconoció en el monitoreo de la difusión mediática un recurso para el escrutinio público ciudadano, tal como reconocía la entonces consejera Peschard, que luego lo sería del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, una práctica que:

Ha probado su utilidad como herramienta de escrutinio del comportamiento de los medios, que son cada vez más el espacio privilegiado del desarrollo y las campañas políticas⁴⁰⁰.

A una década de aquella iniciativa ciudadana para someter a escrutinio público el desempeño de los medios de comunicación, surge otra que, convocada por la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, se distingue porque la organización de la agenda y el debate, no obstante la diversidad de participantes llevó a 119 ponencias, condujo al acuerdo en torno a 30 propuestas específicas entregadas a autoridades y legisladores federales, apuntando todas a la exigencia de la sociedad civil para que sea fomentado un sistema de medios de comunicación colectiva efectivamente democrático, más diverso y con contenidos de mayor calidad⁴⁰¹.

No obstante debe tenerse en cuenta dos hechos adicionales que afectan el ejercicio de este tipo de escrutinio público, a partir de las reglas institucionales y los recursos que ponen a disposición de los ciudadanos. Por una parte, el monitoreo de medios de comunicación por parte de organizaciones civiles se ha ocupado de radio y televisión,

³⁹⁹ Fueron evaluados cuatro noticieros televisivos de difusión nacional, véase Aceves (2004: 96).

⁴⁰⁰ Acta de Sesiones del Consejo General, México: IFE, 3 de junio 1997.

⁴⁰¹ Se trató del Encuentro Nacional “Por la Diversidad y Calidad en los medios de comunicación”, los días 5 y 6 de abril de 2011, que logró reunir en la capital del país a investigadores, estudiantes de nivel superior, organizaciones civiles, directivos, conductores y periodistas que trabajan en el campo de la prensa, radio y televisión, así como a ciudadanos en general, que discutieron en seis mesas de trabajo en torno a una agenda que va desde monopolios de comunicación colectiva hasta medios públicos y comunitarios, pasando por los derechos de las audiencias, comunicación mediática y desarrollo humano, comunicación política y medios en línea, los problemas más acuciantes que se padecen en las entidades federativas del país, si bien la conclusión indica la urgencia de la transformación requerida por los sistemas de radiodifusión y de telecomunicaciones en México.

dejando de lado a medios impresos, no obstante que éstos siguen siendo un canal más proclive a la confrontación entre élites políticas, al que más fácilmente pueden concurrir y utilizar para el intercambio de mensajes cifrados (Adler, 1991, 2004), un recurso más útil al escrutinio que la televisión, aunque ocupa solo a académicos.

Por otra parte, en cuanto a la responsabilidad social de los medios para ofrecer información suficiente, oportuna y sin sesgos a los ciudadanos, y correlativamente la vigilancia de esa responsabilidad mediante el monitoreo de su difusión, el desarrollo de la legislación, el andamiaje institucional y los recursos públicos destinados con ese fin es muy desigual en el país. Mientras que a nivel federal se registran avances, que destacan en el plano internacional, al nivel local se presentan insuficiencias notorias. Hasta el año 2004, por ejemplo, el monitoreo de medios durante las campañas electorales no estaba establecido en la legislación de las entidades federativas, con excepción de Jalisco, Nuevo León, México y Yucatán, así como del realizado por organizaciones civiles en Chiapas y Tabasco a partir del año 2001 (Aceves, 2004).

Es claro que, a la luz del enfoque aquí expuesto, ese hecho repercute directamente en la participación ciudadana en el escrutinio público, al dejar a los ciudadanos a expensas del escrutinio público mediático, con las distorsiones que puede provocar. Tal como se ha visto, la publicidad de los resultados del escrutinio ciudadano es una condición para éste surta algún efecto en los gobernantes electos, en la medida en que éstos se ven confrontados mientras detentan el cargo. A partir de ese derrotero, entre todos los medios, la televisión emprende la “mediatización” de las prácticas democráticas.

3.7. Colonización mediática del ámbito público y cautividad ciudadana

En el marco elaborado, puede plantearse que es probable que los ciudadanos no se vean motivados a participar en el cauce de las instituciones democráticas representativas, se retraigan hacia el cauce público mediático ante el cual se sitúan con mayores facilidades y cotidianamente⁴⁰², y decidan abandonarse a la difusión

⁴⁰² Al interpretar y usar los recursos simbólicos en su provecho, las audiencias “producen un margen de control, no sobre la propiedad de los medios, pero sí sobre sus sentidos sociales” (Rowe y Schelling,

mediática como principal fuente de información y motivación para contemplar el acontecer político, aunque es equívoco suponer que de manera pasiva⁴⁰³.

La investigación ha probado que los medios de comunicación son el lugar en donde el discurso y la discusión que en ellos transcurre se tornan ubicuas, por eso constituyen una fuente de motivación o desilusión política y facilitan o inhiben el desarrollo de una cultura centrada en el interés colectivo, aún cuando sean un actor político con intereses particulares en la esfera pública que ellos instala (Delli Carpino, 2009). En un estudio comparativo entre países con democracias consolidadas (Iyengar y Curran, 2009), se encontró que las diferencias de conocimiento acerca de asuntos públicos políticos y de motivación para enterarse de ellos dependen de la provisión estable de información relevante en las noticias televisivas, lo que se corresponde con sistemas mediáticos basados en operadores de servicio público y con regulación jurídica más estricta; lo cual en parte explica que sea más amplia la brecha entre ciudadanos con bajo y alto conocimiento y motivación en sistemas mediáticos basados en el libre mercado y precaria regulación jurídica, y a la inversa, ya que sistemas basados en el servicio público proveen más y diversos programas informativos y de discusión en horarios de transmisión de mayor audiencia en televisión, lo que asegura que aún los ciudadanos menos sofisticados y motivados encuentren información relevante⁴⁰⁴.

1991:109); las personas interpretan las ideas, las imágenes, los relatos y los puntos de vista en parte fusionando los recuerdos culturales con una imaginación cultural (Martín-Barbero, 1993: 227); el modo en que se asimilan, modifican, resisten y transforman los contenidos mediáticos en la relación social demuestra hasta qué punto las relaciones particulares entre estructura y acción reflejan siempre las circunstancias culturales situadas históricamente; la práctica de mirar televisión amplía los discursos, las orientaciones mentales y las conductas características de cada día, que son las bases constitutivas y reguladoras de la interacción social situada históricamente (Lull, 1997: 224-226).

⁴⁰³ Lull (1997: 212-219) argumenta que la incorporación rutinaria del contenido de los mensajes mediáticos a los discursos interpersonales cotidianos, con frecuencia introduce, refuerza y extiende la parcialidad cultural e ideológica contenida en tales mensajes; el televidente activo no siempre es alguien alerta y dispuesto a resistir el contenido ideológico de los mensajes televisivos, a reformular los sentidos aparentemente intencionados en ellos o a evaluar las consecuencias políticas y culturales de mirar televisión; el territorio cultural está sujeto a constantes apropiaciones y reapropiaciones que dependen de las necesidades de la gente, de las variedades de poder que ejerzan y de las circunstancias; en un sentido constante, los medios masivos basan ciertos aspectos de la experiencia humana en representaciones simbólicas seleccionadas; paradójicamente, los usos personales y sociales que hacen las audiencias del dispositivo y del contenido constituyen los efectos mediático profundos.

⁴⁰⁴ Las diferencias de conocimiento político son atribuibles, tanto a diferencias individuales en cuanto al interés en la política y la motivación para mantener informado, según las asimetrías entre sectores sociales en la respectiva cultura política nacional, como también a las diferencias en la provisión de información política sustantiva y relevante; ésta depende que el sistema mediático esté más o menos blindado frente a presiones del mercado. En sistemas basados en operadores comerciales, con precaria

En ese sentido, una fuente de circulación de opinión política, al alcance de cualquier ciudadano, la constituye las discusiones televisivas sobre asuntos públicos de interés general, a la que puede concurrir el ciudadano sin costo ni compromiso alguno, lo que facilitaría conformar su propio juicio crítico del desempeño de los agentes políticos, o bien, disfrutar la experiencia por la que otros “ciudadanos” se hagan cargo de opinar, criticar y presentar quejas respecto de la actuación de aquellos, así como ser motivado a compartir y discutir lo visto y oído en televisión con otros en los grupos en que cotidianamente socializa.

Se puede ahora resumir el argumento de la hipótesis que se puso a prueba en este estudio. El escrutinio ciudadano es una práctica política democrática que puede ser movilizadora simbólicamente a partir de la comunicación mediática, dando lugar a una práctica cultural que puede ser denominada como *escrutinio público mediático*. Ese proceso se explica, por una parte, debido a la “mediación cultural” que sobre la actividad política ejercen los medios de comunicación a gran escala (“mediatización de la política”) y, por otra parte, porque las prácticas políticas ciudadanas, en una democracia representativa, están condicionadas por la “mediación política” que ejercen los gobernantes con representación política. El fenómeno se produce por el solapamiento de la forma simbólica ideológica del escrutinio ciudadano y la forma simbólica cultural de su recreación en el discurso televisivo de contenidos de opinión.

Así, mientras que los gobernantes electos se ven sujetos a la crítica de su desempeño, a cargo de una elite de periodistas y analistas con sus respectivos sesgos, los ciudadanos pueden ser relevados de una práctica democrática que les compete, aunque las repercusiones serán diferenciadas, tanto entre legisladores según la dependencia que guarden respecto de una base electoral focalizada o difusa social y regionalmente o de la visibilidad mediática para continuar su trayectoria política, como entre los ciudadanos según los recursos de información pública a su alcance, el grado

regulación jurídica, predomina una difusión de noticias con baja relevancia (“ligeras”) y con excepción de los ciudadanos altamente motivados, hay una limitada exposición a los acontecimientos políticos y políticas públicas (Iyengar y Curran, 2009); para la metodología del estudio véase Curran, Iyengar, Lund y Salovaara-Moring, (2009: 5-26).

de conocimiento, involucramiento y sofisticación política y la dependencia que guarden respecto de la opinión política de índole mediática, si bien unos y otros difícilmente eludirán toparse, en mayor o menor medida, con las manifestaciones de procesos de reelaboración discursiva como consecuencia de la mediatización extendida, la ubicuidad del discurso mediático y la exposición al entorno crecientemente saturado de referencias y evocaciones críticas a la política partidista.

En el conjunto de los medios de comunicación, la televisión seguirá aprovechando, por su parte, la oportunidad ampliar el espectro de intervención, así como los márgenes para gestionar opiniones, con las cuales las elites políticas y económicas y ciertos grupos de interés, incluidas organizaciones intermediarias (iglesias, confederaciones sindicales y asociaciones civiles diversas) podrán ejercer cierta presión al margen del cabildeo privado y auspiciando alguna corriente de opinión afín, cuya orientación gane visibilidad pública al ser promovida o reflejada en esa parcela del entorno mediatizado de la política, representado en los programas televisivos de discusión política.

Una mayor elaboración del argumento lleva a considerar que entre uno y otro tipo de mediaciones, cultural y política, se establece una interrelación de tipo funcional, en el marco de la cual los ciudadanos y los representantes pueden relacionarse mediante procesos de comunicación, mismos que suplen las interacciones interpersonales (cara a cara), lo cual modifica el sentido de sus respectivas prácticas políticas. La función es inversa, de manera que a mayor involucramiento de los ciudadanos (lector, radioescucha o televidente) en la difusión mediática en la que se reemplazan sus tareas, mayor relevo se podrá experimentar para hacerse cargo de ellas, si consideran que otros ciudadanos, con recursos y oportunidades que ellos no disponen, pueden hacerlo. Es en este último ámbito televisivo en donde se despliega la política simbólica, una dimensión intersubjetivamente construida a partir de la circulación e intercambio de los discursos públicos y de las interacciones sociales permanentemente mediadas, prescindiendo del hecho de compartir el mismo contexto social, espacial y temporal.

La evaluación crítica que los ciudadanos hacen del desempeño de los gobernantes, así como la rendición de cuentas por parte de éstos a los ciudadanos, que transcurren

como prácticas políticas a partir del andamiaje institucional democrático, pueden transcurrir como prácticas culturales (rituales) en el ámbito público mediático, a partir de la producción y circulación de formas simbólicas y culturales movilizadas en los contenidos de información y opinión difundidos por los medios de comunicación.

Se trata de un proceso de intermediación entre gobernantes y ciudadanos, por el que éstos se ven apelados, suplantados y relevados por una reducida élite de agentes mediáticos, que pueden desempeñar el papel de escrutadores según la agenda, intereses, demandas y juicios u opiniones que pongan en juego en la discusión que escenifican, respalda por la gestión que detentan de la visibilidad pública y la agenda temática que instituyen. De esa manera se constriñe la deliberación pública a las formas y los contenidos de la deliberación en y a través de los medios. El fenómeno se inscribe en el proceso del confinamiento creciente del espacio público político al espacio público mediático, así como de la colonización cultural e ideológica del espacio público social, que es característico de las democracias liberales⁴⁰⁵. No obstante, los agentes políticos también contribuyen, mediante sus prácticas y estrategias de acción, a convalidar ese proceso, a partir de cuyos mecanismos de orden simbólico se instaaura la pauta cultural ampliamente compartida por la cual el cabildeo opaco y no sujeto a regulación alguna puede suplantar a la consulta abierta a los ciudadanos y las encuestas de opinión suplantando a las diversas manifestaciones y corrientes de opinión.

La paradoja que se desprende de ese efecto y su mecanismo consiste en que mientras se mantienen ocultas u opacas las presiones para incidir en el sentido de las decisiones

⁴⁰⁵ Si nos atenemos a la distinción de Keane (1997) entre “micro”, “meso” y “macro” esferas públicas, el fenómeno se ubica en el segundo tipo, entendida como espacio de debates sobre el poder, conformados por millones de individuos que atienden a un medio de comunicación masiva en el territorio de un Estado nación, si bien en su propuesta analítica no están suficientemente elaboradas las interacciones entre las diferentes esferas, lo cual es necesario para entender la configuración y el funcionamiento de las relaciones que se establecen con la mediación política institucional. Las microesferas ejercen presión en el nivel más bajo de la pirámide social, en tanto que las mesoesferas muestran resistencia, aunque actúen en paralelo cuando se politizan, tras controversias públicas, no necesariamente mantienen relación entre ellas. Los intentos analíticos por vincular la evolución de la esfera pública con la de los medios de comunicación de servicio público colisionan con el hecho de que las controversias públicas sobre el poder son facilitadas, generalmente, por los medios de comunicación de propiedad privada y la comunicación en el seno de la sociedad civil. Hay evidencia de que así como los medios públicos están constreñidos por las fuerzas del mercado, los medios privados tienden a la politización en el largo plazo, puesto que los públicos están conformados por ciudadanos capaces de distinguir entre el “sensacionalismo” del mercado y las controversias públicas.

de los órganos de gobierno, a la vez se hacen públicas y ejercitan en medida creciente las presiones para revelar y hacer transparentes las negociaciones políticas y partidistas y el proceso de toma de decisiones públicas⁴⁰⁶. Esa paradoja tiene consecuencias previsibles sobre la gobernabilidad, en la medida en que legisladores y partidos políticos decidan en el Congreso federal con base en sondeos de opinión y aquella difundida en medios y según calculen que podrán ser beneficiados o perjudicados de cara al electorado, sin que por ello, en contraparte, los ciudadanos amplíen su perspectiva política en términos de pluralismo y aprendizaje político para reconocerlo a partir de la difusión televisiva⁴⁰⁷.

Los partidos políticos disputan visibilidad pública y los de oposición al partido en la Presidencia lo pueden hacer a cualquier costo, así como encontrar que confrontarse y radicalizar sus posturas es una manera efectiva, tanto para frenar el programa de gobierno y así deteriorar la imagen del Presidente en turno como la de los demás partidos que colaboren con él, sobre todo si tienen indicios (encuestas de opinión u opinión mediática) o hacen el cálculo de que de ese modo avanzarán electoralmente. Los partidos políticos pueden generar conflictos en donde en principio no tendría razón de devenir en tales. Las políticas y las leyes son discutidas crecientemente bajo una lógica de conseguir dividendos electorales, a partir de la imagen y la opinión mediáticas proyectadas. Una manera en que los medios se han valido para penetrar e

⁴⁰⁶ Aprovechando el alejamiento de los ciudadanos respecto de los gobernantes electos, una élite de periodistas y analistas toma en sus manos la interlocución entre ellos, sometiendo a los segundos a cuestionamiento, o bien pactando un tratamiento favorable según los intereses que se pongan en juego, tanto en términos de audiencia como de influencia que se consiga ejercer; aún así, lo político cobra sentido para el ciudadano en la microesfera pública local, en donde la relación con el agente político es directa y la acción colectiva puede ejercer influencia en aspectos colectivos específicos e inmediatos.

⁴⁰⁷ Neuman (1986) quien para el caso del contexto estadounidense pone en entredicho la tesis de que la televisión deteriora la política democrática tradicional, sostiene que la dependencia cultural de los ciudadanos respecto de ella, en tanto que fuente de información primaria, repercute en un bajo nivel de aprendizaje, debido a que no adiestra en los aspectos analíticos y expresivos de la interacción humana interpersonal, que es fundamental a la actividad política. A partir del análisis comparativo entre medios de comunicación masiva, concluye que aunque haya pluralismo de enfoques y un enriquecido ambiente político, el flujo de comunicaciones políticas y el mayor tratamiento del electorado reflejan más homogeneidad que diversidad. La expansión de los servicios informativos basados en la especialización de la fuente puede contribuir a cambiar la conducta de las élites políticas, pero con probabilidad no ocurre con los patrones habituales del ciudadano promedio. La evidencia de esa hipótesis proviene de observar que la diversidad de los contenidos que la televisión por cable pone a disposición de los hogares no consigue concitar mayor interés entre el ciudadano promedio, cuya atención es prestada principalmente a los temas de entretenimiento. No hay que confundir, sin embargo, las características de la audiencia con las características del medio de comunicación.

inundar, es decir para “colonizar” culturalmente (en el sentido de Cohen y Arato, 2001, más que de Habermas, 1998) el espacio público político ha sido la utilización, cada vez más recurrente, del escándalo político. Pero les resulta posible, en parte, debido a las estrategias de lucha partidista dirigidas hacia inducir confrontación ante cualquier asunto, conducir la misma de manera polarizada y, en especial, buscando que las imputaciones para descalificar al adversario consigan la mayor visibilidad pública y resonancia social posible⁴⁰⁸.

Junto al predominio de la democracia de opinión⁴⁰⁹, se produce el predominio de la imagen pública basada en la opinión mediática, en la medida en que ésta incorpore sondeos y encuestas de opinión ciudadana. Partidos y gobiernos buscan adecuar su actuación según el impacto que calculan que pueda tener en la opinión sobre ellos y acerca de los que consideran sus rivales. Si gana espacio la “democracia de opinión”, las estrategias partidistas y de gobierno se convierten en subsidiarias de la imagen pública proyectada por y a través de los medios de difusión masiva, dando paso a lo que Verón (1998) llama “democracia audiovisual”⁴¹⁰.

⁴⁰⁸ Estableciendo comisiones de investigación política en el Congreso, al mismo tiempo que utilizando tales situaciones para negociar con opacidad la evasión de la competencia de la autoridad judicial en aquellos casos en que hay probables ilícitos; no es pertinente para los fines de este estudio abundar en el detalle de tales tácticas, que incluyen el espionaje mutuo, inducir la filtración de información, tender “trampas” para acusarse mutuamente, sin evidencia concluyente, de corrupción, tráfico de influencias, utilización de recursos públicos para fines personales y partidistas, sin descontar la tradicional acusación de auspiciar y mantener, desde posiciones de gobierno y a partir de programas y recursos públicos, relaciones de clientelismo político con diversos tipos de grupo social y estratos de población, acusación que se ha hecho mutuamente todos los partidos.

⁴⁰⁹ Según Muñoz-Alonso (1999:51), desde que inició el régimen de opinión (derecho de los ciudadanos a saber y obligación de los gobernantes de informar) la prensa y el Parlamento son instituciones indispensables para hacer transparente el ejercicio del poder y que éste sea sometido a crítica y control por las diversas corrientes de opinión; la democracia mediática es una fase de la adaptación continua de la vida política a las circunstancias, afectada por las tecnologías de información que crean una trama de relaciones y comportamientos entre instituciones, medios de comunicación y ciudadanos (Ibid: 51).

⁴¹⁰ Para quien la mediatización opera a través de diversos mecanismos según el sector de la práctica social; los discursos publicitario, político, informativo, científico, resultan de condiciones diferentes de producción y de reconocimiento, específicas en cada caso y con consecuencias distintas; “Respecto del sistema político, la televisión se convierte en el sitio por excelencia de producción de acontecimientos que conciernen al funcionamiento estatal, la administración gubernamental y en especial al mecanismo básico del funcionamiento de la democracia: los procesos electorales; en consecuencia, es el lugar en que se construye el vínculo entre el ciudadano y la “polis” (Verón, 1998: 124).

La arena política del debate legislativo se torna en mero trasfondo (pasa a la parte posterior) de un debate que aparece en la televisión⁴¹¹, la radio y la prensa, pero reconstituido a partir de los imperativos de la difusión mediática, donde la crítica y la opinión desfavorable hacia los agentes políticos, en especial hacia los partidos, es un indicador del papel que desempeñan tales medios. Eso puede tener repercusiones al trastocar, en el largo plazo, el sentido de la política⁴¹², en la medida en que los partidos privilegien los costos o daños de imagen por encima del interés general.

Carey (1997) prefiere hablar de “democracia sin ciudadanos” en la que los medios conservan su centralidad, mientras que se reduce la de los partidos políticos; en tanto que Swanson (1995) argumenta que se trata de la “democracia centrada en los medios”, en un antagonismo entre, por un lado, los procedimientos fundamentales de un gobierno democrático y el marco temporal de la acción parlamentaria, basados en negociación y acuerdo a partir de intrincadas deliberaciones, cuyo proceso decisorio es intrínsecamente dilatado, más aún ante polarización partidista y, por el otro, los correspondientes al periodismo y la difusión mediática de información, basados en narrativas de acontecimientos en términos de conflicto y dramatismo, orientadas hacia la personalización y la atribución de causalidad en individuos y no en grupos, de las que derivan acciones rápidas y soluciones simplistas; como consecuencia, el periodismo mediático puede nulificar los esfuerzos encaminados hacia la negociación y presentar a los parlamentarios como ineficientes, insensibles y basados en estrategias destinadas simplemente a evitar que se decidan las acciones necesarias.

⁴¹¹ Los medios han cambiado el modo de hacer política. La televisión es el gran foro público que antes era el Parlamento. El acceso y el control de los medios son el máximo recurso estratégico. Los medios llegan a usurpar funciones propias de las instituciones constitucionales. En España, el excesivo corporativismo en la prensa es el principal obstáculo para el ejercicio del análisis crítico por parte de los medios. Los medios no representan la opinión pública, sino la de un pequeño sector minoritario. Los periodistas escriben para los políticos y éstos hablan para los periodistas (Muñoz, *Ibid.*, p. 33, 34).

⁴¹² “La política debe ser restituida incluso desde la perspectiva de la democracia más exigente y radical a sus funciones laicas de organización de los intereses particulares, de mediación de los conflictos, de garantía de la seguridad y de la tutela de las libertades civiles”. La democracia debe reconocer sus propios límites y dejar en manos de las otras esferas sociales –la cultura, el arte, la música, la amistad, el amor, la reflexión científica o incluso la fe religiosa-, la búsqueda de los fines últimos y la promoción de los valores humanos tanto individuales como colectivos” (Zolo, 1992: 208)

Por lo que se ha visto las prácticas políticas tienen como referentes inmediatos, en la realidad, a otras organizaciones intermediarias de socialización, distintas de partidos políticos y medios de comunicación, tales como la familia, la escuela, el trabajo y la convivencia comunitaria cotidiana; así como que los legisladores y los partidos políticos no tienen incentivos para actuar como promotores de prácticas democráticas ciudadanas, de cara al escrutinio público mediático al que se ven inevitable y cotidianamente expuestos.

La tesis expuesta hasta aquí se puede resumir en que a partir de la premisa de que coexisten distintas formas y condiciones de interacción, y que las fronteras entre los ámbitos en que ella tiene lugar (económico, político y cultural) se manifiestan difusos, es posible distinguir lo que denomino circuitos de comunicación y redes de asociación característicos de cada ámbito, así como procesos de mediación que orientan el comportamiento individual y colectivo, pero que necesariamente dependen de la posición, trayectoria y distribución de poder económico, político y cultural entre los sujetos sociales. Al identificar sus atributos o propiedades, en ciertos contextos socio-históricos, es posible inferir válidamente las lógicas de funcionamiento y los códigos de comportamiento socializado en cada uno de ellos, bajo el supuesto que las interacciones se superponen entre diversos ámbitos relacionales y circuitos o redes y que es prácticamente imposible sustraerse a la exposición y el contacto con ellos.

La naturaleza simbólica es objeto y resultado de múltiples mediaciones en el ámbito social o público, por lo que puede suponerse que será en la intersección entre interacciones políticas institucionales, reguladas coactivamente, e interacciones comunicativas mediáticas, reguladas culturalmente, que se produce la mediatización de la política. El ámbito público político es por tanto la intersección de interacciones institucionales producidas en ciertos contextos social, espacial y temporal. Al participarse en el ámbito público, las estrategias pueden agruparse en expresión, debate y persuasión, tipos más generales de pautas de estructuración de la producción, circulación e intercambio cultural y político, mismas que los medios utilizan para establecer la modalidad de contenidos y la forma de interacción del público con ellos. Una pauta corresponde a una interlocución sustitutiva y por tanto

persuasiva, otra a la expresiva o testimonial y otra distinta es la *cuasi-interacción* “escenificada” o “espectacularizada” de la que este estudio se ocupa en demostrar.

A partir de ella, el escrutinio público mediático encuentra un “caldo de cultivo” inmejorable para convertir a los legisladores federales en su principal objetivo, en el hecho de que apenas uno de cada cuatro ciudadanos está de acuerdo con la manera en que trabajan los diputados, que apenas el 6% cree los partidos y legisladores representan efectivamente los intereses ciudadanos, pero cinco veces más que esa proporción se considera mejor representado por el Presidente de la República, y los legisladores en ese aspecto son rebasados por los presidentes municipales y jefes delegacionales (16.2%) y los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno del DF (15%), aunque en cualquier caso ninguno de esos gobernantes electos representa adecuadamente los intereses de los ciudadanos al decir de éstos (18%). Es claro que las instituciones democráticas en abstracto, es decir en tanto que representaciones simbólicas ideológicas de la democracia, son valoradas en mayor medida como relevantes (60%) y necesarias (55%), en contraste con la valoración de los agentes políticos que las integran y dirigen⁴¹³.

El fenómeno de mediatización de la política se inscribe en una tendencia a nivel mundial por la cual, ante la liberalización regulatoria de las políticas estatales, conduce a la consolidación de sistemas de medios de comunicación “mixtos”, en tanto que el desarrollo de la comunicación mediática instituye al audiovisual como escenario hegemónico por el que transcurre la visibilidad pública, la información y la opinión y la representación simbólica de la vida política, más accesible y al alcance de la mayor parte de los ciudadanos menos informados y políticamente sofisticados⁴¹⁴. Eso impone

⁴¹³ De acuerdo con los datos de la encuesta nacional ya referida, véase CESOP (2008).

⁴¹⁴ La tendencia a la desregulación de los sistemas públicos de comunicación y el aumento de la competencia entre operadores tienen consecuencias en las maneras en que se produce la información y la opinión periodística. Al moderar la agenda pública atendiendo a la lógica económica del beneficio y a la adscripción a unos u otros grupos de poder económico y político, los medios de comunicación imponen ciertos filtros y en consecuencia ciertos enfoques en la construcción cognitiva y social de la realidad representada en lo difundido. Por otro lado, la apatía y débil credibilidad de los ciudadanos hacia la actividad política y gubernamental lleva a los operadores a supeditar la producción discursiva de información y opinión en términos del atractivo que atribuyen pueda representar para los ciudadanos, a partir de recursos expresivos que permitan captar la atención y mantener el interés, constantemente interpelados por estímulos y objetos de otros ámbitos del “mundo de la vida”. Ni aún los medios

a los agentes políticos, en especial a los legisladores, adecuar la actividad política, incluida la actividad parlamentaria, a las exigencias del lenguaje, el formato y el estilo de expresividad característico de los medios de comunicación electrónica, si es que aspiran a ser visibles incluso a la escala de cobertura local.

Una de las consecuencias, en términos del alcance, de la gestión de la visibilidad pública a través de la visibilidad mediática, en el contexto de las sociedades democráticas liberales, consiste en que al no estar ésta última suficientemente regulada jurídicamente, queda a expensas de intereses económicos y políticos de facto y coyuntura, a partir de los cuales se ostenta un interés público, distinto del que los legisladores podrían hacer valer con la fuerza de la legitimidad⁴¹⁵ de adecuar las leyes y las políticas públicas conforme a un proyecto al servicio de ciudadanos, no solamente de consumidores de entretenimiento⁴¹⁶.

Desde la perspectiva del legislador no parece haber razones para encarar al poder mediático, tal como se constata en el siguiente capítulo de este estudio y por las razones que se exponen en el capítulo subsiguiente, ante la paradoja de imponer restricciones a la libre elección de lo que se hace circular masivamente, sin contar con el respaldo de una ciudadanía activa y una movilización consistente y articulada de la sociedad civil que exigieran someter a escrutinio público, con regularidad, al sistema mediático y que, en consecuencia, demandaran maneras alternativas de informar y circular la opinión política. En esas circunstancias, quienes aseguren estridencia, morbo, curiosidad y expectación tendrá más posibilidades de conseguir la visibilidad

públicos o estatales pueden evitar la impronta de ofrecer a los lectores, escuchas y telespectadores lo que quieren leer, oír y ver, antes que aquello que contribuiría efectivamente a entender una realidad política de antemano mediada (previamente reinterpretada por otros).

⁴¹⁵ La legitimidad de ejercicio del poder deriva del cumplimiento de las reglas prefijadas para la labor de la convención y del dictado de una constitución justa, y es más difícil de conseguir que la legitimidad del poder constituyente, (originada en el método válido o consentido por la comunidad para designar quienes lo ejercen), ya que se vincula con la praxis política y las desviaciones en que incurren los órganos del poder (Ventura, 2004: 47).

⁴¹⁶ Según argumenta Trejo, (1997: 60) hay una tendencia mundial por la cual el Congreso ha dejado de ser el espacio privilegiado de la política en tanto que ejercicio deliberativo; ese lugar ha sido ocupado ahora por los medios de comunicación masiva, debido a su poder para imponer y desbaratar agendas públicas, para erigir o condenar al olvido a personajes de toda índole, para articular o erosionar consensos, lo que les permite constituir un espacio público distinto en el que ellos mismos pueden conseguir legitimidad hacia su quehacer; ese poder es inusitado, si se le compara con mecanismos de dominación precedentes, y se multiplica en gran medida, tal como lo hacen las audiencias mediáticas.

mediática⁴¹⁷; así como quienes detentan mayor poder de influencia económica y política, podrán asegurarse cierta connivencia o contubernio en el tratamiento informativo y la opinión política circulada en medios de comunicación masiva, a partir de diversas estrategias (cabildeo y patrocinio, por ejemplo, entre otras)⁴¹⁸. En el último capítulo se demuestra de qué manera el escrutinio ciudadano ha sido mediatizado por la televisión, instituyendo el escrutinio público mediático y que a éste se ven sometidos los legisladores federales⁴¹⁹, cuyas implicaciones y consecuencias serán materia de las conclusiones. Antes, en el siguiente capítulo, es necesario considerar el entorno institucional del escrutinio ciudadano y la rendición de cuentas, a partir de las posturas, decisiones y acciones de partidos y legisladores federales en México.

⁴¹⁷ Trejo (1997: 28) argumenta que los representantes políticos producen mensajes cuyo referentes son, por regla general, aspectos propositivos de la acción política desempeñada o por desempeñar; pero los medios privilegian, en cambio, el escándalo y la estridencia, por encima de información suficiente y veraz o que aclare hechos y tranquilice al ciudadano, porque eso reporta mayor valor en términos de la competencia por las audiencias.

⁴¹⁸ Una consecuencia de la mediatización de la política democrática consiste en que las agencias de comunicación de las instituciones públicas modifican su comportamiento para adaptarse a los reclamos que impone la difusión mediática o que se hacen circular en ella. Por una parte, tienden a distribuir de manera desigual la información institucional como una forma de control de la actividad periodística (algo estudiado por Humphreys, 1996, para el caso de Europa). Por otra parte, aplican técnicas propias de la gestión de relaciones públicas a la difusión de información de la que están encargadas, aprovechando las orientaciones políticas del discurso de cada medio.

⁴¹⁹ En ausencia de control por parte del Estado, se produce un entorno mediático que no favorece una cultura política democrática, al no disponer los ciudadanos de información suficiente y relevante y de opinión plural y crítica, recursos que tampoco la televisión y la radio de propiedad estatales proveen por encontrarse situados ante el dilema de calidad de los contenidos o conseguir audiencias suficientes para asegurar su operación financiera sin subsidio y, por tanto, control estatal.

CAPÍTULO 4.-LEGISLADORES, ESCRUTINIO PÚBLICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Tal como se ha visto, para conseguir legitimidad, todo acto de gobierno debe ser informado a los gobernados y quienes gobiernan deben rendir cuenta de su actuación. En los regímenes democráticos, el acceso a la información acerca de los actos del Estado es un derecho político fundamental, puesto que aquella es un recurso indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer el escrutinio del desempeño de los gobernantes electos y los funcionarios designados, así como participar en el debate público, por sí y por medio de grupos, acerca de las implicaciones y consecuencias de tales actos. Al ser instituido como derecho humano fundamental en la legislación⁴²⁰, la información que producen y proporcionen las instituciones gubernamentales es, en consecuencia, un bien público que puede disponerse sin restricciones y la publicidad de la misma constituye para aquellas una obligación.

En los hechos, la distribución de la información pública gubernamental es asimétrica y el acceso a ella es desigual en el conjunto de la sociedad, no obstante que las instituciones estatales están impelidas formalmente para procurar que no sea así; eso se debe a que la disponibilidad no depende solamente de la norma y su cumplimiento⁴²¹, sino de la posición que guardan y de la trayectoria que siguen los sujetos sociales con respecto a la estructura de poder y, en consecuencia, del resultado con que sean dirimidos los intereses en pugna, en cada momento, en torno a la disposición y disponibilidad de aquella.

Tanto la publicidad de los actos de gobierno y la rendición de cuentas, como el ejercicio del derecho ciudadano para acceder a la información gubernamental, comprometen acciones institucionales de comunicación pública. Ésta cumple una función fundamental y se convierte en una tarea también sujeta a disputa y escrutinio.

⁴²⁰ En 1946, la resolución 59 (1) de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, establece que “la libertad de información es un derecho humano fundamental y la piedra angular de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas”. El derecho a la información es en sí mismo un derecho, equivalente a conocer, entre otras cosas, los derechos humanos, sociales y políticos, cual resulta necesario a persona para ejercitarlos, respetarlos y hacerlo valer, es decir para validar su vigencia por consentimiento. México ha suscrito el tratado internacional correspondiente.

⁴²¹ Es decir, la manera en que se acceda a ella es otro asunto, cuya explicación no se circunscribe ni satisface por el cumplimiento o incumplimiento de la ley.

Esa consideración no es marginal, comporta consecuencias en el ejercicio del escrutinio y de la rendición de cuentas y, por tanto, en su alcance y restricciones en cuanto al consentimiento y la responsabilidad posibles. No es lugar aquí para argumentarlo; basta con tener a la vista la diferencia entre difusión o transmisión y comunicación, y que informar o informarse no implica comunicarse. Eso pone de relieve la interlocución entre gobernantes electos y ciudadanos y, en el caso de este estudio, la cuestión de si la difusión de información relativa al Congreso y los legisladores contribuye a la rendición de cuentas y el escrutinio público en México.

Aquí se pone en juego otra convención cultural y pauta simbólica de índole ideológica, por las cuales la comunicación social es asimilada, en general, a la difusión o puesta en circulación, por medios diversos, de información de interés público; en el caso del gobierno, dirigida a dar a conocer políticas, programas, servicios e iniciativas legales. Pero a partir de la observación hecha, es claro que la difusión no es una condición suficiente para la realización de las prácticas del escrutinio ciudadano y la rendición de cuentas, que descansan en procesos comunicativos dialógicos para cobrar sentido, en especial al margen de procesos electorales. En tanto que proveedor de bienes públicos y servicios colectivos, por ejemplo, el Estado puede hacer publicidad de esa provisión; pero en el cometido de enterar a ciudadanos y población en general, es difícil evitar fines persuasivos y para aquellos también lo será distinguir entre información y propaganda, ésta última puede prestar servicio a la obligación de rendición cuentas, pero no necesariamente como insumo para el ejercicio del escrutinio ciudadano⁴²².

Al ser la institución estatal encargada de vigilar el funcionamiento de las otras, así como de asegurar la prevalencia del interés público y establecer responsabilidades y sanciones, el Congreso es el principal ámbito, destinatario y vehículo de la rendición de cuentas y su quehacer cotidiano está colmado de actos de esa índole; es en ese

⁴²² Un problema relativo a la propaganda gubernamental consiste en que ella sea producida y orientada a la promoción personalizada del titular de la institución, en lugar de centrada en ésta, de tal manera que el mensaje apela a una evaluación favorable del desempeño de aquel; esa personalización lo coloca en el umbral de la propaganda electoral. No obstante la dificultad para hacerlo, para muchos es claro que distinguir entre ambos tipos de propaganda es fundamental para deslindar la responsabilidad acerca de aquello que es legalmente válido y políticamente legítimo en una democracia representativa; en México, en el contexto actual, es debatido de qué manera confinar esa segunda modalidad de propaganda estrictamente a la efectuación de campañas electorales.

sentido una fuente de información y a la que se remite el escrutinio público; los legisladores federales disponen de información relevante, para la toma de decisiones sobre los asuntos colectivos y para ejercer, por los ciudadanos, la vigilancia del Estado y, por tanto, su desempeño incluye dar cuenta a ellos de esa función.

En lo que sigue se analiza, según los fines de este estudio, el comportamiento de los legisladores, en el ámbito de su responsabilidad, respecto al acceso a la información pública, la rendición de cuentas y a la regulación del régimen de medios de comunicación masiva, aspectos que permiten entender el alcance y restricciones del escrutinio ciudadano y público al que aquellos pueden ser sometidos.

Las decisiones que se abren paso en las Cámaras del Congreso tienen un impacto directo, que puede ser decisivo, para establecer la agenda de asuntos y orientar la discusión pública de los eventos de rendición de cuentas, con independencia incluso de las acciones institucionales para cumplir con las obligaciones del órgano y sus titulares. El principal sujeto de vigilancia es el Ejecutivo federal, titular de la administración pública federal y los órganos autónomos constitucionales, y el principal recurso político utilizado es la comparecencia de sus titulares, lo cual es objeto de disputas, sometido a discusión y puede originar confrontaciones entre grupos parlamentarios. Es difícil para las Cámaras y grupos parlamentarios ejercer algún control, sin embargo, respecto de aquellos eventos de escrutinio público que son inducidos con fines partidistas tácticos, tal como movilizaciones de inconformidad o protestas, los que transcurren al margen de partidos, que devienen de situaciones contingentes, tal como denuncias de corrupción y escándalos políticos, o bien que derivan de una corriente de opinión que cobra resonancia al ser auspiciada en distintos medios de comunicación masiva, en especial si transcurre a través de la televisión.

De entre todos los mecanismos de vigilancia del desempeño gubernamental, así como de la correspondiente publicitación institucional que de ellos deriva, destacan dos por cuanto ponen a disposición de los ciudadanos información pública relevante para ejercitar el escrutinio ciudadano, en el nivel federal de gobierno. Por un lado, el análisis de la Cuenta Pública, que da cuenta del destino, aplicación y ejercicio de los

recursos públicos federales, correspondiente a cada Presupuesto de Egresos, que discute y aprueba exclusivamente la Cámara de Diputados. Por otro lado, el informe presidencial, que da cuenta ante ambas Cámaras del estado que guarda el hacer gubernamental en cada año, y que es sometido a cuestionamientos parlamentarios⁴²³, mismos que son ocasión para conocer la evaluación crítica y las propuestas que los legisladores y partidos hacen a la manera en que deciden y se desempeñan el Presidente de la República y los funcionarios de la administración pública federal que designa; también los órganos autónomos constitucionales presentan informes anuales.

Es claro que, en la perspectiva de este estudio, sin embargo, debe tenerse en cuenta la dimensión de la información correspondiente y la complejidad técnica y política de la misma, por cuanto ello pone de relieve las competencias requeridas en los ciudadanos para procesarla, analizarla y elaborar su propia opinión respecto de ella. Por eso se justifica revisar los avances y las limitaciones en cuanto a la transparencia gubernamental y el acceso a la información pública a disposición de los ciudadanos, en lo que corresponde al poder legislativo federal en México⁴²⁴.

Facilitar la disposición de información relevante y oportuna, acerca del funcionamiento gubernamental, es una condición para favorecer, en los hechos, la práctica del escrutinio público por parte de los ciudadanos. Al respecto, el principal problema reside en la calidad y presentación de la misma, en términos de facilitar su aprovechamiento con miras a formarse un juicio, debidamente sustentado, acerca de la legalidad y eficiencia con que se desempeñan los responsables de gobernar, es decir

⁴²³ A partir de 2007 se regula mediante acuerdos legislativos la figura de “pregunta parlamentaria”, ante el cambio en el formato del informe presidencial que indujeron las oposiciones al partido del Presidente de la República, que justificaron con el objetivo de erradicar el carácter ritualista que atribuían a su presentación en persona en sesión solemne; actualmente aquella figura es regulada por el Reglamento respectivo de cada Cámara del Congreso, ambos aprobados a finales de 2010.

⁴²⁴ El acceso a la información que genera la Cámara de Diputados está regulado por la Ley Orgánica del Congreso y su propio Reglamento en materia de transparencia y acceso a la información pública; el primero fue expedido el 12 de mayo de 2003 y derogado al aprobarse uno nuevo el 6 de abril de 2009, para seguir guardando la debida congruencia con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y debido a la expedición de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en 2009, por lo que la Cámara expidió, en aquella misma fecha, el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados; en el más reciente Reglamento de la Cámara, expedido en diciembre de 2010, se establecen también disposiciones en materia publicidad del trabajo legislativo y de rendición de cuentas, en lo que concierne a los trabajos del Pleno y de Comisiones y Comités.

de tal manera que cualquier ciudadano, con independencia del nivel de conocimiento técnico, administrativo y legal que tenga, pueda saber cómo se hacen las cosas y quién hace qué, además de qué se está haciendo y por qué en el ámbito gubernamental.

En términos teóricos, el problema remite a la calidad del régimen democrático, en cuanto al ejercicio pleno de los derechos políticos de los ciudadanos, en términos prácticos consiste en que las instituciones públicas sean capaces de proveer, con eficacia, los canales, mecanismos y procedimientos para rendir cuentas de manera adecuada, entendido este criterio como la adaptación de aquellos a las características socio-demográficas de los ciudadanos, sus diversas condiciones de vida e incluso la experiencia de aprendizaje político detectada en ellos; en este aspecto un referente es la experiencia en democracias avanzadas, cuyo mayor avance se registra en Suecia.

En la interpretación de los datos, que la indagación de los aspectos señalados arrojó, se tuvo en cuenta las condiciones del contexto que, en México, se caracterizaron por un clima político propicio para impulsar medidas que favorecieran la rendición de cuentas y el escrutinio ciudadano; en primer término se resume ese contexto y en seguida se revisa la postura de legisladores y partidos con relación al acceso a la información pública; luego se analiza el desempeño del Congreso federal en ese aspecto, se compara con otros órganos y se exponen las peculiaridades; en cuarto término se presenta el análisis y datos que revelan la postura de legisladores y partidos políticos con respecto a la rendición de cuentas, en contraste con, en un quinto apartado, la correspondiente a la regulación de la radio y la televisión; al final se expone los resultados de la observación de campo acerca de cómo rinden cuenta los legisladores en lo individual; lo que en conjunto permite entender cómo aquellos se implican y asumen de cara al escrutinio público, que en sus manos está regular.

4.1. Transparencia gubernamental y Acceso a la Información Pública en contexto

Con el impulso democratizador de la vida pública en México, en particular a partir de la primera alternancia partidista en la Presidencia de la República en seis décadas, se engendró un clima de opinión pública favorable a la rendición de cuentas y el combate

a la corrupción en el gobierno. El 26 de febrero de 2001 el entonces Presidente de la República suscribió un acuerdo, a través del órgano de control administrativo, con 83 organizaciones empresariales, sindicales, agropecuarias, académicas, colegios de profesionistas y partidos políticos, lo cual reflejó, aún con las reservas y limitaciones que puedan objetarse, un intento de acción institucional encaminada a involucrar a la sociedad civil en la tarea colectiva de combatir la corrupción en México.

La iniciativa no es, sin embargo, un resultado neto de ese clima de opinión en el país. Alentada desde los gobiernos, la convicción de que ciudadanos informados son proclives a participar y que la transparencia gubernamental favorece el pleno disfrute de los derechos humanos, respondió a presiones sociales generadas por el alto nivel de corrupción registrado en todos los países del orbe, aunque medidos con indicadores confiables y publicitados los resultados apenas durante la década de los años noventa, en mayor medida de lo que se hacía hasta entonces. A nivel internacional, la confluencia en torno a esa convicción se puso de manifiesto con la “Declaración de la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno”, suscrita en Bolivia en 2003, mismo año en que se produjo la “Declaración final del Tercer Foro Global sobre la Lucha contra la Corrupción y la Salvaguarda de la Integridad”, en Corea del Sur y en el que 95 países miembros de la ONU, incluidos todos los de América Latina con excepción de Honduras, suscribieron la “Convención Contra la Corrupción” designando el 9 de diciembre como “Día Internacional contra la Corrupción”, evento llevado a cabo en México. Aquí solo es suficiente dejar asentado que esa tendencia internacional sigue vigente y que ha dado lugar a reconocer la relación que guardan la transparencia y la rendición de cuentas con la participación ciudadana, en tanto que política pública y legislación, en términos de su contribución al escrutinio público⁴²⁵.

Cabe destacar que en el discurso oficial de la ONU se reconoce la tesis de que la reducción de la pobreza depende de la interrelación entre desarrollo económico,

⁴²⁵ Recientemente, en el estudio “Combatar la pobreza y la desigualdad. Cambio estructural, política social y condiciones políticas”, coordinado por el área de investigación en desarrollo social de la ONU (UNRISD) y publicado en marzo de 2011, se concluye que al hacer frente a la pobreza y desigualdad se deben aplicar políticas sociales que respeten el derecho de los ciudadanos a organizarse y oponerse a las políticas públicas como actores autónomos, así como la salvaguarda de la garantía individual para participar en una amplia gama de grupos con influencia en la definición de las políticas de desarrollo.

política social y condiciones políticas, a la par del hecho de que los procesos actuales de liberalización y globalización no han contribuido a la equidad social y el desarrollo sustentable, de ahí que las inversiones en educación, salud y protección social, para reducir la marginación en países con bajo nivel de ingreso, pueden verse favorecidas por regímenes democráticos que permitan la alternancia periódica.

En ese contexto, la evidencia indica que en México se confirmó la convicción y tendencia referidas. Puede afirmarse que mientras que se ha pasado de una casi nula a una incipiente participación política no electoral por parte de los ciudadanos, ésta ha recibido un evidente impulso con la instauración de legislación⁴²⁶ que, por primera vez, establece como obligatorio el principio de máxima publicidad posible en el funcionamiento de las instituciones estatales y del desempeño de los agentes gubernamentales. Es indicativo que ese avance sea reciente y se produzca con la primera alternancia partidista en la Presidencia, porque pone de relieve el hecho de que, en ausencia de condiciones adecuadas para su ejercicio, el escrutinio público y ciudadano son incipientes y que el aprendizaje político, a partir de la primera ley de transparencia gubernamental⁴²⁷, sea tardío, lento, diferenciado entre estratos sociales y exhiba contrastes en cuanto a avances entre el gobierno nacional y los locales⁴²⁸.

⁴²⁶ La reforma al artículo 6 de la Constitución Política del país, aprobada por el Congreso en julio de 2007, para establecer el derecho de todos los ciudadanos para acceder a la información pública del Estado, se significa, entre otras razones, porque surge desde el ámbito local de gobierno y su impulso se correspondió con la participación de grupos de la sociedad civil, investigadores y especialistas; el impulso cobró fuerza con la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a los resultados de la investigación del “caso Aguas Blancas” en Guerrero; la iniciativa nace con concepción federalista y un enfoque de descentralización política, a instancia de los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Distrito Federal, Veracruz y Zacatecas, a finales de 2006.

⁴²⁷ Conforme al artículo segundo transitorio del Decreto que expide la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Federación, los Estados y el Distrito Federal debieron haber expedido o modificado sus leyes en la materia antes del 21 de julio de 2008, los municipios con más de 70 mil habitantes y las demarcaciones del Distrito Federal dispusieron de dos años para instaurar el sistema electrónico que facilite el trámite de acceso y reduzca el costo implicado en el flujo y la reproducción de información solicitada, lo que no excluye la atención de solicitudes de manera personal o a través de otro medio (fax; correo; correo electrónico o a través de un representante).

⁴²⁸ Mayores y más rápidos en el primer caso, lentos y diferenciados entre estados y más aún municipios, sobre todo en cuanto a la fiscalización de recursos federales transferidos a ellos; la ley obliga a publicar en Internet la información gubernamental de 272 municipios con 70 mil habitantes o más, el 11.07% del total de municipios del país (2,456), según lineamientos relativos a calidad, cobertura y gráficos de evaluación, resultados y perspectivas. A julio de 2009, 1,085 municipios contaban con página oficial en Internet, aunque solamente 733 de ellos cumplían con el requisito de incluir una sección interactiva, no obstante que IFAI y Banco de México pusieron a disposición la herramienta metodológica (“Infomex”) que permite evaluar las solicitudes, quejas o denuncias y el seguimiento de la atención brindada a ellas.

A un año de creado, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública había recibido 40 mil solicitudes, lo que no tuvo precedente internacional⁴²⁹. Cuatro de cada diez solicitudes fueron presentadas por ciudadanos jóvenes, entre 25 y 35 años, seis de cada diez provinieron de residentes del Distrito Federal y estado de México y la mitad del total de personas tenían escolaridad universitaria y se dedicaban a la actividad empresarial o académica. Los medios de comunicación apenas representaron el 10% de las solicitudes presentadas, casi en igual proporción que miembros de la burocracia gubernamental (12%). Según ese organismo, la mayor parte de las solicitudes se hicieron por la vía electrónica (Internet) y aún funcionarios públicos se vieron beneficiados, al conseguir información de otra dependencia de manera más rápida.

Para los fines de este estudio importa destacar dos rasgos del sistema de acceso a la información pública gubernamental, en virtud de los cuales sería de esperar que alentara la participación: permite a los ciudadanos solicitar información sin tener que acreditar plenamente la identidad personal (es suficiente con dar el nombre) y declarar interés jurídico (justificar o explicar los móviles) para que sea procedente, porque al centrarse la política pública en la clasificación de información y no en aquello que motiva su solicitud, lo que evita intimidación, se pone de relieve el reconocimiento de la desconfianza que impera entre la ciudadanía en relación con la autoridad⁴³⁰.

No puede pasar inadvertido que la acción de requerir información pública implica contar con información mínima precedente, empezando por el hecho de que existe la vía institucional para hacerlo, de manera libre, gratuita y sin mediar un interés jurídico. Pero el hecho de involucrarse en la tarea de la gestión y procesamiento de la información en su caso recibida, supone necesariamente activar las operaciones mínimas que pueden dar lugar a un ejercicio de escrutinio ciudadano. Aquí la cuestión relevante es la facilidad para el trámite y la calidad de la información brindada.

⁴²⁹ En Canadá les llevó 20 veinte años llegar a reunir en un año la mitad de ese número de solicitudes.

⁴³⁰ A nivel local no parece operar el primer criterio, puesto que en algunos estados el solicitante está obligado a presentar identificación o a expresar interés jurídico; en términos proporcionales se registra un menor número de solicitudes que a nivel federal. Entrevista a Comisionado en funciones del IFAI a casi un año de creado el IFAI, véase A. Mena. "El IFAI: Transparencia, acceso a la información y corrupción", en *Bien Común*, (10), (114), México: Fundación Preciado A. C., junio de 2004, pp. 26-33.

De conformidad con la ley en materia de las obligaciones de las entidades públicas para operar sin opacidad y brindar la información que de su quehacer sea requerida por parte de los ciudadanos⁴³¹, el criterio que debe regir al juzgador (poder judicial) al interpretar dicha ley, consiste en privilegiar la “máxima publicidad posible”⁴³², lo que al ser expedida, en 2002, obligaba a 250 dependencias de la administración pública federal a proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información, mediante procedimientos sencillos y expeditos y a favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados, dos de los seis objetivos que se establecen en esa ley⁴³³. El órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la misma es un “órgano constitucional autónomo” y los límites del acceso y de la publicidad son la información clasificada por cada órgano obligado como “reservada” y los datos personales que éste posea⁴³⁴.

Ahora bien, considerando las solicitudes de información presentadas ante dicho órgano, que según la Ley competen atender a la administración pública federal, a partir de su creación (2003) y hasta 2010, se observa que:

A. La mayor parte de los ciudadanos no han manifestado tener interés, necesidad o curiosidad por solicitar información pública en poder del gobierno: han sido presentadas un total de 609,967 solicitudes.

⁴³¹ Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente a partir del 11 de junio de 2002, reformada en tres ocasiones hasta la fecha; la reforma del 11 de octubre de 2006 destaca porque se enfatiza que se trata de dar la “máxima” publicidad posible y se hace valer los órganos autónomos constitucionales y los poderes Judicial y Legislativo, éstos últimos facultados para emitir, en el ámbito de su competencia, sus propias normas reglamentarias aunque deban guardar la debida congruencia y concordancia con aquella ley; así como se establece que el derecho de acceso a la información pública se interpretará conforme a la Constitución del país; la *Declaración Universal de los Derechos Humanos*; el *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*; la *Convención Americana sobre Derechos Humanos*; la *Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer*, y tratados internacionales que suscriba y ratifique el Estado mexicano.

⁴³² En virtud de lo cual los únicos límites son la información reservada y los datos personales de particulares en posesión de organismos de gobierno; la vigencia de la primera excepción es de 12 años a partir de la clasificación de la información correspondiente por parte del sujeto obligado.

⁴³³ Los otros objetivos son: transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados (fracción II); garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados (fracción III); mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos (fracción V) y contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho (fracción VI), del artículo 4 de la LFTAIPG.

⁴³⁴ Con la expedición de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que entró en vigor el 6 de julio de 2010, fue reformada la Ley vigente para guardar congruencia entre ambas en cuanto a ese nuevo objeto de regulación jurídica, de modo que a la denominación de esa ley y del IFAI se agregó la leyenda “y Protección de Datos”.

B. No obstante, se registra un crecimiento progresivo de solicitudes presentadas, que pasaron de 57,389.6⁴³⁵ en 2003 a 120,228 en 2010, tendencia más acentuada entre 2007 y 2010, cuyo acumulado (437,798) equivale a una vez y media más el correspondiente a entre 2003 y 2006 (172,169).

C. Predomina la preferencia por utilizar la vía electrónica de Internet (impersonal aunque cómoda o a la mano) sobre otras vías (interlocución personal, presentación impresa en ventanilla, por correo postal o fax telefónico): del total de solicitantes, el 94.77% se prefirió la primera de 2003 a 2006 y el 97.13% de 2007 a 2010.

D. El pago que el solicitante hace al IFAI por concepto de la reproducción impresa de la respuesta dada por el organismo al solicitante, no es un factor que desaliente la acción del ciudadano: la falta de pago apenas representa el 8.87% del total de las solicitudes que se dieron por concluidas (64,071) entre 2003 y 2010, incluidas aquellas para las cuales no hubo respuesta al requerimiento de información adicional (58,389).

E. La mayor parte de ciudadanos (91.13%) se dieron por satisfechos con la respuesta o bien decidieron no enviar o presentar información adicional, requerida por la entidad pública correspondiente o por IFAI, para dar o ampliar la respuesta o continuar la atención a la solicitud.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA, RESPUESTAS, CONSULTAS Y RECURSOS PRESENTADOS AL IFAI, MÉXICO: AL 16 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	2003-2006	2007	2008	2009	2010	TOTAL
Solicitudes electrónicas	163,156	92,261	102,297	114,179	116,473	588,366
Solicitudes manuales	9,013	2,462	2,953	3,418	3,755	21,601
Total de solicitudes	172,169	94,723	105,250	117,597	120,228	609,967
Respuestas electrónicas	145,417	81,439	89,092	97,642	102,797	516,387
Respuestas manuales	7,668	1,948	2,328	2,880	3,238	18,062
Total de respuestas	153,085	83,387	91,420	100,522	106,035	534,449
Solicitudes concluidas por falta de respuesta (3)	12,358	8,224	10,541	14,622	12,644	58,389
Solicitudes concluidas por falta de pago (4)	1,527	883	1,139	1,103	1,030	5,682
Total Concluidas (5)	13,885	9,107	11,680	15,725	13,674	64,071
Consultas al Portal	nd	4,966,618	13,978,771	9,525,069	7,915,620	36,386,078
Recursos interpuestos	8,238	4,864	6,056	6,038	8,151	33,344

(1) Término utilizado por IFAI, se refiere a presentación en persona en ventanilla.

(2) Por falta de respuesta al requerimiento de información adicional y falta pago del costo de reproducción de la inf.

(3) Al requerimiento de información adicional.

(4) De los costos de reproducción de la información.

(5) Se considera consulta el solo hecho de ingresar a la fracción, en las correspondientes a I, V y XVII del artículo 7 de la Ley en la materia; en el resto de las fracciones se registra como consulta hasta el momento en que se accede al detalle de los resultados encontrados en la búsqueda general.

Fuente: adaptado de su presentación en "Estadísticas", IFAI, México, pág. 9 de 53, <http://www.ifai.gob.mx/Estadisticas/#estadisticas>, consulta: 27 de enero de 2011.

⁴³⁵ Para los años 2003, 2004, 2005 y 2006 se calculó el promedio, ya que el IFAI presenta el acumulado de esos cuatro años, véase "Solicitudes recibidas", Respuestas, Consultas al Portal de Obligaciones de Transparencia y Recursos presentados al 16/12/2010", Portal del IFAI en Internet.

4.2. Legisladores ante la transparencia gubernamental y el derecho a la información

La presentación de iniciativas legislativas y el hecho de que prosperen o no son indicativos de las disposiciones de los legisladores hacia el asunto, por lo que toca a la responsabilidad política, con independencia de la responsabilidad institucional, tomando en cuenta que la eficiencia legislativa se mide por la adecuación de las leyes vigentes, no solamente por crear nuevas leyes, lo cual es aquí el caso. Considerar lo que ha sido presentado, discutido y aprobado a favor de fortalecer el acceso a la información gubernamental y facilitar la rendición de cuentas, puede ser evaluado en términos de si contribuye o no a favorecer la práctica del escrutinio ciudadano.

La investigación al respecto reveló que: a) el asunto va cobrando relieve si bien no ha tenido un lugar central en la agenda de los partidos; b) en las iniciativas presentadas predomina un enfoque centrado en el ciudadano en tanto que agente particular, con interés económico y, por tanto, en la eficiencia de gestiones administrativas; c) no obstante, el escrutinio público se ve favorecido indirectamente, en áreas, decisiones y actividades más opacas de cara a los ciudadanos en general, en los casos de iniciativas con mayor posibilidad de prosperar, por el estado que guardan en cuanto al proceso legislativo hasta esa fecha. Se trata de dos minutas con proyecto de decreto⁴³⁶, ambas aprobadas por la Cámara de Senadores y enviadas a la Cámara de Diputados para su revisión, discusión y aprobación, en abril y octubre de 2010; en el primer caso se busca dar a la rendición de cuentas una orientación hacia los ciudadanos y promover el escrutinio público; en el segundo caso, favorecer la transparencia con que se asigna obra concesionada por parte de la administración pública federal. No debe pasar inadvertido el iniciador en cada caso, que es una señal del enfoque partidista que la respalda y, por su carácter de minuta⁴³⁷, de un cierto consenso alcanzado entre los legisladores en materia de transparencia gubernamental en esa Cámara.

⁴³⁶ Es decir iniciativas de ley o decreto que han recibido aprobación en alguna de las Cámaras del Congreso federal y enviadas a la otra (colegisladora) para su discusión y en su caso aprobación, teniendo en cuenta que la aprobación de las leyes en México puede estar sujeta a doble revisión y observaciones por parte del Poder Ejecutivo, que junto con las legislaturas de las entidades federativas, son los únicos órganos con facultad para presentar iniciativas.

⁴³⁷ Una minuta es un proyecto de decreto aprobado por alguna de las Cámaras del Congreso que pasa a la otra para su revisión, discusión y votación, si es aprobada en ella se convierte en decreto o ley.

El primer caso corresponde al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aprobado el 28 de abril de 2010 por 88 votos a favor, partir del dictamen respecto de dos iniciativas presentadas ante el Senado, una de ellas por un integrantes del PRD el 5 de febrero de 2009 y la otra por dos del PRI el 19 de noviembre de 2009. La minuta de ley fue enviada a la Cámara de Diputados, presentada en la sesión del 29 de abril de 2010 y turnada para dictamen a comisiones unidas de Gobernación, Función Pública y de Justicia. Mediante dicho proyecto:

- Establece la obligación de publicar información de interés por sector gubernamental, de tal manera que sea generada respecto de materias particulares;
- Establece la llamada “transparencia focalizada”, para publicar información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas, en los respectivos sitios de internet.
- Con relación a la inexistencia de información, plantea que el Comité de Información y el IFAI cuenten con facultades para instruir que sea generado un documento, cuando ello se encuentre entre las obligaciones sustantivas del sujeto obligado, siempre que esto sea materialmente posible.
- Establece además un procedimiento denominado “prueba de interés público”, para determinar la procedencia de hacer pública información sobre particulares, cuando se presuma que ésta contribuye de manera trascendente a la transparencia gubernamental y a la rendición de cuentas.
- Introduce la prohibición para los sujetos obligados de invocar los secretos fiscal, bancario y fiduciario, cuando se encuentren involucrados recursos públicos federales.
- Amplía las facultades de verificación y regulación del IFAI, a efecto de propiciar una mejor calidad de la información que sea proporcionada al gobernado.
- Se otorga al IFAI la atribución de elaborar un programa que establezca las políticas en materia de transparencia para la Administración Pública Federal.

El segundo caso consiste en el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público Privadas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de varias leyes, aprobado el 12 de octubre de 2010 con 85 votos a favor y 8 en contra, a partir del dictamen respecto de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el 19 de noviembre de 2009. La minuta de ley fue dada a conocer al pleno de la Cámara de Diputados y presentada en la sesión del 14 de octubre de 2010 y turnada a comisiones unidas de Economía y de Función Pública, con Opinión de las de Justicia y de Presupuesto y Cuenta Pública. Mediante dicho proyecto:

— Es impulsado el esquema de asociación pública y privada, al formalizarse la posibilidad de que las entidades de la Administración Pública Federal (APF) se asocien con particulares para la prestación de servicios, incluidos aquellos en que se requiera construir infraestructura, mediante esquemas de financiamiento distintos a los contemplados en las leyes en la materia; se crea el Fondo para Inversiones y Desarrollo Tecnológico y se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para interpretar la Ley para efectos administrativos.

— Se establecen medidas para agilizar la adjudicación de contratos de obra y prestación de servicios, de largo plazo y todos sujetos a compromisos arbitrados, cuyas licitaciones podrán ser duales o mixtas.

— Se fortalece la acción expedita para proveer los inmuebles requeridos por los programas de gobierno, al permitir que las dependencias puedan recurrir a varias opciones de avalúo (no solo a la única entidad pública que los hace), suscribir la escrituración en representación de la Federación sin necesidad de pasar por el filtro de la dependencia controladora de la AFP y que puedan consultar y hacer constar por medios electrónicos que existan inmuebles federales disponibles sin ser útiles para sus propósitos, lo que agilizaría la decisión de adquisición en el mercado inmobiliario.

Aunque no sea objeto de este estudio, es claro que con el proceso de democratización en México, al romperse el cerco de la hegemonía que detentó un solo partido político, del que emanaban los titulares de los órganos de gobierno y, consecuentemente, al hacerse factible la posibilidad de alternancia partidista en ellos, cobraron relevancia las cuestiones relativas al equilibrio entre poderes públicos, los mecanismos de frenos y contrapesos entre ellos, ante condiciones políticas que hacen posible que el Congreso federal ejerza con efectividad su función de vigilancia, en nombre de los ciudadanos. Tales condiciones derivan en parte de que las reglas del proceso democrático instituidas permiten que el pluralismo político se traduzca en la composición y el funcionamiento de los órganos del Estado, cuyos titulares eligen los ciudadanos.

En ese contexto se explica que, por un lado, la adecuación y mejora de la transparencia gubernamental y de la rendición de cuentas dejaran de ocupar un lugar marginal en la agenda legislativa, tal como ocurría antes; ello se evidencia por un lado en el hecho de que, no obstante ser reconocida como vanguardista en el ámbito internacional por parte de los especialistas, apenas a una década de promulgada la Ley de Fiscalización Superior (29 de diciembre de 2000), así como de creada la Auditoría Superior de la Federación, dicha ley fuera abrogada y, en su lugar, fue promulgada una nueva (28 de mayo de 2009), la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, misma que otorga a los

criterios, mecanismos y procedimientos establecidos para la fiscalización, una orientación más congruente con la rendición de cuentas respecto de los recursos públicos federales. Por otro lado, que ambas materias de legislación han sido objeto, en los últimos dos años, de propuestas de modificación, por parte de todos los partidos políticos, mediante 55 iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados, en su mayor parte por el PRI (21), casi en igual proporción por el PAN (12) y el PRD (14), tres por el PVEM, dos por Convergencia, dos por Nueva Alianza y una por el PT, aunque todas ellas han quedado pendientes de resolución. En México, mientras que las oposiciones al partido del que emana el titular del poder ejecutivo federal se ocupen más de la rendición de cuentas por parte de éste, se muestran ineficientes al someter a ella a los ejecutivos locales, en especial en el ejercicio de recursos federales.

Para ilustrar el hecho en cuanto a la Cámara de Senadores⁴³⁸ sirva referir que los tres partidos políticos con mayor representatividad electoral han presentado alguna iniciativa en estas materias, cuyos respectivos dictámenes fueron aprobados y las minutas enviadas a la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura⁴³⁹. Más relevador aún es que, recientemente, el 19 de octubre de 2010 todos los partidos políticos hayan suscrito una misma iniciativa de modificaciones a la Ley de Planeación, dirigida a establecer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Ejecutivo federal ponga a disposición de los ciudadanos, vía Internet, la información relativa a convocatorias de los programas y proyectos de la administración pública federal y que induce acciones transversales, en materia de tecnologías de la información y comunicación, entre los sectores gubernamentales, con lo que se impulsa la consulta adecuada por parte de los ciudadanos que interactúan mediante Internet con el gobierno.

⁴³⁸ Cabe señalar que durante la LX Legislatura, el Senado aprobó, el 26 de octubre de 2006, un acuerdo por el cual cada grupo parlamentario se obliga a decidir cuáles de las iniciativas presentadas por sus integrantes durante la LVIII y LIX Legislaturas, se mantendrán vigentes y notificarlo a la Mesa Directiva de esa Cámara, que el 21 de diciembre de 2006 expidió el acuerdo que lo da a conocer públicamente.

⁴³⁹ Dos por parte de integrantes del PRI, una presentada en diciembre de 2007 para introducir la transparencia gubernamental y el acceso a la información pública en el sector educativo del gobierno y otra presentada el 19 de noviembre de 2009 por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; la presentada en febrero de 2009, por un integrante del PRD, para expedir la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y la presentada el 22 de diciembre de 2009 por una integrante del PAN para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Queda claro que, no obstante los rasgos señalados, es común a todos los partidos la inquietud por proteger a los gobernantes electos, frente al alcance de la responsabilidad pública en que pueda incurrirse en el desempeño del cargo, a la luz de las últimas iniciativas presentadas, en el curso de la LXI Legislatura, para deslindar la responsabilidad civil, penal y administrativa respecto de la responsabilidad política. Para ilustrar el hecho sirva considerar dos casos. La presentada por una diputada del PAN para reformar los artículos 25 y 29 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el propósito de hacer explícito que el servidor público inculcado únicamente será separado del encargo que desempeñe en caso de que se le decrete sujeción a proceso penal, y sólo podrá reasumirlo cuando por sentencia ejecutoria, se determine su absolución; de no ser sujeto a proceso penal, no habrá lugar a procedimiento ulterior mientras subsista el fuero. La presentada por un diputado del PRI para modificar el artículo 28 de esa misma ley tiene el mismo sentido.

La cuestión de fondo, misma que se ubica en el centro de la disputa política, radica en el alcance y efectividad que, de cara a los ciudadanos, deba darse a la responsabilidad política de los gobernantes electos y, por su conducto, de los funcionarios designados por ellos, en los diversos órganos públicos. Desde la perspectiva de contribuir al pleno ejercicio de los derechos políticos y sociales de los ciudadanos, por cuanto de ese ejercicio depende en parte el aliento de la participación política democrática, esa cuestión debiera ser evaluada en términos de los cambios que los legisladores federales y el titular del Ejecutivo federal están dispuestos a concertar.

De hecho, no debe pasar inadvertido que la Cámara de Diputados, desde el primer informe anual en materia de transparencia y acceso a la información (correspondiente al periodo 11 de junio de 2003 al 11 de junio de 2004), reconoce que subsistió una “laguna” en cuanto a la regulación del derecho a la información establecido en el artículo 6 de la Constitución Política: “misma que había impedido a los ciudadanos ejercer a plenitud dicha garantía constitucional, entre otras razones, porque el Constituyente Permanente no señaló los alcances de lo que debe entenderse por derecho a la información”. Ese reconocimiento es indicativo de que en México ese

derecho debió abrirse paso, desde su establecimiento constitucional, con obstáculos que impedían su cabal comprensión y, por tanto, aplicación, en las mismas estructuras de poder. En efecto, mediante la jurisprudencia en varios casos, ha correspondido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ampliar el concepto de ese derecho al definirlo como garantía social correlativa a la libertad de expresión, es decir en un sentido más amplio en tanto que una garantía de los derechos políticos, que fue la interpretación original dada por el Constituyente. Las intervenciones de la Corte han ejercido influencia sobre el alcance de las acciones que el Poder Legislativo debe llevar a cabo con relación a la aplicación de ese derecho. De las tesis que ha emitido en esa materia se desprende, entre otros aspectos, que el Estado debe permitir el libre flujo de ideas políticas a través de los medios de comunicación y que el derecho a la información exige “que las autoridades se abstengan de dar a la comunidad información manipulada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en una violación grave a las garantías individuales, en términos del artículo 97 constitucional”⁴⁴⁰.

Ante otros casos subsecuentes la Suprema Corte “ha ampliado la comprensión de este derecho entendiéndolo también como garantía individual limitada, como es lógico, por los intereses nacionales y los de la sociedad, así como por el respeto de los derechos de terceros”⁴⁴¹, de tal manera que de la interpretación del máximo órgano jurisdiccional se desprende que el derecho a la información es una garantía individual que tiene diversas manifestaciones, siendo una de ellas el acceso a la información pública, que debe ser asegurada por el Estado a través de una legislación específica. Esa es la justificación ofrecida, en el discurso de la propia LIX Legislatura (2003-2006), para que el Congreso procediera a expedir la norma que regula el acceso a la información pública en el ámbito de su competencia.

En congruencia con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información

⁴⁴⁰ Véase Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, novena época, tomo III, junio 1996, p. 503.

⁴⁴¹ Ibid: novena época, tomo IX, abril de 2000, p. 72.

Pública de la H. Cámara de Diputados⁴⁴² estructura la regulación a partir de tres ejes articuladores: el que corresponde a la transparencia gubernamental, que consiste en la obligación de poner a disposición de los ciudadanos, de manera permanente y sin que medie solicitud, información que permita a éstos tener un conocimiento directo de las funciones, acciones, resultados, estructura y recursos asignados⁴⁴³. Es importante hacer notar que la Cámara de Diputados otorga énfasis al medio de comunicación electrónica (Internet)⁴⁴⁴ y el tratamiento expedito de las solicitudes⁴⁴⁵. Respecto del segundo eje, relativo al derecho de los particulares de requerir información, la Cámara definió un procedimiento detallado y adaptado a las peculiares características de la información que dicho órgano genera. En cuanto al tercer eje, correspondiente a la creación de instituciones responsables de la aplicación e interpretación del acceso a la información, el Reglamento establece que la instancia operativa (“Unidad de Enlace de Acceso a la Información”) será vigilada por el Comité de Información, integrado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara y la Secretaría General.

4.3. Desempeño del Congreso: transparencia gubernamental y acceso a la información

No debe perderse de vista el hecho de que las leyes en materia de transparencia gubernamental y acceso a la información pública del Estado son recientes en todo el mundo. En México, es incipiente la investigación que permita conocer el estado que

⁴⁴² Publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 12 de mayo de 2003, derogado con la expedición del Reglamento para la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 29 de abril de 2009.

⁴⁴³ Entre otras cuestiones, acerca de los presupuestos asignados, su monto y ejecución; sueldos y prestaciones de los servidores públicos; programas operativos, trámites y servicios; marco normativo; programas de subsidios; concesiones y permisos; contrataciones públicas; información sobre la situación económica, incluidas las observaciones del órgano de fiscalización.

⁴⁴⁴ Se ha propuesto que la información referida deba estar disponible “en la mayor medida de lo posible en Internet, a efecto de asegurar su mayor difusión, (lo que) permitirá que los ciudadanos puedan evaluar de manera permanente los indicadores más importantes de la gestión pública. Adicionalmente, estas actividades reducirán los costos de operación, ya que en lugar de procesar solicitudes individuales existirá un mecanismo permanente de consulta”, Cámara de Diputados. (2004). *Informe anual en materia de Transparencia y Acceso a la Información correspondiente al periodo 12 de junio de 2003 al 11 de junio de 2004*, México: LIX Legislatura del Congreso de la Unión.

⁴⁴⁵ A diferencia del plazo de 20 días hábiles, prorrogable por igual lapso, que la Ley establece para dar respuesta a las solicitudes de información a partir de la fecha en que se hagan, la Cámara se propuso cumplir de modo más expedito, al establecer un plazo de 10 días hábiles, prorrogable por otros 10 a partir del vencimiento.

guarda la aplicación de la ley en la materia en el conjunto de los órganos federales. Apenas se desarrollan los supuestos teóricos y la metodología para la medición de “transparencia”, asunto controvertido respecto del cual hay más dudas que certezas, porque se trata de un problema de concepción, más que de elaboración de leyes (Merino, 2005: 17). Los estudios iniciales tienen un enfoque solamente jurídico y propósitos normativos (López Ayllón, 2006; Concha, López Ayllón y Tacher, 2004), o bien conciernen solamente a una dimensión específica, por ejemplo, calidad legislativa (Villanueva, 2005; Guerrero y Ramírez de Alba, 2006; Merino, 2006) o presupuestal (Guerrero y Hofbauer, 2004), de algún aspecto específico, tal como evaluación de páginas de Internet (López Ayllón, 2005) o de la calidad de las respuestas de los sujetos obligados (Cepeda y Noriega, 2005) o bien de algún índice en particular⁴⁴⁶.

4.3.1. Desempeño del Congreso y de “otros sujetos obligados” por la Ley

No obstante, a partir de un estudio pionero en su tipo⁴⁴⁷, *Transparencia y Acceso a la Información en los Otros Sujetos Obligados* (s/f)⁴⁴⁸, se disponen de elementos fiables para evaluar el comportamiento institucional del Poder Legislativo Federal. Cabe señalar que los resultados deben tomarse con reserva, por el hecho de que, por una parte, la situación real varía en el tiempo y requiere de medición sistemática en el tiempo y, por otra parte, a la fecha las Cámaras han subsanado algunas insuficiencias y deficiencias detectadas; en cualquier caso es un hecho que la instrumentación de medidas, por parte del Congreso para cumplir con las disposiciones de la ley, han sido tardías, en cuanto a su vigencia y en comparación con otros sujetos obligados.

⁴⁴⁶ Tal como el relativo a información fiscal desarrollado por la consultora *Aregional* o en materia municipal, por la Asociación de Municipios de México, así como los elaborados por diversas organizaciones no gubernamentales, tanto a nivel federal como estatal.

⁴⁴⁷ Encargado por el IFAI al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), cuyo mérito es considerar varios de los aspectos considerados, a partir de la elaboración de una metodología aún sin contar con referentes, ya que el objetivo del estudio pionero desarrollado en Canadá en 2001 es hacer recomendaciones para mejorar la ley respectiva; se identificaron elementos que contribuyan a entender los factores que inciden en la aplicación efectiva de la ley entre los diversos sujetos obligados (instituciones sujetas a sus disposiciones), definiendo variables que permitan conocer cuál ha sido el desarrollo reglamentario e institucional de la ley en tales órganos; la capacidad institucional para responder a las demanda de solicitudes de información; cómo operan los mecanismos y procedimientos de acceso y el grado de cumplimiento de las obligaciones.

⁴⁴⁸ Es decir distintos a la administración pública gubernamental de acuerdo con la Ley en la materia.

Es necesario precisar las consideraciones de orden metodológico del estudio, para hacer justicia a los matices de las conclusiones que pueden desprenderse de los resultados de las mediciones realizadas. Estas conciernen a un índice compuesto de aplicación de la ley en la materia (“implementación”: ILAI), que se integra, a partir de la fórmula propuesta, mediante el promedio simple de los indicadores elaborados; los criterios suponen un “tipo ideal” contra el cual se verifica la respuesta organizacional en un momento dado y representan una aproximación de conjunto a las diferentes dimensiones que implica la aplicación de las disposiciones de la ley; por tanto es improbable alcanzar un grado de cumplimiento pleno (100%) para cada indicador⁴⁴⁹. Otra limitación de los hallazgos concierne al tratamiento equivalente que la ley da a los sujetos obligados distintos a la administración pública federal (en adelante “otros sujetos obligados”), sin considerar la diversidad organizacional entre ellos⁴⁵⁰. Por eso fueron agrupados en categorías⁴⁵¹, para una aplicación válida comparada del índice.

Por lo que se refiere a la correspondencia entre los principios de publicidad y transparencia y el diseño institucional, la Cámara de Diputados registra un nivel significativamente bajo, a la fecha del estudio no había cumplido con la publicación de datos formales de la organización, ni incorporado todas sus unidades organizativas al esfuerzo de transparencia; de hecho registra el segundo valor más bajo de calidad institucional (CI) respecto a todos los “otros sujetos obligados”; en tanto que en la Cámara de Senadores se ha puesto mayor énfasis en aspectos de calidad institucional, aunque en detrimento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia (OT). Ambos órganos legislativos registran el tercer valor más bajo entre los otros sujetos

⁴⁴⁹ OT: página de Internet; NOR: calidad normativa; US: usuario simulado; CI: calidad institucional, cada uno con el mismo peso específico (25 %) porque no habría razones para privilegiar en la ponderación uno sobre otro, el cálculo de la correlación entre ellos permitió reconocer la multiplicidad y simultaneidad de los escenarios que arrojan las variables, al momento de interactuar unas con otras; por tanto se requerirían de varias observaciones en el tiempo para conseguir una evaluación que refleje mejor la situación real de la institución.

⁴⁵⁰ Es evidente que las peculiaridades de las funciones de los órganos legislativos, judiciales o de las universidades autónomas obligan a diseños institucionales distintos y difícilmente comparables entre sí.

⁴⁵¹ Se establecieron cinco categorías: a) sujetos obligados con específico, es decir órganos que desempeñan una función específica: BM, CNDH, IFE, ASF e INFONAVIT; b) órganos legislativos federales; c) Tribunales jurisdiccionales: SCJN, CJF y TRIFE; c) Tribunales administrativos: TFJFA, el TSA y el TFCA y Universidades: UNAM, UAM y UAUCH.

obligados, por lo que se refiere a la publicación de información en la Internet, no obstante contar con normas que permitirían reglamentar el manejo de la información.

En lo que respecta al impacto del diseño institucional en los procedimientos de acceso a la información y atención de los usuarios, el Senado tiene la ventaja de haber duplicado los esfuerzos de la Cámara de Diputados, dirigidos a incorporar la transparencia y el acceso a la información en la cultura y el diseño organizacional. En cuanto a los indicadores de calidad normativa (NOR) y de usuario simulado (US) el desempeño de las Cámaras se encuentra dentro de los parámetros promedio en relación con el resto de los otros sujetos obligados. Ambas han conseguido cierto grado de coherencia entre el marco normativo y la acción organizacional vinculada a la atención del usuario. Aún en este aspecto, el avance del Senado es ligeramente mayor que el de la Cámara de Diputados, en cuanto a aspectos dinámicos vinculados a la transparencia, no obstante que ésta última muestra esfuerzos proporcionales entre normatividad y atención al usuario solicitante de información.

DESEMPEÑO DEL CONGRESO EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA

Poder Legislativo	OT	NOR	US	CI	IAAL ponderado (promedio simple por indicador)
Cámara de Diputados	0.31	0.61	0.56	0.23	0.53
Cámara de Senadores	0.31	0.53	0.71	0.57	0.53

Fuente: tomado de IFAI (s/f), *Transparencia y Acceso a la Información en los Otros Sujetos Obligados* (s/f), estudio preparado por la División de de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México; consultado el 24 de enero de 2011 en: http://www.ifai.gob.mx/SitiosInteres/estudios#estudio_insti

Al evaluar las obligaciones de transparencia (OT) hay que tener en cuenta que, en razón de que la ley no obliga a los otros sujetos obligados a hacerlo, el hecho de que las Cámaras del Congreso publiquen su respectiva información a través de Internet resulta en un mérito, considerando que la facilidad de acceso es relevante ⁴⁵². Tal como los otros sujetos obligados, las Cámaras del Congreso están facultadas para desarrollar su propio marco regulatorio, a partir del criterio general establecido en la ley en la materia, en los hechos ha ocurrido como un proceso de adaptación, mediante

⁴⁵² Al no ser considerada en la ley la especificidad organizativa y de funcionamiento de cada órgano, con relación al tipo de información generada y, por tanto, los requerimientos de su presentación y publicación, ésta variable del índice no puede ser ponderada.

acuerdos y reglamentos, a la especificidad de las funciones que desempeñan y al tipo y periodicidad de la información que generan. Aunque todos los otros sujetos obligados han cumplido, la calidad de la información que han publicitado es variable⁴⁵³.

Cabe señalar que la eficacia de los procedimientos de acceso a la información resulta clave al medir el comportamiento global (ILAI); en el estudio referido su magnitud fue medida a partir de los resultados que arrojó la consulta a solicitantes reales mediante usuarios simulados (US), observándose la consecución de respuesta en tiempo y forma, calidad del servicio y facilidades otorgadas para formular la solicitud⁴⁵⁴. Por su parte, la calidad institucional fue medida con base en un indicador (CI) que incorporó cuatro conjuntos de variables⁴⁵⁵, observadas mediante la aplicación de un cuestionario a la institución y entrevista en profundidad a responsables operativos en cada órgano.

Se observó que las condiciones del acceso parecen determinar en gran medida la demanda de solicitudes y éstas, a su vez, el grado de adaptación de la transparencia en la organización; eso es especialmente válido en el caso de la Auditoría Superior de la Federación⁴⁵⁶, órgano autónomo encargado de la función de fiscalización y preparar el informe de la Cuenta Pública para su discusión y aprobación en el Congreso federal. Al ser comparado el desempeño entre “otros sujetos obligados”, a partir del valor promedio de cada grupo de ellos, el estudio referido arrojó que los tribunales jurisdiccionales consiguieron un mayor valor para cada indicador, seguido por los organismos con objetivo específico (OBE), con un comportamiento de conjunto similar

⁴⁵³ La calidad regulatoria (NOR) refleja la importancia relativa otorgada a la transparencia y el acceso a la información mediante un desarrollo normativo apropiado; pero la escala no es de 0 a 1, sino de 0 a 0.5.

⁴⁵⁴ Indicador elaborado con base en 20 variables en tres grupos: uno correspondió al formato electrónico para la presentación de la solicitud; otro al procedimiento de envío y de seguimiento de la solicitud y otro para evaluar la calidad de la respuesta otorgada, en función del tiempo y el formato de la misma; la respuesta negativa no fue penalizada por sí misma, sino cuando no estaba debidamente fundada y motivada; no se incluyó la interposición de recurso de revisión para las respuestas negativas, porque hubiera dilatado el estudio y porque en la mayor parte de los casos las respuestas fueron positivas.

⁴⁵⁵ A) el diseño de la unidad de enlace; b) el diseño del comité de información; c) diseño de la instancia última de decisión y d) el nivel con que los valores de transparencia y acceso a la información tienen en la cultura organizacional de la institución.

⁴⁵⁶ Dotado de autonomía técnica y de gestión respecto de los poderes públicos funcionalmente responde ante la Cámara de Diputados, facultada para ejercer la función de vigilancia del Estado exclusivamente fiscalizadoras fue considerado como un órgano con un objeto específico, distinto al Congreso.

si bien con magnitudes menores (US); los sectores restantes muestra un comportamiento más irregular: mientras las universidades superan a los tribunales administrativos y a los órganos legislativos respecto a las obligaciones de transparencia publicadas en sus páginas de internet (OT) y su marco normativo (NOR), los órganos legislativos registran un mayor valor en el indicador usuario simulado (US) respecto a las universidades y los tribunales administrativos, en tanto que éstos últimos superan en materia de calidad institucional (CI) a universidades y órganos legislativos.

Aunque se observa comportamientos similares en cuanto a las dimensiones de transparencia gubernamental consideradas, el mejor nivel de desempeño global corresponde a los tribunales jurisdiccionales, seguidos por el sector de organismos con objeto específico⁴⁵⁷ y significativamente superior a los demás sectores; los resultados son más similares entre universidades y organismos legislativos y los tribunales administrativos quedan rezagados, a partir del índice ponderado (promedio simple de cada indicador para cada uno de los sectores gubernamentales).

**MÉXICO: DESEMPEÑO COMPARADO ENTRE “OTROS SUJETOS OBLIGADOS”
INDICE COMPUESTO (ILAI) PONDERADO POR SECTOR GUBERNAMENTAL**

SECTOR	ILAI Ponderado por Sector (promedio simple)
Tribunales Jurisdiccionales	0.71
Órganos con objeto específico	0.65
Universidades autónomas	0.50
Órganos Legislativos	0.48
Tribunales Agrarios	0.43

Fuente: tomado de IFAI (s/f), *Transparencia y Acceso a la Información en los Otros Sujetos Obligados* (s/f), estudio preparado por la División de de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México; consultado en versión electrónica el 24 de enero de 2011 en: http://www.ifai.gob.mx/SitiosInteres/estudios#estudio_insti

En lo que corresponde al impacto de los principios de publicidad y transparencia en el diseño institucional, los órganos legislativos obtuvieron los menores valores, tanto en materia de calidad institucional como de publicación de obligaciones en Internet. Por lo que se refiere a la integración formal de tales principios en el marco normativo, una peculiaridad de los órganos legislativos consiste en que aunque se comportan, en

⁴⁵⁷ En este sector se reúne a cinco organismos: Auditoría Superior de la Federación (ASF), Banco de México (BM), Instituto Federal Electoral (IFE), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

cuanto al índice de normatividad, de modo semejante que el sector de universidades y mejor que el de tribunales administrativos, su desempeño es menor a éstos significativamente en cuanto al indicador del cumplimiento de obligaciones de transparencia, lo cual indica que otros factores inciden en la publicación de información vía Internet y que habrá que matizar la relación entre ambas variables. En cuanto al impacto del marco normativo en la calidad institucional, tribunales administrativos, órganos legislativos y universidades muestran rezagos similares⁴⁵⁸.

Dados los dos mecanismos de acceso a la información pública, publicar cierta información en la respectiva página de Internet y proporcionarla al mediar alguna solicitud, el comportamiento puede ser medido en cuanto a la calidad de la información publicada (OT) y la eficacia en la atención de solicitudes presentadas (US), respectivamente; y su correlación indicaría en conjunto la capacidad y orientación del organismo respecto del acceso a la información. En comparación con los otros sectores gubernamentales, se observa que los órganos legislativos presentan la mayor diferencia entre ambos indicadores (hasta 33 puntos de diferencia, OT= 0.31 y US= 0.64), lo cual indica que no han conseguido la suficiente congruencia para asegurar el acceso a partir de las dos vías señaladas: han puesto énfasis en el acceso vía solicitudes y descuidado la información que publican en sus páginas de Internet. Aún así obtienen valores superiores a las universidades y a los tribunales administrativos, que tienen los valores más bajos en ambos indicadores.

Por otra parte, el impacto del diseño institucional en el acceso a la información se mide a partir de la organización y funcionamiento de las unidades de enlace, comités de información y órganos de última instancia, así como de la cultura organizacional enfocada a la transparencia (indicadores US y CI); lo óptimo aquí sería combinar un enfoque centrado en el usuario con un diseño adecuado de sus instancias operativas; al respecto, ese el caso de los tribunales jurisdiccionales que registraron el mejor comportamiento, seguidos por los órganos de objeto específico, los cuales han

⁴⁵⁸ Lo cual puede apuntar al requerimiento de modificar el marco normativo para adaptarlo mejor a las circunstancias específicas de cada órgano; de ese modo se conseguiría un mayor impacto en la calidad del diseño institucional y, por tanto, en las capacidades institucionales para cumplir con la ley; del diseño dependen los esfuerzos para generar condiciones favorables para proyectar la transparencia.

desarrollado múltiples recursos organizacionales a favor del usuario, aunque un insuficiente grado de “transparencia” (entendido como esfuerzo integral de calidad organizacional y de atención a las necesidades del contexto). Las universidades y los órganos legislativos muestran comportamientos muy similares entre sí, con un menor grado de internalización de la transparencia en el diseño de sus unidades decisorias y en su cultura organizacional (“calidad dinámica de la transparencia”) que el registrado por tribunales jurisdiccionales y órganos con objeto específico.

Con base en el estudio referido, para los fines de este estudio interesa destacar que es claro que por encima de la calidad institucional de la transparencia, las Cámaras del Congreso federal han privilegiado el enfoque de atención al usuario (tendencia similar que en las universidades). Ese hecho es relevante además en el marco comparativo expuesto, en el cual los tribunales administrativos, por ejemplo, no obstante su mejor nivel de internalización formal de la transparencia, registran el más bajo desempeño en cuanto a la atención del usuario. Esta observación es pertinente, además, porque la comparación debe tener en cuenta que el mejor nivel detentado por tribunales jurisdiccionales y órganos con objeto específico (IMSS, por ejemplo) corresponde a una considerable mayor demanda, de solicitudes de información y seguimiento que hacen los usuarios, que en el caso de las Cámaras del Congreso federal, lo cual se explica por la naturaleza de la actividad de los primeros. Para este estudio, la comparación es relevante porque la mayor congruencia en materia de transparencia⁴⁵⁹, entre el marco normativo y la acción organizacional dirigida a la atención de los usuarios, facilita a los usuarios solicitantes la obtención y manejo de información pública relevante. Al respecto, tribunales jurisdiccionales y órganos con objeto específico registran, con similar nivel, los mejores desempeños (indicadores NOR y US)⁴⁶⁰, seguidos con similar nivel por el sector de universidades y los órganos legislativos federales; éstos últimos muestran mejor desempeño que las universidades en cuanto al indicador de usuario

⁴⁵⁹ Considerando la disposición de herramientas normativas para reglamentar en la materia y de formatos en Internet para solicitudes de información; sistemas electrónicos para el envío y seguimiento de estas solicitudes (tipos y requisitos), así como las respuestas otorgadas (calidad y tiempo).

⁴⁶⁰ A partir de una menor “dotación normativa” enfocada a la transparencia y debido a menores acciones organizacionales enfocadas al usuario.

simulado⁴⁶¹, lo que indica que se han enfocado más que éstas en los aspectos vinculados a mejorar el manejo de información para los usuarios, y eso ha permitido dar mayor congruencia a la acción con relación a las normas que rige a unos y otras.

Parece claro que el comportamiento de los ciudadanos, en cuanto a la demanda de información pública, repercute en el cumplimiento de obligaciones de transparencia gubernamental, de la calidad de la información que sea proporcionada y de la atención prestada, aunque los mecanismos y estándares dependen del diseño institucional y de la internalización de los principios y valores dentro de las instituciones. Pero ese comportamiento depende, a la vez, de la facilidad con que se pueda acceder, encontrar y disponer de información relevante y actualizada⁴⁶².

4.3.2. Peculiaridades en el caso del Congreso federal

Interesa tener presente que en el discurso público de la Cámara de Diputados, desde el inicio de la aplicación de la norma que regula la cuestión en ese órgano, en la postura política institucional se reconoce el escrutinio ciudadano en tanto que derecho político democrático, así como la relación que guarda con respecto de la rendición de cuentas, concebida como condición de efectividad del acceso de los ciudadanos a la información; en efecto, con motivo del primer informe anual rendido se dice que:

Una sociedad democrática supone la evaluación ciudadana sobre su gobierno, y ésta, para ser efectiva, requiere que el ciudadano tenga los elementos para hacer de su juicio un asunto razonado e informado, y que esta opinión puede ser divulgada y contrastada con la de otros ciudadanos. Por ello, es obligación del Estado democrático garantizar estas libertades básicas. En la medida en que los ciudadanos conozcan aspectos sobre el funcionamiento y la actividad que desarrolla la autoridad, contarán con elementos para ejercer su derecho de evaluarla. De esta forma, el acceso a la información pública es una condición necesaria para el pleno desarrollo democrático del Estado y para que los poderes públicos rindan cuentas sobre su desempeño. Por ello, se reconoce que a más y mejor información de los órganos del Estado, el ciudadano estará en mejores condiciones

⁴⁶¹ Tomando como referencia el indicador de normatividad, 0.57 para los órganos legislativos y 0.59 para las universidades.

⁴⁶² En el caso del conjunto de sujetos obligados distintos al poder Ejecutivo resulta significativo el alto nivel de correlación entre la calidad de la información que se publica en la internet y la variable que captura el envío y seguimiento de las solicitudes de los usuarios (0.587 y 0.656, respectivamente), así como con la calidad de la respuesta brindada al usuario (por encima de otras correlaciones significativas entre las variables NOR y US, y también el registrado entre variables que miden la calidad institucional de la transparencia y aquellas que capturan aspectos formales y normativos (en promedio del 0.65 y del 0.56, respectivamente).

para evaluar su gobierno y para tomar decisiones, tanto sobre la actuación del mismo Estado, como en el ejercicio de sus actividades particulares.

De la observación de los informes institucionales de la Cámara se desprende que la cuestión no es el incumplimiento, ni siquiera la prontitud en la respuesta a las solicitudes presentadas, aspectos que han sido cuidados desde el inicio⁴⁶³; tampoco parece residir en los aspectos respecto de los que se informa, si bien habría que revisar la información reservada; lo que está en juego es determinar la relevancia desde el punto de vista de los ciudadanos puede radicar en la presentación de informes, la actualización de los mismos y los vínculos entre aspectos gubernamentales; al observar las respuestas dadas a las solicitudes de información se detectó la constante remisión a un informe publicado en el que no se encuentra lo que se solicita o se halla de modo marginal, lo que indica que el sistema opera enfocado a la catalogación, y, en todo caso, que no hay una evaluación que permita conocer cómo satisfacer mejor los requerimientos de información que hacen los ciudadanos. Eso es particularmente cierto en el caso de la información del desempeño de legisladores en lo individual y de partidos políticos, respecto de los cuales la catalogación es en general precaria. Eso puede repercutir, por otro lado, en la confiabilidad que de los ciudadanos pueda esperarse que dispensen a la información publicitada.

Se trata de aspectos de distinta naturaleza, aunque necesariamente relacionados entre sí en términos del análisis aquí propuesto. En ese sentido, no debe perderse de vista que la disponibilidad de información de acceso público es diferente, cuando concierne a los órganos de la Cámara que la relativa a los grupos parlamentarios o partidos, lo cual se entiende a partir del principio de máxima publicidad y la atribución del órgano de que se trate para clasificar como reservada cierta información relativa al mismo⁴⁶⁴.

⁴⁶³ De junio de 2003 a junio de 2004, la Cámara de Diputados recibió un total de 459 solicitudes de información, de las cuales tramitó y desahogó en su totalidad 458, solamente quedó una pendiente de resolver; cuatro fueron clasificadas como información reservada por las unidades administrativas de la Cámara, en dos de las cuales se confirmó esa clasificación, el promedio de respuesta a las solicitudes fue de 5 días hábiles, no obstante que el término límite establecido en el reglamento es 10 días hábiles.

⁴⁶⁴ Frente al límite señalado por el principio fundamental de hacer prevalecer la máxima publicidad posible, el límite contrario consiste en la información clasificada como reservada, por lo cual el acceso a la información dependerá, en último término, de la interpretación que la autoridad haga acerca de aquello merezca esa clasificación, en lo que se pone en juego no solamente la naturaleza sino el uso que se crea podrá darse a la información, es decir según se estime el correspondiente potencial daño; la reserva tiene vigencia perentoria y la autoridad debe dar cuenta de las razones; la información acerca

Descontando la información relativa al destino de recursos materiales y humanos, queda margen de opacidad derivada de la carencia de evaluación de resultados.

Los órganos de las Cámaras presentan, durante el transcurso de la legislatura, una amplia gama de informes de actividades y resultados, actualizados con distinta periodicidad (en ningún caso mayor a seis meses), tanto aquellas estrictamente legislativas como las administrativas y de apoyo técnico, que sirven a la ejecución de las primeras. Entre éstas últimas cabe destacar aquellas dirigidas a ilustrar el criterio de los legisladores en alguna materia, recoger inquietudes, demandas o identificar conflictos en torno a algún asunto o bien consultar directamente a los ciudadanos u organizaciones civiles respecto de cómo les afecta o puede afectarlas las decisiones. De hecho, el sistema institucional de información pública contiene, adicionalmente, bases de datos y estadísticas, que permiten incluso observar tendencias de comportamiento acerca de las asistencias a sesiones de Pleno y de Comisión o Comité, la jerarquía que se otorga a los asuntos de la agenda legislativa, el sentido del voto por legislador, los asuntos pendientes de resolución. De tal manera que los ciudadanos pueden conocer desde qué ocurre en las sesiones plenarias de la Asamblea y en las sesiones ordinarias y reuniones de trabajo de las Comisiones y Comités de la Cámara, hasta las posturas de cada legislador y partido o grupo parlamentario adoptadas ante cada asunto discutido o deliberado, pasando por viajes en territorio nacional y al extranjero por parte de legisladores, objetivos que se persiguen con ellos, la justificación en cada caso ofrecida e informes de resultados, así como la publicitación de lo dicho por los legisladores en las reuniones de Comisiones y Comités; también las solicitudes de información presentadas por otros ciudadanos⁴⁶⁵.

del quehacer de los partidos tendría un uso estratégico desde el punto de vista de los ciudadanos, al ser uno de los sujetos de escrutinio más opacos y auto protegidos en el sistema político. Véase el Acuerdo por el que se establecen los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial de la Cámara de Diputados, *Gaceta Parlamentaria* (28-agosto-2003), derogado al expedirse el Reglamento para la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, *Diario Oficial de la Federación*, 29 de abril de 2009.

⁴⁶⁵ Con excepción de aquellas en el mismo sentido de pregunta y respuesta; la Unidad de Enlace empezó a operar en julio de 2003, cuando el sistema para recibir las solicitudes de información aún no estaba soportado electrónicamente en Internet, luego se interactuó con los usuarios a través de correo electrónico; la mejora en 2005 introdujo la posibilidad de que el solicitante creara una cuenta electrónica, que los datos proporcionados por el usuario sean confidenciales, que las peticiones se incorporaran automáticamente a la base de datos de la Unidad y que esta informara al solicitante el

Las vías para el acceso público y la difusión de toda esa gama de información pública relevante van desde las publicaciones impresas, que dan cuenta de la información relativa al trabajo fundamental en la Cámara, tal como la “Gaceta Parlamentaria”, las “versiones estenográficas” de las sesiones y el “Diario de los Debates”, o bien del desempeño de las tareas administrativas y de apoyo técnico (“Boletín Informativo”, bimestral), hasta las transmisiones televisivas en directo de las sesiones o aquellas diferidas de eventos que complementan el resto de la programación del Canal de Televisión del Congreso (que trasmite en señal restringida), pasando por los sitios electrónicos de cada Comisión o Comité legislativo dentro del Portal en Internet.

El Reglamento en materia de “Transparencia y Acceso a la Información Pública” obliga a los Grupos Parlamentarios (partidos políticos) a presentar, mediante el sitio electrónico de la Cámara en Internet, su respectiva agenda de asuntos legislativos e informe del ejercicio de los recursos económicos asignados para solventar las tareas administrativas y de operación distintas de las prestadas por la Cámara a sus órganos. Las actividades propias de los grupos parlamentarios se rigen por su respectivo reglamento, que los obliga a informar además acerca del gasto en propaganda⁴⁶⁶.

Un aspecto a poner en cuestión aquí es la calidad de la información; ésta puede ser considerada precaria en cuanto a la ausencia de criterios de asignación de gasto, lo cual evidentemente se sitúa en el ámbito de la reserva⁴⁶⁷. No obstante, a partir de la observación de este aspecto, no se encontró información relativa a si los ciudadanos han solicitado información acerca de con qué criterios los grupos parlamentarios gastan los recursos asignados y qué resultados se consiguen mediante ese gasto en el desempeño de sus tareas, algo que parece ser una inquietud generalizada entre los

proceso de trámite de su solicitud; en junio de 2008 se desarrolló otro sistema para reparar las fallas del anterior, sustituido en 2011 que aún presenta dificultades no superadas.

⁴⁶⁶ Teniendo acceso a Internet se puede encontrar detalles acerca del destino (montos y rubro) del gasto asignado a cada partido: contratación de personal, consumo de material de oficina, combustibles, servicios de limpieza, kilometraje de uso de vehículos asignados; gastos de logística de eventos o bien ayuda económica a eventos culturales o deportivos organizados por los “sectores social y privado”.

⁴⁶⁷ Según catálogos establecidos, aunque tales informes no dan cuenta acerca de los criterios de cada grupo para administrar los recursos; tampoco acerca de qué depende que las llamadas “subvenciones” (fija y variable) se incrementen.

ciudadanos, si bien los escasos interesados (que han presentado alguna solicitud de información) lo son respecto del monto de remuneraciones personales de legisladores⁴⁶⁸. Otro aspecto concierne al restringido universo de ciudadanos que disponen del acceso a la información del Congreso a través de Internet, así como al Canal del Congreso, habida cuenta de que transmite en señal restringida⁴⁶⁹. Aún así, es un hecho que las Cámaras del Congreso han avanzado en cuanto a la publicación de información relevante, tal como se desprende de la comparación entre aquella a que está obligada a publicar (Esquema A) y la que publica (Esquema B)⁴⁷⁰.

Otra cuestión se refiere a la confiabilidad de la información ofrecida⁴⁷¹. A este respecto, durante la LX Legislatura, la Cámara de Diputados no había expedido la norma que regula la transparencia y el acceso a la información pública que genera, en tanto que sujeto obligado facultado por la Ley en la materia para establecerla. Los grupos parlamentarios fueron omisos a esta cuestión, tal como revela el hecho de que el decreto que expide el *Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales* de la Cámara de Diputados apenas fuera expedido el

⁴⁶⁸ Es de destacar que, en contraste, solamente se registra un caso (un recurso de inconformidad interpuesto por un ciudadano en 2005, el único que la Cámara publica en su sitio), en que un ciudadano consideró que no recibió la información que solicitó, relativa a que la institución no dio cumplimiento a la obligación de emitir la política interna relativa a la estructura y organización interna del Canal de Televisión del Congreso, que debió haber emitido la Comisión Bicameral en cumplimiento del Reglamento, lo cual ilustra la inquietud por un asunto de desempeño y un ejercicio real de escrutinio.

⁴⁶⁹ Que depende tanto del interés personal como del que puede despertar el contenido transmitido; un dato que ilustra este aspecto, por contraste, consiste en de los casi ocho de cada diez entrevistados que dijeron haber visto propaganda electoral transmitida interrumpiendo la pauta de programación habitual, tal como hicieron las televisoras privadas en febrero de 2009, en rechazo a las disposiciones establecidas por reforma electoral aprobada en 2007, al 42% le disgustó la propaganda, pero al 35% le resultó indiferente y al 21% le gustó, encuesta en vivienda, periódico *Reforma*, 23 de febrero de 2009.

⁴⁷⁰ Para una descripción comparada de procedimientos de acceso, véase IFAI (2004). *Acceso a la información pública en otros sujetos obligados por la LFTAIPG*, México.

⁴⁷¹ No puede ser creíble, por ejemplo, que un partido no reporte gasto destinado a apoyar económicamente eventos de organizaciones civiles, que tuvieron lugar dentro y fuera de Cámara en el periodo informado, tampoco en el rubro de comunicación social frente a la evidencia de que fue hecho, tal como se constata al revisar el *Informe de Origen y Destino de los Recursos Económicos Asignados por la Cámara de Diputados*, del periodo 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2009, presentado por cada partido a la Junta de Coordinación Política y publicado en la página de Internet de esa Cámara, véase: http://www3.diputados.gob.mx/camara/004_transparencia/000_canales_principales/004_informes_y_acuerdos/15_informes_grupos_parlamentarios, (consulta el 4 de febrero de 2010); aún en el caso de que la información solicitada haya sido clasificada como reservada, subsiste la posibilidad de que sea ofrecida una “versión pública” de la misma, lo que supone el margen del órgano para interpretar.

6 de abril de 2009, al término del último periodo de sesiones de esa LX Legislatura. En esa norma se establece el órgano especializado e imparcial de la Cámara⁴⁷².

Ciertamente hay mucho por hacer en cuanto a favorecer la confiabilidad de la información publicitada por las Cámaras del Congreso federal, en especial en lo correspondiente a los grupos parlamentarios, agentes políticos colectivos de los que dependen directamente la representación política de los ciudadanos, y respecto de la manera en que ellos mismos evalúan el desempeño de los legisladores que los integran, los criterios con que definen y asignan las acciones y tareas a éstos, así como de la aplicación y ejercicio de recursos públicos que reciben durante cada legislatura. Aún es amplio el rango de opacidad respecto al desempeño de los grupos parlamentarios que no tendrían por qué mantenerse cerradas desde el punto de vista de los ciudadanos. Para cumplir con la responsabilidad directa de rendir cuentas a los ciudadanos acerca de su desempeño, los grupos parlamentarios podrían empezar por abrir las áreas de reserva y aceptar ser auditados por los ciudadanos, mediante agentes externos especializados o, mejor aún, por observatorios ciudadanos que contaran con el apoyo institucional, entre otros, para dar a conocer ampliamente los resultados y cuya publicitación permitiría a los propios partidos y legisladores federales profundizar la transparencia y alentar cierta confiabilidad en la información pública respecto de su desempeño. Cabe señalar que ambos mecanismos han sido vislumbrados en el curso de la LXI Legislatura (2009-2012).

Dos iniciativas presentadas, en materia de modificaciones al Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, permiten ilustrarlo. Una de ellas el 3 de septiembre de 2009, por un diputado del PAN, para especificar la información que los grupos parlamentarios deban presentar periódicamente respecto del destino, la aplicación y el ejercicio del gasto que reciben. Otra el 13 de noviembre de 2009, por un diputado del PRD, se dirige, por un lado, a

⁴⁷² Dotado con autonomía operativa de gestión y decisión, se trata de un Consejo integrado por tres especialistas en la materia, elegidos a través de una convocatoria pública y abierta y quienes durarán en su cargo cinco años con posibilidad de reelección por una sola vez.

otorgar el carácter ciudadano al Consejo⁴⁷³, encargado de vigilar la aplicación y cumplimiento del Reglamento, reducir su estructura administrativa y evitar la discrecionalidad en su conformación; por otro lado, a establecer que la Cámara deberá presentar información relativa al presupuesto asignado e informe mensual del ejercicio del gasto; del resultado de auditorías al ejercicio presupuestal de cada órgano y sujeto obligado; del programa de trabajo de la Contraloría Interna y que éste deba contener auditorías y trabajos que se desarrollarán en cada año legislativo.

De lo considerado aquí interesa, para los fines de este estudio, constatar que, en términos generales, se observa cumplimiento de la normatividad y que, en efecto, la información publicitada respecto al quehacer cotidiano de las Cámaras, sus órganos legislativos y administrativos, así como de los grupos parlamentarios y legisladores en lo individual está a disposición de los ciudadanos, tanto de manera personal como a través de algún medio de comunicación, en lo que concierne a las tareas y actividades en que, de conformidad con la normatividad aplicable, están comprometidos. Desde el inicio de operaciones en 2003 hasta el segundo año de ejercicio de la LX Legislatura (2008), la Cámara de Diputados atendió 7,344 solicitudes de información presentadas por ciudadanos, un promedio de 1,469 por año; en 2007 se registró la mayor frecuencia (2,597), seguido por el año 2008, que representaron una tercera y cuarta parte del total acumulado durante ese periodo, respectivamente, a lo largo del cual seis de cada diez solicitudes presentadas fueron resueltas durante el término⁴⁷⁴.

La vía institucional ofrece a los ciudadanos información para ejercitar el escrutinio público. No es un objeto de este estudio determinar el grado en que ello ocurre; en cambio sirve tener en cuenta que el recurso informativo está asimétricamente distribuido y que su adquisición implica esfuerzo y tiempo que los ciudadanos deberán sustraer a otras actividades. Más importante aún es considerar que la mayor parte de los ciudadanos no tiene, ni estaría en principio obligado a tener, un conocimiento suficiente para procesar y manejar una información publicitada con la misma

⁴⁷³ Propone que el cargo de consejero sea honorífico y sus integrantes sean seleccionados de entre especialistas e investigadores expertos en materia de transparencia y acceso a la información público.

⁴⁷⁴ Informe Anual de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Cámara de Diputados 2008, México, Cámara de Diputados, LX Legislatura, 2009.

sofisticación y, con frecuencia, tecnicismo con que es elaborada e intercambiada en el ámbito político institucional. El léxico utilizado resulta familiar al personal político, pero no así para la mayor parte de los ciudadanos, sin experiencia en el funcionamiento gubernamental, familiarizados con otro tipo de léxicos y discursos públicos. Se requiere de un esfuerzo de procesamiento y aprendizaje entre léxicos, incluido el característico del discurso relativo a transparencia y rendición de cuentas. Ese esfuerzo no debiera implicar un filtrado arbitrario de la información a publicitar, sino la adecuación gradual de la presentación de la misma, en la práctica, según los requerimientos de los ciudadanos y a partir de la información que solicitan conocer⁴⁷⁵. Que la información pública relevante, acerca del quehacer de los legisladores, esté en los hechos disponible, es una condición normativa necesaria para que los ciudadanos interesados ejerciten el escrutinio, pero no es una situación que esté ocurriendo con la magnitud y frecuencia suficiente para alentar dicha práctica política democrática, lo cual remite a las cuestiones relativas al aprendizaje político de los ciudadanos y a la credibilidad que otorgan en las instituciones, ya tratadas en el capítulo anterior.

4.4. Acceso público a la rendición de cuentas del Congreso federal

La publicitación de la rendición de cuentas por parte de los legisladores está sustentada en un andamiaje institucional compuesto por sistemas de información y canales de difusión, que permiten consultar un vasto universo de información en casi cualquier aspecto del quehacer parlamentario en ambas Cámaras del Congreso. La

⁴⁷⁵ Considérese por ejemplo que del total de consultas hechas al IFAI, de febrero de 2007 a diciembre de 2010, la mayor parte de ellas correspondieron a directorios de funcionarios (27.3%), seguida de información relativa a contratos públicos de obras y servicios (23.1%), remuneraciones (15.6%) y organigrama de la burocracia (10.1%) y concesiones, permisos o autorizaciones otorgadas (7.3%), que en conjunto representan cuatro quintas partes (83%), lo que es indicativo del tipo de interés y el perfil del ciudadano que hace la consulta. En este sentido, es revelador que el asunto relativo a los mecanismos de participación ciudadana sea prácticamente insignificante en el conjunto de solicitudes (0.2%), representa la mitad de quienes pidieron informes del quehacer de alguna dependencia (0.4%), seis veces menos que quienes se interesaron en los resultados de alguna auditoría (1.2%), diez veces menos que las solicitudes de información sobre los servicios ofrecidos por una dependencia (2.1%) y doce veces menos que quienes consultaron acerca de trámites y requisitos requeridos (2.4%), que junto con información adicional de interés (2.4%), marco normativo (2.1%), ubicación de la ventanilla de solicitudes (1.5%), presupuesto asignado (1.5%), metas y objetivos de alguna dependencia (1.2%), facultades administrativas de ella (1.0%) y programas con subsidio económico a la población a la que se dirigen (0.7%), sumadas representan el equivalente al rango de solicitudes relativas a remuneraciones del personal burocrático e inferior al de contratos, apenas el doble de las relativas a concesiones, según los rubros obligados de publicación a través de Internet.

mayor parte de la información pública de la Cámara de Diputados que se encuentra digitalizada corresponde a legislaturas en que ningún partido político por sí mismo ha conseguido mayoría, a partir de la LVII (1997-2000) a la fecha. En el órgano oficial de difusión de cada Cámara (“Gaceta Parlamentaria”)⁴⁷⁶ son publicados la Orden del Día y Acta de cada sesión del Pleno, las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo presentadas y dictámenes a discutir (elaborados por Comisiones ordinarias)⁴⁷⁷, comunicaciones de otros poderes y órganos estatales, mientras que la transcripción textual de lo dicho y actuado en las sesiones de cada Cámara consta en las versiones estenográficas, organizadas en el “Diario de los Debates”⁴⁷⁸; asimismo planes de trabajo, informes de actividades y acuerdos que las Comisiones y Comités están obligadas a publicar⁴⁷⁹. La organización de la información, acervos y archivos documentales, bases de datos y publicaciones, actualizados periódicamente, están diseñadas para facilitar su consulta.

La información difundida a través de la página electrónica de la Cámara de Diputados, cumple en términos generales con lo establecido en la Ley; debido a la naturaleza misma de la información legislativa, no obstante que su presentación sea resumida, hacer comparaciones de un mismo asunto requiere de varias consultas e invertir bastante tiempo⁴⁸⁰. En el discurso oficial, relativo a la rendición de cuentas, se reconoce que es necesario hacer más accesible aún la información al ciudadano⁴⁸¹.

⁴⁷⁶ Publicada diariamente en soporte impreso que puede ser consultado en la biblioteca del Congreso, en tres sedes distintas, así como en versión electrónica en la página de Internet del órgano.

⁴⁷⁷ Que está disponible dentro de las siguientes 24 horas a la fecha de la sesión, en tanto que la publicación del Diario, tanto en soporte impreso como digital, tarda varios días más.

⁴⁷⁸ La Biblioteca del Congreso de la Unión conserva el acervo del Diario de Debates desde 1917, material del que se puede obtener copia fotostática.

⁴⁷⁹ De conformidad con el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso federal.

⁴⁸⁰ Si un ciudadano quiere conocer la postura de cualquier partido político o legislador en particular, cuándo éste haya participado en la discusión de algún asunto de interés para ese ciudadano, basta con consultar la versión estenográfica de la sesión, tarea que empieza por ubicar la fecha de la sesión o bien revisar una por una hasta encontrar el asunto de interés; no obstante la búsqueda es simplificada mediante la consulta al orden del Día, que es publicado diariamente y está organizado por fechas.

⁴⁸¹ “El empeño es que la información que requiere conocer la sociedad esté publicada, anticipándose a la misma necesidad de conocer; reducir el tiempo de búsqueda, hacer más amigable el entorno del portal garantizando la publicidad de la información”, *Informe Anual de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Cámara de Diputados 2008*, México, Cámara de Diputados, LX Legislatura.

Para el objeto de este estudio, interesa más poner de relieve que no es homogénea la calidad, detalle y actualización de la información relativa a Comisiones legislativas⁴⁸², en cuanto a su presentación en el sitio electrónico respectivo, no obstante que el Reglamento de cada Cámara establezca estándares al respecto; en cambio ocurre lo contrario con los acervos documentales, pero ellos difícilmente serán consultados por los ciudadanos. La observación es relevante porque esa información permite conocer y evaluar el desempeño de cada legislador, si asiste o no, qué propone, en qué sentido vota qué asunto, de qué tareas se hace cargo, dentro de Comisiones⁴⁸³, órganos en donde tiene lugar el trabajo legislativo en sentido estricto, más exhaustivo y en detalle, por cuanto su función es estudiar, elaborar, discutir y votar las resoluciones (proyectos de dictamen) que serán objeto de deliberación y votación por el Pleno de la Cámara⁴⁸⁴.

Ahora bien, las Comisiones están obligadas a presentar un informe de actividades semestral y otro al final de la legislatura, para conocimiento del pleno y que la Cámara debe poner a disposición de la sociedad, procurando su difusión por diversos medios de comunicación colectiva⁴⁸⁵; los ciudadanos sin acceso a Internet e interesados en conocer esa información pueden recurrir directamente a la Comisión respectiva⁴⁸⁶.

⁴⁸² Lo cual repercute en los costos implicados en la búsqueda de información, desde el punto de vista del ciudadano; aunque aquella producida por Comisiones es más relevante y objetiva que la producida por cada legislador, se observó que su presentación, en el respectivo sitio del Portal de la Cámara en Internet, es en general tardía, en el 25% del total de ellas es actualizada y rezago de hasta un año.

⁴⁸³ Con excepción de quienes ocupen los cargos de los órganos de gobierno (Mesa Directiva, Junta de Coordinación Política y Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos), todo diputado o senador debe formar parte de alguna Comisión o Comité, hasta un máximo de tres de ellas, a propuesta de su respectivo grupo parlamentario; las Comisiones deben reunirse por lo menos una vez al mes y en cada una dar cuenta del estado que guardan los asuntos legislativos que le han sido turnados por el Pleno para su resolución.

⁴⁸⁴ Tanto en el sentido de desechar como en el de aprobar, todas y cada una de las iniciativas de ley o decreto, minutas aprobadas en la otra Cámara, proposiciones con punto de acuerdo, que les son turnadas por la Mesa Directiva; hay que tener en cuenta que todos los asuntos presentados en el Pleno de la Cámara y que éste no apruebe por mayoría discutir en la misma sesión en que son presentados, deben ser turnados sin excepción a Comisiones, según la materia que constituye la competencia de cada una de ellas, de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso.

⁴⁸⁵ A través de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y a la sociedad en general, a través de los medios de divulgación disponibles, de acuerdo con el artículo 164 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados.

⁴⁸⁶ Si la pretensión del ciudadano interesado es dar seguimiento al trabajo de los legisladores, así como a los asuntos discutidos, distinguiendo la conducta individual o según el partido o grupo parlamentario al que pertenecen, la información relativa podrá ser consultada en el informe semestral que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, dichos órganos deben presentar.

Por otra parte, se observa que hay un amplio margen de discrecionalidad en cuanto a la elaboración, presentación y difusión del informe de labores de cada legislador, otra vía de rendición de cuentas y otra fuente de información para evaluar su desempeño que, si bien históricamente institucionalizadas, contienen mayores sesgos y parcialidad que las relativas al órgano legislativo; ninguna ha sido regulada jurídicamente en detalle y con miras a establecer estándares de desempeño y resultados⁴⁸⁷; este aspecto concierne directamente a cada grupo parlamentario y, aunque sea diferente por tanto el subsidio que cada diputado federal o senador recibe, la manera en que tiene lugar y el alcance de las acciones de rendición de cuentas han sido similares.

Aunque no hay un acervo organizado de informes personales, se tuvo a la vista ejemplares impresos y se pudo participar como observador en la presentación de algunos de ellos, de lo que se desprende un patrón común a los distintos casos, es decir con independencia al partido de pertenencia, el principio de elección (uninominal o plurinominal) y la posición que se ocupa en los órganos de la Cámara: el informe es de periodicidad anual, presentado impreso y en persona ante ciertos ciudadanos de la respectiva circunscripción electoral, seleccionados y convocados de tal modo que sea minimizado el riesgo de incidentes desfavorables fuera de control, en el evento principal al que se convoca a medios de comunicación, tras del cual el legislador lleva a cabo otros en ciertas localidades de la circunscripción. Cada legislador dispone de por lo menos alguna instalación y de personal ajeno a la Cámara para prestar servicios de información, gestoría de trámites, quejas y demandas ciudadanas ante la autoridad.

Los contenidos difundidos por el Canal del Congreso⁴⁸⁸ permiten conocer el desempeño de los legisladores en las deliberaciones, con mayor inmediatez y facilidad.

⁴⁸⁷ Obligación establecida primero mediante un acuerdo de los órganos de gobierno de la Cámara, y regulado con cierto detalle apenas en la LXI Legislatura, que aprobó el Reglamento de la Cámara de Diputados, publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2010, cuyo artículo 8 numeral 1 fracción XVI establece que es los diputados deberán presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, ante los ciudadanos de su distrito o circunscripción, del cual deberá enviar una copia a la Conferencia, para su publicación en la Gaceta Parlamentaria; no se establece acerca de qué aspectos debe informarse, de qué modo y con qué detalle, si se admite discusión, interpelación, las reglas de procedimiento en su caso, o bien la posibilidad de, en su caso, sancionar públicamente al legislador.

⁴⁸⁸ Creado a partir de la expedición de la Ley Orgánica del Congreso federal en 1999, cuya gestión es encargada a profesionales, supervisada por un Comité integrado por diputados y evaluado por un consejo de especialistas externos.

Si bien ha mejorado significativamente la calidad de contenidos, incorporando eventos donde los protagonistas son ciudadanos y programas con potencial educativo, eso ha ocurrido después de ocho años de operación, ese privilegiado medio para aportar información a los ciudadanos sigue siendo desaprovechado por la mayor parte de ellos. Es claro que su papel de contraste tiene alcance restringido, en tanto que marco de referencia alternativo y en la medida en que es un cauce idóneo para que transcurra el escrutinio público, incluso respecto de los medios de comunicación concesionados a privados. Aquí la comparación solamente es válida entre ciudadanos interesados en participar en la vigilancia del gobierno, que pueden optar entre ofertas televisivas transmitidas en señal restringida⁴⁸⁹, algo que no ha sido investigado.

Es claro que no todas las vías institucionales para conseguir información, acerca de la actuación de los legisladores, constituyen por sí mismas mecanismos de rendición de cuentas, en las que transcurra una justificación de los actos y decisiones destinada a los ciudadanos, al margen de esquemas corporativos o clientelares de relación. La más relevante entre aquellas que sí lo son, aún sin mediar interlocución, tal como observar en persona la deliberación en las sesiones de pleno, representa un notorio costo⁴⁹⁰.

4.5. Posturas de partidos y legisladores hacia medios electrónicos en el contexto

Conviene incorporar, con fines de contraste, dos observaciones relevantes que contribuyen a entender, en parte, la concepción y la postura de legisladores federales, en el contexto, respecto tanto de las medidas necesarias para regular legalmente la transmisión de radio y televisión en el país, como a la vez en cuanto a la manera en que la rendición de cuentas es afectada por la intervención de la televisión, los contenidos que difunde y el alcance de éstos entre los ciudadanos. Con ese propósito se revisaron las iniciativas legislativas que en materia de regulación de radio y

⁴⁸⁹ Según datos de LAMAC, en el año 2010 tres de cada 10 personas tienen acceso a ella; en donde tal como se muestra en este estudio, ha tenido lugar la mayor parte del crecimiento de programas de opinión y discusión política y de temas de interés público, en los últimos tres años.

⁴⁹⁰ La Cámara de Diputados se prevé un lugar físico específico (“Galerías”) dentro del recinto destinado a ciudadanos interesados que acuden a la sede, mismo que se abre antes del inicio de sesión y se cierra hasta que concluya la misma, solamente restringido a que sea declarada privada o “secreta” la sesión y la estancia condicionada solamente por la prohibición de actos que alteren el orden de la sesión, de conformidad con el artículo 33 del reglamento de la Cámara de Diputados.

televisión, fueron presentadas en la Cámara de Diputados durante las legislaturas LIX y LX⁴⁹¹, periodo que corresponde al contexto en el se inscribe la difusión televisiva analizada para la prueba de la hipótesis (2008).

La primera observación consiste en que a juzgar por las iniciativas legislativas promovidas en esa materia, resultan ilustrativos, dos hechos. Por una parte, en cuanto a su objeto y finalidad, las diversas propuestas de regulación tienen en común afirmar y dar pie al ejercicio de las potestades del Estado respecto del aprovechamiento y la administración del espectro radioeléctrico, a partir del reconocimiento de que las prácticas de los concesionarios han desvirtuado el sentido del interés público, ante lo cual se debe imponer a ellos obligaciones que contribuyan a prestar un mejor servicio a los ciudadanos y la población en general. Por otra parte, en cuanto al alcance regulatorio y a las orientaciones de las disposiciones modificadas o agregadas, es claro que todas las iniciativas acometen solamente algún o algunos aspectos particulares de la materia general que regula la Ley Federal de Radio y Televisión, ya sea el relativo al otorgamiento, duración y revocación de concesiones; extender los tiempos de transmisión de contenidos que corresponde gratuitamente al Estado; ampliar el apoyo de éste a la radiodifusión por parte de agentes sociales y organizaciones sin fines de lucro; favorecer contenidos que tiendan a promover la equidad entre hombres y mujeres; el uso de las lenguas indígenas; la promoción de prácticas adecuadas en materia cívica, de salud y recreación; que este tipo de contenidos estén a cargo de la secretaría de educación federal; prohibir contenidos que atenten contra la integridad de los menores de edad; controlar y sancionar la publicidad engañosa, entre otros.

Eso explica varios hechos en ese contexto legislativo: por una parte, que las reformas y adiciones a la Ley Federal de Radio y Televisión hayan sido aprobadas por ambas Cámaras del Congreso, luego de mutuas adecuaciones insignificantes, precisamente

⁴⁹¹ Se eligieron solamente éstas porque es ésta la Cámara de origen de la iniciativa precedente de reformas a la misma Ley Federal de Radio y Televisión, concertada en ella por todos los partidos para ser aprobada sin discusión, cuyas deficiencias llevaron a 47 senadores a demandar la inconstitucionalidad de varias de sus disposiciones ante la Suprema Corte, instancia que resolvió en ese sentido; una razón ciertamente complementaria radica en la generalizada forma simbólica ideológica, fuertemente arraigada además en el imaginario colectivo, por la que la mayor parte de las personas, en México, consideran que la Cámara de Diputados refleja los diversos perfiles sociales y culturales de la población y que su función primaria concierne a representar al pueblo en su totalidad.

cuando la LX legislatura prácticamente se extinguió⁴⁹², el 30 de abril de 2009 último día del último periodo ordinario del último año de ejercicio; por otra parte, que en esa misma fecha hayan sido presentadas 6 de las 34 iniciativas que en total aquella conoció, una de las cuales corresponde a las 2 únicas suscritas por legisladores de varios partidos⁴⁹³. No debe perderse de vista que, en cambio, las reformas y adiciones a esa ley, aprobadas el 19 de junio de 2009 por ambas Cámaras, derivan de la obligación del Congreso a legislar en congruencia con la reforma electoral aprobada por ese órgano en diciembre de 2007, tal como es el caso de las reformas y adiciones al COFIPE aprobadas en 2008, también como derivación de esa reforma electoral.

La plausibilidad del argumento inicial de este apartado puede ser valorada a partir de la proclividad de los integrantes de cada bancada partidista a hacer propuestas para legislar en materia de radio y televisión, teniendo como Cámara de origen la de Diputados, considerando el número de iniciativas presentadas durante la LIX (de septiembre de 2003 a agosto de 2006) y la LX (de septiembre de 2006 a agosto de 2009) legislaturas, indicador más significativo que el relativo a la mera inclusión o no del tema en la agenda legislativa de cada partido en esa Cámara.

Del total de 31 iniciativas, incluida una minuta del Senado, que conoció el pleno de la Cámara de Diputados, durante la LIX Legislatura, 9 de ellas fueron presentadas por algún diputado del PRD, 8 por alguno del Verde Ecologista, 5 por alguno del PAN, 4 por alguno del PRI, 2 por alguno del PT, 1 por una diputada independiente y una por diputados de varios partidos, en tanto que Alternativa Socialdemócrata no presentó alguna en esta materia. Mientras que durante la LX Legislatura del total de 34 iniciativas presentadas en esa Cámara, incluidas 3 minutas del Senado, 8 de ellas lo fueron por algún diputado del PRD, 7 por alguno del PRI (incluidas dos dictaminadas y desechadas), 4 por alguno del PAN (incluida una por todo ese grupo parlamentario), 3

⁴⁹² Para cuando el proceso de dictamen y deliberación de la legislatura prácticamente concluía, a menos que fuera convocado un periodo extraordinario de sesiones, no puede argüirse, sin embargo, que la Comisión que dictamina haya operado solamente como contenedora (“congeladora” usando la jerga política), puesto que resolvió desechar 4 de las 34 iniciativas que le fueron turnadas en la legislatura.

⁴⁹³ De las seis, tres corresponden a diputados del PRD, dos a diputados del PAN, una a diputadas de varios partidos, para obligar a que sea promovida la igualdad entre hombres y mujeres y evitada la discriminación en los contenidos de la radiodifusión y la otra derivada de la reforma electoral de 2007.

por alguno de Nueva Alianza, 2 por alguno del Trabajo (PT), 2 por alguno de Convergencia, 1 por el Partido Alternativa Social y 1 por el Congreso de Colima.

A diferencia de las reformas legales a la Ley Federal de Radio y Televisión aprobadas por el Congreso en 2006 (la llamada “Ley Televisa”) en la LIX Legislatura, las reformas a esa misma ley en la LX legislatura ya no encontraron en el PRI al resuelto promotor de las primeras, no obstante que sin los votos de ese partido ambas reformas podrían haberse estancado en el Congreso. No hay gran diferencia en el número de iniciativas presentadas en la materia entre ambas legislaturas, no obstante que la LX tuvo como referente la elección presidencial de 2006, la más disputada, mediatizada y conflictiva en la historia reciente del país (Trejo, 2007 y 2010).

Cabe hacer notar que en ambas legislaturas prácticamente todas las iniciativas presentadas correspondieron a la acción individual de un solo legislador, con la excepción de dos casos en la LIX (una presentada por tres diputados del PAN y otra por uno del PRI y uno del PVEM) y de cuatro casos en la LX (una presentada por tres diputados del PRD, otra por tres del PVEM, una por diputados de todos los grupos y una por parte del todo el grupo parlamentario del PAN, ésta última el mismo día en que fueron aprobadas las reformas y adiciones a la ley en la materia, en la última sesión del periodo ordinario de esa legislatura). Salvo esas excepciones, ninguna iniciativa fue respaldada por más de tres diputados del mismo partido.

Ese hecho es significativo porque indica que la adecuación al marco legal en la materia no encontró un respaldo partidista notorio, no mereció una postura proactiva y, por tanto, asegurar la adhesión y disciplina partidista que, en cambio, otros asuntos legislativos requirieron, lo cual es comprensible ante la creciente dependencia de los agentes políticos respecto de la mercadotecnia electoral y de la propaganda radiofónica y televisiva. No es especulativo sugerir que, indistintamente del partido y cargo de elección, ningún agente político está dispuesto a exponer su propia carrera y las prerrogativas asociadas al poder devengado en los cargos públicos y partidistas, por encarar al poder mediático sometiéndolo a la regulación legal que se requiere en beneficio de los ciudadanos y de la nación (lo que se analiza en el siguiente capítulo).

Los diputados del PRD mostraron una mayor proclividad a promover algún cambio a la legislación en ambas legislaturas, el doble que el PAN y que el PRI (porque dos de éste fueron desechadas); lo cual fue más acentuado en la LIX legislatura cuando diputados del PRD presentaron igual número que las presentadas en conjunto por diputados del PAN y del PRI y el doble que cada uno de esos partidos por separado. En la LXI legislatura, mientras que el PRD, el PAN y el PT mantuvieron prácticamente el mismo nivel que en la anterior legislatura, en cambio el PRI lo incrementó ligeramente, el Verde Ecologista lo redujo en cuatro veces, en tanto que Convergencia y Nueva Alianza presentaron iniciativas por primera vez en esa LXI legislatura.

INICIATIVAS EN MATERIA DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, SEGÚN PARTIDO POLÍTICO, PRESENTADAS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO GENERAL: MÉXICO, LIX Y LX LEGISLATURAS

PARTIDO	LIX LEGISLATURA		LX LEGISLATURA		LIX Y LX LEGISLATURAS	
	#	%	#	%	#	%
PAN	5 (1)	16.12	4 (4)	11.76	9	13.84
PRI	4	12.90	7 (5)	20.58	11	16.92
PRD	9	29.03	8 (6)	23.52	17	26.15
PVEM	8	25.80	1 (7)	2.94	9	13.84
PT	2	6.45	2 (7)	5.88	4	6.15
CONVERGENCIA	-		2	5.88	2	3.07
ALTERNATIVA	-		1	2.94	1	1.53
NUEVA ALIANZA	-		3	8.82	3	4.61
Diputado sin partido	1	3.22	-		1	1.53
Dos o más partidos	1 (2)	3.22	2 (8)	5.88	3	4.61
Minutas	1 (3)	3.22	3 (9)	8.82	4	6.15
Congresos Estatales			1 (10)	2.94	1	1.53
Total	31	100.0	34	100.0	65	100

Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema de Información Parlamentaria, Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, LXI Legislatura, México, 2010.

(1) Incluye una presentada por tres diputados de ese partido.

(2) Un diputado del PVEM y uno del PRI.

(3) De la Cámara de Senadores (25/04/2006) turnada a Comisiones.

(4) Incluye una presentada por todo el grupo parlamentario.

(5) Incluye dos iniciativas dictaminadas como desechadas por las Comisiones a las que se turnaron.

(6) Incluye una presentada por tres diputados de ese partido.

(7) Incluye una iniciativa dictaminada como desechada por las comisiones a las que se turnó.

(8) PRI (2), PAN (1), PRD (1), Convergencia (1) en 15/06/2007 y diputadas de todos los partidos 30/04/2009.

(9) Minuta de la Cámara de Senadores del 06/12/2007, del 19/02/2009 y del 16/04/2009.

(10) Congreso del estado de Colima.

La proclividad de diputados del PVEM en la LIX Legislatura puede entenderse, en parte, en razón del papel de ese partido como interlocutor y agente preferido de las televisoras para proteger sus intereses en un canal alternativo al cabildeo formal⁴⁹⁴; en tanto que la del PRD se convirtió en un objetivo político en sí mismo en la LX legislatura, porque ese partido consistentemente esgrimió que las televisoras, en especial Televisa, influyó en perjuicio de ese partido durante las campañas electorales de 2006, no obstante que uno de los escasos estudios serios de ellas ofrece evidencia que permite refutar esa hipótesis (Trejo, 2010).

Ahora bien, que los partidos compartan la postura de no enfrentar a los medios de comunicación masiva, ni confrontar en especial a la televisión, en razón del interés compartido por conseguir un tratamiento favorable hacia sí en la difusión mediática de información y opinión política, no significa que no haya diferencias en cuanto al enfoque que los legisladores tienen, según el partido político, acerca de la función de la radio y la televisión, lo cual puede ser constatado a partir de la orientación de las medidas legislativas propuestas, en cada legislatura del contexto analizado.

4.5.1. Legislatura de la disputa

Así, por lo que corresponde a las iniciativas presentadas en la LIX Legislatura, hay una clara orientación de los diputados del PRD a cerrar el paso a la propaganda gubernamental, la que sirva a la proyección de imagen de funcionarios públicos y la que hagan los particulares o empresas, con fines partidistas y electorales. Todas reflejan una más marcada proclividad a la intervención del Estado ante las maneras en que operan las empresas concesionarias, al prohibir que puedan prestar servicios de telecomunicaciones, así como sobre los contenidos generales que difunden, tal como las propuestas que van desde ampliar los tiempos que correspondan al Estado, transmitidos en horario hábil del día y cuyos contenidos elaborará la secretaría de educación, hasta instituir que serán encadenadas todas la señales cuando se requiera

⁴⁹⁴ No es fortuito, en ese sentido, el trascendido común en el circuito de opinión política mediática, en especial referido por analistas y periodistas en columnas publicadas en diversos periódicos, acerca de que la empresa Televisa habrían impulsado, mediante un intensivo cabildeo y negociación con las cúpulas partidistas, que la Comisión de Radio y Televisión sea presidida por algún diputado del PVEM.

difundir información relevante de alguno de los poderes públicos, según lo determinen éstos, pasando por instituir la promoción de los derechos indígenas o impedir contenidos que impliquen discriminación hacia grupos vulnerables de la población.

De las dos iniciativas de diputados del PT, una propone que la mitad del tiempo del Estado sea utilizado para difundir las plataformas programáticas, idearios y actividades partidistas, y la otra mitad a difundir programas culturales y educativos por parte del gobierno federal; paradójicamente la otra iniciativa propone que sea obligatoria la transmisión de actividades deportivas en que participen seleccionados de la nación.

Varias de las presentadas por diputados del PVEM se dirigen, con mayor insistencia que las de otros partidos, a orientar la programación dirigida a los niños, misma que deberá promover su “interés político” (sic), evitar discriminación alguna y promover la educación ambiental, alguna también considera que los tiempos del Estado deben estar distribuidos en porcentajes fijos, pero en una proporción que otorga la mayor jerarquía al ejecutivo federal y la menor al poder judicial; otras dos para que se prohíba la publicidad de establecimientos mercantiles de apuestas y escenificación de concursos de azar y la transmisión de mensajes que no mencionen que ha sido modificado el audio o el video y una más, la única relacionada con su ideario partidista, para que los emisores de señal de radio y televisión adopten medidas para minimizar la contaminación debida a ondas electromagnéticas.

Por su parte, entre las iniciativas presentadas por legisladores del PRI se observa la tendencia a intervenir lo menos posible y, en su caso, a atender al criterio de las radiodifusoras y televisoras, para la programación horaria del Estado, absteniéndose de regulación alguna en cuanto a contenidos en general, lo cual junto con el mantenimiento en el ejecutivo de la facultad de gestionar los tiempos oficiales, es deudor de la misma postura adoptada por los gobiernos que ese partido presidió a nivel nacional. Es de llamar la atención que alguna iniciativa vindica las efemérides en contenidos cívicos que den cuenta de la historia nacional y que, por lo menos, una iniciativa establezca que garantizar el derecho a la libre expresión e información deba ser un criterio al que atienda el Estado, en la tarea de protección y vigilancia de los

contenidos difundidos, así como una clara vindicación de la difusión de cobertura local en términos de abrirla a organizaciones civiles de todo tipo.

Con un sentido aún más liberal en lo político y más conservador en lo moral, en el conjunto de las iniciativas, las propuestas del PAN se dirigen a establecer orientaciones respecto de los contenidos difundidos, desde asegurar, en especial, la dignificación de la mujer y la familia, el respeto recíproco entre personas y la solidaridad humana, hasta el otorgamiento de permisos a asociaciones religiosas para instalar sus propias estaciones de transmisión de radio y televisión. En este caso es de llamar la atención en que de ese partido provenga una medida, si bien pertinente, que invade la esfera de libertad invocada por esos medios a favor de sus intereses particulares, al proponer la prohibición de difundir “escenas que ridiculicen o denigren los sentimientos y el honor de una persona o familia cuando padezca alteración emocional con motivo de una tragedia, sin la autorización expresa por parte de las personas afectadas”, conducta habitual en la televisión y que constituye la base de la trama narrativa de programas de entretenimiento llamados “talk show” y “reality show”, en la cual también incurren, con más frecuencia de lo que se cree, los noticiarios de televisión.

4.5.2. Legislatura de la discordia

Con relación a las iniciativas presentadas durante la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, en principio puede considerarse la presentada por un diputado del PAN, por cuanto es reveladora del clima político y la postura común de los partidos, inducidos por la puesta en entredicho de la dependencia de todos ellos respecto de los medios de comunicación, en lo relativo al papel y la influencia que éstos ejercen en la comunicación política y el comportamiento electoral. La iniciativa se dirige a prohibir la propaganda gubernamental que contenga nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción de una persona, un rasgo habitual en ese tipo de contenidos contratados por los gobiernos en los tres niveles de jurisdicción política administrativa, según puede ser constatado con evidencia documental. Otras dos iniciativas muestran el talante de los legisladores de ese mismo partido ante la regulación del quehacer mediático electrónico. Una diputada propuso “fomentar la eliminación de estereotipos

establecidos en función del sexo”, otra legisladora obligar a los difusores de televisión para que las transmisiones permitan activar mensajes escritos que sirvan a las personas sordas para percibir los datos auditivos de lo difundido, en tanto que otro diputado postuló establecer sanciones a quien interfiera, use o explote las transmisiones de un concesionario o permisionario.

Entre las iniciativas presentadas por diputados del PRI destaca una que propone incluir al Congreso federal, entre los sujetos que transmitan programas de divulgación, con orientación social, cívica y cultural, atribución que hasta ahora solo corresponde al poder ejecutivo, a organismos de la administración pública federal y de los estados y a los Ayuntamientos; otra por la que se establece que la comisión bicameral de radio y televisión del Congreso será integrante del Consejo Nacional de Radio y Televisión, presidido por la secretaría de gobernación del Ejecutivo federal, y que aquella instancia del Congreso sea la que determine las informaciones trascendentes, que por la parte que corresponde al Poder Legislativo, deban transmitir encadenadas todas las estaciones de radio y de televisión, atribución que también hasta ahora solo corresponde al Poder Ejecutivo federal. Otras iniciativas de ese partido se dirigen a prohibir la difusión de contenidos que impliquen referencias a cualquier tipo de discriminación, en especial entre hombres y mujeres.

De las dos iniciativas presentadas por diputados del PT, una propone destinar una frecuencia de radio al Congreso federal y la otra fue desechada. Un legislador del PRD propuso dar atribución a las secretarías de salud y educación pública, del ejecutivo federal, para concertar con los concesionarios la difusión de contenidos que alerten a los menores de edad acerca del consumo de productos nocivos para la salud. Otro de ese partido propuso prohibir la publicidad de cualquier bebida alcohólica, incluida la gradación exenta en la prohibición vigente; uno más promovió que se obligara a las televisoras a incorporar el uso del lenguaje de señas en los noticiarios televisivos y transmisiones de contenido cultural, avisos oficiales y de emergencia para protección civil, en tanto que otros coincidieron en proponer medidas para proteger a los niños frente a la difusión de mensajes comerciales elaborados con tácticas persuasivas

propias de la publicidad engañosa, incluida la promoción de programación para adultos con evocaciones sexuales explícitas.

Una de las iniciativas de diputados de Convergencia suprime la distinción entre tiempos de transmisión que corresponde al Estado, a partidos y a organismos electorales y los agrega en la primera categoría; la otra obliga a brindar apoyo técnico, tanto a concesionarios como a permisionarios, ante los cambios que deban hacerse con motivo de la transición de señal analógica a digital en la radiodifusión. Las iniciativas de las legisladoras de Nueva Alianza se dirigen a dar a los contenidos difundidos orientaciones que afirmen los derechos de los niños y que sirvan a ellos para desarrollar un sentido crítico, finalidad similar perseguida por la iniciativa presentada por el Congreso de Colima aunque con énfasis en prohibir contenido sexual explícito en horario hábil; otra legisladora de ese partido propone otorgar a las comunidades indígenas permisos para operar estaciones de radio y asegurar su participación en espacios de transmisión que sean concedidos a los municipios. La iniciativa de una diputada del partido Alternativa Social se dirige a establecer que la difusión en radio y televisión deberá evitar la promoción de “comida chatarra”.

No puede ser omitida la observación de que la única iniciativa presentada por el Partido Verde, en esa legislatura, haya sido dictaminada en sentido negativo por las Comisiones a las que fue turnada y, por tanto, desechada como asunto concluido, lo que habitualmente ha ocurrido en las Cámaras del Congreso⁴⁹⁵, cuando el legislador o el partido apremian para que se resuelva sobre la iniciativa o bien en virtud de acuerdos entre partidos que, promovidos mediante una coalición de mayoría, conduzcan a descontarla al momento de resolver (discutir y deliberar o votar) otra iniciativa que, con similar propósito, consideran más idónea o que menores riesgos o conflictos pudiera entrañar. No debe parecer como algo fortuito que el Partido Verde

⁴⁹⁵ Situación estructural del funcionamiento de los Congresos y Parlamentos que, aunque habitualmente es referida como “congeladora legislativa”, deriva de la función de filtraje, legítima y justificada en términos de racionalidad procesal ante el cúmulo de iniciativas que son presentadas, a cargo de las Comisiones legislativas, no obstante que pueda ser flanqueada mediante la consecución de acuerdos partidistas, lo que desde 1997 requiere de los votos de por lo menos dos de los partidos más grandes además de los partidos minoritarios para prosperar. Al respecto véase el planteamiento de Nacif (2000) que ayuda a desmitificar ideas comunes a propósito de la “productividad” y la “parálisis” legislativa en el Congreso mexicano en esa coyuntura.

Ecologista, en esa legislatura, solamente haya presentado una iniciativa, habida cuenta de ese partido reclamó para uno de sus legisladores la presidencia de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, encargada de discutir iniciativas legislativas en esa materia y elaborar el dictamen respectivo para su discusión en el pleno de la Cámara.

4.5.3. ¿Legisladores federales encarando al escrutinio mediático?

Para los efectos de este estudio debe hacerse notar que, tanto en la LIX como en la LX legislaturas, algunas de las iniciativas presentadas, para modificar la Ley Federal de Radio y Televisión, contemplan por lo menos alguna medida que favorezca la rendición de cuentas por parte de legisladores federales, a partir de los contenidos difundidos en tales medios de comunicación, o bien que regule éstos en términos de reconocer a los ciudadanos como sujetos destinatarios y, en razón de ello, que deba ajustarse a criterios expresos para evitar la parcialidad de la información y la opinión y para asegurar el pluralismo de puntos de vista, lo que hasta ahora ha quedado a expensas de la auto-regulación deontológica que tales medios se impongan a sí mismos.

Al inicio de la LIX Legislatura, una iniciativa de un diputado del PRD propuso modificar el artículo 7 de esa ley para que incluir entre las estaciones difusoras cuya operación sea favorecida por el Estado a aquellas que, “por su potencia, frecuencia o ubicación regional, representen un espacio de participación social de comunidades y sectores ciudadanos”, y cuya programación sea preferentemente con contenidos educativos, culturales, artísticos y de servicio social a la comunidad. Al término de esa misma legislatura, una diputada del PVEM propuso adicionar el artículo 5 para procurar que las trasmisiones de radio y televisión sean conducidas con “objetividad, veracidad e imparcialidad”. Dos iniciativas de diputados del PRI, ambas presentadas al iniciar la LX Legislatura, pueden ser consideradas las más ambiciosas por parte de ese partido, en cuanto al alcance de las propuestas; una establece, por un lado, una distribución paritaria de los tiempos oficiales del Estado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, así como que el correspondiente a éste último deba incluir una distribución de tiempo de transmisión de “las iniciativas, opiniones y actividades de los legisladores en las demarcaciones que representen” y otra prohíbe, por otro lado, que los

contenidos difundidos en cadena nacional, correspondientes a informaciones trascendentes de interés público, que los poderes del Estado consideren que deban ser dados a conocer a la población, sean utilizados “en detrimento de alguno de los Poderes del Estado”, “para descalificar sus decisiones, reconvenir a sus miembros o causar controversias sobre los asuntos públicos”.

Más relevante aún resulta ser una iniciativa presentada por un diputado del PRD, el 9 de diciembre de 2008, en esa misma legislatura, que adiciona un segundo párrafo al artículo 77 de esa Ley, con el propósito de establecer que: “Los programas de noticias deberán transmitirse sin opinión alguna del conductor. Los programas de opinión deberán presentar siempre opiniones a favor y en contra del tema en cuestión, respetando los principios de equidad para la exposición de las opiniones divergentes sobre el tema específico”, así como que “Los concesionarios y permisionarios de radio y televisión crearán consejos de ética y equidad para garantizar la imparcialidad de la información y la equidad de las opiniones que se generen en sus transmisiones”, habida cuenta que el texto vigente solamente indica la obligación de incluir información acerca de acontecimientos y asuntos de interés general nacionales o internacionales. Se trata de uno de los escasos casos en que, desde la perspectiva legislativa, por un lado se encara la opinión particular del conductor de noticiario como un aspecto que debe ser evitado, al difundir información de interés general, que los radiodifusores están obligados a incluir en la programación diaria, de acuerdo con el texto vigente del artículo y ley referidos. Por otro lado, en que se reconoce la especie “programas de opinión” como un contenido. y respecto de éstos la iniciativa establece que deberán ser incluidas “opiniones a favor y en contra del tema” tratado en ellos.

Con independencia de la ambigüedad de los términos utilizados en la formulación de esa disposición, este caso resulta insólito en el enfoque con que los legisladores suelen ocuparse de la regulación en materia de contenidos difundidos por radio y televisión. Pero es relevante señalarlo en la medida en que, como prueba este estudio, los programas de opinión política han adquirido un estatuto más relevante en televisión de lo que ocurría en el pasado, se han diversificado los formatos utilizados en su producción y ellos son vehículo para la circulación de formas simbólicas culturales

mediante las cuales tiene lugar la mediatización de prácticas democráticas a cargo de los ciudadanos; los legisladores federales se ven crecientemente sometidos a un escrutinio público, a partir de intereses y perspectivas de una élite mediática, que actúa como conduciéndolo en nombre de los ciudadanos.

Qué tan significativo sea el impacto de tales programas es algo que debe ser evaluado, tal como ya se argumentó, no solamente en cuanto al número de la audiencia, que por cierto puede ser tan numerosa o más que el equivalente a la militancia que cualquier partido en México puede acreditar. Por encima de ese criterio es más relevante el relativo al perfil de esa audiencia, la posición y el papel que desempeñan en sus respectivos ámbitos de acción cotidiana, sobre todo los usos que dan a las interpretaciones que hacen de los contenidos cuando se relacionan con otros; aspectos de orden cualitativo que se ponen en juego más allá del contexto de recepción, tal como coinciden en sostener diversas perspectivas de investigación, de lo que Hall (1980) y Fiske (1987) llaman “discurso cultural”, Lull denomina “extensión cultural” (1990)⁴⁹⁶ y Thompson (1998) define como “reelaboración discursiva”, es decir del “poder cultural” de las audiencias a partir de la imaginaria mediática televisiva⁴⁹⁷.

⁴⁹⁶ Los medios pueden mantener simbólicamente unidas a personas que no se conocen entre sí, puesto que las audiencias se definen más por sus identidades y sus discursos que por sus similitudes demográficas (Skovmand y Schroder, 1992); los actores sociales entienden y usan la imaginaria simbólica de la televisión, dentro y fuera del hogar, como miembros de grupos sociales formales e informales, según su propia dinámica interpersonal y cultural, coaliciones y jerarquías, rasgos todos que influyen en el modo en que interpretan y usan los mensajes de cualquier medio (Lull, 1997: 221).

⁴⁹⁷ Según Lull (1997:99,100) no se refiere solo a valores, prácticas y rituales tradicionales, cuyo significado es duradero y compartido por las personas, situados en los ámbitos locales en que viven, sino que abarca un vasto conjunto de recursos simbólicos expresados por los medios y otras instituciones sociales y que las personas habitualmente seleccionan de entre las representaciones simbólicas y los discursos mediados públicamente accesibles, y entretienen en el marco de los discursos culturales particulares de su vida cotidiana. La gente ejerce el poder cultural cuando emplea manifestaciones simbólicas, incluidas las asociaciones culturales e ideológicas sistémicas, estructuras de autoridad y reglas que las sostienen, en sus estrategias culturales de acción; las imágenes simbólicas mediadas se tornan culturalmente poderosas, en primera instancia, por el modo en que las organizan y presentan las instituciones que las patrocinan; el poder cultural refleja, en última instancia, el modo en que individuos y grupos construyen y declaran sus identidades y actividades en esferas situadas de vida cotidiana y en que esas expresiones y conductas influyen en los demás. La televisión comercial presenta una imaginaria que abarca desde noticiarios, documentales y programas de realismo hasta fantasía total, frivolidad y absurdo, porque en los contenidos se reúnen fragmentos simbólicos en relatos que se asemejan en algunos sentidos y no en otros a lo que nos rodea; el contenido seleccionado se empaqueta atractivamente y se somete a juicio del público; ciertos temas, géneros, estilos y hasta personajes producen una reacción positiva y tocan las identidades, emociones, opiniones, gustos y ambiciones de los miembros de la audiencia. En ese sentido “lo popular” en la cultura significa que representaciones

4.6. Partidos y legisladores ante la rendición de cuentas y el escrutinio ciudadano

Ahora bien, otra observación relevante corresponde a que la legislación en materia de rendición de cuentas, en aquello que atañe al legislador en lo individual, no haya merecido atención para los partidos y legisladores federales en la LIX y LX Legislaturas, con tres excepciones, según se constata al revisar las iniciativas legislativas que en esa materia fueron presentadas en la Cámara de Diputados. La razón que explicaría teóricamente ese comportamiento ha sido argumentada en este estudio, en términos del dilema relativo a que la representación democrática transcurra, en los hechos, inevitablemente como representación de intereses. Pero vale la pena aquí reparar, sin perder de vista el objetivo de investigación, en algunos hechos empíricos que permiten mostrar la validez del postulado, mismo que ha llevado a la discusión, en diversas latitudes del mundo, acerca de la capacidad y calidad de la representación de los intereses ciudadanos por parte de los gobernantes electos, y como derivación de esa cuestión a la reciente discusión, en el caso de México, de la justificación y viabilidad para establecer la reelección consecutiva al cargo.

Las tres excepciones corresponden a la LIX legislatura, cada iniciativa fue presentada por solamente un legislador, dos de ellas a un año de iniciada (4 de septiembre y 6 de noviembre de 2007) a cargo de un diputado del partido Alternativa Social y de uno del PAN, respectivamente, y la tercera a la mitad de esa legislatura (1 de abril de 2008), a cargo de un diputado del PRI, mismas que tienen en común el nivel de la norma afectada y el objeto de regulación. Se trata de reformas a la Constitución Política de la república, para que los legisladores federales deban informar acerca de sus actividades en el desempeño del cargo, dejando a la ley secundaria los términos específicos en que deba hacerse. Si bien las dos primeras comparten entre sí las disposiciones de que los legisladores federales deban rendir informe, con periodicidad anual y ante los ciudadanos de la circunscripción en la que fueron electos, mientras que la primera postula expresamente que deba hacerse por escrito, un plazo perentorio para hacerlo

simbólicas originadas en ámbitos cotidianos y acogidos por gente común pasan a ser circulados como bienes mercantizados (Ibid: 102).

y que no podrá ser invocado el carácter de información pública reservada, la segunda postula que la información deberá concernir a la actividad legislativa y propone que sea suspendida la “dieta” (remuneración laboral) como sanción impuesta al legislador que incumpla sin causa justificada la rendición del informe. Es de llamar la atención que, según la exposición de motivos de la respectiva iniciativa, la primera justifica establecer las disposiciones en la Constitución en razón de que la legislación secundaria, en materia de transparencia gubernamental, es omisa en cuanto a la rendición de cuentas individual del legislador federal, no obstante su avance en otros aspectos; en tanto que en la segunda iniciativa se postula que la tarea del legislador consiste también en “orientar” al ciudadano, para que ejerza los beneficios a que tiene derecho a través de los programas gubernamentales de bienestar social.

La tercera iniciativa llama aún más la atención por varias razones. En primer término porque es postulada por el mismo diputado que antes presentó, al inicio de esa misma legislatura, en pleno transcurso de las acciones de protesta electoral del PRD, dentro y fuera de la Cámara, una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de Radio y Televisión (a la que ya me referí), con el propósito de establecer que el Congreso podrá operar estaciones de radio y televisión, disponer de la mitad del tiempo oficial de transmisión que corresponde al Estado y que parte de éste deberá ser destinado a que los legisladores informen a los ciudadanos acerca de las actividades que desempeñan. En segundo término porque ese informe lejos de constreñirse a las actividades legislativas contendría aquellas que el legislador lleve a cabo para promover la atención de quejas y peticiones de los ciudadanos en la circunscripción electoral. En tercer término, aunque más relevante para los fines de este estudio, es que a diferencia de las dos anteriores ésta iniciativa hace vinculante dos aspectos: por un lado la difusión del informe del legislador mediante el acceso a los medios de comunicación masiva, impresos y electrónicos, operados por concesionarios (en los que se permite la comercialización de publicidad) y, por el otro, que las opiniones del legislador (“sobre la situación económica, política y social imperante”) son materia de esa difusión por la vía de tales medios. Algo que podría pensarse ilusorio, aunque posible, si bien objetable en distintos aspectos, tal como se verá adelante.

Esta iniciativa destaca además porque, en la exposición de motivos (argumentación), expresamente es invocada la mediación política y la “social” y muestra una concepción acerca de la primera que, al margen de las imprecisiones teóricas, conceptuales y jurídicas de que adolece, parece ser ampliamente compartida en la práctica entre los legisladores federales, con independencia del partido político del que emanen.

4.6.1. Alcance de la rendición de cuentas de legisladores federales

Hay evidencia suficiente de ello, fácilmente verificable, no solamente porque ellos están en constante contacto con su electorado, al que convocan con frecuencia a reuniones periódicas, tanto para informar acerca de lo que están haciendo, como para recibir quejas, peticiones y eventualmente propuestas de diverso tipo por parte de ciudadanos con distintas características, y lo hacen tanto tratándose de ciudadanos en lo individual como en grupo, incluso organizados de manera informal.

La observación mediante trabajo de campo en la Cámara de Diputados permitió constatar que, con frecuencia, varios diputados se sirven del apoyo institucional, que ese órgano brinda regularmente, para llevar a cabo ese tipo de reuniones en las instalaciones del recinto legislativo. A eso habrá que añadir el hecho de que todos los diputados rinden un informe anual de actividades, en cuyo contenido incluyen, con diverso nivel de detalle y profundidad, algún apartado relativo a la legislación con la que están comprometidos y que han impulsado, en lo individual o como parte del partido al que pertenecen, así como un apartado que da cuenta de las acciones y actividades llevadas a cabo para atender a las peticiones y quejas ciudadanas, sección en la cual por cierto hay mayor esmero en detallar y sobresaltar, invariablemente, tal como se verificó al revisar los informes de diputados, de diversos partidos, en el curso de la elaboración de la investigación.

Es claro que todos los legisladores federales dejan constancia de haberse reunido, por lo menos una vez cada año, con los ciudadanos del distrito electoral o la entidad en la que fueron electos, a través del informe de actividades que rinden con esa periodicidad; así como que todos ellos, en los hechos, llevan a cabo actividades

directamente motivadas y con la finalidad expresa, incluida la de publicarlo lo más posible, de gestionar o promover la atención a quejas o peticiones ciudadanas ante las diversas autoridades e instituciones públicas, incluso ante empresas, sindicatos u organizaciones civiles de diverso tipo, con frecuencia filantrópicas. Estas tareas son, para la mayor parte de los legisladores federales, las más redituables, en términos de la aceptación, valoración positiva y hasta consecución de adhesión o respaldo por parte de los ciudadanos, que de ese modo el legislador puede conseguir.

Es así aún más en el caso de diputados y de aquellos elegidos por el principio de mayoría relativa, puesto que en su momento la campaña electoral les permitió conocer mejor al electorado de la circunscripción territorial correspondiente, las situaciones y los problemas más comunes y ante cuáles de ellos intervenir y, calcular así, el alcance o logro que, en su caso, pueda hacer valer ante su respectivo partido político, en pos de continuar su propia carrera política. La revisión de los informes anuales de diputados permite constatar que no hay alguno que no sea elaborado para destacar los logros y que éstos lo sean con relación a alguno de los compromisos asumidos públicamente por el legislador durante la campaña electoral respectiva.

Del total de 50 reuniones en la sede de la Cámara, en las que fue autorizado el acceso como observador, se registró algún tipo de ejercicio de escrutinio ciudadano, en una cuarta parte de ellas no originado por quejas, si bien todas fueron ocasión para que los asistentes, la mayor parte mujeres (adultas y en un rango de entre 70 y 80% del total de ellos), presentaran alguna petición, ajena al asunto tratado en el doble de proporción que las relativas al mismo. El patrón de comportamiento de las reuniones es muy homogéneo, con independencia del tamaño del grupo asistente. El legislador hace una exposición inicial, ocupando en promedio un tercio del tiempo total que duró la reunión, cede la palabra a los asistentes para escuchar los planteamientos con plena libertad pudieron hacer, el legislador responde puntualmente invariablemente en actitud de ecuanimidad, o bien a las interrupciones por parte de los asistentes, la mayoría de ellas para pedir aclaraciones o ampliar la información o explicación. Atenidos estrictamente a la evidencia obtenida, no se sostiene, por consiguiente, la arraigada creencia, incluso socorrida en el discurso académico y más aún en el

mediático, de que los legisladores federales en México no informan a la ciudadanía acerca de su actuación en el desempeño del encargo, o bien que eluden o rehúyen someterse a escrutinio de los ciudadanos; no es así por lo menos en el caso de las reuniones que en persona sostienen con ellos en el recinto legislativo, si bien tendrá que considerarse que tales reuniones son previamente concertadas, así ocurrió en el 80% de los casos, y en el 100% de casos de visita espontánea se trató de ciudadanos conocidos por el legislador o que conocían al legislador; ambos casos correspondieron a las tres cuartas partes de las reuniones en que el escrutinio estuvo motivado en alguna petición o queja por parte de los ciudadanos⁴⁹⁸.

De la misma manera es insostenible que en su desempeño tampoco atiendan a las demandas ciudadanas, porque se observa que la mayor parte de ellos enfoca su trabajo, en especial al iniciar y antes de concluir la legislatura y más aún los electos por el principio uninominal⁴⁹⁹, precisamente en tareas de gestoría de las demandas y quejas ciudadanas, aún cuando quienes argumentan en contrario esgriman como razón, en su mayor parte, que el legislador no dispone del incentivo que significaría, en su opinión, el establecimiento de la reelección inmediata al cargo.

4.6.2. Institucionalización de la rendición de cuentas de legisladores federales y locales

La cuestión de fondo reside en la cobertura de las acciones, los mecanismos utilizados y la relevancia y utilidad de la información con que los legisladores rinden cuentas a la ciudadanía, así como en los criterios con que seleccionan las quejas y demandas que

⁴⁹⁸ Aunque se aprovechó participar en cualesquier reunión a la que se permitió el acceso, se buscó guardar la misma proporción que guarda la representatividad de cada partido, así como el principio de elegibilidad (uninominal o plurinominal); deliberadamente no se consideró el tema o asunto a tratar, porque el objetivo de observación se constriñó a verificar si tenía lugar durante la reunión alguna acción de crítica o discusión al desempeño del legislador, su partido o bien otros legisladores y partidos o funcionarios o autoridades locales, por parte de los asistentes; siete de cada diez reuniones tuvieron lugar en días de sesión de Pleno, el resto otro día hábil de la semana; cuatro de cada diez de las reuniones concertadas correspondieron a un desayuno o comida e incluyeron un paseo por las instalaciones; en todas las reuniones entre los visitantes acudieron menores de edad; el número de asistentes no influyó en la duración de la reunión, la que dependió del legislador; cuando se produjo alguna discusión o controversia, en ningún caso se produjo desavenencia ni agresión alguna.

⁴⁹⁹ No hay diferencia entre el cargo desempeñado, pero tratándose de Comisiones y Comités, de hecho es claro que quienes detentan cargo directivo en ellas, más aún el(la) Presidente(a) que los secretarios, aprovechan la infraestructura y los servicios logísticos institucionales en favor del trabajo de gestoría.

deciden atender, el esmero con que lo hacen y las motivaciones y los propósitos reales que se ponen en juego. Al no estar regulados tales criterios en la Constitución general, en consonancia con el principio de distribución de competencia que ella establece⁵⁰⁰, cada entidad federativa establece su propia regulación jurídica al respecto.

El debate teórico radica en la decisión de si la materia deba ser regulada de manera centralizada o descentralizada⁵⁰¹, sin conculcar soberanía a los estados o socavar la arraigada convicción de que los legisladores se deben a los ciudadanos de la circunscripción territorial en que fueron electos, lo cual a la mayor parte de los agentes políticos no parece reñirse con el principio de atender al interés público general; hay varias explicaciones, pero sin duda la generalización del ejercicio patrimonialista del poder público, así como del esquema “clientelar” para relacionarse con los ciudadanos, ha hecho extensiva y habitual la práctica de la gestoría de demanda ciudadana de legisladores ante las autoridades y la burocracia designada; no es fortuito que persista la idea en buena parte de los ciudadanos que es más efectivo que un legislador pueda conseguir, si se lo propone, que una queja, demanda o asunto sean atendidos. La gestoría de demandas ciudadanas no es, sin embargo, una tarea legalmente instituida, pero es asumida como legítima y, por eso, repercute en la evaluación del desempeño.

Esa paradoja explica, en parte, que la rendición de cuentas individual por parte de legisladores no haya sido desarrollada la regulación jurídica a nivel federal y que en cambio se haya establecido en todas las entidades federativas del país, con similar concepción, si bien sin criterios homogéneos. Así, casi en la mitad de ellas (13)⁵⁰² ha sido instituida al nivel de la norma de mayor jerarquía, la Constitución del estado, y a la

⁵⁰⁰ Conforme al artículo 124, toda aquella materia jurídica que no está expresamente conferida exclusivamente a la Federación, corresponde a la competencia de los estados y del DF.

⁵⁰¹ De acuerdo con la comisionada presidenta del IFAI se requiere una ley general en materia de transparencia y acceso a la información, que permita homologar la legislación local, de cara a la adecuación necesaria en congruencia con la reforma constitucional del derecho a la información, aprobada en 2007; ante la declaración pública de esa omisión por parte del Congreso, dilatada durante un año y medio, el presidente de la Comisión de la Función Pública (PVEM) de la Cámara de Diputados reconoció el incumplimiento y que el proceso legislativo se hallaba paralizado debido a “cuestiones administrativas”, en tanto que la presidenta (PAN) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, se comprometió a destrabar el proceso para impulsar la respectiva reforma legal, para la que senadores del PRI y PRD elaboraban iniciativas (periódico *Milenio Diario*, 23 de marzo de 2010).

⁵⁰² En el orden cronológico en que fue promulgada: Hidalgo, Zacatecas, Guerrero, Quintana Roo, San Luis Potosí, Nayarit, Campeche, Puebla, Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, Durango y Baja California Sur.

vez en el nivel de la ley secundaria aplicable, la ley orgánica del Congreso respectivo, en tanto que en 15 de ellas las disposiciones aplicables se establecen solamente en este último nivel jerárquico de las leyes, incluida la ley orgánica de la ALDF del DF, diferencia que indica el peso otorgado a esa responsabilidad democrática. Las disposiciones establecidas varían principalmente en cuanto a la forma (plazos y requisitos), siendo lo más notorio que solamente en Quintana Roo se establece, al nivel constitucional, la disposición de suspender el pago de la remuneración al legislador ("dieta") que incumpla en rendir informe de su desempeño y que la rendición de cuentas sea respecto a las actividades desarrolladas incluso fuera del distrito respectivo. Cabe advertir que en cuatro entidades federativas (Chiapas, México, Nuevo León y Yucatán) las disposiciones correspondientes son adoptadas, por la legislatura en turno, mediante acuerdos parlamentarios, lo que evidentemente implica un margen de discrecionalidad según la correlación de fuerzas en la composición partidista de la correspondiente legislatura.

Los datos de la observación documental son válidos hasta 2009; en 8⁵⁰³ de los 13 estados que cuentan con disposiciones en su respectiva Constitución, la rendición de cuentas está vinculada a realizar obligatoriamente visitas del legislador a la respectiva circunscripción en que fue electo, para vigilar el estado que guardan los asuntos de gobierno de mayor interés para los ciudadanos (tales como programas de bienestar social, desarrollo económico, seguridad pública, procuración de justicia y derechos humanos), a partir de la cual el legislador debe proponer medidas para solucionar los problemas identificados a cada respecto, con la sola excepción del estado de Baja California Sur. Llama la atención que en 3 estados, en los cuales rige esa disposición, el instrumento de rendición de cuentas consiste en una "memoria", así como que en las constituciones de 4 estados se asigne al legislador local el papel de "gestor" de las demandas de los ciudadanos y de "promotor" de las medidas para atenderlas adecuadamente. A éste último respecto es de destacar que en Guerrero sea haga expresamente y sin hacer distinción entre el principio por el cual hayan sido electos, mientras que en Durango ese papel solo corresponda al diputado electo por mayoría (uninominal); en tanto que en Veracruz se estipula la "gestoría" como una de las

⁵⁰³ Zacatecas, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, Puebla, Chihuahua, Tamaulipas y Baja California Sur.

funciones legislativas (junto con la presupuestal y de control), caso en el que además se prevé que el informe que rindan legisladores electos por lista de partido (plurinominales) sea divulgado según lo dispuesto en la ley secundaria aplicable⁵⁰⁴, así como que en Zacatecas se deba rendir cuenta al Congreso acerca de la gestoría de la demanda ciudadana, por escrito y en informe distinto al relativo al desempeño de las actividades legislativas, disposición que apunta hacia verse sometido a un ejercicio de escrutinio ciudadano directo respecto a ambos tipos de actividad en el cargo. Las particularidades y semejanzas se pueden comparar en el siguiente cuadro.

REGULACIÓN LEGAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LEGISLADORES LOCALES, MÉXICO: 2009

ENTIDAD/ VIGENCIA	INSTRUMENTO	PERIODICIDAD	MECANISMO Y PROCEDIMIENTO
BCS: 24/12/2008	Informe individual	Al término de cada periodo de sesiones	Rendido en persona ante los ciudadanos del distrito respectivo y por escrito al Congreso, respecto a actividades dentro y fuera del distrito respectivo.
CAMPECHE: 09/09/2008	Informe de la Diputación Permanente	Al término de cada año de ejercicio	Rendido en sesión solemne por la Presidencia de la Diputación Permanente, dando cuenta de las actividades de la legislatura y las de cada diputado.
CHIHUAHUA: 11/11/2008	Informe individual	Por lo menos una vez durante cada receso de sesiones	Rendido en persona ante los ciudadanos del distrito respectivo o del lugar en que residan los electos por representación plurinominal y por escrito al Congreso, respecto a actividades realizadas dentro y fuera de la circunscripción electoral respectiva, dando cuenta de la situación que guardan los asuntos en materia educativa, de derechos humanos y procuración de justicia, así como del desempeño de los funcionarios de gobierno, con recomendaciones conducentes.
DURANGO: 12/11/2008	Informe individual	En junio de cada año de la legislatura	Rendido por escrito (es opcional que lo hagan en persona), los diputados uninominales ante el cabildo de los municipios contenidos dentro del respectivo distrito, acerca de gestiones e intervenciones en beneficio de sus habitantes y los diputados plurinominales ante la Comisión Permanente
GUERRERO: 06/05/2008	Informe individual	En cada receso de sesiones	Rendido por escrito ante la Comisión Permanente, a partir de vigilar el estado que guardan los programas de desarrollo económico y social y anomalías en seguridad pública, proponiendo medidas conducentes.
HIDALGO: 30/03/2008	Informe individual	Primer trimestre de cada año legislativo	Rendido a los ciudadanos en general sin indicar la forma, acerca de las actividades desempeñadas en el desempeño del cargo.
NAYARIT: 28/08/2008	Memoria individual	Al inicio de cada periodo de sesiones	Presentada por escrito ante el Congreso, que contenga observaciones de la situación que guardan los asuntos de interés y los obstáculos para la debida atención de la población, del desempeño de los funcionarios de gobierno y las medidas conducentes.

⁵⁰⁴ El Distrito Federal es la única entidad en cuyo norma aplicable la difusión del informe de legisladores deba ser a través de diversos soportes técnicos, impreso, electrónico, magnético, óptico u otro, además de que será publicado en el sitio oficial de la Asamblea Legislativa, algo que también se contempla en el caso del estado de Aguascalientes.

			Toda oficina pública deberá proporcionar los datos que el legislador le solicite formalmente.
PUEBLA: 24/08/2008	Memoria individual	Al inicio de cada periodo de sesiones	Presentada por escrito ante el Congreso, que contenga observaciones de la situación que guardan los asuntos de interés y los obstáculos para la debida atención de la población, del desempeño de los funcionarios de gobierno y las medidas conducentes. Toda oficina pública deberá proporcionar los datos que el legislador le solicite, salvo aquella de carácter reservado.
QUINTANA ROO: 02/07/2007	Informe individual	Al inicio de cada periodo de sesiones	Rendido por escrito ante el Congreso, respecto de las actividades desarrolladas dentro y fuera de su distrito correspondiente, previa visita al mismo; incumplimiento es sancionado con la suspensión del pago de las remuneraciones correspondientes al periodo correspondiente.
SAN LUIS POTOSÍ: 22/07/2008	Informe colectivo	A más tardar el último día de septiembre durante la legislatura	Rendido por el Presidente del Congreso, respecto "de sus actividades" (sic).
TAMAULIPAS: 19/11/2008	Memoria individual	Al inicio de cada periodo de sesiones	Presentada por escrito al Congreso, que contenga observaciones de la situación que guardan los asuntos en materia educativa, de beneficencia, industria, agricultura, ganadería, minería y vías de comunicación, y los obstáculos para la debida atención de la población, del desempeño de los funcionarios de gobierno y las medidas conducentes. Toda oficina pública deberá proporcionar los datos que el legislador le solicite, salvo aquella de carácter reservado.
VERACRUZ: 14/11/2008	Informe individual	En cada año de ejercicio de la legislatura	Rendido en persona ante los ciudadanos del distrito respectivo y por escrito al Congreso, respecto a sus funciones legislativas de control, presupuestales y gestoría y por escrito al Congreso los legisladores plurinominales, quienes lo harán del dominio público por el medio que establezca la ley aplicable.
ZACATECAS: 22/07/2008	Dos informes individuales	Uno por lo menos una vez durante la legislatura y otro cada año de ejercicio	Uno rendido por escrito ante el Congreso acerca de problemas que hubieran detectado en su respectivo distrito y con propuestas de solución, a partir de la visita al mismo y otro rendido en persona ante sus respectivos electores acerca del desempeño de sus responsabilidades

Fuente: elaboración propia a partir de datos contenidos en Centro de Documentación, Información y Análisis, *Informe de Legisladores. Estudio de iniciativas presentadas en el tema y de Derecho Comparado a nivel Estatal*, México, Cámara de Diputados, 2009.

Esta comparación es pertinente en cuanto a que revela la concepción política e ideológica que predomina entre los legisladores en México, acerca del papel que desempeñan, sus funciones, tareas y responsabilidades de rendir cuentas ante los ciudadanos, condición que puede ser habilitadora de la práctica de escrutinio público que ellos pueden ejercer de cara a sancionar la responsabilidad de los gobernantes electos durante el desempeño del cargo, no solamente a través de las elecciones, un

aspecto fundamental del que depende, en parte, la legitimidad política de legisladores y partidos políticos en el contexto de la transición democratizadora. No hay que perder de vista que la evidencia indica que la mayor parte de los legisladores federales se han desempeñado en algún cargo de elección previo, muchos como diputado en la entidad federativa en la que han hecho trabajo político y partidista, tampoco puede dejar de considerarse la entrada en vigencia de la legislación local en esta materia, que corresponde en todas las entidades federativas al año de 2008, que corresponde al periodo elegido del corpus textual de emisiones televisivas para la prueba de hipótesis.

La regulación legal en materia de rendición de cuentas es afectada por la correspondiente en materia electoral; ya se señalaron algunas implicaciones; aquí conviene destacar que los legisladores federales disponen de mayor margen de discrecionalidad para informar acerca de su desempeño, preservado en el contexto por una resolución del TRIFE emitida en 2009, por la cual resolvió favorable al PVEM la apelación que ese partido interpuso para revocar una sanción que le impuso el IFE (multa de hasta 20 millones de pesos) debido a la contratación de propaganda de diputados de ese partido, presuntamente dando cuenta de su trabajo legislativo, difundida mediante anuncios (“spots”) en televisión de señal abierta nacional (448 veces en sus diversas versiones) entre los días 2 y 18 de abril, no obstante tratarse de periodo de precampañas electorales para renovar la Cámara de Diputados, que los mensajes promovieran claramente a ese partido y estar ya vigente la prohibición establecida en el artículo 41 de la Constitución Política federal. En la opinión pública publicada ese hecho fue juzgado como una perniciosa estrategia de ese partido, por la cual pretendió hacer pasar propaganda electoral como si se tratase de promover la rendición de cuentas por parte de sus diputados, quienes alegaron ante el IFE y el Tribunal que con ello daban a conocer su informe anual de labores a la ciudadanía⁵⁰⁵.

⁵⁰⁵ En los mensajes aparece la imagen física de diputados de ese partido hablando acerca de iniciativas de ley presentadas para penalizar con muerte a secuestradores y homicidas, en tanto que una popular actriz enuncia expresiones tales como “porque nos interesa tu vida, Partido Verde”, “El Partido Verde sí está preocupado y sí está haciendo cosas”; “Los diputados del Verde sí están preocupados y sí están haciendo cosas”, y en los que se despliega emblema y leyenda de identificación de ese partido.

Al revocar la sanción impuesta por el IFE a ese partido el TRIFE resolvió que los diputados federales pueden, en los mensajes propagandísticos que contraten para difundir su informe anual, hablar a favor de su partido político, siempre y cuando no apelen al voto y sus mensajes sean difundidos durante el periodo previo a precampañas y entre una campaña y otra; en su sentencia el Tribunal no concedió relevancia a la fuente de financiamiento que sea utilizada con ese propósito. En opinión de un consejero electoral, tal resolución fue sorpresiva porque no había excepciones a la prohibición de contratar directamente propaganda electoral en radio y televisión, facultad exclusiva otorgada al IFE según dispone el artículo 41 de la Constitución federal, luego de la reforma legal electoral de 2007 y, más aún, porque abrió la posibilidad para que el informe de labores de legisladores federales sea considerado como la excepción a esa prohibición. En su opinión, los argumentos de los magistrados pecaron de un exceso de dogmatismo jurídico, al considerar que los mensajes en radio y televisión (“spots”) que emitan los diputados y sólo busquen “informar a la ciudadanía”, no influyen “ni directa ni indirectamente” en las inclinaciones de los ciudadanos hacia el partido político respectivo.

Ciertamente puede considerarse que, tal como opina el consejero electoral referido, ambos propósitos de la prohibición constitucional, asegurar equidad en la promoción entre partidos políticos y evitar que éstos se valgan de la comunicación mediática, podrían verse socavados en el caso de que la sentencia del TRIFE tenga efectos como jurisprudencia a partir de otras apelaciones en el mismo asunto, pero igual reserva merece la idea del consejero de que los diputados pueden informar a la ciudadanía de su labor sin promover al partido referido. Por mencionar solamente alguno, entre otros, habría que considerar el caso cuando se trata de legisladores con mayor visibilidad pública, la cual permitiría por lo menos a una parte de los ciudadanos identificar el partido al que pertenecen, convirtiéndose en una especie de “vocero” del partido respectivo en radio y televisión por el solo hecho de aparecer hablando acerca del informe de labores legislativas. En todo caso, aunque el IFE no deba modificar el criterio que empeñó al tratar este caso, hasta en tanto no se sentara jurisprudencia, es claro que la reforma legal en materia electoral de 2007 no impidió el riesgo de que la promoción partidista en radio y televisión pudiera aparecer velada (“disfrazada”)

detrás de un informe de labores por parte de legisladores federales, tal como ocurre en el caso de titulares del poder ejecutivo en las entidades federativas. Ese riesgo deviene directamente de uno de los rasgos de la mediatización de la política, a saber, la propensión hacia la personalización en la comunicación mediática al informar del acontecer político, especialmente acentuado en televisión, a partir de la imagen de los personajes que aparece en noticiarios, así como de los juicios vertidos sobre algunos de esos personajes en los programas televisivos de opinión política, en los que especialmente queda asociada la imagen del personaje al juicio emitido respecto del mismo, otro de los efectos indirectos asociados al fenómeno del escrutinio público mediático al que se ven sometidos legisladores y partidos.

Con lo expuesto en cuanto a este aspecto se advierte el hecho que cada legislador federal puede decidir, y en los hechos decide, de modo personal y unilateral a qué demandas o quejas y a cuáles ciudadanos prestar atención, con qué esmero ocuparse de ellas y con qué detalle dar cuenta a quienes no están implicados en ellas, aunque éstos últimos tendrían derecho, y con frecuencia razones, para conocerlas y, en especial, cuando de cualquier modo afectan su vida. Varias situaciones observadas en campo permiten apuntalar el argumento.

Por un lado, descontando las reuniones de consulta pública, tanto las organizadas y convocadas por cada partido como por las comisiones legislativas de las Cámaras, que implican invariablemente al escrutinio público ciudadano, es un hecho que legisladores de todos los partidos reciben por cuenta propia a ciudadanos en las instalaciones de la Cámara, ya sea en la oficina con que cada uno cuenta en la sede o en salones destinados a ello, incluso en días de sesión ordinaria de pleno. Tales reuniones son convocadas por el respectivo diputado o senador y en ellas, aún en las organizadas exclusivamente para dar a conocer la actividad legislativa, los ciudadanos convocados difícilmente desaprovechan la ocasión para hacer llegar al legislador alguna queja, petición o consulta, ya sea personal o de interés grupal; no es fortuito que incluso le hagan saber alguna crítica, inconformidad o bien alguna propuesta. Pero en cualquier caso se trata de interlocutores aceptados por el legislador. No es irrelevante caer en la cuenta de la proporción que representa el conjunto de ciudadanos atendidos con

relación al total de ellos en la respectiva circunscripción electoral. En ella, y no en la sede la Cámara, tiene lugar la mayor parte de la interlocución entre el legislador y los ciudadanos con quienes decide sostenerla; la actuación es estratégica, de modo que el legislador prevé los asuntos a tratar y, en su caso, avanza en alguna gestión que asegure su resolución por parte de la autoridad competente. Esa es la razón por la cual la mera atención, sin un resultado favorable tangible, permite al legislador ejercer alguna influencia efectiva en el proceso de mediación política que entra en juego y que propicia dar por descontada la necesidad de regular legalmente la rendición de cuentas en lo individual. Esas consideraciones aplican aún en el caso, cada vez más frecuente, de movilizaciones organizadas por parte de grupos que, ostentando un carácter ciudadano, llevan a cabo acciones de inconformidad o protesta, o bien de respaldo a algún legislador, grupo de ellos o partido político, en las instalaciones de la Cámara o bien en las oficinas respectivas en la circunscripción de que se trate.

Debe llamar la atención el hecho de que ninguna de las tres iniciativas presentadas, en materia de rendición de cuentas en cuanto al desempeño individual de legisladores, ha sido dictaminada. Ahora bien, la cuestión pertinente —y sin duda relevante—, a partir de lo expuesto, no concierne tanto a por qué los partidos políticos la dan por descontada, sino a si la regulación legal en esa materia contribuiría a hacer efectiva la responsabilidad política de gobernantes electos, durante el desempeño del cargo y de cara a los ciudadanos, en ausencia de otras medidas regulatorias para asegurar esa responsabilidad. Si bien esclarecer esa cuestión no es objeto de este estudio, puede considerarse la experiencia en otros países.

Los hallazgos de una investigación que, por ejemplo, indaga comparativamente la relación de contacto recíproco entre ciudadanos y legisladores, en países de Europa Occidental, demuestran que el trabajo que el parlamentario lleva a cabo a favor de los electores de su respectivo distrito, alienta el apoyo de éstos hacia aquel en lo individual⁵⁰⁶, aunque no modifica las percepciones que tienen hacia el Parlamento o la

⁵⁰⁶ Se acumula en tanto que disposición favorable hacia el parlamentario, ya sea en términos de votos, de conseguir la reelección o una mejor posición en las listas que postula el partido en la siguiente elección.

legislatura, en especial aquellas alimentadas por o soportadas en la difusión mediática. Aún así se reconoce insuficiente la evidencia para sugerir que la actividad en los distritos modifica el desempeño de un partido en la elección, lo cual depende más de los líderes partidistas y de su manejo de los medios de comunicación, o bien de que pueda mejorar la percepción popular respecto del Parlamento (Norton, 2002: 310).

Si bien se reconoce que no es posible establecer un patrón generalizable entre países, ese estudio encontró que: con independencia del sistema electoral, el contacto entre ciudadanos y parlamentarios tiende en general a aumentar⁵⁰⁷; es mayor entre parlamentarios uninominales que plurinominales⁵⁰⁸; los ciudadanos evalúan de modo distinto al senador que al diputado; cuando la elegibilidad del parlamentario para ser reelegido dependa del partido se reduce la medida en que aquel presta servicios a su respectivo electorado, y viceversa⁵⁰⁹; los ciudadanos hacen la distinción entre los integrantes del Parlamento y éste en tanto que institución; y que los medios de comunicación contribuyen a que la Cámara de los Comunes sea vista como arena de confrontaciones partidistas poco edificantes, con ausentismo y proclive para el escándalo, tal como ocurre en Reino Unido, Alemania e Irlanda. Aunque en Bélgica es mal vista la práctica del parlamentario de solicitar al elector al cual se han prestado servicios, el voto, la afiliación al partido o financiamiento a la campaña, dicha práctica está sin embargo bastante extendida (Norton, 2002: 310).

⁵⁰⁷ Debido al notorio aumento de las demandas ciudadanas a los parlamentarios, correlativo al crecimiento del sector público y las políticas públicas procesadas; Inglehart (1977) sostiene que con la post-industrialización, al adiestramiento derivado de la educación de masas y del influjo de los medios de comunicación se ha sumado el crecimiento de grupos de presión y de la movilización ciudadana para ocuparse de temas distintos a los tradicionales, impuestos y gasto público, llevando al electorado a estar más dispuesto y ser más capaz de hacer demandas a sus representantes en el Parlamento.

⁵⁰⁸ Así, mientras que en Irlanda, Reino Unido y Alemania es extensivo, frecuente y visto como una parte relevante de la actividad política, en Portugal e Italia, en donde se utilizan las listas, es poco y los parlamentarios no consideran que debiera ser mayor; al comparar Irlanda con Bélgica, en donde aunque un distrito de senador está contenido en la mitad de la superficie del país, la variable que explica la notoria actividad electoral consiste en si la reelección depende del partido o de los electores.

⁵⁰⁹ En Reino Unido, los ciudadanos valoran de modo altruista que los parlamentarios se ocupen de sus electores; en cambio, en Bélgica creen que los parlamentarios actúan solamente atendiendo a sus propios intereses y en su propio beneficio; tales diferencias repercuten en un cambio de enfoque al momento en que los parlamentarios interactúan en el Parlamento Europeo, en donde los miembros electos bajo el sistema listas regionales tienen mayor contacto con los electores que aquellos electos bajo el sistema de listas nacionales.

El mismo estudio arrojó evidencia para probar que el tipo de servicio que reciben los ciudadanos por parte de los parlamentarios varía de acuerdo con la percepción que éstos últimos tienen acerca de su función, aunque no permitió probar en cambio si las características del distrito que representan también interviene⁵¹⁰. En cambio, se verificó que no hay correlación significativa entre trabajo y marginalidad en el distrito.

Importa dejar asentado dos consideraciones, en cuanto presentan semejanza con la situación en México. Por una parte, que aún en los Parlamentos en donde la relación ciudadano-parlamentario es más desarrollada y sólida, no está libre de problemas, en especial el representado por la coexistencia e incompatibilidad de la representación nacional (interés colectivo nacional) y la representación específica (grupos de intereses o de presión)⁵¹¹. De acuerdo al estudio, el localismo aqueja en Irlanda, la falta de equidad en Bélgica, el equilibrio entra tareas en distrito y en comisiones o asamblea plenaria en Bretaña es problemático, en menor medida en Alemania y en Portugal el primero es casi inexistente. Por otra parte, que se trata de una cuestión que depende de la cultura política, aún allí en donde las reglas institucionales establecidas pretende regular dicha relación, tal como en el caso de Portugal.

Es claro que la redistribución del poder político, que en los hechos se ha traducido en que ningún partido por sí mismo consiga ser mayoría desde la LVII y hasta la LXI legislaturas, ha repercutido en la manera en que los legisladores conciben y

⁵¹⁰ En países con una tradición de servicio hay un estrecho contacto y se cumplen las expectativas, tal como Irlanda y Reino Unido, en donde el tiempo dedicado a trabajar en el distrito no se considera una obligación sino una misión personal que proporciona satisfacción; en Italia no se la considera dirigida al individuo sino hacia grupos sociales; en Alemania los legisladores se asumen como vigilantes del ejecutivo trabajando en conjunto, no como agentes individuales enfocados a recoger las quejas y los agravios de los distritos, si bien Saalfeld estudiando el Parlamento alemán encontró que sus integrantes se quejan de la carga implicada por “obligaciones representativas” cuya presión ejercida va en detrimento de la calidad de su trabajo, al restarles tiempo para ocuparse en innovar políticas nacionales.

⁵¹¹ En la Constitución Política de ese país se establece que los parlamentarios deben ocuparse exclusivamente de las tareas de la representación nacional, porque es indeseable distraer el tiempo que exige examinar las leyes y vigilar al ejecutivo por dedicarlo al trabajo en el distrito y a favor de grupos de interés (representación específica). Allí se argumenta que ayudar a resolver problemas particulares de los ciudadanos corresponde a otras instancias y que “los miembros del Parlamento, como parte de la entidad colectiva del Parlamento, son los únicos que pueden someter al gobierno a un escrutinio autorizado e institucional” (Norton, 202: 315), argumento que teniendo validez tendría que ser matizado, de acuerdo con este autor, ya que los parlamentarios pueden, por lo menos en ciertas situaciones, actuar en forma autorizada a favor de los ciudadanos en una forma en que ninguna otra instancia puede hacerlo.

desempeñan su tarea. Aunque los datos no son concluyentes, de acuerdo con los resultados del estudio comparativo acerca de predisposiciones de legisladores (creencias, valores y opiniones)⁵¹², ante la cuestión acerca de a quién debía responder prioritariamente la representación ejercida, aunque se mantiene la convicción en que la prioridad corresponde a todos los ciudadanos en general, muy por encima de las otras opciones de respuesta consideradas (representar “a todos los votantes de su partido” o “al partido al que se pertenece”), es claro que tiende a ganar fuerza su especificación hacia los electores de la entidad federativa en la que fue electo el legislador, lo cual es más notorio luego de la alternancia en la Presidencia y tiende a redistribuirse de modo distinto según el partido político del que emanó el legislador.

Así, mientras la primacía⁵¹³ otorgada por legisladores de los tres partidos más representativos, durante la LVII y LVIII legislaturas, a la opción de representar “a todos los mexicanos”, 88.5% (PRI), 88% (PAN) y 75% (PRD) pasó a ocuparla la opción de representar “a los electores de la entidad federativa a la que pertenece”, al interrogarse a los diputados de la LIX legislatura, 59.6% (PRI), 65.8% (PAN) y 40.9% (PRD) si bien en esta ocasión aquella opción fue omitida⁵¹⁴.

Ahora bien al ser interrogados acerca de la medida en que toman en cuenta (“mucho”, “bastante”, “poco” o “nada”) la opinión de diversos grupos, personas o instituciones cuando toman decisiones políticas, predomina la predisposición a considerar la opinión de los electores de la respectiva circunscripción (91.9%, 90.1% y 93.5%, sumados quienes contestaron “mucho” y “bastante” en 1997, 2000 y 2003, respectivamente), en segundo término hacia “los votantes del partido respectivo” (84%, 85.9% y 95%) y en tercer término hacia “la opinión pública en general” (76.6%, 76.9% y 83.8%), éstas

⁵¹² Que integraron las legislaturas LVI (1994-1997); LVII (1997-2000); LVIII (2000-2003) y LIX (2003-2006) de la Cámara de Diputados en México; basado en encuestas, como parte del proyecto “Élites Latinoamericanas, 1994-2005” dirigido por el investigador M. Alcántara, del Instituto Interuniversitario de Iberoamérica, de la Universidad de Salamanca, véase *Actitudes, valores y opiniones de las élites parlamentarias de México*, México: CESOP, Cámara de Diputados, 2006.

⁵¹³ La escala utilizada fue “mucho”, “bastante”, “poco” o “nada” y el resto de las otras opciones presentadas fueron. “a todos los votantes de su partido” y “al partido político al que Usted pertenece”.

⁵¹⁴ Cabe señalar que el argumento debe tomarse con reserva dado que dicho estudio no justifica por qué en el caso de la LIX legislatura fue omitida entre las opciones de respuesta la consistente en “a todos los mexicanos en general”, que sí fue presentada en al levantar la encuesta en las legislaturas precedentes.

tres opciones por encima de atender a la opinión de “los líderes del respectivo partido” (73.4%, 73.6% y 76.1%) y en mayor medida aún que a la opinión de la militancia (69.7%, 64.5% y 82.7%) y de “otros legisladores de su partido” (58.6%, 54.8% y 72.4%), en tanto que se tenía en cuenta en menor magnitud a la opinión de “grupos de interés” (53.2%, 52% y 51.3%), a ésta por encima de los “medios de comunicación” (40.3%, 44.2% y 56.9%) y a ésta en mayor medida que a del gobierno” (42.0%, 41.4% y 45%), todas opciones de respuesta al aplicar la encuesta en esas legislaturas.

Es relevante considerar, por un lado, que actualmente muchas encuestas de opinión transitan por radio y televisión, es difícil deslindar su representatividad y pueden aparecer como manifestaciones de “opinión pública”, lo que hace relevante, por otro lado, hacer notar las diferencias de percepción al respecto entre los legisladores de los tres partidos con mayor representatividad y según la legislatura.

PREDISPOSICIÓN EN LEGISLADORES HACIA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL: MÉXICO: 1997-2003
(Hasta qué punto Usted toma en cuenta la opinión de (...), cuando toma decisiones política?) (1)

PERIODO	1997 (LVII Legislatura)		2000 (LVIII Legislatura)		2003 (LIX Legislatura)	
PARTIDO	Mucho y Bastante (%)	Poco y Nada (%)	Mucho y Bastante (%)	Poco y Nada (%)	Mucho y Bastante (%)	Poco y Nada (%)
PAN	80.7	19.3	80.0	18.0 (2)	84.1	15.8 (3)
PRD	80.3	9.7	100.0	0	95.4	4.5 (4)
PRI	98.2	1.7	96.1	0.9	98.3	1.7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Alcántara, M. (dir.) Proyecto de Élités Latinoamericanas (1994-2005), Universidad de Salamanca, *Actitudes, valores y opiniones de las élites parlamentarias de México*, México: CESOP, Cámara de Diputados, 2006, pp. 100-102,

(1) Encuesta a integrantes de las legislaturas LVI, LVII, LVIII y LIX, por muestreo aleatorio estratificado según representatividad partidista en la asamblea, aplicadas en 1998, 2001 y 2004, ver metodología.

(2) el 2% corresponde a quienes no supieron qué opción elegir o no contestaron

(3) el 0.1% corresponde a quienes no supieron qué opción elegir o no contestaron.

(4) el 0.1% corresponde a quienes no supieron qué opción elegir o no contestaron.

PREDISPOSICIÓN EN LEGISLADORES HACIA MEDIOS DE COMUNICACIÓN: MÉXICO: 1997-2003
(Hasta qué punto Usted toma en cuenta la opinión de (...), cuando toma decisiones política?) (1)

PERIODO	1997 (LVII Legislatura)		2000 (LVIII Legislatura)		2003 (LIX Legislatura)	
PARTIDO	Mucho y Bastante (%)	Poco y Nada (%)	Mucho y Bastante (%)	Poco y Nada (%)	Mucho y Bastante (%)	Poco y Nada (%)
PAN	29.0	70.2 (2)	64.6	35.4	55.3	44.7
PRD	48.4	51.6	67.7	33.3	45.5	50.0 (3)
PRI	41.4	58.6	42.3	57.7	64.9	35.1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Alcántara, M. (dir.) Proyecto de Élités Latinoamericanas (1994-2005), Universidad de Salamanca, *Actitudes, valores y opiniones de las élites parlamentarias de México*, México: CESOP, Cámara de Diputados, 2006, pp. 100-102,

(1) Encuesta a integrantes de las legislaturas LVI, LVII, LVIII y LIX, por muestreo aleatorio estratificado según representatividad partidista en la asamblea, aplicadas en 1998, 2001 y 2004, ver metodología.

(2) el 0.8% corresponde a quienes no supieron qué opción elegir o no contestaron

(3) el 4.5% corresponde a quienes no supieron qué opción elegir o no contestaron.

(4) el 0.1% corresponde a quienes no supieron qué opción elegir o no contestaron.

A partir del conjunto de la evidencia presentada, es claro que en México los legisladores federales se ocupan en tareas de gestión de demandas ciudadanas y del escrutinio público mediático, pero predominantemente al nivel de la respectiva circunscripción electoral, tal como ocurre en democracias consolidadas incluso con sistema parlamentario de gobierno; así como que todos ellos rinden cuentas individualmente y están conscientes de que las restricciones de esa rendición podrían ser superadas si se legislara lo conducente en materia de difusión en medios de comunicación electrónica masiva, aún con las limitaciones que eso imponga, pero evidentemente no han procedido y reconocen los riesgos implicados. De cara a esa medida no podría descartarse, además, el hartazgo que resultaría, desde el punto de vista de los ciudadanos, convertir la rendición de cuentas individual en ocasión de hacer campaña electoral en medios masivos. Pero habría que tomar en cuenta que eso es algo que, en los hechos, siempre ha ocurrido en México, no solamente a través de la propaganda gubernamental utilizada para enaltecer la persona del titular del cargo, sino incluso con tácticas tales como confrontar, a partir de la visibilidad pública que éste otorga, a los adversarios partidistas, mediante ruedas de prensa para “dar la nota periodística del día” o propiciar escándalos políticos a partir de revelaciones, aún cuando éstas llegaran a vulnerar la vida íntima de la persona. En todo caso, esa cuestión merece, sin duda, ser indagada sistemáticamente en México.

A partir del análisis expuesto, puede afirmarse que, de manera semejante al escrutinio ciudadano, la rendición de cuentas de legisladores federales tiene en la publicitación su principal restricción. Debido al deterioro de la imagen pública de ellos en general y, correlativamente, la liberalidad con que la televisión y en especial la radio operan en el país a ese respecto, de cara a una sociedad crecientemente comprometida con la exigencia, tanto de que el Estado ejerza el debido control sobre tales medios como de que partidos políticos y legisladores federales rindan cuentas de mejor manera, éstos

han cobrado conciencia de la necesidad de modificar el régimen legal que regula el funcionamiento del sistema de comunicación mediática. No obstante, esa toma de conciencia tiene, en realidad, motivaciones que solamente tiene en común la idea de que cualquier modificación legal en la materia conlleva enfrentarse a tales medios, que éstos son imprescindibles para las campañas electorales y que el costo por modificar el *status quo* es más alto que el beneficio por mantenerlo, de cara a las repercusiones que se tendrían ante el desprestigio que, en términos de opinión pública, tales medios pueden contribuir a intensificar en contra.

En el contexto de estudio, tal y como se verá en el siguiente capítulo, la reforma legal a la Ley Federal de Radio y Televisión aprobada en 2006 en esa materia tuvo repercusiones, sin duda, en el cálculo que los legisladores federales, de todos los partidos políticos, hicieron al considerar las medidas pertinentes en materia de propaganda electoral en radio y televisión, dentro de la reforma electoral presagiada como asunto ineludible de la agenda legislativa desde el inicio de la LX legislatura, que llevó a emprender reformas a la Constitución aprobadas en 2007 y, en congruencia con ellas, modificaciones al COFIPE en 2008 y a la Ley de Radio y Televisión en 2009 (al término de la LX Legislatura), mediante las cuales el Congreso revirtió las prerrogativas otorgadas por la primera de las reformas legales referidas.

Aquí solamente importa tener presente que el proceso gradual de toma de conciencia, acerca de la necesidad de regular legalmente la radio y la televisión, no parece responder mayormente al interés de obligar a los concesionarios a servir al interés público general que, sin duda, está en juego cuando se trata de la comunicación mediática pública, en aquello que concierne a la rendición de cuentas y el escrutinio público ciudadano. Con base en la evidencia obtenida mediante trabajo de campo, a través de entrevistas en profundidad y observación participantes en reuniones de diputados con ciudadanos⁵¹⁵, es claro que la regulación legal de la actuación de tales

⁵¹⁵ Entre enero y mayo de 2009, a una muestra de 10 diputados federales de la LX Legislatura, 3 del PRI, 2 del PAN, 2 del PRD, uno del PVEM, uno del PT y uno de Convergencia; ninguno de los cuales autorizó grabación de la entrevista y cuyos resultados se presentan en el anexo 2 de esta investigación.

medios es un asunto a considerar en la medida en que, a partir de su experiencia, el legislador federal considera:

- a) que ha resultado afectado en lo particular o bien su respectivo partido político, debido al tratamiento otorgado en la difusión mediática;
- b) que ocuparse del tema puede redituarse en una valoración favorable entre la opinión pública, más allá del respectivo electorado cautivo y
- c) que no le han valido en su propio provecho, las relaciones y el trabajo de cabildeo que, en su caso, haya promovido con tales medios de comunicación, evaluación que será referida más al plano local que nacional.

Algunos argumentan que en México la ausencia de reelección inmediata al cargo constituye un obstáculo y que los actores políticos no tienen incentivos para ocuparse en rendir cuentas al ciudadano acerca de su desempeño y para someterse a un amplio escrutinio público. Otros consideran que se trata de un atavismo relativo a una cultura política de “corte autoritario” arraigado entre la mayoría de la población, cuyo desvanecimiento no ha tenido lugar durante la transición democrática. Habría que explorar las creencias entre la clase política y los cambios que en su caso han tenido lugar o no, en términos de favorecer la promoción de prácticas democráticas relativas al establecimiento de responsabilidad política, al margen y con independencia de que haya reglas que así lo establecieran, tal como la reelección consecutiva.

De acuerdo con el estudio sobre actitudes, valores y opiniones de los diputados federales ya referido, en dos anteriores y dos posteriores legislaturas a la alternancia partidista en la Presidencia de la república, se concluye que, en su mayor parte e indistintamente del partido de adscripción, los legisladores consideran que:

- A. el éxito de la campaña y la experiencia en la circunscripción electoral son factores más decisivos que la adscripción al partido y la plataforma electoral legislativa, para obtener éxito electoral;
- B. las posturas más pertinentes y con mayor probabilidad de éxito para abrirse paso e imponerse se ubican en el centro del espectro ideológico convencionalmente compartido y,

- C. que sólo ante ciertos asuntos públicos conviene el alineamiento partidista en la toma de decisiones, puesto que el legislador debiera gozar de mayor libertad para tomar su propia decisión, dado que hay conciencia en común de que el legislador se debe al electorado de su circunscripción.

Mientras que, en el conjunto de los partidos con mayor representación, la convicción en que debe imperar la disciplina partidista (votar alineado a la determinación política del respectivo partido) decae de su nivel más alto en la LVI legislatura (53.8% entre diputados del PRI, muy por encima que para los del PAN, 13.3% y del PRD, 26.7%), al nivel más bajo registrado en la LVII legislatura en que, por primera vez, ningún partido consiguió por sí solo mayoría en la Cámara de Diputados, mientras que fue ganando fuerza la convicción de que la disciplina partidista debe estar circunscrita al tema o asunto de que se trate, que en general pasó del 6.0% en la LVI al 51% en la LVII y al 58.9% en la LVIII legislaturas⁵¹⁶, si bien mantiene mayor ascendencia entre legisladores del PAN (66.7% y 57.9%, respectivamente) que entre los del PRD (61.5% y 36.4%, respectivamente) y los del PRI (53.8% y 2.8%, respectivamente) y decrece su peso relativo de la LVIII a la LIX legislaturas. Ésta última tendencia es inversa a la que corresponde, entre todos los partidos, a la convicción de que los partidos deben permitir que el legislador decida o “vote según su propio criterio”; ella registra su mayor nivel en la LVI legislatura entre legisladores del PAN (76.7%) y del PRD (73.3%) y luego crece, aunque tras la alternancia en la Presidencia registra mayor acogida en la LVII aunque solamente entre legisladores del PRD (45.2%) y del PRI (45.0%), que la dispensada por los integrantes de la VIII (más en el PRD, 38.5% que en el PRI, 28.8% y el PAN, 21.6%), aunque tal convicción se vuelve incrementar hasta alcanzar su nivel más alto en la LIX legislatura para los legisladores del PRD (50%) y del PRI (49.1%) y se mantiene en el mismo nivel para legisladores del PAN (21.1%), entre quienes a la vez la convicción en la disciplina partidista registra su mayor nivel (21.1% en todo el periodo).

El comportamiento entre tales opciones estratégicas es, a lo largo de las cuatro legislaturas consideradas, más estable en el caso del PRI que en los otros dos partidos, con excepción de la LVIII en que prevaleció la idea de que el alineamiento del voto a la

⁵¹⁶ Notoriamente más en el PAN (96.8%) que en el PRD (51.6%) y en el PRI (28.3%) en la LVII legislatura.

decisión del partido (disciplina partidista) depende del tema o asunto de que se trate, pasó de 28.3% en la LVII a 53.8%, en la LVIII y a 22.6% en la LIX, en tanto que en ésta última, que correspondió al primer trienio de la alternancia, la convicción de votar según el propio criterio alcanza su mayor nivel (49.1%, frente al 28.8% en la LVIII y el 49.1% de la LVII legislaturas).

Habría varias rutas para encontrar la explicación a los comportamientos descritos. Pero cualesquiera que sea la que se elija tendría que tener a la vista, entre otros hechos, que conforme ha persistido la situación de que para decidir se requieren coaliciones legislativas (desde 1997 hasta la fecha), se ha tornado en un dilema responder al electorado y a la vez contribuir al éxito del partido al ser esa una elección clave ante decisiones más disputadas por las oposiciones al partido del Presidente; para asegurar que las negociaciones entre partidos sean fructíferas, es decir reditúen en algún beneficio para cada partido o distribuyan entre todos la dimensión del costo implicado) la disciplina y cohesión partidista son recursos estratégicos pero se han relajado en general en todos los partidos; de hecho han dado paso a la reducción del control partidista sobre las disputas de candidaturas y, en consecuencia, a la creciente desertión de aspirantes que se pasan a un partido distinto (“transfuguismo político”). En ese balance, no obstante, es claro que se ha cobrado conciencia del papel y del poder político del Congreso en tanto que efectivo contrapeso a la Presidencia, aunque eso no haya repercutido en el uso responsable de ese poder por las oposiciones (partidos distintos al partido del Presidente en turno), por lo menos aquella cuya radical estrategia para frenar al segundo gobierno del mismo partido tras la primera alternancia en México, implicó confrontarse con medios electrónicos de comunicación.

El contraste entre la convicción de representar a todos y representar a los ciudadanos de la respectiva circunscripción, no puede perder de vista que los legisladores de la LIX legislatura se comportaron, ante ciertos asuntos, con actitud menos liberal en términos de la intervención estatal en la economía, que legisladores de anteriores legislaturas, con excepción de la regulación legal de radio y televisión. Una razón de tal contraste radicaría en la fuerza que cobró la consideración de la reelección consecutiva de legisladores, ante el cual si bien las posturas partidistas han sido consistentes y

persistentes a lo largo de los últimos diez años en que ese asunto se instaló, por presiones de diversas corrientes de opinión pública, como tema de la agenda nacional, obligaron a los partidos a incorporarlo como asunto legislativo mediante los trabajos de la llamada “reforma del Estado” durante la LVIII y la LIX Legislaturas del Congreso.

Pero debe tenerse en cuenta que una razón que explicaría, entre otras, la proclividad a incrementar la intervención del Estado, proviene del reclamo, desde diversos ámbitos de la sociedad, que los partidos en el Congreso debieron encarar, debido a la ineficacia para llegar acuerdos y decidir respecto de asuntos torales del desarrollo nacional, en la difusión de escrutinio público referidos con la expresión “reformas estructurales”, es decir cambios a la legislación en materia fiscal, energética y laboral, mientras que entre la opinión pública publicitada se registraba fehacientemente una coincidencia en torno a la obligación y responsabilidad de los legisladores, en especial aquellos de oposición al partido del Presidente, para contribuir al mantenimiento de la estabilidad de la economía y la disciplina de las finanzas públicas, con el propósito de evitar una nueva crisis económica, apenas a ocho años de la última, estimular la inversión y el crecimiento económico para que se generaran nuevos empleos, así como elevar la competitividad de las exportaciones mexicanas en los mercados internacionales.

La tendencia hacia abandonar posturas extremas se explica, en parte, en que para encarar esos asuntos, habría que deslindar la responsabilidad en los costos implicados, lo que supondría relajar o hacer flexible la disciplina partidista y, a la vez, persuadir al electorado propio para deponer aquel tipo de posturas en ciertos asuntos, a partir del trabajo político y la efectividad de la comunicación en la respectiva circunscripción. En los hechos, parece verificarse que los legisladores, indistintamente del partido y tendencia ideológica, se volcaron al fomento de prácticas políticas de adhesión “clientelista” y de control corporativista, con base en la gestión de intereses y otorgando el acceso a los bienes públicos de manera discrecional y opaca, con una visión patrimonialista del poder y de los recursos públicos.

Tales prácticas socavan la autonomía del ciudadano y distorsionan el ejercicio crítico del razonamiento propio y libre de coacciones, así como la acción colectiva espontánea

y organizada al margen de los partidos políticos, que puede servir de cauce legítimo de deliberación y expresión pública de la inconformidad política y social. Una parte del problema es que los actores políticos no han sabido comunicarse con eficacia, aunque lo hagan con legitimidad, así como que las instituciones democráticas estatales no operen la comunicación pública intervenida orientándola hacia el aprendizaje político en las condiciones en que la mayor parte de los ciudadanos pueden ser destinatarios de tales esfuerzos. El papel de los medios electrónicos de comunicación es decisivo, por lo cual habrá que analizar, en el siguiente capítulo, el contexto en que se relacionan los legisladores con ellos, lo que permite complementar el entendimiento acerca del alcance y las restricciones del escrutinio mediático al que están expuestos.

CAPÍTULO 5. GOBIERNO, PARTIDOS Y MEDIOS EN EL CONTEXTO

En México, el fenómeno del escrutinio público mediático cobra fuerza en paralelo con el debilitamiento del control del Estado sobre los medios de comunicación colectiva. En el contexto de los procesos de liberalización económica y democratización política, en las dos últimas décadas, es claro que el Estado abandonó el desarrollo del sistema mediático a expensas del mercado, al abstenerse de regular legalmente su estructuración y funcionamiento y, en cambio, hacer imperar el principio liberal de la auto-regulación de orden deontológico, subordinando las políticas públicas al servicio de los intereses puestos en juego con los cambios tecnológicos, en los mercados de consumo cultural y, en consecuencia, en la mediatización de la política.

La acción estatal se restringió al solapamiento de las industrias y los mercados mediáticos, cuya alta concentración y libre arbitrio repercuten en la configuración del sentido de servicio público. Ese patrón de comportamiento subsistió no obstante los cambios políticos en el desarrollo del país, desde la última crisis económica de origen interno en 1995, la primera integración de la Cámara de Diputados sin mayoría de un solo partido político en 1997, la primera alternancia partidista en la Presidencia de la República en 2000 y hasta el primer refrendo de ésta en 2006, con el margen de votos más escaso hasta ahora (0.56% de la votación total). A pesar de la reestructuración del poder político, las posturas políticas y gubernamentales hacia el sistema mediático se caracterizaron por evadir la adecuación de la regulación jurídica; discrecionalidad y opacidad para autorizar concesiones (incluso al término del mandato sexenal) y favorecer los intereses económicos de las empresas privadas por encima del interés público⁵¹⁷, incluso de la opción representada por la radiodifusión del Estado⁵¹⁸.

⁵¹⁷ Con el primer Presidente emanado del PAN, el decreto expedido en 2002 modificó el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión redujo en cerca del 90% el tiempo aire que por concepto de pago en especie de contribuciones fiscales, estaban obligadas la radio y televisión concesionadas a ceder al Estado, lo que en televisión significó una reducción del 12.5% del total de transmisión a 1.25%.

⁵¹⁸ El segundo Presidente emanado del PAN designó a quien fue responsable de regular a esos medios con el último Presidente emanado del PRI, el operador político para la aprobación de una reforma legal que favorecía ostensiblemente a la principal televisora comercial del país; sustituyó a quien fungió de 1990 a 2000 como directora del canal de televisión del IPN por quien pasaría a hacerse cargo de la comisión técnica del grupo plural que el Senado integró para discutir la reforma legal al sistema mediático; pasando por el decreto expedido por el Presidente en 2022 para reducir los tiempos de transmisión en radio y televisión que corresponden al Estado mexicano.

La legislación y las políticas públicas no han impulsado, en los hechos, la desconcentración y la competencia en las industrias periodísticas, radiofónicas y televisivas; menos aún han atendido a las demandas sociales para inducir la diversidad de opciones y la calidad de la producción, programación y difusión de contenidos. Éstas han quedado, como consecuencia, subordinadas a decisiones mercantiles de dos grupos empresariales que, al detentar el control de la mayor parte de las concesiones distribuidas entre sus filiales en todo el territorio, han conducido a que los escasos operadores mediáticos de propiedad estatal desempeñen un papel marginal.

Esas omisiones se explican en el contexto, por un lado, debido a la expansión de un paradigma productivo basado en la generación de valor agregado a partir de la gestión de la información rentable y la gestión del conocimiento aplicado y, por otro lado, en el marco de las transformaciones culturales aparejadas con ese paradigma y aquellas derivadas de innovaciones tecnológicas en las comunicaciones, cuyas aplicaciones han extendido la producción simbólica y la circulación de bienes culturales a una escala social y espacial sin precedentes en la historia de la formación social capitalista. Entre esas innovaciones es de destacar la convergencia digital, en razón de las repercusiones que el desarrollo de las telecomunicaciones tiene en general en la vida social y, en particular, en las industrias culturales y mediáticas y sus respectivos mercados.

Es en ese contexto y marco que puede ser entendido: a) el predominio del modelo liberal de mercado en la regulación de industrias mediáticas y de telecomunicaciones; b) que la política gubernamental haya promovido primero la apertura al sector privado en las telecomunicaciones y luego la competencia en ese y en el sector de medios de comunicación audiovisual; c) que las reformas legales al régimen de la radio y la televisión hayan sido emprendidas una década más tarde de promovida la apertura y la competencia; d) que el alcance de tales reformas haya sido limitado y sesgado y que, desde luego, e) la regulación no haya acometido cuestiones torales, tal como la diversidad y calidad de contenidos, el carácter de bien público que entraña la difusión de información, la relevancia del debate público acerca de asuntos colectivos y la pluralidad ideológica y cultural que debieran prevalecer en la difusión.

5.1. Liberalismo económico versus democratización política

En consecuencia, el régimen de la comunicación mediática continuó a salvo del escrutinio ciudadano y de la presión social a favor de cambios de fondo, privado del sentido de servicio público que debiera regir su operación y de la función de responsabilidad social, entendida más allá de imperativos de rentabilidad económica⁵¹⁹. Tal como advierten Esteinou y Alva (2011), no obstante que en las últimas dos décadas diversos sectores de la sociedad han pugnado por el cambio del modelo de comunicación colectiva, mediante la adecuación de las leyes en materia de radio y televisión y de telecomunicaciones, salvo la reforma electoral del 2007 que modificó el proceso de la comunicación política electoral, hasta la fecha no se ha alcanzado ningún cambio jurídico sustantivo, en términos del reconocimiento de garantías comunicativas básicas para los ciudadanos. Por el contrario, se han producido retrocesos gestados para impulsar al duopolio de comunicación electrónica, dejando fuera tales garantías.

El desarrollo del complejo institucional mediático ha evolucionado a partir de una política gubernamental orientada a la desregulación legal, omisa para encarar el reto de hacer vinculante el predominio del interés público en la programación de contenidos, tomar en cuenta el escrutinio público respecto de ellos, hacer transparentes los criterios de otorgamiento y renovación de concesiones y asegurar la consulta a ciudadanos y organizaciones civiles al diseñar las políticas públicas que deban regir la operación del sistema concesionado, en sus diferentes niveles de cobertura geográfica de transmisión.

⁵¹⁹ Como efecto de la ausencia de una política de Estado en materia de comunicaciones, que necesariamente implicaría una legislación de esa índole; en su lugar ha imperado la tendencia del gobierno en turno a beneficiar a las dos empresas privadas que detentan el 94% de las concesiones para televisión y que en 2011 se asociaron entre sí y con la empresa (Iusacel) rival de la que detenta la mayor cuota de mercado de servicios de telefonía inalámbrica (Telcel); en 2010 al consorcio Televisa se otorgaron concesiones de telefonía y transmisión en banda ancha a precios muy por debajo de su valor comercial, se le toleraron prácticas de acaparamiento en el negocio de televisión por cable, además de brindarle respaldo político al sancionar a las empresas de telefonía del Grupo CARSO, que por su parte controla el 80% del mercado de telefonía fija y el 70% de telefonía inalámbrica y al que se ha impedido incursionar en transmisión de televisión por medio de telefonía e impuesto la multa más onerosa hasta ahora por incumplimientos de calidad en el servicio de telefonía inalámbrica, véase AMEDI (2011).

En un estudio acerca de las implicaciones y consecuencias de la reforma legal de 2006, referente obligado por la diversidad de académicos y ángulos de observación, al dar cuenta de la visión del Estado, de los criterios gubernamentales, los intereses en juego y las estrategias de los agentes mediáticos privados, Esteinou y Alva (2009) confirman las omisiones de la política gubernamental señaladas, poniendo de relieve el hecho de que durante 35 años el régimen de medios de comunicación electrónica fue intocado, no obstante las contradicciones de éste con respecto a la dinámica económica, política y cultural, que en contraste llevó a la modificación sustantiva del marco jurídico que regula otras áreas también estratégicas del desarrollo nacional⁵²⁰, paradójicamente al emerger la “reforma del Estado” en la agenda pública nacional.

Ese contraste es más notorio aún al considerar la continuidad, diríase cíclica con cada gobierno, por un lado de consultas a la sociedad, foros de debate con especialistas e iniciativas legales presentadas y, por otro lado, la movilización de ciertos grupos de la sociedad y la participación de académicos y organizaciones especializados, que como en ningún otro tema han tenido como resultado la maduración de propuestas que los gobernantes en México han tenido a la vista de cara a una reforma legal sustantiva⁵²¹.

En el trasfondo se hallan, tal como argumenta Alva (2009), dos visiones antagónicas entre sí y que sustentan proyectos opuestos para conducir la organización societaria, a partir del paradigma productivo y cultural de la gestión de la información y la generación del conocimiento en las sociedades contemporáneas. De un lado la que esa autora (2006) llama “sociedad de la información del mercado”, que funcionando estrictamente conforme a la lógica mercantil, configura las tecnologías de información y conocimiento como negocio, para ofrecer servicios socialmente segmentados según poder adquisitivo y prácticas de consumo cultural, con lo que prevalece el énfasis en la vigorización del funcionamiento del sistema económico. Por otro lado, aquella que en

⁵²⁰ Tales como propiedad rural, inversión extranjera, sistema financiero, régimen fiscal, sistema educativo, medio ambiente, sistema electoral y de partidos.

⁵²¹ Tal es el caso de la “iniciativa ciudadana” para transformar la obsoleta, deficiente e injusta Ley de Radio y Televisión y la Ley de Telecomunicaciones, en respuesta a una convocatoria a partir de marzo de 2001 por parte de la secretaría de gobernación del Ejecutivo federal, para revisarla (Alva, 2008).

sentido estricto debe ser llamada la “sociedad de la información y el conocimiento”, modelo que encarando la desigualdad social y la brecha digital entre la población pone las tecnologías de información y de comunicación al servicio de la generación y socialización de la “inteligencia colectiva” (siguiendo la noción de Levy, 2000), mediante políticas de Estado diseñadas a partir del principio de equidad social en el acceso, uso y aprovechamiento de la información, en tanto que un bien público de acceso universal; que antepongan las libertades individuales, los derechos sociales y el interés colectivo al interés privado; que regulen la competencia de mercado en términos de acotar o equilibrar el poder de dominancia económica, para hacer propicio que tales tecnologías pasen a ser herramientas que coadyuven en la construcción de sociedades más justas y democráticas.

En suma, los acuerdos entre las élites política y económica han conducido a que, en México, el Estado se haya limitado a desempeñar el papel de regulador, en lugar de ejercer la rectoría del desarrollo de las telecomunicaciones y la comunicación mediática electrónica, que la Constitución le confiere (Esteinou y Alva, 2009). Ante la relevancia que comporta establecer políticas públicas de Estado en el ámbito cultural, en condiciones de alta concentración económica, el marco legal vigente favorece la privatización y desregulación y posturas discrecionales del gobierno en turno.

5.1.1. De la Presidencia debilitada a la presidencia mediatizada

En lo que concierne al poder Ejecutivo, baste con aportar como un ejemplo, la postura presidencial hacia los medios de comunicación, ilustrada en el contexto con relación al tema de seguridad pública, el más álgido de la agenda pública y también en la difusión mediática de información y opinión, tal como se evidencia en el *corpus* analizado para la prueba de hipótesis de este estudio. Interesa exponer este caso además porque, a partir del discurso que hace público, el Presidente deja indicios del reconocimiento explícito del papel del escrutinio ciudadano, por cuanto corresponde a las políticas públicas a su cargo. Siguiendo la propuesta analítica de Salgado (2006), sin quedarse en el nivel superficial del registro y estilo retórico, el análisis de la coherencia global del texto considerado revela la correlación que, al nivel de las *implicaturas*, se establece

en la postura presidencial de supeditar el principio de la libertad de expresión a las determinaciones de regulación de orden moral, no de orden jurídico y por eso carentes de fuerza vinculante, que los medios de comunicación adoptan; el análisis semántico revela que el Presidente atribuye a los medios de comunicación el papel de canal para la participación informada, el escrutinio público y la rendición de cuentas. El texto corresponde al anuncio del denominado “Diálogo por la Seguridad: hacia una política de Estado”: el Presidente propuso a los medios varias medidas entre las cuales destaca la relativa a “abrir espacios para que la ciudadanía participe directamente en el debate público dirigido a fortalecer la política de seguridad, enriqueciendo el diagnóstico y proponiendo acciones a seguir”⁵²², dos años después de la concertación del “Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad”⁵²³.

Entre las medidas solicitadas a los medios de comunicación, el Presidente enunció: el apego a los esquemas de auto-regulación que ellos definen; discutir y adoptar códigos de manejo de información basados en experiencias internacionales; dar seguimiento a las deliberaciones sobre estrategias en materia de seguridad pública y a las propuestas que surjan, así como evaluar el cumplimiento del acuerdo suscrito junto con otros sectores de la sociedad civil organizada y las instituciones gubernamentales⁵²⁴. La solicitud a los medios para “fortalecer el vínculo que guardan con la sociedad”, justificaría tanto el reconocimiento señalado acerca del papel que ellos desempeñan, como la pertinencia de las medidas que les propone adoptar que, según la perspectiva que se desprende de la coherencia interna de la declaración presidencial publicitada, no implicaría “violentar la libertad de expresión”. Pero sería ingenuo pasar por alto, en este análisis, el hecho de que, en ese mismo contexto, el Presidente expide, el 31 de marzo de 2010, un decreto por el que se crea el Organismo Promotor de Medios

⁵²² El texto de las declaraciones públicas que hizo se desprenden de un cable informativo difundido por la agencia Notimex, el 6 de agosto de 2010. NOTIMEX, “FCH solicita acuerdo sobre mensajes electorales”, publicado el 6 de octubre de 2010 en: <http://www.unonoticias.com/DS/141781/w-FCH-solicita-acuerdo-sobre-mensajes-elector>.

⁵²³ Suscrito por representantes de los tres poderes públicos, de los tres niveles de gobierno, de organizaciones empresariales, sindicales, asociaciones civiles y religiosas y medios de comunicación, que estableció un conjunto de 75 compromisos en todos esos respectivos campos de acción.

⁵²⁴ Además de evitar hacer apología del delito en los contenidos informativos que difunden y promover la prevención de la violencia y las adicciones entre los jóvenes para inhibir su reclutamiento por parte de criminales, a la vez que impulsar la cultura de la legalidad y la denuncia.

Audiovisuales⁵²⁵, cuya finalidad formal es promover una producción de contenidos que se constituya en una alternativa a la de origen mercantil, lo que puede entenderse como un signo del desistimiento a regular ésta última y, a la vez, del reclamo presidencial hacia el sistema mediático frente a la “negativa influencia” que, en su opinión, ejerce sobre la percepción colectiva acerca de los problemas más acuciantes que aquejan a la sociedad. El reclamo se produjo después de cuatro años de operación del programa de mayor envergadura de su gestión presidencial. El escrutinio público respecto del desempeño de su gobierno, en materia de seguridad pública, es un tema recurrentemente tratado en columnas periodísticas, programas radiofónicos y televisivos de opinión. No es errónea la idea que alberga el Presidente acerca de la influencia negativa al nivel de percepción colectiva, la cual se antepone al juicio menos subjetivo que sobre la situación que guarda el país pudiera formarse cualquiera, incluso confrontando la información gubernamental difundida.

En todo caso, no parece fortuito que, en ese sentido, ante ese reclamo presidencial a los medios para desempeñarse con responsabilidad social, poco después el conglomerado de medios de comunicación, encabezado por los consorcios privados televisivos, pusiera en marcha el proyecto llamado “Iniciativa México”, una campaña mediática inédita en el país con la cual se convocó a la sociedad entera a reconocer el valor del talento de mexicanos sin notoriedad pública⁵²⁶, que comparten el mérito de haber emprendido una tarea de beneficio comunitario y la condición de que éste no ha sido reconocido a escala nacional⁵²⁷. Para el estudio del fenómeno de escrutinio

⁵²⁵ Organismo descentralizado del Ejecutivo federal, en cuya dirección participan secretarios del gabinete presidencial y cuyo presupuesto es asignado por el Presidente, de lo que se sigue la dependencia que guarda respecto al mismo; encargado de fomentar la producción independiente de contenidos.

⁵²⁶ A quienes se puso a competir entre sí en pos de persuadir cuál de todas las posibles sería premiada filantrópicamente con recursos económicos. El mecanismo mediático se sirvió de los formatos de espectáculo previamente instituidos, ya probados como eficaces para concitar la atención y satisfacer el gusto del público consumidor de contenidos mediáticos similares, en especial el concurso y la aparición de gente ordinaria que mediante la trama relatada se erige en el papel de “héroe” o “heroína” y adquiere la notoriedad pública que brinda la visibilidad mediática.

⁵²⁷ Los mensajes están articulados por la estrategia persuasiva de apelar a un cambio de actitud en las personas, de cualquier clase social y región del país, respecto a la percepción colectiva acerca de la idiosincrasia del mexicano, enalteciendo valores relativos al carácter emprendedor orientado hacia el altruismo, mediante el otorgamiento de incentivos filantrópicos a diversas “causas sociales”; el slogan de tal campaña define la intención comunicativa latente, al colocar el foco de atención en virtudes que

público mediático, no puede pasar inadvertido que las situaciones y los hechos referidos son indicativos del alcance que éste puede tener, así como a la vez lo son de los mecanismos que se ponen en juego para hacerlo posible, en este caso la credibilidad simbolizada en la producción televisiva de naturaleza especular⁵²⁸, aquella cuyo contenido está orientado en recrear al medio de comunicación en sí mismo “actuando” como comprometido con la “sociedad”, incluso de cara al poder político o al económico, con respecto a los cuales busca deslindarse; se trata de una manera en que en los medios procuran hacerse del aval público⁵²⁹. El escrutinio público mediático distribuye asimétricamente la responsabilidad política entre gobernantes electos; conviene ocuparse ahora del Congreso, partidos políticos y legisladores federales.

5.1.2. Del Congreso polarizado a la reforma de medios impugnada

A diferencia de las elecciones federales del año 2000, las correspondientes al año 2006 tuvieron lugar en condiciones de mayor polarización partidista. La inconformidad con el resultado en el cargo de Presidente, no obstante haber obtenido más curules que en la legislatura precedente del Congreso, fue conducida por el PRD y la coalición electoral que conformó con el PT y “Convergencia” hacia una confrontación con el Presidente electo, tornándose en lo que se conoce como “oposición irresponsable”, aquella que, no obstante su potencial para disputar la alternancia, se dedica a estorbar al partido que, en un sistema presidencial, encabeza el gobierno nacional⁵³⁰.

puede ejercitar por cualquiera persona y al persuadir que son comunes a la mayoría de las personas, en oposición a la minoría de ellas que, por interés o por miedo, solapan a quienes dañan a terceros.

⁵²⁸ A la que ya he hecho referencia, para un análisis en detalle véase Imbert (2008).

⁵²⁹ En los capítulos 2 y 3 se analizaron las formas mediante las cuales se procura y disputa credibilidad mediática; una fuente de verosimilitud del discurso radiofónico y televisivo de opinión reside en la auto-referencialidad que establecen sus agentes, en tanto que personajes públicos; un reducido pero estable círculo de ciertos periodistas, analistas e intelectuales, que en conjunto contribuyen a afianzar ciertas convenciones políticas que rigen la actuación en público, con independencia de la tendencia ideológica y partidista que en privado alberguen, quienes actúan en el espacio mediático con cierta inmunidad frente a presiones de las élites económicas y políticas, aunque nunca confrontándose con ellas.

⁵³⁰ Según Sartori la oposición se comporta como responsable, es decir responde a lo que prometió en campaña, cuanto más esperanzas tenga de gobernar (1998:174); las oposiciones irresponsables son un rasgo secundario del pluralismo polarizado, de acuerdo con la tipología de ese autor, porque el acceso al gobierno o la alternancia resulta periférica para los extremos (limitada a partidos de centro-izquierda y de centro-derecha) y las coaliciones alternativas se integran por partidos con más posibilidades de ganar una elección, orientados hacia el gobierno y creíbles como tales (Ibid: 175). Si se aplican las premisas al caso mexicano no se explicaría que, en teoría, el PRD privilegiara estorbar al PAN con un discurso que

Así, en condiciones de pluralismo polarizado, la estrategia del PRD, dirigida a deteriorar la imagen pública del Presidente y de su partido en el Congreso, dio lugar a acciones tácticas estridentes que, en diversos momentos, por sí mismas refrendaron la oportunidad para todos los medios de comunicación masiva, en especial en cuanto a la difusión de opinión política en radio y televisión, de focalizar su difusión cotidiana en las disputas partidistas, en especial en la Cámara de Diputados⁵³¹, exacerbadas por la división de ese partido ante la renovación de su dirigencia en 2008⁵³².

Por su parte el PRI, al conservar la mayor parte de las gubernaturas y conseguir el mayor número de curules en varios congresos estatales y en la Cámara de Diputados, actuó estratégicamente como oposición responsable, colocándose en la intersección entre las posturas extremas ante los diversos asuntos torales a deliberar y decidir⁵³³, lo que le permitió negociar con la Presidencia la canalización de mayores recursos hacia estados y municipios en los cuales aún mantenía hegemonía o cuyos gobiernos podría llegar a disputar, no sin aprovechar las oportunidades para debilitar la imagen del Presidente. Con ese propósito, se sumó ante ciertos asuntos a la otra oposición en el Congreso, no obstante que la estrategia de ese partido consistió en poner en entredicho la eficacia del gobierno federal, no la legitimidad electoral⁵³⁴. Tal fue el

pone en entredicho todas las instituciones, en lugar de cumplir con su propia oferta y criticar ciertas posturas gubernamentales, tal como hizo el PRI de modo consistente, con algunas excepciones.

⁵³¹ Las muestras van desde las acusaciones de “tráfico de influencias” contra el entonces secretario de gobernación, obligarlo a comparecer ante la Cámara de Diputados e impulsar la creación de una comisión especial para investigar los contratos de la empresa familiar que prestó servicios a PEMEX y que aprobada en 2008, hasta impedir las sesiones ordinarias en ambas Cámaras, un mes después, impidiendo el uso del recinto parlamentario mediante un movimiento de oposición a las reformas legales en materia energética, por parte de mujeres (“Las Adelitas”), lo que llevaría al líder del PRI en el Senado a proponer y a las otras bancadas a llevar a cabo un debate abierto al público durante 50 días.

⁵³² En las elecciones internas se confrontaron un ala radical (“Alternativa Democrática”) que apoyaba incondicionalmente al excandidato presidencial y otra moderada, (“Nueva Izquierda”), que detentaba la dirección formal, en torno a la estrategia a seguir en el Congreso en tanto que oposición; la crispación e irregularidades que se registraron llegaron a tal grado que invalidaron los resultados y debieron distribuirse los cargos directivos, todo lo cual dio ocasión a que la televisión abordara el tema en los programas de opinión y sumara crítica y desprestigio a ese y los demás partidos.

⁵³³ Políticas públicas y modificaciones a las leyes para reactivar la economía, la inversión y el empleo, para el combate a la inseguridad pública y la delincuencia organizada, para la sostenibilidad del sistema de pensiones y de la industria energética nacional y hacer frente a las crisis económica de 2008, en el curso de la LX Legislatura y para reestructurar las relaciones entre los sectores productivos, impulsar la reforma política y ampliar los programas sociales durante la LXI Legislatura.

⁵³⁴ En agosto de 2008, en su asamblea nacional, el PRI acuerda modificar sus estatutos para “adoptar como ideología la socialdemocracia”, a la vez que inicia la campaña de identidad pública con el lema “Un

caso de las reformas a la Constitución, aprobadas en abril de 2008, para transformar la forma en que por décadas tuvo lugar el principal mecanismo de rendición de cuentas horizontal, a la vez que la ocasión anual en que el Presidente se sometía al escrutinio ciudadano, en un acto que podía ser visto y oído a través de radio y televisión y cuya publicitación de información y opinión relativas tales medios no podían eludir⁵³⁵.

5.2. De la crisis de institucionalidad al convite del escrutinio mediático

Importa dejar asentado que la consolidación del régimen televisivo de opinión tiene lugar en el contexto de una creciente impugnación social, en general, respecto del comportamiento de los partidos políticos y, en particular, de la manera en que las oposiciones se condujeron, desde el inicio de la LX Legislatura del Congreso federal, en términos de la relación institucional con el titular del Ejecutivo federal. No hay duda, sin embargo, de que en la medida en que partidos y legisladores acometieron la agenda de reformas legales pendientes, y dieron señales de proponerse incluir el régimen de medios electrónicos, su desempeño se convirtió en el centro del escrutinio público mediático, tal como ocurrió durante la LIX y la LX Legislaturas con relación a la radio, la televisión y las telecomunicaciones y al sistema electoral, respectivamente.

Esa relación estuvo marcada por la pretensión de la coalición electoral, que siguió funcionando como coalición legislativa, integrada por PRD, PT y Convergencia, para mantener estratégicamente dos cauces para canalizar la inconformidad que auspiciaron y cultivaron entre un sector de la sociedad. Por un lado, la proclamación simbólica de un gobierno alterno (que llamaron “legítimo”), presidido por su excandidato presidencial, sirvió para articular una ininterrumpida y visible protesta, cuya expresión más notoria fue el bloqueo de avenidas y la instalación de campamentos en plazas públicas; por otro lado, sus fracciones parlamentarias mantuvieron posturas de intransigencia en la negociación de la agenda legislativa y

nuevo PRI” y el plan de acción electoral de cara a las elecciones de 2009 para renovar la Cámara de Diputados, disputar la gubernatura en 6 estados, diputaciones en 11 estados y Ayuntamientos en 12.

⁵³⁵ En su lugar se estableció el envío del informe por escrito enviado al Congreso y la pregunta parlamentaria, encauzada por cada partido en el Congreso y a la que el Presidente debe remitir respuesta dentro de un plazo perentorio.

emprendieron actos de sabotaje de las sesiones de pleno en ambas Cámaras, cuya primera y más notoria expresión fue impedir la toma de protesta del Presidente electo. Con tales posturas y estrategia consiguieron atraer hacia sí el foco de cobertura informativa, mientras que los medios de comunicación tuvieron la oportunidad para expandir su intervención en el ámbito público político, cuya colonización tiene lugar mediante la mediatización de la responsabilidad política, con repercusiones en la promoción o destrucción de candidaturas, carreras políticas y acuerdos partidistas. En esas condiciones se manifiestan las dos dimensiones de la política: por un lado la lucha por el poder que transcurre acotada a las repercusiones públicas dentro del cauce de las instituciones políticas y, por el otro, aquella que transita dentro de la comunicación mediática, con efectos en el ámbito cultural e ideológico cada vez más mediatizados.

Como consecuencia del “escrutinio público mediático”, la inconformidad social con respecto al desempeño de gobernantes electos y partidos políticos ha podido encontrar un cauce regular en la comunicación mediática. En el contexto, aquel cobra auge ante condiciones de confrontación, en medio de un clima de opinión adverso hacia partidos políticos y legisladores, que desembocó en una férrea oposición de los medios de comunicación a la reforma electoral en 2007⁵³⁶. Detrás de esta otra oposición, subyace el proyecto económico y político de las empresas concesionarias de radio y televisión, para conseguir mayores beneficios económicos y consolidar su influencia cultural y política, tal como se desprende de las reformas legales que impulsaron y que fueron aprobadas en abril de 2006 por el Congreso⁵³⁷, en el ocaso de la LIX legislatura, atendiendo a esos intereses y por eso conocidas como “Ley Televisa”⁵³⁸. Ésta fue confrontada por la oposición de un sector de la sociedad civil

⁵³⁶ Ante esa reforma se revela la relación entre medios de comunicación y partidos políticos, y los legisladores federales fueron sometidos a un intenso escrutinio ciudadano y mediático al mismo tiempo.

⁵³⁷ Lo que resultó inusitado por los tiempos implicados habitualmente en el proceso legislativo y es indicativo de la dependencia que los partidos políticos y legisladores mantienen respecto de la comunicación mediática y de la connivencia que buscan establecer para aprovechar sus beneficios en la competencia electoral, si se toma en cuenta el hecho de que la iniciativa correspondiente, a escasos diez después de haber sido presentada, haya sido discutida durante apenas 7 minutos, previamente dispensadas las dos lecturas del dictamen respectivo y aprobada por 327 diputados para ser turnada al Senado, para un análisis del proceso véase (Trejo, 2009:75-101).

⁵³⁸ Para un análisis en profundidad y detalle, desde diversos enfoques, de los aspectos implicados, véase el libro coordinado por Esteinou y Alva (2009); aquí basta con señalar que la modificación del artículo 28 de la Ley de Radio y Televisión otorgó solamente a la televisión comercial, dejando fuera a la televisión de “servicio público”, la posibilidad para hacer negocio al ingresar al mercado de las telecomunicaciones

organizada, lo cual da cuenta de la práctica del escrutinio ciudadano sobre el desempeño de legisladores ante asuntos que afectan a toda la sociedad⁵³⁹. Esta otra oposición, tampoco partidista, cobró relieve debido a la plural composición de sus protagonistas y al alcance del escrutinio ciudadano que desplegó, al contar con la participación desde académicos especializados en el tema, incluso aquellos comprometidos políticamente y agrupados en asociaciones civiles que actúan como corriente crítica en ese campo, hasta asociaciones empresariales y gremios de profesionistas, quienes analizaron las reformas legales e hicieron contrapropuestas y recomendaciones en distintos foros públicos, incluidas las reuniones de trabajo con legisladores federales de la LIX Legislatura.

Como consecuencia, un grupo de 47 senadores de ella, aquellos que tuvieron e hicieron valer su postura crítica, interpusieron una acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso de la Unión y el Presidente de la República, recurso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvería más tarde favorablemente, aunque solamente en cuanto a algunos de los artículos de la Ley de Radio y Televisión y de la Ley de Telecomunicaciones, que en total habían sido modificados⁵⁴⁰. No obstante eso, tal como sostienen entre otros Esteinou y Alva (2009: 11-24), tanto el sentido de la reforma al régimen legal de radio y televisión en 2006, como el proyecto económico y político al que responde, supervivieron y siguieron siendo auspiciados. A cinco años de esa consideración, en abril del 2011, las dos empresas privadas que conforman el duopolio televisivo en México (Televisa y TV Azteca) se asociaron aportando capital por partes iguales para adquirir una empresa de telefonía móvil (“Iusacel”), en franco

y sin imponerle contraprestación alguna a favor del Estado, tal como advierte Sosa (2009: 297-329) al analizar la estrategia de Televisa ante las oportunidades que ofrece la convergencia tecnológica entre radiodifusión y telecomunicaciones (“triple play”).

⁵³⁹ Es revelador el hecho de que, un día antes del intenso debate que en la Cámara de Diputados provocó la minuta referida, no parecen haber sido tomadas en cuenta las recomendaciones que, a través de la oficina en México, hiciera el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, para hacer “respetar y garantizar el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras”, así como para “no restringir el derecho a la libertad de expresión por vías o medios indirectos”, tal como se establece en los artículos 19 fracción 2 y 13 fracción 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, respectivamente, tratados internacionales que México ha suscrito.

⁵⁴⁰ La sentencia argumenta que cinco de los artículos reformados e impugnados propician el acaparamiento de los medios electrónicos en pocas manos y prácticas monopólicas, en perjuicio del interés público, la libre competencia y la rectoría del Estado, véase Ramírez (2009: 57-71).

desafío al consorcio dominante en el mercado de telefonía fija (“Telmex”) y móvil (“Telcel”), cuya pretensión por su parte ha sido, a partir de la liberalización inducida con las reformas legales en 1995, incursionar en el mercado de radio y televisión, con lo cual podría controlar el mercado multimedia.

En ese contexto, es significativo destacar el hecho del “impasse” que transcurrió desde la aprobación de la reforma constitucional en materia electoral en diciembre de 2007 y publicada en enero de 2008, hasta las reformas a las leyes secundarias, que el Congreso emprendió en un periodo extraordinario, el primero en esa LX Legislatura en junio de 2008. Esta otra reforma puede ser interpretada, sin duda, como un arreglo entre los tres principales partidos políticos para ajustar, entre otras cuestiones, algunos desequilibrios del sistema de competencia electoral, ante la pérdida de legitimidad que resultó de los comicios presidenciales en 2006. Puede sugerirse que ese arreglo se explica en dos planos. En el coyuntural pudo haber constituido una salida ante la presión representada por la inestabilidad en el funcionamiento del Congreso, derivada del conflicto poselectoral de 2006, con miras a acordar las reformas legales fiscal, de pensiones y energética.

En el plano estructural, el arreglo interpartidista pudo estar motivado por el objetivo común de modificar las reglas de competencia, y los parámetros gubernamental y partidista de competitividad política afectados por la liberalización del ámbito mediático⁵⁴¹, lo que implicó proponerse acotar y restringir la creciente capacidad de intervención e influencia del conjunto de los medios de comunicación⁵⁴², en especial la ejercida por los electrónicos en los comicios durante la última década; es claro que el escrutinio público mediático venía ejerciendo un efectivo contrapeso en la orientación

⁵⁴¹ Una de cuyas manifestaciones, a partir de la primera alternancia partidista en la Presidencia, es el decreto presidencial respecto al uso del tiempo oficial de difusión en radio y televisión, que redujo las obligaciones fiscales a los concesionarios y les permitió ampliar sus ingresos vía la venta de propaganda gubernamental sujeta a la lógica de rentabilidad del mercado, al respecto véase Alva (2007).

⁵⁴² Tal como mostró la estrategia del entonces Jefe de Gobierno del DF, aprovechando la confrontación directa con el Presidente, desde el año 2000 en que ambos iniciaron en sus cargos, el primero al convocar diariamente a conferencia de prensa para hacer “anuncios espectaculares” y el segundo al orquestar mediáticamente el “desafuero constitucional” del primero al margen de las investigaciones y el debate en la Cámara de Diputados, sin omitir diversos escándalos tal como el dinero obsequiado por un empresario a un emisario partidista del primero o el uso del cargo público para favorecer intereses mercantiles de los hijos de la esposa del segundo, todos ellos de cara a la elección de 2006.

de la crítica con mayor alcance de visibilidad, ante el cada vez más reducido margen de control y negociación que gobernantes, partidos y candidatos pueden ejercer frente a tales medios⁵⁴³.

Así, detrás de la disputa para reorientar la intervención mediática en la política, lo que implicaba en cierto modo encarar el fenómeno de mediatización o la intrusión de la mediación cultural de la mediación política, las disputas entre gobernantes electos, designados y partidos políticos en pos de un tratamiento favorable, así como de cauces y oportunidades en el ámbito mediático para atacar a los adversarios, tuvieron lugar en un clima de opinión pública por el cual se ponía en entredicho, con frecuencia, la actuación de todos los partidos, tanto la capacidad para anteponer los asuntos de gobierno a sus respectivas disputas de orden electoral, como de nueva cuenta la eficacia de las reglas del sistema electoral para asegurar la credibilidad de los comicios.

En ambos planos parecía claro que estaba en juego la legitimidad del sistema de partidos en sí mismo, tanto por la movilización y el conflicto postelectoral como por la crítica que provenía, desde diversos sectores de la sociedad, en lo que concierne al gasto de financiamiento público⁵⁴⁴ destinado a propaganda mediática⁵⁴⁵ y la recurrencia a la propaganda de denostación (“propaganda negra”), así como en cuanto a la eficacia de los partidos políticos, indistintamente de su signo, para articular las demandas ciudadanas, considerarlas en la agenda legislativa y ponerse de acuerdo para acometer los cambios necesarios. La reforma legal electoral de 2007 ofreció la

⁵⁴³ En cierto modo se trata de la cuestión de evitar que el “espectáculo” desplace al ejercicio democrático sin poder prescindir, paradójicamente, del vehículo mediático (radio y televisión) de mayor penetración entre el electorado, derivado de una transferencia neta de control político y una menor capacidad de negociación de los agentes políticos ante los agentes mediáticos, cuando la emigración hacia la política WEB 2.0 apenas es una alternativa incipiente en México.

⁵⁴⁴ De 2000 a 2010, PRI, PAN y PRD recibieron 22,760 millones de pesos por financiamiento público a partidos políticos, lo que equivale al presupuesto otorgado a la UNAM y más del presupuesto destinado a carreteras federales para el año 2011, año en el que podrán ejercer, en conjunto, 2,000 millones de pesos; el PRI recibió más recursos en esa década, un acumulado de 8,885 millones de pesos; a partir de la reforma electoral de 2007, los recursos se asignan con base en el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, la fórmula de asignación consiste en multiplicar el total de ciudadanos inscritos a julio del año inmediato anterior, por el 65% del salario mínimo en el DF (Juárez, 2009).

⁵⁴⁵ La publicidad política en televisión alteró significativamente el mercado comercial en radio y televisión; según el consejo del IFE, en 1994 el gasto de los partidos en medios electrónicos representó el 24% de sus recursos, en 2000 y 2003 representó casi el 50%, y en 2006 el 70% (3 mil 500 millones de pesos); ese modelo propició la participación de terceros en una prerrogativa que es exclusiva de los partidos políticos o las coaliciones registradas para competir en una elección (Ibid.).

oportunidad de resarcir los daños a los propios partidos políticos derivados, tanto de la protesta postelectoral como del ejercicio de amplios márgenes de discrecionalidad que el régimen de regulación concede a los medios de comunicación. Puede decirse que, desde la perspectiva de los partidos, la liberalización política movilizadora durante la transición democrática, debía ser sometida a algún control, de lo contrario sus efectos podrían volverse aún más lesivos contra ellos.

No obstante, el auge del escrutinio público mediático se explica también, en el plano coyuntural, por la recesión económica internacional, que entre otras repercusiones redujo los márgenes de maniobra del Presidente para desarrollar su programa de gobierno, centrado en el fomento de la inversión y del empleo y el combate a la impunidad de la delincuencia organizada, que habían provocado un clima de incertidumbre y violencia. De manera que el auge, que no la expansión, del escrutinio público mediático tuvo como foco las disputas entre el ejecutivo y el legislativo federal y como agenda temática la distribución de responsabilidad de cada uno en torno a cambios legislativos y en las políticas públicas, cuya pertinencia y carácter estratégico para el desarrollo del país ninguna corriente de opinión ponía en entredicho.

En la polarización de las confrontaciones y los condicionamientos de las negociaciones configuradas, los medios de comunicación encontraron, por una parte, la justificación para ampliar el control de la visibilidad pública y la resonancia de ciertas corrientes de opinión sobre otras y por esa vía, por otra parte, aprovechar la oportunidad de ejercer el papel simbólico de arbitraje ante conflictos polarizados entre élites políticas (Peña, 2002) a partir de la creciente circulación de opinión mediática, tras la cual las elites económicas pudieron, por su parte, movilizar posturas favorables en un circuito alternativo al cabildeo. Ante un clima de inestabilidad política y luego económica, los medios en general, y en particular la televisión, encontraron condiciones propicias para revalorizar el escrutinio público mediático y utilizar esa divisa como blindaje ante las críticas a su propio desempeño y, en consecuencia, incrementar los márgenes de credibilidad necesarios para detentar el poder simbólico cultural que ejercen.

Eso explicaría el limitado alcance que, luego de una polarizada disputa entre el Presidente y su partido y las oposiciones en el Congreso, tuvieron las reformas legales propuestas por el primero, la de orden fiscal incluido el sistema de pensiones del sector gubernamental y la energética, así como que ésta última pudo ser utilizada en 2008 como carta de negociación para forzar, un año antes, la aprobación de la reforma electoral impulsada por la coalición opositora radical, condicionamiento que implicó acceder a la presión social, auspiciada por la difusión mediática en general, para someter a discusión mediante foros de consulta la reforma legal energética⁵⁴⁶. Ante ese escenario, la circulación de opinión se convirtió en un convite mediático.

Así se entiende que en esa coyuntura histórica cobró notoriedad el papel de la televisión como agente económico y político y, a la vez, como escenario de un cabildo que, con motivo de la reforma legal electoral discutida en 2007, devino en una abierta confrontación con los partidos políticos en el Congreso. Tal estrategia alcanzó su punto más álgido con el hecho de que los operadores de radio y televisión transmitieron en vivo y en señal abierta de cobertura nacional, la audiencia que la Comisión legislativa, encargada de elaborar el dictamen de las iniciativas que discutiría el pleno del Senado, concedió el 11 de septiembre de 2007 a directivos, periodistas, reporteros y conductores de programas de radio y televisión. La suspensión de la programación habitual es indicativa de la urgencia por publicitar su cuestionamiento. El hecho resultó insólito porque un grupo de interés se erigió en “paladín” de la democracia, se ostentaba como defensor de la sociedad entera y pedía llevar al cabo un referéndum para que la sociedad decidiera si la razón la tenían los autodenominados “líderes de opinión” o bien los “políticos”, no obstante los pueriles argumentos ofrecidos y la precaria verosimilitud de ellos (Alva, 2007: 28-30). El evento transcurrido de ese modo no puede ser considerado como un mero acontecimiento espectacular, tampoco como un episodio más en esa confrontación, en razón de que la radio y la televisión pasaron de actuar en tanto que grupo de interés afectado, como parte de una decisión que

⁵⁴⁶ La iniciativa del Presidente fue presentada ante el Senado el 8 de abril de 2008, los foros de discusión pública, en los que participaron representantes de los diversos sectores de la sociedad, sobre esa y las otras iniciativas presentadas por los partidos políticos se llevaron a cabo entre 8 de mayo al 22 de julio y, finalmente, el Congreso aprobó el paquete de reformas y adiciones a varias leyes relativas al sector energético gubernamental el 28 de octubre de ese mismo año.

legítimamente corresponde a legisladores, a desempeñarse como grupo de presión pero, a diferencia de cualesquier otro, sirviéndose para sus propios fines del monopolio de la visibilidad pública que detentan; las medidas de la reforma electoral les sustraerían las ventajas económicas de pactar, con opacidad, los términos de contratación del servicio de difusión de propaganda audiovisual, también con agentes económicos particulares.

Esa campaña de los medios audiovisuales, incluida la táctica de colocar a los legisladores federales en el banquillo del “tribunal mediático”, simbólicamente representado en esa cobertura televisiva, exhibió la faceta más superficial y a la vez espectacular del escrutinio público mediático, al mismo tiempo que puso de manifiesto los intrínsecos sesgos de su alcance, no obstante lo cual encontró la resonancia pública y social que alcanzan los discursos privados que son objeto de publicitación y difusión en el circuito público mediático.

En la perspectiva de los agentes mediáticos la reforma legal electoral justificaba un debate público que debía ser abierto a toda la sociedad, cuya moderación, sin embargo, asumieron como exclusiva, en la medida en que invariablemente juzgaron que ellos mismos resultaban la parte afectada por los legisladores federales. En el discurso desplegado por ellos fue recurrente apelar a los derechos políticos liberales; para justificar su actuación y en tanto que materia en litigio; el argumento común consistió en que los cambios legales propuestos conculcaría la libertad de expresión y de asociación, por eso encontró receptividad y adhesión en distintos sectores sociales.

Eso explicaría que el asunto se mantuviera como tema central de la agenda mediática, más tiempo del que habitualmente se concede a cualquier tema, que el discurso mediático difundido, incluso en medios impresos, haya sido construido invariablemente como un ejercicio de evaluación crítica a cargo de la sociedad, que en la mayor parte de las opiniones circuladas se diera por sentado que las medidas contenidas en la reforma legal eran restrictivas de libertades fundamentales y, en consecuencia, que en su puesta en escena se buscara implicar e involucrar, a toda costa, a representantes de los más diversos sectores de la sociedad, en especial a

terceros afectados tal como fue el caso de organizaciones privadas y asociaciones que se verían impedidas, en adelante, para patrocinar la difusión de sus posturas políticas.

Con la reforma constitucional de 2007 se prohíbe la contratación directa de propaganda política por parte de los partidos políticos y candidatos⁵⁴⁷. La cuestión primordial concernía, tal como ocurrió en reformas legales precedentes, a inducir la equidad entre partidos contendientes, en este caso debido al resultado y la inconformidad posterior a la elección de 2006; si bien esta vez la disputa y decisión versó en torno a los problemas derivados de los márgenes de discrecionalidad que prevalecían en la contratación de propaganda, incluidos la proporción que de su financiamiento los partidos destinan a ella y el sentido crítico de los contenidos. La solución acordada por los partidos en el Congreso implicó cerrar el paso a la intervención de grupos de interés en la promoción política⁵⁴⁸, lo que fue interpretado en ese contexto como un abuso estatal en contra de la libertad de expresión.

No puede perderse de vista, para dimensionar las consecuencias probables de la reforma emprendida en 2007 y consumada legalmente en 2008, que tanto los medios de comunicación como los gobiernos y partidos no podían ignorar las disputas de poder que estaban en juego en lo inmediato, puesto que durante el año 2009, cuando la reforma ya habría entrado en vigor, sería sometida a prueba por las elecciones para renovar la Cámara de Diputados, elegir gobernadores en seis estados y un mil cargos de presidente municipal y de diputado local en trece entidades federativas.

5.3. Reforma electoral a escrutinio público y mediático

Como consecuencia de la reforma electoral aprobada por el Congreso en 2007, los partidos políticos ya no pueden contratar o adquirir, por sí o por terceras personas,

⁵⁴⁷ Se prohíbe el proselitismo por parte de terceros, incluidas asociaciones civiles de cualesquier tipo, además se reducen los topes máximos de gastos en campaña; el periodo de ésta a 90 días para elecciones sexenales y a 60 días para las intermedias y en dos terceras partes el lapso de precampaña correspondiente; la propaganda gubernamental debe ser suspendida durante esos lapsos; las sanciones van desde la amonestación hasta la pérdida de la candidatura.

⁵⁴⁸ Para los partidos significó renunciar a un instrumento de control fáctico, que permitía negociar de manera opaca y discrecional el tratamiento y la tendencia editorial entre medios de comunicación.

tiempos de difusión en cualquier modalidad de radio y televisión, a la vez que ninguna persona o grupo de ellas podrá contratar propaganda que implique connotación electoral. Ambos aspectos resultaron controvertidos y provocaron inmediatas sendas reacciones entre medios de comunicación y ciertos grupos de interés y círculos intelectuales. El primer aspecto vino a afectar los intereses económicos de la televisión y la radio, que detentaron las ventajas del trato directo con los partidos al contratar la propaganda, aspecto no traslúcido en el informe que de ello debían rendir a la autoridad electoral; por eso el énfasis que en la difusión mediática fue otorgado a la crítica de la reforma constitucional. El segundo aspecto afectó los intereses políticos mediáticos y resultó aún más polémico, porque clausuró la posibilidad de que los ciudadanos, en lo particular o asociados entre sí, emprendan acciones de escrutinio público valiéndose de publicidad mediática contratada.

Se afirmó el arbitraje del IFE como única autoridad para administrar los tiempos de difusión en radio y televisión, correspondientes a 48 minutos diarios, en propaganda propia y de los partidos, el 30% de ésta última distribuida en forma paritaria y el 70% en proporción a la votación conseguida en la elección anterior para diputados federales. Con las reformas al COFIPE, un año después, se especificaron los alcances de las medidas de administración y control, que la reforma constitucional estableció, otorgando al IFE la atribución de decidir las pautas para la difusión de mensajes propagandísticos y verificar su cumplimiento, en forma directa dentro y fuera del periodo electoral, así como determinar las sanciones por violación de las normas⁵⁴⁹.

En el discurso de las instituciones políticas, el énfasis radicó en justificar el mérito de la reforma, que según el IFE vino a modificar sustantivamente el modelo de comunicación político electoral, en términos de garantizar la supremacía del interés público al acotar la influencia política de los medios de comunicación; evitar que la propaganda de gobiernos e instituciones públicas influya en la contienda electoral; al

⁵⁴⁹ La ineficacia más evidente de esa reforma se pone de manifiesto por su escaso o nulo alcance en términos de impedir, y en su caso sancionar, que los gobiernos locales utilicen sobre los contenidos de propaganda institucional de modo personalizado, para la promoción de la persona del gobernador o munícipe en turno, tal como se puede constatar en anuncios difundidos, incluso en cobertura televisiva nacional, en los cuales aparece la imagen y voz del servidor público actuando en la trama o narrativa del mensaje audiovisual.

reducirse el costo económico de campañas⁵⁵⁰, de la influencia ejercida por el dinero y actores ajenos a la contienda electoral⁵⁵¹; al hacer transparentes los criterios y procedimientos para la difusión de propaganda, como medio para asegurar un trato equitativo en el acceso a la radio y la televisión⁵⁵².

En cambio, en el discurso de los medios de comunicación más influyentes, así como de las asociaciones civiles, privadas y de ciudadanos, agentes económicos e incluso cierto círculo de intelectuales, con mayor poder económico, visibilidad pública y, en consecuencia, con mayor poder de influencia política, el énfasis de la evaluación o del escrutinio público de la reforma legal residió en la institucionalización de restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, tras de la cual para no pocos se escondía una velada forma de censura, desde luego hacia los ciudadanos no hacia a los partidos⁵⁵³.

Es claro que la reforma electoral de 2007 no vino a resolver las deficiencias que la motivaron, trajo consigo nuevas ambigüedades en el marco legal y a la luz de los comicios electorales locales posteriores al inicio de su vigencia, no tuvo como efecto desalentar el uso del anuncio propagandístico audiovisual en medios de comunicación (“spot”) como herramienta predominante de comunicación política electoral. Uno de los expertos mexicanos en la cuestión ha demostrado que las inconsistencias del diseño de la ley han servido precisamente para fomentar ese uso y correlativamente el poder de los medios electrónicos y, con ello, el empobrecimiento del debate de ideas, es decir más “spots” ha significado menos política, entendida como articulación de

⁵⁵⁰ Estimado por el IFE en un 60% en el caso de las elecciones intermedias.

⁵⁵¹ El gasto en publicidad electoral en radio y televisión representaba más de las tres cuartas partes del financiamiento público total otorgado a partidos, lo que revela la dependencia económica de las campañas respecto a ese rubro de gasto; al ser utilizado el tiempo de difusión que corresponde al Estado, se corrige ese efecto distorsionador de la equidad en la competencia electoral; según el IFE, en 2009 se redujo el financiamiento público a los partidos en 45.42% en comparación con 2003.

⁵⁵² Para cumplir la nueva obligación, el IFE implantó una herramienta tecnológica inédita incluso en el plano internacional, denominada sistema integral para la administración de los tiempos del Estado (SIATE), que abarca desde la generación de pautas de transmisión para los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, hasta la verificación de su cumplimiento y la aplicación de sanciones en caso de violaciones, en los procesos electorales federales y locales y fuera de ellos. La integran cuatro subsistemas: de generación de pautas, de ingesta y catalogación de materiales, de transmisión de materiales y de verificación y monitoreo de lo difundido.

⁵⁵³ ; el IFE califica la calidad técnica de los anuncios radiofónicos y televisivos (spots), cuyo contenido corresponde decidir a cada partido político.

propuestas y construcción de entendimientos, sin que se hayan abierto espacios de debate relevante, conduciendo a la “sacralización del spot” (Trejo, 2010: 159).

El hecho tiene entre otros perjuicios dispendio de gasto público sin que los ciudadanos puedan disponer de información relevante⁵⁵⁴. La consecuencia más relevante, para los efectos de este estudio, es que al carecer de articulación con los cambios requeridos en la regulación del régimen de medios de comunicación, así como en materia de transparencia gubernamental, tal reforma legal no contribuyó a que los ciudadanos resultaran beneficiados, en términos de la relevancia de la información y el pluralismo de la discusión política que deba ser propagada mediante radio y televisión.

A casi tres años de la reforma constitucional, luego de una elección federal y 28 locales (2 coincidentes en 2009 y 16 no coincidentes en 2010), en el marco del seminario de análisis a que convocó la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, el IFE y el CIDE⁵⁵⁵, se concluyó que es necesario adecuar la legislación en la misma orientación trazada; entre otros ajustes pendientes reconocidos⁵⁵⁶, es de destacar aquí el relativo a establecer en la ley la obligación de destinar espacio de transmisión en radio y televisión a nuevos formatos de comunicación, que permitan difundir contenidos sustantivos, tal como programas de debate acerca de las campañas y los programas de gobierno propuestos por partidos y candidatos.

⁵⁵⁴ Según la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión los un mil 973 millones de pesos que se estimaba ahorrar solamente con esa medida, principal justificación de la reforma según los legisladores federales, fueron inferiores al gasto adicional en que el IFE debió incurrir para contratar el sistema para determinar las pautas de programación y el monitoreo de la difusión, en apego a las nuevas disposiciones; la cantidad de “spots” en las elecciones intermedias de 2009 creció en cinco veces que la correspondiente a 2003 y cuatro y media veces que las elecciones sexenales de 2006 (ponencia en el “Seminario de análisis: temas críticos de la reforma electoral”, Cámara de Diputados, 11 de abril de 2010; en contraste, en ese mismo foro un consejero del IFE afirmó que la ciudadanía dispuso de información suficiente, gracias al equilibrio conseguido entre propaganda electoral autorizada y difundida en 2009.

⁵⁵⁵ El 11 de agosto de 2010, abierto al público en general, en las instalaciones del Palacio Legislativo, con participación de algunos académicos y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, basado en la discusión del *Informe general sobre la implementación de la reforma electoral durante el proceso 2008-2009* y el llamado *Libro Blanco 2009*, ambos elaborados por el IFE.

⁵⁵⁶ Además de dar usos alternos a los tiempos del Estado en el periodo entre campañas, desarrollar la regulación del derecho de réplica, precisar más aún conductas permitidas y prohibidas en lo relativo a mensajes transmitidos fuera de los anuncios cuya pauta de transmisión autoriza el IFE, precisar la regulación de administración de tiempos de transmisión y revisar la normatividad reglamentaria, dentro del tema “Acceso de los partidos políticos a la radio y televisión”; los otros “temas críticos” se refieren al proceso especial sancionador, la cédula de identidad y la cédula electoral y el recuento de votos.

En esa ocasión, los concesionarios de radio y televisión aún se quejaban de la dificultad para aplicar las disposiciones relativas a las conductas permitidas y prohibidas y a las pautas de programación de la difusión de propaganda electoral; haciendo valer aún su oposición a la reforma legal, argumentaban que haber reducido los tiempos de campaña y de difusión impediría establecer el derecho de réplica, principal inequidad entre los contendientes electorales. Los especialistas en el tema coincidían, por su parte, en que el inadecuado diseño de la reforma provocó vicios entre partidos, gobiernos y operadores de comunicación mediática, tal como el de recurrir al anuncio aparentemente informativo (llamado “infomercial”) para hacer proselitismo sin violar las disposiciones del código electoral federal. Para los legisladores anfitriones, en esa misma ocasión, el riesgo de otro vicio residía en la proliferación inminente de sentencias injustificadas o difíciles de sostener por parte del Tribunal federal Electoral.

Entre los vacíos legales dejados por la reforma, para los efectos de este estudio, conviene apuntar el relativo a la imprecisa regulación de la propaganda gubernamental entre campañas, en el ámbito local, que debido a la ausencia de sincronización entre calendarios de renovación de mandato, a los diferentes cargos de elección, y entre estados de la república, conduce a que todo el tiempo haya comicios en puerta en alguna parte y a que algunos de los contendientes consigan promoverse a través de la propaganda gubernamental contratada en medios de comunicación. Ese problema se puso de manifiesto en 2009 cuando el IFE, a partir de un acuerdo expedido con motivo de las campañas electorales, resolvió que había sido indebida la transmisión por radio y televisión de mensajes gubernamentales por parte del poder Ejecutivo Federal acerca del tema de seguridad pública, resolución que terminó siendo avalada por el Tribunal Electoral de la Federación ante el recurso interpuesto por la inconformidad del Presidente, quien dijo que acataría la disposición del IFE pero que la consideraba “una resolución muy peligrosa”, “un error garrafal”, contrario a la libertad de expresión, que implicaba “mutilar” la capacidad del Estado para explicar a la ciudadanía y conducir el país en las circunstancias apremiantes en materia de seguridad pública (Notimex, 06/10/2010).

Para los fines de este estudio conviene apuntar que, no obstante su sofisticación, el diseño del sistema operativo del IFE para vigilar la propaganda electoral y gubernamental, con sus 150 centros de verificación y monitoreo a lo largo y ancho del país⁵⁵⁷, no permite vincular entre sí, de manera formal u obligatoria, y por tanto con efectividad, los ejercicios de escrutinio ciudadano organizado, potencialmente factibles mediante, por ejemplo, los observatorios de medios de comunicación masiva, o bien los órganos civiles consultivos cuyas evaluaciones tienen como alcance elaborar recomendaciones de política pública, con lo cual se sigue dejando a los ciudadanos ordinarios en los márgenes de las únicas vías para ejercer influencia en las decisiones en materia de comunicación pública, en este caso de índole electoral y gubernamental, que compromete recursos que podrían ser destinados por ley con aquel fin.

5.4. Entre “telecracia” y “partidocracia”: secuelas del escrutinio mediatizado

Es pertinente entrar en detalle en aspectos de la disputa de poder entre legisladores y agentes mediáticos en el contexto, en términos de decisiones que afectan sus intereses y, por tanto, sus respectivas estrategias de acción en el contexto, sin perder de vista las consecuencias en la configuración del escrutinio público mediático. Es claro que con la LIX Legislatura del Congreso cobró relieve la influencia política del sistema de medios electrónicos de comunicación. Luego de un cabildeo opaco pero efectivo, su antecesora aprobó con una celeridad procedimental inédita, en franca connivencia con los intereses de las televisoras privadas, una reforma legal en la materia, que mereció la impugnación incluso de un grupo de senadores. Nada hay de fortuito en ese proceso político, sus circunstancias y las estrategias puestas en juego, tal como ha mostrado Trejo (2009:75-101)⁵⁵⁸. La controversia que provocó la llamada “Ley Televisa” dejó un

⁵⁵⁷ Que permiten detectar automáticamente la transmisión de cualquier señal de radio y televisión, grabarla digitalmente y observarla y escucharla en línea, en tiempo real, para identificar el material partidista contenido, que previamente debió ser entregado al IFE, y cotejarlo contra las pautas de transmisión autorizadas, así como conformar un acervo histórico y hacer consultas a partir de los llamados “testigos de grabación”, o detección de la huella acústica extraída del audio de una transmisión del material entregado al IFE y cuya calidad técnica debió ser previamente comprobada.

⁵⁵⁸ Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, a título personal por un diputado que se desempeñó como vocero del PRI en ese órgano, respecto de la cual no hay constancias documentales de su discusión en las comisiones dictaminadoras, cuya deliberación en el pleno fue concertada por las cúpulas de los partidos, de modo tal que su aprobación en el Pleno, apenas a 10 días de presentada, transcurrió en apenas 7 minutos, cinco de los cuales correspondieron al lapso que, por normatividad,

saldo desfavorable en la imagen de todos los partidos políticos, deteriorada aún más luego de su actuación durante las elecciones de 2006, al punto que les conduciría, en el primer año de la LX legislatura, a emprender una reforma legal electoral centrada en la reducción de la dependencia partidista respecto de la propaganda difundida por aquellos medios. De ahí que se abrió paso una corriente de opinión, divulgada principalmente en prensa, que interpretó la motivación de esa reforma como un franco “ajuste de cuentas”, que en cualquier caso habría resultado fallido.

Es más plausible considerar que la reforma legal es consecuencia de los conflictos que se produjeron, a partir de una distribución de poder político y económico en el contexto, distinta al pasado inmediato, y del alcance con que el Estado puede ejercer control sobre poderes fácticos, en condiciones de deslegitimación progresiva de la toma de decisiones de sus órganos representativos federales (Presidencia y Congreso). Entre esos poderes fácticos los medios de comunicación ejercen un poder simbólico cultural superior al que pueden ejercer otros. En esa orientación puede entenderse, tal como afirma Alva (2007: 28-30), que la reforma electoral de 2007 deviene del viraje en la relación que subsistió por décadas entre medios de comunicación y la clase política y, en particular, de la necesidad de acotar al poder fáctico generado por las televisoras. Correspondió al único poder del Estado sin representatividad ciudadana revertir la decisión de una mayoría de legisladores de todos los partidos. El fallo de la Suprema Corte de Justicia en 2007 resolvió improcedentes varios artículos de la reforma legal de radio y televisión aprobada en 2006 por la LIX legislatura, la cual había ofrecido al duopolio televisivo los mayores privilegios otorgados hasta entonces; en esas condiciones, esos hechos comprometieron las negociaciones, el cabildeo y la discusión de la reforma electoral en 2007, a diez años de la última más relevante y que había contribuido al proceso de democratización.

disponen los diputados para registrar su respectivo voto; sin intervenciones a favor o en contra, sin abstenciones; lo que contrasta con el hecho de que las enconadas discusiones de las iniciativas presentadas en esa misma materia impidieron a las comisiones que las dictaminan, en ambas Cámaras del Congreso, arribar a un acuerdo de mayoría. Según Aguayo (2010: 547), más tarde se confirmó que tal iniciativa no fue elaborada por ese diputado, sino por empresas consultoras contratadas por Televisa para diseñar y cabildar las reformas.

En ese marco se explica que los legisladores federales pasaron a ser uno de los objetos preferentes del escrutinio público mediático, en mayor medida y frecuencia que antes, luego de la oposición de las televisoras contra la reforma electoral de 2007, secundada por organizaciones civiles de las cúpulas empresariales del país, mediante la cual se convocaba a la defensa de la libertad de expresión, con tal ímpetu que derivó en la movilización de la parte más tradicional de ese sector, generalmente renuente a ese tipo de acción colectiva cuando no se ven afectados directamente sus intereses⁵⁵⁹.

El hecho de que las televisoras de propiedad privada se convirtieran en la punta de lanza de la inconformidad, desempeñándose como grupo de presión y emprendiendo una campaña que conducía a tensar la relación con la élite política del país, pone de relieve el fenómeno de la mediatización de las prácticas democráticas por el cual, en la dimensión simbólica de la política, la comunicación mediática contribuye a vulnerar la responsabilidad de los gobernantes electos de cara a la mayor parte de los ciudadanos que, cuando se interesan, recurren a ella para enterarse. Resultó evidente que los medios de comunicación pueden actuar coaligados como grupo de interés, para usufructuar el bien público de la difusión a gran escala en propio provecho, confrontar las decisiones de los legisladores federales y buscar desacreditarlos en público; pero más importante aún es que al hacerlo se abroguen el papel de defensores de los derechos ciudadanos, en un simulacro de escrutinio público al que la mayor parte de los ciudadanos fueron ajenos porque no tuvieron voz o pudieron hacer oír su opinión.

Ahora bien, con el impulso que adquirió el escrutinio público mediático sobre el desempeño de partidos y legisladores, cobró fuerza en paralelo el asunto de la llamada “partidocracia”, una forma simbólica ideológica con la que se connota, entre otros

⁵⁵⁹ Es sintomático que aún una agrupación empresarial como la COPARMEX, considerada como políticamente conservadora, impulsara la asociación “Sociedad en Movimiento”, un frente de movilización ciudadana centrada en el escrutinio respecto del desempeño de partidos políticos y gobiernos, que con motivo de la reforma electoral de 2007 emprendió una campaña en defensa de la libertad de expresión, frente a lo que su dirigente consideró un ataque de los partidos políticos a la sociedad y a los derechos ciudadanos, por la prohibición a contratar espacios de difusión en radio y televisión para expresar la crítica a la trayectoria y desempeño de gobernantes y candidatos, así como una mordaza impuesta a los ciudadanos por parte de los políticos, lo que sin duda acotaba el tradicional recurso de las cúpulas empresariales para ejercer presión abiertamente en la arena mediática, véase la entrevista en que se fija la postura tanto del organismo como de la asociación referida con respecto a la reforma electoral, en *Entorno*, Año 21, Núm. 246, febrero de 2009, COPARMEX, México.

aspectos, la vulnerabilidad en que se coloca a los ciudadanos cuando sus gobernantes electos deciden, las leyes y las políticas públicas, recurrentemente supeditados al mandato del respectivo partido⁵⁶⁰ y éste se hace depender del cálculo de la rentabilidad electoral que pueda ser conseguida entre alguna minoría que pueda ser beneficiada con la decisión, aún cuando ésta perjudique a otra u otras minorías de la sociedad.

El tema y la forma simbólica que vehicula aparecen lucrativos en términos políticos y mediáticos, tal como lo indica el hecho de que a partir de la reforma electoral de 2007 haya ocupado el espacio de muchas columnas periodísticas, haya salido a relucir en la mayor parte de los programas radiofónicos y televisivos de opinión, sea referido con frecuencia en la tribuna de ambas Cámaras del Congreso, forme parte de la agenda temática del análisis y los eventos de discusión académica, haya permeado el discurso público de asociaciones empresariales y, más aún, que éstas hayan auspiciado la movilización en torno al escrutinio ciudadano de los gobernantes y partidos⁵⁶¹.

El punto clave aquí es la recursividad del poder de los partidos políticos que les permite establecer, desde el Congreso, las reglas del juego en todo ámbito, incluidas aquellas que regulan su propio quehacer, el de los órganos institucionales que dirimen la competencia electoral y el de aquellos que fiscalizan y sancionan a gobiernos y partidos, sin el contrapeso que puedan ejercer los ciudadanos más allá del sufragio⁵⁶²,

⁵⁶⁰ El alineamiento de la actuación se corresponde con la expectativa de que será premiado por el partido respectivo, mediante la nominación o designación a un siguiente cargo público, lo que en un sistema político cuyas reglas imponen al conducto partidista como única vía para acceder y, a la vez, prohíben la reelección inmediata, conduce a una especie de “dictadura partidista”.

⁵⁶¹ Bajo el título de portada “La reforma electoral bajo escrutinio”, la Confederación Patronal de la República Mexicana publica la participación de Enrique Krauze en ocasión del encuentro nacional 2008 en Chiapas, en la que, a propósito de su crítica al mesianismo de Chávez en Venezuela, el frecuente convidado señaló que a los ciudadanos no les queda más la participación cívica y que “Hay que ponerles lupas a los diputados, a los senadores, a los presidentes municipales. Ya no podemos pretender que esto no nos importa. La vieja cultura política mexicana era: no tengo idea de quién es mi diputado, no sé quién es mi senador, es más: no sé quién sea mi presidente municipal, porque a mí mientras no me molesten en mi negocio no me importa. Antes, las figuras de los legisladores eran casi de adorno, pero ahora no, porque ocurre que el poder está verdaderamente dividido entre el Legislativo y el Ejecutivo”, “El Poder y el Delirio”, *Entorno*, Año 21, Núm. 246, febrero de 2009, COPARMEX, México p. 28.

⁵⁶² Lo que se explica por la autoreferencialidad del código que regula el funcionamiento de los sistemas políticos, Para una de las más coherentes y consistentes explicaciones acerca del fenómeno del funcionamiento y la operatividad de los sistemas político y mediático, desde la perspectiva teórica formulada por Luhmann (1990), véase Molina (s/f; 1996).

lo que lleva a la cuestión de quién vigila y sanciona a los legisladores federales, un problema apenas estudiado en México y hasta ahora tratado solamente desde el enfoque de elección racional, a partir de las reglas institucionales vigentes y para el cual solamente se ha encontrado la reelección inmediata al cargo como solución factible. Por otra parte, también conduce hacia la cuestión relativa a los privilegios que han devengado los medios de comunicación masiva, en especial las televisoras comerciales, como resultado de pactar con la élite política una laxa regulación que, ante las nuevas condiciones y exigencias de la sociedad, revierte repercusiones adversas en la legitimidad del Estado, ya no solamente del gobierno en turno⁵⁶³.

Resulta claro que las élites políticas, articuladas a partir de los partidos políticos, no han acometido las reformas legales requeridas, en materia de radio, televisión y telecomunicaciones, para no confrontar los intereses de las televisoras privadas, lo que conduce a dirigentes, gobernantes y legisladores a subordinar la política democrática al interés de la pantalla televisiva (AMEDI, 2011)⁵⁶⁴. Interesa destacar que la reforma electoral de 2007 significó la primera regulación de orden estrictamente político, que concernió a los medios electrónicos de comunicación e intervino sobre la transmisión de contenidos de índole informativo, en señal abierta y de cobertura nacional. Pero fue precedida de una infortunada reforma legal en 2006 en materia de radio, televisión

⁵⁶³ Una prueba evidente es que ante la urgencia de legislar de cara al grave conflicto entre empresas del sector radio y televisión y las del sector de telefonía, a la fecha no ha sido deliberada la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, no obstante haber sido presentada, en abril de 2010, por legisladores de los diversos partidos políticos en ambas Cámaras del Congreso., que entre otras medidas establece la creación de nuevos canales y la existencia de cuotas mínimas para que los productores independientes tengan acceso a la televisión; las dimensiones del actual conflicto entre por un lado Televisa-TV Azteca y, por el otro, Telmex-Telcel son resultado que los partidos políticos han postergado la adecuación del marco jurídico de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México.

⁵⁶⁴ Tal como ha hecho notar el entonces presidente de esa prestigiada asociación, integrada por ciudadanos interesados en el tema, expertos y estudiosos, uno de los autores e impulsores más consistentes de la reforma legal que en esa materia requiere el país, y que en otras medidas dirigidas hacia la democratización del sistema mediático de difusión incluyen que sea dictaminada la ley de telecomunicaciones y contenidos audiovisuales; licitar más cadenas de televisión pero solo para concesionarios y permisionarios independientes de los actuales, incluidos canales adicionales del Congreso y el Poder Judicial en señal abierta; acometer una agenda digital que incluya nuevas opciones en televisión, convergencia plena e Internet abierto, libre, rápido y barato; dar certidumbre financiera a los medios públicos; tarifas bajas y obligaciones para los operadores de los diversos servicios integrados; reglamentar la propaganda gubernamental y menos spots y propiciar la participación ciudadana en las elecciones mediante más debate electoral y menos anuncios propagandísticos ("spots"). Trejo, Raúl "El gobierno, en vez de regular, regala decisiones en beneficio de las televisoras. Por una política nacional de telecomunicaciones", México: Asociación Mexicana del Derecho a la Información, comunicado del 13 de mayo de 2011, consultado en la fecha en: <http://www.amedi.org.mx>.

y telecomunicaciones, dirigida a otorgar privilegios a las televisoras comerciales, a instancias del cabildeo emprendido, que fue resultado de opacas negociaciones y del acuerdo mayoritario de todos los partidos políticos en el Congreso. Ambas reformas legales, consideradas en conjunto, son indicativas del proceso de recomposición política y económica del régimen de medios de comunicación, de las estrategias de las televisoras comerciales en particular, así como de la relación que guarda con respecto al sistema político en México.

La implantación de tales reformas legales engendró diversos conflictos, de los cuales conviene observar, para los fines de este estudio, que todos ellos se originan en disputas entre agentes cuyos fines y actuación no puede evadir el escrutinio ciudadano; de hecho luchan en pos de conseguir una opinión favorable por parte de los ciudadanos; sin embargo ponen en juego decisiones que afectan la disponibilidad de información pública relevante, por el medio de difusión más accesible a los ciudadanos, en el curso de los dos procesos neurálgicos de la política representativa: la elección de gobernantes y la evaluación del gobierno en funciones⁵⁶⁵.

De ahí que no pueda pasar inadvertido, en el análisis, que la principal reacción contra tales reformas, por la fuerza argumentativa y la carga anímica, se originó en y provino de aquella parte de la sociedad civil organizada y participativa, ciertamente un segmento minoritario de ciudadanos pero que busca y encuentran en alguna organización civil, sin fines lucrativos o partidistas, un lugar de efectivo escrutinio público, al margen del que puedan ofrecer las instituciones políticas y que, desde luego en México, era impensable que ofrecieran las empresas mediáticas. Pero mientras que las reacciones ante las reformas del 2006 cobraron fuerza, sobre todo, por las acciones por parte de ciertos círculos académicos del país, ante las reformas del 2007 consiguieron mayor visibilidad pública las acciones emprendidas por una parte del

⁵⁶⁵ La teoría de la acción colectiva prueba que la motivación (formación de creencias) y el desciframiento del medio (información del entorno) son influidos por las instituciones, así como que la eficacia de éstas para resolver problemas de cooperación y coordinación depende de la complejidad del medio, las motivaciones de los actores (función de utilidad) y de su habilidad para descifrar y ordenar el medio. Desde esa perspectiva, las transformaciones institucionales, tal como una reforma legal, entrañan varios cambios respecto de limitaciones o libertades en la conducta de los actores individuales y sociales. El procesamiento subjetivo e incompleto de la información desempeña un papel crítico en la toma de decisiones. Al respecto véase North (1995); Arrow (1991) y Eltser (1996).

sector empresarial del país, puesto que aquellas prohibieron que los particulares contrataran propaganda política en radio y televisión⁵⁶⁶.

Ambas reformas legales son reveladoras de la reconfiguración de la relación entre, por un lado gobernantes electos y partidos políticos y, por el otro, los medios de comunicación, en especial de los electrónicos audiovisuales. Ellas implicaron el interés público representado por el ejercicio de los derechos ciudadanos, en particular la libertad para expresar la opinión política, el derecho a asociarse y examinar en común las decisiones y el desempeño de los gobernantes electos, así como el derecho a recibir información pública relevante. Las reformas tienen consecuencias directas, en general, en la configuración de las relaciones entre legisladores federales y partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanos en el espacio público, y en particular respecto de la comunicación política entre los primeros y los últimos, al final de cuentas los más afectados por el actuar de los dos primeros tipos de agentes.

En efecto, sirva como evidencia el conflicto derivado de la aplicación de las reformas legales en materia electoral, incluidas las aprobadas al COFIPE en febrero de 2008, puestas a prueba en las elecciones federales intermedias de 2009, para renovar la Cámara de Diputados, cuando no obstante haber sido notificadas las radiodifusoras y televisoras por el IFE, con anticipación a las precampañas, acerca de las pautas de transmisión de la propaganda, las dos televisoras que trasmiten señal abierta, en cobertura nacional, concertaron suspender en dos días (31 de enero y 1 de febrero) las transmisiones de programas deportivos y, en su lugar, difundir los anuncios propagandísticos de precampaña electoral. Las audiencias televisivas habituales a esos

⁵⁶⁶ Eso se explica por su fondo a partir de asimetrías de poder, entre gobiernos y partidos y el resto de los sectores de la sociedad, y a partir de las circunstancias porque desde 2001 varios académicos especializados en la materia fueron convocados por el Ejecutivo federal para discutir y preparar un proyecto de cambios legales al régimen de radio y televisión, discusión que luego se trasladaría hacia el Senado durante la LX Legislatura, y cuyos fructíferos resultados fueron sin embargo ignorados de cara a la inusitada aprobación de la reforma legal de 2005; por otra parte, debe recordarse el contundente revés que recibió el sector empresarial que, invocando el ejercicio de derechos ciudadanos, había contratado la difusión de su postura, en medios de comunicación masiva, en el curso de las campañas electorales de 2006, al ser censurado primero por el IFE a petición de los partidos políticos que se consideraron agraviados y ejercieron acciones de inconformidad, y luego por la resolución de la Suprema Corte que falló que esa propaganda había infringido las normas. Véase Esteinou y Alva, 2009; Trejo (2009); Carranza (2009); Corral; (2009).

programas, que se cuentan en millones de personas, se toparon con esa insólita interrupción de su programa favorito. Las televisoras se valieron de que al no ser especificado el tiempo de separación que debería tener la difusión entre los mensajes, situaron todos los correspondientes a los partidos políticos en dos secciones separadas por los relativos a las autoridades electorales (IFE y TRIFE), todos difundidos en un solo bloque continuo⁵⁶⁷.

El hecho provocó una inmediata queja por parte de otros medios que exigieron al IFE imponer las sanciones correspondientes, así como llevó a un litigio entre las televisoras y el IFE, cuyo desenlace ilustra la presión que ejercieron los partidos políticos pero a la vez el solapamiento que el sistema político dispensa a las televisoras, cuando se trata de someterlas a regulación legal en tratándose de la difusión de índole política. A instancias del área correspondiente del IFE, en la que cada partido está representado, fue presentada una denuncia formal contra las dos televisoras por lo que el consejero presidente de ese organismo llamó “conductas atípicas”; pero antes de que se llevara a cabo la sesión de alegatos y prueba el secretario de gobernación del Ejecutivo federal convocó al IFE, a partidos y a televisoras a una reunión, al cabo de la cual declaró públicamente que se resolvería la cuestión mediante el dialogo.

Tres días después el IFE y la CIRT suscribieron el convenio “Bases de colaboración” para “normalizar” la difusión de los mensajes de los partidos en la televisión, mediante el cual los concesionarios se comprometían a difundir los mensajes sin agruparlos en bloques continuos, no obstante el organismo que agrupa los concesionarios de radio y televisión fue notificado que no se cancelaría la ejecución del proceso de sanción a Televisa y TV Azteca. La instancia competente del IFE resolvió dejar sin efecto el procedimiento contra la primera e imponer una multa a la segunda, acuerdos que un mes después la sala Superior del TRIFE revocó mediante unanimidad de sus miembros, ordenando al IFE continuar el procedimiento especial de sanción, entrar al fondo del

⁵⁶⁷ El error del IFE se explica en razón de que en lugar de proceder a desarrollar la reglamentación que se requería, la instancia encargada por ley, el comité de radio y televisión del instituto, transcribió las disposiciones aprobadas por las reformas al artículo 41 y a las disposiciones relativas a radio y televisión del COFIPE, de manera que el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, que entró en vigencia el 11 de agosto de 2008, luego parcialmente modificado debido a una resolución del TEPJF el 12 de febrero de 2009, dejó lagunas en cuanto a la aplicación, del tipo de la señalada.

asunto de inmediato, a la vez que declaró inválido el acuerdo suscrito con las televisoras por no ser emitido por el consejo general del IFE. El TRIFE intervino ante las impugnaciones del Partido Socialdemócrata contra el convenio referido y el sobreseimiento de la sanción a las televisoras.

La estrategia referida de las televisoras representó, en el contexto, un desafío directo al IFE e indirecto a los partidos políticos, como parte de una estrategia precedente dirigida a tratar de desprestigiarlos, al poner en entredicho la reforma electoral aprobada por los legisladores federales en el Congreso. En esta ocasión, ya no se trató de una protesta reactiva respecto a la pertinencia en sí misma de la reforma, sino una acción proactiva para hacer aparecer como inadecuado el diseño de las disposiciones normativas, en términos de su aplicabilidad, pero tratando de utilizar al público televidente aficionado al deporte más popular en México. El conflicto desencadenado por el duopolio televisivo, a costa de confrontarse con el resto de los medios de comunicación, es indicativo además de una actuación como grupo de interés que no escatima en poner de por medio a los públicos y audiencias para conseguir sus fines.

5.5. Sociedad movilizada hacia el escrutinio público

Al vincular las implicaciones con las consecuencias de cada reforma, en el contexto sociopolítico actual, se explica que haya cobrado fuerza la deliberación pública, poco habitual en México, y se haya puesto en entredicho el desempeño de los partidos políticos. Una deliberación y crítica protagonizadas y expresadas por ciudadanos, en torno a cambios legales que ponen en juego la concepción, la regulación y el desarrollo del interés público en cuanto a la comunicación colectiva, sin duda el ámbito más poderoso de influencia cultural en el curso del proceso de transición política democratizadora en México.

Entre los diversos puntos de vista publicados, en columnas de opinión en periódicos y revistas, pueden ser contrastados cuestionamientos y reconocimientos que concitó la reforma electoral de 2007 en la opinión pública publicitada mediáticamente. Pueden ser referidos algunos de ellos, a vía de ejemplo, publicados en el ejemplar de junio de

2009 de la revista *Voz y Voto* dedicado a ese tema. Por un lado, quien fuera el primer presidente del IFE llama la atención en que prohibir que las instituciones y los partidos políticos sean denigrados, en el artículo 41 Constitucional, puede generar reservas para quienes defienden la libertad de expresión sin restricción alguna, pero no podría haber reserva alguna en prohibir que las personas sean calumniados en la propaganda electoral; en cualesquier caso es de prever que sea el Tribunal Electoral, la instancia que termine por definir, en la práctica, los límites y alcances del derecho a la libertad de expresión, ante las quejas presentadas ante el IFE y las inconformidades con la resoluciones de éste (J. Woldenberg, “¡Cómo el cuetero!”, pp. 4-5). Otro analista señalaba que el margen de subjetividad quedará circunscrito a la autoridad electoral y que determinar si son violadas las prohibiciones señaladas es algo que opera después y no antes de que sea difundido un mensaje, por lo que es inválido pretender que la norma cancela la posibilidad de ejercer la crítica o que inhiba el debate entre partidos y candidatos (C. Murayama “¿El fin justifica los medios?”, pp. 6-8).

Un periodista advierte que la denigración y la calumnia son especies comunes contenidos en la “propaganda negra”, cuya característica es el anonimato en la autoría y que circulan mediante videos colocados en sitios de la WEB, ante los cuales el IFE ha dicho que carece de facultades para vigilar y sancionar a los responsables (H. Mussachio, “La guerra (sucia) llegó”, pp. 9-11); en tanto que otro analista se refiere a la llamada “propaganda de contraste”, aquella cuyos mensajes critican lo que se ha hecho en el pasado pero no proponen lo que se requiere en el futuro, una especie que no resultó erradicada como consecuencia de la aplicación de las reformas de 2007, a la luz de la propaganda electoral desplegada en la campaña de 2009, en la que el debate público no fue aprovechado para motivar al ciudadano a evaluar, razonar y emitir su voto por opciones de gobierno claramente perfiladas y diferenciadas entre sí, sino que versó sobre las “novedades” que circularon en los medios no regulados, tal como el Internet (R. Morales, “Escándalo mata propuesta”, pp. 12-13).

El debate abierto con la reforma legal referida fue aprovechada por los medios de comunicación, en especial por la televisión, para fortalecer sus intereses y posturas, impulsar la crítica hacia los partidos en conjunto y en particular hacia los legisladores

federales a partir de dar cauce y rienda suelta a cuanto suceso y crítica, en cualesquier ámbito y desde cualquier sector social, pudieran ser utilizados para ponerlos en entredicho y así cabildear con mayor fuerza ante una inminente reforma legal del régimen de medios electrónicos y de las telecomunicaciones, que impulsaría la coalición de PRD, PT y Convergencia frente a la negociación de otras reformas legales que emprendieran el PAN o el PRI. La estrategia de los concesionarios comerciales de la radio y la televisión se dirigió, en este caso, hacia conservar reglas de las concesiones y de competencia favorables y, a la vez, dejar a salvo el control que han detentado sobre la producción y comercialización de los contenidos.

Las tácticas de tales concesionarios convergieron, por un lado, en movilizar la opinión pública hacia la defensa del ejercicio de la libertad de expresión sin cortapisas, sin por ello contraer las obligaciones que impone el efectivo cumplimiento del servicio público, lo cual había sido puesto en entredicho desde diversos sectores de la sociedad y como nunca antes. Y, por otro lado, en propiciar un clima de opinión pública adverso hacia legisladores y partidos en el Congreso federal, pero no así a la Presidencia de la República de la que habían recibido, entre otras prerrogativas, el respaldo para incursionar con ventajas, inigualables en el plano internacional, en el mercado de las telecomunicaciones. Hay otras razones por las cuales tales medios pudieron promover con éxito la crítica hacia los partidos y su mayor intensidad. Entre ellas la degeneración de la política competitiva y su reemplazo por lo que Sartori llama la política de “super oferta” (1998:175), consistente de promesas excesivas que conducen al “desequilibrio inflacionario”, cuando los competidores tratan de arrancarse el apoyo electoral entre sí mediante promesas de inalcanzable cumplimiento, de tal modo que aumenta la competencia por la oferta disponible de bienes públicos pero no así éstos, llevando hacia lo que llama competencia “sucia” porque los partidos no tienen que responder por lo que prometen y no hay sanción al fraude político en ese sentido. Una forma de llegar a ella es por la vía de invocar condicionamientos ideológicos para tratar de justificar la propia resistencia a negociar cambios, cuando éstos reditúen en una mejor evaluación o imagen favorable al partido o coalición gobernante, es decir paralizar el proyecto de gobierno sin hacerse responsable de las consecuencias de su incumplimiento, tal como ocurrió en México en ese contexto.

Los medios de comunicación, en especial los electrónicos, encontraron en esas situaciones y contexto una ocasión más redituable para sacar provecho de la atención y el interés de los públicos hacia la arena política instaurada mediante los programas de discusión política, lo que en parte explica a la vez el auge de éstos. En efecto, del análisis del *corpus* se desprende suficiente evidencia para sostener una frecuencia alta y constante de juicios de valor en los que explícitamente se imputa responsabilidad al PRD y al PRI por obstruir varias iniciativas legales del Presidente de la república, sin ofrecer alternativas, sobre todo cuando la decisión en juego correspondió a materias económicas, tal como las reformas a los sistemas de pensiones, fiscal y energético, que aunque terminaron siendo aprobadas en todos los casos resultaron sin embargo precarias en sus alcances, al decir de especialistas, analistas y expertos en esos temas, aspecto que en sí mismo fue un tema de discusión en la difusión mediática.

No es casual que luego de incumplir el plazo establecido, los partidos políticos en la Cámara de Diputados acordaron, el 7 de febrero de 2008, la designación de tres de los consejeros del IFE, incluido el consejero presidente⁵⁶⁸, medida que derivó de la negociación interpartidista de la reforma electoral aprobada en 2007, y que a la semana siguiente la máxima autoridad de ese organismo resolviera no iniciar una investigación y mantener el monto de las multas a los partidos que incurrieron en la irregularidad de contratar la transmisión de 281 mil anuncios propagandísticos en radio y televisión (“spots”) sin haber dado cuenta de ello a esa autoridad electoral durante las elecciones de 2006⁵⁶⁹. Tampoco podría aparecer como fortuito que al mes

⁵⁶⁸ Así como que en ese mismo mes el mismo consejo electoral decidiera incrementar los salarios de todo el personal de ese órgano, quedando el sueldo de los consejeros electorales equiparado al de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los funcionarios públicos con mayor sueldo en todo el país; ambos temas recurrentes en los programas televisivos de discusión política.

⁵⁶⁹ Que no fueron registrados por los partidos políticos en los informes de gastos de campaña teniendo la obligación de hacerlo, identificados por el IFE a partir de un monitoreo encargado a IBOPE pero que, tal como analizó en su momento el especialista Raúl Trejo, solamente consideró 20 ciudades y las radiodifusoras y televisoras de mayor audiencia, lo que revela que pudieron haber muchos más; su análisis arroja que considerando solamente el total de los “spots” irregulares dados a conocer, el 80% fueron transmitidos por radio y el 20% por televisión y que el 51.5% correspondieron a propaganda de la alianza del PRI y el PVEM, el 27% del PAN, el 17% de la Coalición formada por el PRD, el PT y Convergencia, el 4.2% de Nueva Alianza y el 0.3% de Alternativa, véase TREJO, Raúl (2007). “Sociedad y Poder: 281 026 spots”, en periódico La Crónica, México, 24 de mayo.

siguiente el IFE resolviera iniciar una investigación sobre aquellos en los que se convoca a una movilización de la coalición encabezada por el PRD⁵⁷⁰.

Ante el caso del otro tema más frecuente de tratamiento la difusión mediática, el relativo al clima de inseguridad prevaleciente, la televisión encontró la oportunidad para ganar influencia, como espacio de crítica hacia todos los partidos políticos, a los legisladores y en especial a los gobiernos locales, luego de que el segundo gran ejercicio de escrutinio ciudadano que condujo a la marcha masiva de ciudadanos en la capital del país para exigir eficacia por parte de todas las autoridades, imputando responsabilidades en todos los ámbitos y niveles, forzó como reacción la concertación del “Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad”, pacto suscrito entre el Estado y la sociedad civil organizada en agosto de 2008, que comprometió a todos los poderes públicos y niveles de gobierno con medidas y acciones específicas para cada uno de ellos, además de aquellas con las que se comprometieron por su parte diversas agrupaciones civiles, incluidas las asociaciones religiosas y los medios de comunicación masiva. En el caso del Poder Legislativo federal, la presión ejercida llevaría a la aprobación de la nueva Ley General del Sistema de Seguridad Pública.

Convocadas por diversas asociaciones civiles, el 30 de agosto de 2008 tuvieron lugar, en avenidas y plazas públicas de diversas ciudades del país, marchas de multitudes de ciudadanos agrupados en torno al movimiento social autoproclamado como “Iluminemos México”⁵⁷¹, vestidos en color blanco y caminando ordenadamente en silencio, cuyo propósito común fue hacer pública la indignación ante la situación

⁵⁷⁰ El 20 de agosto de 2008, el TRIFE revoca sanciones impuestas por el IFE a PAN; PRD y PT, por presuntas violaciones a lo dispuesto en la Constitución y el COFIPE en materia de propaganda electoral, al concluir que las frases “violentos” y “presidente legítimo”, utilizadas respectivamente, constituyen un elemento del debate ideológico”.

⁵⁷¹ Que sería convertido formalmente en una asociación civil con el mismo nombre y llevó a cabo, a un año de la movilización referida, el primer encuentro nacional en cuya agenda de discusión se incluyó el tema “Rendición de cuentas y Empoderamiento ciudadano”, junto con otros tales como “Qué esperar de la reforma penal”; “Qué sigue”; “Recuperación de espacios públicos”, “Autoprotección”, “Por qué nos tenemos que resignar”, además de actualizar un mapa delincencial e indicadores de diagnóstico, y en cuyo mensaje inaugural se argumentó que los mexicanos enfrenta crisis de distinto tipo aunque la peor de ellas es la política, que haberse unido y movilizado es resultado de la indagación y el hartazgo y que, aunque la situación prevalece igual, se ha mostrado una forma diferente de participación ciudadana, una encaminada hacia el “empoderamiento ciudadano”, véase <http://www.iluminemosmexico.org.mx>, consulta: 23 de mayo de 2011.

prevaleciente de corrupción, impunidad e ineficacia de las autoridades responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia, a la vez que la exigencia a las autoridades gubernamentales, de todos los poderes públicos y niveles de gobierno, para ofrecer a la sociedad soluciones eficaces para resolver la escalada de inseguridad pública y frenar la espiral de violencia derivada del combate emprendido contra la delincuencia organizada y la impunidad de servidores públicos coludidos con bandas delinquentes. Los actos en más de 88 ciudades del país culminaron encendiendo veladoras, entonando el himno nacional y proclamando alocuciones tales como: “Ya basta!”, “Que se vayan si no pueden”. El 21 de agosto de 2008 un empresario, deudo de un hijo secuestrado y asesinado, sentenció públicamente a las autoridades “si no pueden, renuncien”, al participar en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, en la cual representantes de los tres niveles de gobierno suscribieron un pacto con 75 compromisos, asumidos además por sindicatos, empresarios, iglesias y medios de comunicación, para sumar esfuerzos en el combate de la delincuencia organizada.

Del discurso público del dirigente más visible se destacan, para efectos de este estudio, los registros semánticos de las proclamas relativas a que el movimiento se sustenta en ejercicios de “escrutinio ciudadano”, articulados en torno a buscar un “cambio verdadero” cuyos protagonistas son los ciudadanos “participando activamente” y que se origina desde “adentro” y se dirige hacia “afuera”, mediante el cambio de “paradigma”, a saber el “empoderamiento ciudadano”, entendiendo por “adentro” el seno de la sociedad civil, por “afuera” al Estado y por “empoderamiento” que “los ciudadanos se comuniquen e interactúen de forma libre y eficiente”, “haciendo uso de las nuevas tecnologías”, concebidas como “herramientas que tienen a su disposición, que resultan ser de bajo costo y muy poderosas: Internet, Facebook, Google y Twitter, entre otras”, tal como se desprende del texto del dirigente de la asociación civil “Iluminemos México”, al inaugurar el “Primer Encuentro Nacional Ciudadano”. Un fragmento de dicho discurso contiene indicios de una concepción y visión diferente y opuesta a aquella sustentada en un esquema clientelista de la relación entre gobernantes y ciudadanos, a partir de un uso patrimonialista de los bienes públicos por parte de los primeros y de un solapamiento ó conformidad respecto de su asignación

discrecional y condicionada a la adhesión partidista o la preferencia electoral por parte de los segundos, misma que aún prevalece entre la mayor parte de los ciudadanos:

Pero parece que nuestros políticos no están dispuestos a resolver los problemas estructurales que tiene el país ya que los resultados no se verían en el corto plazo y prefieren tomar soluciones rápidas y vistosas, evitando incurrir en un costo político que no están dispuestos a pagar. Se busca el futuro político antes que el bienestar ciudadano. Y por el otro lado los ciudadanos, supongo que por la desesperación, no ayudamos mucho porque presionamos a las autoridades para que resuelvan el problema rápido y al menor costo social⁵⁷².

La que ha sido una de las movilizaciones ciudadanas más notorias y significativas, en el curso de la transición política en México, protagonizada el 30 de agosto de 2008 por organizaciones formalmente independientes de partidos políticos y gobiernos, representa una línea relevante de la investigación dirigida a entender, en general, la participación política y el desarrollo de la identidad ciudadana y, en particular, la práctica del escrutinio ciudadano. Ese notorio evento fue precedido, por un lado, de un desplegado del Consejo Coordinador Empresarial, publicado el día 11 de ese mismo mes, en el que ese organismo argumenta que incrementar las penas aplicables no garantiza un impacto real en el propósito de conseguir seguridad pública, si tal medida no va acompañada de otras en cuanto a prevención del delito y procuración eficaz de justicia. Y, por otro lado, de declaraciones públicas del Presidente, ese mismo día, señalando que la ciudadanía exige que los gobiernos se pongan de acuerdo en la lucha contra la delincuencia, llamando a los gobiernos locales a intercambiar la información y proceder a depurar los cuerpos policiacos.

5.6. Alcances y límites del escrutinio público mediático en perspectiva

De este tipo de movilizaciones debe ser destacado que las caracteriza un sentido crítico, capacidad de aglutinamiento sin mediar estructuras organizativas, al margen de auspicios o de dependencia alguna respecto de los partidos políticos; más aún,

⁵⁷² “La respuesta es fácil aunque la solución parece complicada”, discurso de Elías Kuri, Presidente de Iluminemos México A. C., en la inauguración del Primer Encuentro Nacional Ciudadano “Iluminemos México”, México, 30 de agosto de 2009.

soportadas por entero en la comunicación a través de Internet, aunque no por ello invulnerables al escrutinio público mediático si atiende a las condiciones del contexto. Éstas se caracterizan porque, considerando a los agentes políticos, sus elites restablecen negociaciones y arreglos institucionales a partir de un proyecto de desarrollo, que no puede prescindir de la “homologación” cultural que induce el mercado, pero que tampoco puede evadir la diferenciación y las inequidades sociales y regionales. En condiciones de pluralismo y persistencia de gobierno dividido, con la alternancia se fragmentan los centros de decisión hegemónicos (Presidencia y Congreso) y la lucha partidaria se conduce entre centro-periferia, gobierno nacional y gobiernos subnacionales o locales. La colaboración u obstrucción al gobierno central se convierte en la disputa central y transita en dos circuitos: relación Presidencia-Congreso y la relación Presidencia-Gobernadores y congresos estatales.

A la par tiene lugar el fenómeno por el que las fuentes de legitimación democrática son trastocadas por la instalación de la “mediocracia” de opinión basada en percepción simbólica, donde la estrategia racional de los actores de la relación fundamental, gobernante-ciudadano, partido-elector, incorpora la valoración simbólica al cálculo estratégico de la decisión-acción política. Una de las manifestaciones de ese fenómeno es la confusión que culturalmente produce la identificación de proyectos políticos alternativos y la pérdida de utilidad de la distinción entre identidades de los agentes políticos a partir de la convención de coordenadas: “izquierda”, “derecha” y “centro”, aunque todavía sea recurrente su uso en los contenidos televisivos de opinión.

En cuanto a las condiciones en que se devuelven los agentes mediáticos importa dejar asentado que, en el contexto de la liberalización económica y la democratización política en México, durante la última década del siglo pasado y la primera del presente siglo, la competencia en el sector de la comunicación mediática se ha acentuado, tiene lugar entre unos cuantos grupos corporativos multimedia, gira en torno a la diversificación del oficio base, incluso para penetrar en mercados de una hilera distinta, con miras a conseguir mayor valor agregado al aprovechar la convergencia digital y la integración de servicios de telecomunicación.

Pero ante la condición estructural de alta concentración económica en todas las ramas del sector, medios impresos, radio y televisión, las estrategias de los grupos multimedia se focalizan hacia los mercados regionales y locales, en especial hacia las zonas metropolitanas, en los cuales la penetración y el posicionamiento ofrecen oportunidades de crecimiento y expansión de la cobertura, mediante la integración económica horizontal que permite consolidar áreas de influencia para cada grupo multimedia. De hecho hay evidencia de que la coinversión extranjera en el sector mediático, la competencia económica y la disputa de influencia cultural y política tienden a desplazarse hacia el nivel regional y local.

En el caso de la prensa, si bien la expansión del mercado tiende a ser más lenta, está orientada en efecto fundamentalmente hacia la cobertura de difusión local, ya sea mediante la aparición de nuevos periódicos que dependen cada vez más de coinversiones con grupos empresariales locales, abriendo nuevas plazas de distribución o bien mediante la venta de servicios sindicados por parte de los grupos periodísticos multi-regionales, lo cual no implica la generación de una nueva oferta informativa, no obstante que la edición de periódicos sea el subsector mediático con mayor fragmentación y dominio de grupos de capital nacional.

La consecuencia que interesa tener presente aquí, como resultado de los rasgos destacados, concierne a que, debido a los intereses creados por una estructura mediática altamente concentrada e inadecuadamente regulada por parte del Estado, es poco probable que los contenidos difundidos se correspondan con una efectiva apertura al pluralismo ideológico y político de la sociedad mexicana, que en su producción se tengan en cuenta las voces, opiniones y juicios de los ciudadanos no organizados y que las informaciones y opiniones circuladas trasciendan los grupos de interés que las provocan o bien las promueven. Esas limitaciones parecen más acentuadas en el caso de la información que en el de la opinión para todos los medios, no obstante la tendencia hacia una operación mediática multimedia diversa.

Por lo que corresponde a los ciudadanos, su condición fundamental en el contexto ha sido la de público espectador, relegado como sujeto social referente, al que conciernen

y afectan las decisiones en juego, en especial la mayor parte de ellos que sin disponer de información relevante y de acceso a una efectiva pluralidad política e ideológica de ideas, opiniones y propuestas, quedan a expensas de ciertas informaciones y opiniones que, debido a la visibilidad que alcanzan al ser acogidas en los medios de comunicación, terminan imponiéndose sobre otras posibles, incluidas desde luego las de los propios ciudadanos. Estos últimos son un heterogéneo sujeto social, pero sin voz en el espacio público y supeditado por entero al esquema corporativo de deliberación pública que le ofrecen los partidos políticos, restringido a ser receptor de apelaciones diversas en los momentos de elecciones y de las circuladas con la propaganda gubernamental que busca justificar decisiones que difícilmente pueden ser sujetas a examen y en cuyo beneficio son justificados los cambios legales establecidos para fomentar, presuntamente, la participación ciudadana. Esa es una de las paradojas del sistema político configurado durante la transición democratizadora.

Esas condiciones no han traído consigo, sin embargo, inmovilización política, pero revelan las coordenadas en que deben ser situados los alcances y las limitaciones del escrutinio público sujeto a *mediatización*. En efecto, al frente de los ciudadanos pueden colocarse grupos de interés, incluso con poder económico, para auspiciar el escrutinio público y la inconformidad contra los gobernantes electos, en particular los legisladores federales, tal como muestra entre otros hechos, que al inicio de 2011, un total de 210 organizaciones civiles de México lanzaron una convocatoria a crear un movimiento ciudadano pretendidamente para “transformar al país” mediante un “Nuevo Acuerdo Nacional”, que se apoye en un proyecto compartido de Nación. El entonces líder de la Confederación Patronal de México señaló que:

"Este es un movimiento que une a 210 organizaciones de la sociedad civil de todo el país, en torno a un objetivo trascendente y que urge concretar: construir una visión compartida de país, que nos de a todos un rumbo fijo, vocación de futuro y unión en torno a nuestras coincidencias, dentro de la gran pluralidad mexicana".

En un acto celebrado en el Museo Franz Mayer del Distrito Federal, las organizaciones presentaron un documento firmado por más de 100 mil ciudadanos, entre ellos empresarios, académicos e intelectuales. Los convocantes coincidieron en que el

Acuerdo Nacional "México a Debate" responde a la falta de acuerdos en el sistema político, e hicieron un llamado a los ciudadanos a "ser protagonistas de la construcción de nuestro porvenir" y no espectadores del estancamiento o el deterioro del país. Las organizaciones sostuvieron que México puede crecer por arriba del 6% anual, abatir la inseguridad y la corrupción, y consolidar la transición democrática y el pleno Estado de Derecho. Para conseguirlo se requiere "tomar las riendas de nuestro destino"⁵⁷³.

⁵⁷³ Uno Noticias, "Llaman a Acuerdo Nacional para cambiar el país", 17 de febrero de 2011, consultado el 20/02/2011 en: <http://www.unonoticias.com/DS/190293/w-Llaman-a-Acuerdo-Nacional-para-cambiar-al-pais.html>.

CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En este capítulo se exponen los resultados del análisis formal semiótico y discursivo, con base en el cual se demuestra la validez empírica de la hipótesis formulada. Este estudio prueba que, con el transcurso de la transición democrática en México, en la televisión transmitida en señal abierta (gratuita) se ha instalado el *escrutinio público mediático*, al abrirse el paso a la movilización de opinión política, mediante ejercicios de discusión acerca del desempeño de gobernantes electos, los legisladores federales incluidos, a través de programas televisivos del género “opinión”, basados en el comentario político y la confrontación de opiniones entre una reducida élite de periodistas y analistas políticos, quienes a su vez se desempeñan como conductores o comentaristas de noticieros y programas de opinión en radio, además de ser todos ellos articulistas en periódicos.

Se probó que en tales programas televisivos tiene lugar, con independencia del tema tratado, la representación simbólica de un escrutinio ciudadano respecto al desempeño de los gobernantes electos, y en específico de legisladores federales. Esa representación simbólica se produce como consecuencia del traslape entre la forma simbólica ideológica relativa al escrutinio ciudadano, –discusión entre ciudadanos por la que se juzga el desempeño de los gobernantes–, y la forma simbólica cultural relativa al escrutinio público, –análisis del acontecer político y discusión de opiniones por las cuales se evalúa el funcionamiento del gobierno–, de tal manera que se produce la escenificación de un ejercicio de escrutinio público llevado en nombre de los ciudadanos.

De esa manera se produce la mediatización de una práctica política democrática a cargo de los ciudadanos, mediante el relevo respecto de ella y su reemplazo por la circulación de opinión política particular, que está al alcance y puede ser apropiada por una parte significativa de ciudadanos, tanto por las audiencias de esos programas televisivos como, debido a procesos de reelaboración discursiva, de otros con quienes aquellos conversan y discuten acerca del acontecer político y el desempeño de los gobernantes, en diversos

grupos y campos de interacción cotidiana. Mediante el escrutinio público mediático, la televisión amplía el alcance de su papel como principal agente, junto con la radio y la prensa, del proceso de colonización cultural de la esfera pública social, así como gestor y moderador de la opinión política que alcanza mayor visibilidad pública y resonancia social.

En México, a partir de la situación de “gobierno dividido”⁵⁷⁴, el papel del Congreso federal adquirió mayor relevancia política y presencia pública; su funcionamiento y su relación con el poder ejecutivo cobraron atención e interés público. La actuación y el desempeño de los partidos políticos y legisladores federales fueron puestos bajo la mira con mayor frecuencia e intensidad de lo que ocurría antes. En ese contexto, los medios de comunicación masiva han tenido varias oportunidades para reorientar su papel y su intervención como agentes políticos y culturales. Entre ellas, ampliar el alcance de su papel como gestores y moderadores de la agenda pública mediática; en este estudio se pone de relieve su papel en tanto que productor y difusor de opinión política, así como de agente de socialización política, mediante el reemplazo de prácticas políticas democráticas por prácticas políticas *mediatizadas*.

En el primer apartado se resume el método de análisis, cuya elaboración se expone en detalle en el anexo de este trabajo y que está orientado, por una parte, a determinar de qué manera puede un programa televisivo de opinión, indistintamente del formato que lo rijan, movilizar el sentido de interpretación hacia la representación simbólica de un escrutinio público mediático llevado presuntamente en nombre de los ciudadanos y de cara a ellos. Por otra parte, a verificar la relevancia que tienen este tipo de programas en la difusión televisiva en el contexto. En el primer caso, se utilizó el análisis semiótico discursivo, desde una perspectiva pragmática de análisis del discurso. La prueba consistió

⁵⁷⁴ Como resultado de las elecciones, el partido del Presidente de la República no tiene mayoría en el Congreso federal y, por tanto, éste puede ejercer un efectivo contrapeso y obstruir el programa de gobierno de aquel. La toma de decisiones sobre las leyes son más disputadas, las oposiciones inciden en la deliberación y se requieren de coaliciones legislativas para aprobar asuntos que requieren de votación colegiada (reformas constitucionales). Partidos distintos al del Presidente influyen para que el Congreso ejercite efectivamente su función de vigilancia y control del Ejecutivo, lo que incide en la orientación de las políticas públicas.

en verificar si la representación simbólica modelizada tenía o no lugar en programas televisivos de opinión. El *corpus* se conformó con al menos algún ejemplar por cada formato de realización televisiva de ese género (v. Cuadro 1 en el Anexo). En el segundo caso, se recurrió a la observación documental, a partir de datos que permitieran determinar la relevancia relativa de estos programas, en la difusión televisiva actual (v. Cuadro 6 en el Anexo).

En el segundo apartado se da cuenta de los rasgos característicos de los programas televisivos del género opinión, y que permiten distinguirlos respecto de otros géneros o tipo de contenido, en particular del informativo. En el tercer apartado se presenta un análisis general del *corpus* de programas televisivos de opinión considerados; en primer término, los rasgos comunes y peculiares según el formato de producción televisiva; en segundo término, en cuanto al escenario y los protagonistas; en tercer término según el estilo, campo y tenor discursivo de la actuación de ellos; luego son tratados la característica común de remitir a la agenda temática informativa; seguida por los rasgos del ritmo de la conversación escenificada y, finalmente, las relaciones que se establecen entre los participantes; en todos los casos el análisis es comparativo entre ellos.

En el cuarto apartado de este capítulo, se expone la verificación de la prueba de la hipótesis; allí se argumentan los criterios de validez de la prueba, se definen las categorías para la codificación de los datos y los procedimientos de análisis semiótico y discursivo aplicados al *corpus*. En primer término, se define la situación de enunciación y de interacción discursiva, marco en el que cabe demostrar si se produce o no un debate o confrontación de argumentos; en segundo término, se analiza la función que desempeña el tópico (tema) del programa y la relación que guarda con la verificación o no de la representación simbólica referida. En tercer término, se analiza la construcción de identidad en la interacción discursiva, con objeto de verificar si los participantes ostentan y detentan la identidad de ciudadanos y la atribuyen o implican en el telespectador, de cara al cual se saben actuando.

En el análisis se consideró como variable dependiente la ejecución discursiva de una evaluación argumentada y crítica de la actuación o del desempeño de gobernantes electos, y se distinguió en ésta cuando se trató de legisladores federales y del Congreso general, o bien de otros agentes políticos, es decir el personal directivo de la burocracia administrativa en cualquier orden y nivel de órganos o instituciones de gobierno. En el apartado metodológico del anexo de este estudio se da cuenta, con detalle, del método, sus premisas, procedimientos y operaciones⁵⁷⁵.

Conviene dejar sentado aquí, no obstante, que el análisis se orientó a observar si en estos programas televisivos se da cabida al intercambio de opiniones políticas divergentes y, por consiguiente, a establecer si en ellos tienen lugar los siguientes supuestos: a) que se establezca una discusión o debate de ideas; b) entre ciudadanos y de cara a ciudadanos y c) se evalúa el desempeño de los legisladores federales; la hipótesis se prueba si los tres supuestos se verifican dentro de una misma emisión televisiva⁵⁷⁶.

⁵⁷⁵ Aquí solo conviene dejar asentado que solo una aproximación semiótica permite interrogar los programas televisivos como textos culturales, construcciones discursivas de sentido cuyo significado resulta de establecer los rasgos textuales que reaparecen continuamente, llamadas subyacentes en diferentes pasajes y contextos, actuando como indicadores de significados latentes de los que pueden inferirse las fuentes de procedencia (Hall, 1975: 15); tomando en cuenta las condiciones del significado textual, mediante los siguientes registros significativos: imagen y sonido; utilización del lenguaje; códigos argumentativos de discusión; construcción de identidades discursivas por los actantes en la emisión y la *modalización* de la acción discursiva de ellos, a partir de la premisa de que las opiniones se inscriben en el discurso en sentido literal, está dicha o escrita en el texto, no cual ideas materializadas en palabras, sino en maneras de pensar, hablar y experimentar (Belsey, 1980: 5); ese enfoque resultó de que los programas televisivos que se analizan están contruidos a partir de actos *performativos*, donde la intencionalidad comunicativa es unívoca: dar opinión y confrontar eventualmente la de otros ("pacto comunicativo" que implica al telespectador en la experiencia de *televidencia* acerca de "lo que se trata"). Hay análisis rigurosos del discurso político y mediático cuya propuesta metodológica demuestra que el análisis semiótico cualitativo no es incompatible con la búsqueda de recurrencia como indicador de significación, tal como el análisis comparativo longitudinal que Salgado (2003) hace del discurso presidencial en México.

⁵⁷⁶ Que entre otras aportaciones vendría a confrontar las tesis nihilistas del "pensamiento común", inspirada en la escuela de Frankfurt, acerca de los efectos de los medios de masas, compartidas todavía por algunos estudiosos del contexto Europeo, que se ha hecho cargo del discurso académico conocido en el contexto anglosajón como "dumbing-down", que puede ejemplificarse con los argumentos de la trivialización, *espectacularización* y banalidad del contenido televisivo sobre política, que lleva a Brune (1996: 33) a sostener que permanece al nivel de un mero intercambio de opiniones o pareceres acerca de acontecimientos, antes que de análisis; a Díaz (1999: 36) a hablar de la "ley del mínimo esfuerzo"; a Ruffin, 2003: 76) de la "dictadura de la audiencia" o al "sensacionalismo" televisivo que cuando centra el interés en la política lo hace en cosas que no requieren análisis (Bourdieu, 1998: 51)

El grado de validez de la hipótesis es función directa de la ocurrencia de eventos o episodios que indiquen que se verifican los tres supuestos; cuando los tres se verifican simultáneamente la constatación de la hipótesis es plena; la ocurrencia de los dos primeros (a y b) reúne la condición suficiente y la del tercer supuesto la condición necesaria. La simultaneidad corresponde a la ocurrencia del evento o episodio dentro de la misma secuencia de turnos de habla. Cuando la ocurrencia tiene lugar en un mismo turno de habla el valor de prueba es aún mayor. Cada supuesto corresponde a una variable dependiente de comportamiento a analizar, la primera corresponde a la situación interactiva que se establece; la segunda a la identidad discursiva con que se actúa y la tercera a un tipo de acción discursiva ejecutada, en tanto que el formato del programa televisivo constituye la variable independiente; no hay razones, en principio, para suponer que éste predetermine, a partir de la identidad proyectada por su emisor, el carácter de la forma simbólica cultural cuya ocurrencia se busca verificar.

En este mismo apartado, por otra parte, el análisis constata si tales programas televisivos han ganado espacio en la difusión televisiva reciente, para verificar el segundo componente de la hipótesis propuesta, haciéndose al respecto algunas consideraciones de las maneras en que, en su caso, ello ha podido ocurrir. En el cuarto apartado del capítulo se presentan los resultados del análisis acerca del peso relativo que tienen los programas de opinión, en la difusión televisiva transmitida mediante señal abierta o gratuita en el contexto de estudio, así como los diversos mecanismos por los cuales puedan llegar a captar la atención y el interés de los telespectadores, así como involucrarlos en la información y opinión que difunden incluso en otros soportes técnicos.

A partir de la interpretación de resultados, la investigación permite establecer que el género televisivo de “opinión” ha proliferado en la primera década del siglo, en el conjunto de la difusión televisiva de señal abierta en México; que no obstante la diversidad de formatos utilizados en su producción y realización, los contenidos de tales

programas pueden representar simbólicamente para el telespectador, que en ellos tiene lugar una evaluación crítica de los ciudadanos respecto de la actuación y el desempeño, en general, de los actores políticos, y en particular de los legisladores federales. Se verificó que el escrutinio público mediático se produce mediante un traslape entre la forma simbólica ideológica mediante la cual se significa el escrutinio ciudadano y la forma simbólica cultural con la cual se moviliza el sentido para significar que la primera tiene lugar en la escenificación de una evaluación crítica del desempeño de legisladores, llevada a cabo por parte de agentes mediáticos en nombre de los ciudadanos y apelando a ellos.

La consecuencia más relevante de la verificación de esta hipótesis es que al generalizarse tales ejercicios se instala una modalidad de “escrutinio público mediático”, que sustituye a una práctica política democrática que corresponde a los ciudadanos (“escrutinio ciudadano”), con lo cual la televisión pasa a desempeñarse como una especie de “jurado de opinión” pública, en cuanto a es accesible a cualquiera, es atendible por cierto grupo de ciudadanos, quienes pueden atenerse a ella para evaluar a los gobernantes electos o encontrar en ella un referente de valor, en su vida profesional o cotidiana.

Con esa demostración analítica se pone de relieve el papel de los medios de comunicación como agentes intermediarios de flujos de información y opinión política, con referencia y de cara a los cuales se pueden relacionar los gobernantes electos y una parte significativa de ciudadanos, por lo menos aquellos que se atienen a la difusión televisiva como principal fuente y recurso para conseguir información y opinión.

6.1. Procedimiento de análisis y prueba de la hipótesis

El análisis se dirigió a verificar si la forma simbólica ideológica del escrutinio ciudadano⁵⁷⁷ puede ser movilizada por la forma simbólica cultural del escrutinio mediático⁵⁷⁸, dentro de

⁵⁷⁷ Tal forma es la práctica política democrática consistente en la evaluación crítica que los ciudadanos hacen acerca de la actuación de las instituciones de gobierno y del desempeño de sus titulares (v. capítulo 1).

la difusión televisiva. Las operaciones implicadas fueron: identificar la presencia de rasgos típicos de la primera dentro de la segunda y confrontar los rasgos típicos de ésta para cada tipo de programa del *corpus* delimitado, según género de contenido, formato de realización, participantes y emisor televisivo, como ilustra en el siguiente esquema:

MODELO DE PRUEBA DE HIPOTESIS

Estructura de la práctica política (forma simbólica ideológica)		Estructura de la representación simbólica en difusión televisiva (forma simbólica cultural)	
Escrutinio ciudadano <i>Rasgos típicos (patrón) *</i>		Programa televisivo coloquial o apelativo <i>Rasgos típicos (patrón)</i>	
CIUDADANO:	Reunión o comunicación entre ciudadanos interesados en tratar asuntos públicos y de gobierno	GENERO:	Registro de elementos de identificación del contenido (grupo de géneros: informativo, género coloquiales o apelativos)
FINALIDAD:	Evaluar o examinar actuación y desempeño de actores políticos y emitir juicios al respecto	SUBGÉNERO	Entrevista, mesa redonda, tertulia; rueda de corresponsales y emisoras; dialogo participativo con público; variedad humorística política
DEBATE:	Intercambio y confrontación argumentada e informada de opiniones, mediante la comunicación entre ellos	FORMATO	Tipo de interacción comunicativa: entrevista; mesa redonda; panel de discusión; disposición de escenografía, mobiliario y participantes; presentación y secciones y cierre del programa; secuencia de cortes (anuncios publicitarios)
PUBLICO:	Acceso irrestricto y de cara a cualquiera interesado y versa sobre asuntos colectivos y de gobierno	REALIZACION:	Registro de elementos de la transformación técnico retórica concreta: planos de toma y secuencias de escena; incorporación de imágenes visuales y acústicas
RACIONAL:	Reflexión informada basada en argumentos y con tolerancia	AUDIENCIA	Telespectador en general, ciudadanos en general, grupo social o político referidos
LIBRE	Sin discriminación alguna y en condiciones de igualdad	CONTENIDOS	Designación del tema, delimitación, orientación y tiempo dedicado
PLURAL	Representatividad de la diversidad social y política	TRATAMIENTO DISCURSIVO	Registros de estrategias discursivas: argumentativas y de refutación (confrontación o debate); Discurso referido (implicar a ciudadanos y remitir a los mismos) y argumentos de autoridad mostrada y citada (expertos, estudios, encuestas) Utilización de deícticos y contexto de enunciación (acciones denotadas por los sujetos que hablan, objetos y sujetos implicados, predicados que recaen en ellos).

* Todos son rasgos típicos según la teoría normativa de la democracia liberal; los tres primeros definen el sujeto, finalidad y acción; el resto las condiciones de modo o procedimiento de la interacción social.

⁵⁷⁸ Acciones de análisis y debate de temas políticos, entre ciudadanos y para los ciudadanos, a partir de un agente intermediario, en una interacción discursiva a distancia para otros no presenciales.

El análisis se centra en las formas simbólicas mediante las cuales los productores de las mismas pretenden hacer una evaluación de la actuación y el desempeño de agentes políticos, a través de emitir su opinión personal de tal modo que pueda ser interpretada como representativa de los interlocutores no presentes en la situación comunicativa en que se producen, y a quienes está dirigida tanto la opinión como la situación comunicativa en la que se emite. Tales formas simbólicas suponen otras en las cuales se pueden desagregar, para efectos de análisis, las interpretaciones posibles. La verificación del proceso de traslape está fundamentada en la comparación entre los componentes o rasgos esenciales en el análisis de formas simbólicas según lo expuesto en el capítulo 2. La modelización de la forma simbólica ideológica correspondiente al escrutinio ciudadano deviene de lo expuesto en el capítulo 1, la modelización relativa a la forma simbólica cultural del escrutinio público está fundamentada en lo expuesto en el capítulo 2. El proceso de traslape pone en juego la relación con otras formas simbólicas asociadas en papel subsidiario, que son discriminadas puesto que orientan el sentido y significado hacia un comportamiento distinto de aquel que se pretende observar.

El primer paso consistió en establecer los rasgos típicos esenciales de la práctica política de escrutinio público ciudadano, a partir de los principios y reglas del ideario de la democracia liberal, analizados prolija y exhaustivamente por las teorías normativas de la democracia en las sociedades modernas. Se identificaron los rasgos peculiares de dicha práctica política a partir de los elementos estructurales de toda forma simbólica de acuerdo con el planteamiento analítico de Thompson (1996). El segundo paso fue identificar los aspectos del funcionamiento semiótico y discursivo del tipo de programas televisivos, como unidad de significación global (es decir como una obra unitaria e independiente de mensajes audiovisuales) tal como es construida durante su realización y mostrada en su transmisión televisiva. El tercer paso consistió en verificar que la forma simbólica ideológica puede ser representada en la forma simbólica cultural, lo que se hizo mediante el contraste entre los rasgos estructurales de una y otra observados y registrados en los programas que constituyeron el *corpus* del estudio, a fin de identificar

coincidencias y divergencias que favorecen o inhiben la movilización del sentido presupuesta en la hipótesis. El cuarto paso consistió en comparar, con base en la interpretación de los resultados, los rasgos comunes a los diversos tipos de programas televisivos que dan cabida o hacen propicio el traslape entre ambas formas simbólicas consideradas, así como sugerir algunas implicaciones y consecuencias que derivan de ese fenómeno, en términos de los ciudadanos telespectadores de ese tipo de programas.

Se consideraron los aspectos semióticos y lingüísticos que indiquen rasgos del patrón del tipo de acción en el contexto de una interacción comunicativa presencial de cara a telespectadores, es decir que permiten construir analíticamente la situación de comunicación caracterizada como “casi interacción televisiva” y el tipo de acción: “actuar para otros no presenciales apelando indirectamente al receptor” (Thompson, 1998), a partir de dos niveles de análisis:

- 1) *Textual*: estructurado por ciertos índices o marcas discursivas que pueden tipificar la pauta con que se organiza el sentido de la significación de los mensajes audiovisuales y lingüísticos, analizados en cuanto a su función y a su relación entre sí como discurso.
- 2) *Contextual*: estructurado por la finalidad del programa televisivo, el tipo de formato y la audiencia hacia la cual va dirigida.

En el primer nivel se consideraron a su vez dos planos de observación y análisis: el plano semiótico para los aspectos del funcionamiento del lenguaje audiovisual, y el plano lingüístico y paralingüístico, para los aspectos discursivos y del proceso de enunciación. En el primer plano se observó la interacción comunicativa entre sujetos en cuanto a sus circunstancias físicas y temporales, tomando en cuenta la construcción *sígnica* de los objetos visuales y el lenguaje no verbal que funcionan como principales referentes para la percepción (escenario, posturas y gesticulaciones; mobiliario). En el segundo plano, se observaron el uso del lenguaje y la construcción de las cadenas habladas, sujetas a análisis de sintaxis para determinar los objetos acerca de los cuales se refieren, análisis semántico para establecer la relación que los actantes establecen con la realidad (uso léxico, elección

de verbos) y análisis pragmático o del discurso en interacción, para observar cómo se utiliza el habla según qué intención tienen los participantes y a quién se dirigen.

El dispositivo discursivo que se tendría que poner en juego para que se verifique la representación simbólica del escrutinio ciudadano, consiste en la identificación de las estrategias de argumentación y refutación, el discurso referido, así como la utilización de enunciados *illocutivos* que permitan establecer la apelación a la representatividad de la opinión de ciudadanos, ya sea porque se habla en esa calidad, o se habla en nombre de ellos, se esgrime que se conoce su opinión o juicios, o bien se hacen inferencias de éstos con base en la referencia o remisión a estudios, estadísticas, datos o sondeos de opinión. Por eso se aplicaron herramientas de análisis del discurso argumentativo y del conversacional, el primero revela intenciones de persuasión y mecanismos de autoridad y de refutación puestos en práctica; el segundo, revela la pauta de turnos de habla que, aplicados al caso revelarían si se recrea una conversación o charla familiar o de amigos, o bien una polémica acalorada, así como la forma de evocar que el ciudadano está o no convidado a su efectuación. Se trata de determinar la manera en que tiene lugar la autoconstrucción del hablante (individual o colectivo), la construcción de interlocutores (como aliados, adversarios, neutrales o distantes) y de ahí a la construcción del referente acerca del que se habla, conversa o discute.

De ahí que se consideraron los elementos paralingüísticos, aquellos que añaden significación a lo hablado o escrito y los que intervienen en la expresividad y la función retórica del discurso en el proceso de comunicación, tal como la proximidad entre participantes, los movimientos del cuerpo, las gesticulaciones y señales corporales, el tono de la voz y el estilo de oratoria. Tales elementos potencian su significación y potencial de movilizar el sentido de la interpretación, al ser observados y analizados en conjunto con los indicadores semióticos del contenido audiovisual, derivados del formato del programa televisivo y la manera en que actúan los participantes del mismo, tales como el tiempo dedicado a cada participante, el manejo de planos (para enfocar por ejemplo

interrupciones, yuxtaposición del habla de dos o más participantes, gestos de estado anímico, en reacción a lo actuado en la interacción) y el montaje que da lugar a la narrativa audiovisual (incluidos escenografía, mobiliario e incorporación de imágenes visuales y acústicas durante su transcurso) en la medida en que remiten el sentido de lo denotado y connotado hacia la escenificación de confrontación crítica de opiniones.

El análisis semiótico correspondió a los aspectos de significación audiovisual y el análisis lingüístico-discursivo a los aspectos de significación de los actos de habla, considerados unos y otros aspectos en su interrelación, es decir, a partir de la actuación de los participantes y en las condiciones de producción textual con que transcurre el contenido audiovisual del programa televisivo correspondiente. El análisis global es de orden deductivo y cualitativo; las operaciones transitaron de lo general a lo particular de la significación, de los elementos con mayor margen de connotación pero que dependen por entero de lo denotado –tal como es el caso de los signos y símbolos visuales y sonoros-, hacia los elementos cuya lectura o percepción, comprensión e interpretación dependen en menor medida de lo denotado y cuya inter-textualidad demanda mayor competencia reflexiva y textual en los participantes y en los destinatarios del programa televisivo.

En los programas televisivos cuyo contenido consiste en una interacción comunicativa real (no imaginaria o ficticia), las imágenes visuales y acústicas detentan un mayor grado de *iconocidad* y fijación al soporte técnico del medio de transmisión que aquel que pueden detentar los elementos orales o hablados, más densos, volátiles y efímeros y que por tanto pueden provocar menor retención. Esto supone que un programa televisivo se produce y difunde para que cualquier telespectador pueda entenderlo y disfrutarlo, así como que con ese fin debe guardar congruencia con las pautas culturales convencionales compartidas acerca del reconocimiento, valoración y apropiación de contenidos audiovisuales. El análisis semiótico audiovisual se centra en la interacción comunicativa, mediante el registro de elementos y aspectos que puedan significar que los participantes discuten, debate, confrontan puntos de vista, critican; que se saben actuando de cara al

espectador; que se dirigen al telespectador como voces autorizadas, expertos, analistas, didácticamente, para ilustrarlo; que se producen situaciones de tensión, expectación, o bien tranquilidad, respeto, contemplación entre participantes; con qué frecuencia se interrumpen y con qué frecuencia siguen turnos ordenados en secuencia sin interrumpirse; si se introducen elementos visuales y sonoros, tales como reportaje, encuesta, sondeo de opinión en calle, entrevista o declaración de algún personaje, un docudrama (documental dramático) dentro de la emisión, en qué momento, para qué y cuáles son las reacciones de los participantes. Todo ello a partir del registro de las emociones y actitudes que asumen los participantes y que son tomadas por la cámara⁵⁷⁹, mediante planeo, emplazamientos y secuencia de tomas.

6.2. Programas televisivos de opinión: género híbrido

A partir del presupuesto general de que los programas televisivos de opinión y debate constituyen un tipo de contenido simbólico y discursivo con una especificidad tal que es posible distinguirlo respecto de otros, se presupuso que es posible que tales programas den cabida a la representación simbólica del escrutinio ciudadano, de entre otras representaciones movilizadas. Eso implicó considerar al programa televisivo como una unidad significativa compleja, con coherencia discursiva, dada ésta última por el patrón dominante de la situación comunicativa que se protagoniza en el contenido audiovisual transmitido y destinado invariablemente para otros que, sin estar presentes en tal interacción, participan de ella en calidad de espectadores, a los que se les supone interesados y capaces de elaborar su propio juicio acerca de dicho contenido, como resultado del intercambio de opiniones y argumentos.

Por eso, la estrategia metodológica elaborada consistió en la identificación del registro de los textos o contenidos de los programas de televisión analizados. Desde una perspectiva

⁵⁷⁹ Mediante acercamientos o primer plano, bustos o plano medio, si se toman rostros de uno y otro en una misma secuencia, de lo que se sigue que se busca mostrar algo al telespectador; si se usa panorámica, cuándo y con qué motivo.

discursiva, según plantean Calsamiglia y Tusón (2004), se puede identificar el registro desde la lingüística funcional, que propone la observación de las situaciones; procedimiento que puede ser confrontado con la descripción del hecho comunicativo en la etnografía de la comunicación y con la determinación del género. De acuerdo con ese planteamiento, una dimensión del “modo”, en tanto que factor situacional referido a las diversas formas de canalización o transmisión del mensaje y que condiciona, orienta y a veces determina el uso lingüístico, el programa de televisión puede ser considerado como una de las dimensiones del registro del texto, aquella que corresponde al género discursivo considerado como esquema organizativo por el que se canaliza la comunicación (Calsamiglia y Tusón, 2004: 330).

Esta dimensión puede ser privilegiada como determinante del registro, es decir, del uso de la lengua en la unidad comunicativa de acuerdo con la situación en que se encuentra el hablante, es decir, uno de los tipos de variación que se puede encontrar en el uso lingüístico (otras variedades no dependen del uso en situación sino de los usuarios (Calsamiglia y Tusón, 2004: 325 y 326). Al respecto, el registro del género de los programas permitió construir un *corpus* a partir del cual llevar a cabo la prueba de la hipótesis, sobre la base de los siguientes hallazgos:

A. Se diferencian clara y radicalmente del género informativo, aunque en algunas clasificaciones analíticas sean comprendidos como una modalidad de ese género audiovisual, ya que la finalidad con que se producen no constituye la difusión de información, ni siquiera el comentario de noticias, sino en todo caso el análisis y la discusión de acontecimientos, hechos o declaraciones públicas de índole política o bien de interés general para la población. Al respecto se pudo verificar que todos los programas considerados se basan en una interacción comunicativa en su modalidad oral, presencial cara a cara y de tipo conversacional, donde los protagonistas saben que actúan discursivamente de cara a otros no presenciales que actúan como destinatarios finales de la emisión televisiva. Se trata de la puesta en escena de una interacción discursiva

dialógica de acción a distancia para otros no presenciales (que no comparten las mismas coordenadas de espacio y tiempo): la audiencia televisiva del programa respectivo. Se trata de un género audiovisual denominado “coloquial” que se corresponde al subgénero discusión o debate, pero se diferencia de otros subgéneros como el comentario periodístico, el reportaje, la tertulia o la revista política humorística. Por esa razón y para efectos de contraste se incluyó en el *corpus*, programas televisivos de esos otros subgéneros, que de ese modo permitieron disponer de una variable de contraste en el análisis de la prueba de hipótesis.

B. Si bien el formato de producción o realización televisiva es distinto entre los programas⁵⁸⁰, todos comparten el hecho de que el contenido está basado en la interacción discursiva “puesta en escena”, es decir que define el contenido mismo del programa, aquello de lo que consiste en tanto que producto u objeto cultural destinado para un público televidente que tiene interés en conocer las opiniones que otros tienen sobre asuntos públicos de interés general. Llegar a esta formulación implicó, como primera tarea analítica, acogerse a un determinado enfoque de clasificación de contenidos audiovisuales, y luego elaborar la categoría de “contenidos de opinión en televisión”, como un tipo distintivo de otros contenidos, para de modo consecuente estar en posibilidad de identificar tales contenidos en la difusión televisiva en México. De modo que el análisis tuvo como unidad básica al programa de televisión y como categoría de clasificación de contenido al formato, consistente en este caso en el intercambio de puntos de vista y de opiniones políticas, que puede tener lugar con diversas modalidades,

⁵⁸⁰ Esta distinción representó un problema analítico en sí mismo. En primer término, porque hay diversos criterios de clasificación y en consecuencia tipologías elaboradas. En segundo término, las fronteras entre los géneros audiovisuales en general son precarias y difusas, lo cual se acentúa aún más en el caso de la televisión debido a las posibilidades expresivas que permite y las transformaciones técnico retóricas que hace posible este medio. En tercer término, los intentos para distinguir un tipo de contenido de otro quedan supeditados a la aplicación de las clasificaciones establecidas o bien tendrían que justificar la elaboración de alguna distinta. En televisión la organización de los contenidos obedece a la producción, realización y difusión de programas televisivos. El programa televisivo es una obra unitaria completa y autónoma, se produce con una finalidad específica, aunque se integra y forma parte de una programación de contenidos establecida con una finalidad más general por cada operador de televisión. Sobre esta cuestión véase Cebrián, 1996 y 1998; sobre las tendencias en la producción de contenidos en el contexto internacional, véase Sánchez-Taberner, 2008.

tal como la entrevista, el comentario, la conversación informal o “tertulia”, el panel de discusión, mal llamado “debate” en las clasificaciones convencionales académicas y periodísticas, tal como se verá al dar cuenta de los resultados del análisis de la situación interactiva que tiene lugar en los programas definidos por el género de “opinión” aquí propuesta. Pero para los fines del estudio esta tarea sirvió para establecer el marco a partir del cual se pueden distinguir los programas de un género y de otro y, con base en ello, proceder a delimitar el *corpus*.

C. De la observación sistemática de los programas televisivos, difundidos en señal abierta o gratuita de televisión, se desprendió que cada televisora establece de manera arbitraria su propia clasificación. No obstante, eso es sólo un dato que sirve en la tarea de inferir el género de lo que la televisora produce y difunde. Para llegar a ese dato, se confrontaron los criterios que establecen los operadores de televisión (tal como se muestra en el apartado 4.1 de este capítulo) y que predominan en la difusión televisiva en México y los criterios elaborados en estudios acerca de los géneros audiovisuales⁵⁸¹, y con base en ello se dedujeron los elementos a tomar en cuenta para la delimitación del *corpus*.

D. Por ello se concluyó que el sentido con que el género puede ser interpretado está orientado por el formato del programa televisivo particular, dado que los programas televisivos pueden resultar de una mezcla de contenidos y formatos que rompen con las convenciones culturales tradicionales, dando lugar antes que a una yuxtaposición a la articulación discursiva de contenidos “híbridos” que no corresponden a algún sólo género, de acuerdo con las clasificaciones convencionales en uno y otro campo. Por eso el criterio de selección de contenidos televisivos atendió a la finalidad del programa según el autor o

⁵⁸¹ Según Cebrián los géneros apelativos o dialógicos “exponen hechos, ideas u opiniones de personalidades, expertos y, en suma, de personas portadoras de información y opiniones, mediante el dialogo del periodista, o mediador, con una o varias personalidades. El informador consigue que el destinatario conozca los hechos y opiniones directamente de sus protagonistas, testigos o expertos” y se caracterizan fundamentalmente por el uso del dialogo y de la presencia sonora o audiovisual de los portadores de información. El informador queda en segundo lugar y deja el protagonismo a sus interlocutores. Actúa como interrogador y moderador” (1996:39). Si se atiende a dicha tipología, los contenidos televisivos de los programas de interés para este estudio corresponderían a géneros distintos y requerirían un tratamiento diferenciado.

emisor, a partir del análisis semiótico y discursivo del tipo de interacción discursiva y de la situación comunicativa que se puso en escena en los programas. A partir de ello se estableció la estructura regular que se produjo con cada emisión de cada programa.

E. En ese orden de ideas, un tipo de contenido en los programas televisivos difundidos en México, en la última década, corresponde a aquellos que ofrecen al telespectador un intercambio opiniones de orden político, es decir, relativas a la actividad de gobierno y al funcionamiento de las instituciones ante ciertos hechos, acontecimientos, circunstancias y condiciones. Dicho intercambio de opinión política no tiene cabida en las clasificaciones convencionales, por ejemplo la propuesta por Cebrián (1996) aunque Imbert (2008: 94-97) contempla el formato como un rasgo peculiar de lo que llama la *neotelevisión*.

6.3. Análisis general de los programas televisivos de opinión

Considerando los rasgos comunes y distintivos entre programas televisivos de opinión se llegó a los siguientes resultados. Una característica común a todos ellos, con independencia de la televisora que los difunde, es la estabilidad del formato y la regularidad de los participantes. Cada televisora difunde un programa para cada tipo de formato. Con base en la observación y el análisis del *corpus*, se puede concluir que los formatos identificados son, en realidad, resultado de arreglos o modalidades del formato panel de análisis y discusión, que es el dominante en este tipo de programas. De tal modo que las variantes del formato están dadas por la combinación de formatos distintos, pero que son articulados para servir a la confrontación de ideas, propósito común a todos los programas de ese género.

Las modalidades están dadas por los recursos utilizados tanto para provocar la confrontación de opiniones, o bien para inducir la expectativa de que ésta puede tener lugar y que se justifica, desde el punto de vista del productor-difusor televisivo, como parte de la orientación del contenido del programa. Ésa es una manera primigenia de

diferenciar el programa de opinión respecto de los programas televisivos informativos, tal como los noticiarios, en los cuales eventualmente se podrá establecer, por ejemplo, la entrevista en estudio pero no necesariamente un panel de discusión, ni siquiera a partir de ella⁵⁸², lo cual en todo caso es una decisión de los difusores televisivos.

Por consiguiente, el formato de panel de discusión puede ser alimentado por insumos informativos, que incluso llegan a ser también opiniones de actores sociales diversos, lo que define una modalidad híbrida del formato de algunos programas de opinión. Por un lado aquella en que mediante la inserción de reportajes y de testimonios personales, recogidos entre personas que han participado directamente en un suceso de interés público, se apoya la construcción discursiva del tema y objeto referente de la discusión que será inducida inmediatamente a la exposición previa; al respecto se observa que la utilización de este recurso se presenta invariablemente al inicio de la emisión televisiva. Modalidad peculiar observada en los programas “Punto de Partida” y “Reporte 13”, difundidos por Televisa y TV Azteca, respectivamente y cuya transmisión coincide en el mismo día de la semana.

Por su parte, la entrevista a una o varias personas invitadas es adoptada como vehículo para el análisis y la discusión del tema planteado por el entrevistador, invariablemente el conductor o conductores del programa, lo cual es una precondition que puede llevar eventualmente a establecer un debate, o bien conservar la forma de confrontación de opiniones o puntos de vista con el invitado o los invitados a quienes se va entrevistando en el curso de la emisión. Ese fue el caso de los programas “En contexto” y “La Manzana”.

⁵⁸² Dos hechos son significativos al respecto. Por una parte, en los noticiarios se llega a entrevistar simultáneamente a dos personas distintas con relación a un mismo asunto, aún cuando alguna no está en el estudio de transmisión televisiva. Por otra parte, aunque actualmente casi todos los noticiarios han recurrido a incluir una entrevista en estudio en su desarrollo, ello ocurre esporádicamente, no forma parte de la estructura organizativa del contenido y, en cualquier de los casos observados, no se conduce necesariamente para confrontar los puntos de vista de los entrevistados, sino en todo caso para expresar su propio punto de vista, el cual el emisor televisivo ha considerado relevante y de interés. Ambos hechos son tendencias muy recientes en los noticiarios y se explican en parte debido a la competencia entre televisoras por hacer más atractivos este tipo de contenidos en televisión. Esa estrategia está influida por la experiencia que en otros países detentan los grandes conglomerados multinacionales especializados en la producción.

La diferencia crucial con respecto a una entrevista convencional radica, no tanto en que los entrevistadores confronten al entrevistado sino en que, más aún, vierten sus propios puntos de vista y los defienden de cara al entrevistado, con lo que se generan condiciones propicias para debatir, en el caso en que el entrevista disiente de los puntos de vista de quien lo entrevista y lo manifiesta refutándolos. Esa es, por cierto, la razón, ya expuesta, para haber definido como una variable de observación y análisis la ocurrencia de la utilización del recurso de refutación, para todos los programas del *corpus*. Cabe señalar que en éste último se incluyó deliberadamente un programa que, a diez años de difusión ininterrumpida, “La entrevista con Sarmiento”, ha mantenido un mismo formato, distinto al panel de discusión, consistente en una entrevista estructurada a un invitado, conducida a lo largo de toda la emisión de tal modo que no se produce un debate, porque el conductor no actúa discursivamente con esa finalidad, lo cual no significa que no exponga sus propios puntos de vista y que, eventualmente, manifieste disenso respecto de los del entrevistado. Con su inclusión en el *corpus* permitió validar el criterio de clasificación de programas televisivos de opinión actualmente difundidos; resultó plenamente justificada ya que sirvió como elemento de contraste.

Del análisis se desprende que en los programas basados en el formato *híbrido*, que combina el panel de discusión con la forma de interacción dialógica representada por la entrevista a uno o varios actores sociales presentes en el estudio, se trasgrede en todos los casos las convenciones culturales, estudiadas muy productivamente por la perspectiva de la pragmática discursiva, relativas a las formas de comportamiento en interacciones discursivas dialógicas, de tal modo que la interacción discursiva desemboca invariablemente en la modalidad de panel de discusión, lo cual es un resultado neto de la actuación de los participantes. En el cuadro del Cuadro 3 en el Anexo se pueden apreciar los rasgos comunes y las diferencias en cuanto a formato entre los programas televisivos.

Ahora bien, el comportamiento de regularidad y estabilidad del formato y los participantes se explica porque ambos aspectos cumplen la función de dotar de valor al programa, en términos de un bien cultural ofrecido para el intercambio, en un contexto de competencia. Desde ese punto de vista, cada emisor trata de diferenciar su respectivo programa para efectos de su valoración en el mercado y el consumo cultural, entre difusores (producción y oferta televisiva) como entre el público (demanda-consumo). Un factor está dado por los temas objeto a analizar y discutir en cada emisión. Los resultados al respecto revelan sin embargo que no constituye en sí mismo un atributo relevante. De hecho, se encontró invariablemente que los temas conciernen a hechos de actualidad, o bien de interés humano genérico. Hay una alta correlación entre la agenda temática de estos programas y la que se establece en la difusión noticiosa, hecho que incluso se hace explícito por parte los protagonistas y en los mensajes de promoción de tales programas⁵⁸³. Cabe recordar, no obstante, que el análisis de esta variable no es exhaustivo, porque la finalidad del estudio no es establecer el comportamiento de los programas televisivos de opinión, como factor interviniente en la conformación de la agenda pública mediática, lo que implicaría analizar la difusión informativa de la televisión⁵⁸⁴.

En cuanto al primer aspecto habría que destacar que las televisoras utilizan en común el género “opinión” de modo ambiguo para clasificar el contenido de su programación, lo que les permite agrupar programas de distinto formato, que van desde una conversación relajada o “tertulia”, hasta un panel de análisis y discusión, pasando por la mezcla de ésta

⁵⁸³ En la sección del análisis para la prueba de hipótesis se ha descrito el primer caso, a partir de la efectuación de enunciados elocutivos que establecen explícitamente la vinculación que, desde el punto de vista del hablante del programa, guarda el tema a tratar con la información difundida, incluso haciendo alusión en la misma secuencia discursiva a que tal difusión informativa se originó en la misma televisora que difunde el programa de opinión correspondiente. Por lo que toca al segundo caso, el ejemplo más claro lo ofrece el programa “Tercer Grado”, cuyo conductor cierra la emisión pronunciando el mismo mensaje, en cada emisión, construido bajo la forma de “slogan” publicitario: “Lo esperamos la próxima semana para un nuevo debate entre los periodistas que día a día le dan la noticia”. Véase el análisis relativo a los mensajes de descripción del contenido que produce cada emisor televisivo respecto a su programa.

⁵⁸⁴ Al respecto hay prolija investigación con hallazgos consolidados que permiten confirmar varias hipótesis y establecer un cuerpo sistemático de postulados, véase por ejemplo Iyengar y Kinder (1993), uno de los estudios más sistemáticos acerca de la información televisiva en Estados Unidos de Norteamérica.

con reportajes, entrevistas a analistas o actores sociales en estudio y a personas anónimas en la vía pública, con independencia del tema a ser tratado. Por eso la identidad del programa no puede radicar tanto en el formato, como en otros recursos simbólicos, de orden estético y expresivo, así como en el tipo de actuación discursiva e interactiva que los protagonistas ponen en juego.

Si bien desde hace tres décadas ha existido en México por lo menos algún programa de ese tipo, apenas hace pocos años que se registra el hecho de que las televisoras promuevan explícitamente ese tipo de contenido, con la peculiaridad de agrupar los diversos programas del género en lo que denominan “barra de opinión”⁵⁸⁵. Se trata de una estrategia de competencia dirigida a conseguir la preferencia del público televidente que puede ser atraído por otro ofertante de programas similares. No obstante, los recursos que se ponen en juego, con esa finalidad, no se limitan a la valoración que se haga de los personajes que intervienen, sino que también conciernen a atributos de orden estético y expresivo, que el público televidente puede valorar como distintivo de la identidad del emisor y que permitan diferenciarse respecto de otros (v. Cuadro 5 en Anexo). En un contexto con aumento de la oferta, se hace necesario elaborar estratégicamente la identidad corporativa del oferente y el paquete de beneficios y ventajas del bien que oferta ante el mismo segmento de consumidores que se disputa.

Al respecto se observó que se registran diferencias entre difusores televisivos en cuanto al número de programas y al papel con que aparecen sus protagonistas (v. Cuadro 3 en Anexo). La televisora TV Azteca, el operador con mayor número de programas de opinión política (17) al aire en 2009, y con el programa que mayor audiencia registró en ese año (v. Cuadro 4 en Anexo), “Frente a Frente” (5.3 puntos rating), tuvo por lo menos un programa en el que el papel de analista es predominante entre los protagonistas (“Entre 3”). En

⁵⁸⁵ La primera en hacerlo fue TV Azteca, a partir de 2006, mediante un mensaje textual difundido mediante la llamada “cortinilla” con que se anuncia e introduce al telespectador al programa (aparece en pantalla la leyenda “Barra de Opinión”), sobre un fondo de identidad corporativa (colores, logotipo y efecto visual propios de esa televisora) con el registro de voz del enunciado /Barra de opinión presenta/, seguida inmediatamente de la proyección de la emisión.

cambio, el otro operador privado, Televisa, con menor número de programas de ese tipo, los mismos que el Canal 22 (2) y menos que Once TV (5), ambas televisoras de propiedad estatal, sacó del aire en 2007 el único programa en el que el protagonista actúa como analista⁵⁸⁶. En el otro extremo, todos los programas de opinión de la televisora Once TV tienen a analistas como protagonistas, si bien todos ellos también son articulistas en periódicos y algunos conductores o invitados de programas radiofónicos del género.

Ahora bien, por lo que corresponde al escenario y a los protagonistas de la escenificación en las emisiones televisivas, se procedió a primero a describir lo que ocurre y luego a proponer una interpretación acerca de las finalidades que el realizador del montaje (director de cámaras y del programa) puede perseguir mediante los emplazamientos de planos y montaje de las secuencias⁵⁸⁷. Desde luego el marco está dado por la descripción genérica, en cada programa, si es grabado y diferido o si se transmite en directo, la duración total del programa, la de los cortes o anuncios publicitarios, la frecuencia con que éstos se intercalan a lo largo del programa; así como intercalar imágenes exteriores al escenario, la introducción de identificación con que abre y con que cierra el programa; los créditos y las advertencias sobre el contenido; la difusión de correo de voz o de correos electrónicos enviados por los telespectadores.

La descripción general de la escenografía y montaje es un dato semiótico relevante para definir el clima de la interacción comunicativa que se anticipa y se pretende que tenga lugar en el programa televisivo; por eso se observó y registró la manera en que la distribución y colocación de los participantes en el escenario, los acercamientos a rostros y cuerpo y la captación de gestos o movimientos corporales contribuyen o no a dirigir el sentido de lo actuado hacia la configuración de una discusión; la entrada y salida de

⁵⁸⁶ El programa semanal “Contrapunto”, en el que el analista discute con otros dos o tres invitados del mismo perfil, en términos de pares, sobre los temas que el primero formula; característica y misma suerte que compartieron programas precedentes (“Círculo Rojo” y “Nexos”) difundidos también por Televisa.

⁵⁸⁷ Acercamientos a los personajes, toma panorámica de la escena, intercalar la imagen de un participante que no está hablando, por ejemplo para que el telespectador vea la reacción que está produciendo en alguno o algunos aquél que está hablando en ese momento.

escena de participantes, movimientos de cámaras y operadores captados dentro de la escena⁵⁸⁸; la disposición del mobiliario y decoración contribuye a auspiciar el sentido de familiaridad o formalidad entre participantes; la introducción de música de fondo, algún sonido o efecto sirven para provocar expectación bajo la forma de ritual.

A partir de la observación sistemática de cada emisión, se registraron aquellas expresiones corporales y gesticulaciones que indicaran desaprobación o bien duda, entre alguno de los actores de la emisión, cuando simultáneamente alguno otro actor en el turno del habla se expresara verbalmente con emoción, según que uno y otro fueran enfocados correlativamente, maniobra en el enfoque de cámara utilizada por el realizador de la emisión para favorecer la interpretación, tanto en el espectador como en los protagonistas de que éstos están en desacuerdo o que debaten; téngase en cuenta que éstos tienen a su alcance un monitor que registra aquello de lo escenificado que se está grabando; en contraste, se advirtieron enfoques de cámara en primer plano a un participante cuyo rostro denota risa, sonrisa o gestos humorísticos que pueden inducir a interpretar que se está ante irrelevancia, burla o descalificación acerca de lo que otro participante está diciendo; otro valor distinto, en cuanto a este indicador, corresponde al registro de una expresión facial que denota seriedad, o bien desconcierto o sorpresa, lo cual puede significar que se presta atención, que lo que se dice es relevante, o bien que se está tratando de comprender lo que el otro dice, que se desconoce lo que está diciendo, o en su caso que esto último no se esperaba que lo dijera la persona que lo está diciendo.

Todos los elementos audiovisuales pueden orientar la experiencia de percepción televisiva, por tanto ninguno escapa a la organización que de ellos hace el realizador televisivo, en tanto que son recursos de orden simbólico que manipula de cierta forma, con la finalidad de producir ciertos efectos entre los destinatarios de la emisión televisiva. La manera en que se organizan y manejan los elementos audiovisuales define y acota las

⁵⁸⁸ Colocar la vista de alguno de los participantes dirigida hacia un punto ajeno de la cámara puede ser indicativo, por ejemplo, de que el conductor o los participantes recurren o son auxiliados por el equipo de la realización para saber que deben cortar la comunicación presencial y dar entrada a la transmisión de anuncios o bien la inserción de imágenes de algún referente que se ha invocado por alguna razón.

posibilidades para producir y movilizar ciertos símbolos. La presentación física de los participantes es un componente audiovisual significativo, que junto con el escenario, la ubicación y movilización de los participantes en el mismo, informa a la producción simbólica de la situación comunicativa escenificada. Ya que ésta constituye el contenido fundamental de los programas televisivos de opinión, interesó observar la vestimenta de los protagonistas pero solamente en cuanto a un dato que puede orientar el proceso de percepción de la situación interactiva. Estos recursos significativos son organizados y manejados con la finalidad de proyectar cierta identidad simbólica del programa televisivo. Ese es el dato de orden semiótico relevante, por cuanto revela en parte las finalidades del productor del programa y contribuye a entender ciertos aspectos de la representación simbólica analizada.

La manera en que visten los protagonistas de los programas televisivos es indicativa, en principio, de la personalidad que pretenden mostrar. Pero esa manera queda supeditada a las reglas que el productor establece en cada caso. Tales reglas se orientan a producir un efecto de imagen a partir de proyectar cierta identidad visual de conjunto, aquella que sirva a la identificación que pueda hacer el televidente acerca de la televisora, el programa y la valoración de su contenido. Las opciones de cómo vestir son restringidas y quedan supeditadas a la identidad colectiva programada. El tipo de vestimenta utilizado es un dato que, en general, indica el grado de formalidad o informalidad de la situación en que se interactúa, en razón de pautas culturales, convencionalmente establecidas, que comparten la mayor parte de la sociedad en una cierta época. Aquí solo interesa destacar que la pauta establece un criterio compartido para designar lo que significa una situación formal o una informal, así como lo que es apropiado para vestir en uno u otro caso⁵⁸⁹, con independencia del gusto particular de cada persona⁵⁹⁰.

⁵⁸⁹ Si se sigue dicha pauta, la persona se viste de acuerdo a la ocasión aunque conforme a su propio gusto. Conforme a uno de los usos más extendidos, en nuestro contexto, el traje de dos piezas es la prensa más formal en mujeres y hombres; en éstos la formalidad se considera incrementada si es acompañado de corbata, y viceversa; en mujeres la informalidad radica en dejar al descubierto los brazos, y una parte más extendida de la espalda y cuello hasta el límite de lo que se considera convencionalmente pudor.

⁵⁹⁰ Esas pautas tienen su origen profundo en los modos de vida comunes en el contexto general de una cierta sociedad y cultura determinada; son apropiadas mediante el aprendizaje y la interacción con otros,

De la observación del *corpus*, se desprende la pretensión común de proyectar un ambiente relajado y una situación de conversación entre conocidos. No obstante se registran variaciones entre programas en cuanto a la formalidad e informalidad que se proyecta a partir de la vestimenta. En algunos se proyecta cierta equiparación con situaciones propias de una presentación formal en público, éste fue el caso de los programas “Tercer Grado” y “En Contexto” (cuyos protagonistas actúan como periodistas y visten con formalidad); en otros se revela la intención de uniformar a los participantes, de modo que no se distingan entre ellos a partir de ese aspecto, éste es el caso del Programa “Primer Plano”; en otros casos, se proyecta una situación informal y relajada y los protagonistas visten de manera casual, éste fue el caso del programa “Entre Tres”; en cambio en el programa de contraste “La entrevista con Sarmiento” el conductor viste formal y solo ocasionalmente informal, pero sus invitados se presentan en ambas situaciones. El programa más consistente y diferenciado en el conjunto es “Primer Plano”, visten invariablemente en color negro, sin corbata ni saco, con camisa, playera o suéter con mangas, lo cual combinado con el hecho de que, con frecuencia, el escenario sólo se compone de la mesa ovalada en torno a la cual están sentados y un telón de fondo sin decoración alguna, ambos de color negro, produce como efecto el realce de los rostros y las manos y, en consecuencia, la focalización de la atención perceptiva del observador.

Es evidente que un escenario austero contribuye a orientar la experiencia perceptiva hacia los protagonistas y sus movimientos, lo cual los compromete aún más en el caso de este programa, porque a la vez se registró que no hay inserción alguna de material audiovisual grabado en el transcurso de la emisión, con excepción de la relativa a anuncios publicitarios. Una situación similar, en cuanto a la acentuada austeridad del escenario, reducido a la mesa en torno a la cual están sentados los protagonistas, ocurre también en

desde temprana edad en la vida cotidiana; por eso se dan por descontadas y la selección cotidiana del vestir atañe al gusto. Muchas de ellas son utilizadas en los mensajes persuasivos de la publicidad comercial, la que sin duda contribuye a su adopción, vigencia y actualización. En nuestro contexto, la mayor parte de la población utiliza el criterio de formalidad en el vestir a partir de eventos extraordinarios y emotivamente significativos, tal como festividades y celebraciones familiares y comunitarias.

el programa “Entre Tres”, en este programa, la mesa y el fondo son de color blanco, lo que mitiga la tensión perceptiva y permite percibir una escena relajada sin distractores.

En los programas conducidos por periodistas o con predominio de ese papel entre quienes participan, en contraste, la tendencia parece ser inversa en ambos aspectos. Por un lado, el escenario tiene paredes decoradas, el enfoque de cámara y el tipo de mesa utilizada permite visualizar el cuerpo entero de la persona sentada; se utilizan más de dos colores y objetos decorativos aunque evitando estridencia; ése es el caso del resto de los programas, característica más acentuada en el programa “Tercer Grado”, entre todos.

Por otro lado, en el transcurso del programa, pero sobre todo al inicio del mismo, se llega a insertar material visual grabado, ya sea de un reportaje elaborado o material noticioso de archivo de la televisora, así como eventualmente de algún sondeo levantado en vía pública o el fragmento de alguna entrevista. Así ocurre en mayor medida en los programas “Punto de partida” de Televisa y “Reporte 13” de TV Azteca. Lo anterior pareciera indicar que la utilización de este recurso es exclusiva de programas cuyos protagonistas actúan como periodistas, lo que es consistente con el hecho de que en estos programas, como se ha visto, se basan precisamente en la participación de agentes sociales de diverso perfil como invitados, e incluso agentes políticos, entre quienes el conductor del programa induce a establecer discusión y polémica, para lo cual se seleccionan exponentes de posturas distintas incluso contrapuestas entre sí, y que en el caso de invitar a agentes políticos lleva a la acción de confrontarlos y convertirlos en el principal, sino es el que único, objeto de cuestionamientos y apelaciones. Así ocurrió, en medida descendente, en los programas “La manzana” (cuyo subtítulo es “de la discordia”) y “En contexto” difundidos por TV Azteca y “Punto de Partida” difundido por Televisa.

La escenografía y el montaje sirven invariablemente para reforzar el significado de lo actuado: si hay intimidad o distancia; si los participantes pueden verse entre sí todo el tiempo o deben girar el cuerpo para verse; si se quiere revestir de formalidad o sobriedad

la interlocución o bien de informalidad y relajamiento el ambiente; si el protagonismo se deposita por completo en la persona del participante⁵⁹¹; si es un panel de discusión exclusivamente entre periodistas⁵⁹² o sólo analistas políticos⁵⁹³ o bien una combinación de ambos⁵⁹⁴; si se trata de una entrevista en estudio que transcurre de manera cordial, formal y serena entre un conductor y un personaje invitado⁵⁹⁵, en contraste con aquella entrevista que de un interrogatorio deviene en una franca confrontación por parte de los conductores con los personajes invitados, los primeros ubicados a los flancos de los segundos en una mesa reducida que los aproxima físicamente y donde el fondo es fijo y con imágenes, objetos y colores que pueden o no distraer la atención del telespectador⁵⁹⁶, aspectos todos ellos de los que dependen en parte el tono de la interlocución, que redunda en mayor o menor expresividad de una polémica y mutuos cuestionamientos, o bien de complacencia y afinidad mutua.

Cabe señalar que en cualquier caso interesó describir sólo aquello que denota y lleva a significar que hay intercambio de opiniones y debate, polémica acalorada, refutación y desacuerdo o acuerdo y defensa (por ejemplo el gesto de asentimiento o de desaprobación con la cabeza de uno ante lo que está diciendo otro); la expresión emocionada de los oradores (manifiesta en aumentar el volumen de la voz, hacer

⁵⁹¹ Tal como ocurre, por ejemplo, en el programa televisivo "Primer Plano" difundido semanalmente por el Canal Once, donde solo aparecen bustos de los personajes, vestidos con el mismo color correspondiente al fondo negro, donde en consecuencia la expresividad corporal se reduce al rostro y las manos.

⁵⁹² El único caso en la difusión televisiva de señal abierta es el programa "Tercer Grado" difundido semanalmente por el Canal 2, donde los participantes están sentados en círculo de manera que todos pueden verse mutuamente todo el tiempo y son filmados de cuerpo entero.

⁵⁹³ Caso poco frecuente en los programas del tipo analizado, donde los analistas pueden ser los mismos conductores que a su vez invitan a dialogar y discutir a otros especialistas o expertos en el tema a tratar y que comparten una mesa horizontal, lo que implica que hacer un emplazamiento en primer plano a alguno de los participantes supone sacar de foco al resto, como ocurre en el programa "Entre Tres" transmitido semanalmente por el Canal 13.

⁵⁹⁴ El caso más frecuente en la difusión televisiva, tal como en los programas "En Contexto", "Reporte Trece", "La manzana" y "Punto de Partida", transmitidos semanalmente los dos primeros por el Canal 13, el tercero por el Canal 40 y el cuarto por el Canal 2, en los que se han incluido entre los invitados a agentes políticos, entre ellos legisladores, representantes de los partidos políticos más grandes o de distintos órdenes de gobierno (nacional o local), ya sea solos o en junto con analistas y expertos que los confrontan.

⁵⁹⁵ Como es el caso invariable del programa "La entrevista con Sarmiento" o de la tertulia televisiva "Shalalá" ambos transmitidos semanalmente por el Canal 13.

⁵⁹⁶ Los más representativo de este caso son los programas "En Contexto" y "La manzana", ya referidos.

aspavientos, señalar con el índice, poner rostro adusto o complaciente); las expresiones desaprobatorias por parte de los participantes; las interrupciones de habla (cuando alguno de los participantes habla al mismo tiempo que otro o bien apela al conductor para exigir la palabra y si se solicita u ofrece expresamente alguna aclaración por lo dicho por otro.

Por lo que se refiere al estilo, campo y tenor de la actuación discursiva, conviene tener presente en esta parte que el léxico es uno de los indicadores más reveladores acerca de la temática de un texto. Si se lo considera con el otro componente relativo al campo discursivo, la temática tratada, se tiene posibilidad de determinar, de modo más plausible, el registro lingüístico del programa televisivo de opinión en tanto que texto. En efecto, siguiendo a Calsamiglia y Tusón (2004), los factores situacionales que condicionan, orientan y a veces determinan la selección y el uso de elementos lingüísticos-discursivos son: el *campo*, el *tenor* y el *modo*. Para los fines de este estudio, la premisa metodológica en la que se basó el análisis discursivo es que el registro⁵⁹⁷ sirve para adecuarse a una situación, pero también para crear una situación, cuando ésta no existe previamente (Ibid: 327). Por eso en el periodismo, por ejemplo, a través del registro utilizado (personalizado o despersonalizado, festivo o serio; seductor o neutro) se crea una situación propicia para captar la atención del destinatario.

El campo se refiere a la esfera de actividad y la actividad tratada. El tenor se refiere a las personas, su identidad, su posición y el grado de involucramiento que muestran con su mensaje; repercute en la elección lingüística de marcas personales y de modelización que aparecen en el texto, y en la manifestación de la identidad y el estatus en función de la

⁵⁹⁷ El registro se puede determinar con un conjunto mínimo de atributos; algunos se relacionan más estrechamente con determinados factores, por ejemplo, el grado de especificidad de un texto se relaciona con el campo; el grado de personalización y de formalidad con el tenor personal e interpersonal; el grado de planificación o de espontaneidad con el modo; pero en muchos casos, esos atributos han de ser completados con otros que hacen plena la delimitación de cada registro. El registro sintetiza diversas combinaciones de orden macrotextual y microtextual para dar como resultado una unidad comunicativa que responde a una situación. No obstante la multiplicidad de gentes y situaciones, en cada texto se muestran unas características que están lejos de ser arbitrarias. Según Biber (1994) entre “rasgos de la situación” y “formas lingüísticas” se interpone lo que llama “funciones y convenciones”, es decir, tradiciones de uso establecidas en las prácticas discursivas orales y escritas. Desde esa perspectiva, a través del registro el habla de los individuos se adapta y acomoda a los usos sociales (Calsamiglia y Tusón, 2004: 329).

construcción del papel comunicativo. El modo se refiere a las diversas formas de canalización o transmisión del mensaje. La esfera de actividad en la que aparece un texto determinado influye, porque un mismo tema puede ser tratado en ámbitos y lugares diferentes. El tema y la esfera de actividad colaboran en la especificación del registro lingüístico. El léxico, la sintaxis, la morfología y la organización del texto reciben influencia según el tema de que se trate. Hay permeabilidad entre situaciones que promueven originalmente la formación de lenguajes propios y situaciones más generales (palabras del argot de la política pasan al argot del periodismo y viceversa y de cada uno de éstos hacia al argot común popular).

Esta situación se presentó en todos los programas televisivos analizados. Ella tiene repercusión en cuanto a las prestaciones que hace a la lectura e interpretación que el televidente puede hacer, en términos de identificar aquello de lo que se trata, en sus niveles explícitos y en el nivel de las implicaciones y los sobreentendidos rigurosamente estudiados por Lozano, Peña Marín y Abril (1993). En cuanto al léxico utilizado, se observó que en todos los programas se produce una mezcla de estilos léxicos, entre el técnico-político, el periodístico y el coloquial de situaciones de interacción en la vida cotidiana. Lo característico es que, a diferencia de otros tipos de programas tal como los informativos, el léxico técnico-político y el periodístico se subordinan funcionalmente al léxico coloquial de situaciones de vida cotidiana. La evidencia de esa característica consiste en las marcas textuales de una estrategia discursiva, común a todos los interlocutores, que se orienta a esclarecer el sentido seleccionado, tanto al producir el propio mensaje como al interpretar el mensaje de otros. En efecto, la utilización de tropos y figuras retóricas fue un hecho constante y frecuente en todas las emisiones de los programas. Ese hecho se explica porque los participantes buscan arreglar, por sí mismos y en colaboración con los otros, el habla propio del ámbito de su identidad, conforme a un habla común a cualquier persona, con la pretensión de conseguir claridad expresiva, la comprensión del mensaje y, desde luego, la persuasión suficiente para que el juicio de valor o argumento propio sea creíble y eventualmente aceptado al menos como pertinente por los interlocutores.

No debe perderse de vista que cada participante se exige a sí mismo, o es exigido por la comparecencia al programa, para acreditar la pertinencia de su juicio y saber en términos de contribuir a ilustrar el juicio de otros y de colaborar con los otros a que lo actuado y dicho en el programa televisivo resulte de interés para los telespectadores, de cara a quienes todos tienen que adecuar, en última instancia, su propia actuación. Ya se ha señalado que los participantes ajustan su propia presentación y actuación en el programa bajo la presión o demanda de dos tipos de destinatarios, hacia quienes se dirigen y dirigen lo que dicen (interlocutores en el escenario televisivo) y hacia quienes pueden observar lo actuado y dicho sin estar presentes (audiencia ubicada en distintos contextos socio-espaciales); aunque éstos últimos son siempre los destinatarios finales de la actuación y dicho en el programa televisivo. Los participantes se saben siempre vistos y oídos por los telespectadores, tal como los asume y representa el productor y emisor del programa televisivo (características o “perfil” de audiencia); éstos no necesariamente están situados en condiciones similares o equiparables, en cuanto a competencias cognitivas, lingüísticas y comunicativas, ni entre sí ni con respecto a los participantes del programa televisivo.

Eso implica que en todo programa televisivo de este tipo se hace necesario respetar una convención o regla preestablecida, a partir del contrato comunicativo en que se sostiene la actuación en la interacción discursiva y la situación comunicativa, según la cual lo actuado y dicho debe ser arreglado de tal manera que sea claro para los interlocutores y, a la vez, sea accesible al público televidente que podrá exponerse al consumo del programa. Al respecto, conviene destacar que es evidente que, con independencia del tipo de programa televisivo, los participantes comparten la expectativa de que el público televidente que lo consume está interesado en la opinión política, conocer puntos de vista de otros y están en alguna medida informados del acontecer político, por lo menos probablemente más y/o mejor de lo que están quienes no ven ese tipo de programas televisivos o no los verían aún teniendo oportunidad de hacerlo.

Dado que éste no es un estudio de recepción televisiva, la evidencia al respecto provino del hecho de que los textos o programas televisivos contienen abundantes enunciados, producidos por el “conductor” o moderador cuando lo hay y por todos los interlocutores invariablemente, de tipo locutivo por los que construyen el objeto discursivo de su dicho con relación, de modo directo y explícito, a algún objeto discursivo al que atribuyen haber sido construido discursivamente y circulado como mensaje en la difusión mediática de tipo informativo, por ejemplo el tópico. Ese hecho tiene una notoria implicación cuando además se producen inserciones de notas informativas, reportajes o declaraciones por parte de sujetos diversos, mediante la reproducción de una grabación audiovisual que las ha registrado y que corresponden a algún segmento de un noticiario o de otro programa televisivo de la propia cadena, o bien de alguna publicación periodística aunque éste último ocurrió con mucho menor frecuencia.

La inserción se registró invariablemente en el caso del programa “Tercer grado” de la cadena Televisa, y en algunas de las emisiones del Programa “Reporte 13” de la cadena TV Azteca. En el primer caso, las inserciones son colocadas en tres tipos de situación: al inicio de la emisión, con cada segmento textual en que se divide la misma y con la declaración ilocutiva de se procederá a tratar un tópico o asunto distinto al que fue tratado en la secuencia o segmento inmediato anterior. Se produce así un efecto de corte textual, que aparece más notorio y explícito en presencia de un interlocutor en el papel preestablecido de moderador; el acto es generalizado, como se ha visto, cuando se produce la inserción de un segmento textual de anuncios publicitarios. Se observó que ésta es invariablemente anunciada por alguno de los participantes, incluso en el programa “Primer Plano” en donde ningún participante funge con el papel exclusivo de moderador designado.

La utilización de ese recurso no se observó, en cambio, en los programas “Entre Tres” de la televisora TV Azteca y “Primer Plano” de la televisora estatal Once TV, lo cual puede revelar además del rasgo de una mayor proclividad del programa a reforzar la agenda temática que a través de sus distintos programas construye en su propia difusión, la

intención de que el programa sea distinguido por el televidente a partir del valor de sus participantes, en calidad de analistas, académicos teniendo como invitados a expertos, sean pares o sean funcionarios de gobierno.

Por otra parte, otra constatación resultante del análisis consiste en la remisión que hace, invariablemente, alguno de los participantes de la emisión televisiva hacia la agenda temática informativa en medios de comunicación masiva. Esta acción discursiva ocurrió en todas las emisiones y programas televisivos observados; consiste en que los participantes recurren a la acción enunciativa de remitir a acontecimientos noticiosos -hechos o situaciones de los que se ha informado por algún medio de comunicación-, tanto para construir discursivamente el tópico que tratan o se proponen tratar, como para dar pertinencia y relevancia al mismo, así como a los juicios que emitirán sobre él, o bien a los remas que sean contruidos en la interacción discursiva escenificada durante el programa. Mediante ese recurso, los participantes pueden dar por sentado, por un lado, que los interlocutores conocen tanto los hechos o situaciones de los que se habla, como a la vez la información que respecto a ellos circula en el entorno de la difusión mediática. Y, por otro lado, pueden dar por supuesto que el televidente ante quien se actúa puede, en alguna medida, haber estado expuesto a ésta última. Ese supuesto se verifica cuando adicionalmente algún participante utiliza el discurso referido mediante citas o referencias de autoría, tanto de los hechos o situaciones como de las informaciones publicadas o difundidas respecto a ellos. El juicio que el participante emite no se refiere al acontecimiento en sí mismo sino a la construcción discursiva del mismo, en tanto que tema o rema respecto del cual trata su dicho en su turno de habla y respecto al cual, con frecuencia, se abroga el derecho de introducir como tópico o asunto a tratar en la interacción discursiva que transcurre en la emisión televisiva.

No obstante que la utilización de la remisión a la información publicada o difundida, como referencia básica para identificar el tema o asunto en cuestión, sea generalizada, no sigue el mismo patrón en todos los programas. En efecto, en aquellos protagonizados por

periodistas o en donde el conductor establece su propia identidad como periodista, la remisión a la agenda mediática se produce, habitualmente, mediante la inserción de la grabación televisiva de una nota informativa, reportaje, entrevista, declaración de algún sujeto, imágenes de un hecho o situación, o bien de una mezcla de ese tipo de textos. En todos estos casos se trata de contenido que la televisora ha difundido previamente a la difusión de la emisión televisiva de que se trata y en la que tal inserción tiene lugar. Ese es el caso de los programas “Tercer Grado” en el que tal forma es constante en cada emisión. En los programas “Detrás de las Cámaras” y “En contexto” también ocurre, si bien más frecuente en el primero que en el segundo. En otros programas en ese mismo supuesto, conducidos o protagonizados por periodistas, la remisión no es acompañada de una inserción, sino tiene lugar a través de la alusión, constreñida al dicho del protagonista, tal como ocurre en los casos de “La entrevista con Sarmiento” o “La manzana”.

Ahora bien, por lo que se refiere a la variable ritmo de la conversación escenificada, la observación permitió constatar un alto grado de estandarización preestablecido en cuanto, por una parte, a las pautas de configuración del programa como texto, es decir a la organización mediante segmentos intercalados de la escenificación de la interacción discursiva, que es su contenido principal, con la inserción de anuncios publicitarios pregrabados, la sección de inicio y la sección de término. Por otra parte, con relación a la organización de la interacción discursiva que se escenifica, es decir al orden de secuencias de habla delimitadas por el tema o asunto que es tratado y el acto ilocutivo de algún participante, generalmente quien se desempeña en papel de conductor, para cambiar el tema o rema, ante lo cual en respuesta se produce un mutuo consentimiento. No obstante, se observó que cuando el tema o rema dio lugar a discusión, sobre todo cuando ésta exhibió un tono acalorado⁵⁹⁸, se rompe el esquema de ordenamiento de las

⁵⁹⁸ Es decir, cuando se producen traslapes de habla y éstos son acompañados por el uso de enunciados de tipo performativo que denotan interpelación a otro, expresiones locutivas que denotan emociones y un aumento en el volumen de la voz y en las gesticulaciones que denotan rechazo, inconformidad o ironía respecto a lo dicho por otros, en algunos casos la actuación discursiva es motivada por la alusión, es decir el juicio que otro ha vertido sobre la propia persona o sobre lo que ella ha dicho, lo cual fue poco frecuente en todos los programas aunque se produce en mayor medida en los programas donde los participantes son periodistas, que en aquellos en que actúan en el papel de analistas o académicos.

secuencias de turnos de habla anticipado, en general a partir del principio de tratar de equiparar la frecuencia de turno entre los participantes y que sus intervenciones sean alternadas de tal modo que ninguno acapare turnos y, por tanto, el tiempo del que pudiera echar mano cada uno de ellos, es decir la duración de la secuencia en que tome o se le conceda la palabra. Esa concesión tiene invariablemente como límite el tiempo preestablecido, por el productor del programa, para insertar los anuncios publicitarios programados para ser difundidos, y para cuyo cumplimiento da indicaciones a los participantes para que procedan a suspender la interacción escenificada hasta ese momento. Se constató que esa regla se cumple; en efecto, en todos los programas analizados, el moderador o alguno de los participantes ejecuta la acción discursiva de suspender la secuencia para indicar a los otros y al televidente que se procederá a insertar un bloque de anuncios publicitarios.

Resulta sintomática la utilización del vocablo “corte” o bien “anuncios” dentro de las expresiones léxicas utilizadas con esa finalidad. Los enunciados registrados con mayor frecuencia son: /Vamos a un corte.../, /es momento de ir a un corte.../, /al regresar del corte.../, /volvemos después de unos anuncios/. Se observó que en el caso de programas en que el papel predominante es “analista” o “académico”, tal tipo de expresiones va acompañada de la connotación semántica de un deber involuntario u obligación, una restricción ineludible o un hecho inevitable que, en la experiencia televisiva, se impone tanto a los participantes en un programa como al televidente; en este caso las expresiones léxicas con mayor frecuencia registradas son: /tenemos que ir a un corte/, /lamentablemente el tiempo se nos agotó/, ésta utilizada para terminar la emisión.

Finalmente, en cuanto a la participación de agentes políticos conviene advertir que, si bien el dicho es opinión, en este tipo de programas se conviene en que la opinión sea argumentada, para lo cual deberá ser ofrecida alguna evidencia. Eso no significa, sin embargo, que el criterio de veracidad sea equivalente al de otros discursos públicos, en los que la opinión es atendible por estar basada en la autoridad del “saber” que se atribuye a,

o que ostenta, quien la emite⁵⁹⁹. Pero hay otros casos en que el criterio que se esgrime, para hacer atendible alguna opinión vertida, consiste en la presunción de que ella se corresponde a un juicio evaluativo ampliamente compartido por los telespectadores, en tanto se apela a ellos como ciudadanos o se les presupone discursivamente como tales.

Parte fundamental de la prueba de la hipótesis consistió en verificar que esa apelación tiene lugar y distinguir la manera en que se manifiesta. En esta parte, el análisis se enfocó en las estrategias discursivas en las que mediante la modelización se orienta el sentido hacia la identificación de cierta identidad y papel con el que se habla; en este caso interesó cuando se trata de la identidad de “ciudadano”; o bien hacia la evocación de cierta identidad y papel que se atribuye a otros, no presentes pero a quienes se asume como actores referidos o indirectos de la situación comunicativa establecida; en este caso interesó observar cuando se atribuye lo dicho al sentir o a la opinión de los “ciudadanos”, quienes a la vez pueden ser espectadores del programa televisivo.

Un elemento distintivo de aquellos programas cuyo formato es el debate entre expertos o analistas es el alto nivel de simetría cuando no hay un agente intermediario entre ellos, es decir, todos y cada uno de ellos implícitamente puede conducir y explícitamente conduce la conversación, el curso del programa, el inicio (introducción) y el cierre (despedida). Simetría que, sin embargo, contrasta con la asimetría que se establece cuando interviene un intermediario entre la emisión y el telespectador; habitualmente se trata del conductor del programa (designado por el productor del mismo); cuando no está preestablecido, alguno de los participantes asume ese papel. En esta última situación, tal intermediario se hace cargo de establecer que su estatuto es secundario, tanto porque atribuye a los interlocutores invitados al programa el atributo de ser conocedores del tema o asunto, en mayor medida de lo que él podría serlo, como porque explícitamente enuncie

⁵⁹⁹ El criterio de veracidad depende directamente de las convenciones culturales que predominan en el contexto social, es decir el contexto más amplio al contexto de la situación comunicativa y de la interacción discursiva. La veracidad en el caso del lenguaje periodístico y la difusión mediática es muy peculiar y distinta a como se la considera en otros contextos y ámbitos de actividad social. Para un análisis de la cuestión puede verse la teoría de Grizze, el trabajo de seguidores y críticos, véase Lozano, Peña-Marín y Abril (1993).

afirmaciones acerca de su propio papel en tanto que secundario frente al papel protagónico que imputa a los interlocutores, lo cual hace manifiesto con enunciados del tipo elocutivo en los que se establezca la jerarquía de un sujeto hablante sobre otro.

De ese modo, se pone en operación un mecanismo de identificación. Éste sirve como clave para el telespectador acerca de la identidad del sujeto investido de autoridad, digna de ser escuchada, o cuyo dicho merece ser tomado en cuenta por el prestigio que se le atribuye. Sirve también para establecer la distancia que se guarda entre legos y conocedores del tema, lo cual permite al emisor televisivo justificar, en ambos casos, la selección que hace de los protagonistas del programa, así como el beneficio que pretendidamente redituaría a cualquier persona escucharlos y confiar en el mérito de su dicho (opinión) y, en su caso, de su competencia cognitiva y lingüística para debatir.

La simetría entre participantes está dada porque al margen de las diferencias de posición social, nivel de conocimientos y ámbito de acción ocupacional, ninguno de ellos las hace manifiestas explícitamente en su actuar discursivo. El emisor televisivo se puede encargar, además, de disuadir de esa pretensión. Si bien una posible manera de hacerlo sería presentar una síntesis curricular de los participantes invitados, se observó que eso no ocurre en alguna de las emisiones televisivas de programa alguno considerado; los protagonistas o anfitriones del programa no son presentados, de tal manera que es un hecho evidente que los telespectadores de este tipo de programas tendrán que dar por sentado el mérito por el que lo son. Eso no significa que en el curso de la interacción no queden marcas semánticas, mediante deícticos y enunciados locutivos, del reconocimiento de algún atributo de la personalidad de los protagonistas, en general expresados mediante el uso recíproco de fórmulas de cortesía en las cuales se deja constancia de aquél.

En cualquier caso, queda claro que mientras se establezca tal simetría, las diferencias entre participantes no se harán manifiestas explícitamente. Aún en el caso en que se

manifiesten hay mecanismos discursivos para atenuarlas: a) mediante aquellas intervenciones en las que los participantes se dispensan recíprocamente el mismo estatuto de consideración, esto es, afirman el consentimiento respecto a lo atendible que es el dicho del interlocutor, o b) bien se hacen prestaciones recíprocas de atención a lo dicho, esto último puede verse reforzado, desde el punto de vista semiótico, por la adopción de gesticulaciones y posturas fijas que denoten que el sujeto presta atención a otro (mirarlo fijamente por varios segundos con rostro contemplativo). Se observó que en el programa “Tercer Grado” su conductor señala al término de cada emisión el enunciado de que los protagonistas son: “periodistas que día a día le llevan a usted la noticia”.

En efecto, del análisis del *corpus* se desprende que una convención típica del contrato comunicativo, mismo que subyace a toda interacción discursiva, consiste en la paridad entre los participantes en los programas televisivos de opinión, en cuanto a su estatuto social y discursivo y por lo que hace a su derecho de expresar su opinión, así como opinar y, eventualmente refutar, la de otros. El cumplimiento de la regla depende, no obstante, tanto del conductor o moderador de la interacción comunicativa como de la situación interactiva misma, que es el resultado de la actuación discursiva estratégica de todos los participantes e invitados al programa.

Al respecto se observó que la regla de paridad se trasgrede invariablemente, en todas las emisiones televisivas, cuando el invitado es un agente político (funcionario de gobierno, legislador o dirigente partidista). Este es un dato relevante para la interpretación de la forma simbólica en estudio, ya que sitúa al agente político en una situación desfavorable y desventajosa, de cara a los interlocutores y a la vez de los telespectadores. Una situación que rompe con el principio de equiparación entre interlocutores, cuando se trata de un intercambio de opiniones o de un debate de ideas entre ciudadanos. La paridad se establece en función del perfil predominante con que se participa. Los dos perfiles de los anfitriones o miembros de los programas, aquí denominados protagonistas, son en tanto que periodista o que analista político o experto en un tema o asunto. Se observó también

que estos papeles se desdoblán e intercambian, lo cual puede ser explicado porque en la actuación discursiva en televisión se ponen en juego tanto la identidad social pública, construida a partir de la situación comunicativa establecida en y por la televisión; así como a la vez la identidad discursiva, que es construida por el hablante y por los interlocutores en el curso de la interacción discursiva. En cuanto a la primera, se desarrolla a partir de la actividad profesional en que se desenvuelven los protagonistas de los programas, lo que les permite ser conocidos públicamente.

Otro hallazgo encontrado es que no hay alguno de ellos que no sea articulista en prensa o revistas informativas o de opinión política. Varios de ellos son además conductores de programas radiofónicos de análisis y discusión política, o bien participan en ellos como comentarista y los menos son académicos (imparten clases o ejercen investigación en alguna universidad). La participación de agentes políticos (funcionarios, legisladores o dirigentes partidistas), no es frecuente en este tipo de programas, no obstante que el formato de realización permitiría hacerlo. En el conjunto de los programas considerados en el análisis, las excepciones son los programas “Tercer Grado” y “Primer Plano”, en los cuales está cancelada esa posibilidad. En el primero participan exclusivamente periodistas y en el segundo solamente analistas o académicos, en ambos casos sin otros participantes invitados. Cabe señalar que el programa “Tercer Grado” es el que mayor número de participantes tiene, fluctúa entre 5 y 7, en comparación con todos los programas difundidos por señal televisiva abierta⁶⁰⁰. Todos los protagonistas de este programa se desempeñan por su cuenta como articulistas periodísticos, como conductores de noticiario o de su propio programa de opinión, ya sea televisivo o radiofónico. Esa circunstancia constituye un recurso simbólico que es utilizado por el difusor como signo de identidad del programa, así como de su posible valoración por parte del telespectador.

⁶⁰⁰ Se trata del programa más competitivo en 2009, en términos de *televidencia* (rating), de la empresa Televisa, y de toda la barra de programación de contenidos de opinión sólo por debajo del programa “Frente a Frente”, difundido por la empresa TV Azteca, éste último en día sábado, a diferencia de todos los demás, que se transmite de lunes a viernes, véase Cuadro 4 en el Anexo que ofrece un comparativo a partir de datos de IBOPE para la zona metropolitana de la Ciudad de México en noviembre de 2007.

Llama la atención que el programa “Punto de Partida”, en contraste, es conducido exclusivamente por una periodista, aunque en este caso el formato es distinto, combina reportajes, entrevistas y comentario político, tiene invariablemente por lo menos a un invitado y en ocasiones se ha tratado de agentes políticos, a quienes la conductora busca confrontar en torno al tema que fija. El contraste es revelador en cuanto al hecho de que ambos sean los programas de la misma emisora televisiva (Televisa) con similar nivel de audiencia en 2009 y entre los más vistos en 2007 y en 2009 (Cuadro 4 y 6 en el Anexo).

En contraste, todos los programas difundidos por el otro operador televisivo también concesionario privado y de señal abierta, TV Azteca, tienen invariablemente invitados al programa, y sus protagonistas reúnen la misma condición de ser protagonizados por periodistas, que a la vez son colaboradores periodísticos, tal como “En Contexto”, “Reporte 13”, “La manzana”, “Detrás de la Lupa” e incluso el programa “Frente a Frente” que registró el mayor nivel de preferencia de visibilidad en 2007 y en 2009, en el conjunto de los programas de opinión política difundidos en televisión gratuita, difundidos por los canales de la televisora TV Azteca (anexo 6 y 6 bis).

El programa “Primer Plano” es el programa del género “opinión” con mayor antigüedad en la difusión a través de señal abierta y cobertura nacional; en él los protagonistas son y actúan en calidad de analistas políticos y expertos en diversos temas, varios de ellos incluso ejercen como académicos. Se trata del programa con mayor nivel de teleaudiencia de los difundidos por las dos televisoras públicas (permisionarias) de cobertura nacional en señal abierta; se ubica por encima del programa “Espiral”, que también difunde Once TV y ambos programas tienen mayor nivel de teleaudiencia que los programas “Solórzano en la red” y “Veredicto” difundidos por Canal 22, todos ellos del mismo género, no obstante que en éstos dos últimos el conductor se desempeña en el papel de periodista y el formato televisivo consiste en periodismo de investigación y comentario político.

Ese hecho parecería indicar que en la televisión subsidiada por el estado no cabe confrontar a dirigentes políticos, si se tiene en cuenta que eso ocurre en programas difundidos por operadores privados de televisión, cuyos protagonistas son y actúan exclusivamente como analistas políticos, quienes también participan con ese carácter en programas de radio y, con más frecuencia aún, como autores de artículos difundidos en periódicos y revistas de información y opinión política, tal como es el caso del programa “Entre Tres” de TV Azteca.

6.4. Prueba de la Hipótesis: representación simbólica del escrutinio público mediático de legisladores federales

La verificación de la representación simbólica del escrutinio ciudadano sobre el desempeño de legisladores federales tiene lugar en los programas televisivos de opinión analizados, a partir de que de la observación del *corpus* permita verificar y registrar:

- A. Una situación de interacción discursiva que se configura y transcurre como una confrontación argumentada e informada de puntos de vista u opiniones, es decir, como una discusión o debate;
- B. En tal situación, los participantes actúan con la identidad discursiva de “ciudadano” o en el papel de vocero de ciudadanos (“representándolos por su dicho”) o aludiendo a lo que ellos opinan y expresan, a partir de discurso referido;
- C. Los actos y enunciados producidos tienen como objeto referente la evaluación de la actuación y el desempeño de legisladores federales (gobernantes electos).

El análisis se situó en tres niveles: el de la situación de enunciación e interacción discursiva, el de la identidad discursiva y el de las estrategias de actuación discursiva y sus probables efectos, aunque la interpretación de los datos semióticos y discursivos construidos con base en estas categorías o variables del análisis de los textos, para cada

emisión televisiva considerada en el *corpus* de estudio, se elaboró sobre la base de las relaciones entre los fenómenos observados en los tres niveles⁶⁰¹.

6.4.1. Situación de enunciación y de interacción discursiva: la producción de debate en programas televisivos de opinión

Para configurar la situación de discusión o debate se definieron dos índices, que indican su ocurrencia; por un lado, los solapamientos en el turno de habla y por otro lado, la utilización de cualquier modalidad del discurso de refutación. El primero implica la irrupción de uno o más interlocutores (enunciatarios) que interrumpen al orador (enunciador) en turno, es decir en el uso de la palabra, según la convención cultural relativa a las conversaciones, en ambientes tanto formales como informales, de permitir que una persona pueda expresarse sin que otras lo hagan al mismo tiempo.

El segundo fenómeno consiste en que en una conversación sean expresados argumentos, juicios o ideas contrarias a las de cualquiera de los interlocutores, en donde el actuante que refuta intenta persuadir acerca de la pertinencia de la contrariedad u oposición, tómanse en cuenta que ésta es una entre varias posibilidades de actuación por parte de un actor; el juicio o argumento afirmativo propio es presentado (se erige) necesariamente como opuesto, en parte o totalmente, al juicio afirmativo de otro.

Para determinar si se configura o no una situación de interacción discursiva que indique una discusión o debate, se tuvo en cuenta la significación de los enunciados o expresiones orales, pero inscritas en el marco de su producción, es decir, del proceso empírico de

⁶⁰¹ Siguiendo la propuesta analítica de Calsamiglia y Tusón (2004: 62 y ss.), respecto a las tres dimensiones del análisis del discurso, a saber, la interlocutiva, la temática y la enunciativa. En la primera, por lo que toca al origen de las tomas de palabra, se atendió a la interrupción y al solapamiento, así como al papel comunicativo de validación (acuerdo o desacuerdo) y a la gestión del contrato comunicativo; en cuanto a la segunda dimensión, se observó la contribución continuativa y reactiva de los interlocutores en la construcción temática; en cuanto a la tercera dimensión se atendió a la modalidad enunciativa, que puede ser *apelativa* ("yo", "nosotros"), *elocutiva* ("tú", "ustedes") y *delocutiva* ("ellos", "ellas" o "ello") y al modo de organización del discurso, en este caso interesó el discurso argumentativo.

enunciación que tiene lugar en el transcurso de la emisión televisiva. En el anexo metodológico se exponen en detalle las premisas teóricas y metodológicas, la validez y confiabilidad de las categorías y unidades de análisis y de los procedimientos de análisis semiótico y discursivo que se siguieron para la prueba de la hipótesis, a saber la representación simbólica de un debate protagonizado por ciudadanos o llevado a cabo implicando a las opiniones de los ciudadanos, en torno a la actuación y el desempeño de los legisladores en programas televisivos de opinión considerados en el *corpus*.

Por lo que se refiere al indicador del uso del discurso argumentativo, se observó el uso del discurso argumentativo, así como la producción de secuencias discursivas de refutación, lo cual depende en menor medida de la rigidez del formato de realización televisiva en términos de la conducción y el uso de la palabra, en mayor medida de las estrategias puestas en juego por los actantes en la interacción. De esa manera se confirmaron dos de las condiciones que, conforme a convenciones socioculturales, están implicadas idealmente en la efectuación en general de cualquier debate. Debe tenerse en cuenta que aunque el debate se sujete a reglas preestablecidas y conocidas por los participantes antes de la realización televisiva, las condiciones y los términos del contrato comunicativo son creadas y modificadas por la actuación discursiva y el resultado imprevisible que provoquen las ejecuciones discursivas. Eso lleva a reconocer que es evidente la diferencia entre un debate televisivo y cualquier otro tipo de debate⁶⁰².

Para la situación discursiva el umbral de prueba consistió en que al menos ocurra una secuencia de debate, lo que reveló una de las limitaciones que enfrenta la representación simbólica del mismo en estos programas televisivos. Varias emisiones se quedan en la escenificación de un intercambio de opiniones que no siempre deviene en debate; en otras, aunque se presenta el debate, no hay referencia directa a que se actúe como ciudadano sino como analista o periodista, aún cuando la postura que asuman los

⁶⁰² Tal diferencia no se agota en la visibilidad pública o publicidad que puedan tener, ni en las condiciones y exigencias que imponga su difusión y, en su caso, el canal de comunicación que sea utilizado.

participantes corresponda a expresar inconformidad y crítica respecto de los sujetos políticos que son objeto del análisis o comentario.

La observación de los textos televisivos y el análisis de los datos permitieron probar la hipótesis, al poderse constatar que en todas las emisiones televisivas del *corpus*, con independencia del programa-formato, tema y televisora tiene lugar por lo menos alguna situación de debate, mediante solapamiento o refutación, en ella los actuantes ejercen la identidad de ciudadano que discursivamente construyen, el papel de voceros que hablan en nombre o por ellos o remiten a una fuente que da cuenta de las opiniones de algún grupo de ellos y, a la vez, los juicios en la secuencia tienen como referente el desempeño de legisladores federales (v. Cuadro A de Resultados Generales). Las variaciones en cuanto a la frecuencia con que ocurrió y la proporción en que transcurrieron entre emisiones del mismo programa y entre programas se presentan en los Cuadros 8 al 16 de resultados por cada emisión analizada.

- Con independencia del tema o rema tratado, por lo menos en alguna de las secuencias de habla producidas durante la emisión televisiva, alguno de los participantes produjo enunciados asertivos en los que se representó como ciudadano, mediante la utilización de deícticos personales, lo cual se verificó en todos los programas que formaron parte del corpus.

La enunciación y los enunciados en los que el sentido y el significado, respectivamente, son orientados y dirigidos a la representación del ciudadano por parte del locutor que los produjo, se manifiestan con bastante recurrencia a lo largo de la interacción discursiva completa, al margen de que en las secuencias se haya producido una situación de discusión o debate, lo cual revela un alto grado de coherencia textual global, dado que se

observó que se presentaron “isotopías semánticas” tanto en el plano del contenido como “isotopías semiológicas” en el plano de la expresión⁶⁰³.

Más aún, entre las isotopías que se producen en el funcionamiento discursivo, destacan interesaron las relativas a la construcción de la identidad del analista o del periodista cuando se autodenomina o proclama como ciudadano, así como aquellas relativas a la construcción del destinatario común a todos los interlocutores en la situación de interacción discursiva, que es designado algunas veces como televidente y en otras como ciudadano, en algunas como sujeto singular y en otras como sujeto plural, en otras como público o como audiencia, identidad que es distinta a la que se construye mediante discurso referido con actos *locucionarios* y enunciados locutivos para designar y describir al ciudadano o a la población, con expresiones sémicas tales como “la sociedad”, “la ciudadanía”, “la gente”, “el pueblo”, o bien “los votantes” (electores), “los que pagamos impuestos” o “los contribuyentes”, además de las nominalizaciones “los ciudadanos” y el *deítico* de la segunda persona del plural “nosotros” que tienen como eje sintagmático y semántico al sujeto que enuncia.

- Se produjo invariablemente una situación prototípica de la situación de enunciación, en su modalidad oral discursiva, que se produce en y con el cuerpo y, por tanto, se manifiesta con el mismo (expresiones faciales, vocalizaciones y otros ruidos).

⁶⁰³ Concepto con el que Greimas (1966, 1973) analiza el problema intratextual de la coherencia en los discursos y que define como la permanencia recurrente a lo largo del discurso de un mismo haz de categorías justificativas de una organización paradigmática” (1976: 20), y que designa la “iteratividad”, definida como reproducción sobre el eje sintagmático de unidades idénticas o comparables, situadas sobre el mismo nivel de análisis, que se produce a lo largo de una cadena sintagmática de unidades de contenido que aseguran la homogeneidad del discurso. Equivale a un plano homogéneo de significación, donde la recurrencia sémica señala la existencia de una coherencia semántica y textual. Puede decirse que la isotopía es una propiedad semántica del texto que permite destacar los planos homogéneos de significación y que se apoya sobre la redundancia y reiteración en varios segmentos textuales de algunos elementos semánticos idénticos; éstos últimos constituyen una base sobre la cual se insertan las significaciones particulares de cada segmento del texto, sin que su especificidad comporte ni dispersión ni imposibilidad de conciliación de los diversos sentidos, véase Lozano, Peña-Marín y Abril, 1993:29.

- Los participantes dejan marcas discursivas, a ciertos intervalos durante la situación de interacción discursiva, que indican que ellos actúan de cara al televidente.

Eso se verificó al producirse tanto actos directos y enunciados locutivos que designan al televidente (con el uso de distintas expresiones léxicas, el público, la audiencia, las personas que nos hacen el favor de ver) como, en menor medida, con actos directos y enunciados ilocutivos mediante los cuales el locutor produce la acción de dirigirse al televidente al momento que dice que lo hace, en ambos casos las menos veces acompañados de expresiones de cortesía, tal como el agradecimiento al televidente, con quien se asume está viendo y oyendo el programa. Esto tiene consecuencias con relación al aspecto estratégico de la actuación discursiva, en tanto que actualiza, en la interacción, las convenciones discursivas y socioculturales relativas a participar en un intercambio de opiniones y, eventualmente, en una confrontación de ideas, actuar en y para un público, pero entre pares, cuya opinión merece ser respetada, en términos de su ejecución en cuanto al silencio mientras el otro enuncia y prestando atención, y en términos de su intercambio al manifestar una conducta que indique tolerancia hacia el otro.

- A pesar de que la situación de enunciación se plantea como una situación formal, es evidente que los participantes utilizan la lengua de manera coloquial y, aún cuando su actuación se dirige a argumentar e incluso a refutar, recurren con frecuencia a la utilización de metáforas y otras figuras retóricas, de uso habitual y generalizado en el habla cotidiana, lo cual pudo responder a la meta común de atraer la atención y hacer aparecer la interacción atractiva para los televidentes.

Aunque no fue objeto de análisis, se observó que casi con igual frecuencia se utilizaron las figuras retóricas, cuando los participantes son sólo periodistas que cuando actúan como analistas, aunque entre éstos últimos hay mayor cuidado en el uso de las expresiones, incluso con actos propios para aclarar lo dicho cuando se asume el riesgo de que puede prestarse a confusiones. Ciertas expresiones coloquiales suelen provocar aprobación

manifiesta, por ejemplo con risas, sonrisas y vocalizaciones que connotan adhesión, lo que contribuye a recurrir a su uso y adopción por los participantes durante la conversación.

En otros casos, se manifestó la adhesión y adopción de la expresión coloquial que causó previamente estados emotivos de relajamiento y celebración. Se destaca el hecho porque tales manifestación pudieron contribuir a orientar el sentido respecto a la interacción discursiva que se estaba escenificando, hacia una menor formalidad en la actuación discursiva y, de ese modo, la situación de enunciación construida se aproxima a las que son características de las conversaciones informales que se tienen en la vida cotidiana.

- El debate no está planteado en sí mismo como la primera opción, ni siquiera la que habrá que privilegiar en la interacción comunicativa. Se observó que en todas las emisiones televisivas del corpus se da constancia de un programa narrativo ejecutado por el locutor inicial, que actúa en el papel de conductor de la interacción discursiva y, a la vez, de la situación comunicativa de actuar para otros a distancia, que consiste en la presentación de hechos o situaciones, la descripción de acontecimientos de orden público (que pueden interesar a todos o han sido conocidos por quienes se informan a través de algún medio), o bien al exponer un comentario sobre noticias difundidas por los propios medios de comunicación. El acto seguido por parte del locutor que inicia la situación de enunciación consiste en pedir a los participantes que expresen su opinión al respecto. Al planteamiento del asunto o tema, sigue invariablemente la solicitud.
- Esto significa que, en este tipo de programas televisivos, la situación discursiva inicia siempre configurada como un intercambio de opiniones o juicios sobre un tema y que, eventualmente, puede ser transformada en una confrontación de argumentos, de la información proporcionada por los participantes o de los juicios de valor que producen en el proceso de interacción discursiva.

Así entendido, el debate es sólo una posibilidad que puede adoptar la situación interactiva y no la define *a priori*, aun cuando se observó que algunos programas televisivos son promocionados por sus productores y difusores como un debate (v. Cuadro 5 en el Anexo). De manera que la observación se dirigió a verificar si la situación discursiva devino en la forma de debate en el proceso de enunciación discursiva a lo largo de la emisión televisiva, a partir del registro de: a) secuencias de habla en las que los actantes producen argumentos de refutación, que permiten validar que se están confrontando ideas y puntos de vista, o bien b) secuencias de habla en las que se yuxtaponen actos de habla al mismo tiempo, en este caso el valor pragmático se potencia si tales actos se vieron acompañados de expresiones no orales, tal como exclamaciones, vocalizaciones y movimientos corporales que connoten desacuerdo.

Al respecto se observó que la fórmula lingüística más comúnmente utilizada por los participantes correspondió a la enunciación de adversativos (pero, sin embargo, no obstante, aunque), en enunciados ilocucionarios de afirmación (no estoy de acuerdo con eso", "a mi no me parece", "yo tengo mis reservas respecto a"), si bien en la mayor parte de los casos contruidos mediante una modalización condicional de estado, que indica que el significado es una posibilidad abierta, o bien denotan semánticamente un estado de incertidumbre o duda que el locutor dice experimentar, tal como las expresiones "no estaría de acuerdo", "yo no estaría tan seguro(a) de", "a mi no me parece que", "tengo la sospecha de que"), o bien actos pragmáticos indirectos del tipo de la presuposición, ("a mí quedarían mis dudas", "yo sospecharía que") con lo que en estas dos últimas opciones el locutor no se compromete y la refutación aparece sólo parcial y condicionada a que se verificaran otros hechos o circunstancias no dichas.

Por lo que se refiere al indicador del uso del discurso argumentativo, se constató que éste es utilizado en todos los programas considerados, así como se producen secuencias discursivas de refutación, lo cual ocurrió aún en el caso en que el formato de realización imponía mayor rigidez en cuanto a la toma, cesión y uso de la palabra.

De manera que se confirmaron dos de las condiciones que, conforme a convenciones socioculturales, está implicadas idealmente en la efectuación de cualquier debate. Aunque éste deba sujetarse a reglas preestablecidas y conocidas por los participantes antes de la realización televisiva, las condiciones y los términos del contrato comunicativo son creados y modificados por la actuación discursiva y el resultado imprevisible que provoquen las ejecuciones discursivas. Eso lleva a reconocer que es evidente la diferencia entre un debate televisivo y cualquier otro tipo de debate⁶⁰⁴.

- La estructura textual de la situación de interacción discursiva común, a todos los programas televisivos observados, consiste en:
 - a) el planteamiento de un tópico sobre el que se opina y, eventualmente, discute;
 - b) seguido por la solicitud de respuestas a preguntas formuladas si la interacción es conducida por un solo participante, que al ser el locutor inicial pasa a desempeñar el papel de conductor, o bien seguido de los comentarios de alguno de los locutores que, en el primer turno de habla, plantea el tema, para luego ceder el turno de la palabra a los otros participantes o tomar el turno de la palabra, respectivamente según el caso;
 - c) en las subsecuentes secuencias discursivas el conductor o cualquiera de los participantes, en ausencia de alguien designado en ese papel, va planteando un rema o subtema que los otros convengan como tal por el hecho de no objetar su tratamiento, y que en su actuar discursivo pueden argumentar como aspecto relacionado con el tema original o los remas previamente contruidos, según el guión del conductor o según lo vayan construyendo los actuantes o alguno de ellos que, en el curso de la enunciación, ejerce la prerrogativa de enunciar un rema como tal;
 - d) la secuencia discursiva de cierre de la interacción, a partir de la cual se asume concluye la emisión, suele anunciarse en casi todos los programas, ya sea mediante enunciados locutivos por parte del locutor conductor o de alguno de los participantes que indica que la emisión está por concluir o solicita a cada participante que produzca una última

⁶⁰⁴ Diferencia que no se agota en la visibilidad y publicidad pública que consigan, ni en las condiciones y exigencias que imponga su difusión y el canal comunicativo que sea utilizado.

enunciación a su cargo, o bien mediante enunciados ilocutivos cuyo significado indica la acción de dar por concluida la interacción. Las secuencias de cierre suelen ser apremiadas en cualquier caso y producirse bajo la forma de un comentario final por cada participante, mismo que no recibirá apelación por parte de otro.

- Esa estructura se comporta de manera bastante estable a lo largo de la interacción, y más aún de las diversas emisiones del mismo programa televisivo, lo que indica el papel determinante que tiene las reglas del formato de realización de la emisión televisiva en este género de contenido audiovisual, así como la validación que los participantes hacen de las convenciones socioculturales respecto a conducirse en un intercambio de opiniones y, específicamente, en público y ante una audiencia⁶⁰⁵.

La verificación del debate sólo puede ser resultado de que los interlocutores se propongan, por sus respectivas razones y fines, auspiciarlo como la forma que adopte la interacción, aún cuando ésta haya sido anunciada previamente a su efectución, como una confrontación de puntos de vista. Entre las posibilidades de acción, que tienen ante sí los participantes, está la de conceder el propio acuerdo o bien juzgar como no refutable lo dicho por otro. Por eso se procedió a verificar la ocurrencia o no de la utilización del discurso de refutación, así como simultáneamente registrar aquellos movimientos personales, expresiones faciales, vocalizaciones, que forman parte de la modalidad oral natural y que se produce en y con el cuerpo, que denotaran o connotaran semióticamente la expresión de sorpresa, reserva o desacuerdo.

⁶⁰⁵ Ese tipo de reglas y convenciones forman parte de las competencias lingüísticas discursivas que son requeridas a los participantes y que éstos ponen en juego y despliegan en cada interacción; puede influir en la selección de los recursos, pero no determinan su utilización y en ningún caso su adaptación creativa individual que puede permitir a cada uno configurar un cierto estilo discursivo de actuación (por ejemplo desde el nivel léxico por el uso particular que da a ciertas expresiones coloquiales, figuras retóricas y tropos hasta el nivel pragmático del sentido indirecto, la implicación conversacional y los sobreentendidos, pasando por las formas de ejecución de expresiones paralingüísticas no orales, que por la particular ejecución de su protagonista pueden ser percibidas e interpretadas como atributos (histriónicos) singulares al mismo.

Cabe la hipótesis de que si bien en los textos del discurso político y, en particular del discurso parlamentario, puede producirse coherencia⁶⁰⁶ por medio de isotopías semánticas (planos homogéneos de significación), y con ello favorecer el procesamiento de la ambigüedad que ese tipo de textos trae aparejada en situaciones de debate o confrontación argumentativa de posturas o bien de cualificaciones u opiniones, a la par se puede multiplicar el uso de los “implícitos”, cuyas marcas se suelen distinguir como enunciados coloquiales utilizados desde la “Doxa” y que operan desviando la atención respecto de argumentos y orientando la implicación hacia los estados y las emociones, efecto que ocurre con excesiva frecuencia en el discurso periodístico televisivo.

- Se constató que se produjeron frecuentes transformaciones de descriptivos o asertivos en enunciados que además de afirmar tal o cual cosa representan en sí una forma de hacer (llamados por Austin “constatativos” y “performativos”, respectivamente), así como su articulación a partir del uso de deícticos de persona por medio de los cuales el enunciante se denomina a sí, a los otros con que interactúa, o

⁶⁰⁶ Siguiendo a Lozano, Peña-Marín y Abril (1993: 19 y ss.) interesa asumir la coherencia como resultado, más que como atributo dado por la consistencia de un entramado o conexión de textos, el cual es generado por el mecanismo de competencia textual, en el sentido de experiencia de híper codificación (Eco, 1979: 81) y puede ser captado mediante la competencia inter textual, con independencia de la forma lingüística de los textos, que permite definir los marcos dentro de los cuales se puede observar o atribuir. Por tanto, aunque pueda distinguirse una cohesión superficial como una manifestación intuitiva de la propiedad semántica de los discursos, basada en la interpretación de cada frase individual relacionada con la interpretación de otras frases (según van Dijk), conviene considerar con Bellert (1970) que la coherencia textual no viene conferida sólo por lo que explícitamente se dice en el texto sino también por todo aquello que en él queda implícito. De modo que un discurso es coherente si para cada una sus sentencias, las sentencias previas son relevantes (según Berrio y Luján, 1977: 173), pero más importante aún es asumir que una interpretación adecuada de una enunciación recurrente en un discurso requiere del conocimiento de los elementos precedentes, que constituyen el contexto discursivo (Beller, 1970). Son muchos y variados los factores que originan coherencia en un nivel superficial (también llamada cohesión), desde los elementos copulativos, los pronombres y la pronominalización, la sustitución diafórica, la conjunción y la estructura de modo, de tiempo y de aspecto de los predicados, hasta el orden de las palabras, según el énfasis puesto en la conectividad y las relaciones causales de los elementos de un texto. No obstante, para los fines de este estudio se toma en cuenta que, como afirma Riesser, 1978: 41) textos incoherentes en un nivel de estructura de superficie muestran un alto grado de coherencia en la estructura profunda y que hay convergencia, entre los estudios del asunto tanto desde la semiolingüística francesa como desde las tradiciones alemana y holandesa de la lingüística del texto, respecto a la necesidad de situar la coherencia en la estructura profunda del texto, misma que determinará las relaciones entre enunciados, su sucesión y su realización léxica, postura sostenida tanto por aquellos que consideran la estructura profunda como una estructura lógica semántica (Greimas, van Dijk, Bellert), como aquellos que la consideran un conjunto ordenado de complejos temáticos (Schmidt), tal como afirman Lozano, Peña-Marín y Abril (1993: 23).

bien da indicios acerca de un sujeto ausente al que construye como objeto referente, ya sea mediante discurso directo o discurso referido.

Para los fines de prueba de la hipótesis, sólo interesó el registro de aquellas secuencias y los enunciados en que el sujeto hablante se coloca en posición de “ciudadano”, sitúa a sus interlocutores en posición de “ciudadanos” o se refiere a los ciudadanos como sujetos ausentes pero en nombre de quienes habla o refiere lo que opinan.

- Lo más relevante de esa constatación es que fue recurrente, tanto a lo largo de turnos de habla en los que se registró el mismo rema tratado, como entre secuencias organizadas con base en cada tema tratado, aún con independencia de que el tema se haya mantenido o cambiado, ya sea como resultado de la suspensión temporal y concertada de la interacción discursiva, o bien cuando se dio paso a la difusión de un segmento de anuncios publicitarios dentro de la emisión televisiva.
- En lo que concierne a la efectuación de situaciones de debate, se encontró que:
 - A. En todas las emisiones televisivas se produjo por lo menos algún episodio de discusión o debate, aunque en ningún caso se extendió ininterrumpidamente.
 - B. Sólo en algunos casos el debate se mantuvo durante alguno de los bloques de secuencias de turnos de habla en que se divide la emisión.
 - C. En ninguna emisión televisiva, los episodios de debate ocurren al inicio ni al término de la misma.
 - D. Predominaron las secuencias en que el turno de habla se utilizó para exponer las propias ideas u opiniones, o bien hacer comentarios a lo dicho por otro orador⁶⁰⁷, sin llegar al uso de la refutación.
 - E. Esto último ocurrió indistintamente de si se trató de un programa protagonizado por analistas o expertos, que en programas donde participan sólo periodistas.

⁶⁰⁷ Para dar información adicional (por ejemplo, datos, ejemplos, detalles) o abundar en el mismo sentido de un argumento o juicio de valor (por ejemplo validar, confirmar).

- F. Los episodios de debate fueron más frecuentes y extendidos en tiempo en programas conducidos por periodistas y con algún agente político invitado.
 - G. Aunque la invitación a actores políticos ha tenido lugar en casi todos los programas, con excepción de “Tercer Grado” en cuyo formato televisivo sólo participan periodistas, la participación de agentes políticos registró menor frecuencia que la de otro tipo de invitados, tales como agentes económicos, directivos de organizaciones civiles o integrantes de instituciones académicas.
- Parecería lógico suponer que a mayor número de oradores y/o más extendidas en tiempo sean las intervenciones, menores posibilidades habría de que un debate se viera auspiciado. Sin embargo, eso no ocurre en el espacio de la difusión televisiva, cuyas coordenadas temporales están regidas por la inmediatez, la acción y reacción rápida y el estricto cumplimiento de la organización del tiempo para cada secuencia y bloque del programa, por más que se observe mayor flexibilidad en programas de opinión o comentario político que en programas informativos, tal como noticiarios o la inserción no programada de coberturas especiales.

La gestión del tiempo en televisión, tanto al nivel individual como colectivo, depende en primer término de las reglas de realización o ejecución de la emisión televisiva de cada programa y, en segundo término, del manejo de las competencias lingüísticas y discursivas, así como cognoscitivas y expresivas de los participantes⁶⁰⁸. Se observaron diferencias al respecto. Se puede postular que si bien el contrato de enunciación discursiva, que establece los fines y regula los procedimientos, la posición y el tiempo en que los participantes actúan, depende en general del formato televisivo, pero en mayor medida específicamente de las estrategias y los recursos discursivos que los participantes deciden poner en juego durante la interacción discursiva.

⁶⁰⁸ En el primer caso, la violación se cancela con la interrupción que haga el conductor o ante el extremo de un desacato con una salida de foco visual y audio para dar inmediatamente paso a la transmisión del siguiente contenido programado; en cuanto al segundo aspecto, un manejo inadecuado expone al participante a ser reconvenido por los otros y como sanción extrema el retiro del participante en subsecuentes emisiones televisivas.

Por lo que se refiere al primer aspecto fue evidente que el formato de realización del programa es más rígido y controlado en algunos programas que en otros. Por eso interesó observar la transgresión a las reglas convencionales de la interacción comunicativa, a la par que a los registros del carácter polémico del asunto tratado según los indicios discursivos que los participantes dieron con base en los enunciados pronunciados sobre el tema o el rema, aún cuando éstos se hayan producido previamente a algún episodio de confrontación verbal. Se tomó como tal a las interrupciones al orador en turno, la producción de actos de habla de uno o más participantes al mismo tiempo (“solapamientos”) y cuando éstos se hicieron acompañar de gesticulaciones que convencionalmente pudieran ser interpretadas como señales de desacuerdo.

La observación de este aspecto, sobre varias emisiones de cada programa, sugiere por un lado que el formato de realización televisiva del programa se sobrepone al papel asignado a los participantes y, por otro lado, que éste último puede estar supeditado a la identidad del participante (protagonista sea periodista o analista o invitado). En efecto, en el primer caso, si bien es de esperar que la situación discursiva devenga en una discusión e incluso confrontación ante tópicos y remas que puedan considerarse más polémicos, y no obstante que la competencia discursiva del participante⁶⁰⁹ pueda asegurar al productor del programa que no cancele la situación de comunicación misma, es distinto el margen de maniobra discursiva que se permiten a sí mismos los participantes cuando se trata del papel de analista o experto en el tema que cuando se trata del papel de periodista o agente político, económico o social que haya sido invitado a participar en el programa.

- En la mayor parte de los casos en el papel de analista se produjo mayor moderación para producir o involucrarse en una confrontación y para desaprobar la postura de los otros, así como una mayor recurrencia a las fórmulas discursivas de “cortesía” para

⁶⁰⁹ Para defender su propia postura y refutar o criticar la de otro, es decir para inducir un tratamiento más o menos crítico del asunto, de las posturas discursivas ante el mismo y de las opiniones de terceros ajenos a la situación discursiva.

refutar, que las registradas en el caso del papel del periodista o el agente invitado al programa. El mayor contraste se verificó entre el programa televisivo “Tercer Grado”, en el cual los interlocutores son invariablemente periodistas, aún cuando actúan discursivamente como expertos a juzgar por sus actuaciones discursivas, y el programa televisivo “Primer Plano”, lo que sugiere la exploración analítica de la forma simbólica ideológica del proceder discursivo considerado convencionalmente como “correcto” en distintos ámbitos sociales de comunidades y países con funcionamiento democrático incipiente, tal como es el caso de México.

- La influencia del formato, con independencia del papel y la competencia discursiva del participante, queda a la vista al comparar dos programas televisivos que tienen en común tanto que son protagonizados por analistas, como que éstos actúan discursivamente como moderadores de su desarrollo, en situación paritaria a juzgar por el uso de la palabra⁶¹⁰, tal como es el caso del programa televisivo “Primer Plano”, en el cual no hay participación de agentes externos invitados, y el programa “Entre Tres”, en el que sí la hay y cuya realización se basa precisamente en construir discursivamente cierta polémica con la cooperación de ellos.

En cuanto a la verificación de secuencias de debate en la emisión, se observó que los productores televisivos de opinión echan mano de ciertos artificios discursivos, adicionales a la presentación formal de su contenido como realización de un debate. El efecto de polémica y refutación se hace depender en mayor medida de las competencias histriónicas para la escenificación y los efectos audiovisuales que permite el *programa narrativo* para acentuar la ejecución de los participantes, al inicio y al término de la emisión. De modo que los efectos discursivos de las actuaciones discursivas durante el programa, encaminadas a crear y recrear la situación interactiva de debate, tales como el

⁶¹⁰ Al margen del mayor o menor protagonismo que puedan alcanzar durante la emisión televisiva, lo cual puede observarse a partir de indicios tales como la frecuencia de turnos de habla, el tiempo transcurrido en ellos en proporción a la duración de la emisión, así como en la disposición física en que se sitúan en el escenario, en el centro o a los lados, y el tipo de enfoque de cámara de televisión que se hace de cada participante al momento en que habla.

uso de la refutación por ejemplo, pueden pasar a un segundo plano, al menos desde el punto de vista de la percepción e interpretación que pueda hacer el teleespectador. Parece que los periodistas llevan en ese aspecto la delantera a los analistas o expertos que aparecen en estos programas televisivos.

Ese rasgo es más ostensible en el caso del programa “Tercer Grado” comparados con programas de otras televisoras, tales como “En Contexto” y “Reporte 13”, cuyos protagonistas actúan también en el papel de periodistas, más que analistas. El contraste es más acentuado al comparar ese programa con otros protagonizados por analistas o expertos en lugar de periodistas, tal como “Primer Plano” y “Entre Tres”. En el programa Tercer Grado cada emisión inicia con la entrada de los periodistas participantes, emulando una pasarela o traslado hacia el escenario, construido mediante sillones individuales dispuestos en círculo, dejando amplio espacio entre uno y otro, mientras se difunde una pieza musical que provoca el efecto sonoro de expectación, cual si se tratase de “estrellas televisivas” o actores de entretenimiento, combinado con la inserción de imágenes en fragmentos de las pantalla, alusivas a conversaciones y discusiones que tienen lugar fuera de la emisión y como tareas preparatorias a la misma.

El cierre de cada emisión de ese programa tiene el sello semiótico similar de espectacularidad, no obstante una función discursiva distinta, como puede ser mostrar que no obstante la escenificación del debate, y a pesar de que se haya producido confrontaciones o calificaciones recíprocas, no se producen conflicto alguno entre los participantes, lo que se puede connotar cuando la cámara enfoca a los protagonistas del programa despidiéndose mutuamente mediante saludos de mano, beso y abrazo, gesticulaciones de cortesía, habitualmente con sonrisas recíprocas, todo ello sin registro de voces (“off the record”). Esta estrategia pone en juego recursos retóricos y adaptaciones audiovisuales características de los discursos persuasivos en televisión. En el programa “Tercer Grado”, producido por la televisora con mayor cuota del mercado

representado por los anunciantes, la emisión termina invariablemente con el mensaje de identificación del programa, con el locutor moderador fijo enunciando el mismo slogan: /Eso ha sido todo por hoy, pero los esperamos la próxima semana para un nuevo debate entre los periodistas que día a día le dan a la noticia/.

Otro hecho significativo, éste observado en los programas “En Contexto” y “La manzana”, ambos de la misma televisora, consiste en que el debate puede ser representado mediante la confrontación directa al personaje invitado a participar, la mayor parte de las veces, como único interlocutor, si bien distinto para cada emisión inmediata, por parte de los dos periodistas que actúan como locutores y conductores mancomunadamente de cada emisión. El participante invitado es habitualmente un agente económico, social o político, con mayor frecuencia uno y casi nunca tres o más; es situado en el escenario al centro de una mesa redonda, flanqueado por los conductores. En contraste con estos programas, los programas “Primer Plano” y “Entre Tres”, no se presentan explícitamente como debate, pero el uso de la refutación fue más frecuente y registró una más estrecha vinculación con el uso del discurso argumentativo; en estos casos la representación del debate tiene más que ver con lo actuado discursivamente que con los efectos audiovisuales producidos por el realizador del programa con ese fin. En ellos fue característico, un rasgo distintivo de otros, la utilización de las llamadas “fórmulas de cortesía” en el habla, comunes en el caso del discurso técnico en situaciones comunicativas especializadas (vgr, académicas).

De hecho esa diferencia se aprecia más aún al contrastar el discurso que las televisoras producen en el plano de la identificación de los mensajes que emiten en estos programas. Ese discurso es de orden persuasivo, buscar provocar la asociación entre la valoración que el televidente pueda hacer del contenido con la identidad de marca de la televisora, y se manifiesta al inicio y al término de cada emisión del programa y de modo permanente en los mensajes publicitarios que la propia emisora televisiva difunde para promocionar el consumo de su programación.

6.4.2. Función del tema en programas televisivos de opinión

En cuanto a este aspecto, se constató que, indistintamente del tipo de formato de realización del programa, toda emisión televisiva gravitó en torno a un tema (macroestructura discursiva) determinado⁶¹¹. El tema motiva la actuación en la situación de comunicación (participación en un cierto programa televisivo) y representa una restricción, en ningún caso infranqueable, de la interacción discursiva que se escenifica y, por tanto, conforme a la cual los participantes organizan su programa narrativo particular.

El tema es seleccionado a priori por el realizador del programa televisivo para cada emisión. La única correlación que se advirtió al respecto concierne a que esa selección obedeció invariablemente a asuntos de actualidad y vigencia, en tanto que objetos referentes de información pública que los medios de comunicación han difundido en los días previos al de la emisión televisiva que se realiza. Lo cual se confirma por el hecho de que, en general, los programas televisivos de opinión son colocados adyacentes o próximos a los programas de información o noticiarios “estelares” (de mayor audiencia) de la respectiva cadena televisiva⁶¹².

⁶¹¹ La coherencia del discurso y la enunciación del programa televisivo, estaría dada por lo que van Dijk llama la macroestructura, representación semántica global que define el significado de un texto concebido como un todo único, en el caso de este estudio puede hacerse equivalente al resultado de la situación interactiva y discursiva que tuvo lugar en cada emisión televisiva o bien a alguno de los segmentos parciales de secuencias de conversación de que se compuso la emisión televisiva, en general alrededor de algún tema o rema de algún tema. Para van Dijk la coherencia se define en el nivel de la estructura profunda textual, que llama macroestructura, estructura abstracta subyacente o forma lógica de un texto, que contribuye tanto a la coherencia global como también a la coherencia local en el nivel inferior de las conexiones entre proposiciones de las frases o microestructuras. Aquí interesa destacar que la macroestructura puede ser concebida como el desarrollo (transformativo, jerárquico y coherente) del tópico del discurso, es decir, como estructura mínima de representación sintáctico-semántica, pero a la vez desde una perspectiva pragmática, que es la que aquí interesa, como una operación pragmática para asignar coherencia por parte del intérprete de un texto, dado que el tópico textual está estrictamente conectado con la “interpretación” que el lector u oyente está “inducido” a dar al texto, una acción que aquel realiza sobre éste por la que establece el “argumento” de que se habla (Viola y Manetti, 1979: 39).

⁶¹² Ese fenómeno obedece a fines y estrategias de acción de éstas mismas. En el programa “Tercer Grado”, el locutor moderador se hace cargo de afirmar la relación que, desde el punto de vista del emisor televisivo, guarda el programa con los noticiarios que produce, ya que se constató que invariablemente al cierre de ese programa se produce una secuencia discursiva en la que, mediante actos de tipo performativo, los

La mayor parte de los temas tratados, en los programas televisivos del *corpus*, tuvieron como objeto referente algún hecho, acción o declaración pública, o bien una serie o conjunto de todos ellos, dados a conocer en general a través de los medios de comunicación masiva, en la semana inmediata anterior a la emisión televisiva de que se trate. Con menor frecuencia concernieron a una temporalidad mayor a esa, lo que no excluyó que se produjeran remisiones a algún tratamiento pasado o a juicios retrospectivos sobre el tema o asunto, así como en menor medida a aquellos que tienen un cobertura espacial extranacional e internacional (tal como la relación bilateral con otro país o algo que ocurra o concierna a varios países).

Otra constatación relevante, a destacar para los fines de este estudio, consiste en que el tema no definió la interacción discursiva y la situación comunicativa en los programas de opinión analizados. Las metas y los programas narrativos del productor, realizador y emisor del programa televisivo están establecidos previamente a cada emisión, lo cual incluye la selección del tema a tratar en ella y convenidos con los participantes, aún en el caso en que se tome el parecer de éstos para la selección del tema. Como consecuencia, las metas y los programas narrativos de los participantes están condicionados parcialmente por la regla de ceñirse al tema a tratar. Por tanto, indistintamente del tema, la situación de interacción discursiva puede devenir o no en un debate, así como éste puede estar ausente aún cuando la emisión televisiva sea expresamente ofrecida como un debate. Del mismo modo, la actuación o el desempeño de los agentes políticos o el funcionamiento de las instituciones políticas pueden ser objeto de evaluación o discusión, con independencia del tema que se trate.

De modo que ni el tema que se pueda tratar, ni aún el carácter polémico que pueda implicar, presupone necesariamente que, por sí mismo, dé lugar a un debate; tampoco

enunciados son los mismos y configuran un mensaje estable y característico de los discursos persuasivos; ese mensaje tiene la forma de “slogan” publicitario por el que se afirma que se ofreció un debate entre los participantes y que todos ellos tienen la cualidad común de dar a conocer las noticias cotidianamente.

que ese debate verse acerca de la evaluación o el análisis de la actuación y el desempeño de agentes políticos o instituciones políticas, en particular de legisladores o del Congreso federal. Eso es así porque una discusión o debate es resultado de la actuación y las transformaciones que se produzcan en la interacción discursiva, más que de las intenciones que los participantes tengan previamente.

El tema del debate es construido discursivamente por y entre los participantes en y por medio de su interacción discursiva. La acción de alguno de ellos puede ser fallida incluso si con ella se propone inducir debate, cuando en la negociación discursiva que se establece en la interacción no encuentra cooperación o reciprocidad por parte de sus interlocutores. Eso significa que aunque éstos puedan, mediante su proceder discursivo, conseguir que una interacción cuyo curso inició como intercambio de opiniones se transforme en un debate, así como que éste tenga como objeto someter a examen o evaluación lo que los legisladores hacen, deciden y dicen sobre algún aspecto o asunto, hecho o acontecimiento o incluso noticia, requieren de la acción concertada o bien de la complicidad de los otros actuantes para colocar un tema y la modalidad de la interacción discursiva⁶¹³.

⁶¹³ El tópico se define por oposición al comento, en la terminología de los lingüistas del círculo de Praga tema versus rema, en términos generales como “aquello de lo que se dice algo”, por oposición a “aquello que se dice de la persona o la cosa”. Importa poner de relieve que la coherencia está dada por la comprensión y la interpretación que el lector u oyente hace del texto y que ésta última está sujeta tanto a la recuperación de la información semántica que el texto posee, como a la introducción de todos aquellos elementos de lectura que el sujeto puede poseer, y que componen la competencia textual, desde los supuestos socioculturales e ideológicos y los sistemas de creencias, hasta las estructuras pasionales y lo que Eco (1975) llama subcódigos por las que los sujetos no sólo hacen operaciones de “traducción” sino que establecen, desde un nivel *metacomunicativo*, diversos tipos de marcos, entendidos desde la perspectiva sociológica constructivista y del *interaccionismo simbólico* como instrumentos que utilizamos cotidianamente para construir la situación de interacción entre los actores sociales y para asignar significado al flujo de acontecimientos que se desarrollan en la interacción (Goffman (1974) y más restrictivamente por la psicología cognitiva como “conjunto de operaciones que caracterizan nuestro conocimiento convencional de alguna situación más o menos autónoma: actividad, transcurso de acontecimientos, etc. (según van Dijk 1980: 157). En función del marco se atribuye significado y se asigna coherencia al texto; según Bateson (1972) todo texto tiene su propio marco, en función del cual se le atribuirá significado y se le asignará coherencia, el lector puede cambiar, en el nivel *metacomunicativo*, de marco o designar en su proceso de lectura un marco diferente del que por sus características textuales internas un texto posee en principio. Por eso según Eco para que el texto funcione al máximo rendimiento se requiere de la cooperación del lector; esa cooperación no es realizada por sujetos individuales sino por estrategias discursivas. Por eso, conviene mantener la postura, que plantean Lozano, Peña-Marín y Abril (1993) de que los sujetos del texto deben verse como personajes textuales y que, aunque la coherencia dependa en última instancia del lector, en la estructura textual está prevista la coherencia intratextual.

Cabe señalar que con relación a este aspecto, aunque no fue un variable de los fines de estudio, se observó la recurrencia del uso de fórmulas discursivas de cortesía por parte del locutor (orador) para indicar a sus interlocutores que concedan su anuencia para tratar el asunto que plantea, o bien la acción ilocutiva del orador quien dice plantear un asunto o aspectos del tema originalmente planteado y con respecto al cual el enunciador afirma, en pocos casos se recurre a argumentar, que hay una relación evidente. Interesa mencionar este hecho sólo porque puede contribuir a afirmar el sentido de que se está ante una conversación cuyo curso es imprevisible en términos de los remas o microestructuras discursivas que pasan a formar parte de la interacción que tiene lugar en el programa.

Por lo que se refiere a la interacción discursiva verificada, se constató que en todos los programas las secuencias se organizan a partir del establecimiento de un segmento de intervenciones por cada tópico o tema tratado en el programa televisivo, lo cual obedece a una convención característica de la emisión televisiva, que consiste en dividir el contenido difundido en segmentos de acuerdo a la inserción de anuncios o mensajes de publicidad, sea comercial o de utilidad social, comportamiento estandarizado incluso en las televisoras de propiedad pública.

Otro hallazgo relativo al tema o asunto tratado, en los programas televisivos de opinión estudiados, consiste en que casi nunca el tema propuesto para tratar en una emisión consistió en evaluar la actuación y el desempeño de los agentes políticos, sino que tal acción de evaluar ocurre ante cualquier tema tratado. De manera que el hecho de que la evaluación se verificara no dependió del tipo de tema, ya sea de orden económico, político o sociocultural, ni de la cobertura espacial que se le asignara a nivel nacional, regional o local, ni del contexto social una clase social, un grupo de interés o de presión formal o informal, un movimiento social de un grupo o de varios grupos sociales, una organización o institución o una comunidad en particular; ni del contexto temporal

propuesto, asunto, hecho o fenómeno pasado, presente o futuro, como tampoco del enfoque o tratamiento que podría darse al tema.

Acerca de la denominación del referente del examen o evaluación realizadas, de la observación resulta evidente que la denominación del sujeto fue acompañada con alta frecuencia de algún pronombre calificativo o adverbio, lo que es un indicativo adicional que fortalece el sentido de que el objeto del examen, en este caso un sujeto pasivo discursivamente, es evaluado o juzgado y que la acción discursiva es examinar la actuación de un personaje político.

6.4.3. Construcción de identidad en la interacción discursiva: debate entre ciudadanos o llevado en nombre de ellos

La siguiente cuestión a despejar fue si el debate escenificado tenía lugar entre ciudadanos o si son implicados por los actantes en tanto que “delegados” contruidos discursivamente, o bien como actores sociales de quienes se conoce alguna opinión o juicio sobre el mismo objeto referente de la situación discursiva. Se trató de verificar si cuando ocurrió una secuencia de debate, dentro del programa televisivo, tuvo lugar entre los participantes actuando en el papel de ciudadanos, en nombre de ellos o aludiendo a ellos e implicándolos a través de la enunciación. Cada uno de estos posibles eventos constituye un índice (“marca discursiva”) y para efectos del análisis un indicador de comportamiento de la variable “identidad discursiva”.

Esas posibles identidades se distinguen entre sí y todas ellas respecto a la identidad preestablecida, a partir del contrato comunicativo que se establece en la situación de comunicación y de interacción discursiva, consistente en actuar en calidad de periodista o analista, sea como protagonista o huésped habitual del programa o como invitado al mismo; en éste último caso, la identidad puede ser la de agente político o social,

considerándose en éste último caso cualquier identidad y papel que no sea dedicarse profesionalmente a la actividad política.

Debe tenerse presente que el hecho de que se verifique, sea escenificado desde el punto de vista de los telespectadores, una interacción comunicativa que puede ser percibida y entendida como un debate, no supone que ésta sea protagonizada por ciudadanos, la otra condición necesaria para la verificación del fenómeno de estudio. Esa condición se satisface si los participantes aparecen como ciudadanos o bien identificados con ellos y hablando en su nombre. Debe destacarse que se consideró pertinente en la observación distinguir entre hablar acerca de los ciudadanos y actuar por los ciudadanos mediante el decir, entre referirse por ejemplo a lo que opinan o lo que se cree que opinan y atribuir juicios u opiniones a ellos que se infieren a partir de lo dicho por el actuante en la interacción comunicativa.

Por lo que se refiere a este segundo componente de la hipótesis, la prueba consistió en verificar que los participantes hablan como ciudadanos o hablan en nombre de ellos, lo que tiene que ver con la construcción pragmático discursiva de la identidad que cada actuante hace de sí mismo, de los otros y, eventualmente, de otros no presenciales que pueden constituir su destinatario o audiencia, lo que ocurre en virtud y mediante su actuar e interactuar discursivo, en el contexto de la interacción discursiva y el proceso de enunciación global del texto o emisión televisiva. La construcción discursiva de la identidad de los participantes como ciudadanos, implicó en suma observar el comportamiento *ilocucionario* de los participantes, así como las modalizaciones que operan durante el proceso de enunciación. Se registraron las secuencias en las que alguno de los participantes asume u ostenta el papel de ciudadano a partir de lo dicho y actuado discursivamente, es decir del sentido de los enunciados que produce cualificándose a sí mismo o a los demás interlocutores y de la relación que guardan tales enunciados con el tipo de acto de enunciación que produce (actos directos u actos indirectos).

Esto se verificó, en la primera forma, al registrarse que los hablantes actuaron discursivamente con la identidad de ciudadano, que el locutor asumió a partir de actos directos de habla y enunciados locutivos que produjo designándose a sí mismo como un ciudadano. Un caso particular fue la construcción de una identidad común o compartida entre los interlocutores, lo que tiene lugar cuando alguno de ellos produce actos directos con enunciados locutivos, utilizando los deícticos de persona para designarse a sí mismo y a sus interlocutores como ciudadanos. Eso ocurrió con mayor frecuencia y en mayor medida que en el caso general.

Bajo la tercera forma de identidad, la implicación se verificó al registrarse la utilización del discurso referido, con lo cual el locutor produjo actos directos y enunciados locutivos de referencia cuyo efecto fue remitirse al discurso de otro, que puede ser citado directa (literalmente) o indirectamente (parafraseando o por perífrasis), o bien mediante actos ilocutivos por los que el locutor alude a una fuente de información a la que, con el acto enunciado (con su decir), a la par califica u otorga un determinado valor pragmático, tal como puede ser veracidad, autoridad, confiabilidad o accesibilidad para cualquiera.

En cuanto a la utilización discurso referido, como recurso estratégico y medio para aludir o implicar a ciudadanos, se procedió a verificar tanto, por una parte, mediante la alusión o remisión que los participantes hacen a fuentes de información, de acceso público, que son tomadas para ofrecer datos relativos a la opinión de los ciudadanos con relación a los enunciados locutivos, o bien a través de identificación del uso de citas y, por otra parte, a través de actos indirectos tales como la presuposición o implicación conversacional y los llamados “sobreentendidos”. Se encontró que en cada emisión televisiva, indistintamente del formato, incluso en el caso de programas televisivos atípicos como el de entrevista y el de revista política humorística, se presenta por lo menos una remisión al discurso de otros y por lo menos una referencia, acerca de la evaluación y la opinión que los ciudadanos hacen acerca de los legisladores.

La remisión ocurrió invariablemente a analistas especializados, frecuentemente señalados como académicos o designados con el término “experto”, mientras que la referencia predominante que fue utilizada consistió en una encuesta de opinión o sondeo público. No obstante, fue más frecuente aludir a hechos o acontecimientos públicos, tal como movilizaciones o marchas ciudadanas en plazas públicas, lo que debe entenderse en el caso del *corpus* conformado debido al contexto social en que las emisiones se produjeron. En el cuadro A anexo se pueden apreciar la sistematización de los datos que permitieron la prueba de la hipótesis.

Por lo que toca a la identidad ciudadana remitida o referida, se constató que con frecuencia se construye la identidad del ciudadano en términos de condición socioeconómica (descripción situacional con expresiones referenciales como afectados, perjudicados), o como un estado emocional o pasional (uso de calificativos y adverbios, irritado, inconforme, desconfiado), acompañados en ocasiones de argumentos que justifican la situación o el estado respectivo. No hay correlación significativa entre la crítica y que se impute como originada en el ciudadano: la crítica se hace personalizada. Al predominar la referencia al estado o la situación del ciudadano, como afectado y molesto, es más frecuente que la ruta narrativa del locutor sea colocarse a sí mismo en la posición de ciudadano, con lo cual se aumenta el efecto persuasivo de los enunciados que produce.

La referencia de ser afectado está ligada, con frecuencia, a los agentes políticos como sujetos causantes de la afectación. Al respecto se observó que predominan los casos de referencia a la opinión del ciudadano según alguna fuente de información pública, luego los casos en que se hace referencia al ciudadano afectado como un sujeto ajeno al que habla, seguido de aquellos en que el locutor se asume como ciudadano afectado y, en último término, usar la voz propia como voz del ciudadano. Paradigmáticamente, la opinión ciudadana referida en todos los casos es siempre crítica o de inconformidad. Eso explica que el tema predominante haya sido la seguridad pública y que el referente de remisión o alusión haya sido el malestar o la inconformidad de la ciudadanía respecto a la

ineficacia e impunidad de los gobernantes y las autoridades competentes, así como el desconcierto y la incertidumbre que aqueja a la mayor parte de la población ante la violencia generada en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada.

Más revelador aún, en cuanto a este aspecto, fue encontrar una utilización reiterada en la misma secuencia y emisión, por parte de varios hablantes de la misma emisión, aludiendo a la opinión de los ciudadanos a través de una encuesta de opinión.

Se encontró, en cambio, que en la mayor parte de casos ocurre la construcción de la identidad propia y colectiva como ciudadanos, en mayor medida que la referencia al ciudadano como un sujeto ausente de la interacción discursiva; en éste último caso, la referencia predominante fue al papel pasivo de los ciudadanos, en cuanto son objetos de la acción de otros (afectación) o comparten una condición material o emotiva (estado), más que en el papel de sujetos activos que producen acciones sobre otros, cuya condición o estado afectan o alteran. La estrategia discursiva para construir la propia identidad como ciudadano fue más común, que aquella dirigida a evocar o aludir al ciudadano, lo que piensa, siente u opina.

Esta construcción de identidad del hablante como ciudadano se produjo mediante dos mecanismos: por un lado el discurso y los actos de habla directos, que se ponen en funcionamiento en la enunciación mediante la utilización de enunciados locutivos de referencia al objeto, al rema y al tópico tratado en la interacción discursiva. Por otro lado, el discurso indirecto y los actos de habla del tipo ilocutivo, que permiten a los enunciadorees tanto construir la identidad propia y la de los receptores de sus mensajes en la situación comunicativa, como la del destinatario común ausente y para el cual todos actúan e interactúan, que como se ha visto puede ser discursivamente distinta a la del televidente; permiten asimismo a los actuantes asumir posiciones particulares respecto a lo que dicen y han dicho sus interlocutores.

6.5. Relevancia de los programas televisivos de opinión

Para los fines de este estudio, los resultados observados son significativos en dos sentidos. Por un lado, revelan que la evaluación ciudadana respecto de la actuación o el desempeño de los agentes políticos no es, en principio, una finalidad del programa; sin embargo, aquí se ha probado que puede tener verificativo en él, mediante la representación simbólica cultural de esa práctica democrática. Por otro lado, la ausencia de agentes políticos cancela la posibilidad de un ejercicio de rendición de cuentas que, aun cuando estuviera constreñido por los imperativos de la difusión televisiva, sería ingenuo esperar que constituyera una ocasión propicia para confrontar a éstos y que la actuación de periodistas, analistas y otros agentes sociales invitados al programa respondiera a los intereses e inquietudes de los ciudadanos, no obstante que el auditorio de ellos que sintonizan el programa constituya una parte mucho más amplia, desde luego, que aquella que los propios agentes políticos podrían convocar o tener como audiencia, aún utilizando el cauce y los mecanismos institucionales dispuestos con ese propósito.

De lo expuesto hasta aquí se sigue que, por una parte, mediante este tipo de programas de opinión política se potencian los efectos de mediación simbólica cultural que, en el ámbito público mediático y el circuito de la comunicación política, ejerce la televisión abierta en México y, por otra parte, que la expresión y, en su caso, confrontación de opiniones y juicios, escenificada al margen de los actores implicados en esos programas, no puede reemplazar, si acaso suplanta simbólicamente, el ejercicio de las libertades y los derechos políticos, algunos de los cuales quedan inclusive socavados. El efecto principal del escrutinio público mediático, en ese sentido, es el relevo de los ciudadanos de esa práctica. En efecto, el ciudadano podrá hacer propia la opinión y los juicios vertidos por otros, en especial cuando los protagonistas del programa ostentan discursivamente opinar o juzgar por ellos, tal como se ha visto. El agente político, por su parte, al no participar en la emisión se verá impedido de ejercer el derecho de réplica, al ser aludido o resultar imputado en los juicios vertidos, de cuya responsabilidad el difusor del programa se

deslinda expresamente, mediante un mensaje escrito descriptivo que así lo indica, colocado bajo la forma de letrero o aviso al final de cada emisión televisiva.

La consecuencia es que los televidentes serán testigos no presenciales, de un ejercicio diferido de escrutinio público mediático, por el que los participantes del programa de opinión pueden apelar a los ciudadanos y, en nombre de ellos, juzgar la actuación y el desempeño de funcionarios de gobierno y legisladores, incluso de modo personalizado, sin que éstos últimos puedan informar acerca de un asunto público, incluso discutir respecto de una decisión sobre la que tiene competencia o atribución y, por tanto, responsabilidad parcial o plena. Algo que seguramente interesaría presenciar a algunos ciudadanos, en el más trivial de los casos como una experiencia emotiva de escarnio o de desahogo de inconformidad.

Por ello, la interpretación de los resultados tiene que atender, a la vez, a la importancia relativa que los programas televisivos del género opinión política pueden tener, lo cual se analiza a partir de dos aspectos: su importancia relativa en el conjunto de la programación televisiva en que se inscriben y, por otro lado, las estrategias de producción, realización y promoción que se ponen en juego, en términos de competencia y la finalidad común de alcanzar al mayor número de televidentes, dentro del segmento de consumidores televisivos al que se dirigen. Los programas televisivos de opinión son menos vistos que los noticiarios (anexo 4), pero tienen mayor audiencia que otros programas, tanto de género próximo como son los culturales, como de género distante tal como es el entretenimiento, éste último el tipo de contenido de la televisión más visto y preferido por el público televidente.

Sin duda hay una audiencia significativa para los programas televisivos de opinión, lo cual se demuestra a partir del nivel de audiencia que consiguen. Con base en ese indicador de preferencia, o bien de visibilidad prestada a un contenido difundido en un momento y lugar dado, se observa que este tipo de programas se sitúan por debajo del nivel de

preferencia, manifiesta en los dos últimos años, hacia contenidos de entretenimiento y de información, en lo que respecta a la zona metropolitana de la ciudad de México, único lugar para el que se pudo conseguir información (anexo 6).

La distancia que guardan los programas de opinión es mayor respecto a los programas de entretenimiento que a los de información, no obstante que el género entretenimiento contiene el repertorio más amplio y el mayor número de programas. A pesar de esa desventaja, los programas de opinión son vistos con similar preferencia que programas con formato de “talk show” o de “reality show”, con los que las televisoras suelen equipararlos en sus clasificaciones de contenido, o bien en las que utilizan las empresas que hacen los estudios de audiencia y recopilan los datos de televidencia. Para tener una idea, aunque sea parcial, acerca de la relevancia que ha adquirido el género “debate” en televisión, puede servir de ilustración los estudios de mercado. A partir de un estudio de mercado elaborado por Jara y Garnica (2007)⁶¹⁴ en el que se establecen 20 géneros televisivos⁶¹⁵ que agrupan al total de programas televisivos difundidos y vistos durante 2005, se puede valorar, aunque en forma parcial y con ciertas insuficiencias⁶¹⁶, la importancia que tienen los programas objeto de estudio en el conjunto de la difusión televisiva de ese año.

⁶¹⁴ Jara y Garnica (2007), especialistas de la empresa IBOPE México especializada en medición de rating de radiodifusión en varios países.

⁶¹⁵ *Caricaturas; Cómic; Concurso; Cultural; Debate; Deportes; Dramatizado Unitario; Gobierno; Infantil; Magazine; Mercadeo; Musicales; Noticiero; Partidos Políticos; Películas; Reality Show; Religión; Series; Talk Show; Telenovelas*. Las categorías fueron definidas por la agencia de medición y los usuarios del servicio de rating (telespectadores seleccionados por muestreo que aceptan participar en la observación de su experiencia y prácticas de televidencia).

⁶¹⁶ Las restricciones provienen, por una parte, que el estudio consultado no especifica los criterios, ni los ejemplares (“programas”) que agrupa en cada género; por la otra, de que para la mayor parte de las mediciones estadísticas los autores decidieron reagrupar los géneros, en su opinión, con volúmenes pequeños de emisión y recepción” (Ibid: 81), de tal modo que el relativo a “debate” se contiene junto con los relativos a “cultura”, “gobierno”, “partidos políticos” y “religiosos” en una misma categoría denominada “otros”, decisión arbitraria porque no atiende a las evidentes diferencias cualitativas en cuanto al tipo contenido y formato entre los géneros así agrupados, lo cual impide distinguir el comportamiento de los programas del género “debate” objeto de la presente investigación. Conviene señalar también la imprecisión en la definición de la categoría “magazine” que incluye tipos de contenidos y de formatos heterogéneos entre sí: “variedades”, “reportajes”, “investigaciones” y “comentarios”, (Ibid: 73), lo que da lugar a ambigüedad.

Considerando sólo la señal abierta, de cobertura nacional de televisión, los géneros más preferidos en 2005 fueron: “telenovelas”, “películas” y programas con formato de “magazine” (variedades, entrevistas, reportajes, investigaciones y comentarios), que juntos representaron la mitad del consumo de televisión de un televidente promedio. La comparación entre lo que ofrecen las televisoras y lo que de hecho ven los espectadores, se basa en dos criterios: 1) comparar las participaciones que tiene cada género de programación, tanto en la emisión de la televisión (cuadro A) como en la recepción por parte del auditorio (cuadro B); 2) comparar el tiempo que ocupa un programa determinado dentro del canal que lo transmite y la contribución de ese programa al rating global del canal.

En ese ejercicio para conocer esa relación, por cuanto al primer criterio, se midió por separado los géneros con más de 5% de participación, ya sea en el tiempo de emisión, de recepción o de ambos y, por otro lado, los géneros con menor presencia en la pantalla o menos vistos por el público. Para conocer, también de modo parcial, la importancia relativa del género “debate”, en el marco de la programación televisiva, se puede atender a algunos datos del mismo estudio de mercado referido. Los programas del género “debate” representaron el 1.57% del total de la oferta televisiva difundida durante 2005, medida en minutos emitidos, en el total de canales de transmisión por señal abierta (incluidos los de cobertura nacional y local); ocupando ese año el lugar 15 entre el total de los 19 géneros de programas televisivos considerados; lo que equivale a catorce veces menos que el género más difundido “magazine” (21.94% del total); a casi nueve veces menos que el género “noticieros” (13.9%) que ocuparon el segundo lugar en el total; aunque siete y media veces más que los géneros “religioso” (0.21%) y “Reality show” (0.26%) los menos difundidos en el total; dos veces y media más que el género “drama unitario” y casi equiparable al género de programas de “gobierno” (1.68%, programas emitidos por instituciones gubernamentales en cumplimiento de la Ley Federal de Radio y Televisión).

El tiempo de difusión de los programas del género “debate” fue mayor en televisión abierta de cobertura local (1.87%) que de cobertura nacional (1.57%), que superan en nueve y en casi ocho veces, respectivamente, al tiempo de difusión de ese género a través de televisión de paga, en el mismo año. Debe considerarse que la televisión de paga representó dos tercios (65.7%) del total de minutos de difusión de todos los programas, de todos los géneros, en todos los canales de televisión abierta y de paga durante 2005 (21 millones seiscientos mil minutos en ese año), así como que el total de tiempo de difusión de la televisión abierta de cobertura regional o local fue casi el doble (dos millones seiscientos mil minutos) que el del mismo tipo de señal pero de cobertura nacional (4 millones ochocientos mil minutos, que representan el 12,1% y el 22,1% del tiempo total de difusión por señal abierta y de paga durante ese año. Tómense en cuenta, también, que el televidente ve menos del 2%, en promedio, del total de tiempo difundido en televisión de señal abierta y cobertura nacional, así como que aún los telespectadores más intensos apenas ven en promedio 90,000 minutos (1,500 horas) de televisión al año.

CUADRO A. PARTICIPACIÓN DE CADA GÉNERO EN LA OFERTA*
TOTAL DE PROGRAMAS DIFUNDIDOS* POR TELEVISIÓN, MEXICO: 2005

LUGAR	GÉNERO	%	LUGAR	GÉNERO	%
1	Magazine	21.94	11	Telenovelas	3.36
2	Noticieros	13.90	12	Concurso	1.74
3	Mercadeo	12.21	13	Gobierno	1.68
4	Películas	9.90	14	Talk show	1.46
5	Cultural	9.30	15	DEBATE	1.57
6	Deportes	4.77	16	Cómicos	1.23
7	Caricaturas	4.60	17	Drama unitario	0.63
8	Series	4.04	18	Reality show	0.26
9	Infantiles	3.71	19	Religión	0.21
10	Musicales	3.48			

Fuente: elaborado con base en datos de Jara y Garnica, 2007: 76.

*Según minutos emitidos en los canales de ese tipo de señal y cobertura.

Por lo que se refiere a la importancia de ese género televisivo, en cuanto a la recepción televisiva, el mismo estudio arroja alguna evidencia, aunque debe recordarse que se circunscribe a la población en la zona metropolitana de la ciudad de México. No obstante que las televisoras invirtieron mayor tiempo de emisión a programas que agruparon bajo el género “debate”, que el que otorgaron a programas agrupados bajo el género “cómico”, en el conjunto de telespectadores que vieron televisión durante 2005 se otorgó mayor tiempo para ver éstos últimos que el que concedieron para ver los primeros. El género “cómico” pasó de representar el 1.23%, y ocupar el lugar 16, del total de minutos difundidos a través de televisión de señal abierta y cobertura nacional, a representar el 4.17% del total de minutos que el conjunto de televidentes dedicó a ver televisión, en ese mismo tipo de señal y cobertura durante 2005.

La preferencia hacia los programas del género “cultura” fue casi equivalente (0.3%) a la que se tuvo hacia los programas del género “debate” (0.36%), pero debe advertirse que las televisoras invirtieron seis veces más de tiempo de difusión en el primer caso que en el segundo. Durante 2005 se registró una valoración más baja por parte de los televidentes hacia el contenido cultural que hacia el contenido de análisis y discusión de temas en televisión. El contenido cultural pasó de ocupar el quinto lugar en la oferta televisiva a situarse en el decimosexto lugar en la preferencia de consumo de los telespectadores, cuando en ambos casos la escala es del primero al vigésimo lugar. No puede pasar inadvertido que el género “debate”, en contraste, guardó un cierto equilibrio entre el lugar que ocupa en el conjunto de la oferta televisiva (15) y el que ocupó en el consumo televisivo (16) durante ese año. Desde el punto de vista de las televisoras resulta, en ese sentido, un contenido redituable⁶¹⁷, que no tiene desperdicio y permite mantener una oferta diversa, así como satisfacer las expectativas de un público televidente que otorga

⁶¹⁷ La baja o alta rentabilidad de un género de programas, desde el punto de vista del emisor televisivo, puede advertirse, de modo claro y simple, en el contraste representado por el hecho de que, durante 2005, el “mercadeo” o los llamados “infomerciales” (exhibición, promoción y venta telefónica de productos diversos) fue el género de programas con mayor participación, superior a la quinta parte del tiempo total emitido (difusión televisiva total en ese año), pero solamente ocupó el 2% del tiempo de visión prestado por los telespectadores durante ese año.

mayor preferencia a ver programas de discusión y confrontación de opiniones, que a ver programas culturales, de gobierno y religiosos.

Se trata del público televidente promedio que dedica más tiempo a ver la escenificación de una narración dramática en un solo episodio (3.23%), que el tiempo que las televisoras en conjunto dedican en su programación a la difusión de ese contenido (0.63%); un televidente promedio que ve menos “magazine” (15.2%) del que es difundido (21.4%), cuya segunda preferencia en conjunto son las películas (17.05%) y que presta casi igual visión a un programa de venta por televisión (2.29%) que a un “reality show” (2.11), pero más que a un “talk show” (1.34%), el doble del tiempo del que le merece un musical (1.19%) y seis veces más del que otorga a un panel de discusión y confrontación de ideas entre expertos en un tema (0.36%); pero que a la vez ve casi el doble de “magazine” (15.2%) que noticieros (7.55%), no obstante éstos últimos sean la quinta entre las veinte opciones de contenido que prefiere ver.

**CUADRO B. PARTICIPACIÓN DE CADA GÉNERO DE PROGRAMAS EN RECEPCION TELEVISIVA*
A TRAVÉS DE SEÑAL ABIERTA DE TELEVISIÓN, DE COBERTURA NACIONAL, MEXICO: 2005**

LUGAR	GÉNERO	%	LUGAR	GÉNERO	%
1	Telenovelas	19.21	11	Mercadeo	2.29
2	Películas	17.05	12	Reality show	2.11
3	Magazine	15.12	13	Talk show	1.34
4	Caricaturas	10.28	14	Musicales	1.19
5	Noticieros	7.55	15	Infantiles	0.97
6	Deportes	6.15	16	DEBATE	0.36
7	Cómicos	4.17	17	Gobierno	0.3
8	Series	3.85	18	Cultural	0.3
9	Concurso	3.63	19	Religión	0.11
10	Drama unitario	3.23			

Fuente: elaborado con base en datos de Jara y Garnica, 2007: 77.

*Según minutos vistos por los televidentes de la programación de canales de esa señal y cobertura.

Los operadores televisivos ajustan los tipos de programación, de modo tal que el telespectador tenga certeza de que podrá encontrar cada género, en la proporción y en los espacios de tiempo a que está acostumbrado. Esa costumbre se produce porque el telespectador se vincula con la televisión anticipando que puede ofrecerle, en qué horario y durante cuánto tiempo de cada día de la semana. Es una conducta que se produce ante el extenso repertorio que se le ofrece (Jara y Garnica, 2007:79). El cambio en la oferta televisiva tiene como objetivo llamar y captar la atención del telespectador. Los programadores televisivos ajustan sus parrillas de emisiones y horarios para incluir nuevos programas, o bien modificando las proporciones de ciertos programas. Una parte de la oferta no está bajo control del operador televisivo, responde a la cobertura de acontecimientos imprevistos, o bien eventos que no obstante sean calendarizados en función de los horarios de televisión, su desarrollo determina qué tanto atraen o alejan a la teleaudiencia. Hay relación estable en el acomodo de los programas de los distintos géneros dentro del tiempo de pantalla y la acogida que reciben por parte de los telespectadores (Ibid:79).

En general, hay una relación directa entre las variaciones de tiempo de pantalla de un género y el tiempo que le dedica el telespectador: si aumenta la cantidad de horas de transmisión de un tipo de programas, es probable que aumente también el número de minutos que le destina el público a ese género, y viceversa. Los programas de debate se encuentran entre los 7 géneros con “coeficiente alfa” inferior a 100⁶¹⁸, mismo que indica que la televisora invirtió lo mismo de tiempo de programación que lo que ganó de rating con ese programa. Este coeficiente sirve para aplicar el criterio de comparar la relación entre la oferta y el consumo de los distintos géneros, es decir la oferta de las televisoras con lo que ven los telespectadores (relaciona el tiempo que ocupa un programa dentro del canal que lo transmite (inversión de tiempo o “broadcast share”) y la contribución de ese programa al rating global del canal (participación de recepción o “reception share”).

⁶¹⁸ Que mide el rating del programa sobre rating del canal en el día que fue transmitido ese programa. Un nivel superior a 100 indica que la ganancia de rating fue mayor que la inversión de tiempo; un nivel inferior a 100 indica que la inversión de tiempo fue mayor que el rating obtenido por el programa.

En cuanto a la evolución de la oferta y las preferencias de géneros, se ha observado que la relación entre oferta y demanda de los distintos tipos de programas tiende a ser estable. “Junto con las telenovelas, los noticieros son la oferta programática más estable de la televisión en México”. La emisión y la recepción sufren menos variaciones a lo largo del tiempo (Jara y Garnica, 2007:94). Una regla es que la oferta y la demanda de programación se mueven en la misma dirección. El género noticieros sigue puntualmente esta regla. No es difícil inferir que la importancia que adquieren los programas de “opinión” radique también en su contigüidad a los noticieros, ya sea inmediatamente antes (como ocurre en el caso de las televisoras públicas, Canal Once y Canal 22) o bien inmediatamente después (como ocurre en el caso de las televisoras privadas o concesionadas), tal como pudo constatarse al observar la ubicación en la barra de programación (“parrilla”) de la difusión en señal abierta.

La dinámica de índices de audiencia está, en parte, determinada por acontecimientos relevantes, varios de ellos inesperados, cuando crece el interés del público (por ejemplo, atentados terroristas o la sucesión papal en el Vaticano). La programación responde a pautas de consumo. En general, se concentra temprano en la mañana; alrededor de la comida y al final del horario nocturno de televisión, de tal manera que el público, por su parte, sabe qué cantidad de tiempo y en qué horarios puede encontrar cada tipo de contenido (por ejemplo los noticieros, cuyas emisiones son más largas y numerosas de lunes a viernes que en fin de semana).

La contribución del noticiero al rating del canal que lo programó es consistente, se ubica por encima del punto de equilibrio (coeficiente Alfa, proporción del rating del programa sobre el rating del canal en ese día, es decir que mide comparativamente lo que el canal o televisora invirtió en su tiempo de programación contra lo que consiguió de rating por ese programa). Esa tendencia pudiera presentarse en el caso del programa de opinión, en la medida en que sea más dependiente de la audiencia que los noticieros generan.

6.5.1. La identidad del programa de opinión a partir de la promoción de su difusor

Es evidente que la clasificación que hace la televisora sigue criterios arbitrarios, no sólo convencionales, tal como se revela en el hecho de que la televisora Televisa clasifique un programa como “Cristina”, que en realidad es un sociodrama bajo la forma de discusión (“talk show”) escenificado por personas ordinarias, en la misma categoría “Debate”, en la que agrupa programas con discusiones, temática y actores sociales con cierto reconocimiento y reputación académica o periodística, tal como son los programas de opinión y análisis político escenificados por periodistas y analistas, así como por agentes políticos y sociales informados y con posiciones directivas en distintos ámbitos sociales.

La ambigüedad se acentúa si se considera que esa misma cadena televisiva transmite un programa de corte informativo, “La línea de la salud”, en la que especialistas médicos discuten enfermedades y tratamientos para orientar al público televidente, con línea telefónica abierta para atender a las preguntas que éste haga. Ese hecho ocurre no sólo en las televisoras privadas. El canal 11 también difunde un programa de tipo informativo, con formato de discusión, en ese mismo ámbito de la salud. La explicación posible a ese hecho es que las clasificaciones de las televisoras responden solamente al criterio relativo al formato del programa; así que ateniéndose al mismo se agrupan en la categoría “debate”, programas del tipo “talk show” o de tipo “reality show”, conforme a ese criterio de clasificación. El hecho anterior es relevante porque pone de relieve la cuestión metodológica de que un programa debe ser analizado a partir del contenido manifiesto por el análisis, según el enfoque y las técnicas utilizadas, con independencia de la clasificación que del contenido del programa haga la televisora que lo difunde. En este punto, conviene introducir la cuestión relativa a la manera en que los emisores televisivos, de este tipo de programas, describen su contenido.

Por eso, se determinó considerar y analizar los mensajes informativos difundidos por las televisoras, con los cuales cada una de ellas define el contenido de que trata cada programa, como una manera de orientar al público consumidor televisivo. Debe advertirse el hecho empírico de que tales mensajes no están a disposición del televidente que sintoniza la señal abierta (de recepción gratuita) de televisión; sólo son accesibles para los usuarios de televisión de señal restringida (de paga o abono), tanto en transmisión por cable o vía satélite. En términos metodológicos, el análisis de tales mensajes se satisfizo a partir de observar las marcas discursivas acerca del tenor funcional de dichos mensajes. El tenor funcional es el propósito con el que se produce un mensaje y tiene repercusiones en el modo de organización global y local del texto, se refiere a: a) las intenciones comunicativas: ser expresivo, ser directivo, centrarse en el tema; elaborar el lenguaje; entrar en contacto (funciones según Jakobson, 1960); b) la finalidad (tal como la entiende y trata Hymes, 1972) específica en la descripción del evento comunicativo; c) la intención general: que lleva a producir actos de habla determinados, provocar, enseñar, criticar, seducir; informar; dar órdenes; burlarse; pontificar; y d) el tipo de secuencias: seleccionadas de acuerdo con la intención discursiva, narrar; argumentar; describir; explicar (Calsamiglia y Tusón, 2004: 329).

A partir de esas consideraciones, por lo que toca al análisis de los mensajes promocionales que difunde el emisor, y que no están al alcance del televidente que sintoniza los programas a través de señal abierta o de recepción gratuita, el análisis arrojó datos relevantes que permiten confrontar lo que la televisora dice acerca del contenido del programa que difunde frente a lo que el análisis revela que el contenido del programa es como texto producido y difundido. De ese modo se revelan las presuntas finalidades, la promesa persuasiva con que el contenido se promueve y, en cierto modo, de qué manera la televisora concibe o construye discursivamente al destinatario y sus expectativas en tanto público televidente potencialmente consumidor. La fuente de información es directa y está constituida por los textos que inscriben las televisoras dentro del menú de programación que se despliega, mediante la manipulación que el usuario haga con el

aparato de mando remoto de la consola o módem, en la difusión televisiva en señal restringida o de paga o abono, tanto mediante cable o vía satelital. El Cuadro 5 en el Anexo contiene el *corpus* utilizado en este caso.

En todos los casos se trata de mensajes lingüísticos escritos breves, elaborados con la forma discursiva de una sinopsis, que describen lo que es el programa, desde el punto de vista del emisor televisivo, quien produce y difunde el mensaje, invariablemente destinado al público televidente; es un texto breve, homogéneo y construido sobre la base de una sola secuencia, que cuando se amplía en extensión textual, en ninguna caso rebasa los diez renglones de un texto escrito convencional. Cuando se presenta otra secuencia ésta es envuelta por la dominante que corresponde a la que cumple la función persuasiva, de elogio o exaltación del referente, es decir la descripción del contenido del programa televisivo, en tanto que un bien o valor que satisface la necesidad, el interés o la expectativa del público televidente en el papel de consumidor.

Al respecto se encontró que en la mayoría de los casos el mensaje es construido con la finalidad informativa, para decir al televidente lo que el programa es como objeto, pero es acompañado por la predicación o exaltación de atributos del objeto, lo que el televidente podía esperar, bajo la forma de una promesa promocional. Se encontró que en todos los mensajes tal promesa acerca del valor del programa se hace descansar en atributos que predica el emisor televisivo sobre los protagonistas del programa y en los atributos de la actividad o acción que se desarrolla o tiene lugar en el programa televisivo. Un común denominador a todos los programas es predicar acerca del atributo del tema o asunto a tratar. A partir de la función predicativa del mensaje se pueden encontrar diferencias entre mensajes por programa y televisora.

El atributo más común imputado al protagonista es que se trata de:

- a) Un “experimentado analista”, en “Detrás de las Cámaras” de TV Azteca;
- b) Un “reconocido experto” en “Entre 3” de TV Azteca;
- c) Un “periodista de mayor prestigio” en “Tercer Grado” de Televisa

Por contraste, puede compararse ese mismo aspecto y tipo de mensaje en los casos de programas de más reciente aparición, que no formaron parte del *corpus*, en los que el atributo imputado tiene otro carácter y da lugar a otra connotación, la facultad o el poder de decisión sobre asuntos gubernamentales, tal como ocurre en el programa del mismo género y formato “Espiral, transmitido a partir de 2009 por Once TV, por el que se atribuye a los participantes o invitados el papel de “responsables del diseño” de políticas públicas y se implica que en distintos sectores de la administración pública. Cabe señalar que en los programas “Punto de Partida” y “Primer Plano”, difundidos por Televisa y Once TV, respectivamente, los mensajes no designan al sujeto protagonista, ni siquiera lo aluden; en estos casos el mensaje cumple la función principal de informar, porque está constituido por entero sobre el plano de la denotación.

Por otra parte, en la mayoría de los casos la función predicativa se orienta hacia la actividad o acción que se desarrolla o de que consiste el programa, con una construcción discursiva del mensaje tal, que a la vez que se la describe se la exalta. Las expresiones léxicas para describir la acción más comúnmente utilizadas se refieren a:

- a) “Análisis político” en el caso de los programas “Punto de Partida” de Televisa, “Primer Plano” de Once TV;
- b) “Analizar e informar” en “Reporte 13” de TV Azteca.
- c) “Hacer el análisis de la realidad política sin cortapisas” en el programa “En Contexto” de TV Azteca.
- d) “poner bajo la lupa el desempeño de diputados y senadores a través del análisis y la reflexión a fondo”, en el programa “Detrás de las Cámaras” de Canal 40;
- e) “Generar polémica, interrogarse y debatir” en “Tercer Grado” de Televisa;
- f) “Confrontar dos posturas totalmente opuestas” en “La Manzana” de TV Azteca
- g) “Reforzar y complementar la crítica” en “Entre 3” de TV Azteca.

En cuanto al atributo del tema, se identificaron las siguientes expresiones léxicas para describir en qué consiste lo que se analiza, discute, critica o confronta:

- a) “al calor de la noticia” en el programa “Tercer Grado” de Televisa;
- b) “la realidad política” en el programa “En Contexto” de TV Azteca;
- c) “la crítica de la cotidianidad socioeconómica, política e intelectual del país” en el programa “Entre 3” de TV Azteca;

- d) “los más diversos fenómenos políticos, económicos y sociales que tienen lugar en nuestro país y en algunas ocasiones más allá de nuestras fronteras” en el programa “Reporte 13” de TV Azteca;
- e) “el tema, como manzana de la discordia” en el programa “La Manzana” de TV Azteca.
- f) “el desempeño de los diputados y senadores” en el programa “detrás de las Cámaras” de TV Azteca.

Conviene aclarar, por otra parte, que todos los emisores televisivos, tanto concesionarios privados como permisionarios públicos, de programas de opinión en señal abierta, ponen en juego mensajes con finalidades específicas de promover su preferencia a partir de los atributos que el televidente puede valorar como tales, a partir de las asociaciones que establezca con los estímulos de orden simbólico que se ponen a su disposición dentro la emisión. Si el programa se toma como mensaje complejo articulado por varios mensajes de diverso tipo, y éstos se clasifican por su función, se puede establecer que al mensaje principal corresponden otros secundarios que informan sobre el mismo y corresponden a la identificación del autor o emisor⁶¹⁹.

En el caso de los programas televisivos de opinión tales mensajes están insertos en el inicio y el cierre de la emisión, así como en los cortes en los cuales se insertan los mensajes publicitarios. Todos ellos tienen un carácter *ilocucionario*, es decir dicen al receptor la acción que se proponen o proceden a ejecutar con respecto a ellos; algunos son ejecutados con fines persuasivos, tal como mantener la atención generando expectativa, para lo cual se dirigen por la ruta central cognitiva hacia el lado emotivo del receptor. Pero pueden cumplir simultáneamente la función de informar acerca del contenido al destinatario, por ejemplo cuando se indica al televidente que el emisor televisivo se deslinda de la responsabilidad por las opiniones expresadas por los participantes en los programas. Este tipo de mensaje es en sí mismo un indicador del contenido para fines de clasificación y de la identificación que haga el público televidente.

⁶¹⁹ En esta parte resultó útil la aplicación del análisis espectral de los mensajes que, desde la perspectiva semiótica, elabora Peninov (1974) para el caso del estudio de los mensajes persuasivos publicitarios.

Para fines de tratamiento analítico se distinguió que aunque todos los programas televisivos considerados proporcionan, mediante este tipo de mensajes, indicios textuales de que pertenecen al género “opinión”, las modalidades de realización de la situación interactiva que efectivamente tiene lugar en la emisión televisiva son distintas y varían de una emisión particular a otra, según las estrategias discursivas de cada participante y el resultado de su concurrencia y eventual competencia en el transcurso de la interacción discursiva y la situación comunicativa. Así, aunque el rasgo común de escenificación y actuación se plantea como un intercambio de opiniones, en los hechos ese tipo de interacción discursiva puede evolucionar hacia una confrontación de opiniones y, de allí, desembocar en un debate.

6.5.2. Diferencias en las estrategias de difusión para la valoración de programas

El canal por el que se difunde revela la jerarquía que la televisora asigna al programa y el segmento de público al que lo dirige y pretende alcanzar. Es revelador que los programas sean colocados en el mismo segmento horario de programación televisiva entre las distintas cadenas, lo cual revela la estrategia de competir a partir de contenidos del mismo género. Ese mismo hecho tiene consecuencias en cuanto a que la competencia, en el caso de los programas televisivos de opinión, se produce en torno al formato del programa y al elenco que los protagoniza. Se trata de conseguir ventaja a partir de los personajes que la televisora contrata, por la preferencia que pueda derivar del interés, empatía o reputación que representen, ya sea por las competencias o la credibilidad o bien por la mayor visibilidad pública que tienen, en comparación con protagonistas de otros programas televisivos del mismo tipo o en tanto que participantes en otro medio, tal como radio, periódicos o revistas.

Los programas de opinión son difundidos en los respectivos canales más vistos o preferidos en términos de audiencia, por las dos televisoras privadas concesionarias en el mercado de consumo televisivo en señal abierta o de recepción gratuita: el canal 2 de

Televisa y el canal 13 de TV Azteca. Llama la atención que TV Azteca difunde el programa de opinión y discusión política más visto en ese espectro de señal televisiva, “Frente a Frente” con un rating de 5.6 en noviembre de 2007 y de 5.3 en junio de 2009, por encima de los programas “Punto de Partida” y “Tercer Grado”, difundidos por Televisa, con un rating de 3.9 y 3.8 y de 4.1 y 4.6 en esas mismas fechas, respectivamente, los más vistos de esa televisora. Esa superioridad de TV Azteca no es remontada más que por el programa “Decisión 2009” que, agrupado en esa misma categoría de programas “Debate”, difundió Televisa tres días consecutivos una sola vez durante 2009, cuando alcanzó un rating de 5.7 ya que en este caso no se trata de un programa de difusión regular a lo largo del año. El “rating” es considerado aquí como un indicador de preferencia de visibilidad a partir de la sintonización manifiesta en un periodo y lugar determinados, que en este caso corresponde a mediciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México⁶²⁰.

Debe señalarse que todos los datos relativos a “rating” tienen como fuente IBOPE, AGB México, empresa privada especializada que los obtuvo, elaboró y analizó. No se pudo conseguir registros de “rating” para los casos de los programas televisivos “Entre 3”, “En contexto”, “La entrevista con Sarmiento”, “La manzana”, “Detrás de las Cámaras”, “Reporte 13”, “De cifras”, “Diálogos Políticos” y “Política Cero”, por las razones indicadas en el pie de página precedente. La superioridad en términos de visibilidad o preferencia de las televisoras privadas sobre las públicas es evidente. El programa mejor posicionado de éstas corresponde a “Primer Plano”, difundido por Once TV con un rating de 1.2 y 1.4 en noviembre de 2007 y junio de 2009, seguido del programa “Solórzano en la red” difundido por canal 22, operado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que

⁶²⁰ Todos los datos relativos a rating fueron obtenidos y elaborados por IBOPE: AGB México, *Ratings TV IBOPE: AGB NOV/07. Resumen de ratings* televisivos-hogares en noviembre de 2007*, México, febrero de 2008, y por IBOPE: AGB México, *Ratings TV IBOPE: AGB JUN/09. Resumen de ratings* televisivos-hogares en junio de 2009*, México, agosto de 2009, que ambos casos enlistan por canal y por género los programas con mayor rating* durante el mes indicado, con base en una muestra representativa de 600 tele-hogares del área metropolitana de la Cd. de México, que incluye las 16 delegaciones del DF y 30 municipios conurbados del estado de México, así como adicionalmente 300 tele-hogares de su muestra especial de televisión de paga. En ciertos canales, algunos géneros no aparecen porque no figuran en la programación o por no tener rating. No se incluyen programas gubernamentales, políticos ni religiosos. El “rating” se define como el porcentaje de hogares que sintonizan un canal determinado en un momento dado respecto al universo total; 1 punto rating = 1% del universo del total utilizado (hogares del AMCM).

alcanzó un puntaje de 1.3 en noviembre de 2007, pero que cayó en preferencia manifiesta de exposición para junio de 2009 al conseguir un puntaje de 0.5, por debajo del programa “Espiral”, difundido por canal 11 de Once TV y que alcanzó puntajes de 1.0 y 1.1, respectivamente; en tanto que el programa de este mismo tipo menos favorecido por el público televidente fue “Veredicto”, difundido por canal 22, con obtuvo un puntaje de 0.5 en noviembre de 2007 y que para 2009 ya no alcanzó un nivel suficiente para ser considerado en las mediciones según la fuente.

El nivel de preferencia depende del canal por el que se transmite el programa, así un mismo programa puede tener distinto nivel de preferencia por el hecho de que sea transmitido en un canal distinto. Ejemplo: el programa “México Nuevo Siglo” registró un rating de 1.2 al ser difundido en el canal 4 y, en cambio, de 4.2 al ser difundido por el canal 2, el principal canal de Televisa, en el mismo mes y año (noviembre de 2007). En la difusión del canal 2 de Televisa, dentro del género “Debate”, los programas “Punto de partida” y “Tercer Grado” registraron un rating de 3.9 y 3.8, respectivamente. El tercer noticiero más visto “Con Lolita Ayala”, de la misma cadena pero en el canal 4, registró el doble de rating (8.8) que cualquier programa del género debate. En este caso, se cumple el hecho de que los noticieros son más vistos o tienen mayor preferencia que los programas de opinión, aún cuando éstos se difundan por el canal de mayor audiencia y el más importante para la televisora de que se trata.

Ese hecho determina que una estrategia de las televisoras privadas, las más competitivas en el espectro de señal abierta, sitúen los programas de opinión en su respectivo canal con mayor audiencia, no obstante que ambas a la vez coloquen un noticiero fuerte en el segundo canal mejor posicionado en preferencia. Sin embargo, una estrategia asociada a la anterior es programar en distinto horario los mejores programas según la respectiva audiencia, de modo que se reduzca el efecto ejercido por un programa similar del competidor. Mientras que en la misma cadena y canal, dentro del género “Noticias”, los noticieros “El noticiero con Joaquín López Dóriga” y “Primero Noticias” registraron 14.2 y

11.3, respectivamente, en la principal televisora competidora, también de propiedad privada, los dos más noticieros más vistos o preferidos, “Hechos de la Noche” y “Noticiario Informativo 7 de la noche”, con 11.6 y 10.4 respectivamente, se difunden en distinto canal, canal 13 y canal 7, los más importantes de esa televisora. Pero también es claro que la repetición del programa, en el mismo canal y televisora, obtiene una menor visibilidad o preferencia de exposición que la emisión originalmente difundida, aún cuando la difusión diferida sea en el mismo día (anexo 6).

6.5.3. Otras estrategias de promoción del escrutinio público mediático

El análisis permitió encontrar otras fuentes de evidencia para verificar la hipótesis argumentada en este estudio. Se debe tener presente que por lo que se refiere a la producción de la representación simbólica, “escrutinio ciudadano del desempeño de los legisladores federales”, el análisis de los contenidos de los programas televisivos objeto del estudio, considera las condiciones de producción y no se ocupa de las condiciones de recepción. La razón es que interesa el papel que puede desempeñar la televisión en el ámbito público político, como institución intermediaria entre ciudadanos y representantes políticos. Ese papel es paradójico, privado, social y pública al mismo tiempo. En cualquier caso, su acción difusiva a la mayor escala, en el conjunto de la comunicación mediática, contribuye a conformar la socialización extendida de prácticas políticas que corresponden al ciudadano. En las conclusiones se plantean las posibles consecuencias de ese hecho, en particular con relación a la actuación y el desempeño de los legisladores federales y de los partidos en el Congreso federal mexicano.

Los contenidos de los programas televisivos de opinión son el resultado de una acción estratégica de sus productores y difusores, en relación con el mercado, con los asuntos de gobierno y con la orientación de las corrientes de opinión pública respecto a los mismos. Eso supone que tales estrategias responden a la actuación de los actores políticos y dependen de la evolución de las relaciones que se establecen con ellos en cada coyuntura.

Centrados en los contenidos, los datos son diversos y la selección de los mismos depende del nivel del análisis. Se pueden reconocer: a) aquellos que se construyen a partir de la información que proporcionan los mensajes del emisor respecto a la clasificación que hacen de los contenidos que produjeron y difunden; estos datos dan cuenta del marco más general del contenido difundido; b) los que puedan extraerse de la información contenida en los mensajes relativos a la promoción o publicidad del contenido televisivo; c) los que resultan de la estrategia de producción para establecer un mecanismo de interactividad con la audiencia del programa difundido, tal como el buzón de correo de voz o el de correo electrónico.

Los datos relevantes en este caso fueron:

- La programación de contenidos de opinión, inmediatamente después de los noticiarios y en el caso de las televisoras de cobertura local o en televisión de paga dentro del horario estelar o de mayor audiencia, lo que puede interpretarse como una medida para competir con los contenidos de entretenimiento que anteceden a los noticiarios en las dos grandes cadenas privadas de televisión (Televisa y TV Azteca).
- La tendencia a insertar una sección dedicada a emitir un comentario editorial de opinión dentro de los noticiarios.
- La incorporación en los noticiarios de secciones destinadas a alentar la interactividad con la audiencia del programa, en tres vertientes:
 - a) la participación mediante correo de voz dentro de los noticiarios (antes privativa de programas de opinión o de quejas);
 - b) el establecimiento de una sección dedicada a exhibir videos que la audiencia graba en teléfono celular y envía al noticiario que convoca a ese tipo de participación (caso más ilustrativo es la sección “Primero tú” dentro del noticiario “Primero Noticias” del canal 2 de Televisa) y

c) la oferta del servicio gratuito de descarga de contenidos del noticiario a través del formato “I-Pod” vía Internet hacia telefonía móvil.

- La tendencia a la retransmisión de emisiones en canales alternos de la misma cadena televisiva, o bien de otra con la que ésta conforma una alianza mercantil estratégica de difusión.
- La oferta de acceso gratuito a las grabaciones de programas transmitidos, a través del sitio WEB de la cadena televisiva. Se observó que en la WEB 2.0 la constitución e integración de grupos integrados tan solo por la preferencia hacia un programa televisivo, radiofónico, a un personaje mediático o a un analista político, que interactúan a través del Facebook, Twitter o Blogs, tal como es el caso del grupo que simpatiza con el programa “Entre Tres” emitido por el Canal 13 de TV Azteca. Por lo menos algún noticiario de las principales cadenas televisivas, concesionadas con señal abierta en México, ha incorporado una sección que permite al televidente jugar a que desempeña el papel de reportero o comentarista honorífico, incluso mediante el envío de fotografías o a través de foros propiciados mediante Blogs, Chat y Twitter.
- La proliferación de campañas publicitarias emprendidas por las cadenas televisivas, para promocionar los programas de opinión, indica que éstas compiten en torno a conseguir una parte del segmento de audiencia con preferencia hacia ese tipo de contenidos televisivos⁶²¹.
- Aunque vinculado al incremento de programas de opinión y la diversificación de los formatos con que se producen, un dato que revela cierta tendencia de las estrategias

⁶²¹ La producción de contenidos televisivos del género de opinión se dirige a un “nicho de mercado” representado por la demanda de contenidos temáticos especializados, que en el caso de los coloquiales de análisis y discusión política puede haber sido propiciado por las necesidades de información ante situaciones de mayor pluralismo político, en cuanto a los agentes políticos que adquieren visibilidad o bien a los que se otorga visibilidad como fuente informativa, en un contexto cada vez más diversificado por lo que hace a la distribución del poder de tomar decisiones políticas y que afectan a los ciudadanos.

con ese fin es, como ya se analizó, la inserción de una sinopsis descriptiva del contenido, dentro de la barra o menú de programación, a cuya pizarra puede accederse con la suscripción a la televisión de paga. El emisor difunde su propio mensaje acerca del contenido que difunde⁶²².

Ese hecho, además de confirmar la competencia por segmentos de audiencia más diversificados, y que exigen contenidos más especializados, revela también que la competencia es más reñida en este caso, probablemente debido a que el aumento y la diversificación de la oferta es mayor en la televisión restringida que en la de señal abierta de recepción gratuita. Aunque un dato aún más relevador es que esos hechos vayan acompañados de una proliferación de canales o señales de televisión, que ha tenido lugar en muy poco tiempo en México, apenas en el último bienio. De ello puede inferirse con validez que los contenidos de opinión han resultado rentables en términos de conseguir audiencia y mejorar la posición de las televisoras en las preferencias del público televidente. Hay un público creciente al que las televisoras ofrecen esos contenidos.

Por eso el análisis comprendió tal sinopsis, que constituyen mensajes de identificación del programa televisivo, mediante los cuales la televisora promueve con fines persuasivos la preferencia hacia este tipo de contenidos. Se trata de la manera en que las televisoras buscan que el televidente identifique el contenido que difunden.

- En este aspecto, el análisis reveló que: tanto las televisoras públicas como las televisoras privadas de cobertura local insertan este tipo de contenidos dentro del horario estelar o de mayor audiencia televisiva, lo que pudiera responder a una cierta estrategia para poder competir frente a la oferta del género de entretenimiento que difunden, en ese mismo horario, las dos grandes cadenas privadas de televisión en señal generalista. Éstas últimas difunden, en cambio, los contenidos de opinión al término de la emisión de su principal noticiario difundido en el horario estelar, en una

⁶²² Cabe señalar que esos mensajes son privativos de la difusión en televisión de señal restringida o de pago por suscripción.

sección de la programación semanal en que cada día se destina a un programa de opinión con temática o formato distinto. Por lo que se refiere a este aspecto, en el caso de TV Azteca dicha barra es denominada expresamente “Barra de Opinión”, tal como se manifiesta en los anuncios insertados al inicio de los programas de esa índole y que tienen la función de hacer énfasis en que tales contenidos forman parte de la programación que la televisora oferta al público televidente, al margen de que el televidente pueda ser informado acerca del tipo de contenido del programa. En el caso de Televisa la sección llamada de “Opinión” es promovida dentro de los contenidos del portal de Internet de la televisora (“Esmás”), mediante un anuncio que aparece invariablemente en cada emisión del programa.

- Entre otros hechos empíricos observados, en esta parte del análisis, cabe destacar la difusión de los mensajes enviados por la audiencia, a través del correo de voz, en las transmisiones del canal “Milenio Televisión”, en la frecuencia 120 del espectro de señal restringida, mismos que aparecen insertos inmediatamente después del corte publicitario de los noticiarios que difunde, tal como se pudo constatar en varias emisiones de la última semana del mes de octubre de 2009, en el contexto informativo de la discusión del paquete fiscal por parte del Congreso, que implicaba la decisión de incrementar impuestos federales. Los mensajes responden a una sección, dentro del noticiario, correspondiente a un sondeo de opinión o consulta a su audiencia, mediante la aparición de un letrero con cierta pregunta inmediatamente después de que el locutor del noticiario anuncia un corte publicitario. Aunque no forma parte del *corpus* de este estudio, por tratarse de señal restringida de televisión, se refiere el hecho porque revela una de las formas en que las televisoras intentan representar el escrutinio ciudadano sobre la actuación de los legisladores federales, distinta a las aquí consideradas y en el contexto difusivo de los noticiarios⁶²³. La

⁶²³ La relevancia deriva de que es obra de las formas subrepticias con que una televisora puede intervenir y manipular, de acuerdo a su línea editorial, la difusión de opiniones atribuidas a los ciudadanos, a partir de la selección que hace de los mensajes a difundir de entre el universo de mensajes posibles que haya recibido por parte del público que los envía.

pregunta formulada por la emisora consistió en el siguiente mensaje: / ¿Están los legisladores a la altura de los retos de México? /

En uno de los mensajes de voz transmitidos se escucha a quien dice llamarse Jorge Cepeda y ser residente de Jalisco, el siguiente mensaje:

/los legisladores no sirven para nada.../

Ahorita están en la Cámara de Diputados, luego en la de Senadores y.../

/siempre es lo mismo.../

En otro de los mensajes de voz transmitidos se escucha a quien dice llamarse María Ruiz y ser residente del Distrito Federal, el siguiente mensaje:

/ Los diputados son una vergüenza..../

/ una verdadera vergüenza.../

/ No están preparados. /

/ No tienen los valores, ni los principios para trabajar honestamente por el país /

/ ... Trabajan ... sólo trabajan por su color.... por su partido...../

/ Lamentablemente por eso México está como está /

/ Buenas tardes. Soy María Ruiz del Distrito Federal /

6.6. “Escrutinio ciudadano” en voz de actores públicos en televisión

Fue revelador para los fines de este estudio, encontrar evidencia probatoria de la hipótesis, aplicando la misma metodología, para programas del mismo tipo difundidos a un año de aquellos que fueron considerados en el *corpus* (2008). Por otro lado, se confirmó la hipótesis con el auge de la oferta de programas de opinión, desde entonces a la fecha. Además de la replicación de canales y contenidos de las televisoras privadas o concesionarias en las frecuencias de señal restringida o de paga, otra estrategia de ha sido diversificar formatos para dar pie a particularidades que puedan ser percibidas como innovaciones o productos culturales nuevos. En 2010 el gobierno federal a través del

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes produjo el programa televisivo titulado “Discutamos México” y Televisa lo transmitió a través de su canal de mayor audiencia, anunciado en su sinopsis de contenido en tanto que discusión, plural protagonizada por intelectuales, aunque por regla general consiste en un mero intercambio de opiniones. Más importante aún es que destinó la frecuencia por la que transmitía su tradicional canal 4 en el nuevo canal “Foro TV”, (transmitido a la vez a través del canal 106 del proveedor “Sky”), cuya “parrilla” de programación en horario estelar está integrada prácticamente por programas informativos y de opinión alternados; es sintomático que el titulado “Es la hora de Opinar”, conducido por un analista académico, sea transmitido por una hora diaria, en días hábiles, en horario “estelar” (franja de mayor audiencia) y promovido mediante la sinopsis cuyo texto versa /Leo Zuckerman tendrá tres mesas diarias donde analizara y debatirá los temas de la agenda nacional e internacional/. Entre otros programas que integran la oferta, llama la atención la estrategia de ese emisor en cuanto al programa titulado “Hora 21” (transmitido cada miércoles en horario estelar, cuya sinopsis dice: /Leon Krauze presentará los temas más relevantes del día desde una óptica diferente y ciudadana/.

La promoción de programas continuos de discusión de opinión, con duración de treinta minutos cada uno, en horario estelar, está basada en tres atributos según el emisor televisivo: discutir asuntos públicos, dar cabida a la expresión del pluralismo de ideas y ocuparse incluso de los medios de comunicación; en cada caso los ejemplares corresponderían a los programas “El centro del debate”, “La otra agenda”, y “Agenda Pública”, respectivamente⁶²⁴. En el caso de la otra televisora concesionaria con mayor cuota de mercado (TV Azteca), por un lado el programa más estable y a la vez rígido en su formato, “La entrevista con Sarmiento”, lo modificó a panel de discusión en ocasión de

⁶²⁴ Cuyas sinopsis son: /Elisa Alanís y analistas destacados abordarán asuntos políticos, económicos y de opinión pública más relevantes del momento/; /Ana Paola Ordorica y Enrique Acevedo presentarán ideas, proyectos e iniciativas de la sociedad en movimiento. Será foro para todas las expresiones e iniciativas de la sociedad en movimiento/; /José Carreño Carlón y Gabriela Wakentin invitarán diariamente a periodistas y especialistas que analizarán a los medios desde los medios y el impacto de la información pública/, respectivamente.

tratar el tema que fue titulado “Partidocracia” (28 de abril de 2010), transgresión que habitualmente solo se permite a sí mismo el emisor cuando promueve la labor de filantropía de las fundaciones establecidas por esa televisora. Las televisoras de propiedad estatal también han incrementado ese tipo de oferta. El canal 34 “TV Mexiquense” transmite, entre otros muchos programas de ese tipo, uno titulado “Esfera Pública” a través de señal abierta en horario estelar, cuya promoción llama la atención porque la sinopsis reza. /En esfera pública su voz sí se escucha y se atienden las demandas de la ciudadanía, además de participaciones de funcionarios de gobierno estatal y federal y de la sociedad civil organizada/, excesos retóricos indicativos de la orientación.

El mayor incremento de la oferta se ha producido en televisión transmitida en señal restringida, lo que confirma la tendencia a producir contenidos especializados según el perfil de consumo y preferencia que se advierten en las audiencias. Todos los supuestos de la hipótesis de trabajo se cumplen en este caso, aunque sólo algunos casos y sólo los aspectos relativos a la actuación discursiva de los protagonistas de los programas con la identidad discursiva de ciudadano y ejercitando discursivamente la acción de escrutinio ciudadano sobre el desempeño de agentes políticos, en particular de legisladores.

Por lo demás, la evidencia que permite verificar la hipótesis del escrutinio público mediático en televisión a través de señal generalista, se fortalece en emisiones subsecuentes de los programas aquí analizados. En la emisión del 9 de junio de 2009 del programa “Entre Tres”, con participaron de candidatos a diputados federales, uno de los protagonistas, un reconocido analista político y académico, autor de varios libros y artículos, articulista en periódicos e invitado en varios programas de radio y televisión, expresó: “Para los ciudadanos que nos están viendo”, encarando la toma de la cara, al inicio de la transmisión de ese programa. Otro dato es el cada vez más recurrente uso de la expresión misma de “escrutinio ciudadano”, entre analistas y periodistas, con esa exacta forma lexical, por ejemplo, por parte de un periodista (Pablo Hiriart) que dirigió “La Crónica” y actualmente es conductor coprotagonista (junto con Jaime Sánchez Surrarey)

del programa televisivo “En Contexto” y conductor protagonista del programa del mismo tipo “La Manzana”, y quien en la emisión de éste último difundida el 17 de noviembre de 2009, por Canal Proyecto 40 de TV Azteca, destinada a tratar el tema de la reelección legislativa, utiliza explícitamente la expresión “escrutinio ciudadano” a la que denota y connota en su discurso introductorio como práctica política democrática, para desde un punto de vista pragmático discursivo ejercitarla en la acción discursiva, con la finalidad expresa de confrontar al invitado al programa en esa emisión, un diputado entonces en funciones del PRI (Carlos Rico).

Esa expresión “escrutinio ciudadano” es utilizada, en esa misma orientación, por el analista (Jorge Islas), autor de libros y artículos periodísticos, quien en la sección destinada a opinión periodística (denominada “En la Opinión de...”) del programa informativo “Noticiero con Joaquín López Dóriga”, pronunció un mensaje utilizando el discurso argumentativo formal respecto del escrutinio ciudadano. Cabe señalar que esta sección del noticiario fue inserta en 2008 en la organización global de ese programa, el principal de la televisora privada y el más sintonizado y visto en los dos últimos años (con rating de 14,2 en noviembre de 2007 y de 17.0 en junio de 2009), en señal abierta de televisión en México. En tal sección aparece diariamente un invitado distinto, todos personajes con visibilidad pública y cierto prestigio intelectual, académico o artístico. Es significativo además, para los fines de este análisis, que se trate de un programa conducido por un periodista que a la vez participa en el programa de opinión “Tercer Grado”, conduce su propio programa noticiario radiofónico y es articulista regular en periódicos. Lo que afirma el perfil de agente multimediático que caracteriza a los protagonistas de los programas de opinión, así como la tendencia de las estrategias puestas en marcha por las televisoras para expandir su influencia en el espacio público mediático en años recientes, desde donde se puede colonizar los diversos ámbitos de la sociedad civil. Finalmente, se puede referir la emisión del 8 de septiembre de 2009 del programa “Entre 3”, difundido por TV Azteca, cuyo invitado el entonces subsecretario de gobernación del Ejecutivo federal (Jerónimo Gutiérrez), utilizó literalmente la expresión léxica “escrutinio público” para

referirse a la evaluación crítica o examen que hacen o pueden hacer los ciudadanos sobre políticas presupuestarias de gasto. En esa emisión el tema general tratado concernió a las medidas anunciadas por el Presidente para la segunda parte del sexenio, que fue convertido discursivamente en un subtema durante la interacción dialógica fue el relativo a la relación entre ciudadanos y legisladores, como representantes políticos, respecto al cual el invitado afirmó que el debate entre los poderes públicos instituidos debe ser benéfico para la ciudadanía.

6.7. Escrutinio público mediático en televisión

La mediatización de prácticas políticas tiene lugar a partir del relevo del ciudadano como protagonista de ellas, aunque a condición de que en la representación simbólica movilizada, en esa dirección en el discurso mediático, se inscriban modelizaciones discursivas de los actores mediáticos que denoten esa identidad y las acciones involucradas en la respectiva práctica a semejanza de la experiencia real en que ellas tiene lugar. En el caso del escrutinio ciudadano ese proceso comunicativo se produce en el formato televisivo de discusión de temas políticos, por parte de periodistas o analistas políticos cuando al opinar se ostenta, todos o por lo menos alguno de ellos, como ciudadano que encara y pone en entredicho a gobernantes electos, debido a su respectivo desempeño. Ese relevo es de orden simbólico y a través del mismo se apela al sentido, y éste es movilizado en la experiencia comunicativa, hacia la participación a distancia en una experiencia real en la que los telespectadores se hallan implicados y apelados como ciudadanos que delegan en otros la acción política, aquella ubicada entre las formas convencionales de participación, por la cual los ciudadanos vigilan y sancionan a los gobernantes electos a partir del propio juicio, al margen de la oportunidad de hacerlo mediante el sufragio.

Desde la aproximación aquí propuesta, la verificación de la mediatización del escrutinio ciudadano se produce como consecuencia del traslape entre, por un lado, la forma

simbólica ideológica que lo denota y, por el otro, la forma simbólica cultural con la cual es connotado, en tanto que experiencia real entonces virtualmente disponible a los telespectadores de programas de intercambio de opiniones acerca de temas políticos. La evidencia que arroja la observación del conocimiento e información de que disponen los ciudadanos, así como de la opinión que tienen con respecto a los legisladores, confirma el potencial del efecto de mediatización, y permite suponer que éste sea más significativo entre aquellos telespectadores menos informados e involucrados en la participación política, sin que de ello se siga, sin embargo, que sean la mayor parte de quienes eligen ver programas televisivos de opinión política, aspecto que en cualquier caso tendría que ser verificado por una investigación que en México aún no se ha hecho.

Puede concluirse que, en el conjunto de la difusión mediática, la televisiva tiene mayores posibilidades de movilizar el sentido señalado, de manera creativa y con menores restricciones cognitivas y discursivas, que la prensa y la radio, todavía principales fuentes de información para la mayor parte de los ciudadanos en México. Es de esperar que el efecto sea mayor entre los menos que entre los más informados e involucrados acerca de y con el acontecer y la participación política, pero las diferencias aún están por indagarse⁶²⁵. Entre los pocos estudiosos mexicanos que, desde una perspectiva sociológica, se han ocupado con profundidad de las transformaciones de la política actual como resultado de la influencia de los medios, en especial de la televisión, el investigador Trejo (2001: 83-86) llama la atención acerca del condicionamiento que ha producido en la acción de los agentes políticos el fenómeno de la reducción de la densidad del discurso político y la sustracción de la confrontación de argumentos, que son características intrínsecas al ejercicio de la política democrática; tal condicionamiento es debido, en

⁶²⁵ Las razones para oponerse a esa tesis son esgrimidas por Neuman (1986) para el contexto estadounidense, a partir del análisis comparativo entre medios de comunicación masiva. Concluye que aunque haya pluralismo de enfoques y un enriquecido ambiente político, el flujo de comunicaciones políticas y el mayor tratamiento del electorado reflejan más homogeneidad que diversidad. La expansión de los servicios informativos basados en la especialización de la fuente puede contribuir a cambiar la conducta de las élites políticas, pero con probabilidad no ocurre con los patrones habituales del ciudadano promedio. Parte de la evidencia de esta hipótesis proviene de observar que la diversidad de los contenidos que la televisión por cable pone a disposición de los hogares no consigue concitar mayor interés entre el ciudadano promedio, cuya atención es prestada principalmente a los temas de entretenimiento Neuman (1986)

parte, a que la información acerca del acontecer político es presentada a partir de reducidas frases e imágenes contundentes, un estilo de comunicación característico de los grandes conglomerados televisivos en países desarrollados, en especial en Estados Unidos, cuyo modelo ha sido adoptado por las televisoras en México⁶²⁶.

Argumenta que subyugado estructuralmente por la impronta de la brevedad, el periodismo televisivo impone la llamada “política comprimida” en segundos, tiempo que dura en promedio una nota informativa televisiva acerca, por ejemplo, de un debate parlamentario que transcurrió durante varias horas y cuya presentación aparece descontextualizada, ambos aspectos muestran el efecto de mediación actual, más drástico de lo que lo ocurría hace tres décadas cuando “el dicho” de los políticos solo era reproducido y transmitido, puesto que ahora es integrado a una narrativa dejada a cargo de imágenes, efectos sonoros y comentarios del conductor del noticiero. Si bien reconoce que en razón precisamente de la preocupación entre los conglomerados mediáticos por esa función reduccionista, han surgido otros programas televisivos que, sin dejar de simplificar el discurso político, generan espacios de discusión en donde los personajes públicos se confrontan, a veces con la mediación de informadores profesionales, en participaciones de extensión mayor, aunque siempre acotada por las necesidades comerciales de las estaciones de televisión o de radio (Trejo, 2001: 89, 90)⁶²⁷.

⁶²⁶ En Estados Unidos han cobrado auge fórmulas alternativas, tal como el caso del programa radiofónico de Rush Limbaugh, líder de opinión de las clases medias conservadoras de ese país, que aparece como un cómico politizado que busca con competencias histriónicas de ese tipo sintonizar eficazmente con el estado de ánimo de su auditorio, a través del comentario mordaz, la sátira y el morbo, y cuyo nivel de audiencia ha resultado inusitado y lo ha convertido en un fenómeno político, según refiere el autor (Trejo, 2001: 128). Cabe señalar que ese mismo tipo de formato ha sido copiado por la empresa Televisa en México para un programa de ese tipo que ha difundido, con distintos nombres y horarios (“El mañanero”, “El Noticiero con Brozo”), durante casi una década.

⁶²⁷ Como evidencia el autor refiere que en Estados Unidos, por ejemplo, las grandes cadenas de televisión tienen algún programa de discusión (“Face the Nation”, “Meet the Press”), en los cuales expertos y personajes públicos tratan de explicar variados asuntos públicos en diversos ámbitos de actividad, disponiendo de varios minutos, formato al que con esa misma finalidad se ha adaptado el noticiero más influyente entre la élite política de ese país, el programa “Mc Neil-Lebrer Report”, emitido por la cadena estadounidense *Public Broadcasting System*, en el que se presenta una docena de notas informativas seleccionadas, comentadas y analizadas durante varios minutos para tratar de ponerlas en contexto. En el caso de México, el autor refiere el programa “Nexos”, del que la televisora TV Azteca transmitió 523 programas semanales, durante una década a partir de abril de 1999 (Trejo, 2001: 90).

El predominio de los expertos en los programas de discusión y análisis, podría ser considerado como una forma de propagación entre el público amplio, de las ideas que de otra manera sólo circularían en las élites partidarias, periodísticas o académicas. Es significativo, en todo caso, el rechazo que los programas convencionales de análisis político están encontrando en ciertos segmentos de las sociedades contemporáneas (Trejo, 2011: 128).

La relevancia de los programas televisivos de opinión radica en la oferta de claves o “atajos” para la interpretación del acontecer político, ante el déficit de información relevante procesada que aqueja al público masivo, o bien para que ciudadanos implicados o más avezados actualicen el mapa de posicionamiento de los asuntos políticos, las posturas y estrategias de los actores políticos que mayor visibilidad y resonancia alcanzan. Ante la complejidad técnica de gobernar y del acontecer político, la opacidad del discurso y la confusión deliberada del actuar político, así como la saturación de mensajes informativos apenas distinguibles a partir de matices, detalles e implícitos u omisiones, los ciudadanos expuestos a televisión adquieren, de manera fácil y cómoda, claves para afirmar los esquemas de interpretación de la actividad y de evaluación del desempeño de gobernantes electos, partidos y actores sociales implicados o afectados por ellos.

Para la mayor parte de los ciudadanos, esas claves para la interpretación pueden ser elaboradas, no obstante los sesgos que derivan de la ausencia de un pluralismo ideológico efectivo, a partir de atender a los puntos de vista u opiniones de los intermediarios mediáticos que participan en ese tipo de programas televisivos, aún cuando no tenga lugar un efectivo debate o sean constriñas a la agenda mediática informativa. Los periodistas, analistas políticos y, en ocasiones, expertos en algún tema, se constituyen en intermediarios entre las élites económicas y políticas, al tiempo que entre ellas y una franja de la gran masa de ciudadanos que, sin embargo, pueden operar como monitores y escrutadores ciudadanos para otros con quienes conviven y emprenden acciones colectivas cotidianas en diversos campos de actividad e interacción social.

En un análisis centrado en la transformación de la comunicación política, a partir de la emergencia de nuevos agentes políticos, las pugnas de reconocimiento entre ellos y con

los actores políticos tradicionales, así como las estrategias mediáticas de gestión de la visibilidad que conceden a unos y otros, Sanmartín (2003: 81-109) ha llamado la atención acerca del valor de tales claves de interpretación en la medida en que, tal como antes ha hecho notar Wolf (1991) al no reducirse la política a la que protagonizan los partidos, es necesario identificar tanto nuevos agentes políticos como actores de otros ámbitos de la sociedad con o sin interlocución directa con ellos dentro y fuera de los recintos institucionales, situación que los medios de comunicación y crecientemente la televisión hacen posible.

De un lado, en el Parlamento confluye una pléyade de agentes de todos los poderes públicos y niveles de gobierno, en especial en sistemas políticos federales (alcaldes, concejales, técnicos, administradores, y sus respectivos voceros), así como otros actores de los diversos ámbitos de la sociedad, económico, social y cultural (empresarios, dirigentes sindicales, campesinos, estudiantiles, vecinales o académicos o sus voceros), de tal manera que se multiplican exponencialmente los sectores, grupos u organizaciones, agendas y protagonistas, que pueden estar implicados o involucrados en asuntos públicos que tienen potencial noticiable, desde el punto de vista de los profesionales mediáticos y para quienes, por consiguiente, tienen el valor de fuente de información y por eso los convierten en interlocutores a distancia. La televisión encuentra en esa estrategia informativa un recurso para revalorizar su propia difusión porque, a diferencia de otros medios, puede hacer aparecer la imagen de personas actuando o interactuando y hacer más vívida y atractiva la correspondiente noticia.

En el Parlamento se generan diversos interlocutores de información y los medios recurren a la entrevista o a provocar pronunciamientos no solamente de los voceros partidistas o de los legisladores en lo individual, sino de los actores sociales con los cuales éstos están involucrados en interlocuciones que tienen lugar cotidianamente en la institución y fuera de ella, o bien cuyos asuntos, a la inversa, aunque corresponda tratarlos en otros ámbitos y por otros canales (administrativo, laboral, civil, judicial), son sujetos a pronunciamiento

aunque no están siendo discutidos en el Parlamento. Los jefes editoriales, periodistas y reporteros buscan captar o provocar tales interlocuciones artificiosas para construir lo que consideran noticiable. Al margen de la información institucional, el Parlamento origina muchas otras informaciones políticas noticiables en sus pasillos que, en no pocas ocasiones, los medios de comunicación hacen aparecer como más importantes que el propio trabajo parlamentario en asamblea plenaria y en comisiones legislativas de dictamen. Los agentes concurrentes al recinto lo saben y actúan de cara a convertir en fuente de información, para tratar de enviar sus propios mensajes a públicos diversos, aún a costa de hacerlo de tal manera que puedan ser convertidos en titulares, o por lo menos en noticias publicables. Ese sistema de trabajo, tal como describe muy bien San Martín (2003: 91) resulta más ágil y menos caro que atenerse a ruedas de prensa o comunicados oficiales (boletines de prensa) de los actores políticos, aún cuando se trate de declaraciones públicas precipitadas y, por lo general, de reacciones políticas ceñidas a la brevedad e inmediatez que reclama el medio de comunicación y a la improvisación o actuación dramatizada que ésta le impone al actor político de que se trate.

Por una parte, las discusiones parlamentarias se han tornado muy técnicas, complicadas, especializadas, ante audiencias poco interesadas, informadas y ejercitadas en la reflexión y la deliberación racional y argumentada de los asuntos públicos. Por otra parte, los medios electrónicos de comunicación masiva promueven noticias paralelas, cuya dimensión no sea parlamentaria y su importancia sea menor y quizá nula para los ciudadanos. Según Sánchez Álvarez (1998: 83) ambos aspectos repercuten en perjuicio de la imagen mediática del Parlamento, puesto que ni consigue ganar espacios en la información mediática, debido a que su actividad tiene un componente rutinario, -en mi opinión hasta ritualístico-, y otro que transcurre a través de la publicidad institucional. La televisión le resulta necesaria, pero ésta informa muy deficientemente de su quehacer y desempeño, no obstante el carácter plural y polisémico de la institución, en la que coexisten y deliberan tendencias políticas diversas, no solamente entre partidos o bancadas sino al interior de ellas, entre diputados y senadores considerados

individualmente, tal como ha apuntado Huertas (1998: 56), quien destaca el hecho de al ser los periodistas y los medios quienes deciden la categoría noticiable de una información, cuando los parlamentarios actúan circunscritos a conseguir la cobertura noticiosa, dentro y fuera del recinto, se ven impelidos a hacerlo a través de la imprevisibilidad de la especulación o el llamado “trascendido”, la fabricación de disputas artificiales y la confrontación cifrada en situaciones no ordinarias, que conducen a la especulación y al escándalo o bien a lo anecdótico y frívolo.

De ese modo, los profesionales de la información pueden justificar su papel como gestores de las claves de identificación y procesamiento de descripciones de sucesos y declaraciones, a partir de ofrecer las referencias básicas que permitan al ciudadano promedio identificar a los protagonistas, su ámbito de procedencia y las acciones y expresiones, aunque desde luego siempre desde el punto de vista de aquellos que, desde la perspectiva y el enfoque de sus intereses institucionales y personales, consideran que es “noticiable” o debe darse a conocer.

Visto el fenómeno del escrutinio público mediático, simultáneamente, desde el enfoque de agencia humana, es claro también que los ciudadanos, en ausencia de incentivos para participar, en términos del beneficio y los costos implicados, por el cauce político institucional, pueden transitar por el cauce cultural de la comunicación política mediatizada, desde el ámbito privado y de la intimidad hacia el ámbito público de la accesibilidad y propiedad en común de opinión política, que por la escala de circulación e intercambio que aquella hace posible, reduce significativamente los costos implicados en la apropiación, consiguiendo un beneficio semejante al de la acción colectiva del escrutinio ciudadano, al cual bien pueden acogerse si consideran que la visibilidad de la crítica en televisión a los gobernantes electos tiene más efectivo impacto en ellos y, por eso, les releva de la responsabilidad de involucrarse en ejercicios de escrutinio ciudadano. La intermediación mediática acorta distancia entre el legislador que, en los hechos, nunca será encarado mediante la experiencia personal y la mayor de los ciudadanos que, no

obstante ese hecho, pueden considerar ejercitados sus derechos políticos, en la experiencia pasiva de ciudadanos telespectadores atentos al desempeño de los gobernantes electos y a la opinión publicitada sobre el mismo.

El artificio del escrutinio público mediático no es inocuo, pero antes que considerar su alcance, en términos cuantitativos, debido a las consecuencias que comporta para la socialización política, en tanto que pauta cultural simbólica que se instala en el imaginario político, a partir de los procesos de mediatización extendida, para orientar la práctica y la participación democrática en un contexto social caracterizado por acentuadas asimetrías en el ejercicio de los derechos políticos. Las coordenadas de tales asimetrías están fijadas, en este caso, entre quienes, por un lado, disponen de información relevante y/o poder de influencia para opinar y criticar públicamente y quienes, del otro, permanecen inhabilitados para influir en el desempeño de los gobernantes electos, en la periferia marginal del mapa de influencia política, o bien supeditados a mecanismos corporativos o fórmulas de transacción clientelar para acceder a alguna participación política efectiva.

Para quienes terminan ateniéndose a la experiencia televisiva del escrutinio público mediático puede ser que ya no les resulte ajena la práctica del escrutinio ciudadano, que en ese circuito de publicidad aparece expropiada y despojada de su genuino y real sentido democrático. El principal aspecto que está en juego es que la sustitución de la experiencia real por su representación simbólica, se convierta en uno de los principales referentes de la práctica política democrática, al alcance de cada vez más ciudadanos.

En esa medida, ese hecho podría contribuir a acentuar la desconfianza, primordialmente, en los legisladores federales en México en el largo plazo, quienes están sujetos permanentemente a una evaluación mediatizada de su desempeño, originada en el sesgo intrínseco de cualquier opinión particular cuya pretensión de validez se asienta en la escala de su publicitación y acceso, así como en la apariencia (presentarse como y ser percibida como) de opinión compartida por muchos ciudadanos; respecto de la cual los

legisladores difícilmente o solo eventualmente podrán interpelar y contrastar. El consenso que circula mediáticamente no equivale al consenso social, que solamente resulta del ejercicio de una ciudadanía “activa” en la participación política dirigida a la discusión pública, libre, plural y socialmente incluyente, entre ciudadanos, respecto de los asuntos colectivos que les conciernen, aunque les afecten de modo diferente.

Mediante el escrutinio público mediático que instalan en conjunto, los medios de comunicación masiva, en especial la televisión, encuentran en la política legislativa un campo más proclive que otros, para que la producción de sentido se vea afectada a partir de un repertorio de símbolos que sustituyen las experiencias asociadas a las prácticas políticas democráticas, en particular la única acción colectiva en poder de los ciudadanos que, al margen de la visibilidad pública mediática y de los periodos de elecciones, pueden utilizar a su favor para traer a cuentas a quienes son responsables ante ellos de las decisiones colectivas.

El principal límite al efecto sustitutivo de experiencia personal por virtualidad mediática, que a la vez minimiza su principal riesgo, reside en la experiencia personal que tiene lugar en la interacción con otros. Sin embargo ese límite está definido en las coordenadas de producción de sentido que se establecen en los procesos de “mediatización extensiva”, es decir por la interacción discursiva cotidiana a partir o en torno de contenidos mediáticos, con participación de quienes han estado expuestos algunos de ellos, en grupos de convivencia, y eventualmente de asociación, inmediata y cotidiana.

Mientras el principio de máxima publicidad posible opera en el caso de los agentes políticos, como regla y condición para hacer legítima su actuación pública, la participación política ciudadana no necesariamente está sujeta a ese principio. Una consecuencia de ello es que dicha participación tienda a tener lugar de manera fragmentada, dispersa y hasta difusa; lo que, como se ha visto, es una de las razones que ha llevado, desde cierta

perspectiva politológica, a considerar las formas de participación no convencionales, aunque con un enfoque insuficiente al margen de la mediatización de la política.

Los medios de comunicación masiva se erigen en el principal cauce de publicidad de la opinión política, en el cual puede tener cabida la representación simbólica del escrutinio ciudadano respecto al desempeño de los gobernantes electos. La verificación de la prueba de la hipótesis arrojó, entre otros, el hallazgo de que la evaluación crítica de los agentes políticos es una actuación discursiva constante en la difusión mediática de opinión política, con independencia del tópico tratado, es decir en términos analíticos de la macro-estructura textual, y del formato de la interacción discursiva (sea una entrevista, un panel de análisis o un comentario) en que se inscriba dicha opinión y aun cuando no sea motivada por un interés ciudadano y responda a intereses particulares (lo que podría llamarse “cabildeo mediático”); esto último constituye un aspecto distinto en el análisis y se relaciona con las estrategias de los agentes mediáticos, incluidos entre ellos los emisores de opinión que, a partir de su actuación discursiva, contribuyen a que lo actuado y expresado pueda ser interpretado como una efectiva concurrencia o confrontación de puntos de vista originados o referidos a los que “virtualmente” tienen los ciudadanos.

Si la opinión política difundida a través de los medios transcurre bajo la forma simbólica de escrutinio ciudadano, cuya construcción discursiva puede ocurrir en mayor medida, vale decir con mayor grado de iconicidad, en la televisión que en la radio y la prensa, entonces los agentes políticos tienen menor margen para controlar la responsabilidad pública que les pueda ser imputada, incluso a través de juicios con escasa veracidad, con amplios sesgos de todo tipo y dirigidos incluso a infligir daño en la reputación moral, con independencia del partido político o el nivel gobierno con el que se les pueda identificar. Allí se halla una de las fuentes primarias del deterioro de la confianza ciudadana en los agentes políticos en general, así como uno de los principales incentivos para adoptar una actitud apática hacia la política representativa.

Conclusiones

En México, en el curso de la democratización, como resultado de la distribución del poder político, a partir de que se consiguió, tras sucesivas reformas electorales, que el pluralismo político repercuta efectivamente en la composición partidista del Congreso, los patrones que sigue la disputa política se han modificado en todos los niveles y ramas de gobierno⁶²⁸, en un contexto de mayor heterogeneidad social y cultural. Entre otras consecuencias, el Congreso federal ejerce un efectivo contrapeso en las decisiones colectivas y su función de vigilancia, centrada en el poder Ejecutivo, dejó de transcurrir como un mero trámite o simulación. Los legisladores federales pasaron a ser un actor relevante en el funcionamiento del gobierno, las pugnas entre partidos tienen alcance en la deliberación y las coaliciones son imprescindibles para conseguir que un asunto sea discutido y decidido. La cohesión y disciplina partidistas se tornan recursos estratégicos más valiosos, pero menos controlables por las cúpulas y más dependientes de la relación de los legisladores federales con los ejecutivos locales, así como de los clivajes electorales que a partir de ella se pueden desarrollar y cultivar, no obstante los decrecientes niveles de militancia partidista y participación electoral⁶²⁹.

Con la primera alternancia partidista en la Presidencia de la República, los ciudadanos debieron aprender y asimilar la parálisis legislativa como un evento frecuente⁶³⁰, debido a inefectivas o dilatadas negociaciones políticas de alguna coalición posible, así como la frecuencia de episodios de denuncia de corrupción y escándalos políticos, la intensidad de la belicosidad y el denuedo entre adversarios, rasgos que se explican todos ellos por la creciente supeditación del desempeño de los grupos parlamentarios a la respectiva estrategia partidista electoral, es decir al cálculo del costo-beneficio

⁶²⁸ No puede pasar inadvertido el hecho de que al dejar de detentar la Presidencia y, por tanto, la capacidad de designación de funcionarios en toda la administración pública federal, el proceso decisorio y el arbitraje de las disputas internas de poder dentro del PRI pasaron, en buen parte, a depender de los gobernadores emanados de ese partido, que además siguió siendo la fuerza política y electoral predominante (gubernaturas, congresos estatales y ayuntamientos municipales) en el nivel local de gobierno y ha venido cobrando un repunte electoral con cada elección.

⁶²⁹ En términos relativos, es decir en proporción al crecimiento del padrón de electores registrados.

⁶³⁰ Condición intrínseca al pluralismo polarizado e indicador de que los contrapesos entre poderes públicos representativos funcionan, aunque en el imaginario político aparece como indeseable.

implicado en mantener, atraer o perder electores en cada plaza de gobierno detentada o por disputar⁶³¹. En México, cada año hay alguna elección en alguna parte.

En ese contexto, durante ese proceso de aprendizaje político, los partidos políticos han visto declinar, tanto su papel de organizaciones intermediarias, entre sociedad y gobierno, orientadas a conciliar y articular intereses y demandas, crecientemente diversificadas, así como servir de cauce del debate público, de la crítica informada y, en su caso, del disenso de los ciudadanos, respecto al funcionamiento de las instituciones gubernamentales y el desempeño de los gobernantes electos. Se trata de una declinación y un deterioro de la función de mediación política que ellos ejercen. La democratización electoral se ha traducido en cierta democratización de la representación política, pero ésta tiene débil credibilidad desde el punto de vista de los ciudadanos⁶³², lo cual repercute en su participación en el escrutinio público de los gobernantes electos. Las consecuencias de este fenómeno son heterogéneas y establecer las diferencias entre segmentos de ciudadanos y regiones del país representa un reto a la investigación por venir.

Aquí se ha argumentado que esos procesos y fenómenos relacionados no se entienden al margen de la creciente mediatización de la política mexicana, que este proceso transcurre imbricado con aquellos y sus consecuencias no son de orden marginal como algunos suponen; asimismo, que entre otras manifestaciones y efectos que resultan de la mediación cultural que, en conjunto, ejercen los medios de comunicación masiva, la mediatización ha alcanzado a ciertas prácticas democráticas, tal como es el caso del escrutinio ciudadano, mediante la extensión del escrutinio público mediático hacia la televisión y focalizado en los legisladores. Entre los gobernantes electos, en ellos se confía menos, en televisión es menos frecuente que se les brinde oportunidad de réplica y por tanto son más susceptibles de crítica en la opinión que ella circula.

⁶³¹ No debe sorprender, por eso, que después de las elecciones intermedias de 2009, las coaliciones electorales tenga una composición partidista inédita, en términos de ideario, ubicación, trayectoria y desempeño político, con una tendencia general de desplazamiento desde posturas extremas hacia moderadas en el convencional espectro de fuerzas políticas, mismo que ya no es un indicador plausible para evaluar su desempeño y, menos aún, para el análisis.

⁶³² Cuando las coaliciones legislativas se supeditan a ese objetivo se corre el riesgo de que los ciudadanos parezca que se anteponen los intereses partidistas a las demandas ciudadanas.

A partir de la elaboración del concepto, este estudio pone de relieve el papel del escrutinio ciudadano, en tanto que forma de participación y acción política colectiva cuya práctica transcurre cotidianamente, con independencia de la protesta pública, a la que no puede ser asimilada aunque la informe, así como del cauce representado por los partidos políticos y el Congreso. Se han ofrecido razones por las cuales su ejercicio constituye la única vía, a la vez que el principal recurso, que los ciudadanos pueden disponer para hacer efectiva cierta vigilancia del gobierno en funciones, sin tener que supeditarse a la rendición de cuentas a cargo de los gobernantes electos; junto con el ejercicio del derecho a acceder a la información pública gubernamental, ambas prácticas contribuyen al deslinde de responsabilidad política, de lo que depende, en parte, la consecución de credibilidad y legitimidad política⁶³³. No obstante el alcance del escrutinio ciudadano requiere de conseguir cierta publicidad, es decir transcurrir en el ámbito público de la sociedad civil, en el que puede verse liberado de restricciones que impone la mediación política y alcanzar entonces mayor efectividad su cometido. Eso llevó a considerar las restricciones y el alcance de dicha práctica, en el contexto de regímenes en que ha arraigado la democracia liberal, en la medida en que en ellos afirman constitucionalmente libertades de expresión y asociación.

Aquí se argumentó que, en tanto que tendencia general, debido al bajo nivel de involucramiento e interés político, y por tanto del ejercicio de escrutinio ciudadano, y a la vez la alta dependencia respecto de la comunicación y difusión mediática, para enterarse de la actividad política gubernamental, la mayor parte de los ciudadanos queda a expensas de la información y la opinión que circula en medios de comunicación masiva, y un segmento significativo de ellos se torna más receptivo, y con el tiempo es de esperar que más dependiente, del escrutinio público mediático, no obstante que los avances en materia de transparencia gubernamental y rendición de cuentas pongan a disposición de los ciudadanos información relevante para evaluar el

⁶³³ Aquí entendida, en sentido estricto, como el consentimiento otorgado por la mayoría de los ciudadanos respecto a la idoneidad de las instituciones gubernamentales instauradas, del que depende que obedezcan las normas y se sometan voluntariamente a la autoridad establecida; puede revisarse la noción en Gil (2002) y Del Águila (1997) y las distintas perspectivas teóricas de su tratamiento como problema, en Huntington (1996), Bobbio (1992), Held (2001) y Sartori (2008^a, 2008^b).

desempeño de las instituciones y los gobernantes electos. Un comportamiento también por indagar sistemáticamente.

Se demostró de qué manera tiene lugar el escrutinio público mediático de legisladores en el caso de la televisión, la dimensión de cuyo impacto puede ser ponderada a partir de confrontar el número de audiencia a programas de opinión con respecto al número de militantes registrados por los partidos políticos, descontando quienes solamente consumen programas informativos por ese mismo medio de comunicación. Al no estar longitudinalmente medido el consumo, la evidencia es hasta ahora endeble. El efecto mínimo que es de esperar, en ese sentido, no concierne solamente a quienes se ven expuestos al escrutinio público mediático, sino a quienes además conversan y discuten en sus respectivos grupos sociales en la vida cotidiana, acerca de lo visto y oído en televisión acerca de “política”. No hay investigación empírica que permita probar el alcance del fenómeno de “reelaboración discursiva”, y en general de qué manera es apropiada y utilizada por los ciudadanos la información y la opinión que hacen circular los medios, en términos de la formación de opinión colectiva y en los lapsos entre campañas electorales, tanto federales como locales.

El ejercicio del escrutinio ciudadano en los cauces y ámbito de la sociedad civil organizada, también depende del interés e involucramiento políticos, además del acceso a otros medios de información y comunicación, tal como es el caso de las asociaciones civiles y movimientos sociales y del Internet⁶³⁴; si bien en tanto que no sea probado lo contrario, es plausible mantener la hipótesis de que la sofisticación política se produce entre enterados e involucrados en ella. Tal como indica la evidencia disponible, la mayor parte de los ciudadanos se muestra desafecto hacia la política, inconforme con sus resultados⁶³⁵, escéptico en cuanto a las expectativas y desconfía

⁶³⁴ En México apenas recientemente se indaga acerca los patrones de comportamiento de los diferentes estratos sociales de ciudadanos, respecto al fenómeno de “reelaboración discursiva” a partir de la exposición de los medios, discriminando el valor del fenómeno de “mediatización extensiva”, para arrojar evidencia que permita diferenciar los efectos de influencia en la conformación de la opinión política, de tal manera que pueda encontrarse las diferencias entre bajo y alto nivel de involucramiento.

⁶³⁵ La democratización electoral generó expectativas entre la población que fueron desmedidas en cuanto al funcionamiento eficiente del gobierno, pero no a la inversa, lo que se explica porque se exige a la democracia lo que no puede hacer: corregir las inequidades que resultan del funcionamiento del mercado y las disparidades regionales, resultado histórico de un proceso de desarrollo centralizado.

que los legisladores federales les representen adecuadamente, más que de cualquier otro gobernante electo⁶³⁶, a la vez que paradójicamente reconocen la relevancia de los principios y valores democráticos, la necesidad de un Congreso que haga contrapeso al Presidente y la pertinencia de las coaliciones partidistas legislativas; más importante aún es que consideran que emprenderían alguna acción en caso de que sus derechos fueran conculcados, que la mayor parte de aquellos que lo han hecho creen que una autoridad ejecutiva es más efectiva, por encima de los legisladores, para hacerse cargo de las acciones conducentes, y que si fuera necesario no descartarían recurrir a los medios de comunicación, que gozan todos ellos de mucha mayor credibilidad que los gobernantes electos y, entre ellos, más aún que los legisladores federales. Se ha puesto de relieve, asimismo, que la mayor parte de los ciudadanos se enteran acerca de la actividad política y de lo que hacen los legisladores a través de la televisión; utilizan en segundo término la radio, que es vista como un cauce de quejas, y solamente los más informados e involucrados leen periódicos.

En ese marco y a partir de esa evidencia, se explicaron, en suma, las razones por las cuales la mediatización del escrutinio ciudadano conduce al escrutinio público mediático. Éste es posible porque ante la fragmentación y descentralización del poder político, así como una laxa regulación jurídica del sistema de comunicación mediática, los medios electrónicos han encontrado rentable ampliar los márgenes de autonomía y procurar mayor credibilidad, lo que les permite confrontar con menor responsabilidad pública a gobiernos y partidos y, de ese modo, someterlos a crítica y confrontarlos respecto de ciertos grupos de interés, los cuales encuentran en la opinión política que hacen circular la radio y la televisión un cauce adicional para el cabildeo, a partir de la eficacia que deriva de la corriente de opinión que se hace concurrir y que entonces alcanza una promoción y visibilidad mayor que otras corrientes⁶³⁷.

⁶³⁶ Al no anteponer las demandas ciudadanas a los respectivos intereses partidistas, desconfianza que es aún mayor hacia diputados federales que hacia senadores, aunque ambos sean evaluados de modo más desfavorable que gobernadores, presidentes municipales, Jefe de Gobierno del DF y legisladores locales.

⁶³⁷ En condiciones de cuasi monopolio y sin prácticamente restricciones en cuanto a los contenidos difundidos o transmitidos, la interacción comunicativa en la esfera pública política queda a expensas del control de quienes disponen de poder para actuar en las instituciones mediáticas o de cara a ellas y, por tanto, para negociar la selección y orientación de la información, opinión y propaganda que circula; ese poder está determinado por la inserción en la estructura de poder político y económico y por las alianzas o disputas entre quienes lo detentan en cierto contexto social e histórico.

El escrutinio público mediático tiene efectos en proporción directa a la opacidad de las negociaciones entre partidos en el Congreso federal. A mayor predominio de ésta, mayor repercusión tiene aquél, porque da lugar a la circulación de opinión centrada en especulaciones; ellas se convierten en el foco de la difusión mediática y en un tema en sí mismo en programas televisivos y radiofónicos de opinión política, además de en columnas periodísticas. Por eso mientras predomine una predisposición entre los legisladores y partidos hacia publicitar la confrontación y, al mismo tiempo, mantener con opacidad las negociaciones, su desempeño será evaluado desfavorablemente, en términos de exigencias de eficiencia y transparencia; en la medida en que se desconozca qué ha sido negociado con motivo de un cierto asunto, se impone justificar ante la opinión pública la propia postura, del legislador y del partido, y deslindar la responsabilidad respectiva ante los acuerdos tomados o en su caso la falta de ellos.

La evidencia en este caso está dada por el hecho de que el partido desarrolle una estrategia específica de comunicación, por ejemplo inserciones propagandísticas impresas, conferencias de prensa, entrevistas concertadas, o bien provocar que la atención de la cobertura mediática desplace el foco de atención en algún suceso, declaración estridente o ataque a adversarios políticos, incluso un escándalo. Eso no asegura que tales fines sean conseguidos, sin embargo es claro que exige de partidos y legisladores estrategias de comunicación más eficaces, en términos de penetración en audiencias fragmentadas, selectivas y conformadas al estilo discursivo mediático.

Otra evidencia corresponde a la discusión interna en cada grupo parlamentario, en el transcurso de las negociaciones con motivo de la discusión de un asunto, cuando algunos legisladores reconocen y señalan algún efecto desfavorable acerca de la manera en que la opinión pública predominante evalúa su propio desempeño y/o el de su partido, así como el grado en que consideran que tal efecto puede afectar la postura que adopta su propio partido y el sentido en que pueda decidir el Congreso, respecto de los asuntos legislativos considerados, no obstante esas discusiones suelen producirse y ser conducidas con privacidad o secrecía, por lo que permanecen veladas y solamente pueden ser observadas mediante una fuente de información indirecta.

Sometidos a ese tipo de escrutinio, los legisladores federales están conscientes del fenómeno, con independencia del partido al que pertenecen, y se ocupan del mismo, cuyo monitoreo y estrategias de reacción encargan a profesionales, de cuyos servicios se sirven todos los partidos en el Congreso, si bien aquellos atienden en mayor medida al escrutinio mediático de cobertura y alcance local, a través de medios de comunicación de cobertura regional, y predominantemente ante campañas electorales locales; de manera que antes las repercusiones que pueda tener, la difusión de escrutinio mediático de cobertura nacional, en la imagen pública de su respectivo partido en el Congreso, al legislador le merece intervenir en la medida en que afecte a su respectiva circunscripción o bases sociales de apoyo electoral⁶³⁸; el interés e involucramiento depende además de la visibilidad mediática del legislador en lo particular, así como de los recursos de que disponga para conseguir intervenir, lo que en cualquier caso dependerá de si es seleccionado o bien respaldado por su partido para desempeñar alguna tarea de comunicación mediática (tal como participar en alguna entrevista o algún debate), lo que tradicionalmente es reservado para los más experimentados y adiestrados, o bien que ocupan cargos directivos en el partido o en los órganos de la Cámara. El legislador federal es fuente de información privilegiada; la permanente vigilancia sobre funcionarios designados coloca aquella en sus manos y, en consecuencia, puede disponer de ella para debatir y de cara a los medios.

Por consiguiente, puede concluirse que los legisladores federales están crecientemente expuestos al escrutinio mediático televisivo, pero no quedan a expensas del mismo, aunque éste represente la amenaza más efectiva a su respectiva trayectoria y carrera política, por lo cual se comportan con extrema cautela frente a la ubicua e impredecible vigilancia de aquél, ante la imposibilidad de controlar la réplica.

⁶³⁸ La manera en que los legisladores entienden y asumen el escrutinio público mediático incide en su actuación, en especial cuando se trata de negociar acuerdos, en condiciones de polarización de posturas, ante asuntos públicos polémicos y situaciones de débil cohesión en torno a la postura partidista. En general, aquellos legisladores cuya trayectoria depende en mayor medida de mantener la adhesión de cierta base electoral, que de prestar tareas específicas al partido, se ven más sometidos por la disyuntiva de alinearse a la postura del partido o responder a las demandas de aquella base electorado, cuando la primera no se corresponde con las segundas; por eso se discute al interior del grupo parlamentario y aunque se imponga la postura partidista, se tuvo ocasión para persuadir a alguna minoría del grupo o bien alertar que será de esperar que se genere inconformidad en la circunscripción de que se trate.

Ahora bien, haciendo abstracción de las diferencias entre partidos políticos, mismas que no alcanzan a ser sino matices y expuestos en este estudio, es claro que se han transformado las relaciones entre ellos y los medios de comunicación, en especial en cuanto a su actuación en el Congreso federal, de cara al escrutinio mediático de que son objeto, que no pueden evitar y que tampoco procuran controlar. El cambio principal concierne a la adecuación de las reglas y del arbitraje de campañas electorales, en lo que corresponde a la propaganda electoral, tal como se explicó al analizar las posturas hacia, por un lado, el acceso a la información pública, la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas y, de otro lado, hacia la regulación jurídica del régimen de radio y televisión y de las telecomunicaciones, en un contexto en que ha resultado ineludible acometer la regulación de la integración en la prestación de servicios y situaciones de dominancia de mercado, por la convergencia digital y las presiones de los corporativos privados implicados.

Si el escrutinio público mediático se extiende durante la transición democrática es porque ésta ha ido, a la vez, acompañada del proceso de liberación económica iniciado en la década de los años noventa, sin que ambos procesos hayan traído aparejados el consenso partidista suficiente para que el gobierno proceda a reestructurar el sistema mediático⁶³⁹, en términos de abrir a la competencia el sector televisivo de propiedad privada y orientado mercantilmente y, a la vez, proponerse hacer más competitivo el sector de propiedad estatal, que ha quedado rezagado y a expensas de los gobiernos locales, así como generar condiciones para que la radio y televisión de orientación comunitaria constituyan una opción efectiva en el mercado de consumo cultural. La última reforma legal que afectó al sistema televisivo, provino de los partidos y para

⁶³⁹ Se ha visto que con la alternancia en la Presidencia se ha llevado más lejos la desregulación, con el primer gobierno se liberó de las cargas fiscales a las televisoras, se impidió la competencia por la vía de diversificar las concesiones, con la reconversión digital, el gobierno actual no ha dudado en proteger al duopolio televisivo comercial en su penetración al sector de servicios de telecomunicaciones, en tanto que aquel ha conseguido imponerse al órgano gubernamental que regula su actividad y operación, en esas condiciones se ha favorecido que las televisoras puedan promover intereses de grupo con mayor eficacia; una tendencia distinta a lo que ocurre en otros países que han inducido la competencia, por ejemplo, en Estados Unidos hay seis en lugar de las tres cadenas hasta hace poco existentes, en Francia y Reino Unido se ha autorizado cadenas independientes a las estatales, incluso con participación de capital privado, en Brasil y Venezuela se ha alentado la competencia local.

prevenir la discrecionalidad para contratar propaganda electoral, cuando la segunda elección presidencial, tras la alternancia partidista, devino en conflicto.

Aunque con esta reforma se buscó corregir la utilización de propaganda de los gobiernos en funciones en beneficio de sus titulares, por la vía de restringir el periodo de su difusión, no se ha reglamentado en la materia y habría que hacer cumplir la ley. Si bien la regulación se ocupa de las encuestas electorales deja abierta la utilización indiscriminada de sondeos de opinión, que en manos de los medios de comunicación son un recurso estratégico que les permite manipular, tanto la evaluación que pueden hacer los ciudadanos como la publicidad de ciertas corrientes de opinión en detrimento de otras. La televisión ha pasado a ser el canal más eficaz para su circulación con ese propósito. Con la instalación del mercado de encuestas, se ha instalado el mercado de la opinión, de flujo vertical, al alcance del público más amplio, aquel sin acceso al restringido mercado, de flujo horizontal entre élites, representado por la prensa; habrá que indagar lo que sucede en el caso del canal de Internet.

Si los resultados de las elecciones ya cuentan y la función del Congreso tiene consecuencias, cabría preguntarse si los medios de comunicación, en especial la televisión, contribuyen a la discusión pública y al ejercicio de la identidad ciudadana, por la vía de poner al alcance de la mayoría de ciudadanos información relevante y opinión plural, al evaluar el desempeño de los gobernantes electos. Entre éstos y la televisión se ha intensificado la recíproca dependencia, en términos de información, visibilidad y credibilidad públicas. Aunque solamente en manos de los legisladores está la facultad de modificar el régimen de medios de comunicación⁶⁴⁰, éstos son más eficaces para disputar credibilidad y deteriorar la de legisladores, partidos y gobiernos. Durante la transición política, la televisión pasó a disputar a los partidos el cauce para canalizar la discusión, la opinión y la crítica de asuntos que no se originan en la agenda de partidos y del Congreso, dispuestos como productos culturales multimedia de modo que sirvan a la colonización de un espacio público crecientemente fragmentado.

⁶⁴⁰ La pérdida de capacidad de operación y de persuasión política de los agentes políticos deriva del hecho de que la actuación en el ámbito mediático se ve constreñida y supeditada por códigos, recursos y oportunidades que no dependen de ellos; solamente desde el gobierno pueden ser modificados, aunque eso supone pagar necesariamente un costo simbólico alto, en términos de legitimidad.

En consecuencia, tampoco es previsible que el escrutinio público mediático sea regulado, por lo menos en el mediano plazo, porque en cualquier decisión al respecto está implicado un alto costo político y social para los partidos y gobiernos en turno⁶⁴¹. Tal como se mostró, aquél está asentado y arraigado en la tradición ideológica de la democracia liberal⁶⁴², por la cual imponer restricciones a la libre difusión de contenidos de cualquier tipo⁶⁴³, significaría atentar contra libertades esenciales o bien representaría coartar la vigilancia respecto al gobierno, lo que vale en tanto que el Estado no sea capaz de imponer, mediante procedimientos democráticos, la definición del sentido de servicio público al intercambio y circulación de contenidos culturales⁶⁴⁴.

⁶⁴¹ Las restricciones que el sistema político puede imponer al sistema mediático, a través de la legislación que regule su funcionamiento, tiene diversos alcances y repercusiones en la consecución de sus fines económicos y culturales, por ejemplo imponer requisitos adicionales para otorgar y revocar concesiones, limitar la publicidad mercantil que puede ser difundida, obligar a mayor tiempo de difusión de contenidos educativos o de divulgación de conocimiento, asegurar el acceso a ejercer la réplica a los aludidos en la difusión, y de ellas depende, por consiguiente, los recursos y procedimientos de que se pueden valer los operadores mediáticos para luchar en pos de sus fines, por ejemplo estrategias de coinversión y alianza económica, operación centralizada o descentralizada, privilegiar la importación o la producción de contenidos, prestar nuevos servicios por sí o de manera asociada, innovar o reciclar contenidos, ampliar y diversificar o no el acceso de agentes políticos, económicos o sociales para expresar opiniones y discutir asuntos de interés público común.

⁶⁴² Conforme a tal ideario y normas, los ciudadanos disponen del derecho para acceder, sin discriminación, a la información pública gubernamental y, a la vez, de la libertad de expresar, de modo irrestricto, sus opiniones sobre los asuntos públicos y de gobierno; los márgenes de actuación que los medios de comunicación disponen dependen, en parte, del alcance de la regulación del Estado respecto a tales derechos; al quedar incorporados como garantías individuales en la norma jurídica fundamental, los medios pueden actuar como agencias públicas y privadas de la propagación de información y opinión, de lo que deriva su papel intermediario en cuanto a la producción y circulación de información, opinión y propaganda política, entre gobernantes, ciudadanos y partidos políticos; éstos últimos son instituciones públicas cuyo objeto es asegurar el acceso de los ciudadanos a los cargos de gobierno, la organización de las demandas ciudadanas y de los diversos grupos de la sociedad, producir ofertas programáticas de gobierno (leyes y políticas públicas), organizar la acción política colectiva y canalizar la demanda social y ciudadana hacia las instituciones gubernamentales.

⁶⁴³ Una de esas restricciones concierne a que los fines de los operadores de comunicación mediática queden supeditados a lo que el sistema político imponga, en un momento dado, como interés público, si bien no podría hacerlo de manera unilateral, al menos no todo el tiempo, sin que el sistema económico y mediático intervengan con su propia lógica y a partir de sus propios procesos de funcionamiento, de los cuales depende en parte que el interés público pueda ser reconocido societariamente como válido, puesto que el sistema político no puede garantizar por sí que todos los intereses del sistema societario puedan ser considerados al momento en que sea definido el interés público.

⁶⁴⁴ En la democracia, la constitución de la voluntad general está condicionada a considerar y discutir los intereses que cualquier ciudadano, asociación o grupo privado o colectivo exponga y haga valer incluso más allá del proceso electoral, las consultas populares o el cabildeo; pero para hacerse reconocible no solamente por el sistema político, toda corriente de opinión auspiciada en los ámbitos económico y cultural requiere del sistema mediático, a condición de concernir al interés colectivo; esa restricción es superada por los agentes económicos y privados recurriendo a los procedimientos políticos para imponer una ley general, tal como el cabildeo de grupos de interés y la incidencia en la opinión publicada; pero el primero delimita una zona oculta para el resto de la sociedad; el imperativo de hacer visible su ejercicio solamente concierne al poder político; en cambio, el poder económico puede actuar en la secrecía, derecho que aquel no puede pretender modificar.

La expansión del escrutinio público mediático en televisión se produce a partir de la alternancia en la Presidencia, cobra auge en la transmisión de señal abierta con el conflicto electoral en 2006 y es instalado en tanto que producto cultural especializado para cierta audiencia del mercado de consumo representado por la señal restringida. De las orientaciones de su desarrollo y las consecuencias de su utilización da cuenta, tal como muestra la evidencia, el cabildeo y la presión que el poder mediático puede empeñar y desplegar, tanto al promover legislación que favorezca a los intereses de sus agentes y corporativos privados tal como ocurrió con la reforma al régimen de radio y televisión en 2005, así como para utilizar impunemente su propia difusión al actuar en tanto que grupo privado, cuando sus intereses económicos son puestos en juego, y movilizar ciertos sectores de la sociedad civil para encarar abiertamente la legislación promovida por los partidos políticos, tal como ocurrió ante la reforma electoral de 2007, misma que prohibió la contratación directa de propaganda en radio y televisión por parte de partidos y cualesquier organización civil o ciudadana.

No debe perderse de vista las reformas al sistema mediático, impulsadas por los partidos políticos, han tenido lugar en México hasta ahora como consecuencia de algún conflicto electoral, así como que el Presidente en turno ha autorizado y renovado concesiones y cambios a la reglamentación al final del periodo de mandato. No es exagerado afirmar que la expansión del escrutinio público mediático representa, en ese sentido, una sublevación progresiva del sistema mediático frente a cualquier intento de control por parte del poder político, tendencia que ha sido favorecida por la carencia de sentido de responsabilidad pública en la radiodifusión concesionada a particulares con fines mercantiles, en un contexto sociocultural en el cual la televisión de señal abierta sigue siendo uno de los principales agentes de socialización política.

A partir del análisis y la evidencia que arroja este estudio, pueden preverse dos tipos de consecuencias en cuanto al proceso de “mediatización” de la práctica de escrutinio ciudadano. Por una parte, ese proceso abre cauce para reorientar la percepción del disenso político, entre por lo menos el segmento de población que más se expone o depende de la información y opinión difundida por los medios masivos.

La crítica que se ofrece en periódicos, radio y televisión es la más visible y resonante y, en parte por eso, puede aparecer como la más atendible o incluso la única accesible al ciudadano promedio; más aún aquella que se produce y circula a través de los programas televisivos de opinión, un cauce que amplía el potencial mediático para la reorientación de la opinión política en la esfera pública.

Por otra parte, ese proceso acota y restringe el pluralismo de puntos de vista que tienen acceso a la esfera pública mediática y, a la vez, de los marcos de interpretación del examen y la discusión de los asuntos públicos relevantes, las actuaciones políticas y los agentes que las protagonizan, por lo que se refiere a decisiones que afectan a todos los ciudadanos. La producción simbólica respecto de prácticas políticas democráticas tiene lugar, de manera simultánea, cotidiana y a través de rituales, tanto en el ámbito televisivo como en el ámbito del Congreso⁶⁴⁵.

Algo que tienen en común es la acción estratégica de sus actores, que da vigencia al código que orienta la conducta en uno y otro escenario⁶⁴⁶, a partir de la disputa de credibilidad, el recurso más valioso para la actuación pública. La acción estratégica está orientada en ambos casos hacia la persuasión de la población en el papel de públicos destinatarios de información y opinión. La credibilidad es un bien público simbólico intersubjetivo que se consigue a partir del intercambio y apropiación de significado compartido entre amplios segmentos sociales, base de la política simbólica.

Los legisladores son portadores del símbolo de representación de la pluralidad de ideas y posturas políticas en la discusión y toma de decisiones públicas. Los periodistas

⁶⁴⁵ Agentes políticos y mediáticos concurren al espacio público político con capacidad para desempeñar funciones comunes: elaboran y son voceros, por un lado de discursos de los diversos grupos de interés y de presión, a partir de los cuales los electores configuran un escenario, en el cual se despliegan posiciones, acciones y reacciones diversas en torno a problemáticas públicas colectivas y los personajes políticos que actúan y se confrontan a partir de ellas y, por el otro, de opinión pública, a partir de la cual otros agentes y agrupaciones sociales y privadas conforman sus respectivas agendas de asuntos y toman sus decisiones correspondientes, tales funciones son desempeñadas al mismo tiempo.

⁶⁴⁶ Mientras que los agentes mediáticos operan a partir del código de credibilidad, los agentes políticos lo hacen a partir del código de legitimidad, aún cuando en ambos casos se trate de recursos simbólicos, que contribuyen a movilizar y orientar el sentido de la acción colectiva; la credibilidad es necesaria para conseguir legitimidad, lo que no es cierto a la inversa.

son portadores del símbolo de la concurrencia de opiniones de esa pluralidad ante acontecimientos de interés colectivo. Legisladores y periodistas compiten entre sí en pos de credibilidad, pero desde entornos institucionales y a partir de reglas de acción diferentes. Los primeros en el campo de los derechos, su producción y asignación. Los segundos en el campo de las libertades, su ejercicio y validación. No obstante el código respectivo deriva de una cierta distribución desigual de poder simbólico y político respectivamente. En cada campo de acción e interacción, la distribución de poder conforma una estructura de relaciones de dominación-subordinación, hegemonía y consenso, consentimiento diferendo, y por tanto de disputa-negociación y acuerdo.

Aquí se ha postulado que la producción de sentido es resultado de traslapes entre formas simbólicas culturales e ideológicas, como consecuencia de que no hay ejercicio de poder político al margen del ejercicio de poder simbólico; no es dable pensar que el consentimiento y la conformidad se imponen solamente mediante la coacción, sino que se requiere de persuasión y resignación. Eso significa operar e intervenir en un rango de actualización de las orientaciones de sentido, entre la certidumbre de dar por descontado el estado de cosas posible y la incertidumbre de imaginar amenazas derivadas de las consecuencias que acarrearía alterar aquél.

La circulación de opinión política en televisión, incluso mediante ejercicios de escrutinio público, es un cauce para hacer creer que las libertades ciudadanas son ejercidas y la inconformidad se haga manifiesta a los gobernantes electos, ausentes de una discusión que los interpela, por parte de quienes carecen de representatividad social pero pueden ostentar, a partir de las reglas liberales, la representación de la opinión colectiva. Tal como se ha visto esa es una de las paradojas de la democracia liberal: las decisiones colectivas vinculantes son tomadas por una pluralidad de agentes con representatividad de toda la comunidad política, pero los juicios que sobre aquellas pueden recaer para hacerse visibles transcurren a partir de una minoría no representativa, cuyas voces empero no pueden ser circunscritas en modo alguno, sino mediante acciones persuasivas que alcancen similar publicidad. Entra en juego la política simbólica, que hace posible el traslape entre el símbolo y el referente que se representa. El escrutinio público mediático es uno de sus principales mecanismos. Una

de sus formas consiste en la instauración de una interacción discursiva convencional, por medio de la cual se interpela en nombre de los ciudadanos a los legisladores, prescindiendo del principio por el cual ellos tendrían derecho de réplica y oportunidad de rendir cuentas de su actuación o de aquello por lo que son interpelados.

Los opinantes son agentes de mediación que, a partir de su actuación discursiva, enarbolan crítica y disenso y, en esa medida, ofrecen un cauce para canalizar cierta inconformidad, despojado de las reglas democráticas para la deliberación pública. Por eso ese cauce no puede dar cabida al pluralismo, sino solamente a aquellos grupos sociales con poder real para tener voz por sí o por medio de los opinantes mediáticos. El recurso simbólico para subsanar esa deficiencia estructural mediática es la encuesta de opinión o bien la consulta al “experto” en el asunto. Aún así, la principal restricción del escrutinio público mediático radica en la selección de los voceros-escrutadores, en tanto que su potencial reside en ofrecer el cauce más accesible para la mayor parte de los ciudadanos, que de ese modo consiguen informarse y compartir un marco común para juzgar a los gobernantes electos, al ser relevados de los esfuerzos y tareas implicados en buscar y confrontar información pública y en la interlocución con aquellos, misma que transcurre a partir de gestiones partidistas de corte “clientelar”. En la medida en que los gobernantes electos mantengan con opacidad la manera en que son dirimidos los intereses en juego, así como en que definen el interés colectivo, a partir de la deliberación de asuntos colectivos, es potenciado el escrutinio público mediático y sus efectos en el largo plazo.

La estrategia mediática común, indistintamente del tipo de televisoras, consiste en reemplazar el juicio ciudadano y el debate entre ciudadanos y gobernantes electos por esquemas y fórmulas de opinión de élite, en la “ágora mediática” y de cara muchos⁶⁴⁷.

⁶⁴⁷ El exhibidor de opinión política, instituido con programas televisivos del género coloquial o apelativo, está configurado de manera elitista y cerrada: presenta una reducida oferta de perspectivas y enfoques, con precaria pluralidad y representatividad de ciudadanos, grupos sociales y corrientes de opinión; se trata de un estrecho círculo de periodistas y analistas políticos supeditados por la temporalidad a que debe circunscribirse la acción discursiva en el medio televisivo, así como la medida en que su propia opinión comprometa aquella que ellos vierten en otro canal, en radio o periódico en que participan o que también les da cabida; la prueba en este caso consistió en determinar la representatividad de los participantes y la movilidad que tiene la composición de los paneles en esos programas, así como los intereses que pueden representar tales participantes y el contenido del programa.

Aquí se ha mostrado, mediante análisis formal, semiótico y discursivo, la representación simbólica de un jurado conformado por los participantes de esos programas, en nombre de los telespectadores asumidos y asimilados como ciudadanos, a partir de la escenificación de un debate de ideas, libre de restricciones o coacciones, acerca del desempeño de los agentes políticos. La estrategia mediática referida está dirigida a constituir una parcela del ámbito público mediático, así como consolidar ejercicios de crítica pública, que sirvan como canal de inconformidad de ciertos estratos o grupos sociales y, a la vez, como mecanismo de control de la visibilidad de la protesta, al estandarizar la crítica políticamente pertinente y correcta desde el punto de vista de las elites económicas y políticas.

El efecto de largo plazo de tal estrategia tiene lugar mediante procesos de socialización política, al poner a disposición de los ciudadanos esquemas o marcos interpretativos para evaluar a los gobernantes, antes que por las opiniones particulares vertidas sobre un cierto asunto, es decir al instaurar la modelación cultural de las prácticas políticas de escrutinio ciudadano y rendición de cuentas fuera de su cauce propio⁶⁴⁸. En ese escenario, el dilema que se plantea a la televisión, como al resto de los medios de comunicación masiva, radica en que no pueden sustraerse a desempeñar un papel ideológico, circunscrito entre los límites o márgenes que establecen el mercado y el Estado de derecho, entre liberalismo económico y democratización política.

Así, aunque los programas televisivos de ese tipo tengan como alcance ampliar los márgenes de encauzamiento de inconformidad institucionalizada, ante el sistema político y sin socavar sus bases de legitimidad, a su vez tienen como limitación que en lugar de contribuir a habilitar o adiestrar a “públicos” protagonistas de escrutinio ciudadano, terminen construyendo para sí mismos “audiencias consumidoras” de crítica emotiva e *info-entretenimiento* político, a partir de evaluar el acontecer político y a los gobernantes electos, cual si se tratara de un espectáculo, aquel que resulta de

⁶⁴⁸ De ese modo los ciudadanos quedan liberados de la supeditación a la relación interpersonal con los gobernantes electos, tanto para conseguir información como para expresar su propia opinión. Con la gestión de una visibilidad pública, cuyo acceso es desprovisto de la condición de interactuar de manera interpersonal, es decir de la experiencia personal, la información y la opinión que acerca del acontecer político están sujetas a las pautas culturales convencionales de la interacción a distancia para otros no presenciales, que entonces quedan a expensas de los intermediarios que actúan en nombre de ellos.

poner a los gobernantes electos en entredicho, pero con base en arquetipos y estereotipos culturales, mediante un discurso que no soportaría el escrutinio público.

El escrutinio público mediático puede adicionalmente constituir, en ese sentido, una experiencia colectiva de desahogo emocional o catarsis por la cual los ciudadanos, en tanto que telespectadores, se descarguen del malestar y la inconformidad, mediante la burla mordaz, con frecuencia soez, de los agentes políticos⁶⁴⁹, quienes difícilmente podrán interpelar por sí o por medio de otro agente social o mediático; si bien tampoco sucumbirán al infructuoso empeño por contrarrestar las apelaciones en esa arena política mediática, donde el debate crítico, plural y representativo no podría tener lugar y el sujeto protagonista del mismo tiene el papel de espectador⁶⁵⁰.

Aún cuando el escrutinio público transcurre cotidianamente, a diversas escalas y con diversos alcances, mediante diversos vínculos y formas de agrupación, no parece alcanzar para estimular la formación de identidad ciudadana y el aprendizaje del ejercicio de la autodeterminación individual para comprometerse en la consecución de información y en la discusión informada del desempeño de los gobernantes electos. No alcanza en parte en la medida en que es mantenido o se mantiene al margen del mediático, en el que encontraría la escala de visibilidad pública que merecería y la oportunidad de erigirse en contra-referente para el aprendizaje político de ciudadanía.

⁶⁴⁹ Algún contingente significativo de electores, aquellos que se asoman a la política por la mirada de la televisión, encontrará en el convite al escrutinio público mediático, cuyo menú es cotidiano y más diverso que antes, el modo más accesible y cómodo para ser voluntariamente relevados del escrutinio ciudadano y conseguir algunas claves para conversar de política, cuando sea necesario o útil en la escuela, el trabajo o la tertulia en los grupos de convivencia cotidiana, de un modo que ellos y los otros podrán considerar “enterado” o “informado”. Otra parte de ciudadanos, proporcionalmente menor que aquella, encontrará la utilidad en ese mismo convite a partir de confrontar lo que consigue por otro medio de comunicación o bien mostrarse “enterado” acerca de lo que la gente podría pensar acerca de la política, tanto si la ocasión amerita desplegar una mera actitud rutinaria o bien si ella exige manejar y utilizar información acerca de lo que la gente abreva y especular acerca de sus consecuencias; en este caso se trata de personas que, por la posición que detentan en sus respectivos ámbitos privados de actuación, incluso eventualmente con relación a los legisladores, su propia opinión puede resultar más influyente como referente informativo para más gente.

⁶⁵⁰ Para unos y otros, en el conjunto del convite al que cotidianamente es apelado, el discurso televisivo, que hace aparecer opinión política particular de una élite que en años no se mueve de escena, ofrece la inmejorable ocasión para descargar en los gobernantes electos, a través de otros si parecen dar la cara por uno mismo, la desilusión respecto a la carencia de opciones para imputar responsabilidad por decisiones, o por la falta de ellas, cuyas consecuencias padecerán en cualquier caso, aún cuando pudieran sancionarlos en la siguiente elección.

El escrutinio público mediático recrea por igual, para una élite de estratos medios a través del periódico y la Internet y para una amplia capa de población mediante la radio y la televisión, el peor remedo del modelo deliberativo antiguo, en el que la participación de unos pocos está directamente relacionada con la participación limitada o la exclusión del resto, si bien para una capa más amplia de la población, de aquella que puede hacer diferencia entre la representación simbólica y lo relevado o sustituido en ella, tal recreación representa la manera más accesible, la más cómoda o ambas, para relacionarse con los legisladores, prescindiendo de los costes entrañados en conseguir encararlos durante el desempeño del cargo.

El escrutinio público mediático no es una alternativa a la práctica democrática del escrutinio ciudadano, sino un recurso que coexiste junto con el escrutinio público en el ámbito societario más amplio, forma de participación indirecta por la cual es posible someter a los legisladores a sanción durante el desempeño del cargo, sin tener que esperar a que sean los legisladores quienes modifiquen la forma en que transcurra.

Ante una política partidaria, que lejos de promover el sistema de valores y normas democráticos, en el cauce de las instituciones tradicionales, auspicia o solapa en general ineficacia y corrupción, un ejercicio patrimonialista del poder público y un uso clientelista del poder político⁶⁵¹, el escrutinio público mediático transcurre con desenfreno, sin obstáculos y responsabilidad pública; además de las condiciones señaladas que lo hacen propicio, habrá que considerar los aspectos relativos al problema del sobrecargo del Estado ante las desigualdades sociales; las asimetrías en la competencia entre discursos de una diversidad de grupos de interés y de presión que concurren en el ámbito público, incluso mediático; la visibilidad pública que adquieren ciertos movimientos sociales emergentes, antes latentes o silenciados en el

⁶⁵¹ Por ello el principal problema, relativo al ejercicio de la identidad, la participación y la opinión ciudadana, consiste en que otros hagan por los ciudadanos lo que éstos deben hacerse cargo de hacer por sí mismos; ese problema afecta a quienes no tienen acceso al poder porque no militan en partido político alguno, quienes resisten organizaciones partidarias de corte corporativo y esquemas de adhesión y militancia de tipo “clientelar” a partir de la representación de intereses ante los gobernantes electos, en especial legisladores que, en su mayoría y sin distingo de partido político, se comportan bajo el modelo de “delegación de intereses”, de grupos privados o clivajes electorales.

pasado⁶⁵²; así como la ineficacia de la comunicación de las instituciones políticas con respecto a ellos, que al no encontrar representatividad política amplían el distanciamiento entre ciudadanos y legisladores, partidos e instituciones de gobierno.

Paradójicamente, por otra parte, el encauzamiento de prácticas políticas relativas a establecer responsabilidad en los gobernantes electos, en especial en legisladores, a partir del simulacro mediático de las mismas, contribuye a fortalecer la hegemonía cultural y política de las élites por la vía de la liberalización económica y política del sistema mediático, pero que al favorecer una mayor concurrencia de opinión política tiende, a su vez, hacia la homologación ideológica del consentimiento posible, mediante la socialización de pautas culturales para el aprendizaje político del encauzamiento del disenso o la inconformidad, indistintamente del nivel de interés, implicación y conocimiento acerca de la actividad política y lo que está en juego en ella en diversos momentos y hechos⁶⁵³. Algo que en México deberá ser estudiado.

El riesgo latente es que la responsabilidad política sea procesada y transcurra a partir de opinión mediática y televisiva, para una minoría a través de Internet, y entonces se torne en un problema de credibilidad a partir de opiniones dominantes debido a su publicidad, incluidas las encuestas por encargo que hacen los medios; en lugar de una cuestión de legitimidad, a partir de procesar una discusión de programas, leyes y políticas públicas tal, que permita conocer qué está en juego y qué es negociado en cada asunto en los órganos deliberativos y mediante la rendición de cuentas por parte de los legisladores, ciertamente una práctica común entre algunos de ellos.

⁶⁵² Molina y Vedia (2008; 2009) da una coherente explicación desde la teoría de sistemas de Luhmann.

⁶⁵³ En el contexto estadounidense, Neuman (1986) pone de relieve que el proceso de aprendizaje que deviene de la exposición selectiva a los medios podría ser descrito como la acumulación gradual de información, la cual es frecuente y consistentemente similar y repetitiva entre los diferentes medios masivos. Hay un patrón de estratificación por el cual los ciudadanos más sofisticados atienden a los medios más políticos y son mejores para recordar e interpretar las comunicaciones políticas abstractas. El proceso implica una espiral entre niveles crecientes de interés y de conocimiento y comprensión mayores. Pero la espiral funciona también en otra dirección. En el otro extremo, entre los ciudadanos más ignorantes y desinformados algunos operan para desviar el flujo de comunicación política hacia fuera de sus ambientes, al juzgar que ésta es irrelevante y que la política carece de interés. Los efectos de los medios serán siempre constreñidos por el carácter de sus audiencias. El mayor de ellos consiste en definir lo que no es socialmente aceptable, desde el punto de vista moral, aquello en lo que no vale la pena pensar, aceptar o con lo cual solidarizarse.

Nadie puede poner en duda razonablemente que abstenerse de participar, en particular sometiendo a los gobernantes electos a escrutinio ciudadano, es la peor manera de ser gobernado, en especial en democracias incipientes en donde las prácticas políticas ciudadanas son crecientemente mediatizadas, mientras que las decisiones que conciernen y afectan a todos son tomadas por legisladores federales a partir del apoyo electoral que deban conseguir de cara al siguiente cargo público, o eventualmente de cara al escrutinio público mediático.

El escrutinio público mediático es una manifestación de la confrontación entre la tendencia a hacer prevalecer la política simbólica⁶⁵⁴, la cara oculta de la política democrática, aquella que se instala en el imaginario colectivo a partir de la difusión mediática, de la que abreva el aprendizaje democrático para la mayor parte de los ciudadanos y que está forjando crecientemente la cultura política en México.

⁶⁵⁴ Para entender la compleja naturaleza interactiva, y a menudo contradictoria, de los medios, la comunicación y la cultura, hay que reconocer tres axiomas: a) la estructura no está fija y no es determinante; b) los mensajes simbólicos son polisémicos y multisémicos; c) los actores sociales interpretan y usan su entorno simbólico de maneras que representan sus intereses personales, sociales y culturales (Lull, 1997: 226). Las personas se apoderan ambiciosamente de todo el material disponible y de los terrenos simbólicos mientras van construyendo sus mundos culturales. Actualmente los ambientes culturales se construyen con elementos mediados y no mediados, con lo culto y lo popular, lo personal y lo masivo, con lo público y lo privado, con lo de aquí y lo de allá, con lo familiar y lo extraño, lo de ayer, lo de hoy y lo de mañana. Cualquier teoría que sea digna de crédito debe abordar, de algún modo, y explicar la relación dinámica entre dos fuerzas básicas y aparentemente contradictorias, por un lado las estructuras ideológicas y culturales representadas y articuladas por la élite cultural, política y económica y, por el otro, la energía, la creatividad, la intencionalidad y la capacidad trascendente de las personas y de los subgrupos para construir identidades y estilos de vida significativos, disfrutables y únicos. Ambas cuestiones equivalen a los términos de la ecuación fundamental del poder social. Los medios de comunicación masiva intervienen de manera decisiva en ambos dominios: las macro-estructuras limitadoras y las esferas micro-sociales capacitantes. Estas fuerzas compiten por el poder simbólico y cultural en el mundo actual (Lull, 1997: 214-215).

ANEXO 1

MODELO METODOLÓGICO PARA EL ANÁLISIS DE PROGRAMAS TELEVISIVOS DE OPINIÓN

Método para la prueba de la hipótesis

Aunque produzca una comunicación monológica, asincrónica y técnicamente mediada, la difusión televisiva puede poner a disposición de miles de telespectadores un mismo mensaje movilizado en un programa, a partir de los recursos técnicos y tecnológicos de que se sirve el emisor en la realización y producción del mismo. Más gente busca informarse a través de la televisión que en prensa, radio o Internet. La televisión provee una variedad de contenidos informativos, desde los noticieros hasta el documental cultural, pasando por las tertulias políticas. Una parte de los contenidos de opinión política adopta la forma de una mesa de discusión entre analistas políticos acerca de asuntos de interés público. En la interacción comunicativa escenificada se generan múltiples mensajes, algunos de los cuales pueden estar dirigidos a los telespectadores como tales, en tanto que ciudadanos e incluso hacia los actores políticos y éstos pueden ser el foco de atención como tema.

El estudio se propuso, por una parte, identificar las maneras en que puede tener lugar la representación simbólica del escrutinio ciudadano como escrutinio público a través de la televisión, cuando en su difusión se movilizan contenidos de opinión como programas en sí mismos, es decir diferenciados de los programas expresamente de contenido informativo, como finalidad del productor/emisor de acuerdo a la clasificación que hace dentro de la programación que difunde y, por otra parte, que tal escrutinio ciudadano representado se ocupaba del funcionamiento de las instituciones y la actuación de los actores políticos titulares de ellas.

Se formuló como hipótesis que la televisión ha pasado a desempeñar un papel más activo que antes en la producción mediática de contenidos de opinión; que una de las maneras en que lo ha hecho es representando simbólicamente, con diversos formatos de programa televisivo, ejercicios de evaluación detallada y examen crítico que transcurren como discusión y debate, de ciudadanos para ciudadanos, acerca del desempeño de instituciones y actores políticos y que, entre éstos, se ocupan cada vez más del Congreso y de los legisladores federales.

En consecuencia, la prueba de hipótesis consistió en demostrar que los actores políticos en general, y los legisladores en particular, pueden verse sometidos a un escrutinio público que transcurre en el circuito mediático de comunicación pública, al margen y en contraposición del que pueda tener lugar dentro del cauce de las instituciones políticas y a partir de las reglas que las rigen y de los recursos que con ese fin se ponen a disposición de los ciudadanos y de la población.

Para fines del análisis, la estrategia metodológica consistió modelizar la interacción social implicada en el escrutinio público y, luego, contrastarla con la interacción social y comunicativa que se pone en escena en ciertos programas televisivos. Por eso, el diseño metodológico estuvo dirigido a probar que en la televisión en México se abren paso, por una parte, los contenidos de opinión política y, por otra parte, que en los mismos puede tener lugar una modalidad de escrutinio público que sustituye y subsume simbólicamente al escrutinio ciudadano, tarea política que, conforme al ideal liberal democrático, está a cargo de los ciudadanos, dentro del cauce de las instituciones políticas y de cara a la interlocución con quienes los representan.

El método consistió en determinar de qué manera puede un programa televisivo de opinión, indistintamente del formato que lo rija, moviliza el sentido de interpretación hacia la representación simbólica de un escrutinio público mediático llevado en nombre de los ciudadanos. Eso supuso observar en términos generales los contenidos mediante los cuales se da cabida al intercambio de opiniones políticas diversas; establecer en cuáles de esos contenidos tal intercambio tiene lugar como libre discusión o debate de ideas y éste último da lugar a un género específico en televisión; en su caso, la amplitud del mismo y la diversificación de los formatos de los programas del género; y, en particular, establecer las maneras por las cuales en tales contenidos se puede orientar el sentido del teleespectador hacia la representación de una evaluación crítica entre ciudadanos respecto del desempeño de los actores políticos, no obstante la heterogeneidad de formatos utilizados en su realización en el conjunto de la difusión televisiva.

Para ello, se requirió en primer lugar establecer criterios analíticos para diferenciar los contenidos en televisión. Eso permitió, por un lado, determinar la pertenencia de los programas televisivos al género coloquial o de discusión de opiniones políticas y, por otro lado, medir la proporción de ese tipo de programas en el conjunto de la difusión televisiva, comparativamente en el tiempo, pero sólo en cuanto a su inventario y registro, porque el objeto del estudio no es la programación televisiva en sí misma ni los contenidos televisivos en general. Este fue un primer criterio para definir y delimitar el *corpus* a analizar.

Los contenidos de televisión son un bien simbólico intangible con múltiples usos y valores; su producción y consumo se rige por pautas culturales convencionales, ampliamente socializadas y compartidas. No obstante, la delimitación de los mismos representa un problema en sí mismo, en términos prácticos y analíticos. En el primer caso, las dificultades derivan de que en televisión la organización de contenidos obedece a la programación de su difusión, a la que se supedita la producción y realización de los mismos y, por tanto, los difusores establecen su propia clasificación y con ello pautas que orientan el consumo. Eso supedita ese bien a los intereses y criterios del realizador-productor-difusor, quien los justifica allí en donde no hay restricciones legales que permitan regularlos, calificarlos e intervenirlos (censurarlos)⁶⁵⁵. Aunque las convenciones culturales y las normas jurídicas al respecto pueden variar entre un país y otro, incluso entre estratos y grupos sociales, todo parece indicar que han sido bastantes estables en el tiempo. En el segundo caso, el problema consiste en que los intentos para distinguir un tipo de contenido de otro quedan supeditados a la aplicación de las clasificaciones analíticas establecidas, o bien se tendría que justificar la elaboración de alguna distinta.

La revisión de la literatura especializada permitió constatar que hay distintos enfoques de definición y, por tanto, criterios de clasificación y tipologías de contenidos audiovisuales; éstos se han multiplicado y diversificado más que antes, lo que ha repercutido en que las fronteras entre ellos sean actualmente difusas y permeables; eso se acentúa aún más en el caso de la televisión debido a las posibilidades expresivas y las transformaciones técnico retóricas que permite este medio tecnológico de transmisión. Al ser precario el consenso en torno a las tipologías, no se dispone de alguna que considere e integre de manera consistente los criterios posibles y que, a la vez, justifique sin motivar reservas la exclusión de alguno y la jerarquía otorgada a aquellos que

⁶⁵⁵ De modo que poner en entredicho tales intereses, criterios y convenciones implicaría disponer de evidencia acerca de las diferencias de percepción, valoración y clasificación que podrían hacer los telespectadores y que éstos exigieran ante las instituciones políticas los cambios requeridos.

incorpora. En parte, el problema metodológico concierne a los criterios de validez, fiabilidad y verificabilidad de las categorías utilizadas.

Esa circunstancia implicó la decisión de acogerse a un determinado enfoque o bien elaborar una tipología, pero esto último rebasaría el objetivo de la investigación. Se decidió por tanto partir de una tipología consistente con el objeto de estudio, elaborada para el caso de la televisión en España, pero sin declinar en la propuesta de que la categoría “contenidos de opinión en televisión”, puede constituir actualmente un tipo distintivo de otros contenidos del género informativo. No obstante, en razón de que tal categoría guarda similitud con los llamados géneros coloquiales o apelativos, se adoptó la tipología propuesta por Cebrián (1996), atiende al criterio de género, porque permitía su aplicación a la delimitación de contenidos audiovisuales en radio y televisión en el caso en México.

En el enfoque aquí propuesto el género no determina por entero al programa televisivo, ya que los contenidos de televisión se han transformado, en razón de cambios en el desarrollo de las tecnologías, las aplicaciones y la oferta de medios interactivos de comunicación, que hacen posibles distintas maneras de ver televisión. Adicionalmente, análisis precedentes identifican un fenómeno de traslape de géneros de contenidos audiovisuales, por el cual en un mismo programa se pueden contener rasgos típicos de géneros distintos, dando lugar a productos “híbridos”. Desde ese enfoque, el programa televisivo es una obra unitaria completa y autónoma, se produce con una finalidad específica, aunque se integra y forma parte de una programación de contenidos establecida con una finalidad más general por cada operador de televisión. Por tanto, se tomó el formato de realización y montaje como unidad de análisis central, en razón de que éste determina la configuración concreta que adopta el contenido audiovisual según el programa televisivo.

Así, el objeto de análisis está constituido por aquellos contenidos televisivos en que se produce el análisis de asuntos políticos, mediante el intercambio y la confrontación de opiniones políticas, según las diversas modalidades que adopta la interacción comunicativa que hacen posible tal intercambio y confrontación. Es de esperar que tales programas se correspondan en parte con los géneros coloquiales o apelativos dentro del grupo genérico informativo de contenido audiovisual. En lo que sigue se exponen las premisas del modelo y los procedimientos metodológicos que orientaron la observación, recopilación de información y la interpretación de resultados.

Delimitación de contenidos televisivos y unidades de observación y análisis

Está probado que para efectos de análisis los programas televisivos pueden ser agrupados según el género de contenido al que pertenecen. A los contenidos audiovisuales han sido aplicadas tipologías desarrolladas en otros campos culturales y medios de comunicación, en especial en literatura y periodismo, aunque adaptadas y ajustadas a la especificidad del lenguaje y la narrativa audiovisuales, así como de la transformación técnica y retórica de la expresividad que permite la realización audiovisual. De la revisión de los estudios se pudo constatar que: a) los contenidos televisivos son producidos por programa, éste constituye una obra unitaria completa autónoma⁶⁵⁶;

⁶⁵⁶ Un programa no corresponde, en sentido estricto, a una emisión del mismo, es decir la transmisión realizada en una fecha y horario particular determinados, y conforme a una cierta cobertura espacial (lugares en los que pudo ser sintonizada sincrónicamente la señal televisiva), aún cuando sea habitual denominar a la emisión, en sentido amplio, como programa, lo cual puede confundir en el análisis. Un cierto programa se compone de varias emisiones, cada una de ellas con un cierto horario (inicio y término).

b) todo programa se produce según un determinado formato de montaje y en general realización y es integrado a un sistema de programación; c) éste responde a una determinada lógica de producción por la cual se organizan todos los contenidos, y del que dependen las modalidades de realización, producción y difusión⁶⁵⁷. Estos procesos de trabajo se supeditan a la programación, operación integradora. Tales principios son aplicables a televisiones públicas y privadas, de señal restringida o de paga y de señal abierta o generalista. La observación sistemática de los programas televisivos, difundidos en ésta última, permitió corroborar que cada televisión establece de manera arbitraria su propia clasificación de los contenidos que difunde, y que utiliza la categoría género de modo latente, incluso subrepticio, porque en realidad el criterio para determinar los contenidos es el “programa”. De manera que la clasificación de los programas de cada televisión es un dato que debe ser tomado en cuenta para inferir el tipo de contenido que difunde. No obstante eso, las televisiones siguen pautas comunes de clasificación de contenidos.

Por consiguiente, se definió como unidad de análisis al “programa” y el criterio de agrupamiento atiende entonces a los rasgos peculiares de cada género y, consecuentemente, a los rasgos comunes equiparables entre los diversos programas televisivos, que en conjunto permiten ubicar los programas pertenecientes al mismo género de contenido. Eso permitió deslindar los programas que aquí se denominan “de opinión”, objeto de este estudio, y que corresponden a lo que algunos autores denominan “géneros coloquiales o apelativos” (Cebrián, 1996). Se consideró pertinente confrontar los criterios tanto de los profesionales y las emisoras como de los analistas y estudiosos, para de allí deducir los elementos que habrá que tomar en cuenta. De esa manera, se verificó si éstos contenidos han aumentado en la difusión televisiva en México.

Determinación y especificidad del programa televisivo de opinión política

La producción televisiva atiende a pautas culturales convencionales, por las cuales se atribuyen a los contenidos alguna correspondencia con respecto a preferencias y hábitos de consumo por parte de los telespectadores. La finalidad última de cada televisión es atraer el mayor número posible de espectadores y mantener la audiencia cautiva, porque de ese modo los emisores privados consiguen vender espacio publicitario y los emisores públicos un mayor presupuesto.

La competencia a partir de la oferta de contenidos se define según la participación que cada competidor tiene en el universo total de telespectadores. Pero ella ya no se resuelve por la vía de extender el horario de transmisión, porque la demanda es inelástica; tampoco por estándares de calidad, sino por la eficacia de las estrategias de mercadotecnia y segmentación del mercado para producir contenidos hacia segmentos de consumo especializado. Desde el punto de vista de las televisiones, eso permite atraer y satisfacer gustos que no se satisfacen con la programación general. Eso impone a los operadores televisivos requerimientos de innovación y lleva a la diversificación de programas. Las innovaciones representan un alto costo económico y entrañan riesgos de inversión y financiamiento, debido a que tan pronto son introducidas tienden a ser

⁶⁵⁷ Ese sistema de programación varía según las políticas, estrategias y objetivos de cada televisión y de los requerimientos de competencia en el mercado de consumo cultural. La finalidad de producir y difundir un programa con ciertos contenidos depende, en último término, de una decisión de negocio y mercadotecnia en el caso de televisiones de propiedad privada (concesión pública de una señal) o bien de política pública en el caso de los medios de propiedad estatal (permiso de transmisión). En la producción de cada programa se toma en cuenta tanto las oportunidades como los requerimientos de comercialización de su transmisión, retransmisión o circulación como obra unitaria en otros canales de difusión y soportes técnicos.

emuladas por los competidores, lo que se traduce en la homologación y, en consecuencia, la estandarización de contenidos y formatos de realización que predominan en la difusión televisiva.

Una consecuencia del patrón de comportamiento descrito es la tendencia a la producción de contenidos “híbridos”, en los que se mezclan géneros, subgéneros y formatos, así como recursos técnico-retóricos de expresividad. Otra consecuencia es la tendencia a la extrapolación y transferencia de géneros, formatos y recursos expresivos de otros medios, tal como los originados y desarrollados en prensa y radio, hacia la televisión, mediante su adaptación a la difusión televisiva⁶⁵⁸. Eso ha llevado a una producción de contenidos basada en la yuxtaposición de géneros, subgéneros y formatos en un mismo programa, de tal modo que hace actualmente más complicado que antes reconocer acerca de qué trata un programa, así como clasificar los programas atendiendo a los criterios analíticos de delimitación y tipologías de contenidos.

Aunque cada programa televisivo es una obra unitaria y autónoma, que incluso puede constituirse por una sola emisión, forma parte de una secuencia programática en la que se inscribe y a partir de la cual adquiere la especificidad de su valor. Los programas pueden ser considerados como una narrativa audiovisual polisémica con una finalidad determinada por su productor, siempre en referencia a una expectativa del telespectador. La obra tiene un destinatario. La narrativa movilizada puede ser clausurada al finalizar el programa correspondiente, o bien distribuida en partes presentadas periódicamente en la secuencia programática. Su realización consiste en una transformación técnico retórica a partir de tres sistemas o códigos de lenguaje distintos: visual, sonoro y habla, de cuya manipulación, mediante operaciones y recursos técnicos y dispositivos tecnológicos, resulta la obra producida. La producción atiende a los requerimientos de programación televisiva y ésta a las políticas y estrategias de las cadenas emisoras respecto a los telespectadores y a la competencia entre ellas. Con base en reglas convencionales, los programas son organizados e incorporados a la programación cual si se tratase de un aparador comercial o un menú o carta de restaurante, cuyo valor se estima por el día y horario asignado a su transmisión. La programación está diseñada en función de las preferencias, gustos y hábitos de uso que cada emisora considera que son compartidos entre un grupo de telespectadores y distintos a los de otro, lo que se determina mediante estudios de mercado y audiencias. El lugar asignado a cada programa obedece a ese criterio y tipo de consideraciones de la correspondiente cadena emisora.

Los géneros son modalidades de contenido según la finalidad y la organización resultante de los recursos técnicos expresivos utilizados en la realización del mismo⁶⁵⁹. Las modalidades están

⁶⁵⁸ Algunas manifestaciones de esa tendencia van desde una mayor recurrencia a incorporar reportajes, entrevistas, documentales dramáticos y rueda de corresponsales dentro de los noticiarios, hasta la aparición de programas del subgénero “tertulia” o “revista política humorística”, así como la incorporación de una sección “de opinión” o “comentario” dentro de noticiarios o bien su aparición como segmento independiente de la programación; pasando por la tendencia a “comentar” las noticias al presentarlas (“editorializar”) dentro de programas convencionalmente de carácter “informativo”

⁶⁵⁹ Según Cebrián (1996:17) el género es el modo en que se organiza y estructura la información; la afinidad genérica se establece sobre el reconocimiento de funciones análogas. Siguiendo a Wolf (1984) pueden ser considerados como *modos de comunicación*, culturalmente establecidos, reconocibles en el seno de determinadas comunidades sociales, a la vez que sistemas de reglas a las que se hace referencia para realizar procesos comunicativos ya sea desde el punto de vista de la producción como de la recepción. No obstante, Cebrián hace énfasis en el componente creativo derivado de la aportación del autor, cuya actuación contribuye con los demás autores a consolidar formas de tratamiento y estilos, de modo que el género es un resultado colectivo; de ahí que sostiene que cada género nace del impulso intuitivo y creativo

establecidas convencionalmente. La programación televisiva dicta los géneros que deben ser producidos y difundidos, conforme a las expectativas de preferencia de los telespectadores que la cadena televisora considera que puede conseguir hacia su señal en un determinado día y horario.

Un programa adopta un formato de montaje y realización de contenidos que corresponde a un determinado género, dependiendo de los requerimientos para captar el interés y captar la atención de los telespectadores que comparten el interés o la preferencia por dicho género, así como para pueden diferenciar el programa respecto de otros del mismo género difundidos por otras emisoras televisivas. El género al que pertenece un programa y el formato con el que se organiza y realiza su contenido constituyen un dato semiótico contextual de la difusión televisiva, porque anticipa tanto la finalidad con que se produce como el medio con que compete un determinado emisor con otros en pos de atraer telespectadores para la recepción de su difusión.

Por consiguiente, dentro de un mismo género puede haber distintos programas y éstos pueden diferenciarse entre sí en una misma emisora televisiva y con respecto a los que produce otra, mediante la adaptación del contenido a un formato. El formato está determinado por la finalidad de ofrecer coherencia global a los contenidos, de manera que favorezca su pertenencia a un género determinado⁶⁶⁰ y, a la vez, que permita distinguir su identidad de cara a los demás ejemplares del mismo género.

Pero el formato de programa puede adoptar una configuración mixta, que combine elementos narrativos, de realización y montaje audiovisual utilizados habitualmente en géneros distintos. Esa circunstancia depende de la finalidad del realizador y productor del programa. De ahí se sigue que para efectos del análisis de contenidos televisivos, el formato puede emanciparse de las reglas del género y que el programa se constituya del formato utilizado, de modo que a partir de éste pueda ser definido y clasificado. En ese caso, los contenidos conforme a un determinado formato pueden globalmente constituir un rasgo distintivo, con base en el cual los realizadores y productores buscan orientar la lectura, comprensión e interpretación por parte de los telespectadores.

Los programas televisivos objeto de este estudio pueden ser ubicados en el marco de los subgéneros llamados *coloquiales* o *dialógicos*, tal como la entrevista, la mesa redonda, el debate, las tertulias, la rueda de corresponsales y de emisoras, participación con el público, que pertenecen todos al género dialógico o apelativo, mismo que forma parte del género más global llamado informativo, de acuerdo con los criterios de clasificación planteada por Cebrián (1996)⁶⁶¹, que se presentan resumidamente en el siguiente gráfico.

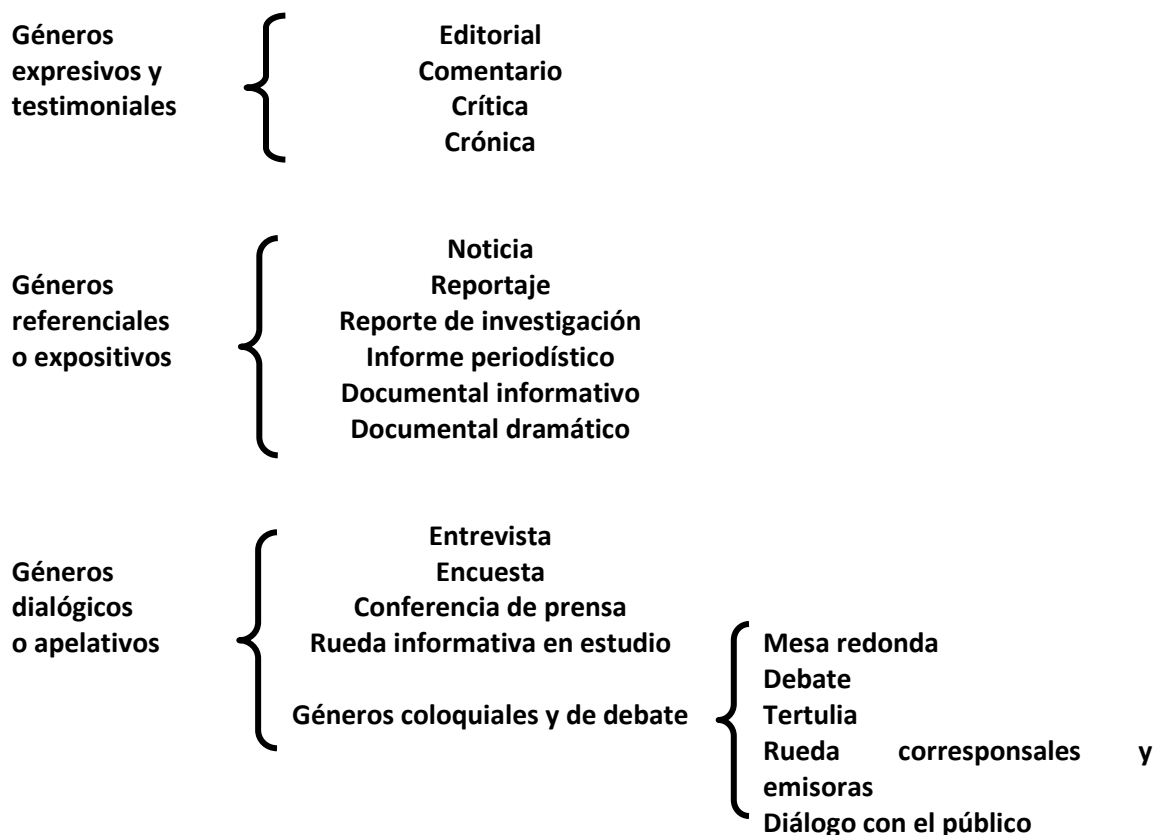
de un autor para plasmar una necesidad comunicativa, estableciendo sus propias combinaciones de recursos y de códigos como los rasgos distintivos de su trabajo; pero otra parte define el género como conjunto de procedimientos combinados, de reglas del juego previamente establecidas, reconocidas y desarrolladas reiteradamente durante un tiempo por varios autores. El género no se refiere a contenidos comunicativos sino a sistemas de reglas relativas a modos de comunicación, no responden a delimitaciones temáticas sino a determinadas formas de tratamiento y estilos, a las formas de agrupar, ordenar y dosificar los contenidos, no a los contenidos mismos (Cebrián, 1996, 16 y ss.).

⁶⁶⁰ Que es uno de los criterios a los que atiende la elección del contenido que hace el telespectador, conforme a las convenciones culturales de consumo cultural.

⁶⁶¹ La tesis en que se soporta su elaboración es que los géneros informativos audiovisuales son el resultado de un triple entronque entre la tradición de los géneros literarios, cuyo núcleo teórico reconoce los géneros líricos, narrativos y dramáticos, la práctica profesional de los géneros periodísticos escritos y la historia de la información audiovisual. Este autor hace una extrapolación de la teoría literaria sobre géneros hacia el

GENEROS INFORMATIVOS AUDIOVISUALES

Elaboración propia con base en criterios establecidos por CEBRIAN (1996).



Según ese autor estos subgéneros exponen hechos, ideas u opiniones de personalidades, expertos y, en suma, de personas portadoras de información y opiniones, mediante el dialogo del periodista, o mediador, con una o varias personalidades. El informador actúa como interrogador y moderador y deja el protagonismo a sus interlocutores, para que el destinatario conozca los hechos y opiniones directamente de sus protagonistas, testigos o “expertos”, quienes son portadores de información y con quienes se dialoga (1996:39). De acuerdo con ese planteamiento,

campo informativo audiovisual, en el que sin embargo deben reelaborarse y adaptarse al lenguaje expresivo audiovisual y a los dispositivos expresivos de cada medio de comunicación véase Cebrián (1996:13) Desde la perspectiva literaria, los géneros atienden a la actitud del autor respecto a la realidad que afronta y de la obra que produce. El autor puede proponerse describir o narra el mundo externo, explicar sus sentimientos e ideas o dar a conocer las expresiones de otro. Esta triple actitud genera y caracteriza tres grandes grupos de géneros, que en el análisis se aplican a la información audiovisual tal como se realiza en la práctica, con la peculiaridad de que el lenguaje y los medios audiovisuales permiten una mayor riqueza de estructura del género y en consecuencia mayor diversidad de adaptaciones puede asumir (Ibid: 17 y 18.). “Los géneros se presentan como modalidades de aproximación, configuración e interpretación de la realidad. Entre las múltiples opciones que se le ofrecen, el autor elige la que considera más adecuada para cada enfoque que desee transmitir de su visión de la realidad. Su actitud puede ir desde la implicación personal hasta una actitud distante y referencial o una actitud inquisitiva o polémica”. De los tres tipos de actitudes del autor hacia la realidad y de los tres modos de configuraciones resultan los correspondientes paradigmas de géneros. Expresivos y testimoniales; referenciales o expositivos y apelativos o dialógicos (Ibid: 38).

el formato televisivo estaría determinado por el género del contenido y éste determinaría el formato de realización de un programa de televisión. La tipología propuesta por este autor solamente reconoce la relación entre género y formato en términos de funcionalidad y supeditación del segundo al primero. Tal tipología fue construida a partir de extrapolar los géneros periodísticos prevalecientes en prensa y literatura⁶⁶², según se desarrollaron en esos campos y a partir de considerar las transformaciones requeridas para su adaptación al sistema audiovisual y los códigos expresivos de los lenguajes que articula.

Al margen de otras reservas que generaría esa tipología, si bien el autor admita que los géneros evolucionan y se transforman, cabría apuntar que en virtud de cambios en las convenciones culturales y principalmente las innovaciones tecnológicas aplicables-, el planteamiento no da cabida a reconocer que debido al formato de montaje y realización de un programa televisivo, la organización y presentación de su contenido puede dar lugar, por un lado, a la yuxtaposición de contenidos correspondientes a distintos géneros y, por el otro, a una transformación técnica retórica de contenidos a tal punto que se transgreden las convenciones de géneros, con repercusiones en la manera en que los contenidos pueden ser percibidos y catalogados, no sólo por quienes los producen sino por los destinatarios para quienes se producen.

Esa situación se presenta con mayor frecuencia actualmente y obedece al fenómeno de la presentación de información como entretenimiento, lo que algunos llama “info-entretenimiento”, cuyas manifestaciones extremas pueden ser ilustradas por un lado por la parodia humorística política presentada dentro de un programa de variedad y, de otro lado, por el comentario político sarcástico de acontecimientos, presentando mediante la parodia de un noticiero televisivo, tal como ocurre desde hace varios años en la televisión mexicana operada por concesionarios privados (H. O'Donnell, 2007). Una consecuencia es que son difundidos programas que en perteneciendo en principio a un cierto género, devienen en otro u otros, en una mezcla irreconocible de contenidos y formatos, lo cual no obstante no implica que los contenidos resultantes no sean comprendidos por parte de los teleespectadores.

Esa amalgama de formatos aplicables se refleja en que, por ejemplo, la entrevista puede ser un programa por sí mismo o bien formar parte de programas no informativos, tanto en el campo del espectáculo como en el de la política. La tertulia puede devenir en una variedad de espectáculo y una mesa de debate político entre analistas en un simple intercambio de opiniones, sin ser confrontadas y sin solapamientos, apareciendo discursivamente como una serie de comentarios a lo largo de la emisión. Por eso, en este punto el análisis no se puede atener sólo a las clasificaciones convencionales de géneros: el sentido con que puede ser comprendido e interpretado el contenido de un programa es orientado por su formato. Los programas televisivos pueden resultar de una mezcla de contenidos y formatos que rompe con las convenciones culturales tradicionales, dando lugar más que a una yuxtaposición a la articulación discursiva de

⁶⁶² Los géneros informativos audiovisuales han sido sistematizados con denominaciones, enfoques y tratamientos similares al ejercicio del periodismo escrito, como si la diferencia de cada medio expresivo y de comunicación no tuviera que ver, según observa este autor para quien, no obstante, en la práctica, se traslapan órdenes entre géneros y se desplazan géneros escritos a lo audiovisual. Por tanto propone subsanar esa deficiencia teórica y metodológica, a partir de un análisis global del audiovisual, a partir de la hipótesis de que la diferencia entre medios de comunicación, su propia organización instrumental y empresarial, debe originar variables sustanciales en los tratamientos informativos y que un aspecto fundamental de tales tratamientos está constituido por los géneros (Ibid: 15).

contenidos “híbridos” que no corresponden a algún sólo género. El análisis del género va de la mano del análisis del formato en los productos audiovisuales.

Por eso el criterio de selección de contenidos televisivos atendió a la finalidad del programa según el autor o emisor, a partir del análisis semiótico y discursivo del contenido presentado en cada programa concreto, teniendo en cuenta al destinatario del mismo y situado el proceso dentro de un contexto social, espacial y temporal específico, del que derivan pautas culturales convencionales para comprender e interpretar su contenido.

En ese orden de ideas, se puede observar que, en la última década en México, se ha multiplicado y ha cobrado relevancia un tipo de programa televisivo cuyo valor simbólico, como bien cultural, está centrado en la escenificación del intercambio de puntos de vista y opiniones de orden político; mediante este tipo de contenido la televisión ha reforzado su papel como agente que establece y modera agenda pública de temas y asuntos que, en conjunto con otros medios (radio y prensa), hace prevalecer en la esfera pública; seleccionando y otorgando distinta relevancia a ciertos hechos o acontecimientos, circunstancias y condiciones, puestas de relieve a través de los noticiarios, reportajes, entrevistas, comentarios y colaboraciones periodísticas.

Eso permite concluir que se trata de la instalación de un producto cultural con especificidad, una forma simbólica cultural distintiva de otras producidas y circuladas en la televisión. Así vista, la producción y difusión de opinión política en televisión no tiene cabida en la clasificación propuesta por Cebrián (1996). Por sus características, es en este tipo de programas televisivos en los que cabría esperar que sea más propicia la representación simbólica que evoque el escrutinio ciudadano acerca de la actuación gubernamental y del desempeño de los agentes políticos.

Análisis semiótico del programa televisivo de opinión y debate político

En tanto que obra simbólica unitaria, de múltiples y heterogéneos significantes y significaciones posibles, el programa televisivo se organiza conforme a reglas de codificación, mismas que derivan de la expresividad del lenguaje televisivo y de la transformación técnico-retórica de los contenidos, con base en un determinado formato de escenificación y montaje orientado por el género. Todo en el programa significa (denota y connota) algo, con cierta intención y moviliza el sentido en cierta dirección a partir de los estímulos que ofrecen las imágenes sonoras y acústicas, el lenguaje puesto en funcionamiento y la interacción comunicativa inscrita en el conjunto de la narrativa audiovisual. De manera que cada aspecto o elemento del programa está contenido dentro del mismo con arreglo a una cierta configuración que los articula unos con otros y en el todo, para cumplir una finalidad del autor que lo produce y la televisora que lo difunde. Cada parte tiene un significado parcial y autónomo de las otras con las cuales se relaciona de un modo deliberado, por eso cada parte se realiza y cumple su función en tanto que vinculada con las otras; de esa configuración depende la coherencia global del discurso audiovisual puesto en funcionamiento.

En ese sentido se puede considerar un programa televisivo como un tipo y un ejemplar peculiar de forma simbólica cultural compleja, cuya peculiaridad reside en que puede ser producida fines de beneficio económico, intercambiada de manera gratuita y apropiada con facilidad para satisfacer necesidades y conseguir metas heterogéneas al mismo tiempo, cuya motivación puede ser racional y emocional a la vez, tal como conseguir información pública, entretenimiento, contemplación estética, afirmación del sentido de pertenencia, conocer lo que sucede en otros lugares, compañía en la soledad o utilización del tiempo libre, entre otras. No obstante, el análisis

de toda forma simbólica puede atender a aspectos estructurales comunes a todas, tales como la intención, las convenciones utilizadas, las relaciones de significación entre sus elementos que son distintivas de otras, las referencias y representaciones que opera y pone en juego y las condiciones en que se producen, intercambian y apropian (Thompson, 1996:14)⁶⁶³.

El programa televisivo se constituye enteramente de representación simbólica, porque todo en él está allí para representar y, por tanto, es resultado de actos deliberados de actuación de cara a los destinatarios, a los que está dirigido para inducir su apropiación y valoración como satisfactor de necesidades presupuestas en ellos y que se desarrollan colectivamente mediante procesos de socialización desde la infancia temprana. Esos destinatarios no se conocen entre sí, pero acceden y reciben una misma obra cultural cargada de signos y símbolos polisémicos, representaciones simbólicas y ficcionales, que combinan y engarzan registros sýgnicos de elementos que existen tal cual en la realidad, otros que requieren ser adaptados para así parecerlo y otros elaborados para mantener a raya la percepción de que se trata invariablemente de un montaje escénico, regido y condicionado por los requerimientos del soporte técnico (al que se fijan todos esos disímiles elementos) y del canal de comunicación a través del cual la obra resultante será circulada y puesta a disposición de los destinatarios.

Aunque invariablemente todo programa televisivo implique una actuación de cara a otros, la representación montada y escenificada requiere ser verosímil y, ante todo, gratificar al destinatario de algún modo, para que éste decida sintonizar la señal que lo transmite y prestarle su atención y tiempo. Sin estar presentes, los espectadores participan de una realidad de la que sin ser protagonistas forman parte indirectamente, por el hecho de percibirla y seguirla con sus sentidos, emociones, pensamientos y actitudes, y las reacciones que les motive, conscientes de que los protagonistas se saben actuando para ellos, se dirigen a ellos impersonalmente y buscan que su actuación sea valorada como favorable por parte de ellos.

Análisis discursivo del contenido televisivo de opinión y debate político

Las categorías, unidades e indicadores de análisis se corresponden con las variables de interacción discursiva, identidad y papel de actuación discursiva y construcción del tema. La elaboración de

⁶⁶³ Tales aspectos son: intencional: son expresiones de un sujeto para otro sujeto (o sujetos); el destinatario percibe la forma como un mensaje y expresión de un sujeto y la pretende comprender. Lo que pretendió el sujeto productor puede llegar a ser comprendido y puede ser crucial en el significado movilizado; convencional: implican la aplicación de reglas, códigos y convenciones de diverso tipo (esquemas implícitos y presupuestos para generar e interpretar las formas simbólicas, generalmente son tácitas, compartidas y abiertas a la corrección y sanción; las que intervienen en la producción implican la codificación y las que intervienen en la recepción, implican decodificación y éstas no requieren coincidir); estructural: las formas simbólicas son concatenaciones de elementos y de las interrelaciones entre ellos; el significado transmitido se construye comúnmente a partir de rasgos estructurales (patrón de elementos que pueden distinguirse en casos de expresiones, enunciados o textos reales), y elementos sistémicos (que existen independientemente de cualquier forma simbólica, pero que se realizan en formas simbólicas particulares); referencial.- las formas simbólicas son construcciones que típicamente se refieren a algo, representan algo y dicen algo acerca de algo; la especificidad referencial de las figuras y expresiones depende de las circunstancias particulares en las que se usan: puesto que el referente es un objeto, un individuo o un estado de cosas extraligüístico, las formas simbólicas requieren de una interpretación creativa que va más allá de sus rasgos internos; contextual.- las formas simbólicas se insertan siempre en contextos y procesos socio-históricos específicos dentro y por medio de los cuales, se producen y reciben.

aquellas se asienta en las bases teóricas y conceptuales disponibles para el análisis de la interacción textual. Uno de los principios afirmados es la validez de recurrir al contexto discursivo, es decir, tomar en cuenta la relación entre texto y contexto, para reducir la ambigüedad de expresiones polisémicas. Aplicando los postulados derivados, cabe indicar que lo dicho (acción comunicativa) debe entenderse en el contexto de su enunciación, dentro de un contexto de la interacción comunicativa en la situación social concreta en que ésta se produce.

Eso tiene dos consecuencias metodológicas: a) que el habla de los participantes es comprendido e interpretado con todos los elementos paradigmáticos y metalingüísticos que intervienen en el proceso de enunciación; b) que la producción, desarrollo y consecuencias del proceso comunicativo, en virtud del cual se intercambian enunciados, debe ser interpretado a la luz de los elementos del contexto social, espacial y temporal en el que tiene lugar dicho proceso, es decir, dentro las condiciones sociales de producción discursiva y de la interacción comunicativa en que el discurso se actualiza. La observación e interpretación de segundo orden que hace el analista, respecto del sentido probable que se moviliza en un proceso dialógico cara a cara, tiene que considerar la identidad, el estatus y el papel de los participantes y las estrategias discursivas y los actos de enunciación en que éstas se concretan, así como los elementos sýgnicos del entorno físico inmediato en la situación de comunicación concreta.

Por eso, sólo con fines analíticos se puede metodológicamente separar el análisis semiótico del audiovisual y el análisis lingüístico discursivo del habla (en la interacción dialógica), que tiene lugar en un programa televisivo del género dialógico o apelativo, en el entendido de que la reinterpretación del resultado tiene necesariamente que articular las relaciones entre los tres sistemas de lenguaje que intervienen en el caso del audiovisual (visual, sonoro y lengua hablada), a partir de los códigos que son propios a la expresividad y producción de significación en las realizaciones o ejecuciones que supone un programa de televisión. Aquellos programas que se analizan tienen en común corresponder a una interacción comunicativa por la que se produce un intercambio, confrontación y crítica de opiniones dadas como argumentos, acerca de asuntos públicos de gobierno. Esto supone el montaje, la realización y producción acabada de una situación comunicativa dialógica, en el transcurrir del programa, escenificada para otros ausentes.

Los protagonistas son actantes discursivos en una interacción comunicativa concreta, en este caso presencial o cara a cara, moderadora o conducida por alguno de ellos, tal como convencionalmente puede tener lugar o es practicada; la finalidad compartida es informar e ilustrar el criterio del telespectador; el medio común para alcanzarla es el intercambio y confrontación de opinión argumentada o juicio personal. El análisis de esa interacción comunicativa implica una doble operación analítica de contextualización: formal o intertextualidad y social; la primera se inscribe en la segunda, que es la interacción social de producir y difundir un programa televisivo cuyo contenido es la puesta en escena de un dialogo, una discusión o debate. Éstas son modalidades que implican distinto tipo de formato de realización (transformación retórica-expresiva de organización y montaje de contenidos), conforme a pautas culturales convencionales: entrevista, mesa de análisis y discusión, tertulia, o un monólogo cuando simule un diálogo imaginario con un interlocutor ausente (el telespectador). La interacción comunicativa se produce en el marco de una cierta situación comunicativa, si bien en la televisión ésta se define por una actuación comunicativa para ser dada a conocer públicamente a otros no presentes, que participan de ella en el papel de espectadores, interlocutores pasivos o testigos, hacia quienes los participantes dirigen su actuación comunicativa.

En este punto se revela la paradoja derivada de la complejidad en el análisis de un programa de televisión de este género y formato, en el cual el emisor habla a la vez a sus interlocutores presentes y a los ausentes, pero con diferente finalidad y estrategia y, por tanto, poniendo en juego distintas *modalizaciones* discursivas. Los participantes asumen al destinatario de la emisión televisiva como la razón de ser de lo actuado y dicho en ella, de modo que se produce una comunicación cara a cara destinada a interpelar a observadores con quienes, mediante su difusión a gran escala, se pretende establecer una comunicación, aunque en televisión ésta sea necesariamente monológica e impersonal, es decir, los productores y participantes y el difusor del programa televisivo no puede conocer las reacciones de los telespectadores y éstos no pueden interpelar a aquellos.

Hay una gran diferencia de éstos programas, por ejemplo, con los de entretenimiento, en los cuales las interacciones comunicativas dentro de la narrativa audiovisual no apelan explícitamente a un sujeto ausente de ellas, no son el fin mismo del contenido, los personajes recrean una actuación que no tiene como referente a un observador de segundo orden, en el papel de interlocutor por lo pensado, dicho y actuado, que otorgue sentido a la trama en la que aquellos se insertan y que tenga consecuencia directa en la actuación de los protagonistas. Ésta es también diferente a la interacción comunicativa y la situación de comunicación implicadas en otros formatos del género informativo, tal como los noticieros, reportajes, comentario o documental dramático. Las condiciones de la situación comunicativa, su entorno semiótico y la actuación discursiva contribuyen en conjunto a la coherencia interna y global del discurso. La coherencia interna del discurso, que transcurre a través de un programa televisivo de opinión política, radica tanto en lo que explícitamente se dice en él, como en aquello que en él queda implícito, lo cual pone en juego distintas competencias del lector o intérprete. Si la coherencia textual contribuye a la competencia textual y ésta permite enmarcar textos, es decir definir los marcos dentro de los cuales se puede observar o atribuir coherencia, entonces debe prestarse atención y tomarse en cuenta los elementos o textos visuales que proporciona la escenificación de la interacción discursiva y la situación comunicativa.

La situación discursiva es la operación mediante la cual los objetos denotados se sitúan, se vinculan con las personas implicadas en el discurso, y se ordenan con respecto a las circunstancias de espacio-temporales del discurso (Coseriu, 1978), en cuanto creadas por el discurso mismo y ordenadas con respecto al sujeto. El lenguaje no dice las condiciones contextuales (porque no es necesario que las diga), pero las utiliza y, por tanto, la expresión real las implica y las contiene (Coseriu, 1978: 7). La expresión posee un significado virtual que permite adivinar el contexto (Eco, 1979). De acuerdo con Haliday (1975) el contexto de la situación es subsumido en el texto, hay que considerar por una parte, la relación entre el entorno social que es un constructor semiótico (en el que los objetos y las relaciones se organizan significativamente) y de otra parte, el sistema semántico y la organización funcional del lenguaje. El contexto no es un dato previo y exterior al discurso; los participantes a través de su interacción discursiva definen o redefinen la situación, su propia relación, el marco en el que se interpretan y adquieren sentido las expresiones (Sbisa, Fabbri, 1973). El texto o discurso no es más que una secuencia de signos que produce sentido, pues el sentido se produce en el funcionamiento textual y, a la vez, aquel produce lo que Eco (1989) llama “práctica significativa”; el texto es un dispositivo semiótico, un dato primario de la realidad inmediata, tanto una palabra como toda una obra, por su clausura y autonomía.

Los factores que originan la coherencia, desde el punto de vista parcial, son la sustitución diáfórica; la conjunción; las partículas; la estructura de modo, de tiempo y de aspecto de los

predicados; el orden de las palabras; pero desde el punto de vista integral, que es el que aquí interesa, la coherencia global la asigna el lector, cuya interpretación está sujeta no sólo a la recuperación de la información semiótica que el texto posee, sino también a la introducción de todos aquellos “elementos” de lectura que el sujeto puede poseer incluidos dentro de lo que habrá que entenderse por competencia textual.

Desde esa perspectiva y a partir de las premisas anteriores, todo programa televisivo puede ser comprendido como un texto o discurso, cuya interpretación depende de la coherencia interna del discurso y, a la vez, de la competencia textual del destinatario que lo recibe. El texto o discurso audiovisual de un programa se organiza como intertextualidad discursiva y como funcionamiento semiótico a partir de la utilización que se hace de los elementos visuales, sonoros y lingüísticos (orales y escritos), mediante pautas convencionales y principios y reglas organizadas como un complejo código para organizar los contenidos. En el análisis se adopta una perspectiva que considera la dinámica del funcionamiento textual, por la que el texto se asume como proceso semiótico que en su discurrir va produciendo sentido (Lozano, Peña Marín y abril, 1993). El funcionamiento semiótico se describe en el discurso, no en sus componentes frásticos o lexemáticos (Ricoeur, 1980), observando las reglas estructurales y refiriéndose a las condiciones de producción y los problemas relativos a su comprensión e interpretación (Kriestva, 1970).

Para fines de verificación de la hipótesis, interesó delimitar la observación hacia la acción enunciativa de los participantes⁶⁶⁴, y entre todos los enunciados que tienen lugar dentro del proceso de enunciación aquellos que aluden, se refieren o tienen por objeto a las opiniones de los ciudadanos, específicamente cuando en la situación comunicativa de la que son protagonistas, los participantes atribuyen a su propia opinión la cualidad de ser equiparable a la opinión de otros ciudadanos, o bien de que su propia opinión refleja la de ellos o que es compartida por ellos. La denotación y connotación en el nivel de las frases y sintagmas, es decir al nivel de la estructura profunda⁶⁶⁵, puede ser en términos pasivos o activos. Por eso, la lectura interpretación destacó, consecuentemente, los *actos ilocutivos* en los que el sujeto enunciante habla como ciudadano y en nombre de los ciudadanos, así como aquéllos en los que el enunciante asegura que lo que enuncia corresponde a lo que los ciudadanos pudieran pensar u opinar respecto a lo que habla.

⁶⁶⁴ Lo que supone tomar en cuenta lo enunciado dentro del proceso de enunciación en que es enunciado ya que El análisis se centra en el enunciado y la enunciación, porque es en el proceso semiótico interactivo que se define la situación, donde se caracteriza la relación interlocutiva de los sujetos y, por tanto, se descubre el sentido de un enunciado, desde la perspectiva de la lingüística discursiva transfástica, donde las frases no son sino segmentos del discurso-enunciado y por tanto el significado global de un texto es más que la agregación de las significaciones de las frases que lo componen, es decir, un suplemento de significación peculiar del texto se halla en tanto estructura textual. La frase es una entidad abstracta susceptible de una infinidad de efectuaciones particulares, mientras que el enunciado es cada una de esas efectuaciones de la frase. La enunciación da cuenta de los procedimientos formales que generan y organizan el discurso. En tanto que resultado de ella, el enunciado posee elementos que lo remiten a la instancia enunciacional conformada por localizadores espacio-temporales, formas pronominales, (Sperber, 1975 y Lang, 1976).

⁶⁶⁵ En la cual radican los principios que constituyen al discurso-enunciado como tal y por tanto es, a diferencia del superficial, el nivel pertinente para la interpretación semántica, aunque no lo sea para la interpretación fonológica, según la perspectiva teórica de las gramáticas generativas transformacionales (Chomsky, Katz, Postal), que postula que las frases se generan en dos fases, según las reglas de base de una primera etapa y las reglas de transformación de la segunda etapa, y que las frases y los sintagmas diferentes en superficie pueden derivar de la misma estructura subyacente y, a la inversa, pueden ser idénticos y derivar de diferentes estructuras subyacentes (por ejemplo, frases activas y pasivas).

Eso supuso analizar las frases y sintagmas que denotan al ciudadano ausente, es decir como sujeto pasivo, quien por una parte es encarnado en el discurrir de la enunciación por el enunciante y, por otra parte, representado por su voz manifiesta previamente captada y registrada por algún medio del que dispone el enunciante para justificar que se trata de la voz de otro ciudadano o las voces de otros ciudadanos⁶⁶⁶. De ese modo, el enunciante atribuye al sujeto de quien habla o dice algo la propiedad de ciudadano y en el segundo caso el enunciante se atribuye a sí mismo la calidad de ciudadano. Es a partir de la contextualización del enunciado, producido en el transcurso de su enunciación dentro de un texto, que tanto los objetos y sujetos que son construidos -como significantes mediante los actos de habla-, así como la narrativa en que se sitúan y desarrollan como tales, pueden ser interpretados y comprendidos, junto con las intenciones del autor o hablante y las de los interlocutores o destinatarios a los que se dirige.

Desde ese punto de vista, el programa televisivo de opinión política está basado en la escenificación de una interacción comunicativa, cuyo valor es la interacción comunicativa en sí misma, aquella que consiste en presentar la opinión propia y examinar y, en su caso, confrontar la de otros, sobre un tema en común de interés colectivo. La significación global dependerá de si los elementos audiovisuales puestos en funcionamiento contribuyen a la verosimilitud de una interacción comunicativa con esos fines, uno de cuyos medios es la interlocución entre pares al margen del tema de que sea tratado. El valor del programa está dado por la acción de debatir, en mayor medida o incluso al margen que la relevancia del tema, cuya elección corresponden a los participantes, nunca a los destinatarios de finales de la interacción escenificada.

Este argumento es especialmente decisivo, en términos metodológicos, para la verificación de la hipótesis, porque subsana la dificultad que entraña examinar diferentes programas con distintos formatos, si bien desde luego todos reúnen la condición principal de que su contenido depende de una interacción comunicativa en la que se analiza y discute un tema. La verificación de la hipótesis tiene dos condiciones necesarias: que en la emisión televisiva se produzca un debate y que, simultáneamente, éste verse acerca de un asunto público político que atañe y afecta a los ciudadanos, si bien cabe aclarar que lo que se trata de probar es que el juicio o evaluación crítica del desempeño de los legisladores tiene lugar en ese tipo de programas, no si se convierte en tema o no en sí mismo, lo cual es una eventual posibilidad. Los datos semióticos y discursivos de la prueba (“duro”) son: que se produzca una discusión o debate, que éste se ocupe del desempeño de legisladores federales y que los participantes actúen como ciudadanos o en nombre de ellos; su ocurrencia en una emisión permitirá comprobar que la representación simbólica del escrutinio ciudadano tiene lugar en programas de opinión política.

Esa representación simbólica se deduce de la modelización del ejercicio de escrutinio ciudadano, elaborada y sustentada en el capítulo 1. La cuestión metodológica en este punto consistió en determinar cómo constatar que los conductores y participantes, de estos programas televisivos, pueden estar haciendo una evaluación en nombre de los ciudadanos con respecto al desempeño de los actores políticos, cuando se asumen y erigen en “portavoces” del sentir ciudadano. Un

⁶⁶⁶ El medio al que el enunciante hace referencia es en sí mismo un texto o discurso ajeno al que transcurre en la interacción comunicativa, mismo que puede poner al servicio del discurso que construye de cara a sus interlocutores, en tanto que un objeto referente denotado por la remisión a una fuente de información de dominio público, de la que puede o no ofrecerse un testimonio documental (gráfico, por ejemplo). La remisión puede ser ambigua y el horizonte de sentido restringirse, por tanto, a un consentimiento implícito por parte de los interlocutores, en el caso del programa televisivo por parte de los telespectadores.

modo plausible es intentando rastrear la manera en que la opinión de los ciudadanos se encuentra referida en los discursos de los conductores y participantes de tales programas televisivos, es decir, a partir de las estrategias del discurso referido que ponen en funcionamiento.

Ahora bien, por su contribución como herramienta analítica para la prueba de hipótesis, conviene especificar la naturaleza del discurso referido y del discurso argumentativo, así como las operaciones de modelización textual que ponen en juego los actuantes discursivos en la situación interactiva de debate o discusión de opiniones o juicios.

A diferencia del discurso propio que es el formulado por el orador/enunciador de que se trate, es aquel que es retomado por otro orador, quien puede citarlo o parafrasearlo. Los discursos referidos son parte de aquello que, entre otros, Ducrot llama “heteroglosia”, es decir la manera en que dentro de un discurso podemos hallar otros discursos, otras voces alternas al hablante., En su clasificación de argumentos, Plantin (2005) identifica también ese fenómeno discursivo que define como “argumento de autoridad” (planteado también por Ch. Perelman, van Dijk, entre otros). Se trata de un argumento de confirmación, sostiene una conclusión P, en el seno de una argumentación cuya forma canónica es la siguiente:

Proponente: P, puesto que X dice que P y X es una autoridad en la materia.

Existe argumentación de autoridad cuando el proponente (“P”) da como argumento a favor de una afirmación el hecho de que ha sido enunciada por un locutor particular autorizado, en quien se apoya o refugia. La justeza de “P” se apoya en el hecho de que lo admite una persona o personas que funcionan como garantes de esa justeza. Pueden existir al menos dos casos:

CASOS

INDICADORES

A) **La autoridad mostrada:** el locutor mismo es fuente de credibilidad; caso para el cual funcionan como indicadores: la apariencia y la reputación

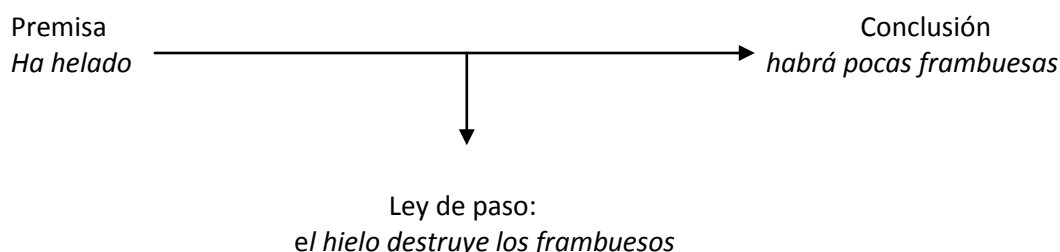
B) **La autoridad citada:** el locutor elabora una paráfrasis que se tiene por forzosa, o más o menos fiel de lo que otro locutor ha enunciado, en este caso los indicadores que se pueden utilizar son:

- 1) *autoridad lingüística*, elaboración de enunciados “realizativos” como promesas o compromisos;
- 2) *acceso privilegiado a la información*, los enunciados expresados por el locutor se tiene por creíbles en la medida en que: a) expresan estados interiores propios, b) el locutor se encuentra en una posición particular al estar presente en el suceso que relata (testimonio), c) el locutor se hace llegar de información confidencial y confiable a través de mecanismos heterogéneos
- 3) *fuentes autorizadas*, el locutor retoma aseveraciones que se consideran infalibles por provenir de otros locutores dotados de autoridad en función de circunstancias muy precisas; es el caso de retomar la opinión de expertos, especialistas o profesionales; o bien, de documentos legítimos, jurídicamente válidos y de amplio reconocimiento y/o prestigio;
- 4) *actores anónimos con autoridad*, donde la fuente que se cita posee una autoridad difusa pero aceptada convencionalmente, por ejemplo, apelar a la sabiduría de los mayores, la costumbre, el consenso, la muchedumbre, la mayoría, los ciudadanos, la ciencia o la opinión pública

También para efectos de la prueba de hipótesis y la interpretación de resultados se advirtió, en otro orden de ideas, el hecho de que ante un asunto o tema considerado como polémico, lo cual haría suponer que da pie o hace propicia un debate, puede ocurrir que, sin embargo, no lo suscite, ya sea porque los interlocutores participantes en la interacción comunicativa no tenga divergencias entre sí, coinciden o bien se conducen de forma tal que no manifiestan desacuerdo, de tal modo que la situación de debate –uno de los rasgos del escrutinio ciudadano-, no tenga lugar en la interacción comunicativa escenificada por los protagonistas del programa televisivo. En razón de ello, la observación debe considerar información que permita verificar si el asunto o tema prejuzga o no, condiciona o no, que el intercambio de puntos de vista y opiniones devenga efectivamente en una confrontación de los mismos entre los interlocutores participantes. Una manera apropiada de observar y registrar ese hecho es verificar si se utilizan o no argumentos de refutación, una estrategia discursiva típica en un debate, con independencia de cuál sea el tema particular que se discute, en el entendido de que solamente interesan temas de orden político.

Por consiguiente, la prueba de hipótesis implica verificar si en la interacción discursiva se han puesto en operación ciertas estrategias características de una interacción comunicativa del tipo “debate”. Con ese propósito, se recurrió a la teoría argumentativa de C. Plantin (2005) quien, a diferencia de otros autores que soslayan el “diálogo argumentativo”⁶⁶⁷, reconoce dos tipos de discursos argumentativos: el monológico y el dialógico. El primero es aquel que elabora un orador y que recurre a una serie de datos y fundamentos para sustentar una tesis. El segundo, por el contrario, es aquel que se produce en situaciones de debate, en las cuales no sólo se busca sustentar la tesis propia, sino socavar la fuerza argumentativa del discurso del opositor. Sólo así puede entenderse que el debate es un espacio de confrontación, es decir de disputa de argumentos. Para verificar que estamos ante una situación de debate, es preciso identificar, por tanto, las estrategias tanto argumentativas como a la vez las de refutación.

La estrategia argumentativa es factible de ser analizada en la medida en que se puedan identificar premisas, conclusiones y leyes de paso. La premisa es el punto de partida para arribar a una conclusión, establece los antecedentes, la situación, las condiciones en que se presenta un hecho o fenómeno del cual se hará derivar una tesis. La conclusión permite establecer un estado de cosas o intentar movilizar una acción o actitud frente a un hecho determinado. La ley de paso aporta a la premisa el sentido argumentativo que no tenía antes. De ahí toma la premisa su orientación hacia la conclusión. Por tanto permite al argumentador apoyar lo que dice en un principio, en una convención admitida en su comunidad de habla. El siguiente esquema de un ejemplo sirve para ilustrar:



⁶⁶⁷ Georges Vignaux y Chaim Perelman han expuesto sus teorías apelando a la argumentación que construye un orador único y desconociendo las posibles respuestas o refutaciones que puedan elaborar adversarios u opositores de las tesis que se le presentan.

Esto es lo que Plantin ha denominado “esquema argumentativo mínimo” o “célula argumentativa”, debido a que no es posible hablar de argumentación si no están presentes en un discurso al menos esos elementos. Sin embargo, para constatar que se está ante un debate, se requiere atender también a las estrategias de refutación. Siguiendo a este autor, desde el punto de vista de la argumentación lógico-científica, un enunciado resulta refutado cuando se ha demostrado que era falso; pero desde el punto de vista concreto de la argumentación entendida como interacción, una proposición resulta refutada cuando ha sido abandonada por su proponente. Dicho de otro modo, una proposición ha sido refutada cuando se constata que desaparece la interacción. A diferencia de la objeción que apela a una respuesta, la refutación pretende concluir el diálogo. La única manera en que puede continuarse con un diálogo, en el cual uno de los argumentos ha sido refutado, es esbozando argumentos distintos.

Las estrategias más frecuentes de refutación son las siguientes:

1. Descalificación del opositor como sujeto.
2. Descalificación de las tesis del opositor.
3. Descalificación de los argumentos principales.
4. Descalificación de los implícitos de las tesis.
5. Imputación de tesis al opositor.
6. Elaboración de implícitos que no están considerados.
7. Refutación por silencio (ignorar el discurso del otro).
8. Reformulación de argumentos o tesis contrarias a favor de la argumentación propia.
9. Puesta en evidencia de contradicciones en el discurso del opositor.

Hasta aquí se han justificado el procedimiento metodológico y la incorporación de los elementos de observación, registro y análisis para verificar si en programas televisivos de opinión tiene lugar o no un debate. Ahora bien, del hecho de que la discusión escenificada por parte de sus participantes verse sobre un asunto público, no se sigue necesariamente que se trate de una evaluación o un examen crítico acerca del desempeño de los actores políticos. Esto tendrá que ser indagado mediante el registro de indicadores discursivos que denoten y connoten que, en el contexto de la enunciación, los participantes en el intercambio y confrontación de opiniones se refieren explícitamente a los actores políticos o gobernantes, o bien en específico a los legisladores federales (diputados federales y senadores), así como que al hacerlo juzgan su actuación o desempeño, lo cual podrá ser comprobado, por una parte, mediante la manera en que se usan los elementos *deícticos personales* en el contexto de la enunciación⁶⁶⁸.

La deixis personal señala las personas del discurso, presentes y ausentes, en el momento de la enunciación, es decir, indica quiénes son los participantes en el evento, cómo se asumen (individual o colectivamente), cuál es su rol en el momento del discurso y a quién lo dirigen. Los indicadores que se utilizan para su observación y registro son los pronombres personales, el emisor puede asumir una identidad singular (1ª persona del singular: yo), colectiva (1ª persona del plural: nosotros “yo+tú” o “yo+ustedes, cuando están presentes”, “yo+él o ellos, cuando están ausentes”), o impersonal (3ª persona del singular: él, ella, “uno mismo”); en tanto que el receptor puede inferirse a partir de los pronombres utilizados para apelarlos, según que el tratamiento que

⁶⁶⁸ El contexto de enunciación define el sentido de las palabras. De las marcas gramaticales más importantes para reconstruir elementos contextuales sobresalen los deícticos. Los deícticos son piezas que, al ser altamente dependientes de la situación de enunciación, permiten interpretar quién pronuncia el discurso, a quién, cuándo y dónde es pronunciado, Calsamiglia y Tusón, 2004: 116-136.

se otorgue sea formal o informal (2ª persona del singular: tú o usted); o bien cuando están ausentes (2ª persona del plural: ustedes; 3ª persona del singular o del plural: él, ella, ellos); los pronombres posesivos (mío, tuyo, suyo, nuestro); los adjetivos posesivos (mi, tu, su, nuestro); y los morfemas verbales de persona (terminación de los verbos conjugados que indican a qué persona se atribuye la acción).

En estos dos últimos aspectos, la verificación de confrontación de juicios (argumentación) y opiniones (evaluación o valoración) entre los oradores, por una parte, y la utilización de la identidad de ciudadano por parte de los oradores, la referencia y la apelación a los ciudadanos y la atribución de la voces de los ciudadanos a la opinión propia por parte de los oradores, por la otra, residen en sentido estricto la verificación de la prueba de la hipótesis: a saber, que tiene lugar un debate, que es llevado en nombre de los ciudadanos y para los ciudadanos y que versa acerca de el examen crítico de la actuación de gobiernos y el desempeño de los gobernantes, en particular de los legisladores federales y el Congreso.

Desde luego, por otra parte, el tono en la enunciación o habla, la yuxtaposición de enunciados producidos o ejecutados al mismo tiempo por parte de participantes distintos a la vez, así como la gesticulación, las posiciones del cuerpo de los participantes y las expresiones de estado anímico son aspectos semióticos que necesariamente deben ser tomados en cuenta, y por tanto se procedió a su observación, registro y análisis. No obstante, considerados todos no sólo como componentes del proceso de enunciación, en el que se origina, sino del contexto de la situación e interacción comunicativa en el que la enunciación tiene lugar. Por eso, en el análisis se consideraron como datos que afirman o debilitan la representación simbólica del debate, su carácter crítico y su verosimilitud en función del telespectador. Éste es constantemente apelado por lo dicho por los participantes y sus sentidos estimulados mediante la imagen visual y acústica de ellos durante la interacción comunicativa, es decir, mediante aquello que en conjunto se escenifica en el programa.

Esa apelación y estimulación inducida se produce tanto en términos de captar el interés y retener la atención, como de la orientación que busca dar el realizador del programa al sentido con que pueda ser interpretado lo que se actúa y escenifica en el programa. Lo cual puede conseguir mediante la conducción de los planos y secuencias realizados a través de las cámaras de video, acercamientos al rostro de los participantes, al de alguno para confrontarlo con el del otro o al de todos ellos, si de ese modo se consigue captar imágenes que denoten estados de ánimo y actitudes a partir del lenguaje corporal, tal como desacuerdo o rechazo, aceptación o acuerdo, indiferencia o atención profunda, dudas o desconcierto, así como la incorporación de elementos sonoros. Del registro de ello depende, además, que se pueda observar y registrar el tono de la enunciación, no sólo del discurso en que deviene, mismo que puede ser más o menos crítico o condescendiente, sereno o apresurado, fuerte o débil, dato semiótico que puede contribuir a afirmar el carácter de discusión, así como la intensidad de la misma, con lo que se confirmaría la representación simbólica analizada.

Conviene advertir que con base en el criterio de análisis, se registro la frecuencia de cada aspecto y elemento considerado, dentro de la interacción comunicativa escenificada en el programa, pero sólo en cuanto a aquellos que contribuyen a movilizar los ejes de la representación simbólica prototípica del escrutinio ciudadano, a partir de las variables consideradas, es decir, la escenificación de una discusión verosímil, entre ciudadanos e invocando o refiriendo las opiniones de ellos, en torno a la evaluación de la actuación y el desempeño de actores políticos, en particular

de legisladores y partidos políticos (grupos parlamentarios) en el Congreso. Es evidente que a mayor reiteración de esos aspectos y elementos considerados, mayor probabilidad de que la representación simbólica quede demostrada en el contenido del programa. Pero la frecuencia e intensidad no forma parte del modelo de prueba de la hipótesis, porque el objetivo del estudio es verificar si tiene ocurrencia o no la situación modélica. Es a partir de la contextualización del objeto, la discusión y evaluaciones críticas a partir de participantes ciudadanos que toman en cuenta las opiniones de los ciudadanos, en ambos casos acerca de la actuación y el desempeño de los actores políticos en general y de los legisladores federales en lo particular, que se pueden hacer inferencias válidas acerca del tratamiento de ese y los demás objetos referentes o unidades temáticas dentro del contenido de los programas televisivos.

En resumen, la pauta o patrón de comportamiento que se buscó verificar fue:

- a) el intercambio y confrontación de puntos de vista a través de la conversación interpersonal;
- b) que esa interacción comunicativa tome la forma o devenga en un debate o confrontación de opiniones o juicios de valor que se presuponen argumentados, ya sea defendiendo las propias o las de otros ausentes, invocados o apelados, y refutadas las de los otros, presentes y ausentes;
- c) que se impliquen o involucren las opiniones o valoraciones de otros, siempre que sea en la identidad o cualidad de ciudadanos o de autoridad que habla sobre ellos, que no participan en la comunicación presencial, quienes son destinatarios de lo actuado y dicho en el transcurrir de la interacción comunicativa presencial y a quienes el programa televisivo está dirigido;
- d) que esos destinatarios sean apelados, en el transcurrir de la actuación comunicativa presencial, en calidad o con la identidad de ciudadanos, no sólo de telespectadores.

Cabe señalar respecto al último aspecto que su observación supuso registrar indicadores ("marcas discursivas") del tipo "nominalizador" por el que en la estructura subyacente del texto se corroboran elementos *frásticos* y sintagmas que denotan y connotan el significado del telespectador como ciudadano. En el análisis discursivo, los elementos *diafóricos*, por ejemplo, permiten remitir el nombre o sustantivo del "telespectador" al nombre sustantivo de "ciudadano" y viceversa, como elementos co-referenciales. Igual ocurre con "público", "la gente" y "los mexicanos", con "audiencia" y "telespectador", así como con las frases "al público que nos ve y escucha", "al público que nos sintoniza o está sintonizando", "a Usted que nos escucha" o "a Usted que nos hace el favor de ver", "al público televidente" "a "los televidentes", indistintamente del predicado que acompañan al sujeto y verbo denotados con tales frases y sintagmas.

Estos elementos afirman la coherencia interna del texto en cuanto a identificar los destinatarios de los mensajes, del dialogo o la discusión que se produce durante la emisión televisiva, por cuanto permiten trabajar con las *isotopías* (propiedad semántica del texto que permite destacar los planos homogéneos de significación y que se apoya sobre la redundancia y reiteración, en varios segmentos textuales, de elementos semánticos idénticos). Éstas son la base sobre la cual se insertan las significaciones particulares de cada segmento del texto, sin que su especificidad comporte ni dispersión ni inconciabilidad de los diversos sentidos. Los elementos *diafóricos* facilitan la posterior lectura de los elementos exotéricos que estarían vinculados a la situación⁶⁶⁹ (Lozano, Peña-Marín y González, 2003).

⁶⁶⁹ En cambio, los elementos exotéricos equivalen a los *indexicales* o *indiciales* que requieren información contextual para ser comprensibles y carentes de ambigüedad; marcan la ubicación de los textos y de su significado en la ocasión, en la situación en que son enunciados.

Modelo metodológico aplicado

En lo que sigue se describe en conjunto el modelo de análisis, el procedimiento para la prueba de hipótesis y de observación y registro de datos y su aplicación al estudio de caso. Las premisas metodológicas son: a) todo programa televisivo puede ser considerado como una obra cultural unitaria completa; b) pero se trata a la vez de un producto mediático, por tanto su producción atiende al destinatario al que se dirige, de quien se espera que lo aprecie; y por consiguiente c) al incorporarlo a su programación, el emisor que lo difunde determina el valor simbólico que le atribuye, según estime o pueda constatar el número y perfil de personas que podrían sintonizar su señal para consumir dicho programa.

Esto último implica que todo programa se produce para satisfacer una cierta demanda social de contenido por parte de los teleespectadores o audiencias de televisión⁶⁷⁰. Como una obra cultural unitaria con una determinada finalidad del productor, el contenido global de todo programa puede constituir una forma simbólica cultural compleja, misma que a la vez articula formas simbólicas culturales particulares, mediante mecanismos y dispositivos técnicos, humanos y materiales, algunas de las cuales pueden ser sujetas al análisis formal semiótico y discursivo, atendiendo al objetivo de investigación⁶⁷¹.

El análisis formal de los programas televisivos se hizo en dos niveles relacionados entre sí⁶⁷²: semiótico y discursivo, es decir, considerando los rasgos esenciales y estructurantes utilizados en su construcción como texto o discurso audiovisual de acuerdo con el género de su contenido, e identificando el funcionamiento semiótico y discursivo de aquellas partes integrantes que permiten verificar el comportamiento esperado según la hipótesis.

Desde ese enfoque, el análisis atendió en primer término al funcionamiento semiótico de su expresividad visual, sonora y hablada, tal como es configurado el texto o programa como género de contenido y formato de realización y montaje y, en segundo término, centrándose en los aspectos que da cuenta de la presencia de la forma simbólica objeto del análisis. Lo primero supone determinar qué dice el programa, para quién y con qué finalidad, lo segundo llevó a identificar de qué manera lo actuado y lo dicho por los participantes puede movilizar el sentido de interpretación a que tiene lugar el comportamiento presupuesto en la hipótesis. En ambos casos, esa determinación está en función de las convenciones culturales establecidas en el contexto

⁶⁷⁰ Esta es la finalidad originaria y común a la producción y difusión de todo programa, es decir, satisfacer alguna necesidad de información, conocimiento, recreación y entretenimiento compartida por un vasto y heterogéneo conglomerado de personas que habitualmente ven televisión. Aquí no cabría prejuzgar el alcance del programa, una variable que no determina las características del mismo una vez que ha sido difundido, porque su sola inserción en la programación justifica su costo-beneficio como una relación favorable para el concesionario o permisionario de televisión que lo difunde. Todo programa debe ser financiado de algún modo, dejando un beneficio mayor al costo que representa y ese criterio vale para televisión privada y pública.

⁶⁷¹ Aquellos programas televisivos en los que se produce debate, éste versa acerca del examen de la actuación y el desempeño de agentes políticos, implicando que ello atañe a los ciudadanos, en nombre de quienes se evalúa y juzga, y los participantes de tales programas atribuyen a lo que dicen alguna correspondencia o similitud con lo que opinan los ciudadanos al respecto.

⁶⁷² Que fueron distinguidos sólo con motivo tanto para efectos de la observación, recopilación y tratamiento de información, como de la interpretación de resultados, si bien integrados por una interpretación global por programa y del conjunto de programas televisivos objeto de este estudio.

social, espacial y temporal de los programas difundidos, que constituyen el *corpus* del análisis. Es evidente, por ejemplo, que cualquiera pueda comprender lo que es una entrevista en televisión, en virtud de tales pautas culturales compartidas, tanto por quienes ven televisión como por quienes aún sin haber visto ese tipo de programas televisivos, saben lo que significa una entrevista a partir de la experiencia de vida.

Interesó determinar qué aspectos permiten verificar que lo escenificado y narrado es efectivamente una entrevista, lo mismo aplica al caso de una confrontación de opiniones o debate argumentado de ideas, así como la evaluación del comportamiento de un agente político ante ciertos hechos. Por eso, se hizo el contraste entre el género y el formato utilizados en el programa. Los programas que son objeto de estudio se caracterizan porque su contenido gira por completo en torno a una interacción comunicativa y su situación contextual, de tal modo que éstas son en sí mismo el contenido del programa. Éste tiene como finalidad y objeto de producción el análisis de un tema y la confrontación de opiniones argumentadas respecto al mismo, entre expertos en ciertos asuntos, analistas políticos, periodistas y, eventualmente, actores políticos, donde el ejercicio de evaluación crítica acerca de la acción de gobierno y el desempeño del cargo funcionarios y legisladores no es un tema o asunto en sí mismo, sino que puede o no ser una acción realizada ante diversos temas o asuntos, incluso aquellos vinculados a distintos campos de actividad social (económico, político, cultural). Por eso se supuso que el tema puede ser marginal frente a la acción de debatir cualesquiera.

Procedimiento de análisis y prueba de la hipótesis

El análisis se dirigió a verificar si la forma simbólica ideológica del escrutinio ciudadano⁶⁷³ puede ser movilizada por la forma simbólica cultural del análisis y debate de temas políticos, entre ciudadanos y para los ciudadanos, dentro de la difusión televisiva. La hipótesis se comprueba si se verifica que se produce un traslape entre una forma simbólica ideológica (examen de ciudadanos del desempeño de agentes políticos) y una forma simbólica cultural (programa televisivo de contenidos de opinión), de tal manera que se produce la escenificación de escrutinio público llevado en nombre de los ciudadanos acerca de agentes políticos. Las operaciones implicadas son: identificar la presencia de rasgos típicos de la primera dentro de la segunda y confrontar los rasgos típicos de ésta para cada tipo de programa televisivo del *corpus*, según género de contenido, formato de realización, participantes y emisor televisivo.

La forma simbólica ideológica del escrutinio ciudadano resultó de los os rasgos típicos que lo designan y caracterizan desde el punto de vista de la teoría normativa de la democracia liberal, lo que fue expuesto en el capítulo 1 de este estudio; tres de ellos definen el sujeto, la finalidad y la acción; el resto las condiciones de modo o procedimiento de la interacción social. El análisis se centra en las formas simbólicas mediante las cuales sus respectivos productores hacen una evaluación de la actuación y el desempeño de agentes políticos, a través de emitir su opinión personal de tal modo que sea interpretada como válida y representativa de los interlocutores no presentes en la situación comunicativa en que se producen (ciudadanos), y a quienes está dirigida tanto la opinión como la situación comunicativa en la que se emite (telespectadores). En el curso de la interacción discursiva se producen otras formas simbólicas vinculadas a las modelizadas, con las que se traslapan y las cuales sirven de soporte para orientar el sentido de la significación.

⁶⁷³ Tal forma es la práctica política democrática consistente en la evaluación crítica que los ciudadanos hacen acerca de la actuación de las instituciones de gobierno y del desempeño de sus titulares.

- Expresar la opinión en calidad de ciudadano respecto a representantes políticos. Eso implica sustituir la personalidad del agente político que actúa como intermediario de los ciudadanos y cuyos interlocutores primarios son los ciudadanos.
- La opinión transcurre como evaluación reflexiva y de modo crítico acerca del desempeño de las instituciones a partir de la actuación de los dirigentes políticos (buscando las implicaciones y consecuencias probables y haciendo énfasis en aquellas que el opinante juzga desfavorables para los intereses de las personas, cierto grupo o en general para la población del país).
- Imputar responsabilidad a los actores políticos sobre ciertos hechos que se esgrime afectan a los ciudadanos o a un grupo de ellos o de la población.

El **primer paso** consistió en establecer los rasgos típicos esenciales de la práctica política de escrutinio público ciudadano, a partir de los principios y reglas del ideario de la democracia liberal representativa, analizados prolija y exhaustivamente por las teorías normativas de la democracia en las sociedades modernas. Se identificaron los rasgos peculiares de dicha práctica política a partir de los elementos estructurales de toda forma simbólica de acuerdo con el planteamiento analítico de Thompson (1996).

El **segundo paso** fue identificar los aspectos del funcionamiento semiótico y discursivo del tipo de programas televisivos, como unidad de significación global (es decir como una obra unitaria e independiente de mensajes audiovisuales) tal como es construida durante su realización y mostrada en su transmisión televisiva.

El **tercer paso** consistió en verificar que la forma simbólica ideológica puede ser representada en la forma simbólica cultural, lo que se hizo mediante el contraste entre los rasgos estructurales de una y otra observados y registrados en los programas que constituyeron el *corpus* del estudio, a fin de identificar coincidencias y divergencias que favorecen o inhiben la movilización del sentido presupuesta en la hipótesis.

El **cuarto paso** consistió en comparar, con base en la interpretación de los resultados, los rasgos comunes a los diversos tipos de programas televisivos que dan cabida o hacen propicio el traslape entre ambas formas simbólicas consideradas, así como sugerir algunas implicaciones y consecuencias que derivan de ese fenómeno, en términos de los ciudadanos telespectadores de ese tipo de programas televisivos en México.

Procedimiento de observación y de recopilación y tratamiento de información

Se consideraron los aspectos semióticos y lingüísticos que indiquen rasgos del patrón del tipo de acción en el contexto de una interacción comunicativa presencial de cara a telespectadores, es decir, que permita construir analíticamente la situación de comunicación caracterizada como “casi interacción televisiva” y el tipo de acción: “actuar para otros no presenciales apelando indirectamente al receptor”, definidas y analizadas por Thompson (1998), a partir de dos niveles:

1) Textual: estructurado por ciertos índices o marcas discursivas que pueden tipificar la pauta con que se organiza el sentido de la significación de los mensajes audiovisuales y lingüísticos, analizados en cuanto a su función y a su relación entre sí como discurso.

2) Contextual: estructurado por la finalidad del programa televisivo, el tipo de formato y la audiencia hacia la cual va dirigida.

En el primer nivel se consideraron a su vez dos planos de observación y análisis: el plano semiótico para los aspectos del funcionamiento del lenguaje audiovisual, y el plano lingüístico y paralingüístico, para los aspectos discursivos y del proceso de enunciación.

En el primer plano se observó la interacción comunicativa entre sujetos en cuanto a sus circunstancias físicas y temporales, tomando en cuenta la construcción sónica de los objetos visuales y el lenguaje no verbal que funcionan como principales referentes para la percepción (escenario, posturas y gesticulaciones; mobiliario). En el segundo plano, se observaron el uso del lenguaje y la construcción de las cadenas habladas, sujetas a análisis de sintaxis para determinar los objetos acerca de los cuales se refieren, análisis semántico para establecer la relación que los actantes establecen con la realidad (uso léxico, elección de verbos) y análisis pragmático o del discurso en interacción, para observar como se utiliza el habla según qué intención tienen los participantes y a quién se dirigen.

El dispositivo discursivo que tendría que ponerse en juego para que se verifique la representación simbólica del escrutinio ciudadano, consiste de las estrategias de argumentación y refutación, el discurso referido, así como la utilización de enunciados *illocutivos* que establezca la apelación a la representatividad de la opinión de ciudadanos, ya sea porque se habla en esa calidad, o se habla en nombre de ellos, se esgrime que se conoce su opinión o juicios, o bien se hacen inferencias de éstos con base en la remisión a una voz autorizada (estudios, estadísticas, encuestas de opinión).

Por eso se aplicaron herramientas de análisis del discurso argumentativo y del conversacional, el primero revela intenciones de persuasión y mecanismos de autoridad y de refutación puestos en práctica; el segundo, revela la pauta de turnos de habla que, aplicados al caso revelarían si se recrea una conversación familiar o entre amigos, o bien una polémica acalorada, así como la forma de evocar que el ciudadano está o no convidado a su efectuación. Se trata de determinar la manera en que tiene lugar la autoconstrucción del hablante (individual o colectivo), la construcción de interlocutores (como aliados, adversarios, neutrales o distantes) y de ahí a la construcción del referente acerca del que se habla, conversa o discute.

De ahí que se consideraron los elementos paralingüísticos, aquellos que añaden significación a lo hablado o escrito y los que intervienen en la expresividad y la función retórica del discurso en el proceso de comunicación, tal como la proximidad entre participantes, los movimientos del cuerpo, las gesticulaciones y señales corporales, el tono de la voz y el estilo de oratoria. Tales elementos potencian su significación y movilizan el sentido de la interpretación presupuesta, al ser observados y analizados en conjunto con los indicadores semióticos del contenido audiovisual, derivados del formato del programa televisivo y la manera en que actúan sus participantes, tales como el tiempo dedicado a cada participante, el manejo de planos (para enfocar por ejemplo interrupciones, yuxtaposición del habla de dos o más participantes, gestos de estado anímico, etc.) y el montaje que da lugar a la narrativa audiovisual (incluida la escenografía, el mobiliario y la incorporación de imágenes visuales y acústicas durante su transcurso), en la medida en que remitan el sentido de lo denotado y connotado hacia la escenificación de debate de opiniones.

El análisis semiótico correspondió a los aspectos de significación audiovisual y el análisis lingüístico-discursivo a los aspectos de significación de los actos de habla, considerados unos y otros aspectos en su interrelación, es decir a partir de la actuación de los participantes y en las condiciones de producción textual con que transcurre el contenido audiovisual del programa televisivo. El análisis global es de orden deductivo y cualitativo; las operaciones transitaron de lo general a lo particular de la significación, de los elementos con mayor margen de connotación pero que dependen por entero de lo denotado –tal como es el caso de los signos y símbolos visuales y sonoros–, hacia los elementos cuya lectura e interpretación dependen en menor medida

de lo denotado y cuya *inter-textualidad* demanda mayor competencia reflexiva y textual en los participantes y en los espectadores o destinatarios de la emisión televisiva.

En los programas cuyo contenido consiste en una interacción comunicativa real (no imaginaria o ficticia), las imágenes visuales y acústicas detentan un mayor grado de iconocidad y fijación al soporte técnico del medio de transmisión que aquel que pueden detentar los elementos orales o hablados, más densos, volátiles y efímeros y que por tanto menor retención pueden provocar. Esto permite presuponer que toda emisión es realizada de modo tal que cualquier telespectador pueda entenderlo y disfrutarlo; por tanto, su contenido debe guardar congruencia con las pautas culturales convencionales de reconocimiento y valoración de contenidos a través de la televisión.

Aplicaciones del modelo metodológico

El análisis semiótico audiovisual se centra en la interacción comunicativa, mediante el registro de elementos y aspectos que puedan significar que los participantes discuten, debate, confrontan puntos de vista, critican; que se saben actuando de cara al espectador; que se dirigen al telespectador como voces autorizadas, expertos, analistas, didácticamente, para ilustrarlo; que se producen situaciones de tensión, expectación, o bien tranquilidad, respeto, contemplación entre participantes; con qué frecuencia se interrumpen y con qué frecuencia siguen turnos ordenados en secuencia sin interrumpirse; si se introducen elementos visuales y sonoros, tales como reportaje, encuesta, sondeo de opinión en calle, entrevista o declaración de algún personaje, un docudrama (documental dramático) dentro de la emisión, en qué momento, para qué y cuáles son las reacciones de los participantes. Todo ello a partir del registro de las emociones y actitudes que asumen los participantes y que son tomadas por la cámara⁶⁷⁴, mediante planeo, emplazamientos y secuencia de tomas. El análisis es descriptivo e interpretativo, primero se describe lo que ocurre y luego se propone una interpretación acerca de las finalidades que el realizador del montaje (director de cámaras y del programa) puede perseguir mediante los emplazamientos de planos y montaje de las secuencias⁶⁷⁵.

Obviamente el marco está dado por la descripción genérica, en cada programa, si es grabado y diferido o si se transmite en directo, la duración total del programa, la de los cortes o anuncios publicitarios, la frecuencia con que éstos se intercalan a lo largo del programa; así como la intercalación de imágenes exteriores al escenario, la introducción de identificación con que abre y con qué cierra el programa; los créditos y las advertencias sobre el contenido; la difusión de correo de voz o de correos electrónicos enviados por los telespectadores.

La descripción general de la escenografía y montaje es un dato semiótico central para definir la interacción comunicativa que se anticipa y se pretende que tenga lugar en el programa televisivo. Eso implica observar: a) cómo se distribuyen y colocan los participantes y el mobiliario y decoración (mesa redonda, mesa larga, mesa en "U", sillones a la vista, escritorios, objetos puestos en el centro, a los lados, en el fondo); b) cada cuando y en qué circunstancia se producen

⁶⁷⁴ Mediante acercamientos o primer plano, bustos o plano medio, si se toman rostros de uno y otro en una misma secuencia, de lo que se sigue que se busca mostrar algo al telespectador; si se usa panorámica, cuándo y con qué motivo.

⁶⁷⁵ Acercamientos a los personajes, toma panorámica de la escena, intercalación de la imagen de un participante que no está hablando, por ejemplo para que el telespectador vea la reacción que está produciendo en alguno o algunos aquél que está hablando en ese momento.

acercamientos a rostros, cuerpo y se captan gestos, movimientos corporales; la entrada y salida de escena de participantes, movimientos de cámaras y operadores captados dentro de la escena⁶⁷⁶; c) en qué momento y para qué se introduce música de fondo, algún sonido o efecto, o se produce silencio, o se enfoca a los operarios de cámaras y para qué (por ejemplo dar la impresión de se está filmando en vivo).

A partir de la descripción sistemática se pueden hacer inferencias válidas de cada aspecto registrado, por ejemplo, si un participante está hablando con emoción e inmediatamente después de enfocarlo se enfoca al rostro de otro y éste registra un gesto de desaprobación o bien de duda, ello puede inducir a interpretar que los participantes están en desacuerdo entre sí, y por tanto que se está discutiendo o debatiendo; por el contrario, si se enfoca en primer plano a un participante cuyo rostro denota risa, sonrisa o gestos humorísticos se puede interpretar que hay irrelevancia, burla o descalificación acerca de lo que el otro está diciendo; si ocurre lo mismo pero el rostro denota seriedad, o bien desconcierto o sorpresa, puede significar que se presta atención, que lo que se dice es complicado, importante y digno de tomar en cuenta, que no se entiende o que se está tratando de comprender lo que el otro dice, que se desconoce lo que está diciendo, o que esto último no se esperaba que lo dijera la persona que lo está diciendo.

La escenografía y el montaje sirven invariablemente para reforzar el significado de lo actuado: si hay intimidad o distancia; si los participantes pueden verse entre sí todo el tiempo o deben girar el cuerpo para verse; si se quiere revestir de formalidad o sobriedad la interlocución o bien de informalidad y relajamiento el ambiente; si el protagonismo se deposita por completo en la persona del participante⁶⁷⁷; si es un panel de discusión entre exclusivamente periodistas⁶⁷⁸ o sólo analistas políticos⁶⁷⁹ o bien una combinación de ambos⁶⁸⁰; si se trata de una entrevista en estudio que transcurre de manera cordial, formal y serena entre un conductor y un personaje invitado⁶⁸¹, en contraste con aquella entrevista que de un interrogatorio deviene en una franca confrontación por parte de los conductores con los personajes invitados, los primeros ubicados a los flancos de

⁶⁷⁶ La vista de los participantes hacia un punto ajeno de la cámara puede ser indicativa, por ejemplo, que el conductor o los participantes recurren o son auxiliados por el equipo de la realización para saber que deben cortar la comunicación presencial y dar entrada a la transmisión de anuncios o bien la inserción de imágenes de algún referente que se ha invocado por alguna razón.

⁶⁷⁷ Tal como ocurre, por ejemplo, en el programa televisivo "Primer Plano" difundido semanalmente por el Canal Once, donde solo aparecen bustos de los personajes, vestidos con el mismo color correspondiente al fondo negro, donde en consecuencia la expresividad corporal se reduce al rostro y las manos.

⁶⁷⁸ El único caso en la difusión televisiva de señal abierta es el programa "Tercer Grado" difundido semanalmente por el Canal 2, donde los participantes están sentados en círculo de manera que todos pueden verse mutuamente todo el tiempo y son filmados de cuerpo entero.

⁶⁷⁹ Caso poco frecuente en los programas del tipo analizado, donde los analistas pueden ser los mismos conductores que a su vez invitan a dialogar y discutir a otros especialistas o expertos en el tema a tratar y que comparten una mesa horizontal, lo que implica que hacer un emplazamiento en primer plano a alguno de los participantes supone sacar de foco al resto, como ocurre en el programa "Entre Tres" transmitido semanalmente por el Canal 13.

⁶⁸⁰ El caso más frecuente en la difusión televisiva, tal como en los programas "En Contexto", "Reporte Trece", "La manzana" y "Punto de Partida", transmitidos semanalmente los dos primeros por el Canal 13, el tercero por el Canal 40 y el cuarto por el Canal 2, en los cuales se incluyen entre los invitados a agentes políticos, entre ellos legisladores, dirigentes de los partidos políticos más grandes o de distintos órdenes de gobierno (nacional o local), ya sea solos o en conjunto con analistas y expertos que los confrontan.

⁶⁸¹ Como es el caso invariable del programa "La entrevista con Sarmiento" o de la tertulia televisiva "Shalalá" ambos transmitidos semanalmente por el Canal 13.

los segundos en una mesa reducida que los aproxima físicamente y donde el fondo es fijo y con imágenes, objetos y colores que pueden o no distraer la atención del telespectador⁶⁸², aspectos todos ellos de los que dependen en parte el tono de la interlocución, que redundan en mayor o menor expresividad de una polémica y mutuos cuestionamientos, o bien de complacencia y afinidad mutua. Cabe señalar que en cualquier caso interesó describir sólo aquello que lleve a significar que hay intercambio de opiniones y debate, polémica acalorada, refutación y desacuerdo, o acuerdo y defensa, tal como el asentimiento con la cabeza de uno ante lo que está diciendo otro de los participantes; la expresión emocionada de los oradores, manifiesta en que aumentar el volumen de la voz, hacer aspavientos, señalar con el índice, poner rostro adusto; las expresiones desaprobatorias por parte de los participantes; cuando dos o más de ellos hablan al mismo tiempo o se interrumpen entre sí, si apelan al conductor para exigir la palabra y se lo hacen para pedir o dar alguna aclaración por lo dicho por otro.

Atendiendo a las anteriores consideraciones, la aplicación del modelo metodológico llevó a las siguientes operaciones de observación, recogida de datos y análisis:

1. Se estableció la categoría de análisis: contenido de opinión política y el formato de discusión y debate como prototipos del fenómeno a observar (la representación simbólica de una discusión ciudadana en la que se examina y evalúa la actuación de gobiernos y el desempeño de gobernantes y actores políticos; así como las variables y los indicadores a partir de la cual podría establecerse la correspondencia o no entre la categoría del contenido y los contenidos televisivos difundidos).
2. Se estableció un criterio de delimitación y clasificación de contenidos televisivos según el género de los contenidos, a partir de confrontar criterios establecidos por analistas o estudiosos y por agentes profesionales de la industria televisiva.
3. Se observaron todos los programas del género y subgénero difundidos en la programación televisiva de señal abierta o gratuita de cobertura nacional durante 2007 y 2008, haciendo acopio de información acerca de las características de género, formato y contenidos de cada programa (incluidos registros documentales de la promoción que las emisoras hacen los programas).
4. Con base en el criterio de clasificación de contenidos televisivos, se procedió a levantar el inventario de programas televisivos clasificados por televisora, canal y programa, fecha y hora de emisión y programa, así como a clasificar cada programa según tipo de subgénero.
5. Se revisaron y describieron los tipos de formatos de realización de programas televisivos correspondientes, los rasgos comunes y peculiares cada uno.
6. Con base en el criterio de clasificación de contenidos de programas según género, subgénero y formato, se delimitó el universo de programas cuyo contenido pertenece al mismo grupo genérico informativo y al género apelativo o dialógico y se definió una muestra de ellos a analizar en detalle (*corpus*).

⁶⁸² Los más representativo de este caso son los programas “En Contexto” y “La manzana”, ya referidos.

7. La delimitación correspondiente aplicada permitió distinguir los formatos de aquellos programas que reúnen los requisitos de presentar un intercambio, un debate o discusión (confrontación) o un análisis, en todos los casos de puntos de vista, opiniones e interpretaciones sobre hechos, acontecimientos e información de orden político, ya sea que se utilice la entrevista, la mesa redonda, la rueda de periodistas, el debate o la parodia humorística como interacción comunicativa y formato de montaje y realización de su transmisión, que forman parte del *corpus*.

El *corpus* de programas a analizar atendió a los siguientes criterios: a) incluir al menos un programa por tipo subgénero y formato de realización dentro de todos los que se registran en el universo total de programas catalogados dentro del género informativo del universo y muestra considerados. El criterio para diferenciar los contenidos es el género y subgénero al que puede ser adscrito cada programa, pero tomando en cuenta a la vez la diversidad de formatos de realización, lo que permitió determinar los aspectos del género, subgénero y formato que intervienen, favorecen o incluso determinan que la representación simbólica se verifica o no dentro de los programas televisivos considerados.

La observación se hizo respecto de la programación de televisión en México, transmitida por señal abierta o gratuita de cobertura nacional, tanto operadores privados como públicos, difundida durante los meses de septiembre a diciembre de 2008. La justificación del periodo delimitado se ofrece en detalle en el marco contextual del análisis, pero basta con señalar aquí que atendió a lo que llamo el “ciclo de la legislatura”, cuyo ejercicio dura de tres años y que incide en el comportamiento de los legisladores. En el primer año se produce indagación y aprendizaje de las materias y reacomodos de coaliciones partidistas; en el segundo, se intensifican las iniciativas de ley y hay agenda negociada y en el tercero, se ocupan en actividades que reditúan a ellos y sus partidos identidad pública favorable de cara al siguiente cargo político por disputar.

Así planteado, el estudio permitió proponer una interpretación acerca de las implicaciones y consecuencias que conlleva la representación simbólica de una modalidad de escrutinio ciudadano, que transcurre en la difusión televisiva, a partir de la cual la actuación y el desempeño de los agentes políticos en el gobierno, y en creciente medida los legisladores federales entre ellos, puede ser sometida a escrutinio público al menos entre un segmento de ciudadanos con mayor interés en la política y que pueden desempeñar un papel más activo en la formación de opinión pública.

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
CUADRO 1. PROGRAMAS Y EMISIONES TELEVISIVAS QUE COMPRENDIERON EL CORPUS DE ANÁLISIS (1)

ID	Programa/emisión	FORMATO	CONDUCTOR	CANAL	FECHA Y HORA	TIEMPO
01	Tercer Grado	Panel de periodistas sin invitados	Leopoldo Gómez (fijo) (2)	Canal 2 XEW TV	06/08/2008 11:24:46 PM	61 min.
02	Primer Plano	Panel de analistas sin invitados	Lorenzo Meyer, Leonardo Curzio, Amparo Casas, J. A. Crespo, J. F. Paoli, Sergio Aguayo (alternando)	Canal Once XEIPN	11/08/2008 09:52:33 PM	59 min.
03	Entre 3	Panel de analistas con invitados	J. Reyes Heróles, J. Silva Herzog, Carlos Elizondo (alternando)	Azteca 13 XHDF	18/08/2008 11:54 PM	58 min.
04	La Manzana	Entrevista a agentes sociales	Pablo Hiriart (fijo)	Proyecto 40 XHTVM	18/08/2008 11:25 PM	37 min.
07	La Entrevista con Sarmiento	Entrevista a agentes sociales	Sergio Sarmiento (fijo)	Azteca 13 XHDF	03/09/2008 12:18 AM	28 min.
08	Punto de Partida	Reportaje alternado con entrevista a agentes sociales	Denisse Maerker (fijo)	Canal 2 XEW TV	02/09/2008 11:33 PM	59 min.
10	Reporte 13	Panel de agentes sociales y políticos	Ricardo Rocha (fijo)	Azteca 13 XHDF	02/09/2008 11:48 PM	35 min.
11	Tercer Grado	Panel de periodistas sin invitados	Leopoldo Gómez (fijo) (2)	Canal 2 XEW TV	03/09/2008 11:32 PM	65 min.
12	En Contexto	Entrevista a agentes sociales	Pablo Hiriart, Jaime Sánchez Susarrey (alternando)	Azteca 13 XHDF	04/09/2008 11:53 PM	38 min.
14	Entre 3	Panel de analistas con invitados	J. Reyes Heróles, J. Silva Herzog, Carlos Elizondo (alternando)	Azteca 13 XHDF	08/09/2008 11:53 PM	58 min.
19	Reporte 13	Panel de agentes sociales	Ricardo Rocha (fijo) (2)	Azteca 13 XHDF	09/09/2008 11:53 PM	35 min.
20	En Contexto	Entrevista a agentes sociales	Pablo Hiriart, Jaime Sánchez Susarrey (alternando)	Azteca 13 XHDF	11/09/2008 11:53 PM	32 min.
21	Tercer Grado	Panel de periodistas sin invitados	Leopoldo Gómez (fijo) (2)	Azteca 13 XHDF	17/09/2008 11:23 PM	59 min.

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
CUADRO 1. PROGRAMAS Y EMISIONES TELEVISIVAS QUE COMPRENDIERON EL CORPUS DE ANÁLISIS (1)

ID	Programa/emisión	FORMATO	CONDUCTOR	CANAL	FECHA Y HORA	TIEMPO
22	La Manzana	Entrevista a agentes sociales	Pablo Hiriart (fijo)	Proyecto 40 XHTVM	22/09/2008 11:25 PM	29 min.
23/1	Desde las Cámaras	Reportaje alternado con entrevista a agentes políticos	Anabela Pezet, Nestor Ojeda, Roberto Heftye, Adriana Sarur	Proyecto 40 XHTVM	21/09/2008 11:25 PM	35 min.
23/2	Desde de las Cámaras	Reportaje alternado con entrevista a agentes políticos	Anabela Pezet, Nestor Ojeda, Roberto Heftye, Adriana Sarur	Proyecto 40 XHTVM	28/09/2008 11:25 PM	36 min.
24/1	La Manzana	Entrevista a agentes sociales	Pablo Hiriart (fijo)	Proyecto 40 XHTVM	29/09/2008 11:25 PM	30 min.
20/1	El Notifiero con Brozo	Revista Política monólogo	Víctor Trujillo (fijo)	Canal 2 XEW TV	08/08/2008 11:29 PM	62 min.
26/2	El Notifiero con Brozo	Revista Política monólogo	Víctor Trujillo (fijo)	Canal 2 XEW TV	15/08/2008 11:39 PM	65 min.
26/5	El Notifiero con Brozo	Revista Política monólogo	Víctor Trujillo (fijo)	Canal 2 XEW TV	22/08/2008 11:39 PM	64 min.
26/4	El Notifiero con Brozo	Revista Política monólogo	Víctor Trujillo (fijo)	Canal 2 XEW TV	29/08/2008 11:40 PM	59 min.
26/5	El Notifiero con Brozo	Revista Política monólogo	Víctor Trujillo (fijo)	Canal 2 XEW TV	26/08/2008 11:38 PM	65 min.
27/1	Diálogos Políticos	Entrevista a agentes políticos	Fausto Zapata (fijo)	Canal 34 XHPTP	01/08/2008 09:48 PM	60 min.
27/2	Diálogos Políticos	Entrevista a agentes políticos	Fausto Zapata (fijo)	Canal 34 XHPTP	15/08/2008 10:03 PM	47
27/3	Diálogos Políticos	Entrevista a agentes políticos	Fausto Zapata (fijo)	Canal 34 XHPTP	29/08/2008 09:48 PM	55 min.
27/5	Diálogos Políticos	Entrevista a agentes políticos	Fausto Zapata (fijo)	Canal 34 XHPTP	26/09/2008 09:59 PM	56 min.
27/34	Diálogos Políticos	Entrevista a agentes políticos	Fausto Zapata (fijo)	Canal 34 XHPTP	12/09/2008 09:59 PM	57 min.
31	Tercer Grado	Panel de periodistas sin invitados	Leopoldo Gómez (fijo) (2)	Canal 2 XEW TV	01/10/2008 11:23 PM	66 min.

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
CUADRO 1. PROGRAMAS Y EMISIONES TELEVISIVAS QUE COMPRENDIERON EL CORPUS DE ANÁLISIS (1)

ID	Programa/emisión	FORMATO	CONDUCTOR	CANAL	FECHA Y HORA	TIEMPO
32	Punto de Partida	Reportaje alternado con entrevista a agentes sociales	Denisse Maerker (fijo)	Canal 2 XEW TV	07/10/2008 11:23 PM	55 min.
33	Tercer Grado	Panel de periodistas sin invitados	Leopoldo Gómez (fijo) (2)	Canal 2 XEW TV	08/10/2008 11:53 PM	65 min.
34	En Contexto	Entrevista a agentes sociales	Pablo Hiriart, Jaime Sánchez Susarrey (alternando)	Azteca 13 XHDF	09/10/2008 11:23 PM	36 min.
35	Desde de las Cámaras	Reportaje alternado con entrevista a agentes políticos	Anabela Pezet, Nestor Ojeda, Roberto Heftye, Adriana Sarur	Proyecto 40 XHTVM	23/11/2008 11:23 PM	31 min.
36	Tercer Grado	Panel de periodistas sin invitados	Leopoldo Gómez (fijo) (1)	Canal 2 XEW TV	26/11/2008 11:33 PM	65 min.
37	En Contexto	Entrevista a agentes sociales	Pablo Hiriart, Jaime Sánchez Susarrey (alternando)	Azteca 13 XHDF	13/11/2008 11:48 PM	35 min.
38	La entrevista con Sarmiento	Entrevista a agentes sociales	Sergio Sarmiento (fijo)	Azteca 13 XHDF	14/11/2008 12:18 AM	29 min.
39	Entre 3	Panel de analistas sin invitados	J. Reyes Heróles, J. Silva Herzog, Carlos Elizondo (alternando)	Azteca 13 XHDF	08/12/2008 11:48 PM	55 min.
40	En Contexto	Entrevista a agentes sociales	Pablo Hiriart, Jaime Sánchez Susarrey (alternando)	Azteca 13 XHDF	11/12/2008 11:48 PM	36 min.
42	De Cifras	Panel de analistas alternado con entrevista a agentes sociales	Darío Celis y Mauricio Flores	Proyecto 40 XHTVM	17/12/2008 10:55 PM	29 min.
44	Tercer Gado	Panel de periodistas sin invitados	Leopoldo Gómez (fijo) (2)	Canal 2 XEW TV	17/12/2008 11:18 PM	68 min.
35	Política Cero	Entrevista a agentes sociales	Jairo Calixto (fijo)	Milenio Televisión Canal 120 Sky	17/12/2008 08:14 PM	30 min.

ID: número de identificación de la grabación conseguida.

(1) Difundidos por señal abierta (recepción gratuita), de agosto a diciembre de 2008, en México.

(2) Participantes fijos: Joaquín López Dóriga; Ciro Gómez Leyva; Denisse Maerker; Carlos Marín; Víctor Trujillo; Adela Micha.

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
CUADRO 2. TEMAS POR EMISIÓN, FECHA Y CANAL PROGRAMAS TELEVISIVOS DEL CORPUS (1/5)

PROGRAMA	FECHA	CANAL	TEMA Y SUBTEMAS	INVITADOS
Tercer Grado	06/08/2008	Azteca 13 XHDF	Delincuencia. Pena de Muerte. Deporte en México.	
Primer Plano	11/08/2008	Canal Once XEIPN	Seguridad Pública: percepción pública de la inseguridad y pena de muerte	
Entre 3	18/08/2008	Azteca 13 XHDF	Seguridad Pública: reclamos y movimientos ciudadanos	
La Manzana	18/08/2008	Proyecto 40 XHTVM	Seguridad Pública: medidas legales y pena de muerte	Sen. F. Döring (PAN); Dip. C. Camacho (PRI)
La Entrevista con Sarmiento	03/09/2008	Azteca 13 XHDF	Informe de Gobierno Presidencial: ventajas y desventajas del nuevo formato	Director del Periódico "El Economista"
Punto de Partida	02/09/2008	Canal 2 XEW TV	Ciudadanos víctimas; inseguridad de los migrantes mexicanos en EU y percepción ciudadana de la inseguridad en México	
Reporte 13	02/09/2008	Azteca 13 XHDF	Futuro de la inconformidad y movilización ciudadana contra la inseguridad	
Tercer Grado	03/09/2008	Canal 2 XEW TV	Respuestas de gobernantes a reclamos ciudadanos por ineficacia ante inseguridad	
En Contexto	04/09/2008	Azteca 13 XHDF	Iniciativas del Presidente y los partidos políticos para reformar la legislación en materia de energía	Secretaría de Energía del Ejecutivo federal
Entre 3	08/09/2008	Azteca 13 XHDF	Rendición de cuentas por parte de sindicatos	Ricardo Raphael (analista); Dip. Beatriz Collado; Luis E. Jiménez (académico)
Reporte 13	09/09/2008	Azteca 13 XHDF	Democracia y Libertad de Expresión en México: relación de medios con el poder	Se modificó el formato: entrevistas fuera del estudio a representantes empresariales y del sector académico
En Contexto	11/09/2008	Azteca 13 XHDF	Iniciativas legales del PRD en materia energética	Diputados Juan Guerra y Antonio Soto (ambos del PRD)

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
CUADRO 2. TEMAS POR EMISIÓN, FECHA Y CANAL PROGRAMAS TELEVISIVOS DEL CORPUS (2/5)

PROGRAMA	FECHA	CANAL	TEMA	INVITADOS
Tercer Grado	17/09/2008	Azteca 13 XHDF	Atentado en festejo de la Independencia en Morelia; llamado a la unidad nacional ante riesgos de terrorismo; medios de información y ética ante la cobertura de la delincuencia y hechos violentos	
La Manzana	22/09/2008	Proyecto 40 XHTVM	Papel de los medios de información ante el terrorismo y mensajes y amenazas de la delincuencia organizada	Mauricio Aranguren (periodista colombiano) y Julián Andrade (periodista)
Desde las Cámaras	21/09/2008	Proyecto 40 XHTVM	Repercusiones en el Congreso por el atentado en Morelia; legislación mexicana frente al terrorismo; Propuesta para crear la Agencia Espacial Mexicana; Iniciativa legal para la digitalización de la radio; ley de filmaciones en el D.F. Reportaje: Imagen pública de los diputados	
Desde de las Cámaras	28/09/2008	Proyecto 40 XHTVM	Comparecencias de secretarios ante Congreso para la glosa del informe presidencial; Ley antitabaco en el DF; sanciones electorales a partidos políticos; Corrupción de la expresidenta de la Cámara de Diputados; Actitud de asambleístas ante el informe del jefe de Gobierno del DF; denuncia penal contra el Sen. Creel (PAN); Iniciativa para combatir delitos a través de telefonía celular	
La Manzana	29/09/2008	Proyecto 40 XHTVM	Movimiento estudiantil de 1968	Ubaldo Díaz y Leopoldo Mendivil, periodistas en activo desde entonces
El Notifiero con Brozo	08/08/2008	Canal 2 XEW TV	Corrupción policiaca y narcotráfico; impunidad y desconfianza ciudadana; sanciones a servidores públicos ineficaces	
El Notifiero con Brozo	15/08/2008	Canal 2 XEW TV	Efectos del descontento y movilización ciudadana ante gobernantes; crítica al desempeño de la autoridad en materia de seguridad pública; crítica al deporte de cara a las Olimpiadas de Beijing	

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
CUADRO 2. TEMAS POR EMISIÓN, FECHA Y CANAL PROGRAMAS TELEVISIVOS DEL CORPUS (3/5)

PROGRAMA	FECHA	CANAL	TEMA	INVITADOS
El Notifiero con Brozo	22/08/2008	Canal 2 XEW TV	Crítica a autoridades por ineficacia para combatir la delincuencia y la inseguridad; crítica a la líder del sindicato magisterial; acciones de la delincuencia contra la Cruz Roja Mexicana; crítica a la expresidenta de la Cámara de Diputados; crítica a declaraciones del expresidente V. Fox	
El Notifiero con Brozo	29/08/2008	Canal 2 XEW TV	Resolución de la Suprema Corte respecto a reformas en materia de aborto; crítica a declaraciones de Senador del PAN que descalificó la propuesta del PRD en materia de reforma energética; anuncio de la marcha ciudadana de protesta por la inseguridad; sanciones contra automovilistas ebrios; crítica al Presidente Calderón por la publicidad institucional	
El Notifiero con Brozo	26/08/2008	Canal 2 XEW TV	Crítica a la PGR por ineficacia para detener criminales; crítica a Presidente Calderón por ineficacia para combatir impunidad en instituciones; crítica a la Agencia Federal de Inteligencia ante protesta de sus empleados; crítica al Secretario de Hacienda por declarar que la crisis de EU no afectará a México; crítica al Secretario de Agricultura por declarar que en México no faltan alimentos en ningún hogar; crítica al IFE por sanciones electorales tardías	
Diálogos Políticos	01/08/2008	Canal 34 XHPTP	Repercusiones de la crisis financiera internacional en México; finanzas públicas y sistema de pensiones en México	Sergio Hidalgo, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda del Gob. Fed.
Diálogos Políticos	15/08/2008	Canal 34 XHPTP	Proyectos de nación y reforma del Estado; disputas entre la clase política	Porfirio Muñoz Ledo, con motivo de su libro "La ruptura que viene"
Diálogos Políticos	29/08/2008	Canal 34 XHPTP	Fútbol y Política: dos grandes pasiones de todos los mexicanos	Andrés Roemer, con motivo de su libro al respecto
Diálogos Políticos	26/09/2008	Canal 34 XHPTP	Carencia de representación eficaz de los intereses de los consumidores en México	Adriana Labardini, asociación civil; Antonio Gili, académico brasileño; Alberto Benítez, académico ITESM)

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
CUADRO 2. TEMAS POR EMISIÓN, FECHA Y CANAL PROGRAMAS TELEVISIVOS DEL CORPUS (4/5)

PROGRAMA	FECHA	CANAL	TEMA	INVITADOS
Diálogos Políticos	12/09/2008	Canal 34 XHPTP	Inseguridad creciente en México	Manuel Aguilera, consejero del PRI y exregente del DF; G. Aguilar Zinser, abogado; Francisco Abundis, especialista en opinión pública
Tercer Grado	01/10/2008	Canal 2 XEW TV	Cobertura informativa y papel de los medios ante delincuencia y violencia; riesgos de “sensacionalismo” y “amarillismo”; tensiones generadas por la difusión de hechos violentos	Se modificó el formato habitual, se grabó la emisión en la Universidad Iberoamericana y se dio paso a preguntas y comentarios del auditorio allí reunido.
Punto de Partida	07/10/2008	Canal 2 XEW TV	Jornada electoral en Guerrero; riesgo de infiltración del narcotráfico en las campañas electorales de 2009; paro de maestros en Morelos	Dirigente nacional del PAN, PRI y PRD
Tercer Grado	08/10/2008	Canal 2 XEW TV	Medidas del gobierno ante la crisis financiera en EU; temas de las campañas electorales y riesgos de dinero ilícito; iniciativa del Presidente contra el narcotráfico al menudeo	
En Contexto	09/10/2008	Azteca 13 XHDF	Repercusiones de la crisis financiera internacional en México	Luis Pazos, director de CONDUSEF
Desde de las Cámaras	23/11/2008	Proyecto 40 XHTVM	Crisis dentro del PRD en el Senado; debate de iniciativas partidistas en materia de seguridad pública; compra-venta de armas en México y EU; candidatos probables a diputados para 2009	
Tercer Grado	26/11/2008	Canal 2 XEW TV	Operación limpieza en instituciones federales de seguridad pública; evaluación del cumplimiento de compromisos gubernamentales en materia de seguridad; Propuesta del Sen. Beltrones para concertar acciones entre sectores público y privado ante la crisis financiera	

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
CUADRO 2. TEMAS POR EMISIÓN, FECHA Y CANAL PROGRAMAS TELEVISIVOS DEL CORPUS (5/5)

PROGRAMA	FECHA	CANAL	TEMA	INVITADOS
En Contexto	13/11/2008	Azteca 13 XHDF	Reformas legales en materia de justicia y seguridad pública	Dip. César Camacho (PRI), presidente de la Comisión de Justicia
La entrevista con Sarmiento	14/11/2008	Azteca 13 XHDF	Reforma energética y energías alternativas	Sen. Arturo Escobar (PVEM)
Entre 3	08/12/2008	Azteca 13 XHDF	Balance de la situación de violencia e inseguridad pública; elementos para evaluar e informar apropiadamente a la ciudadanía y a la población	Ana Laura Magaloni, académica del CIDE; Ernesto López Portillo, especialista en seguridad pública
En Contexto	11/12/2008	Azteca 13 XHDF	Elecciones en 2009	César Nava, coordinador de planeación electoral del PAN
De Cifras	17/12/2008	Proyecto 40 XHTVM	Iniciativa para reformar la Ley de Instituciones Financieras	Dip. Jorge Estefan (PRI), presidente de la Comisión de Hacienda y Luis Nuño de Rivera, presidente de Fundación Azteca
Tercer Gado	17/12/2008	Canal 2 XEW TV	Evaluación de los acontecimientos más relevantes del año: “Lo bueno, lo malo y lo feo del 2008”	
Política Cero	17/12/2008	Milenio Televisión Canal 120 Sky	Percepción ciudadana sobre las divisiones internas y el futuro del PRD	María de la Heras, especialista en encuestas de opinión

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
CUADRO 3. CARACTERÍSTICAS PROGRAMAS TELEVISIVOS DE OPINIÓN EN MEXICO (CORPUS, 2008) 1/2

PROGRAMA / TELEVISORA	FORMATO	E S T I L O				PERFIL PARTICIPANTES		RATING (2009)
		INTERACCIÓN DISCURSIVA	LEXICO	ESCENARIO	VESTIMENTA	PROTAGONISTAS	INVITADOS	
TERCER GRADO/ Televisa	Panel de discusión entre 5-7 periodistas sin invitados	Dialógica, Coloquial respuestas a partir de pregunta temática del conductor, en tres secciones	Periodístico, político formal / informal	Moderno Llamativo	Formal	Periodistas, todos articulistas en prensa, conductores de otros programas en TV y radio	Sin invitados	4.6
ENTRE 3/ Tv Azteca	Panel de discusión entre 3 analistas con invitados	Dialógica, Coloquial, Paridad entre interlocutores	Especializado, político, formal, pedagógico	Tradicional Austero Pedagógico	Informal	Analistas políticos vinculados a la academia; articulistas en prensa e invitados a programas de radio	Analistas, académicos, agentes políticos	n/d
PRIMER PLANO/ Once TV	Panel de discusión entre 4 o 5 analistas con invitados	Dialógica, Coloquial, Paridad entre interlocutores	Especializado, político, formal, pedagógico	Tradicional Austero Coloquial	Informal	Analistas políticos vinculados a la academia; articulistas en prensa e invitados a radio	Sin invitados	1.4
PUNTO DE PARTIDA/ Televisa	Combina reportaje, comentario político y entrevista en estudio, en ese orden	Dialógica cuestionario dirigido por conductora a invitados	Periodístico, político, ordinario, informal	Moderno Austero	Informal	Periodista, articulista en prensa, conductora en radio	Analistas; líderes sociales y personas protagonistas de sucesos de interés público	4.1
EN CONTEXTO/ TV Azteca	Panel de discusión con un invitado al estudio	Dialógica, centrada en cuestionamiento al invitado	Periodístico, político, formal/ informal	Moderno Austero	Formal	Un periodista, articulista en prensa y conductor de radio y un analista político y articulistas en prensa	Agentes políticos; analistas y representantes de organizaciones civiles	2.7
LA MANZANA/ TV Azteca	Panel de discusión con 1 o 2 invitados	Dialógica centrada en cuestionamiento al invitado	Periodístico, político, formal/ informal	Moderno Llamativo	Formal	Un periodista, articulista en prensa y conductor de radio	Agentes políticos; analistas y dirigentes empresariales	n/d
DESDE LAS CÁMARAS/ TV Azteca	Combina comentario político, reportaje y entrevista en estudio	Dialógica, por turnos	Periodístico, político, informal	Tradicional Coloquial	Informal	Periodistas especializados en Congreso	Agentes políticos y dirigentes empresariales	
LA ENTREVISTA CON SARMIENTO/ TV Azteca	Entrevista en estudio a personaje público	Dialógica, entrevista periodística dirigida	Periodístico, formal y culto	Moderno Austero coloquial	Formal	Periodista, analista político, conductor programa de radio y articulista en prensa	Personajes del ámbito cultural, político y económico, nacionales y extranjeros	n/d

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
CUADRO 3. CARACTERÍSTICAS PROGRAMAS TELEVISIVOS DE OPINIÓN EN MEXICO (CORPUS, 2008) 2/2

PROGRAMA / TELEVISORA	FORMATO	E S T I L O				PERFIL PARTICIPANTES		RATING (2009)
		INTERACCIÓN DISCURSIVA	LEXICO	ESCENARIO	VESTIMENTA	PROTAGONISTAS	INVITADOS	
REPORTE 13/ TV Azteca	Combina panel de discusión entre 3-5 invitados a partir de un reportaje	Dialógica cuestionario dirigido por conductor a invitados	Periodístico, político, formal/ informal	Moderno Austero	Formal	Periodista, analista político, conductor programa de radio y articulista en prensa	Agentes políticos; analistas y representantes de organizaciones civiles	n/d
DE CIFRAS/ TV Azteca	Combina panel de discusión con entrevista a invitado		Periodístico, económico, formal/ informal	Moderno Llamativo	Formal	Analistas y periodista financiero	Analistas económicos	n/d
DIÁLOGOS POLÍTICOS/ TV Mexiquense	Panel de discusión con 2 o 3 invitados		Periodístico, político, informal		Formal	Periodista	Agentes políticos; y representantes de organizaciones civiles	n/d

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO

CUADRO 4. RATINGS PROGRAMAS DE OPINION Y NOTICIEROS EN TELEVISION ABIERTA: MEXICO, NOVIEMBRE 2007

PROGRAMA CANAL	RATING	GENERO	PROGRAMA CANAL	RATING	GENERO
Frente a frente, canal 13 TV Azteca	5.6	Debate	Noticiero con López Dóriga, canal 2 Televisa	14.2	Noticias
Punto de Partida, canal 2 Televisa	3.9	Debate	Noticiero Las noticias por Adela, canal 9 Televisa	11.9	Noticias
Tercer Grado, canal 2 Televisa	3.8	Debate	Hechos Noche, canal 13 TV Azteca	11.6	Noticias
Contrapunto, canal 2 Televisa	3.4	Debate	Primero Noticias con Loret de Mola, canal 2 Televisa	11.3	Noticias
Shalalá, canal 13 TV Azteca	2.8	Debate	Noticiero con Santos Mondragón, canal 9 Televisa	11.1	Noticias
En contexto, canal 13 TV Azteca	2.6	Debate	Noticiario Informativo 7 de la noche, canal 7 TV Azteca	10.4	Noticias
La línea de la salud, canal 9 Televisa	2.5	Debate	Noticiero con Lolita Ayala, canal 2 Televisa	8.8	Noticias
Primer Plano canal 11 Once TV	1.7	Debate	Noticiero con Alejandro Cacho, canal 9 Televisa	9.8	Noticias
Primer Plano (repetición)	1.3	Debate	Buenas Noches con Edith Serrano, canal 13 TV Azteca	9.0	Noticias
Cristina, canal 4 Televisa	1.4	Debate	Noticias a las 3, canal 4 Televisa	7.5	Noticias
Solórzano en la red, canal 22 CNCA	1.3	Debate	Hechos, canal 13 TV Azteca	7.3	Noticias
Espiral (repetición), canal 11 Once TV	1.2	Debate	Noticiario informativo 7 de la tarde, canal 7 TV Azteca	7.2	Noticias
Veredicto, canal 22 CNCA	0.5	Debate	Noticiero con Adriana Pérez Cañedo, canal 11 Once TV	3.4	Noticias
			Noticias Avance informativo, Canal 11, Once TV	3.4	Noticias
			Noticiero 15 minutos, canal 11 Once TV	3.3	Noticias
			Mundo Ejecutivo, canal 4 Televisa	1.1	Noticias
			Noticiario Ventana 22, canal 22 CNCA	0.7	Noticias
			El Rotativo, canal 22 CNCA	0.5	Noticias
			TV MONDE Noticias, canal 22 CNCA	0.4	Noticias

Fuente: Elaborado con base en IBOPE: AGB México, Ratings TV IBOPE: AGB NOV/07. Resumen de ratings* televisivos-hogares en noviembre de 2007, México, febrero de 2008, que enlista por canal y por género los programas con mayor rating* durante el mes indicado, con base en una muestra representativa de 600 tele-hogares del área metropolitana de la Cd. de México, que incluye las 16 delegaciones del DF y 30 municipios conurbados del estado de México, así como adicionalmente 300 tele-hogares de su muestra especial de televisión de paga. En ciertos canales, algunos géneros no aparecen porque no figuran en la programación o por no tener rating. No se incluyen programas de instituciones de gobierno, políticos ni religiosos.

* Rating: el porcentaje de hogares que sintonizan un canal determinado en un momento dado respecto al universo total; 1punto rating = 1% del universo del total utilizado (hogares del área metropolitana de la ciudad de México).

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
CUADRO 5. SINOPSIS DE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDO POR PROGRAMA SEGÚN EMISOR TELEVISIVO (1/4)

PROGRAMA / TRANSMISIÓN	SINOPSIS DEL CONTENIDO (1)	EMISIÓN ANALIZADA
Tercer Grado, miércoles 23:30-00:30 horas; se repite la misma emisión jueves 08:00-09:00 horas por Canal Univisión SKY	Aquí los periodistas de mayor prestigio de la televisión mexicana se encuentran para generar polémica, interrogarse y debatir al calor de la noticia	Canal 102 SKY, 09/09/2009
Entre 3, lunes 00:00-01:00 horas	Análisis político conducido por reconocidos expertos en la materia teniendo a dos invitados que refuerzan y complementan la crítica de la cotidianidad socioeconómica, política e intelectual del país	Canal 113 SKY, 08/09/2009
En Contexto, miércoles y viernes 00:00-00:30 horas	En Contexto es una mezcla de entrevista, diálogo y programa de opinión. Hacemos el análisis de la realidad política sin cortapisas	Canal 113 SKY, 25/11/2009, conducen Pablo Hiriart y Jaime Sánchez Susarrey
Punto de Partida, martes 23:30-00:30 horas	Conducido por Denise Maerker, Punto de Partida es un programa de opinión y análisis político, con entrevistas reportajes y crónicas como recursos informativos	Canal 102 SKY, 03/11/2009; a partir de noviembre de 2009 se difunde los jueves
Primer Plano, lunes 21:30-22:30 horas	María Amparo Casar, Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer, Leonardo Curzio, José Antonio Crespo y Francisco Paoli Bolio dialogan en el programa de análisis político que semanalmente se presenta	Canal 111 SKY, Canal Once TV, 07/09/2009
La Entrevista con Sarmiento, miércoles y viernes 00:30-01:00 horas	La entrevista con Sarmiento se ha convertido, a lo largo de once años, en referente obligado para conocer el punto de vista de los protagonistas del acontecer nacional e internacional	Canal 113 SKY, 20/11/2009
Barra libre, jueves 22:00-23:00 horas	Programa informativo y de debate político en donde se abordan temas de interés para la sociedad.	Canal 134 SKY, Canal 34 TV Mexiquense, 05/11/2009, conduce Raúl Cremoux
Espiral, lunes 22:30-23:30 horas	Espiral, basado en el intercambio respetuoso de puntos de vista sobre los responsables del diseño de dichas políticas y los representantes de los sectores donde éstas impactan.	Canal 111 SKY, Canal Once TV, 09/11/2009, conduce Ricardo Raphael
La Mesa, martes 21:45-22:00 horas, se repite la misma emisión sábado 00:30-00:45 horas	Analistas y expertos en su área discutirán los temas de mayor polémica en el momento. Sus contenidos responderán a aquellos temas y sucesos que sean noticia.	Canal 140 SKY, Canal Proyecto 40, 17/11/2009
Desde las Cámaras, jueves 23:00-23:45 horas	Pone bajo la lupa el desempeño de los diputados y senadores a través del análisis y la reflexión a fondo de nuestros experimentados analistas	Canal 140 SKY, 19/11/2009

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
CUADRO 5. SINOPSIS DE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDO POR PROGRAMA SEGÚN EMISOR TELEVISIVO (2/4)

PROGRAMA / TRANSMISIÓN	SINOPSIS DEL CONTENIDO (1)	EMISIÓN ANALIZADA
La Manzana, lunes 22:45-23:00 horas	Es un debate en donde se busca la confrontación de dos posturas totalmente opuestas. Pablo Hiriart pone el tema a discusión como la manzana de la discordia	Canal 140 SKY, 09/11/2009
Política Cero, martes 22:45-23:00 horas	Sin sinopsis	Canal 115 SKY, Milenio Televisión, 10/11/2009, conduce Jairo Calixto.
Reporte 13, miércoles, 23:00-11:30 horas	Espacio creado para analizar e informar sobre los más diversos fenómenos políticos, económicos y sociales que tienen lugar en nuestro país y en algunas ocasiones más allá de nuestras fronteras	Canal 113 SKY, 09/09/2009
Fórmula financiera, martes y viernes 21:00-21:30 horas	Los tres columnistas a través de sus divertidas y polémicas orientan y mantienen informada a la audiencia sobre los acontecimientos que ocurren diariamente	Canal 229 SKY, Canal Telefórmula, 10/09/2009
Séptimo Día, domingo 23:00-00:00 horas	Revista política con periodismo de investigación que presenta reportajes y entrevistas con la finalidad de ampliar el panorama de los televidentes en cuestiones sociales y políticas de nuestro país	Canal 140 SKY, Canal Proyecto 40, 08/11/2009, conduce Fernando Meléndez y Viviana Bilbaso
Código 2009, domingo 22:00-23:00 horas	Un programa con el análisis, la crónica y los reportajes sobre la sucesión presidencial, con la solidez informativa del periódico El Universal	Canal 140 SKY, Canal Proyecto 40, 08/11/2009
Cuestión Política, domingo 23:45-00:00 horas	Comentarios y análisis del periodista Ricardo alemán	Canal 140 SKY, Canal Proyecto 40, 08/11/2009, salió del aire a partir de febrero de 2010
Maxine Woodside, martes 22:30-23:00 horas	Mario Ávila conduce un espacio informativo que conjuga política, economía, deportes y entretenimiento	Canal 229 SKY, Canal Telefórmula, 10/11/2009
Mujeres en el risco, martes 22:30-23:30 horas; repetición domingo 23:30-00:30 horas	Este espacio reúne a cuatro mujeres dinámicas de diferentes edades, posiciones y experiencias que en una hora de conversación amena y divertida sobre temas en general le harán pasar un rato agradable	Canal 146 SKY, Canal 34 TV Mexiquense, 10/11/2009; conducen Tere Vale, Rosario Robles, Cecilia Suárez
México diferente, jueves 22:00-22:30 horas, se repite el mismo día 01:30-02:00 horas	Sin sinopsis	Canal 111 SKY, Canal Once TV, 05/11/2009, conducen Lorenzo Córdova y Ciro Muruyama

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
CUADRO 5. SINOPSIS DE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDO POR PROGRAMA SEGÚN EMISOR TELEVISIVO (3/4)

PROGRAMA / TRANSMISIÓN	SINOPSIS DEL CONTENIDO (1)	EMISIÓN ANALIZADA
Solórzano en la red, jueves 22:00-23:00 horas	La actualidad analizada desde la perspectiva de uno de los mejores periodistas mexicanos	Canal 22, 19/11/2009, conduce Javier Solórzano
Claves, viernes 23:00-23:45 horas	Conducido por Ricardo Raphael y Leonrado Curzio disfruta una charla caracterizada por una informalidad relajada entre amigos con los escritores contemporáneos más destacados del medio	Canal 140 SKY, Canal Proyecto 40, 20/11/2009
Diálogos Políticos, viernes 23:00-23:30 horas	Programa informativo y de debate político en donde se abordarán temas de interés para la sociedad.	Canal 146 SKY, Canal 34 TV Mexiquense, 13/11/2009, conduce Fausto Zapata
De Cifras, miércoles 23:00-23:30 horas	Sin sinopsis	Canal 140 SKY, Canal Proyecto 40, 18/11/2009, conduce Darío Celis
La otra urna, lunes 20:30-21:00 horas, se repite el mismo día 23:30-23:45 horas	Los grandes problemas de las políticas públicas tienen como lugar de residencia la vida cotidiana de los ciudadanos	Canal 140 SKY, Canal Proyecto 40, 16/11/2009, conduce Carlos Elizondo Serra-Mayer
Bitácora mexicana, lunes 22:00-23:00 horas	Sin sinopsis	Canal 146 SKY, Canal 34 TV Mexiquense, 18/11/2009, conduce Porfirio Muñoz Ledo
Esfera Pública, lunes 20:00-21:00 horas,	En Esfera Pública su voz se escucha y se atienden las demandas de la ciudadanía; además de participaciones de funcionarios de gobierno estatal y federal y de la sociedad civil organizada	Canal 146 SKY, Canal 34 TV Mexiquense, 18/11/2009
Entre lo público y lo privado, miércoles 22:00-22:45 horas	Entre lo público y lo privado es un programa de política pública en el que mediante juegos y dinámicas, se dan a conocer aspectos públicos y privados de los más destacados líderes de opinión	Canal 140 SKY, Canal Proyecto 40, 18/11/2009, conduce Andrés Roemer
Agenda a fondo, martes 23:30-00:30 horas	Once TV trae para ti este nuevo programa de corte noticioso donde se revelan las causas de la nota diaria. Aquí los reportajes parten de la información más relevante de la semana en torno a un asunto	Canal 111 SKY, Canal Once TV, 25/08/2009, conducen Jorge Buendía y Juan José Heweswi
Dinero y Poder, martes 21:30-22:30 horas	Programa en el cual los analistas se dedican a informar y analizar, de una manera ágil y accesible, los sucesos mundiales más importantes en economía y política	Canal 140 SKY, Canal Proyecto 40, 25/08/2009, conducen Ezra Shabot, Macario Schettino

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
CUADRO 5. SINOPSIS DE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDO POR PROGRAMA SEGÚN EMISOR TELEVISIVO (4/4)

PROGRAMA / TRANSMISIÓN	SINOPSIS DEL CONTENIDO (1)	EMISIÓN ANALIZADA
Defensor del televidente, martes 21:00-21:30 horas	El televidente no nace, se hace	Canal 122 SKY, 25/08/2009, conduce Gabriela Warketin
Pensar México, lunes 20:00-20:30 horas	Se tratan diferentes puntos de vista de los más diversos temas de interés para la sociedad. Una mesa redonda donde conviven las voces de los expertos y el pensamiento de los mexicanos	Canal 140 SKY, Canal Proyecto 40, 24/08/2009, conduce Andrés Roemer
La Ciudad de las ideas, lunes 23:30-23:45 horas	Proyecto 40 te ofrece un contenido muy interesante, informativo, de opinión, debate cultural, polémica y películas variadas orientado al público adulto que le guste estar bien informado	Canal 140 SKY, Canal Proyecto 40, 16/11/2009, conduce Andrés Roemer
¿Usted que hace por México?, lunes 23:00-23:30 horas	Proyecto 40 te ofrece un contenido muy interesante, informativo, de opinión, debate cultural, polémica y películas variadas orientado al público adulto que le guste estar bien informado	Canal 140 SKY, Canal Proyecto 40, 16/11/2009, conduce Andrés Roemer
Va en serio, lunes 22:00-23:00 horas	Programa informativo y de debate político en donde se abordan temas de interés para la sociedad	Canal 134 SKY, Canal 34 TV Mexiquense, 17/11/2009, conduce Carlos Ramos Padilla
Los alimentos terrenales, martes 21:30-22:00 horas	Sin sinopsis	Canal 122 SKY, 25/08/2009 conduce Paco Ignacio Taibo I
Libertas, sábados 22:00-23:00 horas	Programa de corte periodístico político, en el cual tenemos distintas opiniones de un tema, con entrevistas a favor y en contra, así como opinión de distintos eruditos en la materia	Canal 134 SKY, Canal 34 TV Mexiquense, conduce Gustavo Rentería

(1) Descripción textual de la sinopsis del contenido según aparece publicado en la barra de programación televisiva transmitida por señal restringida o de paga, por el proveedor Sky, consulta a diciembre de 2008.

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO
CUADRO 6. RATINGS PROGRAMAS TELEVISION ABIERTA: MEXICO, NOVIEMBRE, 2007 1/5

RATING *	PROGRAMA	CANAL	GÉNERO	RATING *	PROGRAMA	CANAL	GÉNERO
27.4	1er Campeonato Internacional Baile	2	Concurso	13.5	Hombre En Llamas	7	Películas
22.9	Fsn Guadalajara vs Atlante	5	Deportes	13.1	Se Busca Un Hombre	13	Telenovelas
21.7	Pasión	2	Telenovelas	13.0	Este Cuerpo No Es Mio	7	Películas
20.2	Fsn Atlante VS. Cruz Azul	9	Deportivos	12.6	Fsn Guadalajara VS. Jaguares	9	Deportivos
19.5	Fsn UNAM vs Santos	5	Deportes	12.5	Los Simpson	7	Caricaturas
18.9	Fsn America VS. Monarcas	2	Deportivos	12.5	La Cucaracha	9	Películas
18.7	Dr. House	5	Series	12.4	Tizoc	2	Películas
18.3	Maria Isabel	9	Telenovela	12.4	Enamorada	4	Películas
18.0	Fsn Toluca VS. Unam	2	Deportivos	12.4	Amigas y Rivalas	9	Telenovela
16.5	Fsn San Luis VS. Guadalajara	5	Deportes	12.3	Escuela de Vagabundos	2	Películas
16.4	Drake Y Josh	5	Series	12.1	Sube y Baja	2	Películas
16.3	Fsn Monarcas VS. America	7	Deportivos	11.9	Mujer Casos de la Vida Real	2	Drama
16.3	Fsn Cruz Azul VS. Atlante	7	Deportivos	11.9	La Escondida	4	Películas
16.2	El Día Después de Mañana	7	Películas	11.9	Not. Las Noticias Por Adela	9	Noticias
16.0	El Señor De Anillos Dos Torres	5	Películas	11.8	Te La Sabes Cantala	13	Concurso
15.9	Mientras Haya Vida	13	Telenovelas	11.6	Tv De Noche	4	Magazine
15.4	La Ley y el Orden	5	Series	11.6	Hechos Noche	13	Noticias
15.4	Hellboy	5	Películas	11.5	La Metralleta Infernal	4	Películas
15.3	Bad Boys 2	5	Películas	11.4	Bob Esponja	5	Caricaturas
14.9	Yo Amo A Juan Querendon	2	Telenovela	11.4	Fsn Pachuca VS. Cruz Azul	7	Deportivos
14.8	Fsn Guadalajara VS. San Luis	9	Deportivos	11.3	Primero Noticias	2	Noticias
14.6	Difícil de Creer	7	Magazine	11.2	Fsn Cruz Azul VS. Pachuca	13	Deportivos
14.2	Not. Joaquin Lopez Doriga	2	Noticias	11.1	Siete Ddc	7	Magazine
14.1	Lola Erase Una Vez	5	Telenovela	11.0	Accion	2	Deportivos
13.8	La Duena	9	Telenovela	10.9	Conexion Nokia 5	5	Magazine
13.7	Tormenta En El Paraiso	2	Telenovelas	10.9	Incognito	5	Magazine
13.7	Los Simpson 2	7	Caricaturas	10.9	Los Simpson 3	7	Caricaturas

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO
CUADRO 6. RATINGS PROGRAMAS TELEVISION ABIERTA: MEXICO, NOVIEMBRE, 2007 2/5

RATING *	PROGRAMA	CANAL	GÉNERO	RATING *	PROGRAMA	CANAL	GÉNERO
10.8	Sol En Llamas	9	Películas	9.0	14va Entrega Premios Furia Musical	2	Musical
10.8	La Casa De La Risa	9	Cómicos	9.0	Buenas Noches Con Edith Serrano	13	Noticias
10.7	Esp. Lo Que La Gente Cuenta	7	Drama	8.8	Not. Lolita Ayala	2	Noticias
10.7	Lo Que Callamos Las Mujeres	13	Drama	8.8	Grey	7	Series
10.7	Ventaneando	13	Magazine	8.6	Hoy	2	Magazine
10.4	Not. Info 7 Noche	7	Noticias	8.6	Doble Cara	13	Concurso
10.4	Fsn Santos VS. Monarcas	13	Deportivos	8.5	Desmadruga2	2	Magazine
10.2	La Casa De La Risa	2	Cómicos	8.5	Te La Sabes Cantala	7	Concurso
10.2	Lo Que La Gente Cuenta	7	Drama	8.5	Quien Tiene Estrella	13	Concurso
10.1	Batman	5	Caricaturas	8.4	Almas Perdidas	7	Series
10.1	Not. Santos Mondragon	9	Noticias	8.1	Que Risa	7	Comicos
10.1	Fsn Monarcas VS. Cruz Azul	13	Deportivos	8.1	Lo Que La Gente Cuenta 3	13	Drama
10.0	El Chavo Animado	2	Caricaturas	7.9	Esp. Pepsi Chart	5	Musical
10.0	8a Entrega Latin Grammy Awards	2	Musical	7.8	Muevete	2	Magazine
9.9	Fabrica De Risas	2	Cómico	7.8	Shark	7	Series
9.9	La Oreja	9	Magazine	7.7	Oops	7	Comicos
9.8	Avatar	5	Caricaturas	7.5	Not. A Las 3	4	Noticias
9.8	Un Hombre Violento	9	Películas	7.5	Aunque Usted No Lo Crea	9	Magazine
9.8	Not. Alejandro Cacho	9	Noticias	7.3	12 Corazones	2	Concurso
9.8	Bellezas Indomables	13	Telenovelas	7.3	Hechos	13	Noticias
9.8	Historias Engarzadas	13	Magazine	7.3	Lo Que La Gente Cuenta 2	13	Drama
9.6	De Por Vida Bancomer	2	Concurso	7.2	Solo Dfútbol	4	Deportivos
9.5	Wax TV Acida	5	Magazine	7.2	El Chapulin Colorado	9	Cómicos
9.2	12 Corazones	9	Concurso	7.1	Voces Con Causa 2007	2	Musical
9.2	La Historia Detras Del Mito	13	Magazine	7.0	Esp. Enrique Guzman	13	Musical
9.1	La Familia P. Luche	2	Cómicos	6.9	Es de Noche y Ya Llegue	9	Magazine
9.1	Cero En Conducta	9	Cómicos	6.8	Ellas Con Estrellas	4	Magazine

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO
CUADRO 6. RATING PROGRAMAS TELEVISION ABIERTA: MEXICO, NOVIEMBRE, 2007 3/5

RATING *	PROGRAMA	CANAL	GÉNERO	RATING *	PROGRAMA	CANAL	GÉNERO
6.7	Matutino Express	4	Magazine	3.9	Pancho Villa Rev. No Ha Terminado	11	Películas
6.4	Ya Cayo	13	Comicos	3.9	El Tunel Del Tiempo	13	Series
6.2	Banda Ancha	7	Comicos	3.8	Tercer Grado	2	Debate
6.0	En Familia	2	Infantiles	3.8	Directra/Tobi	7	Mercadeo
5.9	Identidad Las Apariencias Enganan	7	Concurso	3.8	Futboleros	11	Series
5.7	Esp. Los Tucanes De Tijuana	9	Musicales	3.5	Skin Control	5	Mercadeo
5.6	Frente A Frente	13	Debate	3.5	Nocaut	11	Películas
5.5	Esp. Top Ten Espanol	13	Musical	3.4	Contrapunto	2	Debate
5.0	El Club De Disney	7	Infantiles	3.4	Ser Feliz Si Se Puede	7	Magazine
4.8	En Sus Marcas	4	Deportivos	3.4	Not. Avance Informativo	11	Noticias
4.8	Mps Grupero	9	Musicales	3.4	Not. Adriana Perez Canedo	11	Noticias
4.7	Frida	13	Peliculas	3.4	Novia Que Te Vea	11	Películas
4.5	Innova/Tobi	5	Mercadeo	3.3	Not. 15 Minutos	11	Noticias
4.5	Planeta Tierra	11	Cultura	3.2	Reventon Musical	4	Musical
4.5	Actitud Motorokr	13	Musical	3.2	Little People	5	Infantil
4.4	Esp. Elite Model Look Mexico 2007	7	Concurso	3.2	Musica Para Tus Sentidos	9	Musicales
4.4	Mi Gorda Bella	7	Telenovelas	3.2	New Hair Revolution	9	Mercadeo
4.4	El Divan De Valentina	11	Series	3.2	31 Minutos	11	Infantil
4.3	Caminando Criaturas Prehistoricas	11	Cultura	3.1	Ingles Sin Barreras	2	Mercadeo
4.2	Mexico Nuevo Siglo	2	Cultura	3.1	Emergencias Urbanas	4	Series
4.2	Not. Info 7 Tarde	7	Noticias	3.1	Directra/Adoradores	7	Mercadeo
4.2	De Todo Con Maria Roiz	11	Magazine	3.1	Directra/Fiber 2 Action	7	Mercadeo
4.1	Fsn Necaxa VS. Tigres	4	Deportivos	3.0	Hi 5 - Repetición	11	Infantil
4.1	Infancia Salvaje	11	Cultura	3.0	Hi 5	11	Infantil
4.0	Operacion Talento	4	Concurso	2.9	Caso Cerrado	4	Series
3.9	Punto De Partida	2	Debate	2.9	Lente Loco	4	Cómicos
3.9	Innova/Fiber 2 Action	5	Mercadeo	2.9	Charlie y Lola	11	Caricaturas

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO
CUADRO 6. RATINGS PROGRAMAS TELEVISION ABIERTA: MEXICO, NOVIEMBRE, 2007 4/5

RATING *	PROGRAMA	CANAL	GÉNERO	RATING *	PROGRAMA	CANAL	GÉNERO
2.9	Tierra De Gigantes	13	Series	1.8	En el vientre materno	22	Cultura
2.8	Innova/Fiber 2 Action	9	Mercadeo	1.7	Desaparecidos	4	Series
2.8	Arturo	11	Caricaturas	1.7	Inglés sin barreras	7	Cultura
2.8	Conversando Cristina	11	Magazine	1.7	Ring TV	9	Concurso
2.8	Shalala	13	Debate	1.7	Primer Plano	11	Debate
2.7	La Ex	7	Telenovelas	1.7	Esp. Tania Libertad Mariachi Vargas	11	Musicales
2.7	Secreto De Amor	7	Telenovelas	1.6	CV Directo Thermal Body Star	2	Mercadeo
2.7	Innova/Tobi	9	Mercadeo	1.6	Transfusión	11	Musicales
2.6	Aqui Nos Toco Vivir	11	Magazine	1.5	Pare de sufrir	4	Mercadeo
2.6	En Contexto	13	Debate	1.5	Domingo Siete	7	Cultura
2.6	El Idilio	22	Películas	1.5	Evangelion	22	Cultura
2.6	El Lugar Sin Limites	22	Películas	1.4	Cristina	4	Debate
2.5	La Linea De La Salud	9	Debate	1.4	Farmacias Similares	4	Mercadeo
2.4	Porque Amamos La Musica	4	Musical	1.4	IV Premio Iberoamericano Honor Cali	9	Cultura
2.3	New Hair Revolution	2	Mercadeo	1.4	Sorteos Melate y Revancha	11	Concurso
2.3	Circo De Chicharrines	4	Infantiles	1.4	La mente del asesino	22	Series
2.3	La Bruja Desastrosa	11	Series	1.4	Gogs	22	Infantil
2.3	El Amor En Rimini	22	Cultura	1.3	Directa/Tobi	13	Mercadeo
2.2	Esp. Cine Fx 2007	7	Cultura	1.3	Solórzano en la Red	22	Debate
2.2	A Ciencia Cierta	22	Cultura	1.2	México Nuevo Siglo	4	Cultura
2.2	Historia De Un Gran Amor	22	Películas	1.2	Primer Plano (repetición)	11	Debate
2.1	Mona La Vampira	11	Caricaturas	1.2	A la Cachi Cachi Porra	11	Concurso
2.0	Inventario	4	Cultura	1.2	Toros y Toreros (repetición)	11	Deportes
2.0	Los Doors	11	Musicales	1.1	Not. Mundo Ejecutivo TV	4	Noticias
2.0	Villas Crapston	22	Caricaturas	1.1	Los mejores músicos.com	4	Musical
1.9	Paradas Continuas	9	Cultural	1.0	Espiral (repetición)	11	Debate
1.8	Dialogos En Confianza	11	Talk Show	1.0	Toros y Toreros	11	Deportes
1.8	Directra (S)/Eagle Eyes 365	13	Mercadeo	1.0	Mujeres	2	Series

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO
CUADRO 6. RATINGS PROGRAMAS TELEVISION ABIERTA: MEXICO, NOVIEMBRE, 2007 5/5

RATING *	PROGRAMA	CANAL	GÉNERO	RATING *	PROGRAMA	CANAL	GÉNERO
1.0	A Tree of Palme	22	Caricaturas	0.7	Not. Ventana 22	22	Noticias
1.0	Espiral - Repetición	11	Debate	0.6	Defensor Del Televidente	22	Magazine
1.0	Toros Y Toreros	11	Deportes	0.6	Pantalla De Cristal	22	Magazine
1.0	Mujeres	2	Series	0.6	Defensor del Televidente	22	Magazine
1.0	A Tree Of Palme	22	Caricaturas	0.6	Pantalla de cristal	22	Magazine
0.9	El principal sospechoso	22	Series	0.5	Veredicto	22	Debate
0.9	El Principal Sospechoso	22	Series	0.5	Not. El Rotativo	22	Noticias
0.8	Sala De Maestros	11	Drama	0.4	Not. TV5Monde Noticias	22	Nioticias
0.7	Not. Ventana 22	22	Noticias	0.4	Sorteos Melate y revancha	22	Concurso
0.7	Optico	22	Magazine	0.2	Esp. A Viva Voz	22	Musical
0.7	Óptico	22	Magazine				

Fuente: Elaborado con base en IBOPE: AGB México, Ratings TV IBOPE: AGB NOV/07. Resumen de ratings* televisivos-hogares en noviembre de 2007, México, febrero de 2008, que enlista por canal y por género los programas con mayor rating* durante el mes indicado, con base en una muestra representativa de 600 hogares del área metropolitana de la Cd. de México, que incluye las 16 delegaciones del DF y 30 municipios conurbados del estado de México, así como adicionalmente 300 hogares de su muestra especial de televisión de paga. En ciertos canales, algunos géneros no aparecen porque no figuran en la programación o por no tener rating. No se incluyen programas gubernamentales, políticos ni religiosos.

* Rating: el porcentaje de hogares que sintonizan un canal determinado en un momento dado respecto al universo total; 1punto rating = 1% del universo del total utilizado (hogares del área metropolitana de la ciudad de México).

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
CUADRO 7. LANZAMIENTO DE CONTENIDOS DE OPINIÓN EN TELEVISIÓN (1/3)

PROGRAMA	TELEVISORA	PROTAGONISTAS	LANZAMIENTO	Observaciones
Tercer Grado	Televisa	Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Adela Micha, Denise Maerker, Vitor Trujillo, Calor Marín y Ciro Gómez Leyva	10/Junio/2007	
Punto de Partida	Televisa	Conductora: Denise Maerker	25/sep./2005	16/enero/2006 pasó del Canal 4 al Canal 2; Nov/2009 se transmite en días jueves
Primer Plano	IPN	María Amparo Casar , Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer, Leonardo Curzio, José Antonio Crespo y Francisco Paoli Bolio	Octubre/1999	
México Diferente	IPN	Lorenzo Córdova Vianello, Pedro Salazar Urgarte y Ciro Muruyama	Nov/2009	Sinopsis de Contenido según el emisor: Propuesta que busca trazar un horizonte intelectual que nos ayude a comprender los conflictos que vivimos en este país y, a partir de eso, vislumbrar posibles soluciones que nos beneficien a todos
Agenda a Fondo	IPN	Jorge Buendía y Juan José Heweswi	Mayo/2009	Sinopsis de Contenido según el emisor: Once TV trae para ti este nuevo programa de corte noticioso donde se revelan las causas de la nota diaria. Aquí los reportajes parten de la información más relevante de la semana en torno a un asunto
Espiral	IPN	Ricardo Raphael de la Madrid	21/junio/2005	A partir de 2006, hasta entonces conducido por Francisco Zea; Sinopsis de Contenido: basado en el intercambio respetuoso de puntos de vista sobre los responsables del diseño de dichas políticas y los representantes de los sectores donde éstas impactan.
Dinero y Poder	IPN	Ezra Shabot, Macario Schettino	2007	Sinopsis de Contenido: Programa en el cual los analistas se dedican a informar y analizar, de una manera ágil y accesible, los sucesos mundiales más importantes en economía y política
La entrevista con Sarmiento	TV Azteca	Sergio Samiento	Junio/1997	Transmitido dos veces a la semana
Entre 3	TV Azteca	Federico Reyes Heróles, Jesús Silva-Herzog Márquez y Carlos Elizondo Mayer-Serra	2008	
Reporte 13	TV Azteca	Ricardo Rocha	22/nov./2001	
En Contexto	TV Azteca	Pablo Hiriart y Jaime Sánchez Susarrey	2002	
Desde las Cámaras, bajo la lupa	TV Azteca	Nestor Ojeda y Anabella Peret		
La Manzana	TV Azteca	Pablo Hiriart	2007	
Séptimo Día	TV Azteca	Fernando Meléndez y Viviana Bilbaso	1999	Primero transmitido por CNI Canal 40, adquirido después por TVAzteca, Ha sido conducido por Ciro Gómez Leyva, Denisse Marker, luego por Raymundo Riva Palacio, José Fernández, Adolfo Aguilar Zinser

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
CUADRO 7. LANZAMIENTO DE CONTENIDOS DE OPINIÓN EN TELEVISIÓN (2/3)

PROGRAMA	TELEVISORA	PROTAGONISTAS	LANZAMIENTO	Observaciones
Código 2009	TV Azteca	Salvador García Soto Estela Livera	Febrero/2006	A partir de 2008: antes fue conducido por Estela Livera, Raymundo Riva Palacio y Jorge Zepeda Patterson
Cuestión Política	TV Azteca	Ricardo Alemán	febrero / 2010	Sinopsis de contenido según el emisor: Comentarios y análisis del periodista Ricardo Alemán
Claves	TV Azteca	Ricardo Raphael y Leonardo Curzio	2007	Sinopsis de contenido según el emisor: Disfruta una charla caracterizada por una informalidad relajada entre amigos con los escritores contemporáneos más destacados del medio
De Cifras	TV Azteca	Darío Celis y Mauricio Flores	Diciembre/2007	Sinopsis de contenido según el emisor: Las finanzas del país en un lenguaje más sencillo de entender. Nos explican a profundidad los acontecimientos económicos más allá de los discursos y números.
La Otra Urna	TV Azteca	Carlos Elizondo Serra-Mayer	2007	Sinopsis de contenido según el emisor: Los grandes problemas de las políticas públicas tienen como lugar de residencia la vida cotidiana de los ciudadanos
Entre lo público y lo privado	TV Azteca	Andrés Roemer	Julio/2003	Sinopsis de contenido según el emisor: es un programa de política pública en el que mediante juegos y dinámicas, se dan a conocer aspectos públicos y privados de los más destacados líderes de opinión
Pensar México	TV Azteca	Andrés Roemer	2006	Sinopsis de contenido según el emisor: Se tratan diferentes puntos de vista de los más diversos temas de interés para la sociedad. Una mesa redonda donde conviven las voces de los expertos y el pensamiento de los mexicanos
La Ciudad de las ideas	TV Azteca	Andrés Roemer	2008	
Usted que hace por México?	TV Azteca	Andrés Roemer	2009	
La Mesa (1)	TV Azteca	(1)	2009	Sinopsis de contenido según el emisor: Analistas y expertos en su área discutirán los temas de mayor polémica en el momento. Sus contenidos responderán a aquellos temas y sucesos que sean noticia
Defensor del televidente	CONACULTA	Gabriela Warketin	12/septiembre/2007	
Mujeres en el riesgo	TV Mexiquense	Tere Vale, Rosario Robles, Cecilia Suárez	Septiembre/2007	Sinopsis de contenido según el emisor: este espacio reúne a cuatro mujeres dinámicas de diferentes edades, posiciones y experiencias que en una hora de conversación amena y divertida sobre temas en general le harán pasar un rato agradable

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
CUADRO 7. LANZAMIENTO DE CONTENIDOS DE OPINIÓN EN TELEVISIÓN (3/3)

PROGRAMA	TELEVISORA	PROTAGONISTAS	LANZAMIENTO	Observaciones
Bitácora mexicana	TV Mexiquense	Porfirio Muñoz Ledo	8/Octubre/2006	Sinopsis de contenido según el emisor: Es un programa que cuenta con invitados especiales que analizan temas de actualidad sin olvidar el toque personal de Porfirio Muñoz Ledo
Esfera Pública	TV Mexiquense	Juan Francisco Castañeda	2006	Sinopsis de contenido según el emisor: En Esfera Pública su voz se escucha y se atienden las demandas de la ciudadanía; además de participaciones de funcionarios de gobierno estatal y federal y de la sociedad civil organizada
Diálogos Políticos	TV Mexiquense	Fausto Zapata	Abril/2006	Sinopsis de contenido según el emisor: Programa informativo y de debate político en donde se abordarán temas de interés para la sociedad
Va en serio	TV Mexiquense	Carlos Ramos Padilla	Abril/2006	Sinopsis de contenido según el emisor: Programa informativo y de debate político en donde se abordan temas de interés para la sociedad
Libertas	TV Mexiquense	Gustavo Rentería	Abril/2006	Sinopsis de contenido según el emisor: Programa de corte periodístico político, en el cual tenemos distintas opiniones de un tema, con entrevistas a favor y en contra, así como opinión de distintos eruditos en la materia
Barra Libre	TV Mexiquense	Raúl Cremoux	11/abril/2006	Sinopsis de contenido según el emisor: Programa informativo y de debate político en donde se abordan temas de interés para la sociedad
Fórmula financiera	Televisa	Maria Carmen Cortes y Jose Yuste	10/09/2009	Canal 229 SKY, Canal Telefórmula Sinopsis de contenido según el emisor Los tres columnistas a través de sus divertidas y polémicas orientan y mantienen informada a la audiencia sobre los acontecimientos que ocurren diariamente; Comienza en radio el 8/Octubre/1997. Transmite simultáneamente en Telefórmula el 8/Mayo/2005
Política Cero	Grupo Milenio		2008	Canal 115 Televisión restringida (sin sinopsis)

(1) *La mesa* es en realidad una barra de opinión, de canal proyecto 40, que se transmite en un espacio de 15 min después del noticiario *Informativo 40* conducido por Hania Novel, de lunes a viernes; está conformada por distintos programas dependiendo del día; lunes, ***Día Uno*** conducido por Raymundo Riva Palacio y Luis Enrique Mercado; martes, ***Martes Financiero*** conducido por Raúl Feliz y Manuel Somoza; miércoles, ***Todo personal*** conducido por José Fernández Menéndez y Bibiana Belsasso; jueves, ***La cara oculta*** conducido por Francisco Martín Moreno; viernes, ***Viernes Bipolar*** conducido por Debora Holtz y Javier Cruz.

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO

VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS

CUADRO GENERAL A RESULTADOS CONSIDERANDO TODAS LAS EMISIONES Y LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS DEL CORPUS

NOMBRE DEL PROGRAMA		TERCER GRADO	TERCER GRADO	TERCER GRADO	TERCER GRADO	ENTRE TRES	ENTRE TRES	ENTRE TRES	PRIMER PLANO	DESDE LAS CAMARAS	DESDE LAS CAMARAS	EN CONTEXTO	EN CONTEXTO	EN CONTEXTO	
FECHA		26/11/2008	17/12/2008	06/08/2008	17/09/2008	18/08/2008	08/12/2008	08/09/2008	11/08/2008	23/11/2008	21/09/2008	09/10/2008	13/11/2008	11/09/2008	
DURACIÓN DE LA EMISIÓN		65’ 55’’	63’ 35’’	67’ 06’’	63’ 35’’	57’ 22’’	54’ 36’’	58’ 01’’	59’ 42’’	30’ 49’’	30’ 03’’	36’ 17’’	34’ 54’’	38’ 34’’	
DEBATE	TOTAL DE EVENTOS	13	8	15	20		6	3		4	1	2	3	21	
	MEDIANTE SOLAPAMIENTO	13	7	12	16			1		1				12	
	MEDIANTE REFUTACIÓN		1	3	4		6	2		3	1	2	3	9	
	DURACIÓN TOTAL DE EVENTOS	2’22’’	1’27’’	4’03’’	4’58’’		2’24’’	39’’		1’06’’	30’’	47’’	36’’	6’ 09’’	
	% SOBRE DURACIÓN TOTAL	3.38 %	2.00 %	6.00 %	7.22%		4.12%	0.67%		3.47%	0.99%	1.29%	1.04 %	15.88%	
IDENTIDAD DISCURSIVA	COMO ANALISTA	TOTAL DE EVENTOS	2	2	1		7	10		7	9	7	2	8	5
		DURACIÓN DE EVENTOS	12’’	1’27’’	06’’		4’ 04’’	4’00’’		3’14’’	5’04’’	2’45’’	37’’	4’08’’	1’25’’
		% SOBRE DURACIÓN TOTAL	0.18%	2.00%	0.08%		7.06%	6.62%		5.28%	16.53 %	8.15%	1.02%	11.81%	3.26%
	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO	TOTAL DE EVENTOS	1	3	1			3		2	3		2	1	
		DURACIÓN DE EVENTOS	07’’	1’ 11’’	07’’			48’’		43’’	27’’		16’’	30’’	
		% SOBRE DURACIÓN TOTAL	0.10 %	1.75 %	0.10%			0.88 %		0.72%	0.88%		0.44%	0.86%	
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS	TOTAL DE EVENTOS	2	1	1		7	10	4	3	1	1	3	2	1
		DURACIÓN DE EVENTOS	12’’	16’’	07’’		2’51’’	2’22’’	1’22’’	54’’	11’’	10’’	39’’	31’’	07’’
		% SOBRE DURACIÓN TOTAL	0.18%	0.25%	0.10 %		4.38%	4.08 %	2.10 %	0.90 %	0.36%	0.33 %	1.07 %	0.89 %	0.18 %
	ALUDE A LOS CIUDADANOS	TOTAL DE EVENTOS			4		1	3	1	5		1			
		DURACIÓN DE EVENTOS			41’’		30’’	28’’	08’’	1’ 54’’		07’’			
		% SOBRE DURACIÓN TOTAL			0.61 %		0.52%	0.51%	0.13%	2.59 %		0.57 %			
		MEDIO UTILIZADO P/ALUDIR*													
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	FUNCIONARIOS		1			7	7		5	2	4	1	7	2	
	LEGISLADORES	1		1	1		2		1	6	2		1	3	
	CONGRESO	1	1				1		1	1	1	1			
	DURACIÓN TOTAL DE EVENTOS	12’’	1’27’’	06’’	32’’	4’04’’	3’60’’		3’14’’	5’04’’	2’15’’	37’’	4’08’’	1’25’’	
	% SOBRE DURACION TOTAL	0.18 %	2.00 %	0.08 %	0.50%	7.06 %	6.62 %		5.28 %	16.53 %	8.15 %	1.02 %	11.81 %	3.26 %	

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
CUADRO GENERAL A RESULTADOS CONSIDERANDO TODAS LAS EMISIONES Y LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS DEL CORPUS

NOMBRE DEL PROGRAMA		PUNTO DE PARTIDA	PUNTO DE PARTIDA	LA MANZANA	LA MANZANA	REPORTE 13	REPORTE 13	DE CIFRAS	DIALOGOS POLITICOS	DIALOGOS POLITICOS	DIALOGOS POLITICOS	LA ENTREVISTA	POLITICA CERO	EL NOTIFIERO
FECHA		07/10/2008	02/09/2008	22/09/2008	18/08/2008	02/09/2008	09/09/2008	17/12/2008	12/09/2008	26/09/2008	01/08/2008	14/11/2008	17/12/2008	26/09/2008
DURACIÓN DE LA EMISIÓN		54' 48''	57'16''	28'03''	28' 39''	32' 16''	27' 40''	29' 11''	57' 27''	56'24''	60' 28''	29' 14''	14' 14''	70' 01''
DEBATE	TOTAL DE EVENTOS	1			3	1		6	1					
	MEDIANTE SOLAPAMIENTO	1			2	1		4						
	MEDIANTE REFUTACIÓN				1			2	1					
	DURACIÓN TOTAL DE EVENTOS	06''			58''	15''		1'50''	07''					
	% SOBRE DURACIÓN TOTAL	0.11 %			2.04 %			5.15 %	0.12 %					
IDENTIDAD DISCURSIVA	COMO ANALISTA	TOTAL DE EVENTOS	4			8	9	6		3	5	5	6	
		DURACIÓN DE EVENTOS	1' 27''			2'52''	4'26''	2'41''		1'49''	3'47''	2'24''	1'26''	
		% SOBRE DURACIÓN TOTAL	2.33%			8.87%	13.24%	8.79 %		2.64 %	11.45 %	7.68 %	8.91 %	
	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO	TOTAL DE EVENTOS			1	3		7		4	1		1	2
		DURACIÓN DE EVENTOS			20''	40''		1'43''		1'24''	13''		08''	15''
		% SOBRE DURACIÓN TOTAL			0.71%	1.24 %		4.9 %		2.20%	0.42%		0.56%	0.21 %
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS	TOTAL DE EVENTOS	5		3	11	5		9	2	2	1	2	2
		DURACIÓN DE EVENTOS	45''		57''	3' 32''	2'05''		3'01''	44''	46''	06''	29''	21''
		% SOBRE DURACIÓN TOTAL	0.82 %		2.03%	10.32 %	7.48 %		5.25 %	0.78 %	1.51 %	0.20%	2.05 %	0.29 %
	ALUDE A LOS CIUDADANOS	TOTAL DE EVENTOS		4										
		DURACIÓN DE EVENTOS		1' 36''										
		% SOBRE DURACIÓN TOTAL		2.37 %										
	MEDIO UTILIZADO P/ALUDIR*													
EVALUACIÓN DEL	FUNCIONARIOS		4		1	6	7	4		1	2	3	6	5
	LEGISLADORES					2		1	6	2	1	1		
	CONGRESO						2	1	1		2	1		
	DURACIÓN TOTAL DE EVENTOS		1'27''		20''	2'52''	4'26''	2'41''	3'10''	1'49''	3'47''	2'24''	1'26''	1'50''
		% SOBRE DURACION TOTAL	2.33 %		0.71%	8.87%	13.24%	8.79 %	10.64 %	2.64 %	11.45 %	7.68 %	8.91 %	2.14 %

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “TERCER GRADO”, EMISIÓN 06/08/2008, DURACIÓN TOTAL 67 minutos 06 segundos.

HOJA 1/4

VARIABLE	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
																	SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO		x	21:24- 21:35					x	23:58- 24:08							2	21''
	REFUTACIÓN										x	24:49- 24:58					1	09''
	TOTAL		1	11''					1	10''	1	09''					3	30''
	PROTAGONISTA	x	x		x		x		x		x		x		x		8	
	(*) INVITADO																	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO						x	23:43- 23:50									1	07''
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS																	
	ALUDE A LOS CIUDADANOS	x	05:41- 05:50								x	24:49- 24:58	x	35:30- 35:44			3	32''
	TOTAL	1	09''				1	07''			1	09''	1	14''			4	39''
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES																	
	LEGISLADORES														x	35:45- 35:51	1	06''
	CONGRESO				x	22:58- 23:07												
	TOTAL				1	09''									1	06''	1	09''

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA "TERCER GRADO", EMISIÓN 06/08/2008, DURACIÓN TOTAL 67 minutos 06 segundos.

HOJA 2/4

VARIABLE	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
																	SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO				x	42:13-42:20			x	44:53-45:09	x	45:48-46:03	x	46:40-46:47	x	48:16-48:28	5	53''
	REFUTACIÓN		x	41:50-41:56			x	43:22-43:30									2	14''
	TOTAL		1	06''	1	07''	1	08''	1	16''	1	15''	1	07''	1	08''	7	1'07''
	PROTAGONISTA	x	x		x		x		x		x		x		x		8	
	(*) INVITADO																	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO																	
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS	x	40:57-41:04														1	07''
	ALUDE A LOS CIUDADANOS																	
	TOTAL	1	07''														1	07''
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES																	
	LEGISLADORES																	
	CONGRESO																	
	TOTAL																	

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “TERCER GRADO”, EMISIÓN 06/08/2008, DURACIÓN TOTAL 67 minutos 06 segundos.

HOJA 3/4

VARIABLE		EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
														SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO	X	49:44-50:00	X	52:00-52:10			X	60:39-61:44	X	61:58-62:15	X	65:37-65:45	5	2'26"
	REFUTACIÓN														
	TOTAL	1	46"	1	10"			1	1'05"	1	17"	1	08"	5	2'26"
	PROTAGONISTA	X		X		X		X		X		X		6	
	(*) INVITADO														
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO														
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS														
	ALUDE A LOS CIUDADANOS					X	57:18-57:27							1	09"
	TOTAL					1	09"							1	09"
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES														
	LEGISLADORES														
	CONGRESO														
	TOTAL														

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA "TERCER GRADO", EMISIÓN 06/08/2008, DURACIÓN TOTAL 67 minutos 06 segundos.

HOJA 4/4

TOTAL DE EVENTOS Y DURACIÓN EN LA EMISIÓN.

VARIABLE		SUBTOTAL HOJA 1/4		SUBTOTAL HOJA 2/4		SUBTOTAL HOJA 3/4		TOTAL	
		SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN	SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN	SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN	TOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO	2	21''	5	53''	5	2'26''	12	3'40''
	REFUTACIÓN	1	09''	2	14''			3	23''
	TOTAL	3	30''	7	1'07''	5	2'26''	15	4'03''
	PROTAGONISTA	8		8		6		22	
	(*) INVITADO								
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO	1	07''					1	07''
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS			1	07''			1	07''
	ALUDE A LOS CIUDADANOS	3	32''			1	09''	4	41''
	TOTAL	4	39''	1	07''	1	09''	6	55''
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES								
	LEGISLADORES	1	06''					1	06''
	CONGRESO								
	TOTAL	1	09''					1	06''

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO
VERIFICACION DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPOTESIS
PROGRAMA TERCER GRADO
EMISION 17/09/2008
DURACION TOTAL 63 minutos 35 segundos

HOJA 1/2

	FRECUENCIA / DURACIÓN DE EPISODIO POR SECUENCIA	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
																		SUBTOTAL EPISODIOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO					x	13:47- 13:51			x	15:18- 15:22	x	16:53- 17:00	x	17:23- 17:28			4	20"
	REFUTACIÓN																		
	TOTAL																		
	PROTAGONISTA ¹	x		x		x		x		x		x				x		7	
	(*) INVITADO ²																		
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO	x	09:30- 10:18															1	48'
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS															x	33:22- 33:38	1	16"
	ALUDE A LOS CIUDADANOS																		
	TOTAL																		
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES POLITICOS EN GENERAL			x	12:38- 13:37													1	59"
	LEGISLADORES																		
	CONGRESO							x	13:54- 14:22									1	28"
	TOTAL																		

¹ PROTAGONISTA: ANALISTA, PERIODISTA

² INVITADO: ANALISTA, PERIODISTA, POLÍTICO, U OTRO

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO
VERIFICACION DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPOTESIS
PROGRAMA TERCER GRADO
EMISION 17/09/2008
DURACION TOTAL 63 minutos 35 segundos

HOJA 2/2

	FRECUENCIA / DURACIÓN DE EPISODIO POR SECUENCIA	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	SUBTOTAL		
																		SUBTOTAL EPISODIOS	DURACIÓN	
DEBATE	SOLAPAMIENTO							X	36:28- 36:45						X	34:00- 34:10	X	34:58- 35:30	3	59"
	REFUTACIÓN					X	36:20- 37:27												1	1'07"
	TOTAL																			
	PROTAGONISTA ¹	X				X				X		X		X					5	
	(*) INVITADO ³																			
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO									X	44:49- 45:10	X	45:37- 45:49						2	33"
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS											X								
	ALUDE A LOS CIUDADANOS																			
	TOTAL																			
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES POLITICOS EN GENERAL																			
	LEGISLADORES																			
	CONGRESO																			
	TOTAL																			

¹ PROTAGONISTA: ANALISTA, PERIODISTA

² INVITADO: ANALISTA, PERIODISTA, POLÍTICO, U OTRO

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “TERCER GRADO”, EMISIÓN 26/11/2008, DURACIÓN TOTAL 65 minutos 55 segundos.

HOJA 1/3

VARIABLE	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
																			SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO	x	14:21- 14:26	x	14:38- 14:58	x	18:08- 18:24	x	36:04- 36:10	x	38:00- 38:10			x	44:46- 44:56	x	45:16- 45:30		7	1'21"
	REFUTACIÓN																			
	TOTAL	1	05"	1	20"	1	16"	1	06"	1	10"			1	10"	1	14"		7	1'21"
	PROTAGONISTA	x		x		x		x		x		x		x		x		x	9	
	(*) INVITADO																			
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO																			
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS																			
	ALUDE A LOS CIUDADANOS																			
	TOTAL																			
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES																			
	LEGISLADORES																x	45:36- 45:42	1	06"
	CONGRESO											x	39:21- 39:27						1	06"
	TOTAL											1	06"				1	06"	2	12"

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA "TERCER GRADO", EMISIÓN 26/11/2008, DURACIÓN TOTAL 65 minutos 55 segundos.

HOJA 2/3

VARIABLE		EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
																				SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO	X	46:14- 46:22			X	47:17- 47:39					X	60:15- 60:20	X	62:52- 63:00	X	64:55- 65:02	X	65:09- 65:20	6	1'01"
	REFUTACIÓN																				
	TOTAL	1	08"			1	22"					1	05"	1	08"	1	07"	1	11"	6	1'01"
	PROTAGONISTA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		9	
	(*) INVITADO																				
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO							X	48:57- 49:04											1	07"
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS			X	47:06- 47:10					X	50:32- 50:40									2	12"
	ALUDE A LOS CIUDADANOS																				
	TOTAL			1	04"			1	07"	1	08"									3	19"
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES																				
	LEGISLADORES																				
	CONGRESO																				
	TOTAL																				

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “TERCER GRADO”, EMISIÓN 26/11/2008, DURACIÓN TOTAL 65 minutos 55 segundos.

HOJA 3/3

TOTAL DE EVENTOS Y DURACIÓN EN LA EMISIÓN.

VARIABLE		SUBTOTAL HOJA 1/3		SUBTOTAL HOJA 2/3		TOTAL	
		SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN	SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN	TOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO	7	1'21''	6	1'01''	13	2'22''
	REFUTACIÓN						
	TOTAL	7	1'21''	6	1'01''	13	2'22''
	PROTAGONISTA	9		9		18	
	(*) INVITADO						
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO			1	07''	1	07''
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS			2	12''	2	12''
	ALUDE A LOS CIUDADANOS						
	TOTAL			3	19''	3	19''
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES						
	LEGISLADORES	1	06''			1	06''
	CONGRESO	1	06''			1	06''
	TOTAL	2	12''			2	12''

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “TERCER GRADO”, EMISIÓN 17/12/2008, DURACIÓN TOTAL 63 minutos 35 segundos.

HOJA 1/3

VARIABLE	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
																	SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO				x	13:47-13:51			x	15:18-15:23	x	16:53-17:00	x	17:23-17:28			4	21''
	REFUTACIÓN																	
	TOTAL				1	04''			1	05''	1	07''	1	05''			4	21''
	PROTAGONISTA	x		x	x		x		x		x		x		x		8	
	(*) INVITADO																	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO	x	09:30-10:08														1	38''
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS														x	33:22-33:38	1	16''
	ALUDE A LOS CIUDADANOS																	
	TOTAL	1	38''												1	16''	2	54''
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES			x	12:38-13:37												1	59''
	LEGISLADORES																	
	CONGRESO						x	13:54-14:22									1	28''
	TOTAL			1	59''		1	28''									2	1'27''

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “TERCER GRADO”, EMISIÓN 17/12/2008, DURACIÓN TOTAL 63 minutos 35 segundos.

HOJA 2/3

VARIABLE		EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
														SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO	x	34:00- 34:10	x	34:58- 35:30			x	36:28- 36:45					3	59''
	REFUTACIÓN				x	36:20- 36:27								1	07''
	TOTAL	1	10''	1	32''	1	07''	1	17''					4	1'06''
	PROTAGONISTA	x		x		x		x		x		x		6	
	(*) INVITADO														
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO									x	44:49- 45:10	x	45:37- 45:49	2	33''
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS														
	ALUDE A LOS CIUDADANOS														
	TOTAL									1	21''	1	12''	2	33''
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES														
	LEGISLADORES														
	CONGRESO														
	TOTAL														

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “TERCER GRADO”, EMISIÓN 17/12/2008, DURACIÓN TOTAL 63 minutos 35 segundos.

HOJA 3/3

TOTAL DE EVENTOS Y DURACIÓN EN LA EMISIÓN.

VARIABLE		SUBTOTAL HOJA 1/3		SUBTOTAL HOJA 2/3		TOTAL	
		SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN	SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN	TOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO	4	21''	3	59''	7	1'20''
	REFUTACIÓN			1	07''	1	07''
	TOTAL	4	21''	4	1'06''	8	1'27''
	PROTAGONISTA	8		6		14	
	(*) INVITADO						
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO	1	38''	2	33''	3	1'11''
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS	1	16''			1	16''
	ALUDE A LOS CIUDADANOS						
	TOTAL	2	54''	2	33''	4	1'27''
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES	1	59''			1	59''
	LEGISLADORES						
	CONGRESO	1	28''			1	28''
	TOTAL	2	1'27''			2	1'27''

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO
VERIFICACION DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPOTESIS
PROGRAMA PRIMER PLANO
EMISION 11/08/2008 DURACION TOTAL 59 min 42 segundos

HOJA 1/3

	FRECUENCIA / DURACIÓN DE EPISODIO POR SECUENCIA	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
																		SUBTOTAL EPISODIOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO	-	-	-	-	-	-						-			-	-		
	REFUTACIÓN	-	-	-	-	-	-						-			-	-		
	TOTAL	-	-	-	-	-	-						-			-	-		
	PROTAGONISTA ¹	X		X		X		X		X						X		8	
	(*) INVITADO ²	-	-	-	-	-	-						-			-	-		
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO	-	-	-	-	X		X	05:06- 05:53				-			-	-	1	27"
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS	-	-	-	-	-	-						-			-	-		
	ALUDE A LOS CIUDADANOS	X	0:43- 2:58	X	2:59- 4:17	-	-					X	6:20- 7:00			X	8:40- 9:00	3	1'23"
	TOTAL	1	2 MIN 25 SEG	1	1MIN 18 SEG								1 MIN			1	20 SEG	4	1'50"
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES POLITICOS EN GENERAL	X	0:53- 1:25	-	-	X	04:38- 05:05			X	05:55- 06:19			X	07:00- 07:21	-	-	4	1'37"
	LEGISLADORES	-	-	-	-	-	-						-			-	-		
	CONGRESO	-	-	-	-	-	-						-			-	-		
	TOTAL	1	1 MIN 32 SEG	-	-	1										-	-	4	1'37"

¹ PROTAGONISTA: ANALISTA, PERIODISTA

² INVITADO: ANALISTA, PERIODISTA, POLÍTICO, U OTRO

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO
VERIFICACION DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPOTESIS
PROGRAMA PRIMER PLANO
EMISION 11/08/2008 DURACION TOTAL 59 min 42 segundos

HOJA 2/3

	FRECUENCIA / DURACIÓN DE EPISODIO POR SECUENCIA	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
																		SUBTOTAL EPISODIOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO	-	-	-	-			-	-			-	-						
	REFUTACIÓN	-	-	-	-			-	-			-	-						
	TOTAL	-	-	-	-			-	-			-	-						
	PROTAGONISTA ¹	x		x				x				x						7	
	(*) INVITADO ³	-	-	-	-			-	-			-	-						
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO	x	9:15- 9:31	-	-			-	-			-	-					1	16"
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS	-	-	x	11:30- 11:41			-	-			-	-					1	11"
	ALUDE A LOS CIUDADANOS	-	-	-	-			x	13:24- 13:35			-	-					2	31"
	TOTAL	1	16 SEG	1	12 SEG			1	11 SEG			-	-					4	58"
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES POLÍTICOS EN GENERAL	-	-			x	11:42- 11:58			x	13:35- 13:58	-	-					2	39"
	LEGISLADORES	-	-	-	-			-	-			x	23:50- 24:13					1	23"
	CONGRESO	-	-	-	-			-	-			-	-						
	TOTAL	-	-	1	15 SEG							1	23 SEG					3	1'02"

¹ PROTAGONISTA: ANALISTA, PERIODISTA

² INVITADO: ANALISTA, PERIODISTA, POLÍTICO, U OTRO

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO
VERIFICACION DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPOTESIS
PROGRAMA PRIMER PLANO
EMISION 11/08/2008 DURACION TOTAL 59 min 42 segundos

HOJA 3/3

FRECUENCIA / DURACIÓN DE EPISODIO POR SECUENCIA	TOTAL	
	EPISODIOS	DURACIÓN

DEBATE	SOLAPAMIENTO		
	REFUTACIÓN		
	TOTAL		
	PROTAGONISTA ¹	15	
	(*) INVITADO ³		
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO	2	43"
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS	1	11"
	ALUDE A LOS CIUDADANOS	5	1'54"
	TOTAL	8	2'48"
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES POLITICOS EN GENERAL	6	2'10"
	LEGISLADORES	1	23"
	CONGRESO		
	TOTAL	7	2'39"

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO
VERIFICACION DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPOTESIS
PROGRAMA REPORTE TRECE
EMISION 02/09/2008 DURACION TOTAL 32 minutos 16 segundos

HOJA ½

	FRECUENCIA / DURACIÓN DE EPISODIO POR SECUENCIA	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
																		SUBTOTAL EPISODIOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	12:36- 12:51		
	REFUTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15 SEG		
	PROTAGONISTA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
	(*) INVITADO ²	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-		
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO	-	-	X	5:48- 6:18	-	-	X	8:52- 8:59	X	10:48- 10:52	-	-	-	-	-	-		
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS	X	4:07- 4:41	-	-	X	6:21-7:05	X	8:22- 8:52	X	10:39- 10:44	X	11:21- 11:46	X	12:28- 12:36	-	-		
	ALUDE A LOS CIUDADANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	1	34 SEG	1	30 SEG	1	44 SEG	2	37 SEG	2	9 SEG	1	25 SEG	1	18 SEG	-	-		
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES POLITICOS EN GENERAL	X	4:20- 4:41	X	6:10- 6:18	-	-	X	7:34- 8:59	X	10:00- 11:13	X	11:15- 11:46	-	-	-	-		
	LEGISLADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	CONGRESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	12:36- 12:51		
	TOTAL	1	21 SEG	1	8 SEG	-	-	1	1 MIN 24 SEG	1	1 MIN 13 SEG	1	31 SEG	-	-	1	15 SEG		

*ROSA NAVARRO ÁLVAREZ / COORDINADORA

*ALEJANDRO GERTZ MANERO / EX -SRIO. SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL

*LIC. MARCO A. HERNÁNDEZ MURRIETA / FUNDACIÓN MURRIETA- ILUMINEMOS MÉXICO

*FERNANDO RUIZ

¹ PROTAGONISTA: ANALISTA, PERIODISTA

² INVITADO: ANALISTA, PERIODISTA, POLÍTICO, U OTRO

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO
VERIFICACION DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPOTESIS
PROGRAMA REPORTE TRECE
EMISION 02/09/2008 DURACION TOTAL 32 minutos 16 segundos

HOJA 2/2

	FRECUENCIA / DURACIÓN DE EPISODIO POR SECUENCIA	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
																		SUBTOTAL EPISODIOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	REFUTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	PROTAGONISTA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(*) INVITADO ³	X		X		X		X	-	X	-	X	-	X	-				
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS	X	18:241 8:57	X	19:10- 19:30	X	20:29- 20:34	-	-	X	23:14- 23:38	-	-	X	26:58- 27:44				
	ALUDE A LOS CIUDADANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	1	33 SEG	1	20 SEG	1	5 SEG	-	-	-	24 SEG	-	-	1	46 SEG				
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES POLITICOS EN GENERAL	-	-	-	-	-	-	X	21:06- 21:32	X	23:22- 23:38	X	24:24- 24:57	X	27:4427:5 4				
	LEGISLADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	CONGRESO	X	18:31- 18:57	-	-	X	20:34- 21:02	X	20:45- 21:32	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	1	26 SEG	-	-	1	28 SEG	2	1MIN 13 SEG	1	16 SEG	1	33 SEG	1	10 SEG				

*ROSA NAVARRO ÁLVAREZ / COORDINADORA

*ALEJANDRO GERTZ MANERO / EX -SRIO. SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL

*LIC. MARCO A. HERNÁNDEZ MURRIETA / FUNDACIÓN MURRIETA- ILUMINEMOS MÉXICO

*FERNANDO RUIZ

¹ PROTAGONISTA: ANALISTA, PERIODISTA

² INVITADO: ANALISTA, PERIODISTA, POLÍTICO, U OTRO

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO
VERIFICACION DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPOTESIS
PROGRAMA REPORTE 13 EMISIÓN 09/09/2008 DURACION TOTAL 27 MINUTOS 40 SEGUNDOS

HOJA 1/1

FRECUENCIA/DURACIÓN DE EPISODIO POR SECUENCIA		EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	TOTAL	
																								TOTAL EPISODIO	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO																								
	REFUTACIÓN																								
	TOTAL																								
	PROTAGONISTA ¹																								
	(*)INVITADO ²	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			11		
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO																								
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS			X	08:33-09:00				X	10:56-11:33	X	11:37-11:56				X	24:10-24:42	X	26:20-26:30				5	2'05''	
	ALUDE A LOS CIUDADANOS																								
	TOTAL			1	27''				1	37''	1	19''					1	32''	1	10''			5	2'05''	
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES POLITICOS EN GENERAL					X	09:03-09:40	X	10:17-10:50						X	12:31-12:40					X	26:31-26:48	4	1'46''	
	LEGISLADORES	X	08:06-08:32																				1	26''	
	CONGRESO												X	12:00-12:29									1	29''	
	TOTAL	1	26''			1	37''	1	41''				1	29''	1	11''					1	17''	6	2'41''	

*LUIS PARDO SAINS / PDTE. ASOCIACION INTERNACIONAL DE RADIODIFUSORES

*ANA MARIA URRUTIA DE LARA / COMITÉ DE LIBERTAD DE EXPRESION

*SERGIO SARMIENTO / PERIODISTA Y ANALISTA POLITICO

*JORGE QUIROGA / EX-PRESIENTE DE BOLIVIA

*ARMANDO PAREDES ARROYO / PRESIDENTE CONSEJO COORDINADORES EMPRESARIALES

*ELADIO LAREZ / PRESIDENTE RADIO CARACAS VENEZUELA

*RICARDO TROTTI / DIR. LIBERTAD DE PRENSA SIP

*EDGAR JARAMILLO / CENTRO INF. ESTUDIOS SUPERIORES COMUNICACIÓN EN AMERICA LATINA

¹ PROTAGONISTA: ANALISTA, PERIODISTA

² INVITADO: ANALISTA, PERIODISTA, POLÍTICO, U OTRO

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO
VERIFICACION DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPOTESIS
PROGRAMA PUNTO DE PARTIDA
EMISION 02/09/2008 DURACION TOTAL DEL PROGRAMA: 57 MINUTOS 16 SEGUNDOS

	FRECUENCIA / DURACIÓN DE EPISODIO POR SECUENCIA	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	TOTAL	
										TOTAL EPISODIOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO										
	REFUTACIÓN										
	TOTAL										
	PROTAGONISTA ¹										
	*INVITADO ²	X		X		X		X		4	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO										
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS										
	ALUDE A LOS CIUDADANOS	X	13:46 - 14:09	X	14:46 - 15:18	X	29:24 - 29:53	X	30:20 - 30:30		
	TOTAL	1	25SEG	1	32SEG	1	29SEG	1	10SEG	4	1 MIN 36 SEG
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES POLITICOS EN GENERAL										
	LEGISLADORES										
	CONGRESO										
	TOTAL										

*ROY CAMPOS / PRESIDENTE DE CONSULTA MITOTSKY

¹ PROTAGONISTA: ANALISTA, PERIODISTA

² INVITADO: ANALISTA, PERIODISTA, POLÍTICO, U OTRO

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “PUNTO DE PARTIDA”, EMISIÓN 07/10/2008, DURACIÓN TOTAL 54 minutos 48 segundos.

HOJA 1/1

VARIABLE	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	TOTAL	
																			TOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO				X	21:43 - 21:49													1	06''
	REFUTACIÓN																			
	TOTAL				1	06''													1	06''
	PROTAGONISTA										X								1	
	(*) INVITADO	X		X		X		X		X			X		X		X		8	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO																			
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS	X	20:40 - 20:52						X	23:14 - 23:21	X	26:43 - 26:52	X	27:23 - 27:29	X	36:44 - 36:55			5	45''
	ALUDE A LOS CIUDADANOS																			
	TOTAL	1	12''						1	07''	1	09''	1	06''	1	11''			5	45''
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES			X	20:53 - 21:02			X	22:17 - 22:50			X	26:43 - 26:52				X	37:00 - 37:36	4	1'27''
	LEGISLADORES																			
	CONGRESO																			
	TOTAL			1	09''			1	33''			1	09''				1	36''	4	1'27''

*BEATRIZ PAREDEZ / PRESIDENTE PRI
*GERMAN MARTINEZ /PRESIDENTE PAN
*GUADALUPE ACOSTA NARANJA / PRESIDENTE PRD

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO
VERIFICACION DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPOTESIS
PROGRAMA LA MANZANA EMISION 18/08/2008 DURACION TOTAL 28 min 39 segundos

	FRECUENCIA / DURACIÓN DE EPISODIO POR SECUENCIA	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
														SUBTOTAL EPISODIOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO									X	12:31- 12:36			1	6''
	REFUTACIÓN	X	04:00- 04:13											1	13''
	TOTAL	1	13''							1	6''			2	19''
	PROTAGONISTA ¹														
	(*) INVITADO ²	X		X		X		X		X				5	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO														
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS														
	ALUDE A LOS CIUDADANOS														
	TOTAL														
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES POLÍTICOS EN GENERAL			X	04:13- 04:20	X	06:57- 07:37					X	12:41- 12:53	3	59''
	LEGISLADORES							X	08:39- 08:47					1	8''
	CONGRESO														
	TOTAL			1	7''	1	40''	1	8''			1	12''	4	1'07''

*SEN. FEDERICO DÖRING CASAR / COMISIÓN SEGURIDAD PÚBLICA SENADO DE LA REPÚBLICA

*DIP. CÉSAR CAMACHO QUIROZ / COMISIÓN DE JUSTICIA CÁMARA DE DIPUTADOS

¹ PROTAGONISTA: ANALISTA, PERIODISTA

² INVITADO: ANALISTA, PERIODISTA, POLÍTICO, U OTRO

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO
VERIFICACION DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPOTESIS
PROGRAMA LA MANZANA EMISION 18/08/2008. DURACION TOTAL 28 min 39 segundos

	FRECUENCIA / DURACIÓN DE EPISODIO POR SECUENCIA	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	SUBTOTAL		TOTAL	
												SUBTOTAL EPISODIOS	DURACIÓN	TOTAL EPIDIOS	DURACION
DEBATE	SOLAPAMIENTO									x	27:25- 28:04	1	39"	2	45"
	REFUTACIÓN													1	13"
	TOTAL									1	39"	1	39"	3	58"
	PROTAGONISTA ¹											FALTAN2			
	(*) INVITADO ³	x		x				x		x		4	5	9	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO														
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS														
	ALUDE A LOS CIUDADANOS														
	TOTAL														
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES POLITICOS EN GENERAL	x	14:20- 15:05			x	18:15- 19:29	x	21:52- 22:27			3	1'34	6	2'33"
	LEGISLADORES			x	18:04- 18:15							1	11"	2	19"
	CONGRESO														
	TOTAL	1	45"	1	11"	1	14"	1	35"			4	1'45"	8	2'52"

*SEN. FEDERICO DÖRING CASAR / COMISIÓN SEGURIDAD PÚBLICA SENADO DE LA REPÚBLICA

*DIP. CÉSAR CAMACHO QUIROZ / COMISIÓN DE JUSTICIA CÁMARA DE DIPUTADOS

¹ PROTAGONISTA: ANALISTA, PERIODISTA

² INVITADO: ANALISTA, PERIODISTA, POLÍTICO, U OTRO

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “LA MANZANA”, EMISIÓN 22/09/2008, DURACIÓN TOTAL 28 minutos 03 segundos

HOJA 1/1

VARIABLE		EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	TOTAL	
												TOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO												
	REFUTACIÓN												
	TOTAL												
	PROTAGONISTA						X						
	(*) INVITADO	X		X		X				X			
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO	X	03:37- 03:57									1	20''
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS			X	7:26- 7:45			X	8:25- 8:33	X	26:18- 26:48	3	57''
	ALUDE A LOS CIUDADANOS												
	TOTAL	1	20''	1	19''			1	08''	1	30''	4	1'17''
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES					X	7:50- 8:10					1	20''
	LEGISLADORES												
	CONGRESO												
	TOTAL					1	20''					1	20''

*MAURICIO ARANGUREN MOLINA/ PERIODISTA COLOMBIANO

*JULIÁN ANDRADE JARDI / PERIODISTA

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “ENTRE TRES”, EMISIÓN 18/08/2008, DURACIÓN TOTAL 57 minutos 22 segundos

HOJA 1/3

VARIABLE		EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
																SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO																
	REFUTACIÓN																
	TOTAL																
	PROTAGONISTA	X		X		X										3	
	(*) INVITADO								X			X		X		3	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO						X	04:33- 04:42									
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS	X	00:43- 00:55						X	04:55- 05:20	X	21:24- 22:02	X	32:00- 32:35		4	1'59''
	ALUDE A LOS CIUDADANOS					X	01:10- 01:40									1	30''
	TOTAL	1	12''			1	30''	1	09''	1	25''	1	38''	1	35''	5	2'29''
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES			X	00:56- 01:04					X	04:55- 05:20	X	21:24- 22:02	X	32:00- 32:35	4	1'46''
	LEGISLADORES																
	CONGRESO																
	TOTAL			1	08''					1	25''	1	38''	1	35''	4	1'46''

*LUIS DE LA BARREDA SOLORZANO / ABOGADO

*ERNESTO LOPEZ PORTILLO / ESPECIALISTA EN SEGURIDAD PUBLICA

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “ENTRE TRES”, EMISIÓN 18/08/2008, DURACIÓN TOTAL 57 minutos 22 segundos

HOJA 2/3

VARIABLE	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
													SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO													
	REFUTACIÓN													
	TOTAL													
	PROTAGONISTA	x		x		x					x		4	
	(*) INVITADO						x		x				2	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO													
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS					x	51:15- 51:31	x	51:53- 52:12		x	52:46- 53:03	3	52''
	ALUDE A LOS CIUDADANOS													
	TOTAL					1	16''	1	19''		1	17''	3	52''
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES	x	33:57- 35:05	x	50:37- 51:13					x	52:08- 52:42		3	2'18''
	LEGISLADORES													
	CONGRESO													
	TOTAL	1	1'08''	1	36''					1	34''		3	2'18''

*LUIS DE LA BARREDA SOLORZANO / ABOGADO

*ERNESTO LOPEZ PORTILLO / ESPECIALISTA EN SEGURIDAD PUBLICA

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “ENTRE TRES”, EMISIÓN 18/08/2008, DURACIÓN TOTAL 57 minutos 22 segundos.

HOJA 3/3

TOTAL DE EVENTOS Y DURACIÓN EN LA EMISIÓN

VARIABLE		SUBTOTAL HOJA 1/3		SUBTOTAL HOJA 2/3		TOTAL	
		SUBTOTAL EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL EVENTO	DURACIÓN	TOTAL EVENTO	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO						
	REFUTACIÓN						
	TOTAL						
	PROTAGONISTA	3		4		7	
	(*) INVITADO	3		2		5	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO						
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS	4	1'59"	3	52"	7	2'51"
	ALUDE A LOS CIUDADANOS	1	30"			1	30"
	TOTAL	5	2'29"	3	52"	8	3'21"
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES	4	1'46"	3	2'18"	7	4'04"
	LEGISLADORES						
	CONGRESO						
	TOTAL	4	1'46"	3	2'18"	7	4'04"

*LUIS DE LA BARREDA SOLORZANO / ABOGADO

*ERNESTO LOPEZ PORTILLO / ESPECIALISTA EN SEGURIDAD PUBLICA

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “ENTRE TRES”, EMISIÓN 08/12/2008, DURACIÓN TOTAL 54 minutos 36 segundos

HOJA 1/4

VARIABLE	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
																			SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO																			
	REFUTACIÓN														x	11:08-11:28			1	20''
	TOTAL														1	20''			1	20''
	PROTAGONISTA	x		x					x					x					4	
	(*) INVITADO					x		x				x			x		x		5	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO																			
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS	x	3:24-3:29	x	3:46-3:56	x	4:52-5:06										x	13:00-13:26	4	55''
	ALUDE A LOS CIUDADANOS							x	5:53-5:58	x	6:43-6:53			x	10:54-11:07				3	28''
	TOTAL	1	05''	1	10''	1	14''	1	05''	1	10''			1	13''		1	26''	7	1'23''
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES					x	4:30-5:06	x	5:45-5:58			x	8:35-8:50						3	1'04''
	LEGISLADORES																			
	CONGRESO																			
	TOTAL					1	36''	1	13''			1	15''						3	1'04''

*ANA LAURA MAGALONI / INVESTIGADORA

*ERNESTO LOPEZ PORTILLO / ABOGADO

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “ENTRE TRES”, EMISIÓN 08/12/2008, DURACIÓN TOTAL 54 minutos 36 segundos

HOJA 2/4

VARIABLE	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
																			SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO																			
	REFUTACIÓN																x	32:20-32:27	1	07''
	TOTAL																1	07''	1	07''
	PROTAGONISTA						x				x		x				x		4	
	(*) INVITADO	x		x		x			x							x			5	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO						x	22:10-22:50	x	26:00-26:15	x	27:07-27:20							3	48''
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS			x	17:00-17:05														1	05''
	ALUDE A LOS CIUDADANOS																			
	TOTAL			1	05''		1	20''	1	15''	1	13''							4	53''
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES				x	17:20-17:49			x	26:00-26:15			x	29:42-29:58					3	1'
	LEGISLADORES														x	31:30-31:50			1	20''
	CONGRESO	x	12:33-12:52																1	19''
	TOTAL	1	19''		1	29''			1	15''			1	16''	1	20''			4	1'39''

*ANA LAURA MAGALONI / INVESTIGADORA

*ERNESTO LOPEZ PORTILLO / ABOGADO

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “ENTRE TRES”, EMISIÓN 08/12/2008, DURACIÓN TOTAL 54 minutos 36 segundos.

HOJA 3/4

VARIABLE		EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
																						SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO																						
	REFUTACIÓN					X	41:20-41:49	X	41:50-42:08			X	42:25-43:07					X	53:26-53:54			4	1'57"
	TOTAL					1	29"	1	18"			1	42"					1	28"			4	1'57"
	PROTAGONISTA	X										X		X		X		X		X		6	
	(*) INVITADO			X		X		X		X											4		
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO																						
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS			X	40:55-41:10					X	42:11-42:18	X	42:25-43:07	X	49:59-50:05					X	53:40-53:52	5	1'22"
	ALUDE A LOS CIUDADANOS																						
	TOTAL			1	15"					1	07"	1	42"	1	06"					1	12"	5	1'22"
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES	X	32:30-33:05																			1	35"
	LEGISLADORES															X	51:48-52:00					1	12"
	CONGRESO																						
	TOTAL	1	35"													1	12"					2	47"

*ANA LAURA MAGALONI / INVESTIGADORA

*ERNESTO LOPEZ PORTILLO / ABOGADO

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “ENTRE TRES”, EMISIÓN 08/12/2008, DURACIÓN TOTAL 54 minutos 36 segundos

HOJA 4/4

TOTAL DE EVENTOS Y DURACIÓN EN LA EMISIÓN

VARIABLE		SUBTOTAL HOJA 1/4		SUBTOTAL HOJA 2/4		SUBTOTAL HOJA 3/4		TOTAL	
		SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN	SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN	SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN	TOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO								
	REFUTACIÓN	1	20''	1	07''	4	1'57''	6	2'24''
	TOTAL	1	20''	1	07''	4	1'57''	6	2'24''
	PROTAGONISTA	4		4		6		14	
	(*) INVITADO	5		5		4		14	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO			3	48''			3	48''
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS	4	55''	1	05''	5	1'22''	10	2'22''
	ALUDE A LOS CIUDADANOS	3	28''					3	28''
	TOTAL	7	1'23''	4	53''	5	1'22''	16	3'38''
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES	3	1'04''	3	60''	1	35''	7	2'39''
	LEGISLADORES			1	20''	1	12''	2	32''
	CONGRESO			1	19''			1	19''
	TOTAL	3	1'04''	4	1'39''	2	47''	10	3'60''

*ANA LAURA MAGALONI / INVESTIGADORA

*ERNESTO LOPEZ PORTILLO / ABOGADO

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “EN CONTEXTO”, EMISIÓN 11/09/2008, DURACIÓN TOTAL 38 minutos 34 segundos

HOJA 1/4

VARIABLE		EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
																				SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO	X	03:20-03:30																	1	10''
	REFUTACIÓN			X	04:15-04:29	X	04:58-05:30	X	07:00-07:10					X	08:45-09:11			X	11:18-11:31	5	2'39''
	TOTAL	1	10''	1	14''	1	32''	1	1'04''					1	26''			1	23''	6	2'49''
	PROTAGONISTA	X		X		X		X		X						X		X		7	
	(*) INVITADO										X			X						2	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO																				
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS																				
	ALUDE A LOS CIUDADANOS																				
	TOTAL																				
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES								X	07:12-07:20										1	10''
	LEGISLADORES										X	08:05-08:20				X	09:59-10:04			2	20''
	CONGRESO																				
	TOTAL								1	10''	1	15''				1	5''			3	30''

*JUAN GUERRA OCHOA / COORDINADOR DE PROCESOS LEGISLATIVOS PRD

*ANTONIO SOTO SÁNCHEZ / COMISIÓN DE ENERGÍA CÁMARA DE DIPUTADOS PRD

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “EN CONTEXTO”, EMISIÓN 11/09/2008, DURACIÓN TOTAL 38 minutos 34 segundos

HOJA 2/4

VARIABLE		EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
																				SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO	X	12:00-12:33	X	13:43-14:00			X	23:52-24:09					X	28:42-29:15	X	30:05-30:30	X	31:46-32:06	6	2'25"
	REFUTACIÓN								X	24:48-25:14	X	27:00-27:10								3	36"
	TOTAL	1	33"	1	17"			1	17"	1	26"	1	10"	1	33"	1	25"	1	20"	8	3'01"
PROTAGONISTA				X			X				X		X		X		X			5	
(*) INVITADO		X			X				X											3	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO																				
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS																				
	ALUDE A LOS CIUDADANOS																				
	TOTAL																				
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES								X	24:48-25:14										1	26"
	LEGISLADORES				X	22:40-23:09														1	29"
	CONGRESO																				
	TOTAL				1	29"			1	26"										2	55"

*JUAN GUERRA OCHOA / COORDINADOR DE PROCESOS LEGISLATIVOS PRD

*ANTONIO SOTO SÁNCHEZ / COMISIÓN DE ENERGÍA CÁMARA DE DIPUTADOS PRD

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “EN CONTEXTO”, EMISIÓN 11/09/2008, DURACIÓN TOTAL 38 minutos 34 segundos

HOJA 3/4

VARIABLE	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
													SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO		X	35:00-35:20	X	35:55-36:05			X	37:20-37:30	X	37:50-38:10	5	1'
	REFUTACIÓN						X	36:46-37:05					1	19"
	TOTAL		1	20"	1	10"	1	19"	1	10"	1	20"	6	1'19"
	PROTAGONISTA		X				X		X		X		4	
	(*) INVITADO	X			X								2	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO													
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS	X		32:35-32:42									1	7"
	ALUDE A LOS CIUDADANOS													
	TOTAL	1		7"									1	7"
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES													
	LEGISLADORES													
	CONGRESO													
	TOTAL													

*JUAN GUERRA OCHOA / COORDINADOR DE PROCESOS LEGISLATIVOS PRD

*ANTONIO SOTO SÁNCHEZ / COMISIÓN DE ENERGÍA CÁMARA DE DIPUTADOS PRD

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “EN CONTEXTO”, EMISIÓN 11/09/2008, DURACIÓN TOTAL 38 minutos 34 segundos

HOJA 4/4

TOTAL DE EVENTOS Y DURACIÓN EN LA EMISIÓN

VARIABLE		SUBTOTAL HOJA 1/4		SUBTOTAL HOJA 2/4		SUBTOTAL HOJA 3/4		TOTAL	
		SUBTOTAL EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL EVENTO	DURACIÓN	TOTAL	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO	1	10''	6	2'25''	5	60''	12	3'35''
	REFUTACIÓN	5	2'39''	3	36''	1	19''	9	3'34''
	TOTAL	6	2'49''	8	3'01''	6	1'19''	21	6'09''
	PROTAGONISTA	7		5		4		16	
	(*) INVITADO	2		3		2		7	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO								
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS					1	7''	1	7''
	ALUDE A LOS CIUDADANOS								
	TOTAL					1	7''	1	7''
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES	1	10''	1	26''			2	36''
	LEGISLADORES	2	20''	1	29''			3	49''
	CONGRESO								
	TOTAL	3	30''	2	55''			5	1'25''

*JUAN GUERRA OCHOA / COORDINADOR DE PROCESOS LEGISLATIVOS PRD

*ANTONIO SOTO SÁNCHEZ / COMISIÓN DE ENERGÍA CÁMARA DE DIPUTADOS PRD

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “EN CONTEXTO”, EMISIÓN 09/10/2008, DURACIÓN TOTAL 36 minutos 17 segundos

HOJA 1/1

VARIABLE	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	TOTAL	
																			TOTAL EVENTO	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO																			
	REFUTACIÓN												X	23:49- 24:15			X	27:10- 28:11	2	47"
	TOTAL												1	26"			1	21"	2	47"
	PROTAGONISTA	X		X			X		X				X		X				6	
	(*)INVITADO					X					X						X		3	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO			X	09:45- 09:51				X	15:28- 15:38									2	16"
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS	X	08:55- 09:16				X	15:22- 15:27			X	17:45- 17:58							3	39"
	ALUDE A LOS CIUDADANOS																			
	TOTAL	1	21"	1	06"		1	05"	1	10"	1	13"							5	55"
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES														X	24:49- 25:15			1	26"
	LEGISLADORES																			
	CONGRESO					X	12:52- 13:03												1	11"
	TOTAL					1	11"								1	26"			2	37"

*Luis Pazos / Presidente CONDUSEF

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “EN CONTEXTO”, EMISIÓN 13/11/2008, DURACIÓN TOTAL 34 minutos 54 segundos

HOJA 1/3

VARIABLE		EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
																SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO																
	REFUTACIÓN							x	09:28-09:36							1	8''
	TOTAL							1	8''							1	8''
	PROTAGONISTA							x		x			x			3	
	(*) INVITADO	x		x		x		x								4	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO																
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS																
	ALUDE A LOS CIUDADANOS																
	TOTAL																
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES	x	01:48-03:00	x	03:33-04:13	x	05:24-06:24	x	07:15-07:32			x	13:02-13:22			5	3'29''
	LEGISLADORES													x	23:12-23:24	1	12''
	CONGRESO																
	TOTAL	1	1'12''	1	40''	1	1'	1	17''			1	20''	1	12''	6	3'41''

* CESAR CAMACHO QUIROZ / DIP. COM. JUSTICIA

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “EN CONTEXTO”, EMISIÓN 13/11/2008, DURACIÓN TOTAL 34 minutos 54 segundos

HOJA 2/3

VARIABLE	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
															SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO															
	REFUTACIÓN				X	27:43- 28:06	X	28:46- 28:51							2	28''
	TOTAL				1	23''	1	5''							2	28''
	PROTAGONISTA	X	X		X		X		X		X				6	
	(*) INVITADO												X		1	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO										X	31:35- 32:05			1	30''
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS		X	27:11- 27:36									X	32:06- 32:15	2	31''
	ALUDE A LOS CIUDADANOS															
	TOTAL		1	25''							1	30''	1	9''	3	1' 01''
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES	X	27:03- 27:10						X	30:30- 30:51					2	28''
	LEGISLADORES															
	CONGRESO															
	TOTAL	1	7''						1	21''					2	28''

* CESAR CAMACHO QUIROZ / DIP. COM. JUSTICIA

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “EN CONTEXTO”, EMISIÓN 13/11/2008, DURACIÓN TOTAL 34 minutos 54 segundos

HOJA 3/3

TOTAL DE EVENTOS Y DURACIÓN EN LA EMISIÓN.

VARIABLE		SUBTOTAL HOJA 1/3		SUBTOTAL HOJA 2/3		TOTAL	
		SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN	SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN	TOTAL	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO						
	REFUTACIÓN	1	8''	2	28''	3	36''
	TOTAL	1	8''	2	28''	3	36''
	PROTAGONISTA	3		6		9	
	(*) INVITADO	4		1		5	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO			1	30''	1	30''
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS			2	31''	2	31''
	ALUDE A LOS CIUDADANOS						
	TOTAL			3	1' 01''	3	1'01''
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES	5	3'29''	2	28''	7	3'57''
	LEGISLADORES	1	12''			1	12''
	CONGRESO						
	TOTAL	6	3'41''	2	28''	8	4'08''

* CESAR CAMACHO QUIROZ / DIP. COM. JUSTICIA

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO
VERIFICACION DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPOTESIS
PROGRAMA DESDE LAS CAMARAS, BAJO LA LUPA
EMISION 21/09/2008. DURACION TOTAL 30 MINUTOS 03 SEGUNDOS

HOJA 1/1

FRECUENCIA / DURACIÓN DE EPISODIO POR SECUENCIA	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	TOTAL	
																			TOTAL EPISODIOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO								x	9:35- 9:55									1	20"
	REFUTACIÓN			X	07:35 - 07:50														1	30'
	TOTAL			1	30"														1	30'
	PROTAGONISTA ¹	X		X		X		X		X		X		X		X			6	-
	INVITADO ²											-								
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO																			
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS									X	9:03- 09:13								1	10"
	ALUDE A LOS CIUDADANOS											X	9:14- 9:21						1	7"
	TOTAL									1	10"	1	7"						2	17"
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES POLITICOS EN GENERAL					X	7:51- 8:06	X	8:06- 8:25	X	9:03- 9:46	-	-			X	29:03 - 29:20		4	1' 34"
	LEGISLADORES	X	06:38 - 07:02									X	9:14- 9:21						2	31"
	CONGRESO													X	13:42 - 14:22				1	40"
	TOTAL	1	24"			1	15"	1	19"	1	43"	1	7"	1	40"	1	17"		7	3' 05"

1 PROTAGONISTA: ANALISTA, PERIODISTA

2 INVITADO: ANALISTA, PERIODISTA, POLÍTICO, U OTRO

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “DESDE LAS CÁMARAS, BAJO LA LUPA”, EMISIÓN 23/11/2008, DURACIÓN TOTAL 30 minutos 49 segundos

HOJA 1/3

VARIABLE	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
																	SUB TOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO		X	6:27-6:39													1	12''
	REFUTACIÓN										X	8:32-8:41			X	9:35-9:59	2	33''
	TOTAL		1	12''							1	09''			1	24''	3	45''
	PROTAGONISTA	X	X		X		X		X		X		X		X		8	
	(*)INVITADO																	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO						X	7:13-7:20									1	8''
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS																	
	ALUDE A LOS CIUDADANOS																	
	TOTAL						1	8''									1	8''
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES																	
	LEGISLADORES				X	6:37-6:52			X	8:24-8:31			X	9:00-9:20			3	42''
	CONGRESO	X	1:44-2:30														1	46''
	TOTAL	1	46''		1	15''			1	7''			1	20''			4	1'28''

* JESÚS MURILLO KARAM / SENADOR PRI

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “DESDE LAS CÁMARAS, BAJO LA LUPA”, EMISIÓN 23/11/2008, DURACIÓN TOTAL 30 minutos 49 segundos

HOJA 2/3

VARIABLE	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
																	SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO																	
	REFUTACIÓN	X	9:35-9:59														1	24''
	TOTAL	1	24''														1	24''
	PROTAGONISTA	X		X		X		X					X		X		6	
	(*)INVITADO								X		X						2	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO										X	23:54-24:06			X	24:21-24:28	2	19''
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS												X	24:09-24:20			1	11''
	ALUDE A LOS CIUDADANOS																	
	TOTAL										1	12''	1	11''	1	7''	3	30''
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES								X	23:34-23:54			X	24:09-24:20			2	31''
	LEGISLADORES			X	11:03-13:30	X	15:50-16:15	X	22:37-22:50								3	3'05''
	CONGRESO																	
	TOTAL			1	2'27''	1	25''	1	13''	1	20''		1	11''			5	3'36''

* JESÚS MURILLO KARAM / SENADOR PRI

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “DESDE LAS CÁMARAS, BAJO LA LUPA”, EMISIÓN 23/11/2008, DURACIÓN TOTAL 30 minutos 49 segundos

HOJA 3/3

TOTAL DE EVENTOS Y DURACIÓN EN LA EMISIÓN

VARIABLE		SUBTOTAL HOJA 1/3		SUBTOTAL HOJA 2/3		TOTAL	
		SUBTOTAL EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO	1	12''			1	12''
	REFUTACIÓN	2	33''	1	24''	3	57''
	TOTAL	3	45''	1	24''	4	1'06''
PROTAGONISTA		8		6		14	
(*)INVITADO				2		2	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO	1	8''	2	19''	3	27''
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS			1	11''	1	11''
	ALUDE A LOS CIUDADANOS						
	TOTAL	1	8''	3	30''	4	38''
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES			2	31''	2	31''
	LEGISLADORES	3	42''	3	3'05''	6	3'47''
	CONGRESO	1	46''			1	46''
	TOTAL	4	1'28''	5	3'36''	9	5'04''

* JESÚS MURILLO KARAM / SENADOR PRI

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “LA ENTREVISTA”, EMISIÓN 14/11/2008, DURACIÓN TOTAL 29 minutos 14 segundos

HOJA 1/1

VARIABLE	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	TOTAL	
													TOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO													
	REFUTACIÓN													
	TOTAL													
	PROTAGONISTA		X										1	
	(*) INVITADO	X			X		X		X		X		5	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO													
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS		X	11:14- 11:20									1	06''
	ALUDE A LOS CIUDADANOS													
	TOTAL		1	06''									1	06''
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES				X	12:34- 12:56			X	15:06- 15:43	X	16:43- 17:43	3	1'59''
	LEGISLADORES	X	02:27- 02:39										1	12''
	CONGRESO						X	13:47- 14:00					1	13''
	TOTAL	1	12''		1	22''	1	13''	1	37''	1	1'	5	2'24''

* ARTURO ESCOBAR / SENADOR PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO
VERIFICACION DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPOTESIS
PROGRAMA DIALOGOS POLITICOS
EMISION 01/08/2008 DURACION TOTAL DEL PROGRAMA 60 min 28 segundos

HOJA 1/1

FRECUECIA / DURACIÓN DE EPISODIO POR SECUENCIA	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	TOTAL	
																	EPISODIOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO																	
	REFUTACIÓN																	
	TOTAL																	
	PROTAGONISTA ¹	X															1	
	(*)INVITADO ²			X		X		X		X		X		X		X	7	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO										X	37:18 - 37:31					1	13"
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS												X	49:00 - 49:30	X	51:12 - 51:28	2	46"
	ALUDE A LOS CIUDADANOS																	
	TOTAL										1	13"	1	30"	1	16"	3	59"
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES POLITICOS EN GENERAL	X	12:54 - 13:25	X	13:26 - 13:54												2	59"
	LEGISLADORES					X	16:34 - 17:06										1	32"
	CONGRESO							X	26:00 - 27:18	X	34:10 - 35:08						2	2' 16"
	TOTAL	1	31"	1	28"	1	32"	1	1' 18"	1	58"						5	3' 47"

*LIC. SERGIO HIDALGO MONROY PORTILLO / OFICIAL MAYOR DE LA SHCP

¹ PROTAGONISTA : ANALISTA, PERIODISTA

² INVITADO: ANALISTA, PERIODISTA, POLÍTICO, U OTRO

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO
VERIFICACION DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPOTESIS
PROGRAMA DIALOGOS POLITICOS
EMISIÓN DEL 26/09/2008. DURACION TOTAL DEL PROGRAMA: 56 minutos 24 segundos

HOJA 1/1

FRECUENCIA / DURACIÓN DE EPISODIO POR SECUENCIA		EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	EPISODIO	DURACIÓN	TOTAL	
																				EPISODIOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REFUTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROTAGONISTA ¹	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	(*)INVITADO ²	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	8	-
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO	X	00:30 - 00:54	X	02:50 - 03:10	X	10:10 - 10:35	X	24:40 - 24:55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1' 24"
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	X	28:30-29:03	-	-	X	31:37-31:48	-	-	-	-	2	44"
	ALUDE A LOS CIUDADANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1	24"	1	20"	1	25"	1	15"	1	33"	-	-	1	11"	-	-	-	-	6	2' 08"
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES POLITICOS EN GENERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	30:30-30:58	-	-	-	-	-	-	1	28"
	LEGISLADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	32:42-33:10	X	33:17-34:10	2	1' 21"
	CONGRESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28"	-	-	1	28"	1	53"	3	1' 49"

*ADRIANA LABARDINI / CO-FUNDADORA DE ALCONSUMIDOR A.C.

*ANTONI GIDI / PROF. UNIVERSIDAD DE HOUSTON

*ALBERTO BENÍTEZ / PROF. ITESM CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO

¹ PROTAGONISTA: ANALISTA, PERIODISTA

² INVITADO: ANALISTA, PERIODISTA, POLÍTICO, U OTRO

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “EL NOTIFIERO CON BROZO”, EMISIÓN 26/09/2008, DURACIÓN TOTAL 70 minutos 01 segundos.

HOJA 1/1

VARIABLE	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	TOTAL	
																			TOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO																			
	REFUTACIÓN																			
	TOTAL																			
	PROTAGONISTA	X		X		X		X		X		X		X		X			9	
	(*) INVITADO																			
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO						X	18:20- 18:30	X	39:19- 39:24									2	15''
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS										X	46:29- 46:38	X	46:43- 46:55					2	21''
	ALUDE A LOS CIUDADANOS																			
	TOTAL						1	10''	1	05''	1	09''	1	12''					4	36''
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES	X	01:32- 01:55	X	02:32- 02:48	X	05:15- 05:47								X	62:45- 63:00	X	64:33- 64:57	5	1'50''
	LEGISLADORES																			
	CONGRESO																			
	TOTAL	1	23''	1	16''	1	32''								1	15''	1	24''	5	1'50''

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “DE CIFRAS”, EMISIÓN 17/09/2008, DURACIÓN TOTAL 63 minutos 35 segundos

HOJA 1/4

VARIABLE	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
															SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO												x	12:31-12:38	1	07'
	REFUTACIÓN										x	11:14-11:42			1	28''
	TOTAL										1	28''	1	07''	1	35''
	PROTAGONISTA	x		x					x						3	
	(*) INVITADO					x		x			x		x		4	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO															
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS	x	02:03-02:19	x	05:02-05:16	x	05:37-05:54		x	09:22-09:41					4	1'06''
	ALUDE A LOS CIUDADANOS															
	TOTAL	1	16''	1	14''	1	17''		1	19''					4	1'06''
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES															
	LEGISLADORES							x	08:37-08:59						1	22''
	CONGRESO															
	TOTAL							1	22''						1	22''

* JORGE ESTEFAN CHIDIAC / PDTE. COM. HACIENDA

*LUIS NIÑO D`RIVERA / VICEPRESIDENTE BANCO AZTECA

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “DE CIFRAS”, EMISIÓN 06/08/2008, DURACIÓN TOTAL 67 minutos 06 segundos

HOJA 2/4

VARIABLE	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
																			SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO	x	12:48-13:06	x	13:08-13:32			x	15:22-15:44										3	44''
	REFUTACIÓN					x	14:04-14:20												1	16''
	TOTAL	1	18''	1	14''	1	16''	1	12''										4	1'00''
	PROTAGONISTA																			
	(*) INVITADO	x		x		x		x		x		x		x		x			8	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO																			
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS									x	15:52-16:02								1	10''
	ALUDE A LOS CIUDADANOS																			
	TOTAL									1	''10								1	10''
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES																			
	LEGISLADORES					x	14:04-14:20					x	17:04-17:50	x	18:31-18:48				3	1'17''
	CONGRESO															x	19:02-19:38		1	36''
	TOTAL					1	16''					1	44''	1	17''	1	36''		4	1'53''

* JORGE ESTEFAN CHIDIAC / PDTE. COM. HACIENDA

*LUIS NIÑO D`RIVERA / VICEPRESIDENTE BANCO AZTECA

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “DE CIFRAS”, EMISIÓN 06/08/2008, DURACIÓN TOTAL 67 minutos 06 segundos

HOJA 3/4

VARIABLE		EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	EVENTO	DURACIÓN	SUBTOTAL	
												SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO	x	19:39- 19:56									1	15''
	REFUTACIÓN												
	TOTAL	1	15''									1	15''
	PROTAGONISTA												
	(*) INVITADO	x		x		x		x		x		5	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO												
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS			x	20:34- 20:47					x	28:40- 28:54	2	27''
	ALUDE A LOS CIUDADANOS												
	TOTAL			1	13''					1	14''	2	27''
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES												
	LEGISLADORES					x	26:51- 27:22	x	28:24- 28:48			2	55''
	CONGRESO												
	TOTAL					1	31''	1	24''			2	55''

* JORGE ESTEFAN CHIDIAC / PDTE. COM. HACIENDA

* LUIS NIÑO D`RIVERA / VICEPRESIDENTE BANCO AZTECA

LEGISLADORES FEDERALES ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO MEDIÁTICO EN MÉXICO
VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS
PROGRAMA “DE CIFRAS”, EMISIÓN 06/08/2008, DURACIÓN TOTAL 67 minutos 06 segundos

HOJA 4/4

TOTAL DE EVENTOS Y DURACIÓN EN LA EMISIÓN

VARIABLE		SUBTOTAL HOJA ¼		SUBTOTAL HOJA 2/4		SUBTOTAL HOJA 3/4		TOTAL	
		SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN	SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN	SUBTOTAL EVENTOS	DURACIÓN	TOTAL EVENTOS	DURACIÓN
DEBATE	SOLAPAMIENTO	1	07'	3	44''	1	15''	4	1'06''
	REFUTACIÓN	1	28''	1	16''			2	44''
	TOTAL	1	35''	4	1'00''	1	15''	6	1'50''
	PROTAGONISTA	3						3	
	(*) INVITADO	4		8		5		17	
IDENTIDAD DISCURSIVA	HABLA EN CALIDAD CIUDADANO								
	HABLA EN NOMBRE DE CIUDADANOS	4	1'06''	1	10''	2	27''	7	1'43''
	ALUDE A LOS CIUDADANOS								
	TOTAL	4	1'06''	1	10''	2	27''	7	1'43''
EVALUACIÓN DE AGENTES POLÍTICOS	FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES								
	LEGISLADORES	1	22''	3	1'17''	2	55''	6	2'34
	CONGRESO			1	36''			1	36''
	TOTAL	1	22''	4	1'53''	2	55''	7	3'10''

* JORGE ESTEFAN CHIDIAC / PDTE. COM. HACIENDA

*LUIS NIÑO D`RIVERA / VICEPRESIDENTE BANCO AZTECA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Y HEMEROGRÁFICAS

- ABRIC, Jean (2001). "Las representaciones sociales: aspectos teóricos", J. C. Abric (coord.), *Prácticas sociales y representaciones*, México: Coyoacán, pp. 11-32.
- ACEVES, F. (2004). "Monitoreo de medios y democratización en América Latina. La participación ciudadana en la vigilancia de la función informativa de los medios de comunicación de masas", en *Comunicación y Sociedad*, (1), pp. 91-108.
- ACHACHE, Gilles. (1998, 2ª reimp.). "El marketing político", en J. M. Perry, D. Wolton, et., al., *El nuevo espacio público*, Barcelona: Gedisa, pp. 112-123.
- ACKERMAN, John (2008). "Introducción: más allá del acceso a la información", en J. Ackerman (coord.), *Más allá del acceso a la información. Transparencia, rendición de cuentas, estado de derecho*, México: Siglo XXI, pp. 11-30.
- ADLER, Ilya (2004). "Prensa y elecciones 2003", en *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, (XLVI), (190), pp. 129-139.
- , (1991). "The Role of the Media in the 1988 Mexican Presidential Election", in *Brazil and Mexico: Contrasting Models of Media and democratization*, Rhode Island: Thomas J. Watson Institute.
- ADÚRIZ, I. y P. AVA (2006). "Construcción de ciudadanía: experiencia de implementación del índice de participación ciudadana en América Latina", *América Latina, Hoy*, (42), pp. 15-35.
- AGUAYO, Sergio (2010). *La transición en México. Una historia documental 1910-2010*, México: FCE-Colegio de México.
- AGUILAR, L. (1989). "Rasgos de la vida pública mexicana", *Sociológica* (4), (11), México: Colegio de México, pág. 134-136.
- ALARCÓN, Víctor (1999). *Libertad y democracia*, México: IFE.
- ALEXANDER, J. y R. JACOBS (1998), "Communication, Ritual and Society", en J. Curran and T. Liebes (eds.), *Media, Ritual and Identity*, London: Routledge.
- ALONSO, J. (2006). "La reforma democrática del Estado", en E. Isunza y A. Olvera (coord.) *Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil: participación ciudadana y control social*, México: CIESAS-Universidad Veracruzana-Porrúa, pp. 491-518.
- ALTHEIDE, David (1987). "Format and symbols in TV Coverage of Terrorism in the United States and Great Britain", *International Studies Quarterly*, (31), pp. 161-176.
- , y Robert SNOW (1979), *Media Logic*, Beverly Hills: Sage.
- ALVA, Alma (2009). "La Sociedad de la Información en México. Del <salto cuántico> a las trampas de la Ley Televisa", en J. Esteinou y A. R. Alva (coord.), *La <Ley Televisa> y la lucha por el poder en México*, México: UAM, pp. 431-448.
- , (2008). "Del recorrido hacia una reforma democrática de los medios: aportaciones de la 'iniciativa ciudadana'", en A. Vega, et., al., (coord.), *Las claves necesarias de investigación para la democracia*, México: UJAT, AMIC, pp. 15-34.
- , (2007). "Guerra de poderes", *Revista Mexicana de Comunicación*, (20), (107), México: Fundación Manuel Buendía, pp. 28-30.
- , (2006). *Políticas de telecomunicaciones y Sociedad de la Información en México*, (tesis doctoral), México: FCPS, UNAM.

- , (2000), "Medios de comunicación, transición política y democracia", *Razón y Palabra*, (17), México: ITESM.
- , (1999). "Quince años de televisión en México. De la expansión a la cúpula del poder", *Revista Mexicana de Comunicación*, México: Fundación M. Buendía.
- AMADOR, J. (2004). *Las raíces mitológicas del imaginario político*, México: UNAM, Porrúa.
- AMEDI (2011). "El gobierno, en vez de regular, regala decisiones en beneficio de las televisoras. Por una política nacional de telecomunicaciones", México: Asociación Mexicana del Derecho a la Información (comunicado del Dr. Raúl Trejo Delarbre, Presidente, del 13 de mayo de 2011, consultado en la fecha en: <http://www.amedi.org.mx>).
- ANDUIZA, E. y A. BOSCH (2004). *Comportamiento político y electoral*, Barcelona: Ariel.
- ARANCIBIA, J. (2000). "La mediatización de la Política", en *Revista de Estudios sobre las Culturas Contemporáneas*, México: ITESO, pp. 185-202.
- ARATO, A. y J. COHEN (1999). "Esfera pública y sociedad civil", en *Metapolítica*, (3), (9), México: CEPCAC., pp. 37-55.
- ARELLANO, David (2008). "Transparencia y organizaciones gubernamentales", en J. Ackerman (coord.), *Más allá del acceso a la información. Transparencia, rendición de cuentas, estado de derecho*, México: Siglo XXI, pp. 263-281.
- ARENDT, Hannah (1969), "Truth and Politics", P. Laslett y W. Runciman (eds.), *Philosophy, Politics and Society*, (3), Oxford: Oxford University Press.
- , (1959). *The Human Condition*, New York: Doubleday.
- ARFUCH, L. (2002). *El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea*, Buenos Aires: FCE.
- ATTILI, A. (2006). "Qué ha cambiado y cómo", en A. Attili, (coord.) *Treinta años de cambios políticos en México*, México: Cámara de Diputados, UAM, Porrúa, pp. 7-18.
- AVRITZER, L. (2000). "Teoría democrática, esfera pública y deliberación", *Metapolítica*, (IV), (14), México: CEPCAC, pp. 76-87.
- , (1999). "Dialogo y reflexividad: acerca de la relación entre esfera pública y medios de comunicación", en *Metapolítica*, (3), (9), México: CEPCAC, pp. 79-94.
- BACHRACH, P. y M. BARATZ (1970). *Power and Poverty*, N.Y.: Oxford University Press.
- BAKER, R. (1990). *Political Legitimacy and the State*, Oxford, UK: Clarendon Press.
- BANDURA, A. (1996). "Teoría social cognitiva de la comunicación de masas", en Jennings, Bryant, Dolf, Zyllam (comps.) *Los efectos de la comunicación. Los medios de comunicación, investigación y teorías*, Barcelona: Paidós, pp. 89-125.
- BAÑOS, Jessica (2006). "Teorías de la democracia: debates actuales", *Andamios* (2), (4), pp. 35-58.
- BARBER, Benjamin (1984). *Strong Democracy, Participatory Politics for a New Age*, Berkeley: University of California Press
- BAUDRILLARD, Jean (1978). *Cultura y simulacro*, Barcelona: Kairós.
- BAUMAN, Zygmunt (2004). *Identity*, London: Blackwell Publishing.
- , (2004). *La sociedad sitiada*, Buenos Aires: FCE.
- , (2002). *Modernidad líquida*, Buenos Aires: FCE.

- BAYMA, Geoffrey (2007). "Representation and the Politics of Play: Stephen Colbert's Better Kown a District", en: *Political Communication*, (24), (4), pp. 359-376.
- BECK, U. (1998). *¿Qué es la Globalización? Falacias del globalismo*, Barcelona: Paidós.
- BEETHAM, D. (1991). *The Legitimation of Power*, Hong Kong: Macmillan.
- BÉJAR, Luisa (2006). *Los partidos en el Congreso de la Unión. La representación parlamentaria después de la alternancia*, México: Gernika-UNAM, 287 p.
- , (2006). "La representación parlamentaria en las nuevas democracias. Deliberación y disciplina: dos claves para abordar su estudio", en R. Espinoza y R. Jiménez (coord.). *La representación política y el Congreso mexicano*, México: UNAM, pp. 41-59.
- , (2006). "El desempeño de los legisladores en su tarea", en: *El Legislador a examen. El debate sobre la reelección legislativa en México*, México: Cámara de Diputados, FCE, pp. 44-52.
- , (2003). "Representación parlamentaria y disciplina partidista: el caso de México", R. Mirón y L. Béjar (coord.), *El Congreso después de la alternancia*, México: Senado de la República-AMEP, pp. 197-227
- BEREITER, C. y M. SCARDAMALIA (1993), *Surpassing Ourselves: An inquiry into the Nature and Implications of Expertise*, Chicago, IL: Open Court.
- BERKOWITZ, L. y K. ROGERS (1986). "A Priming Effect Analysis of Media Influence", en J. Bryant y D. Zillmann (eds.), *Perspectives on Media Effects*, Hillsdale: L. Erlbaum.
- BERLANT, Lauren (2009). *Affect, Noise, Silence, Protest: Ambient Citizenship*, posted on: Chicago: 59th Annual Conference of the International Communication Association.
- BERLÍN, I. (2000). *El sentido de la realidad. Sobre las ideas y su historia*, Madrid: Santillana.
- BERRIO, J. (2000). *La comunicación en democracia. Un estudio sobre la opinión pública*. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Valencia.
- BERROCAL, Salomé (2003). "La personalización en la política", en S. Berrocal (coord.) *Comunicación política en televisión y nuevos medios*, Barcelona: Ariel, pp. 55-79.
- BICKFORD, Susan (1996). *Dissonance Democracy: Listening, conflict and citizenship*, New York: Cornell University Press.
- BIRCH, A. (1993). *The Concepts and Theories of Modern Democracy*, London: Routledge.
- BLAIS, André (2000). *To Vote or Not to Vote: The Merits and Limits of Rational Choice Theory*, Pennsylvania: University of Pittsburgh Press.
- BLANCO, R. (2001). *Las conexiones políticas. Partidos, Estado, Sociedad*, Madrid: Alianza.
- BOBBIO, N. (2006, 11ª reimp.) *Liberalismo y Democracia*, México: FCE, (1989 1ª. ed.)
- , (2003). *El futuro de la democracia*, México: FCE (1ª. ed. 1997, FCE).
- , (1992, 2ª. reimp. 1989 1ª. en español). *Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política*, México: FCE.
- BOHMAN, J. (2000). "La democracia deliberativa y sus críticos", *Metapolítica*, (IV), (14), México: CEPCAC, pp. 48-57.
- BOK, Sissela (1984). *Secrets: On the Ethics of Concealment and Revelation*, Oxford: Oxford University Press.
- BOKSER, Judit (2002). "Ciudadanía, procesos de globalización y democracia", et., al. *Democracia y formación ciudadana*, México: IEDF, pp. 13-52.

- BOURDIEU, Pierre (2000). *Cuestiones de Sociología*, Madrid: Ediciones Istmo.
- , (1997). *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*, Barcelona: Anagrama.
- , (1997). *Sobre la televisión*, Madrid: Anagrama.
- , (1988). *La distinción: Criterios y bases sociales del gusto*, Madrid: Taurus.
- BOURRICAUD, F. (2001). "Sobre la noción de comunicación socio-política", en J. Labarririe, et., al., (2001). *Teoría política y comunicación*, Barcelona: Gedisa, pp. 265-274.
- BRETON, P. (1998). "Medios, mediación, democracia", en G. Gauthier, et., al., (comps.). *Comunicación y Política*, Barcelona: Gedisa, pp. 356-371.
- BRUGUÉ, J. y R. GALLEGU (2001) "¿Una administración pública democrática?, en J. Font (coord). *Ciudadanos y decisiones públicas*, Barcelona: Ariel, pp. 43-58.
- BROWN, M. (1994). *Soap opera and women's talk: the pleasure of resistance*, Londres: Sage.
- BUCHANAN, J. y G. TULLOCK (1980). *El cálculo del consenso. Fundamentos lógicos de una democracia constitucional*, Madrid: Espasa-Calpe, (trad. Javier Salinas Sánchez).
- BUMLER, James y M. GUREVITCH (2000). "Rethinking the Study of Political Communication", en J. Curran y M. Gurevitch (eds.), *Mass Media and Society*, London: Arnold, pp. 155-172.
- CABRERA, C. (2009). "La democracia representativa en la era de la globalización: ¿nueva crisis de la representación política?, P. González (coord.) *Declive y reconfiguración de la democracia representativa*, México: UNAM, Porrúa, pp. 55-73.
- CAMACHO, J. L. (2006). *El Congreso mexicano. Historia, organización, funcionamiento y propuestas de reformas*, México: Cámara de Diputados- Porrúa.
- CAMACHO, M. y D. VALADÉS, coord., (2004). *Gobernabilidad democrática: ¿qué reforma?*, México: UNAM-Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
- CAMOU, A. (2001). "Estudio Preliminar", en A. Camou (comp.), *Los desafíos de la gobernabilidad*, México: FLACSO-UNAM, Plaza y Valdés, pp. 15-58.
- CANEL, M. J. (2008). "El reto de la investigación; plantear la pregunta ¿Hay comunicación en la comunicación política?", *Telos*, (14), (consulta: 26/03/2008 en: <http://www.campusred.net/telos/cuadernoImprimible.asp?idarticulo=2&rev=74>).
- , (2007). *La comunicación de las instituciones públicas*, Madrid: Tecnos.
- , (1999). *Comunicación política. Teoría, estrategias y práctica*, Madrid: Tecnos.
- CANSINO, C. (1997). "Crisis y transformación de la política. Reflexión sobre el Estado finisecular", *Metapolítica*, (5), (17), México: CEPC, pp. 90-97.
- CANTO, M. (2007). "Participación ciudadana: la gobernanza de las sociedades complejas", en J. L. Calva (coord.) *Democracia y gobernabilidad*, México; UNAM, Cámara de Diputados, Porrúa, pp. 140-159.
- CAREY, J. (1997). "The Press, Public Opinion and Public Discourse", in E. Munson y C Warren (eds.) *James Carey: A critical reader*, ML: Minneapolis University Press.
- CARLÓN, M. (2004). *Sobre lo televisivo. Dispositivos, discursos y sujetos*, BA: La Crujía.
- CARREÑO, J. (2007). *Los medios de comunicación*, México: Nostra Ediciones.
- CASALMIGLIA, E. y A. TUSÓN (2004). *Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso*, Barcelona: Ariel.

- CASAS, A., I. MARVÁN y K. PUENTE (2009). ¿A quién rinde cuentas el Poder Legislativo?, México: CIDE-The William and Flora Hewlett Foundation.
- , I. MARVÁN y K. PUENTE (s.a.). *La rendición de Cuentas y el Poder Legislativo*, [en línea: Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas], México: pp. 331-405; consulta: 22/07/2010: <http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2800/11.pdf>.
- , (1997). "Las relaciones gobierno-partido en México", en C. Cansino (coord.) *Gobiernos y partidos en América Latina. Un estudio comparado*, México: CEPAC.
- CASTELLS, M. (2006). "Comunicación, poder y contrapoder en la sociedad red (I). Los medios y la política", *Telos. Cuadernos de Comunicación e Innovación*, marzo de 2008 (International Communication Association, Alemania; consulta: 26/03/2008, <http://www.campusred.net/telos/articuloAutorInvitado.asp?idarticulo=1&rev=74>.
- , (1999). *La era de la información. La sociedad red. Vol. I*, Madrid: Siglo XXI.
- , (1996). "La democracia electrónica", en J. Tezanos (ed.), *La democracia post-liberal*, Madrid: Sistema.
- CASTAÑEDA, F. (2002). "Acción social y racionalidad", en F. Castañeda y M. Guitián (coord.), *Instantáneas de la acción*, México: Juan Pablos, UNAM, pp. 23-46.
- CASTILLA, C. (1989). "Público, privado, íntimo", C. Castilla (ed.). *De la intimidad*, Barcelona: Crítica, pp. 25-31.
- CASTORIADIS, C. (2005, 5ª reimp.). "La cultura en una sociedad democrática", en *Ciudadanos sin brújula*, México: Coyoacán.
- CEBRIÁN, Mariano (2004). *La información en televisión. Obsesión mercantil y política*, Barcelona: Gedisa.
- , (1996). *Géneros informativos audiovisuales*, México: Grupo Editorial Interlínea.
- , (1978). *Introducción al lenguaje de la televisión. Una perspectiva semiótica*, Madrid: Ediciones Pirámide.
- CESOP (2008). *La opinión ciudadana en temas nacionales. Encuestas CESOP 2007*, México: Cámara de Diputados LXI Legislatura.
- CIDE (s/f). *Transparencia y Acceso a la Información en los Otros Sujetos Obligados*, IFAI, [http://www.ifai.gob.mx/SitiosInteres/estudios#estudio_insti, 24/01/ 2011].
- CHADNHA, K. y A. KAVOORI (2005). "Globalization and National Media Systems: Mapping Interactions in Policies, Markets and Formats", en: J. Curran and M. Guveritch (eds.), *Mass Media and Society*, London: Hadder.
- CHAMPAGNE, P. (1998, 2ª reimp). "La doble dependencia. Algunas observaciones sobre las relaciones entre los campos políticos, económicos y periodístico", en G. Gauthier, et., al., *Comunicación y política*, Barcelona: Gedisa, pp. 237-254.
- CHARAUDEAU, P. (2003). *El discurso de la información. La construcción del espejo social*, España: Gedisa.
- CHARRÓN, J. (1998, 2ª reimp). "Los medios y las fuentes. Los límites del modelo de agenda setting", en G. Gauthier, et., al., (comp). *Comunicación y política*, Barcelona: Gedisa, pp. 72-94.
- CHIU, A. (2002). "Introducción", A. Chiu (coord.) *Sociología de la identidad*, México: UAM.
- COHEN, Jean y Andrew ARATO (2001, 1ª reimp.). *Sociedad civil y teoría política*, México: FCE, (*Civil Society and Political Theory*, Cambridge: MIT, 1995, 3ª. Ed.).

- COHEN, J. (2001). "Democracia y Libertad", en J. Elster (comp.), *La democracia deliberativa*, Barcelona: Gedisa, pp. 235-287. (*Deliberative Democracy*, UK: The Press of the University of Cambridge, 1998).
- , (2001b). "Procedimientos y sustancia en la democracia deliberativa", en *Metapolítica*, (IV), (14), México: CEPCAC, pp. 24-47.
- COLOMER, Josep (2001). *Instituciones Políticas*, Barcelona: Ariel.
- COLLINS, A., y E. LOFTUS (1975). "A Spreading-activation Theory of Semantic Memory", *Psychological Review*, (82), pp. 407-428.
- CONACULTA (2004). *Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Culturales*, México, 121 p.
- CONCHA, H., S. LÓPEZ y L. TACHER, eds., (2004). *Transparentar al Estado: la experiencia mexicana de acceso a la información*, México: IIJ-UNAM/USAID.
- CONTURSI, M. E. y F. FERRO (2000). *La narración. Usos y teorías*, Bogotá: Norma.
- COOPER, S. (2006). *Watching the Watchdogs: Bloggers as the Fifth State*, Washington: Marquette Books.
- CÓRDOVA, A. (2006). "La reforma política y la transformación del Estado", Attili, (coord.) *Treinta años de cambios políticos en México*, México: UAM, Porrúa, pp. 21-45.
- , (1976). *Sociedad y Estado en el mundo moderno*, México: Era.
- COSSÍO, J. R. (2008). "Transparencia y estado de derecho", en J. Ackerman (coord.), *Más allá del acceso a la información. Transparencia, rendición de cuentas, estado de derecho*, México: Siglo XXI, pp. 110-116.
- COSTA, S. (1999). "La esfera pública y las mediaciones entre cultura y política: el caso de Brasil", en *Metapolítica*, (3), (9), México: CEPCAC., pp. 95-107.
- CRESPI, I. (2000). *El proceso de opinión pública. Cómo habla la gente*, Barcelona: Ariel.
- CRESPO, J. A. (2005). "Del absolutismo presidencial al presidencialismo débil", en A. Aziz y J. Alonso (coord.), *Globalización, poderes y seguridad nacional*, México: Porrúa, Cámara de Diputados, CIESAS, pp. 147-176.
- CROUCH, C. (2004), *Posdemocracia*, México: Taurus-Santillana.
- CROVI, D. (1997). *Ser joven a fin de siglo. Influencias de la televisión en las opiniones políticas de los jóvenes*, México: UNAM.
- CURRAN, James (2000), "Rethinking Media and Democracy", en J. Curran y M. Gurevitch (eds.), *Mass Media and Society*, London: Arnold, pp. 120-154 (3a. ed.).
- , S. IYENGAR, A. B. LUND y I. SALOVARA-MORING (2009), "Media System, Public Knowledge and Democracy: A Comparative Study," *European Journal of Communication* (24): 5-26.
- CURZIO, L. (2007). "Los medios y la democracia", en J. L. Calva (coord.) *Democracia y gobernabilidad*, México; UNAM, Cámara de Diputados, Porrúa, pp. 175-185.
- D'ADAMO, O., V. GARCÍA y F. FREIDENBERG (2007). *Medios de comunicación y opinión pública*, Madrid: McGraw-Hill, Interamericana.
- DADER, J. L. "La comunicación Política de la hiper modernidad y su análisis académico", *Telos*, (14), México: ITESM, consulta: 26/03/2008 <http://www.campusred.net/teles/cuadernoImprimible.asp?idarticulo=8&rev=74>.
- , (1998). *Tratado de Comunicación Política*, Madrid: J. L. Dader editor.
- , (1983). *Periodismo y pseudo-comunicación política*, Pamplona: EUNSA.

- DAGNINO, E., A. OLVERA y A. PANFICHI (2006). "Introducción: para otra lectura de la disputa por la construcción democrática en América Latina", en E. Dagnino, A. Olvera y A. Panfichi (coords.), *La disputa por la construcción democrática en América Latina*, México: FCE/ CIESAS/ Universidad Veracruzana.
- DAHL, Robert (1993). *La poliarquía. Participación y oposición*, México: Red Editorial Iberoamericana, 228 p. (de la 1ª. ed., Madrid: Tecnos, 1989).
- , (1989). *La democracia y sus críticos*, Barcelona: Paidós.
- DAHLGREN, Peter (2009), *Media and Political Engagement: Citizens, Communication, and Democracy*, New York: Cambridge University Press.
- , (2000). "Media, Citizenship and Civic Culture", en J. Curran y M. Gurevitch (eds.) *Mass Media and Society*, London: Arnold, pp. 310-328.
- DAY, P. y R. KLEIN (1987). *Accountabilities: five public services*, London: Tavistock.
- DAYAN, D. (1998, 2ª reimp.). "Televisión de intervención y espectáculo político. Obrar mediante el mito", en G. Gauthier, et., al. (comp.). *Comunicación y Política*, Barcelona: Gedisa, pp. 175-202.
- , (1998,). "Televisión interruptiva: entre espectáculo y comunicación", en J. Perry, D. Wolton, et., al., *El nuevo espacio público*, Barcelona: Gedisa, pp. 158-170.
- DÉBORD, Guy (1976). *La sociedad del espectáculo*, Madrid: Castellet (1ª. ed. París, 1967).
- DEARINGS, J., y E. ROGERS (1996). *Agenda-Setting*, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- DE GABRIEL, J. A. (1997). "La formación del Estado moderno", en R. del Águila (editor), *Manual de Ciencia Política*, Madrid: Trotta, pp. 35-52.
- DE MORAES, D. (2007). "Presentación", en Denis de Moraes (coord.). *Sociedad mediatizada*, Barcelona, Gedisa, pp. 11-15.
- DEL ÁGUILA, Rafael (1997). "La política: el poder y la legitimidad", en R. del Águila (ed.), *Manual de Ciencia Política*, Madrid: Editorial Trotta, pp. 21-34.
- , (1997). "La democracia", en R. del Águila (editor), *Manual de Ciencia Política*, Madrid: Editorial Trotta, pp. 139-157.
- DEL REY, J. (1996). *Democracia y Posmodernidad. Teoría general de la información*, Madrid: Complutense.
- DELEUZE, Gilles (1986). *La imagen-tiempo*, Barcelona: Paidós.
- , (1984). *La imagen en movimiento*, Barcelona: Paidós.
- DELLI CARPINI, M. (2009). *The Inherent Arbitrariness of the 'News' versus 'Entertainment' Distinction*, essay posted on: Chicago: 59th Annual Conference of the International Communication Association, Alemania.
- DONATI, P. (1992). "Political Discourse Analysis", in M. Diani y R. Eyerman, *Studying Collective Action*, London: Sage, pp. 136-167.
- DONOHUE, G.; P. TICHENOR y C. OLIEN (1995). "A Guard Dog Perspective on the Role of Media", *Journal of Communication*, (45), (2), pp. 115-132.
- DORANTES, G. (2007). "Agendas políticas, medios y comunicación", en *Cuadernos del Seminario de Comunicación Información*, (2), México: UNAM, pp. 28-67.
- DOWNS, A. (1957). *An Economic Theory of democracy*, Nueva York: Harper.
- DUDET, C. (2006). "El canto sensible del conocimiento: una aproximación socio-psicológica", en *Acta Sociológica*, (45), pp. 33-48.

- ECO, U. (1979). *The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts*, Bloomington: Indiana University Press.
- EDELMAN, M. (1964). *The Symbolic Uses of Politics*, Urbana: University of Illinois Press.
- ELDER, C. y R. COBB (1993). "Formación de la agenda", en L. Aguilar (coord.), *Problemas públicos y agenda de gobierno*, México: Porrúa.
- ELIZONDO, C. y B. NACIF, comp., (2002). *Lecturas sobre el cambio político en México*, México: CIDE, FCE.
- ELSTER, J. (2001). "Introducción", en J. Elster (comp.), *La democracia deliberativa*, Barcelona: Gedisa, pp. 13-33 (*Deliberative Democracy*, UK: The Press Syndicate of the University of Cambridge, 1998).
- ENRÍQUEZ, L. (2010). "Confianza ciudadana en el Poder Legislativo: Congreso de la Unión mexicano", en A. Moreno (coord.), *La confianza en las instituciones. México en perspectiva comparada*, México: CESOP, Cámara de Diputados, pp. 147-193.
- ENTMAN, R. (1993). "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm", *Journal of Communication*, (43), (4), pp. 51-58.
- ENZENSBERGER, H. (1972), *Elementos para una teoría de los medios de comunicación*, Barcelona: Cuadernos Anagrama.
- ESPINOZA, R. (2006). "Introducción", en R. Espinoza y R. Jiménez (coord.). *La representación política y el Congreso mexicano*, México: IIS-UNAM, pp. 21-39.
- , (2006). "Los contenidos de la representación política", R. Espinoza y Jiménez (coord.). *La representación política y el Congreso*, México: UNAM, pp. 21-39.
- , (2004). "Representación de intereses y representación política en México", en L. Béjar y G. Waldman, coord., *La representación parlamentaria en México*, México: Gernika-UNAM, pp. 31-46.
- ESTEINOU, J. y A. R. ALVA (2011). "La reforma jurídica de la comunicación social y el Estado fallido en México", en *Derecho a Comunicar. Revista Científica de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información*, (1), pp. 106-161.
- , y A. ALVA (2009a). "El Espíritu de la <Ley Televisa> no ha muerto", en J. Esteinou y A. R. Alva (coord.), *La <Ley Televisa> y la lucha por el poder en México*, México: UAM, pp. 11-24.
- , (2009b). "La <Ley Televisa> y la transformación del Estado mexicano de la Tercera República Nacional a la Cuarta República Mediática", en J. Esteinou y A. R. Alva (coord.), *La <Ley Televisa> y la lucha por el poder en México*, México: UAM, pp. 155- 185.
- EXENI, J. L. (2005). *MediaMorfosis. Comunicación política e in/gobernabilidad en Democracia*, Bolivia: Plural-Fado.
- FAVELA, A. (2006). "Transiciones en México. La ciudadanización del sistema político", en A. Attili, (coord.) *Treinta años de cambios políticos en México*, México: Cámara de Diputados, UAM, Porrúa, pp. 141-163.
- FEARON, J. (2001). "La deliberación como discusión", en J. Elster (comp.), *La democracia deliberativa*, Barcelona: Gedisa, pp. 65-93. (*Deliberative Democracy*, UK: The Press of the University of Cambridge, 1998).

- FERNÁNDEZ, F. (2007). "¿Cómo trabajar el tema de la identidad en la LX Legislatura?", en *Acta Sociológica*, (47), México: UNAM, pp. 167-177.
- FERNÁNDEZ, M. (1999). *La lengua en la comunicación política: el discurso del poder*, Madrid: Arco.
- FERRY, J. M. (1998, 2ª reimp.). "Las transformaciones de la publicidad política", en J. M. Ferry y D. Wolton, comp. *El nuevo espacio público*, Barcelona: Gedisa, pp. 13-27.
- FISHMAN, M. (1985), *La fabricación de la noticia*, Buenos Aires: Ediciones Tres Tiempos.
- FISKE, S. y B. MORLING (1991), "Accessibility", in: A. Manstead y M. Hewstone (comps.), *The Blackwell Encyclopedia of Social Psychology*, Oxford: Blackwell.
- , y S. TAYLOR (1991). *Social Cognition*, Nueva York: McGraw-Hill.
- , y J. HARTLEY (1978). *Reading Television*, London: Methuen.
- FLORES, V. (2001). "Hacia una democracia radical", en L. Villoro (coord.), *Perspectivas de la democracia en México*, México: Colegio Nacional.
- FLORES, J. y Y. MEYENBERG (2000). *Ciudadanos y cultura de la democracia. Reglas, instituciones y valores de la democracia*, México: IFE.
- FONT, J. e I. BLANCO (2001). "Conclusiones", J. Font (coord.), *Ciudadanos y decisiones públicas*, Barcelona: Ariel, pp. 219-242.
- FOX, Jonathan. (2008). "Transparencia y rendición de cuentas", en J. Ackerman (coord.), *Más allá del acceso a la información. Transparencia, rendición de cuentas, estado de derecho*, México: Siglo XXI, pp. 174-198.
- FUENTES, R. (2008). *Medios e interés público*, México: Auditoría Superior de la Federación.
- GAMSON, W. (1992). *Talking Politics*, Cambridge: Cambridge University Press.
- , y A. MODIGLIANI (1989), "Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power: A Constructionist Approach", *American Journal of Sociology*, (95), (1), pp. 1-37.
- GARDNER, H. (1983). *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*, New York: Basic Books.
- , (1975), *The Shattered Mind*, New York: Knopf.
- GARCÍA, C. (2009). "Las redes del Mercado. La publicidad y la "Ley Televisa", en J. Esteinou y A. R. Alva (coord.), *La <Ley Televisa> y la lucha por el poder en México*, México: UAM, pp. 281-295.
- GARCÍA-CANCLINI, N. (2006). "El consumo cultural: una propuesta teórica", en G. Sunkel (coord.), *El consumo cultural en América Latina*, Bogotá: Andrés Bello, pp. 72-95.
- , (2005). *Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad*, México: Grijalbo.
- GARCÍA, J. (1996), "Desparlamentarización, judicialización criminalización", en J. Tezanos (ed.), *La democracia post-liberal*, Madrid: Sistema.
- GARRETÓN, M. (2001). "Política, partidos y sociedades en la época contemporánea", I. Cheresky y I. Pousadela (comp.), *Política e instituciones en las nuevas democracias latinoamericanas*, Buenos Aires: Paidós.
- GARZÓN, E. (2003). "Lo íntimo, lo privado y lo público", México: IFE [Madrid: *Claves de Razón Práctica*, 137].
- GAUTHIER, Gilles (1998). "El análisis de contenido de los debates televisivos", en G. Gauthier, et., al., (comp.). *Comunicación y Política*, Barcelona: Gedisa, pp. 394-411.

- , (1995). "Introducción. La comunicación política. Cartografía de un campo de investigación y de actividades", en G. Gauthier et., al., (comp.) *Comunicación y Política*, Barcelona: Gedisa, pp. 27-35.
- GERBNER, G., L. GROSS, M. MORGAN, N. SIGMORELLI (1996). "Crecer con la televisión: perspectiva de la aculturación", en J. Bryant y D. Zillmann (comps.), *Los efectos de los medios de comunicación. Investigaciones y Teorías*, Barcelona: Paidós.
- , L. GROSS, M. MORGAN, N. SIGMORELLI (1990). "Trazando la corriente dominante: contribuciones de la televisión a las orientaciones políticas", *Revista de Psicología Social*, (5), (1), pp. 71-79.
- GERSTLÉ, J. (2004). *La comunicación política*, Chile: LOM.
- GEUSS, Raymond (2001). *Public Goods, Private Goods*, N. J.: Princeton University Press.
- GHANEM, S. (1997), "Filling in the Tapestry: The Second Level of Agenda Setting", M. McCombs, D. Shaw y D. Weaver, *Communication and democracy: Exploring the intellectual frontiers in agenda-setting theory*, (pp. 3-14), New Jersey: L. Earlbaum.
- GIDDENS, A. (2001, 3ª. reimp.). "El estructuralismo, el posestructuralismo y la producción de la cultura", en A. Giddens y Jonathan Turner, et., al., *La teoría social hoy*, Madrid: Alianza (*Social Theory Today*, Polity Press, 1990).
- , (2000). *Un mundo desbocado: efectos de la globalización en nuestras vidas*, Madrid: Taurus.
- , (1995). *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración*, Buenos Aires: Amorrortu.
- , (1993). *Las nuevas reglas del método sociológico*, Buenos Aires: Amorrortu.
- , (1987). *A Contemporary Critique of Historical Materialism. Vol. II. The Nation State and Violence*, Berkeley: University of California Press.
- , (1982). *Profiles and Critiques in Social Theory*, Londres: The MacMillan Press.
- , (1979). *Central Problems in Social Theory. Action, Structure and Contradictions in Social Analysis*, Londres: MacMillan Education.
- GIL, Adrián (2002). *El poder y su legitimidad*, Valencia: Marfil.
- GIMATE-WELSH, A. (2006). "Democracia y representación. Una mirada institucional y procedimental de la transición mexicana", en R. Espinoza y R. Jiménez (coord.). *La representación política y el Congreso mexicano*, México: IIS-UNAM, pp. 61-97.
- , (2004). "Una aproximación a la representación política desde la semiótica", en L. Béjar y G. Waldman (coord.), *La representación parlamentaria en México*, México: Gernika-UNAM, pp. 159-179.
- GIMÉNEZ, Gilberto (2007). *Estudios sobre la cultura y las identidades sociales*, México: CONACULTA-ITESO
- , (2002). "Paradigmas de la identidad", *Sociología de la identidad*, México: UAM.
- , (1981). *Poder, Estado y Discurso. Perspectivas sociológicas y semiológicas del discurso político-jurídico*, México: UNAM.
- GITLIN, Todd (1985). *Inside Prime Time*, Nueva York: Pantheon.
- , (1980), *The Whole World is Watching*, Berkeley: University of California Press.
- GOFFMAN, E. (2006, 6ª. reimp). *La presentación de la persona en la vida cotidiana*, Buenos Aires: Amorrortu (1ª. ed, 1994).

- GONZÁLEZ, A., A. QUINTANILLA y M. TAJONAR (2010). "Confianza en las instituciones políticas mexicanas: ¿capital social, valores culturales o desempeño?", en A. Moreno (coord.), *La confianza en las instituciones. México en perspectiva comparada*, México: CESOP, Cámara de Diputados, LXI Legislatura.
- GONZÁLEZ, J. (2006). *Para entender nuestra democracia. La consolidación del sistema de partidos en México*, México: Gernika.
- GONZÁLEZ, P. (1999). *El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad*: Madrid: Cátedra.
- GONZÁLEZ, Susana (2006). "La teoría del discurso como propuesta metodológica", en *Acta Sociológica*, (45), México: UNAM, pp. 115-132.
- GOODIN, Robert (2003). "Las instituciones y su diseño", en R. Goodin (coord.). *Teoría del diseño institucional*, Barcelona: Gedisa, pp. 13-73.
- GOSSELIN, A. (1998). "La retórica de las consecuencias no previstas. Las ideologías y el elector racional", en G. Gauthier et., al. (comp.). *Comunicación y Política*, Barcelona: Gedisa, pp. 333-355.
- GRABER, D. (1994). Why voters fail information tests: Can the hurdles be overcome?", *Political Communication*, (11), pp. 331-346.
- , (1993). *Mass Media and American Politics*, Washington: Congressional Quarterly.
- GRANBERG, D. (1985), "An Anomaly in Political Perception", *Public Opinion Quarterly*, (49), pp. 504-516.
- GRINGAS, A. M. "El impacto de las comunicaciones en las prácticas políticas. Lectura crítica", en G. Gauthier, et., al. (comp.). *Comunicación y Política*, Barcelona: Gedisa, pp. 31-43.
- GUIMELLI, C. (2004). *El pensamiento social*, México: UNAM- Coyoacán.
- GUNTHER, R., N. DIAMANDOURUS, H.J. PUHLE, eds. (1995). *The Politics of Democratic Consolidation*, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- GUNTHER, R. y J. HIGHLEY (1992), *Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe*, Cambridge: Cambridge University Press.
- GURZA, A. (1998). *Estado, sociedad y medios. Reivindicación de lo público*, México: Plaza y Valdés, Universidad Iberoamericana.
- GUTIÉRREZ, D. (2007). "Las identidades en el marco de la teoría social", en *Acta Sociológica*, (47), México: UNAM, pp. 37-65.
- GUTMANN, Amy (2008). *La identidad en democracia*, Buenos Aires: Katz Editores.
- HABERMAS, Jürgen (2008^a, 4^a. reimp). *Teoría de la Acción Comunicativa, I. Racionalidad de la acción y racionalización social (I)*, México: Taurus [de la 1^a, en español, 2002; original, *Theorie des kommunikativen Handelns. Band I. Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1981]
- , (2008b, 4^a. reimp). *Teoría de la Acción Comunicativa, II. Crítica de la razón funcionalista (I)*, México: Taurus [de la 1^a, en español, 2002; original, *Theorie des kommunikativen Handelns. Band II. Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1981].
- , (1998, 2^a. Ed.). *Facticidad y Validez. Sobre el derecho y Estado democrático de Derecho en términos de teoría del discurso*, Madrid: Trotta.

- , (1993). "La soberanía popular como procedimiento. Un concepto normativo de lo público", en M. Herrera (coord.), *Jürgen Habermas. Moralidad, ética y política. Propuestas y críticas*, México: Alianza.
- , (1981). *Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública*, Barcelona: G. Gili.
- HALL, S. y P. DU GAY (2003). *Cuestiones de identidad cultural*, B. A.: Amorrortu.
- , (1980). "Encoding/decoding in television discourse", en: S. Hall, et., al., *Culture, Media, Language*, London: Hutchinson.
- , (1973). "A world at one with itself", en: S. Cohen y J. Young (comps.), *The manufacture of News*, London: Constable.
- HALLIN, D. y P. MANCINI (2004), *Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics*, UK: Cambridge University Press (edición en castellano: *Sistemas Mediáticos comparados: tres modelos de relación entre los medios de comunicación y la política*, Hacer, Barcelona).
- , y S. PAPATHANASSOPOULUS (2002), "Political Clientelism and the Media: Southern Europe and Latin America in comparative perspective", in *Media Culture & Society*, (24), (2), London: Sage, pp. 175-195.
- , (1992), "Sound bite news: Television coverage of elections, 1968-1988", *Journal of Communication*, (42), (2), pp. 5-24.
- HARTLEY, J. (2001). "The Infotainment Debate", in G. Creeber (coord.), *The Television Genre Book*, London: BFI.
- , (1992). *Tele-ology: Studies in Television*, London: Roudledge.
- , (1982), *Understanding News*, London: Methuen.
- HARVEY, D. (1990). *The Condition of Posmodernity*, Oxford: Blackwell.
- HELD, D. (2001). *Modelos de democracia*, Madrid: Alianza (1996, 1ª. Inglés; versión española Teresa Alberó; segunda edición Alberto Gómez).
- , (1997). *La democracia y el orden global. Del Estado moderno al Estado cosmopolita*, Barcelona: Paidós.
- HELLER, W. y J. WELDON (2003). "Reglas de votación y la estabilidad en la Cámara de Diputados", en R. Mirón y L. Béjar (coord.), *El Congreso después de la alternancia*, México: Senado de la República-AMEP, pp. 85-119.
- HERMAN, E. y N. CHOMSKY (1994). *Manufacturing consent: the political economy of the mass media*, London: Vintage.
- HEVIA, F. (2005). "El concepto de rendición de cuentas y sus usos: proyectos políticos en pugna", en A. Monsiváis (comp.) *Políticas de transparencia: ciudadanía y rendición de cuentas*, México: IFAI, pp. 63-81.
- HIMMELSTRAND, U. (1996). "La paradójica carencia de información y conocimiento relevantes en las sociedades de la información postindustriales", en J. Tezanos (ed.), *La democracia post-liberal*, Madrid: Sistema.
- HOLMES, S. (2008). "Linajes del estado de derecho", en J. Ackerman (coord.), *Más allá del acceso a la información. Transparencia, rendición de cuentas, estado de derecho*, México: Siglo XXI, pp. 33-88.

- HUBER, J. P. (2003). "El Congreso mexicano después de la alternancia: apuesta de legitimidad por legitimación", en R. Mirón y L. Béjar (coord.), *El Congreso después de la alternancia*, México: Senado de la República-AMEP, pp. 159-173.
- HUERTA, C. (1998). *Mecanismos constitucionales para el control del poder político*, México: UNAM.
- HUERTAS, F. (1994). "Introducción", en F. Huertas ((coord.), *Televisión y política*, Madrid: Complutense.
- HUNTINGTON, S. (1996, 3ª reimp.). *El orden político en las sociedades en cambio*, Barcelona: Paidós (1ª ed. 1968 by Yale University Press).
- IMBERT, G. (2008). *El transformismo televisivo. Postelevisión e imaginarios sociales*, Madrid: Cátedra.
- , (2003). *El zoo visual. De la televisión espectacular a la televisión especular*, Barcelona, Gedisa.
- INGLEHART, R. (1997). *Modernization and postmodernization: Cultural, economic and political change in 43 societies*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- , (1977). *The silent revolution: Changing values and political styles among Western publics*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- IFE (2003). *Los electores en la consolidación democrática. Estudio sobre el campo político electoral en México*, México: IFE.
- INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE IBEROAMERICA (2006). *Actitudes, valores y opiniones de las elites parlamentarias de México*, México: Universidad de Salamanca-Centro de Estudios de Opinión Pública, Cámara de Diputados LIX Legislatura.
- ISUNZA, E. (2006). "Interfaces sociedad civil-Estado en México: hacia una tipología de la direccionalidad de los procesos democráticos", en D. Salinas (coord.), *Democratización y tensiones de gobernabilidad en América Latina*, México: Gernika, pp. 203-218.
- , (2005). "Interfaces socioestatales y proyectos políticos. La disputa entre rendición de cuentas y participación ciudadana desde la perspectiva de la igualdad compleja", en A. Monsiváis (comp.) *Políticas de transparencia: ciudadanía y rendición de cuentas*, México: IFAI, pp. 17-30.
- IYENGAR, S. y J. CURRAN (2009). *Media Systems, News Delivery and Citizens' Knowledge of Current Affairs*, (essay posted on: Chicago: 59th Annual Conference of the International Communication Association.
- , y D. KINDER (1993). *Televisión y Opinión Pública. Información es poder*, México: Gernika.
- , (1990). *Culture Shift in Advanced Industrial Democracies*, Princeton: Princeton University Press.
- , y D. KINDER (1987). *News that Matters: Agenda-Setting and Priming in a Television Age*, Chicago, IL: University of Chicago Press.
- , M. PETERS y D. KINDER (1982). "Experimental Demonstrations of the Not-So-Minimal Political Consequences of Mass Media", *American Political Science Review*, (76), pp. 848-858.

- JAMIESON, K. H. (1992). *Dirty politics: Deception, distraction and democracy*, New York: Oxford University Press.
- JÁUREGUI, G. (1994). *La democracia en la encrucijada*, Barcelona: Anagrama.
- JARA, R. y A. Garnica. *¿Cómo las ves? La televisión mexicana y su público*, México, IBOPE-AGB, 2007.
- JÉREZ, Miguel (1997). "Los grupos de presión", en R. del Águila (editor), *Manual de Ciencia Política*, Madrid: Editorial Trotta, pp. 291-317.
- JIMÉNEZ, M. (2006). *La oposición parlamentaria en México. Su rendimiento en gobiernos de mayoría dividida*, México: Cámara de Diputados, Porrúa.
- JIMENEZ-OTALENGO, R. "La representación y la educación. Una aproximación semiótica y discursiva a los debates en el Congreso mexicano", en R. Espinoza y R. Jiménez (coord.). *La representación política y el Congreso*, México: UNAM, pp. 99-114.
- JO, E. y L. BERKOWITZ (1996). "Análisis del efecto *priming* sobre la influencia de los medios: una puesta al día", en: J. Bryant y D. Zillmann (comps.) *Los efectos de los medios de comunicación. Investigaciones y teorías*, Barcelona: Paidós, pp. 67-88.
- JOAS, H. (2001). "Interaccionismo simbólico", en A. Giddens y J. Turner, et., al., *La Teoría social hoy*, Madrid: Alianza, pp. 112-154.
- JOHNSTON, A. (1990). "Trends in Political Communication: A Selective Review of Research in the 1980's", in D. Swanson y N. Nimmo (eds.), *New Directions in Political Communication. A Resource Book*, Newbury, CA: Sage Publications, pp. 329-389.
- JOKISCH, R. (2002). "Observando la acción social. Apuntes desde el punto de vista de la metodología de distinciones y desde una teoría operativa-culturalista de la sociedad", en F. Castañeda y M. Guitián, (coord.), *Instantáneas de la Acción*, México: UNAM, pp. 73-148.
- JUÁREZ, J. (2009). *La televisión encantada. Publicidad política en México*, México: UNAM.
- KAID, L., y J. FOOTE (1985). "How network television coverage of the President and Congress compare", *Journalism Quarterly* (62), pp. 59-65.
- KATZ, E., J. BLUMLER, M. GUVERITCH (1974). "Uses of Mass Communication by the Individuals", en W. Davidson y F. Yu (eds.), *Mass Media Communication Research*, New York: Praeger Publishers. Texto consultado: reproducción autorizada en M. De Moragas (ed.), *Sociología de la comunicación de masas*, (II), Barcelona: G. Gili.
- KEANE, J. (1997). "Transformaciones estructurales de la esfera pública", en *Estudios Sociológicos*, (XV), (43), México: Colegio de México, pp. 57-77.
- , (1992). *La vida pública y el capitalismo tardío*, México: Alianza.
- KELSEN, K. (1994). *Teoría pura del derecho*, México: EUDEBA.
- KEY, V. O. (1960). *Politics, Parties and Pressure Groups*, New York: Crowell
- KIM, J., R. WYATT y E. KATZ (1999). "News, Talk, Opinion, Participation: The Part Played by Conversation in Deliberative Democracy", *Political Communication*, (16), (4), pp. 361-385.
- KING, G., R. KEOHANE, S. VERBA (2009), *El diseño de la investigación social. La inferencia científica en los estudios cualitativos*, Madrid: Alianza.
- KINGDON, J. (1984). *Agendas, Alternatives and Public Policies*, USA: The University of Michigan- Harper Collins Publishers.

- KLANDERMANS, B. (1992). "The Case for Longitudinal Research on Movement Participation", in M. Diani y R. Eyerman, *Studying Collective Action*, London: Sage, pp. 55-75.
- , (1988). "The Formation and Mobilization of Consensus", in: B. Klandermans, H. Kriesi y S. Tarrow (eds.), *International Social Movement Research. From Structure to Action: Comparing Social Movement Research Across Cultures*, (I), Connecticut: JAI Press.
- KLEINSTEUBER, H. (2007). "Habermas and the Public Sphere: From a German to an European Perspective", México: *Razón y Palabra*, (55), (publicado originalmente en *Javnost* (8), (1), Slovenia, 2001, pp. 90-98).
- KROTZ, E. y R. WINOCUR (2007). "Democracia, participación y cultura ciudadana: discursos normativos homogéneos versus prácticas y representaciones heterogéneas", en *Estudios Sociológicos* (XXV), (1), pp. 187-218.
- , (2005). "Cultura política y participación ciudadana", en A. Aziz y J. Alonso (coord.), *Sociedad civil y diversidad*, México: CIESAS, Porrúa, pp. 373-398.
- KYMILCKA, W. (2003). *La política vernácula. Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía*, Barcelona: Paidós.
- LABARRIERE, J. L. (2001) "Del discurso político como <apariencia engañosa> en Aristóteles", en J.L. Labarririe, et., al., (2001). *Teoría política y comunicación*, Barcelona: Gedisa, pp. 9-18.
- LACHMAN, R., J. L. LACHMAN y E. BUTTERFIELD (1979). *Cognitive psychology and information processing. An introductory*, Hillsdale, NJ: Earlbaum.
- LANDI, O. (1991). "Videopolítica y cultura", *Diálogos de la Comunicación*, (29), Lima: FELAFACS.
- LANG, G y K. LANG (1984). *Politics and television reviewed*, Beverly Hill, CA: Sage.
- LANGER, J. (2000). *La televisión sensacionalista. El periodismo popular y las "otras noticias"*, Barcelona: Paidós.
- LAPALOMBARA, J. y M. WEINER (1966) "The Origin and Development of Parties", en J. Lapalombara y M. Weiner (comps.) *Political Parties and Political Development*, Princeton, J.J.: Princeton University Press, pp. 3-42.
- LAVIGNE, A. (1998). "La politización de la información del sector público", en G. Gauthier et., al., (comps). *Comunicación y Política*, Barcelona: Gedisa, pp. 257-275.
- LAZZERI, C. (2001). "Los signos del poder: ensayo sobre la política de Pascal", J. Labarririe et., al., (2001). *Teoría política y comunicación*, Barcelona: Gedisa, pp. 19-91.
- LECHNER, D. (2000). "Nuevas ciudadanías", *Revista de Estudios Sociales* (5), pp. 25-31.
- LECHNER, N. (2006). "Los desafíos políticos del cambio cultural", en D. Salinas (coord.), *Democratización y tensiones de gobernabilidad en América Latina*, México: Gernika, pp. 17-32.
- , (2003). "¿Cómo reconstruimos un nosotros?", *Metapolítica*, (VII), (29), pp. 52-65.
- , (2001). "Cultura política y gobernabilidad democrática", en A. Camou (comp.). *Los desafíos de la gobernabilidad*, Méx: FLACSO, UNAM, Plaza&Valdés, pp. 87-95.
- LEFORT, C. (1990). *Ensayos sobre lo político*, México: Universidad de Guadalajara.
- , (1981). *L'invention démocratique*, París: Fayard.

- LEVINSON, S. (1989). *Pragmática*, Barcelona: Teide.
- LIJPHART, A. (2000). *Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en treinta y seis países*, Barcelona: Ariel (1999, Yale University Press, revisión Joseph Colomer).
- , (1997). "Unequal Participation: Democracy's Unresolved Dilemma", *American Political Science Review*, (91), pp. 7-37.
- LINZ, J. (2002). "Parties in Contemporary Democracies". R. Ghunter, J. R. Montero y J. Linz (comp.). *Political Parties. Old Concepts and New Challenges*, Oxford: Oxford University Press.
- , (1992). *Los problemas de las democracias y la diversidad de democracias*, Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
- LIPPMANN, W. (1922), *Public Opinion*, New York: Mac Milan.
- LIPSET, S. M. (1959). "Algunos requisitos sociales de la democracia: desarrollo económico y legitimidad política", en Albert Batlle (ed.), *Diez Textos Básicos de Ciencia Política*, Barcelona: Ariel (2001, 2a.), pp. 113-150.
- LLOYD, J. (2004). *Wath the Media are doing to our politics*, London: Constable.
- LOAEZA, S. (2008). *Entre lo posible y lo probable. La experiencia de la transición en México*, México: Planeta.
- LODGE, M., M. STEENBERGEN y S. BRAU (1995), "The responsive voter: Campaigning information and the dynamics of candidate evaluation", *American Political Science Review*, (89), (2), pp. 309-326.
- , y R. HAMILL (1986), "A Partisan schema for Political Information Processing", *American Political Science Review*, (80), (1), pp. 505-519.
- LÓPEZ, S. (2009). *Democracia, poder y medios de comunicación*, México: Fontamara.
- LÓPEZ-AYLLÓN, S. ed., (2006). *Democracia, transparencia y Constitución. Propuestas para un debate necesario*, México: UNAM-IFAI.
- LOZANO, E. (2006). "Del sujeto cautivo a los consumidores nomádicos" en G. Sunkel (coord.), *El consumo cultural en América Latina*, Bogotá: A. Bello, pp. 96-113.
- LOZANO, J., C. PEÑA-MARÍN y G. ABRIL (1993). *Análisis del discurso. Hacia una semiótica de la interacción textual*, México: Red Editorial Iberoamericana.
- LOUW, E. (2005). *The Media and Political Process*, Londres: Sage.
- LUBAN, D. (2003). "El principio de publicidad", en R. Goodin (cood.). *Teoría del diseño institucional*, Barcelona: Gedisa, pp. 197-250 [*The Theory of Institutional Design*, Cambridge: University Press, 1996].
- LUHMANN, N. (1998). "Introducción a una teoría de los medios de comunicación simbólicamente generalizados", *Complejidad y modernidad: De la unidad a la diferencia*, Barcelona: Trotta.
- , (1986). "El Estado de bienestar. Un problema teórico y práctico", *Estudios Políticos* (5), (3-4), México: UNAM.
- LUJAMBIO, A. (2007). "Una re-visión a la reforma política de 1977 o el Partido Acción Nacional en su laberinto", E. Florescano (coord.), *La política en México*, México: Taurus, pp. 147-189.
- , (2003). "Prólogo", en *El Legislador a examen. El debate sobre la reelección legislativa en México*, México: Cámara de Diputados, FCE, pp. 19-23.

- , y H. VIVES (2000). *El poder compartido: un ensayo sobre la democracia mexicana*, México: Océano.
- LULL, James (1997). *Medios, comunicación y cultura*, Buenos Aires: Amorrortu.
- LWANSON, Kay y P. MERKI, eds., (1998). *When Parties Fail: Emerging Alternative Organizations*, Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- MAFFESOLI, M. (2007). "La saturación de la identidad: una mirada desde la sociología de lo cotidiano", en *Acta Sociológica*, (47), México: UNAM, pp. 13-35.
- MAINWARING, S. y C. WELNA, eds (2003). *Democratic Accountability in Latin America*, New York: Oxford University Press.
- , y T. SCULLY (1995). *Building democratic institutions: Party system in Latin America*, Stanford: Stanford University Press.
- MANIN, B. (1998). *Principios del gobierno representativo*, Madrid: Alianza Editorial.
- , (1994). "Checks, Balances and Boundaries: The Separation of Powers in the Constitutional Debate of 1787", en B. Fontana (ed.) *The Invention of the Modern Republic*, Cambridge: Cambridge University Press.
- MARGOLIS, M. y G. MAUSER, comp. (1989). *Manipulating Public Opinion*, P. Crove, CA: Brooks/Cole Publishing.
- MÁRQUEZ, Martha (2004). "Televisión y tratamiento de la información político-electoral", *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, (XLVI), (190), pp. 163-178.
- , (2003). "Democracia, campañas electorales y publicidad política", *Razón y Palabra*, (35), México: ITESM, consultado el 06/01/2011 en: <http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n35/mmarquez.html>.
- MARTÍN-BARBERO, J. (2007). "Tecnidades, identidades, alteridades: desubicaciones y opacidades de la comunicación en el nuevo siglo", en D de Moraes (coord.). *Sociedad mediatizada*, Barcelona, Gedisa, pp. 69-98.
- , (2006). "Aproximaciones teórico-metodológicas. Recepción de medios y consumo cultural: travesías", en G. Sunkel (coord.), *El consumo cultural en América Latina*, Bogotá: Convenio Andrés Bello, pp. 47-71.
- , (1999a). "Las transformaciones comunicativas y tecnológicas de lo público", *Metapolítica* (3), (9), pp. 46-55.
- , (1999b). "El miedo a los medios: política, comunicación y nuevos modos de representación", *Nueva Sociedad*, (161), pp. 43-56.
- , (1993). *Communication, Culture and Hegemony*, Newbury Park, C. A.: Sage.
- MARTINA, P. S. (2008). "The Mass Media as Sentinel: Why Bad News about Issues is Good News for Participation", in *Political Communication*, (25), (2), pp. 180-193.
- MARTÍNEZ, O. y R. LÓPEZ (2009). "Concentración televisiva y tercera cadena", en J. Esteinou y A. R. Alva (coord.), *La <Ley Televisa> y la lucha por el poder en México*, México: UAM, pp. 495-518.
- MARVÁN, M. y R. CORONA (2006). "El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública: una institución para la rendición de cuentas en México", en E. Isunza y A. Olvera (coord.) *Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil: participación ciudadana y control social*, México: CIESAS-Universidad Veracruzana-Porrúa, pp. 571-600.

- MASHAW, J. (2008). "Rendición de cuentas, diseño institucional y la gramática de la gobernabilidad", J. Ackerman (coord.), *Más allá del acceso a la información. Transparencia, rendición de cuentas y estado de derecho*, México: Siglo XXI, pp. 119-173.
- MAZZOLENI, Gianpietro y Winfried SCHULZ (1999), "Mediatization" of Politics: A Challenge for Democracy? *Political Communication*, (16), (3), pp. 247-261.
- McADAM, D., J. MCCARTHY y M. N. ZALD (1996). *Comparative Perspectives on Social Movements. Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framing*, Cambridge: Cambridge University Press.
- McCANN, J. (1997). "El electorado mexicano en el contexto de América del norte", en R. Camp (comp.), *Encuestas y democracia: opinión pública y apertura política en México*, México: Siglo XXI Editores.
- McCHESNEY, R. (1999). *Rich Media, Poor Democracy. Communication Politics in Dubois Times*, Chicago, IL: University of Illinois Press.
- McCOMBS, M. (2004). *Setting the agenda. The Mass Media and Public Opinion*, MA: Polity Press.
- , y A. REYNOLDS (2002). "New Influence on our Pictures of the World", in: J. Bryant y D. Zillman (eds.), *Media Effects. Advances in the Theory and Research*, (1), (18), NJ: Lawrence Erlbaum.
- , D. SHAW, y D. WEAVER (1997). *Communication and democracy: Exploring the intellectual frontiers in agenda-setting theory*, New Jersey: Laurence Earlbaum.
- , J. LLAMAS, E. LÓPEZ y F. REY (1997). "Candidate Images in Spanish Elections: Second-Level Agenda-Setting effects", *Journalism and Mass Communication Quarterly*, (74).
- , y D. SHAW (1993), "The Evolution of Agenda Setting Research: Twenty-Five Years in the Marketplace of Ideas", *Journal of Communication*, (43), (2), pp. 58-67.
- MCLEOD, J. D. SCHEUFELE y P. MOY (1999). "Community, Communication and Participation: The Role of Mass Media and Interpersonal Discussion in Local Political Participation", *Political Communication*, (16), (3), pp. 315-316.
- McNAIR, B. (1995). *An Introduction to Political Communication*, New Cork: Routledge.
- MACPHERSON, C. B. (1982). *La democracia liberal y su época*, Madrid: Alianza.
- McQUAIL, D. (2005). *Media Accountability and Freedom of Publications*, Oxford: Oxford University Press.
- , (1998). *La acción de los medios. Los medios de comunicación y el interés público*, Buenos Aires: Amorrortu [*Media Performance. Mass Communications and the Public Interest*, Sage Publications, Thousand Oaks, London, 1992].
- MEDINA, L. (1978). *Evolución electoral en el México contemporáneo*, México: SEGOB.
- MELLUCCI, A. (1999a). *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*, México: El Colegio de México.
- , (1999b). "Esfera pública y democracia en la era de la información", en *Metapolítica*, (3), (9), pp. 57-67.
- , (1996). *Challenging Codes: collective action in the information age*, Cambridge: New York: International Publishers.

- MERINO, M. (2008). "La transparencia como política pública", en J. Ackerman (ed.), *Más allá del acceso a la información. Transparencia, rendición de cuentas y estado de derecho*, México: Siglo XXI, pp. 240-262.
- , ed., (2005). *Transparencia: libros, autores e ideas*, México: CIDE-IFAI.
- , (2004). *La participación ciudadana en la democracia*, México: IFE.
- MESTRE, Agapito (1999). "Jürgen Habermas: esfera pública y desobediencia civil", *Metapolítica*, (3), (9), pp. 115-125.
- , (1994). *El poder en vilo*, Madrid: Tecnos.
- MEYER, L. (1997). "El sistema político y la gobernabilidad mexicana", en S. Schmidt (coord.), *La capacidad de gobernar en México*, México: Aguilar.
- MICHELS, R. (1983). *Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna*, B. A.: FCE.
- MIEGE, B. (1998). "El espacio público más allá de la esfera política", en G. Gauthier et., al., (comp.). *Comunicación y Política*, Barcelona: Gedisa, pp. 44-59.
- MOLINA Y VEDIA, Silvia (2009). *Comunicación y Sistemas Emergentes*. México: UNAM.
- , (2008). *Silenciamiento y sistemas emergentes auto-organizados*. México: UNAM.
- , (2004). "Comunicación gubernamental: ¿encanto o desencanto?", *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, (XLVI), (190), pp. 31-45.
- , (s/a). *Teoría de la Credibilidad Política*, México: UNAM.
- MONDRAGON, R. (2003). *Rendición de cuentas y democracia representativa*, Cuaderno de Trabajo (102), México: Fundación Rafael Preciado.
- MONZON, C. (2000). *Opinión pública, comunicación y política. La formación del espacio público*, Madrid: Tecnos.
- MORA-DONATTO, C. (2006). *Cambio político y legitimidad funcional*, México: Porrúa.
- MORIN, E (1966). *El espíritu del tiempo. Ensayo sobre la cultura de masas*, Madrid: Taurus.
- MORLEY, D. (1996). *Televisión, audiencias y estudios culturales*, B. A.: Amorrortu.
- , (1990). "Citizenship and Audience Membership", D. Sawnsen y D. Nimmo (eds.), *New Directions in Political Communication: A Resource Book*, London: Sage.
- MORLINO, L. (2007). "Explicar la realidad democrática: ¿qué tan relevantes son las autoritarias", *Revista de Ciencia Política*, (27), (2), pp. 3-22.
- MOUCHON, J. (1998). *Política y Medios. Los poderes bajo influencia*, Barcelona: Gedisa.
- MUNCK, G. (2004). "La política democrática en América Latina: contribuciones de una perspectiva institucional", *Política y Gobierno*, (XI), (2), México: CIDE, pp. 315-346.
- MUÑOZ LEDO, P. (2002). "La reforma del Estado: hacia un gobierno compartido", C. Mora-Donatto (coord). *Relaciones entre gobierno y congreso. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de derecho Constitucional*, México: UNAM, pp. 439-444.
- MUÑOZ, V. (2002). "Estado de la cuestión", *Documento rector del seminario las características de la participación y el abstencionismo electoral*, México: IFE.
- MUÑOZ-ALONSO, A. y J. I. ROSPIR, eds., (1999). "La democracia mediática", en A. Muñoz-Alonso y J. I. Rospir (coords.), *Democracia mediática y campañas electorales*, Barcelona: Ariel.

- NACIF, B. (2005). "¿Qué hay de malo con la parálisis? Democracia y gobierno dividido en México", en A. Aziz y J. Alonso (coord.), *Globalización, poderes y seguridad nacional*, México: Porrúa, Cámara de Diputados, CIESAS, pp. 177-196.
- NAISHTAT, F. (2002). "Sujetos de la acción colectiva: intencionalidad, performatividad, racionalidad", en F. Castañeda y M. Guitián (coord.), *Instantáneas de la acción*, México: Casa Juan Pablos-UNAM, pp. 149-171.
- NAUGHTTON, J. (2005). "The Genius of Blogging", in B. Franklin, et., al., *Key Concepts in Journalism Studies*, London: Sage.
- NAVA, S., I. LUNA y E. VILLANUEVA (2006). *Derecho de acceso a la información pública parlamentaria*, México: Cámara de Diputados-Miguel Porrúa.
- NEUMAN, Russell (1986). *The Paradox of Mass Politics. Knowledge and Opinion in the American Electorate*, Massachusetts: Harvard University Press.
- NEWELL, A. y H. SIMON (1972), *Human Problem Solving*, New Jersey: Prentice Hall.
- NOHLEN, D. (2006). "Reflexiones sobre gobernabilidad y política", D. Salinas (coord.), *Democratización y tensiones de gobernabilidad en América Latina*, México: Gernika, pp. 33-44.
- , (2001) "Democracia, transición y gobernabilidad en América Latina", México: *Quehacer Municipal. Revista de Análisis* (I), (2), pp. 4-13.
- NORTON, P. (2002). "Reconectando a los Parlamentarios con los Ciudadanos", Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias (comp.), *Memoria del V Taller de Investigadores Parlamentarios*, Wroxtton Collage, Oxfordshire, U.K., 2002, México: Cámara de Diputados LVIII Legislatura, pp. 307-316.
- O'DONNELL, Guillermo (2008). "Democracia y estado de derecho", en J. Ackerman (coord.), *Más allá del acceso a la información. Transparencia, rendición de cuentas, estado de derecho*, México: Siglo XXI, pp. 89-99.
- , (2007a). "Accountability Horizontal", en G. O'Donnell (ed.), *Disonancias. Críticas democráticas a las democracias*, Buenos Aires: Prometeo, pp. 85-112.
- , (2007b). "Democracia, ciudadanía y política social", en *Blindaje Electoral y Derechos Sociales. Memorias*, México: PNUD-CESOP, p. 47-51.
- , (2003). "Horizontal Accountability: The Legal Institutionalization of Mistrust", in: S. Mainwaring y C. Welna (eds.), *Democratic Accountability in Latin America*, New York: Oxford University Press, pp. 34-54.
- , (2001). "Rendición de cuentas horizontal y nuevas poliarquías", en A. Camou (comp.), *Los desafíos de la gobernabilidad*, México: FLACSO-UNAM, pp. 311-335.
- , (1998). "Accountability horizontal", *La Política. Revista de estudios sobre el Estado y la sociedad*, (4), Buenos Aires: Paidós.
- O' DONNELL, Hugh (2007). *Noticias y ciudadanía. El telespectador, el poder y el debate público*, Madrid: Ediciones de la Torre.
- OFFE, Claus (2003). "El diseño institucional en los procesos de transición de Europa del Este", en R. Goodin (cood.). *Teoría del diseño institucional*, Barcelona: Gedisa, pp. 251-282 [*The Theory of Institutional Design*, Cambridge University Press, 1996].

- , y P. SCHMITTER (2001). "Las paradojas y los dilemas de la democracia liberal", en A. Camou (comp.). *Los desafíos de la gobernabilidad*, México: FLACSO-UNAM, Plaza y Valdés, pp. 61-86.
- OLIET, A. (1997). "Corporativismo y Neocorporativismo", en R. del Águila (editor), *Manual de Ciencia Política*, Madrid: Trotta, pp. 319-347.
- OLSON, M. (1992). *La lógica de la acción colectiva*, México: Limusa.
- OLVERA, A. (2007). "Hacia una nueva conjugación entre política y sociedad: los contornos de una nueva reforma política participativa en México", en E. Florescano (coord.), *La política en México*, México: Taurus, pp. 263-290.
- , (1999). "Apuntes sobre la esfera pública como concepto sociológico", en *Metapolítica*, (3), (9), pp. 69-78.
- OÑATE, P. (1997). "Los partidos políticos", en R. del Águila (editor), *Manual de Ciencia Política*, Madrid: Trotta, pp. 251-270.
- OROZCO, G. (2007). "Comunicación social y cambio tecnológico: un escenario de múltiples desordenamientos", en D. de Moraes (coord.). *Sociedad mediatizada*, Barcelona, Gedisa, pp. 99-117.
- , (2006). "Televidencias y mediaciones. La construcción de estrategias por la audiencia", G. Sunkel (coord.), *El consumo cultural en América Latina*, Bogotá: Convenio Andrés Bello, pp. 114-133.
- , (2002). "Televidencias: una perspectiva epistemológica para un análisis de las interacciones con la televisión", G. Orozco (coord.), *Lo viejo y lo nuevo. Investigar la comunicación en el siglo XXI*, Madrid: Ediciones De la Torre, pp. 109-120.
- ORTEGA, C. (2006). *La otra televisión. Por qué no tenemos televisión pública*, México: Análisis, Ediciones y Cultura, A. C.,- UAM.
- ORTEGA, F. (2003). "La política y el periodismo en el nuevo espacio público", *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, (XLVI), (187), pp. 51-97.
- PAN, Z. y G. KOSICKI (1993), "Framing analysis: an approach to new discourse", *Political Communication*, (10), pp. 55-75.
- PARAMIO, L (2003). "Globalización y malestar en la democracia", México: *Voz y Voto* (127).
- , (1997). "Reforma del Estado y desconfianza política", *Reforma y Democracia*, (24).
- PATEMAN, C. (1970). *Participation and Democratic Theory*, Cambridge: Cambridge University Press.
- PATTERSON, T. y W. DONSBACH, (1996), "News decisions: journalists as partisan actors", *Political Communication*, (13), pp. 455-468.
- , (1993). *Out of Order*, New York: Knof.
- PEÑA, D. (2006). "¿Democracia en crisis?, espacio público y <mediocracia>", *Cuadernos del Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información*, (1), México: UNAM, pp. 13-27.
- , (2002). *Debate Legislativo y Prensa en México*, (tesis maestría), México, UNAM.
- PÉREZ, A. (1998). "Las estrategias comunicativas", en J. Benavides (ed.), *El debate de la comunicación*, Madrid: Fundación General de la UCM- Ayuntamiento de Madrid.
- PÉREZ, M. (2006). "Muchos oyen, pero pocos escuchan. El papel de los medios en la formación de la opinión pública y la realidad", *The Global Media Journal*, (3), (5).

- PERSE, E. (1990). "Involvement with Local Television News: Cognitive and Emotional Dimensions", *Human Communication Research*, (16), (4), pp. 556-581.
- PERUZZOTI, E. y C. SMULOVITZ, eds. (2002). *Controlando la política. Ciudadanos y medios en las nuevas democracias latinoamericanas*, Buenos Aires: Temas.
- PLANTIN, C. (2005). *La argumentación*, Barcelona: Ariel.
- PORTILLO, M. (2006). "Juventud y Política: algunos elementos para reflexionar acerca de la participación política juvenil en la ciudad de México", en CESOP, *Pensar en los jóvenes: propuestas para hoy, ideas para el futuro*, México, Cámara de Diputados, pp. 109-131.
- , (2004). "Reflexiones en torno a una propuesta metodológica para abordar el estudio de opinión pública como proceso comunicativo desde una perspectiva multinivel", *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, (XLVI), (190), pp. 71-93.
- , (2001). *La opinión política de los jóvenes mexicanos*, (2 v.) Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
- PRICE, V. (1994). *La opinión pública. Esfera pública y comunicación*, Barcelona: Paidós.
- PNUD-México, (2007). *Encuesta Nacional sobre la Protección de los Programas Sociales*, en "Construcción de ciudadanía social y cultura de derechos", en *La opinión ciudadana en temas nacionales. Encuestas CESOP 2007*, México: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, pp. 11-42.
- , (2004). *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos*, Argentina: Aguilar Altea.
- PRZEWORSKI, Adam (2001). "Deliberación y dominación ideológica", en J. Elster (comp.), *La democracia deliberativa*, Barcelona: Gedisa, pp. 183-206 [*Deliberative Democracy*, UK.: The Press Syndicate of the University of Cambridge, 1998].
- , S. STOKES y B. MANIN (eds.), (1999). *Democracy, Accountability and Representation*, New York: Cambridge University Press.
- , (1998), "El Estado y el ciudadano", *Política y Gobierno* (V), (2), pp. 341-379.
- , (1991). *Democracia y mercado*, Cambridge: Cambridge University Press.
- PUHLE, H. J. (2004). "Problemas de consolidación democrática y <democracias defectuosas>", Fundación por la Socialdemocracia de las Américas, A.C., *Consolidación democrática y gobernabilidad en América Latina*, México: Fundación Friedrich Ebert-Instituto Teotonio Vilela, pp. 9-31.
- PUNSET, R. (2001). *Estudios Parlamentarios*, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- RABOTNIKOF, N. (2001). "Izquierda y derecha: visiones del mundo, opciones de gobierno e identidades políticas", en N. García-Canclini, et., al., *Reabrir espacios públicos: políticas culturales y ciudadanía*, México, UAM.
- RAMÍREZ, E. (2002). "La agencia humana", en F. Castañeda y M. Guitián (coords.), *Instantáneas de la acción*, México: Casa Juan Pablos-UNAM, pp. 213-239.
- REIMAN, J. (1976). "Privacy, Intimacy and Personhood", *Philosophy & Public Affairs*, (6), (1), pp. 26-44.
- REIS, F. (1996), "The State, the Market and Democratic Citizenship", E. Jelin y E. Herschberg (eds.), *Building Democracy*, Colorado: Westview Press.

- RENDON, A. (2000). "La democracia semidirecta. Referendum, plebiscito, iniciativa popular y revocación de mandato", *Iztapalapa*, (48), México: UAM, pp. 303-328.
- RICHERI, G. (1994). *La transición de la televisión. Análisis del audiovisual como empresa de comunicación*, Barcelona: Bosch.
- RIKER, W. (2001, 2ª.). "Teoría de juegos y de las coaliciones políticas", en A. Batlle (comp.), *Diez textos básicos de ciencia política*, Barcelona: Ariel, pp. 151-169 (tomado de *The Theory of Political Coalitions*, Yale University Press, N. H., 1962].
- , y P. ORDERSHOOK (1968), "A Theory of the Calculus of Voting", *American Political Science Review*, (62), USA: APSA.
- RINCÓN, O. (2006). *Narrativas mediáticas o cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento*, Barcelona: Gedisa.
- , (2005). *Televisión pública: del consumidor al ciudadano*, Buenos Aires: La Crujía.
- RIVERO, Á. (1997). "Representación política y participación", en R. Del Águila (ed.), *Manual de Ciencia Política*, Madrid: Trotta, pp. 205-229.
- RIZZI, L. (2003). "Comunicación mediática y consenso democrático. Una investigación sobre las transformaciones de la obligación política", *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, (XLVI), (187), pp. 99-127.
- RODOTÁ, S. (2008). "Vicisitudes de la soberanía", *Nombre Falso*, <http://www.nombrefalso.com.ar/index.php?pag=122&imprimir=sj>, (consulta 10/03/2008).
- RODRÍGUEZ, C. (1998). "Antecedentes teóricos de la etnometodología y el interaccionismo simbólico", *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, (XLIII), (174)pp. 39-60.
- ROGERS, E., y J. DEARING (1994), "Agenda Setting Research: Where it been, where is it going?" D. Graber (ed.), *Media Power in Politics*. WH: Congressional Quarterly.
- ROSPIR, Juan I. (2003). "Introducción a la comunicación política", en S. Berrocal (coord.) *Comunicación política en televisión y nuevos medios*, Barcelona: Ariel, pp. 15-54.
- ROUQUETTE, M. L. (2002). "Prólogo", en F. Flores (coord.), *Senderos del pensamiento social*, México: Ediciones Coyoacán, pp. 7-13.
- ROWE, W. y V. SCHELLING (1991). *Memory and Modernity: Popular Culture in Latin America*, London: Verso.
- RUBIN, A. (1991), "Usos y efectos de los *Media*: una perspectiva uso-gratificación", en J. Bryant y D. Zillmann (eds.), *Los efectos de los medios de comunicación. Investigaciones y Teorías*, Barcelona: Paidós, pp. 555-582.
- , (1984). "Ritualized and Instrumental Television Viewing", *Journal of Communication*, (34), (3), pp. 66-77.
- RUÍZ, A. (2006). "El ojo ciudadano y los recursos públicos: una breve evaluación de los alcances de la Ley Federal de Transparencia", en A. Ruíz (coord.), *Transparencia y rendición de cuentas*, México: Fontamara, pp. 17-40.
- RUÍZ, Felipe (2000). *Radiografía de la democracia*, México: IPN.
- RUSSELL, P., J. DALTON y M. WATTENBERG, eds. (2002). *Parties without Partisans. Political Change in Advanced Industrial Democracies*, Reino Unido: Oxford University Press.
- SAHUÍ, A. (2002). *Razón y espacio público. Arendt, Habermas y Rawls*, México: Coyoacán.

- SALAZAR, L. (2007). "Significados y valores de la política", en E. Florescano (coord.), *La política en México*, México: Taurus, pp. 19-43.
- SALGADO, E. (2010). "Discurso periodístico y opinión pública. Carta a los lectores en el marco de las elecciones de 2006 en México", en S. González Reyna (coord.), *Teorías del Discurso. Antología*, México: UNAM, pp. 271-293.
- , (2007). "La prensa escrita en México frente al cambio de régimen", *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, (199), pp.
- , (2003). *El discurso del poder. Informes presidenciales en México (1917-1946)*, México: Porrúa, CIESAS.
- SALMERON, F. (2002). "Modernidad y prácticas políticas: democracia, eslabonamientos y mediaciones en la sociedad civil", México: *Revista Mexicana de Sociología* (64), (1), México: UNAM, pp. 31-65.
- SAMPEDRO, V. (2008). "Comunicación política: nuevos medios, nuevas audiencias, nuevos problemas", *Revista Telos*, (74), pp. 1-5, (consulta: 26/03/2008: <http://www.campusred.net/telos/cuadernolmpresible.asp?idarticulo=6&rev=74>).
- , (2005). *13M: Multitudes On Line*, Madrid: Los Libros de la Catarata.
- SÁNCHEZ, E. y R. GÓMEZ (2009). "La economía política de la comunicación y la cultura. Un abordaje indispensable para el estudio de las industrias y las políticas culturales y de comunicación", en A. Vega (coord.), *La comunicación en México, una agenda de investigación*, México: AMIC, UNAM, UJAT.
- , (2007). "Industrias culturales, diversidad y pluralismo en América Latina", *Global Media Journal* (IV), (7), (http://gmje.mty.itesm.mx/sanchez_ruiz.html) (consultado 26/03/2008).
- , (2000). "Televisión, cultura política, autoritarismo y violencia. La formación ciudadana de todos los días", *Razón y Palabra*, (17), México: ITESM.
- SÁNCHEZ, J. (1998). "Las estrategias comunicativas de los grupos parlamentarios", en J. Benavides (ed.), *El debate de la comunicación*, Madrid: Fundación General de la UCM- Ayuntamiento de Madrid.
- SÁNCHEZ-TABERNEIRO, A. (2008). *Los contenidos de los medios de comunicación. Calidad, rentabilidad y competencia*, Barcelona: Ediciones Deusto.
- SANDERS, K., T. BALE y M. J. CANEL (1999). "Managing Sleaze: Prime ministries and News Management in Conservative Great Britain and Socialist Spain", *European Journal of Communication*, (14), (4), pp. 461-486.
- SANI, G. (2005). "Participación política", N. Bobbio, N. Matteucci y G. Pasquino (coord.), *Diccionario de política*, México: Siglo XXI (14ª. Ed. en español, t. 2, redactores J. Aricó, M. Soler y J. Tula), pp. 1137-1140.
- SANMARTÍN, J. (2003). "Los nuevos agentes políticos en la comunicación televisiva", en S. Berrocal (coord.), *La comunicación política en televisión y nuevos medios*, Barcelona: Ariel, pp. 81-109.
- SANTILLÁN, J. R. (2007). "De la información a la opinión: modelo para el análisis periodístico de los temas políticos", *Razón y Palabra* (59), México: ITESM.
- SAPERAS, E. (1987). *Los efectos cognitivos de la comunicación de masas*, Barcelona: Ariel.

- SARTORI, G. (2008a). *¿Qué es la democracia?*, México: Taurus (1ª ed. Santillana Editores, 2007; edición original 1987 del autor).
- , (2008b). *Elementos de teoría política*, Madrid: Alianza.
- , (1998a). *Partidos y sistemas de partidos*, Madrid: Alianza.
- , (1998b). *Homos Videns. La sociedad teledirigida*, Madrid: Taurus.
- , (1993). *¿Qué es la democracia?*, México: IFE.
- , (1989). *Teoría de la democracia*. Vol. El debate contemporáneo, México: Alianza.
- SCARDAMALIA, M. y C. BEREITER (2003). "Knowledge Vuilding", in J. W. Guthrie (ed.), *Encyclopedia of Education*, (2a. ed.), New York: MacMilan.
- , y C. BEREITER (1992). "Dos modelos explicativos de los procesos de comprensión escrita", *Infancia y Aprendizaje*, (58), pp. 43-64.
- SCHAFFER, F. (2007), "Ciudadanía, clientelismo y política social", *Blindaje Electoral y Derechos Sociales. Memorias*, México: PNUD, Cámara de Diputados, p. 57-67.
- SCHAAR, J. (1969). "Legitimacy in the Modern State", en P. Green y S. Levison, *Power and Community. Essays in Political Science*, Nueva York: Pantheon Books.
- SCHAUER, F. (2000). "Can public figures have private lives?", *Social Philosophy & Policy*, (17), (2), pp. 293-309.
- SCHEDLER, A. (2004). *¿Qué es la rendición de cuentas?*, México: IFAI.
- , (1999). "Conceptualizing accountability", en A. Schedler I. Diamond y M. Plattner (cords.), *The Self Restraining State: Power and Accountability in New Democracies*, Boulder, CO: Lynne Reinner Publishiers, pp. 13-28.
- SCHEUFELE, D. (2000). "Agenda-Setting, Priming and Framing Revisited: Another Look at Cognitive Effects of Political Communication", *Mass Media Communication and Society*, (3), (2-3), pp. 297-316.
- , (1999), "Framing as a Theory of Media Effects", *Journal of Communication*, (winter special number), pp. 103-122.
- SCHUDSON, M. (2000), "Rethinking Sociology of News Production Revisited (Again)", J. Curran, M. Gurevitch (eds.) *Mass Media and Society*, London: Arnold, pp. 175-200.
- SCHUMPETER, J. A. (1975). *Capitalism, Socialism and Democracy*, New York: Harper Torchbooks.
- SECRETARIA DE GOBERNACION (2004). *Segunda Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas*, México: Poder Ejecutivo Federal.
- , (2002). *Deconstruyendo la ciudadanía. Avances y retos en el desarrollo de la cultura democrática en México*, México: Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educación Pública, Instituto Federal Electoral, Porrúa.
- SELLERSA, P. y B. SCHAFFNERB (2007), "Winning Coverage in the U.S. Senate", en: *Political Communication*, (24), (4), pp. 377-391.
- SEN, A. (1993). "Liberty and Social Choice", W. James Booth, et., al., eds., *Politics and Rationality*, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 11-32.
- SENNET, R. (1978). *El declive del hombre público*, España: Península.
- SERMEÑO, Á. (2006). "Democracia y participación política: los retos del presente", en *Andamios*, (II), (4), México: CIESAS, pp. 7-33.

- SHAW, E. (1977). "The Interpersonal Agenda", D. Shaw y M. McCombs (comps.), *The emergence of American Public Issues: The agenda-setting function of the Press*, St. Paul, MN; West.
- SHEPSLE, K. (2003). "Acuerdos políticos en los marcos institucionales", en R. Goodin (comp.) *Teoría del diseño institucional*, Barcelona: Gedisa, pp. 283-316.
- SHERATO, T. y J. WEBB (2006), *Understanding Globalization*, London: Sage.
- SIACCA, E. (1994). *Interpretación de la democracia*, Madrid: Universidad Complutense.
- SILVA-HERZOG, J. (2007) "Antipoesía democrática", en E. Florescano (coord.), *La política en México*, México: Taurus, pp. 77-89.
- SILVERSTONE, R. (2004). *¿Por qué estudiar los medios?*, Buenos Aires: Amorrortu [Why Study the Media?, Sage, London, 1999].
- SMITH, Allen y Kathy SMITH (1990), "The Rethoric of Political Institutions", D. Swanson y N. Nimmo (eds). *New Directions in Political Communication. A Resource Book*, Newbury, CA: Sage Publications, pp. 225-254.
- SMULOVITZ, C. y E. PERUZZOTTI (2002). *Controlando la política. Ciudadanos y medios en las nuevas democracias latinoamericanas*, Buenos Aires: Temas.
- SNOWD, A. y R. BENFORD (1992), "Master Frames and Cycles of Protest", A. Morris y C. Mueller, *Frontiers in Social Movement Theory*, pp. 133- 155, New Haven: Yale University Press.
- , y R. BENFORD (1988). "Ideology, Frame Resonance and Participant Mobilization", in B. Klandermans, H. Kriesi y S. Tarrow (eds.), *International social Movement Research. From Structure to Action: Comparing Social Movement Research Across Cultures*, (I), pp. 197-217, Connecticut: JAI Press Inc.
- SOLÍS, B. (2009). "De cómo llegamos hasta aquí... Los antecedentes de la <Ley Televisa>", en J. Esteinou y A. R. Alva (coord.), *La <Ley Televisa> y la lucha por el poder en México*, México: UAM, pp. 28-53.
- SOSA, I. "Concentración, convergencia tecnológica y triple play: el artículo 28", en J. Esteinou y A. R. Alva (coord.), *La <Ley Televisa> y la lucha por el poder en México*, México: UAM, pp. 297-318.
- SOTIROVIC, M. y J. MCLEOD (2004). "Knowledge as Understanding: The Information Processing Approach to Political Learning", L. Lee Kaid (ed.), *Handbook of Political Communication Research*, New Jersey: Lawrence Erlbaum, pp. 357-394.
- STANKIEWICS, W. (1980), *Approaches to Democracy. Philosophy of Government at the Close of the Twentieth Century*, Great Britain: Edward Arnold.
- STEIN, J. L. (1994), "Constitucionalismo, poder y legitimidad", *Problemas actuales del derecho constitucional. Homenaje a J. Carpizo*, México: IIS-UNAM, pp. 345-358.
- STIGLITZ, J. (1999). *On liberty, the right to know and public discourse: the role of transparency in public life*, Oxford: Oxford Amnesty Lecture.
- STOKES, S. (2001). "Patologías de la deliberación", en J. Elster (comp.), *La democracia deliberativa*, Barcelona: Gedisa, pp. 161-181 [*Deliberative Democracy*, UK: The Press of the University of Cambridge, 1998].
- STREET, J. (2005). "Political Lost, Politics Transformed, Politics Colonized?" Theories of the Impact of Mass media", *Political Studies Review* (3), pp. 17-33.

- , (1997), "Remote control?, Politics, technology and 'electronic' democracy", *European Journal of Communication*, (12), pp. 27-42.
- SUNKEL, G. (2006). "Introducción: el consumo cultural en la investigación en comunicación-cultura en América Latina", en G. Sunkel (coord.), *El consumo cultural en América Latina*, Bogotá: Convenio Andrés Bello, pp. 15-44.
- , (2006). "Modos de leer la prensa popular", en G. Sunkel (coord.), *El consumo cultural en América Latina*, Bogotá: Convenio Andrés Bello, pp. 269-286.
- SWANSON, D. y P. MANCINI, eds., (1996). *Politics, Media and Modern Democracy: an international study of innovations in electoral campaigning and their consequences*, Westport, CT: Praeger.
- , (1995). "El campo de la comunicación política. La democracia centrada en los medios", Muñoz-Alonso (ed.) *Comunicación política*, Madrid: Universitas.
- , y D. NIMMO (1990). *New Directions in Political Communication. A Resource Book*, Newbury, CA: Sage Publications.
- TARROW, S. (2009). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Madrid: Alianza [*Power in movement*, CA University Press, 1998].
- TAYLOR, S. y J. CROCKER (1981). "Schematic Basis on Social Information Processing in Social Cognition", in E. Tory, P. Herman y M Zanna (eds.), *The Ontario Symposium*, Hillsdale, NJ: Laurence Erlbaum.
- TEJEDA, H. (2006). "Ciudadanía, imaginarios e instituciones: la construcción de la localización democrática en México", en Lourdes Arizpe (coord.) *Retos culturales de México frente a la globalización*, México: Porrúa, pp. 175-196.
- TETÚ, J. F. (1998). "El espacio público local y sus medios de comunicación", en G. Gauthier, et., al. (comp.). *Comunicación y Política*, Barcelona: Gedisa, pp. 315-329.
- THOMPSON, J. (1998). *Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de comunicación*, Barcelona: Paidós.
- , (1996). *Ideología y Cultura en la sociedad moderna*, México: UAM.
- TORCAL, M. (1997). "Cultura política", en R. del Águila (editor), *Manual de Ciencia Política*, Madrid: Editorial Trotta, pp. 231-250.
- TOTO, C. (2000). "Participación ciudadana", en Laura Baca y Fernando Castañeda, et al., *Léxico de la política*, México: FCE, México, pp. 509-519.
- TOURAINÉ, A. (1998, 2ª reimp.). "Comunicación política y crisis de la representatividad", J. F. Ferry, D. Wolton, et., al., *El nuevo espacio público*, Barcelona: Gedisa, pp. 47-56.
- TOUSSAINT, F. (2004). "Electores persuadidos. Democracia de masas y televisión", *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, (XLVI), (190), pp. 15-29.
- , (1998), *Televisión sin fronteras*, México: Siglo XXI.
- TREJO, Raúl (2010). *Simpatía por el rating. La política deslumbrada por los medios*, México: Cal y Arena.
- , (2009). "Los diputados ante la <Ley Televisa>", en J. Esteinou y A. R. Alva (coord.), *La <Ley Televisa> y la lucha por el poder en México*, México: UAM, pp. 75-101.
- , (2008). *Televisión y educación para la ciudadanía*, México: Cal y Arena.
- , (2007a). "Sociedad y Poder: 281 026 spots", en *La Crónica*, México, 24 de mayo.

- , (2007b). "El monopolio monocromático", en *Nexos*, Núm. 355, julio de 2007, disponible en <http://raultrejo.tripod.com/> (fecha de consulta: diciembre de 2008).
- , (2005). "Medios: el nuevo poder real ante el Estado mexicano", en A. Aziz y J. Alonso (coord.), *Sociedad civil y diversidad*, México: CIESAS, Cámara de Diputados, M. A. Porrúa, pp. 141-166.
- , (2001). *Mediocracia sin mediaciones. Prensa, televisión y elecciones*, México: Aguilar, León y Cal y Arena.
- , (1997). *Volver a los medios. De la crítica a la ética*. México: Cal y Arena, México.
- , (1996). "Prensa y gobierno: las relaciones perversas. Los medios, espacios y actores de la política en México", *Comunicación y Sociedad* (25-26), pp. 35-55.
- TRUMAN, D. (1971). *The governmental process*, New York: Knopf (2ª. Ed.).
- TUCHMAN, G. (1983). *La producción de la noticia*, Barcelona: Gustavo Gili.
- UGALDE, L. (2003). "Desempeño Legislativo en México", en R. Mirón y L. Béjar (coord.), *El Congreso después de la alternancia*, México: AMEP, pp. 175-195.
- , (2000). *Vigilando al Ejecutivo. El papel del Congreso en la supervisión del gasto público 1970-1999*, México: Cámara de Diputados LVII Legislatura- Porrúa.
- VALADÉS, D. (2003). "Prólogo", en F. Dworak, coord., *El Legislador a examen. El debate sobre la reelección legislativa en México*, México: FCE, pp. 9-13.
- VALENCIA, L. (2007). *La representación parlamentaria. Un recorrido histórico por la teoría política*, México: Poder Legislativo del estado de México, Porrúa.
- VALLÉS, Joseph (2002). *Ciencia Política. Una introducción*, Barcelona: Ariel.
- VALLESPÍN, F. (1997). "El Estado liberal", en R. del Águila (editor), *Manual de Ciencia Política*, Madrid: Trotta, pp. 53-80.
- VARELA, R. (2005). *Cultura y poder: una visión antropológica para el análisis de la cultura política*, España: Ánthropos.
- VASALLO DE LÓPEZ, M., S. SIMÕES, V. RESENDE (2006). "Una metodología de las mediaciones", en G. Sunkel (coord.), *El consumo cultural en América Latina*, Bogotá: Convenio Andrés Bello, pp. 263-410.
- VELASCO, J.C. (2005). "La noción republicana de ciudadanía y la diversidad cultural", Madrid: *ISEGORÍA*, (33), pp. 191-206.
- VENTURA, A. (2004). *Poder y opinión pública*, Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores.
- VERBA, S. (1996). "The citizen as respondent", *American Political Science Review* (90), (1).
- VERON, E. (1998a). "Mediatización de lo político", en Gauthier et., al., comps. *Comunicación y Política*, Barcelona: Gedisa, pp. 220-235.
- , (1998b, 2ª reimp.). "Interfaces, sobre la democracia audiovisual avanzada", en J. Perry, D. Wolton, et., al., *El nuevo espacio público*, Barcelona: Gedisa, pp. 124-139.
- VIDAL, F. (2008). *Los dueños del cuarto poder*, México: Planeta.
- VILLANUEVA, E. (2006a). *Derecho a la información*, México: Cámara de Diputados- Universidad de Guadalajara- Porrúa.
- , (2006b). *Derecho de acceso a la información en el mundo*, México: Cámara de Diputados, UNAM, Porrúa.
- VIRILO, P. (1988). *La máquina de visión*, Madrid: Cátedra.

- VÍZER, E. (2007). "Procesos socio-técnicos y mediatización en la cultura tecnológica", en Denis de Moraes (coord.). *Sociedad mediatizada*, Barcelona: Gedisa, pp. 39-67.
- , (2003). *La trama (in)visible de la vida social. Comunicación, sentido y realidad*, Buenos Aires: La Crujía.
- WALDRON, J. (1993). "Mill and the value of moral distress", *Liberal Rights*, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 115-133.
- WEINREB, L. (2000). "The Right to Privacy", *Social Philosophy & Policy*, (17), (2), pp. 25-44.
- WELDON, J. (1991). "The Political sources of presidencialismo in Mexico", S. Mainwaring y M. Shugart (eds.), *Presidentialism and Democracy in Latin America*, London: Sage.
- WILLIAMS, R. (1978). *Los medios de comunicación social*, Barcelona. Península.
- WILNAT, L. (1997). "Agenda Setting and Priming: Conceptual Links and Differences", M. McCombs, D. Shaw y D. Weaver, *Communication and democracy: Exploring the intellectual frontiers in agenda-setting theory*, NJ: L. Earlbaum, pp. 51-66.
- WINOCOUR, R. (2003). "La invención mediática de la ciudadanía", P. Ramírez (coord.) *Espacio público y reconstrucción de ciudadanía*, México: Porrúa, FLACSO, pp. 23-52.
- , (2002). *Ciudadanos mediáticos: la construcción de lo público en la radio*, BA: Gedisa.
- WODAK, R. y M. MEYER (2003). *Métodos de análisis crítico del discurso*, Barcelona: Gedisa.
- WOLDENBERG, J. (2007). "Partidos, medios y dinero", E. Florescano (coord.), *La política en México*, México: Taurus, pp. 193-228.
- , y L. SALAZAR (2000). *Principios y valores de la democracia*, México: IFE.
- WOLTON, D. (2010). *Información y Comunicación. Contra la ideología tecnológica*, Barcelona: Gedisa.
- , (1998a). "Las contradicciones de la comunicación política", G. Gauthier, et., al., (comps.). *Comunicación y Política*, Barcelona: Gedisa, pp. 110-130.
- , (1998b, 2ª reimp.). "La comunicación política: construcción de un modelo", en J. Perry, D. Wolton, et., al., *El nuevo espacio público*, Barcelona: Gedisa, pp. 28-46.
- YANKELOVICH, P. (1990). *Coming to Social Judgement: Making Democracy Work in a Complex World*, NY: Syracuse University Press.
- ZALDÍVAR, Á. (2006). *La transparencia y el acceso a la información como política y su impacto en la sociedad y el gobierno*, México: Cámara de Diputados, Porrúa.
- ZOLO, Danilo (1992). *Il principato democratico*, Milán: Feltrinelli.